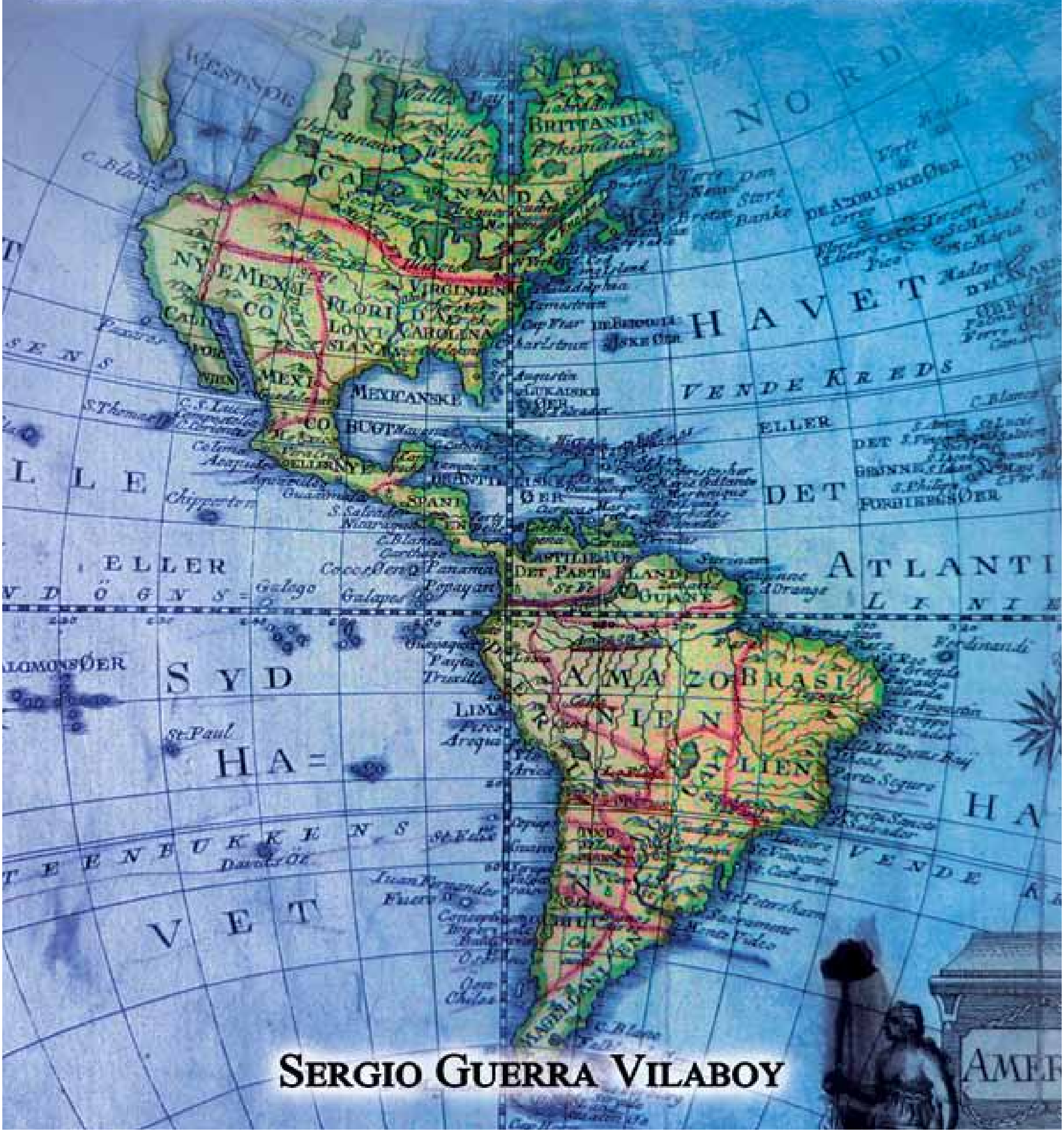
Archivo General de la Nación

Volumen CCXXVIII

NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE AMÉRICA LATINA

BIOGRAFÍA DE UN CONTINENTE



SERGIO GUERRA VILABOY

NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE AMÉRICA LATINA
Biografía de un continente

Archivo General de la Nación
Volumen CCXXVIII

Sergio Guerra Vilaboy

NUEVA HISTORIA MÍNIMA DE AMÉRICA LATINA
Biografía de un continente

Santo Domingo
2015

Cuidado de edición y diagramación: Juan Francisco Domínguez Novas
Diseño de portada: Éngely Fuma Santana
Motivo de portada: Mapa del continente Americano circa 1770. (Fuente: Jonghe)

Primera edición, febrero de 2015



Departamento de Investigación y Divulgación
Área de Publicaciones
Calle Modesto Díaz no. 2, Zona Universitaria,
Santo Domingo, República Dominic ana
Tel. 809-362-1111, Fax. 809-362-1110
www.agn.gov.do

ISBN: 978-9945-856-23-7
Impresión: XXX

Impreso en la República Dominicana • Printed in the Dominican Republic

A mis maestros,
Manuel Galich, Manfred Kossok
y Francisco Pividal,
siempre presentes.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

En los últimos cuatro años la producción bibliográfica del Archivo General de la Nación ha puesto en circulación tres obras que contienen las respectivas historias de Cuba, El Salvador y El Ecuador, con la intención de ir coleccionando la totalidad de las historias nacionales de los países de América Latina.

En esta oportunidad, en lo que parecería un adelanto de años del deseado propósito, abrimos las páginas de la primera edición de la *Nueva historia mínima de América Latina. Biografía de un continente*, y así, al disfrutar de su contenido contemplar el vacío que llena.

Nos advierte el autor que esta publicación no es la misma que su *Breve historia mínima de América Latina*, sino una nueva y diferente por los nuevos tópicos y mayor desarrollo de algunos temas, así como por las variaciones y cambios en la organización y contenido de los capítulos. No obstante, reconoce una importante deuda de la primera con la última.

Este libro está escrito para profesores, estudiantes y lectores en general. Es una exposición que sigue la secuencia del desarrollo de las sociedades latinoamericanas de manera que no permite extravíos, con lenguaje explícito que evita confusión. Todo ello ayuda y es, además, ayudado por el conjunto de acontecimientos históricos significativos y comunes a las diferentes historias nacionales que son seleccionados por el autor para explicar la dinámica de nuestras sociedades a través de cuatro grandes períodos. Es llamativa también la organización de períodos más cortos construidos con circunstancias

y detalles para apreciar de cerca las interioridades de América Latina y el esfuerzo en lo comparativo contenidos en la obra.

En lo metodológico es donde el profesor Sergio Guerra Vilaboy, autor de la obra, hace los aportes más importantes y que posibilitan la coherencia, el carácter explicativo y la síntesis de su trabajo. Nos referimos a su arreglo de elementos generales y comunes de las historias nacionales para con su uso construir una visión global cuyo propósito ha requerido el tratamiento de la lógica del funcionamiento social que constituye la totalidad de las relaciones económico-sociales en su interdependencia. Ha sido mediante la búsqueda de procesos comunes y diferenciadores, difíciles de comprender separadamente, que el autor ha realizado el análisis histórico de las sociedades de nuestra América. Esto último también ha contribuido al importante logro de presentar en un solo tomo el trayecto de estos pueblos.

Explorando la producción de obras de similar contenido hemos encontrado pocas que presenten la historia latinoamericana en un solo texto y, mucho más reducido aún, por no decir cercano a la inexistencia, aquellos con el mismo enfoque metodológico del autor.

Por todo lo anterior, el AGN se complace al expresar satisfacción por la oportunidad de poner en manos de los lectores este singular libro y en agradecer al profesor Guerra Vilaboy el depositar en nosotros la confianza del cuidado de su edición, así como de su impresión en la República Dominicana.

Giovanni Brito Bloise

INTRODUCCIÓN

Yo estoy aquí para contar la historia.
PABLO NERUDA

La *Nueva historia mínima de América Latina. Biografía de un continente*, que ahora ponemos a disposición de los lectores y estudiantes, tiene el propósito de ofrecer una breve síntesis del devenir político, económico y social de los países latinoamericanos desde la llegada de sus primeros habitantes hasta la actualidad, siguiendo la tradición revolucionaria de nuestros pueblos. No pretende referirse a todos los acontecimientos, ni tampoco hacer un recuento pormenorizado de lo sucedido en cada una de las naciones de América Latina. Por el contrario, se parte de una selección de problemas y de hechos relevantes de la historia latinoamericana, valorados desde la perspectiva comparada.

Para ello se sigue una periodización didáctica, que facilite la comprensión de sus momentos y temas fundamentales. Con esa finalidad, se ponen de relieve los hechos más significativos de la historia de América Latina, como parte de un proceso político, social y económico concatenado.

Desde esta perspectiva, se parte de delimitar cuatro grandes épocas en la historia latinoamericana. La primera se corresponde con el arribo al continente de sus más antiguos pobladores y el desarrollo de los pueblos originarios, que alcanzó su mejor expresión en las originales civilizaciones precolombinas de Mesoamérica y el área

andina. Estas últimas, llegaron a constituir sociedades clasistas, con sus propios gobiernos y estados.

La imposición de las diversas culturas autóctonas independientes fue remplazada por el colonialismo, impuesto de manera violenta por los invasores europeos que conquistaron, sometieron o exterminaron a los pueblos originarios. A partir de entonces, comenzó una segunda época en la historia de América Latina, marcada por el predominio de un régimen económico social heterogéneo, donde se entremezclaron elementos de distintas formaciones, al que algunos especialistas han denominado «feudal colonial». En realidad, se trataba de un sistema híbrido, formado con elementos comunitarios, esclavistas, feudales y del capitalismo comercial, que dominó el panorama continental desde el siglo XVI al XVIII.

A continuación, se desarrolló una tercera época histórica, caracterizada por la compleja, desigual y mediatizada transición al régimen burgués, extendida hasta fines del siglo XIX. Por último, se abre la época contemporánea, dominada por un capitalismo dependiente y subdesarrollado, implantado en las postrimerías de esa centuria y prevaleciente hasta comienzos del siglo XXI, cuando parece abrirse un nuevo cambio de época en la historia latinoamericana con el auge de las luchas por un orden social más justo y la recuperación del legado integracionista de la independencia.

En cada una de estas grandes épocas, fundamentadas en el tipo de formación económico-social predominante, pueden distinguirse, desde nuestro punto de vista, una sucesión de etapas o períodos de tiempo más cortos, que permiten distinguir mejor los problemas y características de la historia comparada de la región. A veces el uso de determinadas fechas históricas sirve para separarlos y marcar, en forma aproximada o simbólica –pues el proceso histórico no puede medirse con una exactitud matemática–, el momento en que los cambios ocurridos fueron de tal envergadura que puede considerarse la apertura de otro período. De ahí que los años seleccionados como puntos de inflexión, por lo general referidos a importantes acontecimientos políticos, persiguen exclusivamente un papel indicativo en el devenir histórico de América Latina.

Uno de los problemas que plantea una periodización de esta naturaleza es el desarrollo desigual de los países latinoamericanos y la enorme diversidad de situaciones en cada uno de ellos. Esto obliga a un análisis comparativo que pase por encima de muchos acontecimientos de valor local y de sus particularidades –aun cuando el texto incluye el análisis de algunos temas específicos en ciertos epígrafes–, para intentar seguir el curso de los elementos esenciales del proceso histórico desde una perspectiva global.

Sin duda, contribuye a facilitar la comparación la íntima vinculación de los pueblos de la región, cimentada en nexos culturales, de cercanía geográfica y en una larga y atribulada historia común. Nacida de un mismo pasado de explotación colonial, la identidad latinoamericana se forjó a lo largo de varios siglos de lucha contra la opresión extranjera. La valoración de este permanente conflicto, o sea el factor externo, es otro elemento indispensable a la hora de fijar las etapas y definir las líneas principales del curso de la historia de América Latina.

Sobre la base de esa dimensión general comparada, es que ha sido confeccionada esta *Nueva historia mínima* sobre la parte meridional de este continente que, tras diversas y sucesivas denominaciones a lo largo de varios siglos, terminó por conocerse como América Latina. El nombre surgió a mediados del siglo XIX, asociado al desarrollo de una identidad propia de los pueblos al sur del río Bravo y frente al expansionismo norteamericano.

La búsqueda de un nuevo apelativo para esta parte del continente americano, al que durante la colonia se denominaba como Indias o Hispanoamérica, había comenzado a fines del siglo XVIII, poco tiempo antes de que estallara la lucha emancipadora en las posesiones de España. Ello estaba en correspondencia con la aparición de una incipiente conciencia *protonacional* entre los españoles-americanos, como los llamó el jesuita peruano Juan Pablo Viscardo en una carta contestataria de 1792.

Fue el venezolano Francisco de Miranda el primero que se preocupó por una nueva denominación para señalar de manera inconfundible a la totalidad de las posesiones españolas de este hemisferio y también para distinguirla de los Estados Unidos de América, que se habían apropiado del nombre genérico del

continente para dárselo a su recién constituida nación. Por eso El Precursor inventó hacia 1788 el nombre de Colombia, del que ya se valió cuando elaboró su primer manifiesto independentista, que tituló *Proclamación a los Pueblos del Continente Colombiano, alias Hispano-América*, de la misma manera que llamaría después «ejército colombiano» al contingente militar que en 1806 guiara a las costas de Venezuela o *El Colombiano* al periódico que editara más tarde en Londres (1810).

La impronta de Miranda es bien visible en el texto de la constitución de la primera república de Venezuela, aprobada en Caracas el 21 de diciembre de 1811, que utiliza el término mirandino de «continente colombiano» como sinónimo de América Hispana, acepción que desde entonces se haría de uso común en el vocabulario de los principales patriotas. Sin duda, en los años de la lucha independentista de las colonias españolas la conciencia de una identidad hispanoamericana común, y de la necesaria unión de todos los que se enfrentaban a España, estuvo ampliamente extendida entre los criollos levantados en armas contra la metrópoli.

Uno de ellos, Vicente Rocafuerte, recordaría más tarde con añoranza que en «esa época feliz, yo consideraba toda la América española como la patria de mi nacimiento».[1] Para la mayoría de los protagonistas de aquella gesta, el «continente colombiano», como le había llamado Miranda, era un común horizonte *nacional*.

El propio Simón Bolívar, el 27 de noviembre de 1812, encontrándose en Cartagena tras el fracaso de la primera República de Venezuela, en carta al Congreso de la Nueva Granada, denominó a Caracas «cuna de la independencia colombiana»,[2] expresión que reiteró en su conocido *Manifiesto de Cartagena* preparado a mediados del siguiente mes y en otros textos de esta etapa. Sin embargo, ya en su *Carta de Jamaica* (septiembre de 1815) se inclinó por circunscribir el término a un ámbito geográfico más limitado, al proponer, por primera vez, el uso de Colombia para designar exclusivamente

[1] Sergio Guerra Vilaboy y Alejo Maldonado Gallardo, *Laberintos de la integración latinoamericana. Historia, mito y realidad de una utopía*, Caracas, Comala.com, 2006, p. 34.

[2] Simón Bolívar, *Obras completas*, tomo I,Caracas, Editorial Piñango, [s.f.], p. 40.

al nuevo estado que debería formarse de la unión de Venezuela y Nueva Granada, proyecto materializado en 1819.

La creación por Bolívar en Angostura de la República de Colombia, mediante la integración de Venezuela, Nueva Granada y Quito, invalidó hasta 1830 el uso del término mirandino para denominar a toda Hispanoamérica. Pero después de la desintegración de la Colombia bolivariana en esa fecha, el apelativo se volvió a usar para aludir a todo el vasto territorio que se extiende de México a la Patagonia, aunque otorgándole un nuevo significado.

Se trataba de afirmar y definir la identidad común ya no en contraposición a España, sino frente al brutal expansionismo de Estados Unidos, entonces en pleno apogeo. Así el panameño Justo Arosemena, alarmado por las pérdidas territoriales de México (1848), las actividades piratas de William Walker por Centroamérica (1855-1856), los intentos de apoderarse de Cuba y la irritante presencia norteamericana en su tierra natal, rehabilitó el nombre de Colombia para designar a la América hispana en un discurso en Bogotá, en presencia de varios diplomáticos del continente, el 20 de julio de ese año, donde también llamó a rescatar el legado bolivariano de integración.

Una preocupación semejante por la dramática coyuntura creada por las depredaciones norteamericanas sobre México y América Central manifestó el neogranadino José María Samper. En un extenso ensayo en favor de la unidad continental, titulado *La Confederación Colombiana* (1859), se opuso a la búsqueda de la identidad hispanoamericana en un simple parentesco racial o solo por la comunidad de lengua, cultura o religión.

Dos años después, Samper publicó en París su libro *Ensayo sobre las revoluciones políticas y la condición social de las Repúblicas Colombianas (Hispano-americanas)* (1861). En su prefacio llevaba más lejos su anterior planteamiento, al proponer ahora emplear el término de Colombia para designar ya no solo a las antiguas colonias de España, sino a todos los territorios al sur de Estados Unidos.

También el puertorriqueño Eugenio María de Hostos se pronunció por el uso de Colombia como sinónimo de Hispanoamérica, pero debió dejarlo cuando se adoptó en 1861 como nombre de una

república en específico, la antigua Nueva Granada. El obligado abandono del término Colombia, en su acepción mirandina, tenía lugar precisamente cuando ya había surgido la alternativa de América Latina para denominar los territorios del río Bravo a La Patagonia.

Es muy significativo que la expresión América Latina naciera al calor de los ascendentes antagonismos con Estados Unidos, que iniciaba entonces su voraz política expansionista.

En varios textos de la época, la creciente contradicción con este poderoso vecino se fue relacionando con las evidentes diferencias –culturales, religiosas, lingüísticas, étnicas, etc.– que separaban la América del Norte, de origen anglosajón, de una América del Sur que contaba con un importante componente latino en su composición.

La búsqueda de las causas de este diferendo Norte-Sur en una distinta matriz étnica, fue prácticamente simultánea al surgimiento de la idea de la latinidad de la Europa meridional y por extensión de las antiguas colonias ibéricas. Uno de los primeros autores que se refirió al origen latino de los pueblos que habitaban las colonias españolas fue Alexander von Humboldt.

Otro escritor europeo que tuvo un importante papel en este proceso fue el escritor francés Michel Chevalier. En medio del debate que entonces apenas se insinuaba sobre las razas y que iría subiendo de tono hasta llegar muy pronto a tesis claramente racistas, contrapuso en 1836 la latinidad de las antiguas colonias de España, Portugal y Francia a la América sajona.

De esta manera se fue extendiendo, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, la idea de la latinidad de la mayoría de los territorios ubicados al sur de Estados Unidos. Pero todavía no se había producido el alumbramiento de una nueva expresión que designara a los países ubicados de México al estrecho de Magallanes, pues los autores que mencionaban la latinidad de esta parte del planeta seguían usando el término América del Sur para denominar al conjunto de las antiguas colonias de España, Portugal y Francia.

Tampoco los primeros escritores hispanoamericanos que aludieron a la latinidad del subcontinente, como el dominicano Francisco Muñoz del Monte, el cubano Antonio Bachiller y Morales o el chileno Santiago Arcos, proponían otro nombre para estos

territorios, sino solo lo hacían para destacar la importancia de esa herencia en la conformación de sus pueblos.

En rigor, el neologismo América Latina, que al parecer hizo su aparición a mediados del siglo XIX, tuvo como verdaderos padres al colombiano José María Torres Caicedo y al chileno Francisco Bilbao, ambos entonces residentes en París. Este último empleó el vocablo, por primera vez, en una conferencia dictada en la capital francesa el 24 de junio de 1856 con el título de *Iniciativa de la América*, donde también se valió del gentilicio «latino-americano».[3]

El uso de la palabra latino, como adjetivo detrás del sustantivo América, se haría cada vez más común en la segunda mitad del siglo XIX. Entre los escritores hispanoamericanos que ya en la década del sesenta lo utilizaban con frecuencia se hallaban Juan Montalvo, Carlos Calvo y Eugenio María de Hostos, precisamente en los momentos cuando los franceses, en el contexto de su intervención en México (1861-1867), relanzaban el término para encubrir el carácter colonialista de la aventura de Napoleón III en este hemisferio.

El propio José Martí, que acuñó expresiones entrañables como Madre América o Nuestra América, también utilizó en varias ocasiones la expresión América Latina, aunque solo para constatar la existencia de una comunidad lingüística y cultural, no racial. Así lo hizo, por ejemplo, en su discurso de Nueva York dirigido a los emigrados cubanos el 24 de enero de 1880, «para descargo de las culpas que injustamente se echan encima de los pueblos de la América latina». O también en un texto escrito tres años después donde anotó: «Todo nuestro anhelo está en poner alma a alma y mano a mano los pueblos de nuestra América Latina».[4] El mismo sentido martiano conferido al término América Latina sería el validado, después de la muerte en combate del *Apóstol* de la independencia de Cuba, por muchos otros destacados pensadores y figuras revolucionarias del continente.

[3] En Miguel Rojas Mix, *Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colón*, Barcelona, Editorial Lumen, 1991, p. 344.

[4] José Martí, *Obras Completas*, La Habana, Editorial Lex, 1953, t. I, p. 690 y t. II, p. 277.

En definitiva, a lo largo del siglo XX, el uso de América Latina terminaría por imponerse de manera categórica sobre los otros nombres que ya indistintamente se venían usando o se habían propuesto para nombrar a los países del Bravo a la Patagonia. Entre ellos, Hispanoamérica, América Meridional, Iberoamérica, Nuestra América, Eurindia, Indoamérica, América Indo-íbera o América indoespañola, Espérica y Afroamérica.

A pesar de las muchas objeciones que se le han hecho y se le hacen al nombre de América Latina, como las que en los últimos tiempos rescatan nombres indígenas –Abya Yala, por ejemplo–, lo cierto es que el término se ha impuesto sobre todos los demás y hoy es de uso generalizado. Un intelectual tan autorizado como Roberto Fernández Retamar ha señalado con agudeza: «Creo que en esto del nombre que nos corresponde adolecemos del mal del definicionismo. Es verdad que tanto "Estados Unidos de América" como "Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas" son nombres y también definiciones. Pero esto no es regla, sino excepción. El propio Martí no fue remiso a hablar a veces, por ejemplo, de "América Latina", o de "América" a secas, aun cuando estuviera refiriéndose a "nuestra América". Ni los hombres que se llaman león son leones, ni las mujeres que se llaman Rosas son rosas».[5]

En definitiva, el término de América Latina se fue popularizando y en su noción moderna mantiene su viejo sentido integracionista, de una comunidad de naciones hermanadas en una misma historia de luchas anticoloniales y antimperialistas. En específico, comprende a los pueblos de este continente, subdesarrollados, surgidos de diversas colonizaciones europeas –en lo fundamental de España, Portugal y Francia– y de un profundo proceso de mestizaje, y que hoy día están cada vez más identificados entre sí, pues se hallan en campos bien diferenciados al de las grandes potencias contemporáneas, deslindados por las contradicciones que existieron y las que se mantienen entre las ex metrópolis y sus ex colonias.

[5] Roberto Fernández Retamar, *Pensamiento de nuestra América. Autorreflexiones y propuestas*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2006, p. 20.

En los inicios de un nuevo milenio, el término ya consagrado de América Latina no alude a un simple parentesco cultural, lingüístico o étnico, sino a una más profunda identificación surgida de un pasado y un presente común de luchas, aspiraciones, intereses, problemas y destinos históricos. Hoy el nombre de América Latina, cuyo uso se ha impuesto casi de manera universal, sirve para designar a los países ubicados del río Bravo a la Patagonia –también Brasil, las antiguas colonias francesas y los grandes conglomerados indígenas–, y es el que se asocia a la aspiración de conformar en el subcontinente una sola comunidad económica y política, dando cima al legado que proclamaron y defendieron las más grandes personalidades latinoamericanas desde los tiempos de Miranda, Bolívar y Martí.

Por todo ello, la *Nueva historia mínima de América Latina. Biografía de un continente*, se vale de este término ya consagrado para delimitar su objeto de estudio. El texto que sigue a continuación, está concebido para ser leído con facilidad, por lo que no se han incluido largas citas, solo algunas pocas frases imprescindibles, debidamente entrecomilladas, acompañadas de su correspondiente referencia bibliográfica. Además, se ha omitido el aparato crítico y largas notas aclaratorias al pie de páginas, aunque se ha incorporado al final una extensa lista bibliográfica general.

En 2006 la Editorial de Ciencias Sociales publicó, por primera vez, *Breve historia de América Latina*, que cuatro años después fue reeditada por la misma casa editora de La Habana en su colección Alba Bicentenario. Debo aclarar, por último, que la *Nueva historia mínima de América Latina* es una edición actualizada y aumentada, pues incluye nuevos tópicos y se han desarrollado mucho más algunos temas, así como variado y cambiado buena parte de su entramado capitular. Por estas razones, aunque debe mucho al texto anterior, en la práctica es una obra nueva y original, que hemos reelaborado a solicitud expresa de nuestro entrañable amigo Eusebio Leal Spengler.

Sergio Guerra Vilaboy

CAPÍTULO 1
LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

El origen del hombre americano despertó las inquietudes de cronistas y conquistadores desde el inicio de la invasión europea al llamado Nuevo Mundo, lo que dio lugar a la elaboración de las más diversas teorías sobre el poblamiento del continente. Uno de los primeros interesados por esta cuestión fue el padre Joseph de Acosta, en su *Historia Natural y Moral de las Indias* (Sevilla, 1590), donde dejó constancia de su preocupación por la procedencia de los habitantes encontrados en América: «quedamos sin duda obligados a confesar, que pasaron acá los hombres de allá de Europa o de Asia o de África, pero el cómo y por qué camino vinieron todavía lo inquirimos y deseamos saber».[1]

Muchas de las primeras explicaciones partían de argumentos muy ingenuos, basados en la simple observación. En otras ocasiones se fundamentaban en elementos extraídos de la *Biblia* –los aborígenes procedían de Noé o de algunos de sus descendientes– y viejas leyendas, atribuyendo la presencia humana en este continente a pueblos desaparecidos de la historia como los cananeos, los habitantes de la mítica Atlántida o a migraciones de poblaciones de la antigüedad: egipcios, fenicios, cartagineses, hebreos u otros.

Otras hipótesis revistieron un carácter más aparentemente científico, como la teoría monogenista esgrimida por el paleontólogo

[1] P. Joseph de Acosta, *Historia Natural y Moral de las Indias, en que se tratan de las cosas notables del cielo, elementos, metales, plantas y animales dellas, y los ritos, y ceremonias, leyes y gobierno de los indios*, México, Fondo de Cultura Económica, 1962, p. 45.

argentino Florentino Ameghino en la segunda mitad del siglo XIX. Según su compleja tesis, echada por tierra por la arqueología y la paleontología, no solo el hombre, sino también los mamíferos, se habían originado en el sudeste de América, desde donde se difundieron por todo el planeta. En cambio para los poligenistas, no había razones para poner en duda que el hombre hubiera aparecido simultáneamente en diferentes puntos del globo, entre ellos América.

Poblamiento del continente americano

Las más recientes investigaciones científicas han comprobado que el hombre no es originario de América, esto es, no se desarrolló aquí, pues existe una imposibilidad filogenética basada en que los monos americanos (platirrinos) pertenecen a una rama muy alejada de los antropoides. En este hemisferio tampoco se han hallado fósiles de monos catarrinos, ni antropoides, ni prehomínidos –como australopithecus, pithecanthropus o neanderthales–, lo que descarta que pudieran surgir en el continente americano elementos humanoides por una vía evolutiva.

Las evidencias impugnan también algunas teorías que sostienen la posibilidad de un poblamiento de presapiens, provenientes de las costas asiáticas del Pacífico, en tiempos de la llamada glaciación Illinois, hace unos doscientos mil años. Todos los restos óseos descubiertos hasta ahora en América pertenecen a hombres modernos, esto es, *homo sapiens*.

Aunque existen muchas teorías sobre el origen del hombre americano, las evidencias apuntan a que llegó a este continente procedente de Asia ya conformado como *homo sapiens sapiens*, en varias oleadas remotas. Al parecer, este proceso se inició bastante tarde en comparación con el poblamiento de otras partes del planeta, dado que los fósiles humanos de mayor antigüedad que se han encontrado datan de hace 195 mil años y fueron descubiertos en el suroeste de Etiopía (1967).

A sustentar esta tesis contribuye el hecho de que los siete restos de *homo sapiens* más antiguos encontrados en América son muy posteriores. Nos referimos a los hallados en Punín (Ecuador), Fontezuela y Arrecifes (Argentina) y Lapa Vermelha (Brasil), así

como el hombre de Tepexpan (México) –en realidad una mujer de metro y medio de estatura–, que son relativamente recientes, pues por diferentes medios de datación han sido fechados entre 8,000 y 15,000 años.

La inmensa mayoría de los especialistas considera que la llegada del hombre a este hemisferio comenzó en tiempos del denominado glacial Wisconsin o Wisconsiniana (70,000 al 10,000), en un proceso que se extendió por milenios. Con el correr del tiempo generó en América un verdadero mosaico de culturas y pueblos diferenciados entre sí y con distintos niveles de desarrollo socioeconómico.

Se supone que la primera migración comenzó hace alrededor de 50 mil o 40 mil años por el actual estrecho de Bering, de apenas 80 kilómetros de extensión. La llegada de los primeros hombres al continente americano estuvo favorecida en sus inicios por un paso natural surgido con el descenso del nivel del mar, lo que permitió una vía terrestre continua entre Asia y América, al parecer durante el subestadío glacial altoniense (70,000-28,000). El último grupo humano que llegó por la ruta del estrecho de Bering, en pequeñas embarcaciones, hace aproximadamente 5,000 años, fue el esquimal.

A avalar esta tesis contribuyen los indicios de que durante el Wisconsin se produjo la entrada humana a la zona comprendida entre el archipiélago japonés y la península de Kamchatka. La proximidad geográfica de esta región con América, junto con una vegetación y una fauna relativamente parecida y condiciones fisiográficas diferentes a las actuales, pudo permitir un paulatino poblamiento mediante el continuo flujo y reflujo de grupos asentados en ambas costas del Pacífico.

A pesar de la verosimilitud de esta teoría, no se han encontrado en América restos humanos equivalentes a los *sapiens* fósiles hallados del otro lado del Pacífico, pertenecientes a cronologías similares. No obstante, a través del análisis del ADN mitocondrial –que se encuentra en las células del cuerpo– realizados a indígenas americanos actuales, se ha calculado por especialistas de Estados Unidos que los separan unos 35 mil años de los primeros pobladores de este continente.

Al parecer, los primitivos habitantes de América eran hombres del paleolítico, nómadas, que vivían en cavernas y se dedicaban a

la recolección, la caza y la pesca, con instrumentos de concha muy elementales, aunque se sabe muy poco del marco ecológico que debió condicionar sus formas de existencia. Se extendieron por el continente americano de norte a sur, hasta llegar, en un lento desplazamiento efectuado a lo largo de milenios, al extremo austral.

A favor de esta hipótesis se levantan los hallazgos más antiguos descubiertos hasta el presente en cada región americana y que indican los rastros más remotos de presencia humana. Por lo general se trata de instrumentos de piedra asociados a huesos de mamuts y otros grandes animales herbívoros, como caballos, perezosos gigantes y mastodontes, al estilo de los *kiokkemoeddings* encontrados en Texas (Estados Unidos), donde aparecieron puntas del tipo *clovis* fechadas por el carbono 14 en 37,000 años.

Los yacimientos más antiguos de este tipo encontrados son los de Lewisville (Texas) tienen una antigüedad de 37,000 años; los de la isla de Santa Rosa (California) 29,000; los de Meadowcroft (Pennsylvania) 20,000; los de Tlapacoya (México) de unos 24,000; los de Paccaicasa (Perú) 20,000; los de El Abra (Colombia) 12,000; los de El Jobo (Venezuela) de 14,000; los de Inga y Punín (Ecuador) 10,000; los de la caverna de Pedra Pintada (Brasil) 11,000 y unos 10,000 los de la cueva de Fell en el estrecho de Magallanes. Estos hallazgos nos muestran una probable cronología de ocupación y una posible ruta de poblamiento humano del continente, de norte a sur.

Este último yacimiento, junto con el de Los Toldos –fechado entre 11 y 9 mil años de antigüedad–, ubicado en una cañada en la provincia de Santa Cruz (Argentina), aportó restos semejantes a los de la mencionada cueva de Fell, o sea, huesos de una fauna extinta asociada con un conjunto de utensilios compuestos por las puntas de proyectil llamadas «cola de pescado». Estos hallazgos parecen confirmar la existencia de grupos cazadores en el extremo sur del continente al final del Pleistoceno,[2] relacionados con el modo de vida de los primitivos habitantes de la América del Norte, aunque con miles de años de diferencia entre sí.

[2] Los geólogos consideran que el Pleistoceno se inició dos millones de años atrás y terminó hace unos diez mil años, fecha en que comenzó el Holoceno, esto es, la época geológica actual.

En opinión de muchos antropólogos físicos, América comenzó su poblamiento por grupos humanos de origen mongoloide, llegados primero por el corredor terrestre surgido en el estrecho de Bering y después de la retirada del glacial por las islas Aleutinas. Con posterioridad, es factible que entraran también por mar grupos humanos australianos, malayos, polinesios y melanesios procedentes del Pacífico, favorecidos por un clima más suave y niveles más bajos de las aguas polares, probablemente hace unos 15 mil y 6 mil años.

Según estas teorías, los nuevos pobladores asiáticos y australianos se mezclaron con el sustrato mongoloide arcaico. La base de sustentación de estas tesis migratorias, al margen de la posibilidad de los viajes marítimos en canoas por el Pacífico, se encuentra en el análisis de tipos sanguíneos, las similitudes lingüísticas y las apariencias físicas. También incluyen la existencia de la mancha mongólica, del tamaño de una moneda, que aparece en los primeros años de vida de los niños de este origen y que ha sido observada en la mayoría de los infantes indígenas de América.

Análisis del ADN extraídos de cráneos fósiles de la desaparecida tribu de los pericués (Baja California), no muestran parentescos con los restantes grupos aborígenes americanos de origen mongoloide y sí con ciertas etnias del sureste asiático, de la Polinesia y de Australia. Su antigüedad, unos 13 mil años, avala la controvertida tesis de la llegada de otras oleadas migratorias de orígenes dispersos en el Pacífico y con distintos itinerarios.

Eso puede explicar que algunos hallazgos arqueológicos, como la mujer del Peñón, exhumada al oriente de la ciudad de México en 1957, de una antigüedad calculada en 12,700 años, con un singular cráneo dolicocefálico –largo y estrecho– tenga cercana filogenia con el fósil de la mujer de Arch Lake (Nuevo México), datado en 11 mil años, y con el hombre de Kennewick en el noroeste de Estados Unidos de 9,500 años. Todos ellos difieren de otros restos indígenas americanos antiguos y están desligados genéticamente de los principales grupos aborígenes de este continente, en su mayoría braquicefálicos y mesocefálicos.

En la misma dirección apuntan los hallazgos realizados en 1975 de fósiles craneales de 13,500 años de antigüedad en Belo Horizonte

(Brasil), con rasgos que parecen australianos. Lo mismo vale para los instrumentos fechados en 12,500 años encontrados no hace mucho en Monte Verde (1997), cerca de Puerto Montt (Chile), semejantes a los utilizados por los nativos de la Polinesia y Australia, lo que puede corroborar la existencia de migraciones marítimas mucho más remotas de lo que se suponía.

Estos últimos inmigrantes procedentes del Pacífico ya dominaban la navegación, probablemente se encontraban en el estadio mesolítico y, sobre todo, neolítico, pues ya conocían la agricultura (maíz, yuca) y trabajaban la cerámica, conocimientos que se calcula existían en América desde hace más de tres mil años. Estas oleadas se mantuvieron durante milenios, cesando el contacto sistemático por el sur en tiempos no muy lejanos, cuando las sociedades de procedencia se hicieron más sedentarias.

Tal vez, estas oleadas humanas procedentes del Pacífico arribaron entre los años 7 mil y 2 mil, cuando ya se habían producido los cambios climáticos que generaron la flora y fauna actuales y que marcaron el fin de los tiempos del Pleistoceno. Estos últimos inmigrantes, de diversos orígenes étnicos, geográficos y niveles de vida, contribuyeron al desarrollo desigual de los pueblos aborígenes en un proceso que se extendió por decenas de siglos.

Así, mediante migraciones que no debieron ser masivas y que quedaron aisladas de sus lugares de procedencia, sometidas a un proceso de adaptación a las nuevas condiciones naturales del medio donde se asentaron, se fue conformando una población autóctona mediante un crecimiento vegetativo bien diferenciado, resultado de los efectos propicios o adversos del clima, suelos vegetales ricos o pobres y mayor o menor conocimiento de la agricultura. Se ha comprobado la existencia de más de un centenar de familias lingüísticas independientes en América, que comprenden cientos de idiomas y dialectos.

Las sociedades indígenas americanas

Los habitantes de América, anteriores a la invasión del continente por los europeos, se encontraban en muy diversos estadios de

su evolución social. A lo largo y ancho del llamado Nuevo Mundo vivían infinidad de comunidades aborígenes que aún se hallaban en diversas fases de la sociedad primitiva, pues se dedicaban a la caza, la pesca, la recolección y/o una agricultura extensiva que requería ser complementada por las tres actividades antes mencionadas.

En la mayoría de estos pueblos, que transitaban del nomadismo al sedentarismo, se daba el tipo de sociedad «de subsistencia»: escasa producción, bajo nivel de consumo, desconocimiento de cualquier forma de propiedad y ausencia de estructuras clasistas. En cambio, otras poblaciones contemporáneas consiguieron vertebrar sociedades con estructuras políticas y religiosas más complejas, entre las más antiguas que se tienen noticias figuran los denominados olmecas de Mesoamérica y los habitantes de Chavín, en el área andina, cuya antigüedad es anterior a los mil años antes de nuestra era (a.n.e.).

Sin duda, entre los pueblos originarios más avanzados, con anterioridad a la invasión europea, se encontraban los aztecas, mayas e incas, que desarrollaron una agricultura más productiva, auxiliada del regadío y la fertilización, con la que podían satisfacer las necesidades alimentarias básicas. Ellos ya tenían estructuras sociales estratificadas, el nivel de producción y consumo era relativamente alto, existía el concepto de propiedad más desarrollado y, por ello, había una clara definición clasista, que permitió conformar verdaderos estados.

El desarrollo económico, social y político de estos pueblos permitió también un mayor espesor demográfico, lo que contribuyó a su supervivencia frente a la violenta conquista europea y la conservación hasta el presente de sus valores, ideosincracia, cultura y tradiciones. Esas mismas razones, determinaron que buena parte de su memoria histórica se preservara en los códices, en inscripciones en piedras y vasijas, así como gracias a las descripciones orales de los *quipucamayos* andinos, mientras que la de los restantes pueblos indígenas prácticamente desapareció con el brutal exterminio de las poblaciones autóctonas más atrasadas. El carácter fragmentario y disperso de la historia de estos pueblos originarios dificulta su inclusión en esta síntesis y explica que nos concentremos en las civilizaciones aborígenes más desarrollados.

Desde el punto de vista de la actividad económica fundamental, de la que dependían los pueblos indígenas, el continente americano puede ser dividido, a nivel de esquema, en ocho grandes zonas básicas. Al norte de los Grandes Lagos, desde Alaska hasta la península del Labrador, el área del caribú, a cuya caza se dedicaba la tribu nómada de los atapascos, que resolvía mediante este rumiante la mayor parte de sus necesidades de alimentación y abrigo, mientras en la costa occidental norteamericana, de norte a sur, era la del salmón, de cuya pesca vivían los algonquinos.

En los actuales estados de California (Estados Unidos) y Baja California (México), se puede ubicar la zona de los frutos silvestres, cuya recolección alimentaba, entre otros pueblos, a los yuma, apaches y yuquis, que se cobijaban en grutas o cabañas endebles. Por su parte, en las praderas centrales de la América del Norte, que forman la cuenca de los ríos Mississipi y Missouri, se asentaban los sioux o dakotas que se dedicaban a la caza de bisontes; mientras en la costa este de Norteamérica, limitada al norte por los Grandes Lagos y al sur por el golfo de México, estaba el área oriental del maíz, cuyo cultivo era realizado por los iroqueses y hurones.

Al norte y centro de Suramérica, y en las Antillas, se encontraba la zona de la mandioca, base de la alimentación de tupís, caribes, arauacos, taínos y guaraníes, estos últimos conocedores de una agricultura más diversificada. Por su lado, en las verdes praderas del sur de esta parte de América (las pampas), se ubicaba el área del guanaco, cuya caza sostenía a los charrúas, pampas, araucanos, puelches, tehuelches y onas.

La octava zona, sin duda la más avanzada, incluía gran parte del territorio actual de México, casi toda Centroamérica y la faja suramericana, situada desde la sierra de los Andes hasta la costa este, limitada al sur por el río Maule, y era la que alojaba en el siglo XV, entre otros pueblos, a los aztecas, mayas e incas, que lograron el más alto desarrollo socioeconómico de la América precolombina gracias al cultivo intensivo de la tierra. De los cientos de tribus indígenas que habitaban el continente americano a la llegada de los europeos, solo unas pocas, los iroqueses, chibchas –muiscas de la sabana de Bogotá y quimbayas de la región del Cauca– y guaraníes, se acercaban al

nivel cultural y de organización social alcanzado por los habitantes de Mesoamérica y la región andina.

El conocimiento de la agricultura intensiva se efectuó, al parecer, en forma paralela, en dos o tres centros del continente entre el 7 mil y el 1,500 a.n.e. Entre ellos se destacan las zonas altas de Mesoamérica, así como la costa y sierra del área andina, donde se crearon condiciones favorables para el desarrollo de la llamada revolución neolítica, precondición para el posterior surgimiento en estos territorios de sociedades de clase y deslumbrantes centros de civilización.

La agricultura constituyó un cambio radical que trajo aparejado el sedentarismo, la construcción de verdaderas ciudades y complicados sistemas de regadío. Ahora bien, las grandes culturas indígenas americanas fueron el resultado de una sucesión de horizontes,[3] por el que estas sociedades ascendieron, como en una carrera de relevos, en su desarrollo económico, social y político desde el paleolítico hasta una comunidad sedentaria, ya estratificada en clases y vertebrada en torno a formaciones estatales de diverso tipo.

En estas áreas medulares, la sociedad se caracterizó, desde cientos de años antes de nuestra era, por la existencia de comunidades aldeanas, organizadas por clanes familiares en torno a la propiedad común del suelo y el trabajo colectivo, aunque sometidas a un grupo humano (teocracia) apartado del trabajo agrícola, que impuso al resto de la población fuertes tributos en productos y servicios. Al parecer, las primeras culturas que alcanzaron este estadio de desarrollo fueron los llamados olmecas del golfo de México y los habitantes de Chavín y Tiahuanaco en la región andina. Radicada en ciudades-estado, a la teocracia indígena le correspondió un papel determinante en los terrenos político, social y económico, al ofrecer al pueblo la ayuda espiritual y la protección de los dioses a cuyo nombre hablaban y actuaban.

Ese poder despótico centralizado, ejercía funciones de utilidad social como la defensa, irrigación, construcción de templos y otras obras ceremoniales, además de caminos, puentes, almacenes, observatorios astronómicos, sistemas de regadíos, palacios, etc. También

[3] En la arqueología se emplea el término horizonte para designar a un complejo cultural parecido en un determinado espacio y tiempo.

dirigía las labores agrícolas y preservaba el *status quo* en sociedades clasistas estratificadas de alto nivel de desarrollo relativo, fundamentadas en el extraordinario peso alcanzado por la religión, en torno a la cual giraban las principales actividades, desde las festividades hasta las guerras, las artes y la arquitectura monumental. Estas características fueron comunes a todas las grandes civilizaciones americanas.

El sistema socioeconómico y político de estas sociedades indígenas más avanzadas, descansaba en la explotación del conjunto de la población por la casta dominante y sus rasgos se parecen mucho al tipo de sociedad descrita por Carlos Marx para la India y China antiguas, con el nombre de modo de producción asiático, denominada también como esclavitud generalizada o despótico-tributario. Se trata de un régimen de lenta transición de la comunidad primitiva a la sociedad de clases, en el cual coexisten formas arcaicas de organización comunitaria –el *ayllú* entre los incas y *calpulli* para los aztecas, por ejemplo– con un estado jerarquizado dominado por una teocracia que exige tributos y prestaciones personales (*mita* entre los incas y *cuatequil* entre los aztecas).

La dinámica de estas ciudades-estado les permitió expandirse hacia los territorios colindantes, a las que irradiaron su influencia y marcaron con una misma tradición social, cultural, religiosa y científica. A estas características semejantes a todas las grandes civilizaciones americanas, habría que añadir la existencia de otros elementos similares: cultivo del maíz y frijol, instrumentos de trabajo (coa o *taclla*), técnicas agrícolas, el riego, las construcciones de piedra y barro, algunos tipos de cerámica y de textiles, los sacrificios humanos y otros.

Se supone que los núcleos más importantes de estas civilizaciones clasistas alcanzaron su primer apogeo entre los años 200 y 900, cuando desarrollaron una serie de patrones culturales y de civilización considerados clásicos. Entre los años 700 y 1000, estas complejas sociedades americanas sufrieron una serie de sacudidas y crisis que pusieron fin al llamado período clásico y propiciaron el florecimiento de nuevas culturas, entre ellas la azteca y la inca, que alcanzaron junto a los mayas el punto más alto de desarrollo político y socioeconómico de los pueblos indígenas antes de la llegada de los

europeos. Inclusive, la última etapa del expansionismo azteca e inca fue casi coincidente, pues se produjo a fines del siglo XV y primeros lustros del XVI.

Entre las características de estos dos grandes focos americanos de civilización, esto es, Mesoamérica y el área andina, se destaca el absoluto aislamiento existente entre ambas zonas medulares, lo que no solo determinó apreciables diferencias sociales, económicas y culturales, sino también limitó mayores posibilidades de desarrollo. Sin duda a ello también contribuyó el restringido proceso de domesticación de animales –limitado al pavo, perro, pato y, en los Andes, además al cuy, alpaca y llama– y la ausencia en América de importantes especies para la alimentación, el tiro y la carga –burro, caballo, vaca y cerdo–, el desconocimiento de la rueda y de la metalurgia del hierro, que los privó de instrumentos de trabajo como el arado. A esto hay que agregar la existencia de economías de excedentes exiguos, en las que el hombre era casi exclusivamente la única fuerza de trabajo.

Culturas mesoamericanas

La región que los arqueólogos bautizaron como Mesoamérica, conformada por parte de los actuales territorios de México y Centroamérica, fue en tiempos precolombinos el asiento de una de las dos grandes áreas de desarrollo de las civilizaciones indígenas en este continente. Aquí florecieron formidables culturas como la olmeca, maya, tolteca y azteca, por solo mencionar las más conocidas.

Se le considera una zona de civilización, basada en una agricultura relativamente avanzada, que cobijó un conjunto de culturas pertenecientes a una variedad de pueblos que mantuvieron entre sí estrechas relaciones y compartieron un mismo escenario natural, así como muchos elementos y características: cultivos del cacao y el maguey, uso de la coa, las chinampas, el complejo nixtamal-tortilla, la espada con hojas de obsidiana y la camisa protectora de algodón, el calendario de 18 meses de 20 días, la semana de 13 días, el calendario ritual de 260 días, el ciclo de 52 años, la existencia de fiestas fijas

y movibles, los días fastos y nefastos, arquitectura de falsa bóveda y columnas serpentiformes, pirámides escalonadas, uso de papel de amate en códices y mapas y la escritura jeroglífica, entre otros elementos. A ello debe añadirse una serie de divinidades comunes como el dios de la lluvia –Tláloc en lengua náhuatl– o una misma deidad civilizadora representado por la serpiente emplumada –Quetzalcóatl (en náhuatl) o Kukulcán (en maya).

Los primitivos habitantes de Mesoamérica formaron parte, al parecer, de las primeras oleadas migratorias llegadas al continente americano procedentes de Asia. Los restos de toscos instrumentos de piedra asociados a huesos de grandes animales herbívoros hoy desaparecidos encontrados en El Cedral (San Luis Potosí), Valsequillo (Puebla) y Tlapacoya (valle de México), fechados entre 21 mil y 30 mil años, apuntan a favor de esta hipótesis. Además, uno de los siete yacimientos de *homo sapiens* de mayor antigüedad en América fue hallado en México: el de Tepexpan que se calcula tiene varios miles de años de antigüedad

Olmecas y toltecas

Hacia el año 1,200 a.n.e. comenzaron las primeras obras de regadío en Mesoamérica: canales, terrazas y probablemente chinampas, lo que repercutió en un sustancial incremente de los rendimiento agrícolas y en consecuencia en un significativo aumento de la población. Durante varias centurias se fue produciendo un proceso de incipiente diferenciación social que facilitó la construcción de los primeros centros urbanos y de un conjunto de representaciones simbólicas que se les ha llamado olmecas.

Las características de los olmecas, según recientes descubrimientos arqueológicos, aparecieron en forma simultánea en la cuenca del Balsas, en el valle de México, en la costa del golfo de México y en otras regiones mesoamericanas. Esto contradice las viejas tesis de su difusión a partir de San Lorenzo o La Venta, con centro en la zona sur de Veracruz y el norte de Tabasco (México), y que era considerada con anterioridad una especie de cultura madre para

toda la región como resultado de un proceso de expansión militar o comercial.

Entre los rasgos que identifican las características olmecas, nombre arbitrario dado a un grupo de pueblos indígenas de diferentes troncos lingüísticos, se encuentran estelas, altares, plataformas, algunas pirámides rudimentarias que sostenían construcciones de madera, tumbas, representaciones de felinos y de seres híbridos, mitad hombres, mitad jaguares, así como las colosales cabezas de hasta 16 metros de altura, identificadas con el posible rostro de sus gobernantes –ojos rasgados e inclinados y labios muy prominentes–, de las que se han encontrado poco más de una docena. Al parecer, a esta época histórica corresponde la invención del calendario ritual de 260 días, la escritura jeroglífica y la numeración, con signos de puntos y barras.

La mayor cantidad de centros ceremoniales urbanos olmecas –de la etnia mixe-zoque– han aparecido en las llanuras aluviales del sur del litoral del golfo de México. Al parecer, aquí se desarrolló desde unos 1,200 años antes de nuestra era, sobre la base del trabajo intensivo de la agricultura, una incipiente diferenciación clasista y la formación de un estado embrionario –sus principales centros estaban en La Venta, San Lorenzo y Potrero Nuevo– dominado por una teocracia que, de una u otra manera, extendió su influencia a regiones más distantes, como los zapotecas de Oaxaca (Monte Albán) o a los mayas «preclásicos» de Chiapas (Kaminal Juyú) y Yucatán.

Durante tres siglos, el asentamiento de San Lorenzo parece que llevó la primacía, hasta que en el año 900 a.n.e. fue abandonando en forma abrupta y su esplendor fue seguido por La Venta. Aquí se erigió probablemente la primera pirámide mesoamericana, un gigantesco cono ondulante de tierra apisonada, rodeado de plazas y pequeños altares. Por su parte, La Venta fue abandonada de manera repentina entre el año 500 y el 400 a.n.e. Entre otros sitios de la región Mesoamericana donde se han hallado artefactos, símbolos y estilos claramente olmecas, fuera del área del golfo de México, son Teopantecuanitlán (Guerrero), Chalcatzingo (Morelos), así como Tlapacoya y Tlatilco, estos dos últimos en el valle de México.

Hacia el año 500 a.n.e. las manifestaciones olmecas desaparecieron y fueron remplazadas por varias culturas regionales, con nuevos estilos arquitectónicos, ya monumentales, con significativos cambios en la cerámica, la escultura y los símbolos. La cultura más conocida del período es Monte Albán, situada en el valle de Oaxaca.

Esta cultura se organizó como un gran centro urbano donde sobresale una gran edificación que se le ha llamado «de los Danzantes», por las figuras alusivas a conquistas militares esculpidas en las lápidas que lo cubren. Por su parte, en el valle de México se ha detectado para esta misma época un desarrollo equivalente al de Monte Alban en Cuicuilco, cuyo rastro más conocido es una pirámide de base circular; aunque se sabe que este centró quedó despoblado tras una erupción del volcán Xitle en el año 50 a.n.e.

Se supone que en este período histórico, y asociado al tronco lingüístico mixe-zoque, se produjo la invención de la cuenta larga, un sistema de cómputo calendárico. Las inscripciones más antiguas que se valen de este fechado, son Chiapa de Corzo (año 36 a.n.e.), Tres zapotes (31 a.n.e.), El Baúl –36 de nuestra era (n.e.)–, Abaj Takalik (126 n.e.), La Mojarra (143 y 156 n.e.) y San Andrés Tuxtla (162 n.e.). Tanto el dispositivo de altar y estela de piedra, que ya usaban los olmecas, como este sistema de cuenta larga, se difundió por distantes zonas de Mesoamérica y es lo que explica que apareciera también en la ciudad maya de Tikal, que tiene una estela con la fecha del año 292 de nuestra era.

A esta etapa siguió el llamado horizonte Teotihuacano-Maya, el cual se considera clásico, y que se ubica en forma aproximada entre los años 250 y 950. Ya se corresponde plenamente con la aparición de las primeras sociedades clasistas fundamentadas en una agricultura intensiva (maíz) que llegaron a constituir imponentes ciudades-estado como la de Teotihuacán, enclavada cerca de la actual ciudad de México, o las muy numerosas de los mayas del Petén en Yucatán.

Eran no solo centros ceremoniales, sino verdaderas urbes permanentes y complejas, con grandes pirámides, templos, áreas para juegos de pelota, palacios, caminos de piedra, etc. Estas urbes estaban ligadas a un extenso entorno rural, poblado por centenares de comunidades que utilizaban sistemas intensivos de cultivo, técnicas

avanzadas de regadío y poseían conocimientos sobre el clima y la astronomía.

Entre los logros alcanzados en este período clásico ya figura una arquitectura de grandes proporciones, de lo que es exponente la pirámide del Sol en Teotihuacán, de una altura de 63 metros y una base cuadrangular de 225 metros de lado. Además de toda una serie de adelantos científicos en diversos campos.

La influencia de los teotihuacanos y los mayas llegó hasta regiones apartadas como los purépechas o tarascos de Michoacán y los mixtecos de Oaxaca (Monte Albán II), que florecieron después del año mil. En esta última región, las sierras que se unen cerca del istmo forman mesetas y valles de tierra muy fértil que favorecieron el desarrollo de mixtecos y zapotecas, de lo que son muestra la decoración de los muros de Mitla y las joyas de oro de Monte Albán.

La relación de Teotihuacán con los mayas es algo que parece probado hoy día y que se remonta al propio nacimiento de esta civilización. En varias ciudades mayas del Petén se pueden apreciar influencias teotihuacanas en la arquitectura y la cerámica. Sin duda, Tikal es la ciudad donde se aprecian mayores indicios de estas vinculaciones, aunque en Uaxactún hay un mural que representa a un guerrero teotihuacano que recibe el acatamiento de un potentado maya.

En Piedras Negras también se han encontrado elementos que indican la influencia de Teotihuacán y en Palenque parece que los invasores impusieron nuevos gobernantes desde el año 431. También en el altiplano de la actual Guatemala, la ciudad maya de Kaminal Juyú muestra las huellas de la presencia teotihuacana hacia el año 400 de nuestra era.

La reciente lectura de los textos epigráficos ha permitido establecer que el 31 de enero del año 378 de nuestra era arribó a Tikal un teotihuacano nombrado Siyaj Kak. Parece que procedía de otras ciudades mayas ubicadas sobre el Usumacinta, Uaxactún, Bejucal y Río Azul, lo que coincidió con la muerte del gobernante autóctono de la ciudad Chak Tok Ichak, es posible que resistiendo a los conquistadores.

Todo indica que estas viejas inscripciones aluden a una exitosa invasión procedente de Teotihuacán, pues los antiguos textos en piedra de Tikal también mencionan que fue situado un teotihuacano al frente de la ciudad y retiradas las estelas que aludían a los anteriores gobernantes mayas. Su sucesor, Yax Nuun Ayiin, todavía aparece esculpido en una estela con atuendo y postura no mayas y en su tumba se han encontrado vasijas de estilo teotihuacano.

Entre los años 650 y 950 la región mesoamericana fue sacudida por una serie de acontecimientos internos –económicos, políticos y sociales– y externos –invasión de otros pueblos– que dieron al traste con estas civilizaciones catalogadas como clásicas. En particular, los habitantes de Teotihuacán fueron los primeros en sentir los efectos de esta crisis, debido probablemente a que era la civilización más cercana a la frontera norte y, por ello, más expuesta a los efectos negativos de los cambios climáticos, que perjudicaron sensiblemente a las cosechas.

Además, los teotihuacanos se vieron afectados por la masiva irrupción de hordas salvajes nómadas o seminómadas de cazadores chichimecas, de menor desarrollo cultural, aunque muy belicosas. El nombre de chichimeca fue el que los cronistas de la época colonial dieron a tribus de habla náhuatl, derramadas por el valle del Anáhuac, de diversa procedencia geográfica y étnica, aunque también a los pames y quizás también a los purépechas.

La desaparición de la ciudad de Teotihuacán, saqueada y semidestruida hacia el año 650, abrió paso al predominio de diversas culturas locales: mixteca, tolteca, choluteca, huaxteca, totonaca, tarasca, azteca, y otras. Surgieron nuevos centros de civilización, de desarrollo paralelo, –como Xochimilco y El Tajín–, al cual siguió el denominado horizonte Mixteca-Puebla.

Esta última etapa prehispánica de desarrollo paralelo se inició hacia el 1200, asociada a nuevas invasiones chichimecas procedentes del norte y al florecimiento de diversas ciudades-estado como la de Tollan o Tula, Culhuacán, Tenayuca, Texcoco y Azcapotzalco. La primera de estas urbes fue abandonada después por los toltecas, hacia el año 1168, como resultado de otras invasiones chichimecas encabezadas por Xólotl.

Al parecer Tula, que vivió su apogeo a partir del año 900, fue la primera ciudad-estado mesoamericana que se valió del altar antropomorfo, que los mayas denominaron *chac-mool*, y del *tzompantli*. Este último era una especie de ábaco gigante donde en cada travesaño se insertaban las cabezas de las víctimas de los sacrificios humanos, sangrienta tradición místico religiosa muy extendida entre los mexicas.

Hacia el año 600 de nuestra era cesa la influencia teotihuacana en el área maya, que vive entonces su período de mayor apogeo. A partir de entonces las ciudades-estado mayas prosperaron en forma ostensible, alcanzando una gran variedad y riqueza la arquitectura, la escultura y la cultura en general. En el siglo VII vivieron una etapa de gran esplendor los centros mayas de Palenque, al pie de la sierra chiapaneca, Piedras Negras y Yaxchilán en el Usumacinta, Tikal en el Petén y Calakmul al sur de la península de Yucatán.

Los mayas

La historia del pueblo maya se desenvolvió, en lo fundamental, en el Petén y la península de Yucatán, a donde es probable se trasladaron procedentes de las tierras altas de la actual Guatemala, a partir de los años 200 ó 300, años que se corresponden con los fechados más antiguos. La estela 29 de Tikal, la placa de Leyden y la estela 9 de Uaxactún –que registran las hazañas y nombres de gobernantes (*ahauob* o *halach uinic*)– fueron fechadas en los años, 292, 320 y 328, respectivamente. Solo en estos dos sitios (Tikal y Uaxactún), separados por unos 50 kilómetros, se han hallado más de ochenta estelas y más de cincuenta altares repartidos en varias plazas.

Al parecer, los mayas de este período denominado clásico se distribuían en un sinnúmero de ciudades-estado que pugnaban constantemente entre sí. Entre los centros hoy conocidos figuran Sayil, Tikal, Uaxactún, Copán, Quiriguá, Piedras Negras, Xultun, Yaxha, Caracol, Calakmul, Yaxchilán, Uxmal, Labná, Kabah, Itsimté, Ucanal, Toniná, Chichén Itzá, Tzimin Katz, Bonampak, Dzibanché, Uxul, Nakun, Balkbal, La Milpa, Naranjo, La Honradez y Palenque.

Las ciudades-estado eran gobernadas por dinastías hereditarias de guerreros y sacerdotes, cohesionadas en torno a la figura divinizada del *ahau*. En Copan, por ejemplo, se encontró un enorme bloque cuadrangular de piedra con 16 hombres esculpidos sentados –cuatro por cada lado– que se considera representan los miembros de una misma familia que gobernó esa ciudad entre el 426 y el 820.

El primero de esos gobernantes de Copan se llamó Yax Kuk Mo y el último Yax Pac. Las inscripciones antiguas de Yaxchilan, por su parte, ofrecen abundantes datos del segundo Itzamnaj Balam, que gobernó del 681 al 742 de nuestra era, y de su sucesora la señora Kabal Xook, enterrada en uno de los templos de la urbe con una impresionante ofrenda de miles de navajas de obsidiana.

El espectacular friso de estuco encontrado recientemente en la antigua ciudad maya de Holmul, al norte de la actual capital guatemalteca, corresponde al año 590. Mide ocho metros de largo y dos de ancho y muestra lo que ha sido interpretado como el ascenso al gobierno de Och Chan Yopat, cuyos ancestros se desprenden, junto a dos serpientes emplumadas, de la boca de un animal mitológico.

En otro sitio maya, Palenque, el desaparecido arqueólogo cubano Alberto Ruz encontró en 1952 la primera pirámide mesoamericana destinada a mausoleo de un importante personaje, a la manera egipcia. En esta ciudad se han hallado relatos en estuco, sobre las paredes de las edificaciones y en algunos objetos de piedra, que se refieren a las hazañas militares de Pakal y su hijo Kan Balam, así como a sus monumentales construcciones.

De igual manera, hoy se conocen, gracias al mayor desarrollo de la epigrafía maya, las historias de los gobernantes contemporáneos de Calakmul –ciudad maya rival de Tikal, al sur de Campeche, que vivió su apogeo entre los años 450 y 750–, nombrados Yuknoom y Yuknoom el Grande, quienes obtuvieron victorias militares sobre la ciudad-estado de Naranjo y Tikal. Además de monumentales edificios y ciudadelas de arquitectura estilo Petén, ahí se hallan entre 120 y 200 estelas, la mayor cantidad encontrada en un sitio arqueológico mesoamericano, junto a un descomunal friso de estuco de 20 metros de largo por tres de ancho y un espléndido mural, con dibujos sobre la vida cotidiana, dentro de sendas estructuras.

En su época de mayor auge, los mayas consiguieron un apreciable avance de la arquitectura, distinguida por el falso arco o arco maya, la astronomía –que les permitió elaborar un complicado calendario, más preciso que el gregoriano, en uso solo desde 1582– y la matemática. En el desarrollo de esta ciencia se valieron de un sistema de numeración vigesimal que incluía el cero, un logro solo compartido con los pueblos de la antigua India, de quienes los europeos obtuvieron la idea. La influencia de la cultura maya se extendió hacia el norte y se han registrado sus huellas en Cacaxtla y Xochicalco.

La más antigua y grande ciudad maya fue probablemente Tikal, situada en el centro del Petén, con más de tres mil construcciones, entre templos, observatorios astronómicos, edificios ceremoniales, palacios y pirámides. Estas últimas tenían la particularidad de tener su escalinata al medio y su templo encima, el mayor de los cuales alcanzaba los 60 metros de altura.

Las culturas mayas del período clásico entraron en una abrupta decadencia de poco más de un siglo (889-1007), cuando las ciudades fueron abandonadas y la selva se apoderó de ellas. La estela 11 de Tikal registra su última inscripción en el año 889, Yaxchilán quedó desierta en el 808, Palenque poco después y Calakmul en el 909. Las causas de esta catástrofe no están claras y entre las explicaciones que se aducen figuran la espiral militar, sublevaciones campesinas y problemas ecológicos. No obstante, parece plausible que este desplome estuvo asociado a los cambios que entonces estremecían a toda Mesoamérica, crisis iniciada con la destrucción de Teotihuacán, pues fuera del área maya también fueron abandonados casi al mismo tiempo los centros urbanos de Tajín, Xochicalco y Cacaxtla.

El renacimiento de la portentosa cultura maya, ahora limitada al área norte de la península de Yucatán, fue favorecido por nuevas migraciones toltecas procedentes del valle de México (Tula), origen de un intenso sincretismo. Los invasores no destruyeron las antiguas formas de vida, costumbres, creencias –Chac, dios del maíz, era el favorito del culto popular– y el arte de los mayas, sino que los asimilaron, generando una civilización mestiza. Ello ocurrió después que los toltecas fundaron la ciudad de Mayapán en el año 987, mientras otros

grupos conquistadores se apoderaban de Uxmal y Chichén Itzá (964), esta última establecida desde el 432 cerca de dos enormes cenotes.

En esta etapa, el poder estatal se estructura, al parecer, sin los viejos *ahauob*, mediante una alianza de jefes, como el establecido por las familias invasoras de los cocomes, xius e itzáes. También se vertebró una alianza de centros urbanos, de la que fue exponente la poderosa Liga de Mayapán, conformada por las ciudades-estado de Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán y que tuvo como símbolo el predominio de la mítica serpiente emplumada (Kukulkán).

Mayapán, después de vencer a los itzáes de Chichén entre los años 1194 y 1250, mantuvo la hegemonía durante dos siglos, aunque fue totalmente arrasada por sus enemigos en 1461. Después la cultura maya-tolteca casi se extinguió como su antecesora clásica: las grandes ciudades volvieron a ser abandonadas y la exuberante vegetación tropical pronto cubrió sus ruinas, mientras las poblaciones se dispersaron en pequeños poblados y se registraba cierto retroceso socio-económico.

El centro maya más sobresaliente de esta etapa, desde el punto de vista cultural, fue Chichén Itzá, una ciudad-estado amurallada, con impresionantes construcciones como el Patio de las Mil Columnas, la imponente pirámide de nueve pisos del Castillo y el llamado Templo de los Guerreros. En particular, este último reproduce muchos de los elementos toltecas de la ciudad de Tula: pórtico con columnatas, frisos de tigres y águilas comiendo corazones, chamoles y atlantes, columnas en forma de serpientes emplumadas, etc. Otras ciudades mayas significativas de este período fueron Champoton y Tulum, esta última situada en el litoral caribeño, ambas protegidas por murallas.

Los aztecas

Casi de manera simultánea a la invasión tolteca a Yucatán, tribus de lengua náhuatl, entre las cuales sobresalían los mexicas o aztecas, irrumpían en el centro del actual México, procedentes de la

mítica Aztlán de donde se supone partieran en el siglo XII. Estos pueblos, ubicados probablemente en la periferia de la influencia de los toltecas de Tula, tras una larga y accidentada peregrinación, en busca del sitio prometido por su dios tutelar Huitzilopochtli, fundaron la ciudad de Tenochtitlán en un islote del lago Texcoco (1345).

Según la leyenda, allí vieron un águila, con una serpiente en su pico, sobre un nopal, lo que interpretaron como una señal de sus dioses, justo donde hoy se encuentra la explanada de El Zócalo y el Palacio Nacional en la ciudad de México. Aunque los mexicas no inventaron los sistemas hidráulicos ni tampoco el cultivo en chinampas, que se desarrollaba desde mucho antes en las márgenes del lago Texcoco, fueron ellos los que le dieron mayor desarrollo y complejidad.

Al principio, los aztecas cayeron bajo el dominio de los tepanecas de la ciudad-estado de Azcapotzalco, viejos residentes emparentados con los toltecas, que tenían entonces la hegemonía en la meseta central. Esta situación duró hasta que el «jefe de todos los hombres» (*tlatoani* o *tlacatecuhtli*) mexica Itzcóatl (1426-1440) –con la asesoría de Tlacaélel– logró en 1430 alcanzar la independencia de los tepanecas, gracias a la llamada Triple Alianza conformada con las ciudades de Tetzcoco y Tlacopán.

A partir de ese momento, los mexicas conquistaron importantes áreas aledañas. Al parecer, durante el gobierno de Itzcóatl, la clase dominante azteca consolidó su poder a la vez que quedaban atrás sus rasgos gentilicios –la gens primitiva se transformó en *calpulli*, donde el factor aglutinante era cada vez más el económico en detrimento de la consanguinidad–, tal como evidencia la reescritura de los antiguos códices.

Otras cotas en la expansión mexica se alcanzaron bajo el mandato de Moctezuma Ilhuicamina (el viejo), entre los años de 1440 y 1468, época en que el dominio azteca alcanzó la costa del golfo de México, mientras Tenochtitlán crecía y se desarrollaba con calles y canales que cruzaban el lago Texcoco en distintas direcciones. En torno a esta gran laguna, de poca profundidad, llegaron a levantarse enormes ciudades, de gran densidad demográfica, cuyos pobladores –de origen étnico nahua, aunque también existían de la otomí y

la matlazinca– abarrotaban las calles, canales y mercados como los de Chaco-Atenco, Xochimilco, Coyoacán, Culhiacán, Iztapalapa, Tetzcoco, Tlacopan, Azcapotzalco, México-Tenochtitlan, México-Tlatelolco y decenas de poblados más pequeños como Coatlinchan, Mixcoac o Tacubaya.

Nuevos territorios fueron conquistados por los aztecas bajo la dirección de Axayácatl, que gobernó de 1468 a 1481, Tizoc, que lo hizo de 1481 a 1486 y Ahuítzotl, bajo cuyo mandato, extendido de 1486 a 1502, se inauguró el Templo Mayor. Esta construcción abarca más de 1200 metros cuadrados, consagrado a veneradas deidades como Huitzilopochtli y Coatlicue.

Los mexicas llegaron a dominar poblaciones establecidas en territorios tan lejanos como el istmo de Tehuantepec o la costa del Pacífico, aunque nunca pudieron doblegar a los tarascos o purépechas, con su capital en Zintzuntzan, en una de las márgenes del lago de Pátzcuaro (Michoacán). No obstante la gran extensión de territorios mesoamericanos controlados por México Tenochtitlan, nunca llegó a tener la magnitud de la que Teotihuacán había poseído en su época de esplendor.

La ocupación azteca sobre tan amplios espacios se fundamentó en exigencias de tributos a los vencidos y el establecimiento de un intercambio comercial favorable, que garantizaban con la presencia permanente de su poderoso ejército. Este sistema de dominación se consolidó durante el gobierno del *huey tlatoani* Moctezuma Xocoyotzin, iniciado en 1503, cuando ya Tenochtitlán era sin duda la ciudad-estado hegemónica en todo el actual centro de México. Fue el propio Moctezuma quien en 1506 sometió a los mixtecas (Oaxaca), aumentó los tributos exigidos a los pueblos sometidos y sacrificó más prisioneros en el Templo Mayor que sus antecesores.

Culturas del área andina

La región andina, que comprende las cumbres y vertientes de la cordillera de los Andes y su extensa costa, generalmente desértica, salvo en oasis fertilizados por los ríos que buscan el Pacífico,

constituyó la otra gran zona medular de la América indígena antes de la invasión europea. Antiquísimos sistemas de canales –cuyas huellas se remontan probablemente a cientos de años antes de nuestra era–, cultivos altamente alimenticios (papa, maíz) y la cría de animales suministradores de lana, cueros, carne y grasa, hicieron florecer allí desde épocas remotas, como en Mesoamérica, sociedades y estados civilizados.

Tanto las hermosísimas ruinas de Tiahuanaco, como las de Chavín, Paracas y otros lugares en la sierra o la costa, son un testimonio mudo del temprano progreso de los pueblos andinos. Desde la más lejana antigüedad comenzó en las regiones andinas de Perú el cultivo de la tierra –papa, maíz, quinoa, frijoles, etc.– y la domesticación de animales –alpaca y llama– que permitieron el florecimiento de sociedades y estados civilizados que compartían estos adelantos.

A ese desarrollo contribuyó el empleo del riego y el abono –guano y restos de pescado– en la agricultura intensiva, facilitado en las sierras por el uso de terrazas y andenes. Según algunos autores, la cultura madre del área andina surgió en la cuenca del Marañón y en las proximidades del lago Titicaca, donde estuvieron enclavados los centros de Chavín y Tiahuanaco, respectivamente.

Al parecer, los primeros hombres llegaron a la cordillera de los Andes como parte de un largo proceso de ocupación originado en Asia, hace unos 20 mil años. Las evidencias de presencia humana más antiguas encontradas corresponden a la región andina peruana (Pikimachay y Huargo) y han sido fechadas en unos 11 mil años. Por ellos sabemos que los más antiguos habitantes del altiplano trabajaban la piedra para confeccionar puntas de proyectil o de lanza que les servían para la caza de grandes herbívoros.

Estos cazadores recolectores terminaron poblando toda la cordillera, en particular tras el retroceso de las condiciones climáticas más rigurosas de la última edad glaciar, que puso fin al Pleistoceno, y dio lugar a los cambios en la flora y la fauna que crearon el paisaje que hoy conocemos. Restos de plantas encontrados por los arqueólogos, en sitios como la laguna de Conococha o Pachamachay, indican que la agricultura –en lo fundamental de quinua, cañiwa y la papa– se inició probablemente en estas zonas frías alrededor del

séptimo milenio de la era pasada. Casi en forma simultánea, se fue produciendo la domesticación de camélidos –llama y alpaca– y el desarrollo de la artesanía, lo que iría induciendo al abandono de las cuevas y la fabricación de abrigos artificiales.

A partir de 2 mil años a.n.e., fueron edificados templos rudimentarios en cada valle del Titicaca oriental, entre ellos los de Chiripa, Oque, Lucurmata, Pucará, Tuma-Tumani. La existencia de estos sitios permite suponer que se produjo una primera diferenciación social en estos pueblos primitivos andinos.

Algunos de sus miembros, convertidos en brujos o sacerdotes, tuvieron entre sus funciones las predicciones astronómicas, que beneficiaban el desarrollo de la agricultura al poder determinar las temporadas de lluvias y las mejores épocas para la siembra y la recolección. Además de una compleja calendarización, a ese despegue contribuyó también el empleo del riego y el abono –estiércol y restos de pescado–, junto al uso de terrazas y andenes en la agricultura.

Civilizaciones preincaicas

El primer núcleo cultural importante conocido es Chavín de Huántar (Ancash), en la sierra norteña del actual Perú, el cual se desarrolló entre los años 850 y 500 a.n.e. Junto a la agricultura, esta antigua cultura andina logró significativos avances en la cerámica, actividad que según demuestran los descubrimientos de Huaca Prieta –fechados en el 2250 a.n.e.–, se hallaba muy difundida en esa zona.

De Chavín se conservan en muy mal estado una serie de plataformas, plazas y edificaciones paralelepípedas denominadas «templos» –huaca, en quechua–, adornadas con el felino estilizado, animal al que allí se rendía culto, y una rica iconografía formada por relieves, esculturas, piezas líticas, textiles, cerámica y orfebrería. Centros contemporáneos a Chavín fueron La Copa o Kuntur Huasi (Cajamarca), Cerro Blanco y Punkurí (Nepeña), Moquete y Pallta (Casma), Caragay, cerca de la actual ciudad de Lima, entre otros.

Un poco después, entre los años 300 a.n.e. y el 500, aparecieron otros núcleos de civilización en el norte y en el sur (Mochica y

Nazca), renacidas en vísperas de la colonización española (siglo XIV) y rebautizadas por los arqueólogos como Chimú e Ica. Otra cultura significativa fue la de Paracas, ubicada en la península de ese nombre bajo el Perú central, cerca de Pisco.

Al sur de Paracas, en los valles de Nazca, existía ya en el siglo VI un pueblo (Ica-Nazca) que alcanzó también un significativo desarrollo antes de su conquista por el imperio Huari o Wari (650-1100) y que tuvo por eje a la ciudad de Kawachi, aunque esta cultura no se caracterizó por la existencia de centros urbanos importantes ni tampoco por sus grandes construcciones. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la arqueología nazca son las descomunales líneas que aparecen grabadas sobre la arena del desierto –pampa del Ingenio, pampa de San José y pampa de Socos–, elaboradas como un magno horóscopo o calendario, que algunos, subestimando los logros de las civilizaciones indígenas, han interpretado como pistas de aterrizaje para naves extraterrestres.

Mientras tanto, en los valles de la costa norte (Moche, Chicana y Virú), se desarrollaba la cultura Mochica. Los mochicas desarrollaron eficientes técnicas, incluyendo obras de irrigación, con canales de hasta 110 kilómetros de longitud, y eficientes acueductos, que les permitió extender sus fronteras sobre valles y desiertos costeros de esa región (Lambayeque y Nepeña) hacia el año 200 de nuestra era. Entre sus principales centros destacan también los de Pañamarca (Nepeña), Mollocope (Chicama) y Pacatmandú (Pacasmayo).

La opulenta y fastuosa tumba de un alto dignatario mochica enterrado en Sipán (Lambayeque), junto con su perro, esposas y sirvientes, es una prueba de la estratificación social y la complejidad alcanzada por esta portentosa civilización. En este sitio se encontraron sombreros emplumados, ornamentos de oro, exóticos caracoles, decoradas piezas de alfarería, bellísimos ropajes y muchas finas armas.

Aún hoy resisten el paso del tiempo las ruinas de sus majestuosas construcciones, formadas por fortalezas, calzadas, pirámides y monumentales edificios, entre ellos el majestuoso templo de Huaca del Sol, situado en el valle Moche. Esta edificación, donde se realizaban los rituales sacrificios humanos, tiene una altura de 48 metros, cuya construcción necesitó decenas de millones de ladrillos

de adobe, conservados gracias a la escasa humedad atmosférica y la ausencia de precipitaciones.

En la meseta del Collao, al sur del lago Titicaca –región andina de la actual Bolivia–, prosperó desde el año 500 al 1000 otra imponente civilización preincaica, considerada por algunos la cultura madre andina: Tiahuanaco o Tiwanaco. Surgió a unos 3,800 metros de altura, en las proximidades del Titicaca, dado que la precariedad de la agricultura obligaba a depender de los productos del lago y el pastoreo.

Lo mejor que conocemos de Tiahuanaco son los vestigios de impresionantes construcciones en piedra, en lo que debió ser el mayor centro ceremonial de lengua aymara del altiplano. De los restos de su antigua arquitectura sobresale Acapana, una pirámide escalonada de planta cuadrada de 210 metros de lado y 15 de altura, y la famosísima Puerta del Sol, en Kalasasaya. Esas hermosas ruinas son un testimonio mudo del temprano progreso de los pueblos andinos.

También existen aquí restos de dos recintos, denominados el Palacio y Puma Puncu, con grandes losas y bloques de piedra tallados y puertas monolíticas más pequeñas. Toda la arquitectura de Tiahuanaco está realizada con material pétreo, especialmente areniscas y basaltos extraídos de canteras cercanas, con bloques de hasta cien toneladas de peso. Además, se sabe que construían terrazas elevadas de nueve metros de ancho, flanqueadas a lo largo por canales de riego que les permitían obtener cosechas muy abundantes.

A ella siguió la civilización Huari o Wari, en varios sentidos verdadera antecesora del imperio incaico, que llegó a irradiar su influencia por extensas áreas de la región andina, entre Lambayaque y Cajamarca por el norte y Sicuas y Sicuani por el sur. Su máxima expansión se alcanzó entre los años 900 y 1100, cuando al parecer llegó a vertebrar una especie de imperio con capital en Huari, ubicada a 25 kilómetros de Ayacucho.

Hace poco tiempo, los arqueólogos encontraron vestigios de esta antigua cultura andina en una gran tumba. En ella se encontraron más de sesenta esqueletos, tres de ellos atribuidos a personajes de la casta dominante, enterradas con joyas de oro y plata y piezas de cerámicas pintadas. El ajuar de las mujeres, compuesto por orejeras de oro, plata y otras aleaciones metálicas, botellas de cerámica, ollas,

cántaros, cuencos, usos, agujas, ovillos de colores, cuchillos ceremoniales y otros ornamentos, contiene alrededor de 200 piezas.

La expansión de esta cultura se facilitó por una amplia red de caminos, como el del Chinchaysuyo, por el que fluían los tributos y mensajeros –*chasquis*, en lengua quechua. Estas rutas terrestres unían la capital con varios centros urbanos como Chan Chan en Moche; Chimú Cápac, en Supe; Cajarmaquilla y Pachacamac, en el valle del Rimac; Viracocha Pampa, cerca de Huamachuco; Huilca Huaín, en el callejón de Huaylas; Huayhuaca, en Andahuaylas, y Pikillacta en las proximidades del Cuzco.

Al parecer, la civilización Huari entró en rápida decadencia entre los años 1100 y 1200, cuando desapareció el poder centralizado y las ciudades hegemónicas, dando paso a un resurgimiento regional que duraría varios siglos, con diversos estados dominando localidades diferentes hasta el año 1470, en que comenzó la supremacía de los incas. En esta etapa preincaica, en que aparecieron estados de todo tamaño y riquezas, las culturas más importantes fueron la Chimú, en la costa norte, la de Chancay, en el litoral central, la Ica-Chincha, en la costa sur, y la confederación chanca y los collas, en la sierra sur.

De todas ellas la más conocida es la Chimú, sucesora de la Mochica, que alcanzó su esplendor hacia 1450. Dominó todo el territorio que se extiende desde el golfo de Guayaquil en el norte, hasta el río Rimac en el sur.

Este pueblo desarrolló suntuosas construcciones defendidas por murallas y fortalezas, un complejo sistema de canales para la irrigación, el cultivo en terrazas artificiales y la aplicación de fertilizantes (guano). Sus conocimientos metalúrgicos fueron superiores al del resto de las grandes civilizaciones indígenas americanas, pues no solo trabajaron con maestría el oro, la plata y el cobre, sino que consiguieron una aleación de este último mineral con el estaño que les permitió elaborar las puntas de sus herramientas agrícolas, así como cuchillos y agujas.

La principal ciudad chimú fue Chan Chan, cerca de la actual Trujillo –parece que empezó a levantarse en época Huari–, aunque es posible que cada valle estuviese sujeto a una ciudad-estado independiente, como las de Pacatnamú y Purgatorio. La de Chan Chan

tenía inmensos palacios, cisternas, jardines y pirámides, como las del Sol y la Luna. Al igual que en otras culturas preincaicas, los cultos funerarios estaban plenamente generalizados e incluían ofrendas rituales y comidas.

Los incas

Sin duda la civilización incaica fue la más trascendente de las culturas que existieron en el territorio del actual Perú. Su apogeo apenas duró cien años, desde mediados del siglo XV hasta los comienzos de la cuarta década del siglo XVI, cuando irrumpieron los conquistadores españoles. Según la leyenda, sus orígenes se remontan al momento en que tribus de lengua aymara, procedentes de la cuenca del Titicaca y dirigidas por el mítico Manco Cápac, se establecieron en el fértil valle del Urubamba, donde fundaron la ciudad del Cuzco a 3 467 metros de altura sobre el nivel del mar, en medio de pueblos de habla quechua, que sería en lo adelante el idioma de su gran imperio.

La tradición indígena, recogida por cronistas españoles, insiste en la sucesión en el poder de dos dinastías, la Hurin y la Hanan, procediendo los primeros cinco soberanos de la primera y los siguientes de la segunda. Al parecer, después de su octavo gobernante, Viracocha, los incas se liberaron de la dominación colla y pasaron a realizar las primeras conquistas territoriales con un objetivo de dominación permanente. Es a partir de entonces que se puede hablar de una historia incaica, recogida por los *quipucamayos* en sus *quipus*, un simple recurso nemotécnico para recordar datos y nombres.

En realidad, solo a partir de su sucesor, Pachacútec, las antiguas leyendas incas comienzan a hacerse verosímiles, lo que coincide con la creación de un verdadero imperio. Ese mérito corresponde a este noveno Sapa Inca, que gobernó entre los años de 1438 y 1471, quien expandió en forma sustancial los territorios bajo su mando tras dominar a sus tradicionales enemigos chancas e implantar la *mitima*. En sus conquistas, Pachacútec llevó las fronteras del imperio incaico hasta la región de los aymaraes del Collao, junto al lago Titicaca, por

el sur, y hasta Cajamarca por el norte, incluyendo buena parte de la costa del Pacífico colindante.

La *mitima* era una original política de colonización que se basaba en el trasplante de población quechua a los nuevos territorios conquistados y viceversa, con el propósito de facilitar la homogenización del imperio. Gracias a esta extendida práctica, a la llegada de los europeos se hablaba el quechua desde el paralelo 3 de latitud norte hasta el paralelo 36 de latitud sur.

Al Inca Pachacútec también se le atribuye el inicio de la remodelación del Cuzco, la organización de *ayllús* de producción agraria y la crianza de animales domésticos como llamas, alpacas, cuises, patos y perros, así como la construcción de torres en función de gnómones. Estas edificaciones eran erigidas en la línea del horizonte del Cuzco y usadas por los *amautas* o sabios sacerdotes para conocer la fecha de los equinoccios y poder indicar la mejor época para las siembras y cosechas.

Del trabajo comunitario de los *ayllús* salían, además del propio autoabastecimiento, los tributos para los templos del Sol, los *amautas*, los funcionarios del Tahuantinsuyo y del propio Inca. Los miembros del *ayllú* cumplían además otras funciones sociales (*mita*): debían enviar hombres para trabajar, durante seis meses y hasta un año, en la construcción de fortalezas, templos, caminos o también servir como soldados.

El hijo de Pachacútec, Túpac Inca Yupanqui, que gobernó el imperio hasta 1493, conquistó el Chimú y todos los señoríos costeros hasta Pachacamac, cerca de la actual Lima, mientras por el sur llegaría más tarde hasta el río Maule, hoy territorio de Chile. Además, organizó el Estado mediante un sistema centralizado piramidal, rígidamente jerarquizado para impedir la modificación del *status* de sus miembros.

El sistema implantado por Yupanqui se complementaba con una enorme burocracia, cuyos puestos más encumbrados eran monopolizados por la familia del Inca y los antiguos jefes de los pueblos conquistados, que administraba las cuatro partes en que quedó dividido el Tahuantinsuyo. Sin duda la organización estatal alcanzada por los incas fue la más avanzada de las existentes en América antes de la invasión europea.

A Túpac Inca Yupanqui también correspondió la construcción de la fortaleza de Sacsayhuamán, tres series de murallas dispuestas en zigzag, levantadas con piedras de hasta cinco metros de altura, y la culminación de la remodelación del Cuzco, siendo el virtual edificador de la fabulosa ciudad que encontraron los conquistadores españoles.

Entre sus majestuosos edificios, fortalezas, palacios y templos se destacaba el consagrado a Viracocha, donde en sus varios santuarios se rendía culto a este dios y a Inti (el sol), Killa (la luna) y a Qoyllur (las estrellas).

Una de las singularidades de las construcciones incaicas era que estaban hechas de piedra finamente talladas, a tal grado que las junturas entre ellas no requerían cemento, y se distribuían en forma armónica con la naturaleza, en tierras ganadas a las montañas y donde además existían espacios cultivables gracias a la construcción de andenes regados por complejas redes de canales. También Pisac, Machu Picchu y Ollantaytambo constituyen ejemplos del alto nivel de conocimientos alcanzado por los incas en el campo de la arquitectura, la topografía y la ingeniería.

La expansión incaica fue coronada por el siguiente gobernante, Huayna Cápac, con la ocupación del Golfo de Guayaquil, la isla Puná y Quito, extendiendo incluso la frontera septentrional del imperio al río Ancasmayo en la actual Colombia, con lo que el Tahuantinsuyo comprendió un área de un millón de kilómetros cuadrados. El dominio incaico sobre estos territorios (Chinchasuyo) se consolidó con la nueva familia formada por Huayna Cápac con Paccha, la hija del último jefe de los scyris de Quito, Hualcopo Duchicela.

A la muerte de Huayna Cápac en su ciudad favorita de Tomebamba, hacia 1527, se abrió una guerra civil de cinco años entre los dos principales herederos dejados por el Inca y que representaban los intereses enfrentados de Quito (Atahualpa) y del Cuzco (Huáscar). En los combates de Huamachuco y Quipa-Hipa los seguidores de Atahualpa se impusieron y su medio hermano Huáscar fue apresado.

El descontento creado por esta victoria en el Cuzco, y otras zonas de acentuada raigambre quechua, minaban las bases del gran

imperio incaico en un momento extremadamente peligroso. Desde hacía ya un cuarto de siglo los europeos habían iniciado la invasión del continente americano con el primer viaje de Cristóbal Colón y solo cinco años separaban el triunfo de Atahualpa de la destrucción de Tenochtitlan por Hernán Cortés y sus huestes, acercando la hora fatal en que los conquistadores españoles llegaran a las fronteras del Tahuantinsuyo.

Capítulo 2

INICIOS DE LA INVASIÓN EUROPEA (1492-1580)

El llamado descubrimiento de América fue el inicio de la invasión europea del Nuevo Mundo. El proceso de conquista de los pueblos originarios, desarrollado en lo esencial entre 1492 y 1580, puede ser subdividido en tres fases: los primeros viajes de exploración (1492-1519), la dominación de las portentosas civilizaciones clasistas de Mesoamérica y el área andina (1519-1535) y la ocupación de los llamados territorios marginales (1535-1580). En esos acontecimientos influyeron, de una u otra manera, dos elementos externos: el tránsito del feudalismo al capitalismo en Europa y la inclusión de América como zona dependiente del mercado mundial en estructuración.

Esa compleja articulación fue precedida por la creación de dos estados en la península ibérica fuertemente centralizados, en los cuales los intereses de la endeble burguesía y de los grandes propietarios señoriales estaban subordinados a los de la monarquía absoluta. Pese a la semejanza del sistema socioeconómico existente en España y Portugal –feudal, aunque con ciertos rasgos de un capitalismo embrionario–, la colonización emprendida por ambas potencias en el hemisferio occidental se distinguió entre sí desde sus comienzos.

Primeros viajes de exploración

Entre 1492 y 1519 se realizaron los denominados primeros grandes viajes europeos de «descubrimiento», a partir de la travesía

inaugural de Cristóbal Colón, pues obviamos los transitorios asentamientos anteriores de los vikingos en Groenlandia (985) y Terranova (1001), que no tuvieron mayores consecuencias. Cuando concluía la ocupación española de las islas Canarias, los viajes de Colón abrieron nuevos horizontes a la expansión europea, hasta ese momento solo superada por los éxitos de la navegación portuguesa por las costas de África, que ya en 1478 había alcanzado el cabo de Buena Esperanza en la búsqueda de una ruta marítima para el comercio con el Oriente.

Entre las causas que propulsaron estas travesías, y las que le sucederían inmediatamente después, ninguna fue tan importante como el interés de los europeos por encontrar un camino más rápido y barato que el tradicional para llegar al Oriente y acceder a sus productos, de gran demanda en Europa. Nos referimos a las especies (pimienta, clavo, canela, nuez moscada, azúcar), fármacos (ruibarbo, bálsamo, goma arábiga, áloe, cubeba y alcanfor), materias tintóreas (índigo, palo brasil, alumbre), piedras preciosas y otros productos (vidrio, porcelana, telas, etcétera).

Nacido en Génova (1451), Cristóbal Colón se enroló desde muy joven en expediciones marítimas que recorrían todo el Mediterráneo y prestó servicios a los banqueros Centurione. Estos tempranos capitalistas enviaban agentes al continente africano para obtener oro, negociaban con todo tipo de mercaderías, entre ellas azúcar, y desde 1480 procuraban asociarse al gran Duque de Moscú, a fin de establecer una vía privilegiada para el tráfico con la India.

Por encargo de estos intereses, el futuro Almirante de la Mar Océana visitó Portugal en varias ocasiones y comunicó personalmente al monarca lusitano sus planes de llegar al Oriente viajando hacia Occidente. Era una idea revolucionaria para la geografía y cartografía de la época, apoyadas aún en las difusas concepciones de Aristóteles, Estrabón y Tolomeo, así como en los cálculos del cosmógrafo florentino Paolo de Pozzo Toscanelli.

Necesitado del patrocinio de alguna potencia marítima, Colón se trasladó a España (1485), donde se puso en contacto con Martín Alonso Pinzón, armador y comerciante del puerto de Palos, duramente golpeado por la creciente competencia portuguesa. Alentado por los frailes franciscanos de La Rábida y con el apoyo del banquero

florentino Berardi, radicado en Sevilla, el osado marino entabló prolongadas negociaciones directas desde 1486 con los Reyes Católicos, que solo fructificaron el 17 de abril de 1492 con la firma de las Capitulaciones de Santa Fe.

El contrato concedía a Colón el título de Almirante, Virrey y Gobernador de las tierras e islas desconocidas que encontrara, que se suponían cercanas a Asia, así como un alto porcentaje de sus riquezas y de participación en el futuro comercio. Para ello debía establecer, siguiendo la costumbre veneciana y portuguesa, factorías en beneficio de la corona de Castilla. Este reino de la península ibérica, que impulsaba la centralización monárquica como ningún otro, era entonces el estado europeo que mejores condiciones tenía para una empresa de esta envergadura, pues contaba con la experiencia militar derivada de la «reconquista» y había asimilado los adelantos científicos de los árabes.

Del puerto de Palos salió una pequeña flota integrada por tres embarcaciones con unos 90 hombres el 3 de agosto de 1492 y que poco más de dos meses después (12 de octubre) divisó la isla de Guanahaní (hoy Watling), situada en el archipiélago de las Bahamas. Tras recorrer un tramo de la costa norte de Cuba, donde encontraron poblaciones atrasadas, que para asombro de los navegantes ni siquiera entendían el árabe, las tres endebles naves llegaron a La Española,

Tras dejar establecida en esta isla caribeña un fuerte con 39 de sus tripulantes, Colón emprendió el regreso a España, llevando un escuálido cargamento de unos cuantos indios y un poco de oro. A pesar del fracaso económico de la empresa, el Almirante estaba convencido de que casualmente había topado con la parte más pobre de China y, como escribió en su diario, «con 50 hombres es posible someterlos a todos y obligarlos a hacer lo que uno quiera».[1] Colón llegó a España el 15 de marzo de 1493 y, poco después, en Barcelona, informó a los reyes que había llegado, como había prometido, al Asia.

La segunda expedición colombina estuvo compuesta por 17 navíos y alrededor de 1200 hombres, entre ellos artesanos, sacerdotes,

[1] Citado por George B. Tindall y David E. Shi, *Historia de los Estados Unidos*, Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993, t.1, p. 5.

labriegos y funcionarios reales. Según las instrucciones, su principal misión era fundar una factoría, por lo que llevaban caballos, perros y asnos, ganado bovino y porcino, cepas de distintas variedades de vid y semillas de diversas plantas europeas. La gran flota partió de Cádiz, vía islas Canarias, el 25 de septiembre de 1493.

Siguiendo una ruta más al sur, donde encontró los muy favorables vientos alisios, llegó a Dominica el 3 de noviembre y, después de un recorrido por el arco de las Antillas Menores, pasó por Puerto Rico –o Borinquén, como la denominaban sus primitivos habitantes– y se detuvo en Santo Domingo. Aquí Colón y sus acompañantes hallaron la factoría dejada en la primera travesía, destruida por los aborígenes. Armados de ballestas, fusiles y perros, los españoles, en venganza, masacraron a cientos de indígenas –primeras víctimas americanas de la crueldad de los conquistadores– y cargaron unos 500 como esclavos que fueron enviados a España.

Atraídos por el oro del Cibao, los españoles fundaron La Isabela en el litoral noroccidental, reemplazada en diciembre de 1496 como centro de las actividades colonizadoras por la villa de Santo Domingo en el sureste. Luego, buscando insistentemente el camino que lo llevara a «descubrir la tierra firme de las Indias»,[2] Colón exploró la costa sur de Cuba y arribó a Jamaica, para regresar el 11 de junio de 1496 a España –después de nueve meses de despiadada campaña colonizadora en la isla de Santo Domingo–, transportando como principal mercancía un cargamento de indios esclavizados.

El magro botín pospuso la realización del tercer viaje, que solo contó finalmente con seis naves y poco más de 200 hombres. Una travesía todavía más meridional, encaminada a buscar la ansiada ruta a la India, los condujo a la isla Trinidad y al delta del Orinoco. De ahí navegaron por el golfo de Paria y, torciendo el rumbo, se dirigieron de nuevo a Santo Domingo.

En La Española se puso de manifiesto la incapacidad del Almirante y su hermano Bartolomé para contener los desórdenes entre los colonos, acaudillados por Francisco Roldán. La insubordinación de los primeros colonizadores europeos, las insurrecciones

[2] Tomado de Iosif P. Maguidovich, *Historia del descubrimiento y exploración de Latinoamérica*, Moscú, Editorial Progreso, [s.f.], p. 56.

indígenas contra los repartimientos y las intrigas de las autoridades reales, provocaron la detención de Colón y su traslado a España (1500) por órdenes del funcionario de la corona Francisco Bobadilla.

Al año siguiente, frey Nicolás de Ovando fue nombrado gobernador de la isla (1502), quien se convertiría en el verdadero impulsor de la colonización de La Española y, a través de ella, de las Indias. Con su llegada a la isla, acompañado de un nutrido grupo de colonizadores, La Española se fue convirtiendo en una verdadera colonia, a partir de un esquema de dominación que desde entonces se repetiría por el resto del continente. Esta tendencia hacia un mayor control de la monarquía se confirmó en 1503 con la creación de la Casa de Contratación de Sevilla, a ejemplo de la portuguesa fundada con anterioridad, encargada de los asuntos económicos, científicos y de justicia.

Rehabilitado por la corona –aunque sin sus anteriores privilegios, lo que significaba la subordinación directa de las futuras colonias al poder real–, Colón emprendió el cuarto y último viaje desde Cádiz el 9 de mayo de 1502 con 4 barcos y 150 hombres, entre ellos su hermano Bartolomé y su hijo Hernando, entonces con trece años de edad. Después de una escala en Santo Domingo, los navegantes recorrieron parte de la costa de América Central –hasta la actual Honduras– y llegaron al istmo de Panamá el 2 de noviembre, convencidos de que visitaban la costa sureste de Asia, la de Ciamba (Siam), próxima al paso hacia la India, tal como escribió Colón en su diario: «allí supe de las minas de oro de la provincia de Ciamba, que yo buscaba».[3]

Durante esta postrera travesía colombina, la más occidental realizada hasta entonces por europeos, los viajeros se toparon con una larga embarcación de indiscutible origen mesoamericano, de 35 remeros, a la que inexplicablemente no concedieron importancia. Al regreso, sufrieron un naufragio en Jamaica –isla que sería conquistada en 1509 por Juan de Esquivel– y solo lograron pisar suelo español, en Sánlucar de Barrameda, dos años después. El 21 de mayo de 1506, el otrora gran Almirante, que seguía convencido de haber

[3] Carlos Meléndez, *Historia de Costa Rica*, *San José*, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1985, p. 40

llegado al Asia desde el occidente, murió pobre y abandonado. La muerte de Colón pasó inadvertida para sus contemporáneos.

Desde 1495 la corona española había empezado a distribuir licencias entre otros capitanes, algunos de ellos participantes en los viajes de Colón, a fin de seguir buscando una ruta expedita al Asia y, al mismo tiempo, extraer las riquezas que pudiesen hallar en las nuevas tierras. La avidez por los metales preciosos y el afán de llegar al Oriente, condujo en pocos años a bordear gran parte del litoral Atlántico de la América Central y del Sur, aunque la mayoría de estos navegantes solo pudieron regresar con una carga de valor insignificante desde el punto de vista comercial: palo brasil, indios esclavizados, perlas y algo de oro.

Entre 1499 y 1500, Alonso de Ojeda, acompañado por Juan de la Cosa y el florentino Américo Vespucio, recorrió las costas de la América meridional, desde el cabo San Roque hasta la península de Goajira. Al pasar por Maracaibo, los palafitos aborígenes les recordaron los canales de Venecia, por lo que denominaron Venezuela al territorio. Animado por similar propósito, Pedro Alonso Niño navegó por la costa de Paria hasta Cumaná; mientras, en 1500, Vicente Yáñez Pinzón desembarcó entre el cabo San Roque y el actual Pernambuco, atravesó la desembocadura del Amazonas y regresó a las Antillas.

En ese mismo lapso, Rodrigo de Bastidas, junto a Juan de la Cosa, visitó los alrededores del golfo del Darién, la desembocadura del Magdalena y la bahía de Cartagena. Partiendo de Palos, a principios de 1500, Diego de Lepe se dirigió a la América del Sur, en tanto el portugués Pedro Alvares Cabral desembarcaba ese mismo año en las costas del Brasil y proclamaba los derechos de Portugal sobre ese territorio, visitado poco después (1503-1504) por el navegante francés Paulmier de Gonneville.

Por su parte, el veneciano Giovanni Caboto, acompañado de su hijo Sebastián, al servicio del rey de Inglaterra, recorría el litoral nororiental de Norteamérica entre 1497 y 1498 buscando afanosamente un camino hacia China. El viaje de Caboto por parte de la costa norteamericana le daría más adelante a Inglaterra la base legal para reclamar esas tierras para su soberanía.

En 1500 el portugués Gaspar Cortereal recorrió también la península de Labrador, siendo el primer europeo, después de los vikingos, en avistar las costas occidentales de Terranova. En 1501 realizó un segundo viaje del que no volvió. Su hermano Miguel salió al año siguiente en su busca, pero también desapareció.

Entre 1501 y 1502, Américo Vespucio, esta vez al servicio del monarca lusitano, recorrió el litoral brasileño hasta la actual Bahía. Sus relatos de viaje contenidos en su correspondencia con los Médicis, donde por primera vez se catalogaba a estas tierras como un continente diferente, desconocido hasta entonces por los europeos, inspiraron al cosmógrafo alemán Martín Waldssemüller a nombrar América al Nuevo Mundo en honor a Vespucio en su *Cosmographiae introducctio* (1507).

La interesante carta de Vespucio, llamada *Mundus Novus*, dirigida a los Médicis –fechada entre septiembre de 1502 y mayo de 1503–, e impresa por primera vez hacia 1503 ó 1504, fue muy divulgada en su tiempo y alude al viaje por las costas del Brasil realizado por su autor, al servicio de Portugal, a partir de mayo de 1501. Gracias a sus amplias experiencias como viajero y sobresaliente preparación intelectual, el avispado Vespucio se percató de que estas tierras constituían, contra la creencia generalizada entonces, una masa continental única y diferente, independiente de Asia y desconocida para los europeos. Ya en 1512 Jan Stobnicza dibujó al nuevo continente como una barrera interpuesta entre Europa y el Oriente.

En definitiva, América acabó por prevalecer como denominación de las Indias, también conocidas como Nuevo Mundo, Las Españas o Ultramar, cuya existencia como continente solo pudo ser comprobada fehacientemente en 1741 cuando el navegante sueco Vitus Bering recorrió el estrecho que lleva su apellido. De todos modos, cuando Waldssemüller bautizó al Nuevo Mundo con el nombre de Vespucio ya Cristóbal Colón había muerto convencido que había llegado a la antesala de las ansiadas Indias.

A pesar de que los castellanos no tardaron en darse cuenta del error del gran Almirante, mantuvieron la denominación de Indias dada a las nuevas tierras –por lo que pronto sería necesario añadirle occidentales–, término que poco a poco sería reemplazado por el más

sonoro y singular de América. Desde la segunda mitad del siglo XVI, el nombre de América fue adoptado en muchos globos y mapas, excepto en los españoles.

La expansión hispana por el Atlántico forzó la concertación de un nuevo acuerdo entre España y Portugal, pues la monarquía lusitana consideraba que se violaban sus derechos otorgados por los papas Nicolás V y Calixto III en 1452 y 1456, respectivamente, reconocidos además por Castilla (1479). En 1493 dos bulas (*Inter caetera*) del papa español Alejandro VI habían reconocido la soberanía de los Reyes Católicos sobre las nuevas regiones «descubiertas»: las posesiones portuguesas debían extenderse no más allá de 100 leguas al occidente de las Azores y Cabo Verde.

Sobre esta base se firmó el Tratado de Tordesillas (1494), el cual extendió la línea divisoria a 270 leguas, dejando a Brasil, entonces todavía desconocido por los europeos, pues el mencionado viaje de Cabral fue posterior, dentro del área correspondiente a Portugal. Esta división del mundo entre Madrid y Lisboa fue luego completada por el acuerdo de Zaragoza (1529) entre ambas monarquías.

Desde La Española y Cuba –esta última conquistada por los hombres de Diego Velázquez a partir de 1510–, después de vencer a los caciques Caonabó, Guarionex y Hatuey, marinos españoles como Vicente Yáñez Pinzón y Juan Díaz de Solís siguieron navegando el Caribe. Casi simultáneamente, Juan Ponce de León, conquistador de Puerto Rico (1508), tras doblegar la resistencia del cacique local Guaynabá, buscando según la leyenda la mítica fuente de la eterna juventud, llegaba en 1513 a una hermosa y extensa península cubierta de árboles y flores (La Florida). En 1521, murió en un segundo empeño por explorarla.

En ese territorio norteamericano también se registraron las empresas conquistadoras de Pánfilo de Narváez y de Hernando de Soto, quien fundó Tampa (1539) y recorrió por primera vez parte del río Missisipi (1542). En su recorrido, este último se topó con algunas poblaciones aborígenes que construían montículos de tierra en forma de pirámides con fines religiosos. Por otro lado, en 1522 el navegante español Juan Bermúdez exploraba el archipiélago de las Bermudas.

El primer europeo que conoció la costa noroccidental de la América del Sur fue el navegante Alonso de Ojeda, quien en compañía de Juan de la Cosa y procedente del litoral venezolano, llegó hasta la península de la Guajira (1499). En 1502, Rodrigo de Bastidas exploró el litoral comprendido entre el cabo de la Vela y el golfo de Urabá, incluyendo las bahías de Santa Marta y Cartagena y la desembocadura del río Magdalena. Ese mismo año, Ojeda realizó su segundo viaje al litoral atlántico y fue nombrado gobernador de Coquibacoa (Guajira), ocasión en que organizó el primer asentamiento español en un lugar que llamó Santa Cruz (Bahía Honda), dedicado a la recolección de oro y perlas, pero que pronto fue abandonado.

En 1508, la Junta de Burgos estableció dos gobernaciones en la costa septentrional de América del Sur, la de Urabá (Nueva Andalucía), entregada al propio Ojeda, y la de Veragua, que abarcaba hasta Centroamérica. Para abrir la colonización del territorio que le correspondía, Ojeda organizó en Santo Domingo una expedición (1509) que se proponía fundar una población en Calamary (bahía de Cartagena), pero la hostilidad indígena lo obligó a crearla en el golfo de Urabá (San Sebastián), donde tampoco prosperó.

Dos años después, Martín Fernández de Enciso fundó la colonia de Santa María la Antigua del Darién. Fue desde este sitio de donde partió la famosa expedición encabezada por Vasco Núñez de Balboa, quien acompañado de 190 aventureros españoles y más de mil indios, tras doblegar la resistencia organizada por los caciques Cemaco y Trecha, cruzó el istmo de Panamá y llegó al océano Pacífico, que denominó Mar del Sur (29 de septiembre de 1513).

Estas excelentes noticias animaron a la corona a enviar la más grande flota organizada hasta entonces: 22 naves y más de dos mil personas, entre ellas muchas mujeres españolas. Al mando de la imponente expedición colonizadora fue situado uno de los pocos miembros de la alta nobleza que participó en la conquista de América: el anciano Pedrarias Dávila.

En 1517 el propio Pedrarias ejecutó a Balboa, y pocos años después trasladó a Panamá, sobre el Pacífico, la villa de Santa María la Antigua, ubicada en el Darién, convertida en capital de la nueva

gobernación de Castilla de Oro. Entre 1514, fecha de su arribo, y 1519, Pedrarias luchó contra la insurrección del cacique indígena Urraca y auspició también la colonización de parte de la costa del Pacífico de Centroamérica (Costa Rica y Nicaragua).

En 1523, Gil González Dávila llegó hasta la actual Nicaragua, desde donde debió retirarse ante los ataques de los pueblos originarios encabezados por el jefe indígena Diariagen. Al año siguiente volvió hacia la parte de Honduras, casi simultáneamente explorada por Cristóbal de Olid procedente de México. Por su parte, Francisco Hernández de Córdoba fundó a principios de 1524 las villas de Bruselas (Costa Rica), Granada –a orillas del lago Nicaragua–, Nueva Segovia y León.

A la vez continuaban las travesías por las costas sudamericanas en la febril búsqueda de un pasaje para acceder, por una ruta más expedita y barata que la tradicional, a los productos y mercancías del Oriente y así anular el virtual monopolio comercial portugués. Pero ninguna vía marítima hacia el este, desde Labrador a la Patagonia, pudo ser hallada en el Nuevo Mundo en estos años. En esta empresa, Juan Díaz de Solís perdió la vida a manos de los guaraníes en 1516, mientras exploraba el Río de la Plata, denominado Paraná Guazú en lengua aborigen; aunque el autor de la proeza fue un navegante portugués, Fernao de Magalhaes o Fernando de Magallanes en castellano, cuyo viaje estaba auspiciado por la corona española.

Al mando de 5 barcos, este arriesgado navegante partió de Sánlucar el 29 de septiembre de 1519. El 21 de noviembre del año siguiente, tras tropezar con las islas Malvinas, encontró el estrecho que lleva su nombre, atravesó el Pacífico, desembarcó en Guam, y el 16 de marzo de 1521 llegó al archipiélago filipino. Muerto Magalhaes en un combate con los nativos del lugar, el 27 de abril de 1522, tomó el mando su segundo, el sefardita español Juan Sebastián Elcano.

Fue este capitán quien, bordeando el cabo de Buena Esperanza, hizo su aparición en Sevilla con un solo barco, *Victoria*, pero repleto de auténticas especies orientales. La llegada de esta nao el 6 de septiembre de 1522 cumplía, con treinta años de retraso, las expectativas despertadas por Colón desde su primer viaje al occidente.

Se había demostrado en forma contundente la redondez del planeta. El hallazgo del esperado paso al Oriente tenía lugar cuando ya los españoles se habían encontrado con las deslumbrantes culturas de Mesoamérica, que hizo sumamente atractiva la conquista del continente, restando interés a la nueva ruta al Asia. No obstante, todavía la persistente búsqueda de un paso más expedito a la India determinaría las exploraciones de Giovanni de Verrazano (1524), Jacques Cartier (1534), Martin Frobisher (1576-1587) y Henry Hudson (1609), en Norteamérica.

La conquista de las grandes civilizaciones mesoamericanas y andinas

Las expediciones de carácter comercial, que estimularon las primeras exploraciones de las costas americanas, dieron lugar a la fundación de bases de apoyo en las Antillas, esto es, La Española (1496), Puerto Rico (1508), Jamaica (1509) y Cuba (1510-1512), así como en la masa continental: Darién y Panamá (1510-1514). Aunque en estas primeras colonias europeas en América, los españoles solo consiguieron obtener oro de aluvión, sirvieron de trampolín a las futuras incursiones sobre la llamada Tierra Firme.

De esta manera, a los primeros viajes de exploración siguieron las grandes expediciones de conquista, encaminadas a la ocupación efectiva de los territorios de Mesoamérica y el área andina, ricos en metales preciosos y con una numerosa y relativamente avanzada población que podía ser asimilada. A diferencia de los pueblos originarios encontrados hasta entonces por los europeos, más atrasados y desconocedores de estructuras complejas y clases sociales –lo que provocaría su masivo exterminio o la expulsión de las zonas ocupadas por los conquistadores–, los habitantes de Mesoamérica y el área andina conocían los conceptos sociales jerárquicos y estaban habituados a una actividad económica disciplinada y sistemática. Por tanto, lo distintivo de esta nueva fase fueron las famosas expediciones de conquista que culminaron con el sometimiento de las grandes culturas indígenas, en particular la azteca, maya e inca.

La conquista por Hernán Cortés de la confederación azteca, entre 1519 y 1522, y del imperio incaico por Francisco Pizarro, de 1532 a 1533, constituyeron momentos espectaculares de la conquista de América. Terminada la etapa de los llamados viajes de descubrimiento (1492-1519), Castilla encontró en México y Perú la base de su explotación del Nuevo Mundo en el oro y la plata, hallados en lugares donde justamente existía una población autóctona susceptible de ser empleada en las minas mediante la eficaz asociación de la corona con los propios conquistadores.

La conquista de las civilizaciones mesoamericanas por Hernán Cortés estuvo precedida por los viajes de Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva (1517 y 1518, respectivamente), enviados por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, con el propósito de capturar esclavos y buscar oro, quienes con ese fin exploraron el litoral desde Yucatán hasta algo más al norte de Tabasco. El tercero de los capitanes elegidos por Velázquez para recorrer la desconocida zona mesoamericana, Hernán Cortés, se insubordinó contra su jefe, convencido de las enormes riquezas que esperaban a esa empresa, y partió sin autorización el 10 de febrero de 1519 con un ejército de 553 hombres, 11 naves con 110 tripulantes y 10 caballos.

Tras derrotar a grupos indígenas de Yucatán y Tabasco, fundar Veracruz (21 de abril) en la costa atlántica y del célebre hundimiento de su propia flota, Cortés sofocó el último intento de rebelión de los partidarios de Velázquez y marchó hacia el altiplano central de México, no sin antes enviarle a Carlos V todos los regalos entregados por los representantes del gobernante azteca Moctezuma. Los presentes iban acompañados de una sugerente misiva en la que prometía al monarca un nuevo reino «con título y no menos mérito que el de Alemaña [sic.], que por la gracia de Dios vuestra sacra majestad posee».[4]

Gracias a la colaboración de totonacas y tlaxcaltecas –pueblos indígenas oprimidos por la confederación azteca–, con quienes debió librar primero fieros combates antes de ganárselos como aliados, Cortés pudo entrar en noviembre a la ciudad de Tenochtitlan,

[4] Citado por J.H. Elliot, *El Viejo y el Nuevo Mundo (1492-1650)*, Madrid, Alianza Editorial, 1972, p. 107.

donde lo recibió Moctezuma. Allí le sorprendió la noticia del arribo al litoral mexicano de 18 naves y cientos de soldados enviados por Velásquez para recuperar el control de la expedición, comandados por Pánfilo de Narváez. Dejando a Pedro de Alvarado en la capital de los aztecas, Cortés se dirigió a la costa, venció a Narváez y convenció a una parte de sus derrotadas fuerzas a que se le unieran en la conquista de México, la que pronto fue reanudada.

Durante la ausencia de Cortés, la población de Tenochtitlan se rebeló y comenzó la resistencia azteca a los invasores españoles. Los combates arreciaron, Moctezuma murió tratando de calmar la sublevación de su pueblo, mientras Cortés, en la llamada noche triste del 30 de junio de 1520, a duras penas lograba escapar de la ciudad acompañado de sus más fieles seguidores, entre ellos Alvarado y la indígena Malintzin, amante e intérprete del conquistador de México.

Bajo la protección de sus aliados tlaxcaltecas, los españoles se recuperaron, incorporaron nuevos refuerzos llegados de las Antillas, y organizaron diez meses después el sitio de Tenochtitlan. La destrucción de los canales de agua que abastecían la ciudad y la falta de alimentos sellaron la suerte de los defensores aborígenes vencidos por la sed, el hambre y las epidemias –algunas de ellas, como la viruela y la sífilis, desconocidas en América y traídas por los conquistadores. La heroica resistencia de sus habitantes, dirigidos primero por Cuitlahuac y después por el legendario Cuauhtémoc, se prolongó desde mayo hasta el 13 de agosto de 1521.

La victoria española sobre los mexicas fue facilitada, además del superior armamento –espadas de acero, armaduras metálicas, arcabuces y caballería– por las contradicciones existentes entre los diferentes grupos indígenas, que Cortés hábilmente aprovechó para sumar a su ejército pueblos descontentos como tlaxcaltecas y totonacas. Así, la conquista de Tenochtitlán fue realizada por unos mil europeos y más de 10 mil guerreros de Tlaxcala. La dominación mexica sobre otros pueblos autóctonos, a los que exigía excesivos tributos y un suministro constante de víctimas para el sacrificio, explica el apoyo aborigen conseguido por los conquistadores.

De esta manera, la victoria española sobre los aztecas, como después contra mayas, incas y los pueblos originarios más desarrollados

del continente, fue posible por sus pronunciadas divisiones políticas, sociales y étnicas. También desempeñaron un papel divisionista los privilegios que les fueron reconocidos a la clase dominante indígena, convertida en aliada tácita de los españoles, postura que le permitió mantener un *status* social superior al resto de los aborígenes aun después de concluida la conquista.

A estos triunfos de los españoles –retratados con maestría por la pluma de uno de ellos, Bernal Díaz del Castillo, en su obra *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España* (1632)– siguieron la ocupación del norte, oeste y centro de México. Entre 1529 y 1536, Nuño de Guzmán creó en estas zonas el llamado Reino de Nueva Galicia, mientras Hernando de Soto y Francisco Vázquez de Coronado recorrían por separado, desde fines de la década del treinta del siglo XVI, el sudeste de América del Norte y las praderas occidentales del Mississipi, respectivamente. Entre las motivaciones de algunos de estos conquistadores estaba la búsqueda de las míticas «Siete Ciudades de Cíbola», como puede verse en el testimonio dejado por Alvar Núñez Cabeza de Vaca en sus *Naufragios* (1542), obra donde narró su accidentado periplo de casi diez años (1527-1537) por esas inhóspitas regiones.

Casi al mismo tiempo, las huestes de Cortés también se apoderaban de la parte septentrional de Centroamérica (1524) –las actuales Guatemala y El Salvador–, así como iniciaban el sometimiento de los mayas de Yucatán (1527-1547) y buscaban un paso interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico. Por su parte, Cristóbal de Olid entraba en Michoacán, donde debió enfrentar la tenaz resistencia de los tarascos. Por último, la colonización de las tierras fronterizas del norte de Nueva Galicia quedó en manos de los misioneros religiosos, como los jesuitas Juan María de Salvatierra y Eusebio Kino, mientras la otra extensa región del noroeste mexicano, Nueva Vizcaya, fue dominada por los conquistadores a las órdenes de Francisco de Ibarra.

En 1527 fue creada la primera audiencia de la llamada Nueva España –luego funcionaría otra en Nueva Galicia– y llegó con el título de primer obispo fray Juan de Zumárraga. Este encumbrado sacerdote fue proclamado irónicamente *Protector de los Indios*, y entre sus méritos estuvo la condena a muerte en la hoguera de un nieto de

Netzahualpilli, gobernante de Texcoco hasta 1516, acusado de realizar sacrificios humanos. En 1571, el aparato represivo de la Iglesia se completó con el establecimiento de la Inquisición.

Con el arribo en 1535 del primer virrey, Antonio de Mendoza –quien tendría a su cargo la represión de una gran rebelión indígena en Nueva Galicia, conocida como la guerra del Mixtón–, la figura de Cortés pasó a un plano menos visible. Apenas unos años antes le había sido concedido por la corona un señorío que durante un tiempo fue un verdadero feudo, pues comprendía Tacubaya, Coyoayán, Cuernavaca, Toluca, Oaxaca, Veracruz y Tehuantepec.

El primer virreinato establecido en las Indias por los españoles comprendía, durante los dos primeros siglos coloniales, la parte central del actual México, denominada Nueva España, la costa oriental con la vaga designación de Coatzacoalcos, la comarca del sur, conocida como Mixteca, los territorios colindantes al occidente nombrados Nueva Galicia, además de la América Central, las Antillas y, desde 1565, las islas Filipinas. El continuo avance de la colonización europea por este extenso, poblado y rico territorio hizo posible a mediados del siglo XVI el descubrimiento de minas de plata en Zacatecas, Guanajuato y Durango.

La conquista española de los mayas se inició con la salida de México, el 6 de diciembre de 1523, de la expedición de Pedro de Alvarado. A su avance se le opusieron primero los pueblos originarios de Soconusco, aliados de los quichés, a quienes los españoles vencieron a orillas del río Tonalá (13 de febrero de 1524). A continuación las huestes de Alvarado, integradas por más de 400 europeos, miles de indígenas aliados traídos de México, piezas de artillería y caballos, vencieron a los quichés en Tilapa y Salamá y ocuparon la ciudad de Xelajú (actual Quezaltenango).

Pero los quichés se reorganizaron y dirigidos por Tecún Umán enfrentaron a los invasores en los llanos de Pachaha, donde perdió la vida este valeroso jefe aborigen. Luego otros dos caciques quichés, Belehet-Tzi y Oxib-Quieh, trataron infructuosamente de detener a Alvarado en la ciudad de Utatlán, que fue arrasada.

El 25 de julio de 1524 los invasores fundaron en la antigua capital de los cakchiqueles (Itsimté), la villa de Santiago de los Caballeros

de Guatemala o Quauhtemellán, como la llamaban los indios de lengua náhuatl que venían con Alvarado. Por último, fueron sometidos los pipiles y los habitantes de Panatlacátl, con capital en Itzcuintlán (hoy Escuintla), así como los pueblos mayas asentados en Chiapas. Al año siguiente Jorge, hermano de Pedro de Alvarado, fundó la villa de San Salvador.

El sometimiento de los quichés, cakchiqueles, tzutuhiles y pipiles, fue posible porque estaban debilitados por sus viejas rencillas, que los invasores hábilmente aprovecharon echando a pelear unos pueblos contra otros. También ese proceso fue facilitado por el avanzado proceso de desintegración por el cual ya atravesaban los distintos pueblos de origen maya, que desde años antes de la llegada de los europeos se había fraccionado en disímiles estadillos y descontinuados o perdidos muchos de sus antiguos conocimientos y adelantos científicos.

Eso explica que cuando Hernán Cortés realizó su travesía desde Tenochtitlán hasta Honduras-Hibuera, entre 1524 y 1525, cruzó con sus acompañantes por el territorio que cobijara a los antiguos mayas, sin darse cuenta de sus viejas ciudades y templos, ocultos por la exuberante vegetación de la selva tropical. Esos grandiosos centros ceremoniales fueron desconocidos por los españoles hasta que en 1576 un oidor de la audiencia de Guatemala informó a la corona que había descubierto los restos de una antigua ciudad (Copán), cuyos constructores eran para ellos un misterio, pues aquellas ruinas no las asociaban con los pueblos originarios sometidos.

La conquista ibérica de la población maya establecida en la península de Yucatán fue realizada por los Montejo, padre e hijo, región por donde ya habían pasado las mencionadas expediciones de Hernández de Córdoba, Grijalva y el propio Cortés en su ruta marítima a México. El proceso de sojuzgamiento comenzó en septiembre de 1527 y quedó consumado, en términos generales, hacia la década de 1540, aunque atravesó por varias etapas y dificultades diversas.

Siguiendo el ejemplo de Cortés y Alvarado, los Montejo se valieron también de las contradicciones entre los pueblos mayas (xius, iztaes, cochuas, chetumales, cheles, peches, cocomes y otros), así como de las concesiones y privilegios concedidos a las familias

dominantes, como fue el caso de Tutul Xiú, gobernante del estadillo de Maní. Pero en el territorio yucateco los conquistadores españoles se desalentaron al no encontrar el oro que esperaban.

En 1538, Montejo debió dejar por el momento esta empresa para reprimir en Honduras la rebelión indígena encabezada por Lempira. La fundación de la ciudad de Mérida, sobre la antigua ciudad maya de Tho, y la creación de la Capitanía General de Guatemala (1542) –con jurisdicción sobre toda América Central, excluyendo Panamá–, junto a la derrota de la última gran resistencia de los pueblos mayas el 8 de noviembre de 1546, indica en la práctica la culminación de la conquista de esta antigua civilización. Solo los itzaes, refugiados en la ciudad de Tayasal, escondida en las selvas del Petén, a orillas del lago Petén Itzá, permanecieron independientes hasta la violenta irrupción del ejército de Martín de Urzúa, gobernador de Yucatán, el 13 de marzo de 1697.

La primera capital guatemalteca, ubicada en Itsimté como se ha mencionado, poco tiempo después de su fundación fue trasladada a las faldas del Volcán de Agua, el 22 de noviembre de 1527. Esta segunda capital de Guatemala, situada cerca de la actual Ciudad Vieja, fue destruida por terremotos e inundaciones en 1541. En su lugar se edificó en el valle de Pancho la tercera ciudad capital (la futura Antigua), siguiendo el proyecto trazado por Juan Bautista Antonelli, el famoso arquitecto militar de Felipe II.

En la medida que el área central y meridional del continente era conquistada por los invasores europeos –aunque el norte se mantendría insumiso durante varios siglos, salvo las aisladas zonas donde se establecieron misiones religiosas–, se iban implantando las instituciones y reglamentaciones de estilo feudal y arraigaban las prácticas esclavistas sobre las cuales se levantaría la sociedad colonial. Nos referimos a los repartimientos y encomiendas, al *cuatequil* –nombre que recibió la *mita* en México–, el peonaje y la esclavitud africana.

El segundo momento culminante de la «etapa próspera» de la conquista estuvo representado por la campaña de Francisco Pizarro y Diego de Almagro contra el imperio de los incas. Las primeras noticias de la existencia de esta extraordinaria civilización indígena se conocieron luego del regreso a Panamá, en 1522, de la expedición

de Pascual de Andagoya, quien recorrió la costa del Pacífico hasta el puerto de Buenaventura (Nueva Granada).

Ello motivó los viajes más al sur de Almagro y Pizarro en 1524, 1526 y 1527, ocasión esta última en que se hicieron de dos llamas vivas, tejidos finos de lana de vicuña, vasijas de oro y plata y varios aborígenes. Con estas pruebas de la existencia de una cultura autóctona hasta entonces desconocida por los europeos, Pizarro se trasladó a España, comisionado por sus socios Almagro y el cura Hernando de Luque, para obtener unas capitulaciones que le permitiesen partir, con todas las de la ley, hacia la conquista de la fabulosa civilización indígena de la América del Sur (1529).

En 1532, después de obtener el permiso y la concesión real correspondiente, llegaron al Tahuantinsuyo los primeros conquistadores españoles procedentes de Panamá: 180 hombres y unos 30 caballos. Los invasores europeos se encontraron al imperio incaico dividido, a pesar de que ya Atahualpa había ganado la guerra civil –con el apoyo de sus generales Quizquiz y Calicuchima– y encarcelado a su medio hermano Huáscar, a quien eliminaría al conocer la presencia foránea en su territorio.

Las luchas fratricidas entre los incas facilitaron los planes de los españoles para conquistar el Perú. Pizarro utilizando los métodos de Cortés se aliaría con los aborígenes de la costa, recién dominados por los incas, y entraría en contacto con los partidarios de Huáscar.

Las fuerzas de Pizarro, reforzadas con hombres enviados por Almagro, reunidas en Tumbes (junio), y que ya sumaban más de 400 conquistadores, se trasladaron a Cajamarca donde se encontraba el Inca Atahualpa (16 de noviembre de 1532). Abandonada la ciudad por el mandatario indígena, los españoles la ocuparon y, al enterarse de la cercanía del Inca, le hicieron llegar un mensaje con el propósito de atraerlo al recinto amurallado, donde le prepararon una emboscada. Hecho prisionero a traición, tras perder gran parte de su séquito, Atahualpa prometió a Pizarro un enorme rescate a cambio de su libertad.

Repartido entre los conquistadores los tesoros proporcionados por el Inca –equivalentes a toda la producción europea de entonces durante cincuenta años– y aumentado el número de los españoles

con el arribo de nuevos contingentes, Pizarro en un simulacro de juicio condenó a muerte a Atahualpa y lo ejecutó. Luego reconoció a su hermano Hualpa Cápac como soberano del Tahuantinsuyo, al que también no tardaría en eliminar al darse cuenta de que este no era reconocido por el *ayllú* real del Cuzco.

Ejecutados Atahualpa y Hualpa Cápac, Pizarro entró en el Cuzco como libertador (15 de noviembre de 1533), pues justificó sus acciones criminales con el supuesto propósito de entregar el poder a Manco Cápac II, proclamado Inca tras la muerte de su hermano Huáscar. Al mismo tiempo, un oficial de Pizarro, Sebastián Benalcázar, aplastaba a sangre y fuego –con la ayuda de 12 mil indios cañaris– la sublevación de los pueblos originarios acaudillada por Rumiñahui en Quito (diciembre), ciudad que quedó arrasada e incendiada. Para asegurar a los españoles la salida desde Quito al Pacífico, a continuación fueron establecidas las villas de Portoviejo (1535) y Guayaquil (1537).

A fines de 1534 Pizarro partió del Cuzco, donde dejó a su hermano Juan, para fundar también cerca del océano Pacífico, en el valle del Rimac, la capital de los conquistadores del Tahuantinsuyo: Lima. Procedentes de Riobamba, participaron en el acto de creación de la nueva villa Diego de Almagro y Pedro de Alvarado.

Después de estos acontecimientos, el gobernante indígena Manco Cápac, cansado de los abusos de los seguidores de Pizarro, que se comportaban como verdaderos conquistadores, huyó del Cuzco, capital histórica del imperio incaico, y se refugió en una apartada fortaleza situada en la intrincada región montañosa de Vilcabamba, en la vertiente oriental de los Andes. Desde esas inaccesibles cúspides andinas, cuyas mayores alturas casi igualan a la del Himalaya, el Inca dirigió la resistencia contra el invasor español, levantando entre 1536 y 1537 un ejército de miles de indígenas. Incluso las fuerzas de Manco Cápac llegaron a poner sitio al Cuzco y Lima durante varios meses.

Las luchas intestinas entre los propios invasores españoles, casi paralela a la rebeldía indígena, comenzó con la resistencia de Diego de Almagro a conformarse con el territorio que le correspondía del botín de la conquista, denominado Nueva Toledo (Chile)

–concedido originalmente para su explotación a los banqueros alemanes Fugger–, pero que carecía de los atractivos y riquezas del imperio incaico. Imposibilitado de apoderarse del Cuzco como era su intención, donde se le opusieron las huestes capitaneadas por Francisco, Juan y Gonzalo Pizarro, Almagro debió marchar a regañadientes hacia la región austral con unos 400 españoles y varios centenares de aborígenes.

Ello determinó que fuera Almagro quien iniciara, el 3 de julio de 1535, la conquista de la tierra al sur del Perú. Desilusionado, al comparar estos desolados parajes con las riquezas del poblado y rico imperio incaico, Almagro y sus hombres regresaron por la ruta costera para tratar de arrebatar Perú a Pizarro (1537), luego de recorrer unos 5 mil kilómetros entre la ida y la vuelta.

El destacamento de Almagro se apareció en Perú cuando los conquistadores luchaban contra la sublevación de Manco Cápac. Almagro obligó a los indígenas a replegarse a Vilcabamba, abandonando el sitio del Cuzco. Pero esta victoria trajo aparejada la agudización de las disputas entre almagristas y pizarristas por las riquezas del Tahuantinsuyo, que dio como primer resultado la muerte de Almagro, tras ser derrotado en Salinas (6 de abril de 1838) por Hernando Pizarro, que lo hizo condenar y estrangular.

El conflicto continuó con la acción ejecutada por el hijo mestizo de Almagro, conocido por el Mozo, quien irrumpió en el palacio de gobierno en Lima y dio muerte a Francisco Pizarro y a su medio hermano Alcántara (26 de junio de 1541). A continuación, el joven Almagro fue proclamado por sus partidarios nuevo gobernador del antiguo territorio incaico. Tres meses después de estos acontecimientos llegó a Perú el enviado de Carlos V, Cristóbal Vaca de Castro, con órdenes de asumir el poder en caso de que Pizarro hubiera muerto.

Almagro desconoció la autoridad del representante de la corona y le ofreció resistencia. Vencido en lomas de Chupas, fue decapitado en septiembre de 1542. Varios de sus partidarios huyeron entonces a los Andes, donde los acogió Manco Cápac II. Hacia 1545, y en medio de extrañas circunstancias, un grupo de refugiados almagristas apuñaleó al Inca que les había protegido. Como resultado, todos

los españoles escondidos en Vilcabamba fueron ejecutados por los airados indígenas.

Desde ese momento, la conquista española del Perú quedó signada por dos acontecimientos: la sostenida rebeldía de los incas contra los conquistadores y las luchas intestinas entre estos últimos, que los cronistas llamaron las «guerras civiles». Muchos de sus hechos, como la propia historia y vida cotidiana del Tahuantinsuyo, fueron recogidas por el Inca Garcilaso de la Vega en sus *Comentarios reales de los incas* (1609) e *Historia general del Perú* (1617).

Las sublevaciones de los pueblos originarios comenzaron, como se ha visto, con la rebeldía de Manco Cápac II y su refugio en la fortaleza situada en la región montañosa de Vilcabamba. Desde ese bastión, tres incas, Sayri Túpac, Titu Cusi Yupanqui y Túpac Amaru, sostuvieron la resistencia a los españoles hasta 1572, fecha en que el último gobernante del Tahuantinsuyo fue ejecutado en el Cuzco durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo. Con la muerte del primer Túpac Amaru terminó la sucesión de gobernantes incas de Vilcabamba, aunque algunos de sus inexpugnables sitios, como Machu Picchu, oculto en las gélidas cumbres de la sierra andina, permanecerían fuera del alcance de los españoles durante toda la época colonial.

Los tesoros encontrados en México y Perú, junto a poblaciones mucho más avanzadas que las existentes en las Antillas, inauguraron la denominada «época próspera» de la conquista. Al toparse con estas grandes civilizaciones, los europeos se sintieron cautivados por sus riquezas, el mayor desarrollo de sus habitantes y la perfección de las construcciones en piedra.

La búsqueda de metales preciosos se convirtió, a partir de la conquista de México, en el motor impulsor de la colonización española, por lo que la estructuración de los nuevos dominios en las Indias tendría como eje la explotación de sus reservas de oro y plata. El traslado de estas riquezas hacia España –sobre todo oro, que predominó en las exportaciones hasta 1530–, y de allí al resto de Europa, procedente de las grandes culturas conquistadas en Mesoamérica, fue continuado por la plata extraída de las minas existentes en el área andina.

Dominación española de los «territorios marginales»

Las operaciones de conquista posteriores a 1535 se dirigieron, en lo fundamental, a asegurarle a España la posesión de los territorios que le pertenecían en el Nuevo Mundo, según lo estipulado por el Tratado de Tordesillas, lo mismo que haría Portugal desde 1532 con la región que llevaría el nombre de Brasil. También fue el resultado del desvío hacia regiones vecinas a México y Perú de las insaciables nuevas oleadas de aventureros o de conquistadores que habían quedado insatisfechos o marginados de los beneficios obtenidos en empresas anteriores. En otros casos se trataba de asegurarle a la corona el control de regiones amenazadas por las potencias europeas rivales.

Con ese fin, y también con el propósito de zanjar disputas entre los conquistadores, Carlos V firmó en Toledo (mayo de 1534) varias capitulaciones que completaron la división del continente sudamericano en inmensas fajas territoriales extendidas de oeste a este y paralelas al Ecuador. Con ellas la América del Sur quedaba originalmente repartida así: Nueva Granada (entregada a Pedro Fernández de Lugo), Nueva Castilla (otorgada a Pizarro), Nueva Toledo (para Almagro), Nueva Andalucía (concedida a Pedro de Mendoza), y Nuevo León –en la Patagonia, para S. de Alcazaba, quien nunca la ocupó. Aunque hay que advertir que la iniciativa colonizadora procedió en muchas ocasiones de los propios centros ya conquistados en Hispanoamérica.

A esta fase corresponde la ocupación española de toda el área norandina y, como colofón, el casual encuentro de tres expediciones en Bogotá; el completo dominio de la meseta altoperuana y del Chile central. La segunda fundación de Buenos Aires (1580) por los descendientes mestizos de los primeros conquistadores del Río de la Plata, marca aproximadamente el fin de esta fase.

La conquista española de la tierra austral estuvo muy ligada a la del Perú y, como se ha dicho, comenzó en julio de 1535 cuando Diego de Almagro, obligado por Pizarro, tuvo que emprender la travesía a la región sureña. Junto con sus hombres cruzó los Andes

y, tras incontables calamidades, arribó a los primeros valles de Chile. Desilusionado con la pobreza de sus posesiones, emprendió el regreso por el desierto de Atacama.

Muerto Almagro y derrotados sus partidarios, apodados «los de Chile», fue el propio Pizarro quien encomendó esta tarea a su subordinado Pedro de Valdivia. Este conquistador, que ya conocía la ruta pues había acompañado a Almagro, se puso en marcha con unos 150 hombres en los primeros meses de 1540 siguiendo la misma vía de Atacama. En el valle del Mapocho, Valdivia fundó el 12 de febrero de 1541, como parte del territorio denominado Nueva Extremadura, la villa de Santiago de Chile, en la que cuatro meses después se proclamó gobernador.

Sin embargo, la nueva colonia no había nacido en un lecho de rosas. A fines de 1541 se produjo una gran ofensiva indígena encabezada por el mapuche Michimalonco. La recién organizada villa de Santiago fue destruida, pero los españoles lograron hacer retroceder a los araucanos.

La precaria situación de los conquistadores de Chile y la hostilidad de la población aborigen, obligó a los primeros colonos a trabajar la tierra para poder sobrevivir. Nuevos refuerzos españoles permitieron hacer avanzar hacia el sur el territorio conquistado con la fundación de la villa de Concepción (1550), ubicada junto a la desembocadura del Bío-bío. Ello hizo más intensa la resistencia de los pueblos originarios, amenazados con ser expulsados de sus tierras, aniquilados o esclavizados.

En un movimiento defensivo, varias tribus se unieron y reconocieron como jefe a un valeroso guerrero mapuche llamado Caupolicán. A este se sumó Lautaro, un araucano que había vivido entre los españoles y conocía muy bien sus tácticas militares. En enero de 1554, Lautaro infligió una importante derrota a la hueste conquistadora en Tucapel, batalla que perdió al propio Valdivia, su jefe máximo, muerto empalado.

La tenaz resistencia de los pueblos originarios se prolongó algunos años más, pero la traición hizo caer, en abril de 1557, a Lautaro, y en febrero de 1558, a Caupolicán, cuyas heroicidades sirvieron de tema al poema épico *La Araucana* (1569-1592), compuesto en

el propio lugar de los hechos por el conquistador español Alonso de Ercilla. Así pudo avanzar un nuevo trecho la inestable frontera colonial.

A pesar de estos reveses, los intrépidos araucanos se concentraron al sur del río Maule, desde donde defendieron su independencia durante largo tiempo, favorecidos por la utilización de caballos y el dominio del arcabuz. La resistencia mapuche continuó sin descanso y una sublevación generalizada de los pueblos originarios amenazó la presencia española en Chile a finales del siglo XVI, en la que perdió la vida el propio gobernador Martín García Oñez de Loyola en la batalla de Curalava (1599). En 1665 la corona española se vio obligada a dejarlos en paz definitivamente y en 1773 a reconocer la autonomía de la Araucania.

La lenta marcha de los conquistadores en tierra araucana estuvo compensada por los progresos de la colonización en el Alto Perú y el actual noroeste argentino, incentivada por la ansiosa búsqueda de yacimientos mineros y su puesta en explotación. Ello dio lugar a la aparición de las villas de Chuquisaca (1538), Potosí (1545), La Paz (1548), Cochabamba (1570), Santa Cruz (1595) y Oruro (1604).

De Perú y Chile salieron expediciones españolas hacia Tucmá (Tucumán), con el objetivo de buscar fuerza de trabajo para la minería andina. Hacia 1565, la poblada región tucumana, que había pertenecido al imperio incaico, quedó bajo el control del conquistador Diego de Rojas, quien la anexó al Virreinato del Perú, fundado en 1543.

Un proceso parecido llevó al surgimiento de las provincias de Salta (1582), La Rioja (1591) y Jujuy (1593). En cambio, la región de Cuyo-Mendoza, al pie de la vertiente oriental de la cordillera de los Andes, fue colonizada en 1561 por partidas españolas procedentes de Chile, lo mismo que ocurrió con Córdoba (1573), por lo que estos territorios quedaron dependientes de las autoridades establecidas en Santiago.

A la par avanzaba la conquista y colonización española en otras partes de América del Sur. Después de creada Santa Marta por Rodrigo de Bastidas en 1525, Pedro de Heredia, que ya tenía en su aval la fundación de Cartagena de Indias (1533), fue designado

gobernador de la región ubicada entre el río Magdalena y el golfo de Darién. Como parte de sus campañas para dominar esa área, se encontró al sur con el valle del río Sinú o Cenú, rico territorio densamente poblado por indios de lengua chibcha que habían desarrollado la mejor orfebrería del continente.

En sus santuarios, Heredia se apoderó de esmeraldas y objetos de oro que proporcionaron a los españoles el mayor botín de toda la conquista de América, procedente de lo que sería la zona aurífera más valiosa del imperio colonial español (Antioquia, Chocó y Popayán). Fue precisamente en busca del origen del oro acumulado por los indígenas sinúes que Francisco César, de las huestes de Heredia, exploró por primera vez las montañas de Antioquia, transitadas después por Juan Vadillo, quien llegó hasta el valle del río Cauca (1538).

La noticia de estas riquezas, junto a la leyenda indígena de *El Dorado* –referida a un jefe indígena que se espolvoreaba oro en medio de una laguna y hacía ofrendas con piedras preciosas a sus dioses–, despertó la codicia de otros conquistadores. Varias expediciones se sucedieron con ese objetivo. Una de ellas fue el destacamento conquistador capitaneado por Gonzalo Jiménez de Quesada –segundo jefe de la nutrida expedición llegada de España a Nueva Granada en 1536–, que procedente de la costa de Santa Marta irrumpió en la capital del *Zipa* (Bogotá) en abril de 1537, después de recorrer buena parte del territorio muisca.

De las cinco confederaciones muiscas conocidas a la llegada de los españoles, que agrupaban a medio centenar de tribus, la más extensa era la de Bacatá o Bogotá, ubicada en gran parte de la meseta de Cundinamarca, gobernada por el *zipa*. Colindante con ella, se encontraba la confederación de Hunza o Tunja, establecida en zonas más frías al norte de Cundinamarca y que era dirigida por el *zaque*. Las otras confederaciones eran las de Tundaza, la de Sogamoso o Sugamuxi y la de los guanes.

La conquista de los estadillos chibchas del altiplano estuvo acompañada de grandes crueldades y, como en otras partes del continente, favorecida por las pugnas entre sus gobernantes, el *Iraca* de Sugamuxi, el *Zaque* de Tunja y el *Zipa* de Bacatá, aunque este

último, nombrado Tisquesusha, murió en combate con los invasores. Cuando Quesada ya había sometido los señoríos de Bogotá, Tunja, Sogamoso y Duitama se encontró con la llegada a esos territorios de otras dos expediciones conquistadoras atraídas también por la leyenda de *El Dorado*.

Una estaba al mando de Sebastián de Benalcázar, quien no conforme con la toma de Quito (1534) había continuado después rumbo norte con un centenar de acompañantes, fundando a su paso Cali (1536), Popayán (1537) y Pasto (1539), hasta llegar al centro de la civilización chibcha en el altiplano de Bogotá (1538). La otra expedición conquistadora que irrumpió por sorpresa en Bogotá era dirigida por el alemán Nicolás de Federman, quien procedía de la costa venezolana (Coro) con casi la misma cantidad de hombres que Quesada y Benalcázar.

En los alrededores de la actual ciudad de Bogotá –fundada oficialmente el 6 de agosto de 1538– tuvo lugar el triple encuentro fortuito que obligó a un compromiso entre las tres expediciones. Al año siguiente, el conquistador Gonzalo Suárez Rendón creó Tunja, regiones que recibieron el nombre de Nuevo Reino de Granada y fueron puestas bajo la jurisdicción de la gobernación de Santa Marta.

A la decadencia de las poblaciones costeras neogranadina no solo contribuyó el atractivo de las riquezas del altiplano y el mayor desarrollo de sus poblaciones aborígenes, sino también el temor por los continuos ataques de piratas, como los realizados contra Santa Marta (1542, 1596) y Cartagena (1543, 1569, 1586 y 1596). Hacia mediados del siglo XVI, el llamado Nuevo Reino de Granada estaba dividido en tres gobernaciones: Santa Marta, Cartagena y Popayán, situación que se mantuvo hasta que en 1571 se fundó la de Antioquia y buena parte de la administración de Popayán fue adscripta a Quito.

Desde 1564 la corona había creado el cargo de presidente de la Real Audiencia, con funciones civiles y militares de gobernador y capitán general, con facultades independientes al virrey de Perú, aun cuando formalmente siguiera dependiendo del Virreinato de Lima. La capital de la presidencia fue establecida en Santa Fe de Bogotá, con jurisdicción sobre las gobernaciones de Cartagena, Santa Marta, el Nuevo Reino de Granada y Panamá, así como Antioquia y una

parte de Venezuela, mientras la gobernación de Popayán siguió adscrita a la presidencia de Quito.

A partir de 1605, la corona decidió nombrar presidentes militares, que siguieron encabezando la Real Audiencia de Bogotá con el título de capitanes generales del Nuevo Reino de Granada. Durante el período de gobierno de los presidentes militares se revitalizaron las campañas contra las poblaciones indígenas, particularmente los caribes, se organizó la Casa de la Moneda en Santa Fe y se creó el tribunal de la Inquisición en Cartagena, mientras surgían nuevas poblaciones (Socorro, Girón, Bucaramanga, Quibdo y Barranquilla) y los jesuitas establecían sus misiones en los Llanos Orientales.

En el caso de Venezuela, el proceso colonizador había quedado inicialmente en manos alemanas, lo que explica la aparición en 1538, en Bogotá, de la expedición de Federman, quien había salido dos años antes de la factoría levantada en el litoral venezolano (Coro), cerca del sitio donde ya había estado el español Juan de Ampíes en 1527. La precaria colonización de este territorio había estado en manos del suizo Ambrosius Ehinger a nombre de los Welser (1529), banqueros acreedores de Carlos V.

Bajo la dirección de alemanes como Horge Horhemut o Felipe von Hutten, que desesperadamente buscaban riquezas y productos que extraer de la agreste costa venezolana, fueron exploradas diferentes zonas, entre ellas Maracaibo, Cumaná y los llanos del Apure y Casanare. En definitiva, Carlos V les suprimió la concesión en 1546 tras los fallidos intentos alemanes de organizar en Venezuela un sistema de factorías siguiendo el modelo portugués.

A partir de entonces la conquista del territorio venezolano quedó en manos de los propios españoles que crearon El Tocuyo (1545), Barquisimeto (1552) y Valencia (1553). En 1560, Francisco Fajardo impulsó las incursiones a las tierras de los pueblos caracas, donde le hicieron enconada resistencia los jefes indígenas Paramaconi y Guaicaipuro.

Casi al mismo tiempo de la muerte en combate de este último caudillo, cacique de los teques, y sin cesar las luchas con los pueblos originarios, Diego de Losada fundó la ciudad de Santiago de León de Caracas, el 25 de julio de 1567. A este sitio más al interior, y con un

clima benévolo, fue trasladada en 1578 la capital de Venezuela, hasta entonces ubicada indistintamente en Coro, Barquisimeto y El Tocuyo.

En 1569 Diego de Serpa creó Cumaná, donde ya habían fracasado intentos colonizadores anteriores –incluido el de los franciscanos (1514)–, que se convertiría en la capital del oriente venezolano (Nueva Andalucía). En la década del ochenta del siglo XVI, después de surgida la villa costera de La Guaira, como una especie de puerto de la capital venezolana, una extendida epidemia de viruela diezmó la población indígena en los valles cercanos a Caracas, debilitando su oposición a la conquista, luchas en la que también sobresalieron otros caciques como Tamanaco, Chacao y Naiguatá.

Uno de los más impresionantes acontecimientos de la etapa final de la conquista española de América fue la epopeya de Francisco de Orellana, quien recorrió de oeste a este, junto a medio centenar de españoles, todo el río Amazonas, desde el Napo hasta su desembocadura (1541 y 1542). La expedición se originó para auxiliar a la guiada por Gonzalo Pizarro (1539), quien buscaba un supuesto territorio poblado de árboles de la canela y otras especies. En su travesía, los hombres que seguían a Orellana dieron aquel nombre a la caudalosa arteria porque creyeron ver mujeres altas y valerosas armadas con arcos, las supuestas «amazonas».

El avance europeo por el extenso río se había iniciado en 1531 cuando Diego de Ordaz lo intentó navegar aguas arriba, pero una tormenta lo obligó a regresar por el Orinoco, conociendo accidentalmente la articulación interior de estas grandes arterias sudamericanas y la región de la Guayana. La cuenca del Amazonas fue también el escenario de la frustrada expedición de Pedro de Ursúa en 1560, quien fue asesinado por su misma gente, capitaneada por su segundo Lope de Aguirre.

Bajo el mando de este orate de origen vasco, sus cómplices llegaron hasta la desembocadura del Orinoco, rompieron con la corona española y pretendieron apoderarse de Nueva Granada. Apresado Aguirre al pasar por territorio venezolano, fue decapitado en El Tocuyo.

El establecimiento de los españoles en la zona del Río de la Plata tuvo otras características. Atraídos por los fabulosos relatos

del portugués Alejo García, sobreviviente de la trágica expedición de Solís (1516) –quien desde la costa brasileña atravesó el Chaco y llegó hasta los Andes, donde al parecer comprobó la existencia de la Sierra de la Plata (Potosí) y el lago donde según la leyenda indígena dormía el Sol (Titicaca)–, Sebastián Caboto y Diego García de Moguer alcanzaron el bajo Paraná y Paraguay, en 1527 y 1529, respectivamente. Pero no fue hasta 1535 que la corona organizó una gran expedición con el propósito de tomar posesión de aquel territorio, amenazado por la expansión portuguesa, pues ya en 1531 Martín Alonso de Souza había llegado muy cerca de las costas rioplatenses.

Esa fue la razón de los abundantes recursos puestos a disposición del cortesano Pedro de Mendoza, quien acompañado por 1,500 colonos fundó en la desembocadura del Río de la Plata la villa de Buenos Aires, capital del llamado Reino de Nueva Andalucía, el 3 de febrero de 1536, abandonada en 1542 por sus primeros moradores ante la hostilidad de los pueblos originarios. Los sobrevivientes se refugiaron en Paraguay, cuya capital (Asunción) fue creada por Juan de Salazar en 1537.

Los recién llegados, encabezados por los españoles Juan de Ayolas y Domingo Martínez de Irala, consideraron a Paraguay «el agro del mundo», debido a la abundancia de productos agrícolas cultivados por las tribus guaraníes sojuzgadas por ellos, tras vencer la resistencia de los jefes aborígenes Ñande Ru, Guazú Ruvichá y Lambaré. A diferencia de los guaraníes, que por su mayor desarrollo relativo estaban en mejores condiciones para ser explotados por los españoles, los indígenas de los alrededores de Buenos Aires eran poco numerosos y de hábitos cazadores-recolectores, por tanto, sin producción agrícola que los invasores pudieran apropiarse.

En esas circunstancias, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, quien había cobrado fama por sus andanzas por América del Norte, tras su naufragio en aquellas costas, fue nombrado gobernador de la tierra guaraní. Para llegar a Asunción en 1542, desembarcó en la actual costa brasileña y recorrió zonas selváticas hasta tropezar casualmente con las asombrosas cataratas de Iguazú, desconocidas hasta entonces por los europeos. Pero Cabeza de Vaca, rechazado por los

conquistadores españoles establecidos en Paraguay, fue obligado a regresar a España.

A principios de los años setenta, los descendientes mestizos de los primeros conquistadores del Paraguay y regiones colindantes, comandados por Juan de Garay, iniciaron el descenso hacia la desembocadura del Plata, con el objetivo de abrir la comunicación de la floreciente colonia con el Atlántico. En su avance colonizador los 9 españoles y 75 «mancebos de la tierra» –léase criollos– iniciaron este proceso con la creación de Santa Fe (1573), continuado después por el establecimiento de Bermejo (1585), Corrientes (1588) y coronado luego con la segunda fundación de Buenos Aires (11 de junio de 1580), acontecimiento que señala formalmente el fin de la conquista española de América.

La terminación simbólica de este proceso con el restablecimiento de la estratégica villa porteña no quiere decir en modo alguno que la colonización española en tierras americanas no siguiera avanzando en el control de nuevos territorios y poblaciones autóctonas y tampoco que se acabara la resistencia indígena, que se mantuvo latente durante toda la época colonial. Además, comenzaron a producirse desde muy temprano movimientos de protesta de las nuevas poblaciones hispanoamericanas que iban surgiendo, como ocurrió con la llamada rebelión de las alcabalas de Quito, que estalló entre 1592 y 1593, motivada por la aplicación de este impuesto que afectaba al comercio local.

A esa altura, existían en América dos virreinatos: Nueva España y Nueva Castilla. El primero quedó estructurado en cuatro audiencias: La Española, México, Nueva Galicia y Guatemala –llamada inicialmente de Confines–, así como por grandes extensiones de territorios inexplorados hacia el norte y el este; mientras el peruano se dividía en cinco audiencias: Panamá, Nueva Granada, Quito, Lima y Charcas.

La audiencia de Santo Domingo tenía jurisdicción sobre las islas del Caribe –e incluso durante un tiempo la tuvo también del área neogranadina–, las de México y Nueva Galicia sobre el actual territorio de México y Norteamérica, mientras la de Guatemala abarcaba toda la América Central, excluyendo Panamá, dependencia de la

audiencia del Nuevo Reino de Granada. A esta última correspondía toda el área norandina, a la de Quito el actual Ecuador, a la de Lima el Perú y a la de Charcas el Alto Perú y Tucumán. Chile, que solo durante un breve período tuvo Audiencia, fue durante los primeros tiempos coloniales una gobernación, al igual que Buenos Aires.

La colonización portuguesa de Brasil

En lo que se refiere a Brasil, durante los albores del siglo XVI el territorio americano, asignado a Portugal por el Tratado de Tordesillas, careció de significación para los europeos, hasta que comenzó la explotación en gran escala del palo brasil, que daría nombre definitivo a la colonia. La existencia de esta preciosa madera tintórea originó el primer ciclo exportador de la colonia, que dibujó a Brasil como una estrecha franja costera cubierta de esporádicas factorías francesas y portuguesas.

La creciente presencia de navegantes de Francia –iniciada con la ya mencionada travesía de Paulmier de Gonneville entre 1503 y 1504– en el litoral brasileño, al que denominaron Francia Ecuatorial, indujo a la corona lisboeta a impulsar la colonización, proceso iniciado con el envío de dos expediciones punitivas en 1526 y 1531. La incesante hostilidad franco-portuguesa por el control de Brasil condujo al monarca de Portugal, Joao III, a organizar de una manera sistemática la presencia lusitana en su extensa posesión americana.

Con ese fin dispuso, por la Carta Real de 1532, la división de la «provincia de Santa Cruz», como entonces se denominaba a Brasil, en 15 capitanías hereditarias, destinadas a estimular el poblamiento y a promover la explotación de sus recursos. Las mismas se concebían siguiendo el modelo de los señoríos feudales y se basaban en un sistema medieval de colonización, ya puesto en práctica por los portugueses en las islas Madeira.

Aunque la monarquía lisboeta se reservaba el monopolio del comercio del palo brasil y de las especies, así como la trata de esclavos, era un sistema mercantil menos rígido que el implantado por España en sus colonias.

En la práctica, siete capitanías pudieron ser establecidas y solo cuatro de ellas registraron cierto progreso: Porto Seguro, Ilheos, Sao Vicente y, sobre todo, Pernambuco. En esta última terminaría por configurarse como una dinámica economía de plantación azucarera, caracterizada por la existencia de centros productivos aislados unos de otros y vinculados únicamente con el mercado exterior.

Ante el fracaso del sistema de las capitanías hereditarias, la corona reivindicó en 1548 sus derechos sobre todo el territorio brasileño, iniciándose desde entonces una verdadera administración colonial portuguesa, con un gobernador general al frente, ubicado en Bahía. Este sitio fue escogido como sede de la nueva administración en virtud de que era una de las *donatarias* más grandes, se encontraba justamente en el centro de la línea costera brasileña y su beneficiario original había muerto. Para estrenar el puesto de gobernador general, la corona despachó en 1549 al noble Thomé de Sousa, quien fundó más al norte un nuevo poblado, al que denominó Salvador, ubicado en la bahía de Todos los Santos, que durante más de dos siglos sería la capital de Brasil.

Economía minera y sistema de flotas

La balbuceante economía colonial de las Indias experimentó un vuelco completo con el descubrimiento de ricos yacimientos de plata en los virreinatos de México y Perú, regiones donde se desarrollaron verdaderos emporios mineros entre 1545 y 1605. En México, en 1532 se pusieron en explotación algunas minas –como las auríferas en Xaltepec– y desde 1548 en adelante se desarrolló el primer núcleo minero en Taxco, Zacualpan, Sultepec, Zumpango del Río, Espíritu Santo y Tlalpujahua. A mediados del siglo XVI se formó la segunda gran zona minera por los Reales del Monte, Pachuca y de Atotonilco y el tercero fue el vertebrado en Zacatecas (1547) y Guanajuato (1554).

En 1592 fue abierta la mina de San Luis de Potosí, cuya producción argentífera solo sería superada por la de Zacatecas, la más valiosa hasta 1730. La máxima producción novohispana de toda la

época colonial se alcanzó en 1796. El Bajío, como se denominan a los valles anchos y planos al sur de Guanajuato y que alcanzan a partes de Querétaro y Michoacán, sirvió de punto de apoyo a la actividad minera y terminó convertido en el granero de la Nueva España, gracias a su abundante población autóctona, sobre todo de otomíes y tarascos, y al desarrollo de numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Potosí, por su parte, fue el centro de la minería peruana, virreinato sudamericano donde se explotó primero el menos valioso de Porco en Charcas. El cerro de Potosí fue el mayor yacimiento mundial de mineral argentífero, superando la producción combinada de Zacatecas y Guanajuato, sus grandes competidores novohispanos. Para controlar la producción de la plata, la corona monopolizó la comercialización del azogue de Huancavélica en Perú (1563), lo que permitió prescindir del mercurio español, lejano y más costoso.

La búsqueda y explotación de las minas determinó en gran medida la fundación por los españoles de las primeras villas altoperuanas. La primera de ellas, Charcas –más tarde denominada La Plata, Chuquisaca y hoy Sucre–, surgió para conmemorar el triunfo de la corona sobre la rebelión de Gonzalo Pizarro. Habitada por los indios charcas, fue una zona de tránsito de los conquistadores en los primeros tiempos coloniales, hasta su creación formal en 1538 vinculada a la puesta en explotación de los ricos yacimientos mineros.

En 1559 se organizó, dependiente del Virreinato del Perú, un gobierno colonial para el Alto Perú con el nombre de Real Audiencia de Charcas, cuya jurisdicción abarcaba también el Río de la Plata. De esta manera, las minas se convirtieron en los centros económicos más importantes de la audiencia de Charcas y alrededor de ellas surgieron, como se ha dicho, las principales ciudades coloniales. Un poco más tarde, aparecieron en regiones vecinas actividades agropecuarias complementarias –y centros de producción artesanal–, orientadas al abastecimiento de las activas zonas mineras.

Los yacimientos del cerro de Potosí fueron los más importantes de toda Hispanoamérica en el siglo XVI. Ya en 1572 se creó una Casa de la Moneda en la villa de Potosí, ciudad que en sus momentos de máximo esplendor fue la más poblada de América al sobrepasar los 100 mil habitantes.

Aunque este valioso cerro estuvo en explotación durante toda la época colonial, su decadencia desde el siglo XVII –en 1700 producía solo un tercio de su extracción original– fue suplida por la producción procedente de las minas de Oruro, cuya extracción comenzó en 1606 y sería desde entonces el eje principal de la economía minera altoperuana. Entre las minas de esta región también se encontraban Sicasica (1600), Tupiza (1602), Garcimendoza (1603), Esmoraca (1606), Tatasi (1612), Chocaya (1633), San Antonio de Nuevo Mundo (1648) y San Antonio de Padua (1652).

Las grandes dificultades prácticas y los peligros políticos que significaba privar a los conquistadores y sus descendientes de una participación directa en la explotación minera, más la imposibilidad de que la lejana metrópoli se encargara, a través de sus rudimentarios órganos de gestión económica, del descubrimiento y operación de tantos y tan dispersos yacimientos, la obligó a ceder la posesión de las minas a los particulares, alentando de paso las actividades de los buscones y empresarios privados. La explotación de las minas en manos de particulares se fundamentó mediante arriendo o regalo, con lo cual la corona obtenía una renta segura y sin riesgos.

Durante el siglo XVI, las minas de México y Perú –yacimientos de oro se pusieron en explotación en Carabaya (Perú), Antioquia, Chocó y Popayán (Nueva Granada) y Zaruma (Quito)– se convirtieron en los centros más importantes del imperio colonial español, y alrededor de ellas surgieron algunas de las principales ciudades coloniales. También fueron apareciendo, en las cercanías de los centros mineros, economías agropecuarias complementarias –incluidas diversas artesanías y los obrajes, dedicados a la elaboración de paños, que alcanzaron gran desarrollo en Puebla (México) y Quito, Cajamarca y Cuzco (Perú)–, orientadas al abastecimiento de las poblaciones vinculadas a la actividad minera.

Para controlar y asegurar el flujo de estas riquezas hacia la metrópoli, la corona estableció desde muy temprano la ya mencionada Casa de Contratación de Sevilla y a partir de 1542 el Consejo de Indias; la decisión de esta última institución poseía el carácter de ley. Esta ciudad-puerto andaluz devino centro exclusivo del comercio con las colonias, aunque más tarde se incluyó también a Cádiz. A

partir de 1561 se implantó, además, el sistema obligatorio de flotas, para proteger los envíos de las depredaciones de piratas y corsarios. Este sistema funcionaba dos veces al año, entre los puertos autorizados en España y sus colonias.

La llamada flota de Nueva España salía en mayo de Sevilla –desde 1717 de Cádiz– hacia el puerto de Veracruz. Después de penetrar en el mar Caribe, una parte continuaba hacia Honduras y las grandes Antillas, mientras el contingente más importante seguía hacia Veracruz, desde donde muchas mercancías iban por tierra para abastecer todo el virreinato y llegar hasta Filipinas a través de Acapulco.

Los barcos regresaban cargados de las exportaciones novohispanas y de productos asiáticos. Las últimas flotas llegaron a Veracruz en 1776. La riqueza de los puertos de Acapulco y Veracruz los hizo centro de atracción de piratas y corsarios, que los ocuparon en 1623 y 1683, respectivamente, lo que determinó la construcción de fortalezas.

La otra flota, denominada de Tierra Firme, partía normalmente en julio o agosto rumbo a la costa norte de América del Sur y dejaba mercancías en Santa Marta, Cartagena y Portobelo, sitio desde donde se transportaban por tierra a Panamá para su reembarque hacia el Virreinato de Perú. Los barcos regresaban a la metrópoli cargados de las riquezas de la América del Sur y con el oro de Cartagena. Tanto en Xalapa (Nueva España) como en Portobelo (Panamá) se desarrollaban importantes ferias.

Ambas flotas pasaban el invierno en las Indias y regresaban a Europa tras hacer escala en La Habana, donde se efectuaban las reparaciones, el carenado y aprovisionamiento de las naves, que debían retornar juntas a comienzos del verano. La Habana, fundada en su actual ubicación en 1519, además de su posición estratégica –favorecida por las corrientes marinas y los ritmos cíclicos de los vientos del Atlántico– ofrecía a los navíos una segura y espaciosa bahía.

Eso explica que en poco tiempo Santo Domingo dejara de ser la escala más frecuentada de las embarcaciones españolas en sus viajes al continente y entrara en rápida decadencia. La sustitución se confirmó definitivamente en 1561 al instaurarse el sistema de flotas: desde entonces La Habana comenzó a ser conocida como *La llave del Nuevo Mundo* o *Antemural de las Indias Occidentales*.

Para sostener estas rutas marítimas se desarrollaron grandes astilleros en La Habana, Panamá, Cartagena de Indias y Guayaquil. Ello contribuyó al crecimiento de estas ciudades casi tanto como las capitales virreinales de México y Lima, así como las villas de Chuquisaca –gracias a ser el centro minero del sur– y Acapulco, por su condición de puerto de entrada de los géneros orientales.

Hasta fines del siglo XVII, el comercio entre España y sus colonias americanas estuvo reducido a la exportación de metales preciosos y a la importación de alimentos y bebidas peninsulares y de manufacturas, pues la demanda de los restantes bienes se resolvía a través del incesante contrabando o del comercio local. También se reguló la entrada de esclavos en las Indias mediante los llamados asientos, contratos acordados con comerciantes privados, en su mayoría extranjeros –portugueses primero, holandeses después y más tarde ingleses– para introducir trabajadores negros sacados a la fuerza de África.

Las encomiendas de indígenas: las «leyes nuevas» de 1542

En las primeras décadas de la conquista, los repartimientos y encomiendas constituyeron una práctica común, desde México hasta el Río de la Plata. A diferencia de las formas abiertamente esclavistas, las encomiendas contenían la obligación formal de «civilizar» y «cristianizar» al indio.

Aunque en los primeros tiempos los conquistadores aprovecharon la fuerza de trabajo de los pueblos originarios sin ningún tipo de regulación legal, el rápido despoblamiento de las Antillas y el temor de la corona al creciente poderío de los encomenderos llevaron a establecer límites a la indiscriminada explotación, entre ellas el cese de la perpetuidad, pues las encomiendas quedaron reducidas a dos vidas, la del primer poseedor y la de su heredero.

Ello está relacionado con la implantación del poderío real en toda su extensión, prácticamente después que Carlos V liquidara los privilegios de los ensoberbecidos encomenderos con las «leyes

nuevas» de 1542. Estas desconocían las exigencias de los colonizadores para que las encomiendas se les concedieran «a perpetuidad» y disponían su reversión a la corona cuando muriese el usufructuario. La derrota de los conquistadores por los funcionarios reales no fue un proceso fácil y en algunos territorios, como el Perú, donde el bienestar de los conquistadores dependía de la indiscriminada explotación de los aborígenes, produjo encarnizados enfrentamientos armados que siguieron a las luchas entre almagristas y pizarristas.

Por esa razón, las llamadas guerras civiles entre conquistadores tuvieron una última etapa en Perú cuando Gonzalo Pizarro, descontento con las «leyes nuevas» de 1542, que limitaban las encomiendas y la indiscriminada explotación de los pueblos originarios, se levantó contra la corona en 1544. Para poner en vigor estas disposiciones fue enviado a Perú Blasco Núñez de Vela, quien debió enfrentar la resistencia de los encomenderos encabezada por Pizarro. Los dos ejércitos se enfrentaron en una llanura al norte de la villa de Quito, donde el virrey fue derrotado y ejecutado (1546).

Su sucesor, el clérigo Pedro de la Gasca, hizo concesiones a los sublevados hasta lograr acumular importantes fuerzas militares, con las que enfrentó a los pizarristas en Jaquijaguana, cerca del Cuzco, a inicios de 1548. Vencidos, los principales implicados en la rebelión fueron ejecutados, incluso el propio Pizarro. Más tarde, en el propio territorio peruano, estalló otro levantamiento liderado por Francisco Hernández Girón en noviembre de 1553, en este caso provocado por declaraciones de los oidores de Lima de que serían suprimidas las encomiendas, el que terminó con la derrota y ejecución del caudillo y sus partidarios (diciembre de 1554).

Otro ejemplo fue la rebelión de los hermanos Hernando y Pedro Contreras en Nicaragua, nietos del famoso conquistador Pedrarias Dávila, que alentados por su madre e incitados por algunos de los encomenderos rebeldes llegados de Perú, se levantaron contra la corona en 1550, sembraron el terror en las villas de la localidad e incluso asesinaron al obispo. A continuación, los sublevados se trasladaron por mar a Panamá, donde fueron finalmente derrotados por

las autoridades, empresa en la que perdieron la vida los principales involucrados, entre ellos los propios Contreras.

En el mismo sentido, puede citarse la llamada conspiración de Martín Cortés, hijo del conquistador de México, abortada en Nueva España en 1564. La historia de este último movimiento de rebeldía de los encomenderos se remonta a la llegada a Nueva España, en 1544, del visitador Francisco Tello de Sandoval, encargado de velar por la ejecución de las «leyes nuevas», que los conquistadores y sus descendientes rechazaron, llegando al extremo de obligar al funcionario de la corona a regresar a la metrópoli.

En 1566 fue descubierta la conjura del marqués del Valle, Martín Cortés, hijo del conquistador de México, y sus hermanos, quien en espera de la llegada del nuevo virrey gobernaba en la colonia, pues el segundo virrey de Nueva España, Luis de Velasco, había muerto en 1564. En derredor de Martín Cortés se reunió la oposición de los encomenderos, que al parecer acariciaron incluso planes de proclamarlo rey de Nueva España.

La audiencia dirigió la represión del movimiento sedicioso. Martín Cortes fue detenido –su medio hermano mestizo, hijo de su padre con la Malintzin, incluso fue torturado– y ejecutados Alonso y Gil González de Ávila, principales gestores de la conspiración. La llegada del nuevo virrey, Gastón de Peralta, tranquilizó la situación.

Las protestas y resistencias surgidas en casi todas las colonias españolas obligaron a la corona a una aplicación parcial de la nueva legislación y la gradual transformación de la encomienda en una institución suministradora de tributos, a diferencia de la encomienda llamada de «servicios». Este virtual compromiso permitió a los conquistadores conservar las encomiendas –que en la práctica se extendieron a varias generaciones–, aunque reduciendo su utilidad como fuente de fuerza de trabajo para la sociedad colonial.

La corona, después de las dificultades por las que había atravesado en la propia metrópoli para someter a los señores feudales, no estaba dispuesta a que se creara en América una nueva y poderosa nobleza, potencial contrincante del poder real. De ahí que tendiera a limitar los vínculos permanentes entre los encomenderos y las poblaciones aborígenes. Por esa misma razón, los títulos nobiliarios

y las tierras en señorío se concedían bajo mucho control y se otorgaban, por lo general, solo a los más conspicuos conquistadores.

Todo ello reafirmó el carácter temporal de las encomiendas y el principio de que, dentro del área ocupada por una población india encomendada, pudieran existir distintas formas de propiedad. No debe olvidarse que las mercedes de tierra siempre se otorgaron separadamente del derecho de encomienda, el cual, en teoría, nunca implicó concesión territorial alguna.

Vale aclarar que la propiedad del suelo era conferida mediante las llamadas cédulas y mercedes reales, aunque en la práctica los cabildos podían entregar tierras baldías o realengas. Las cédulas eran contratos entre la corona y un conquistador, que le permitía a este último distribuir las tierras entre sus compañeros de expedición y la propiedad se adquiría luego de cinco años de residencia, mientras las mercedes eran concedidas a perpetuidad y sin costo.

Desde 1591 la monarquía española también comenzó a vender tierras en subasta para obtener fondos. Además, autorizó la concesión de tierras comunales (los resguardos) a grupos indígenas y a los vecinos de un poblado para extraer leña y llevar su ganado (ejidos), aunque bajo la administración de los cabildos o municipalidades.

Las limitaciones impuestas por la monarquía absoluta al sistema de encomiendas coincidieron en el tiempo con los primeros grandes descubrimientos mineros del siglo XVI, tanto en Perú como en México. Paradójicamente, la principal institución suministradora de trabajadores existente entonces (la encomienda) no podía ser utilizada para satisfacer las necesidades de fuerza de trabajo de la naciente economía colonial basada en la extracción de minerales preciosos.

En esta coyuntura, en los dos virreinatos, autoridades y colonos resucitaron una antigua práctica indígena –*mita* (término que significa turno en aymara y quechua) en Perú; *cuatequil* en México– destinada ahora a proporcionar la mano de obra requerida en las grandes haciendas y las minas. Las condiciones de trabajo extremadamente duras impuestas a los pueblos originarios sometidos a este régimen provocaron la muerte de cientos de miles de *mitayos*.

Para diferenciar el tributo de este sistema de trabajo forzoso, supuestamente «pagado», la legislación española estableció que los

colonizadores no podían tomar trabajadores de entre sus indios encomendados, sino que tenían que solicitarlos a un juez repartidor, encargado de hacer la distribución. Todas estas disposiciones se dirigían a impedir que se constituyese en las colonias una casta de señores feudales con jurisdicción directa sobre la población aborigen.

En consecuencia, los tributos en trabajo y en especie, arrancados a las comunidades indígenas para servir de sostén al estado colonial, debían pagarlo todos sus integrantes adultos. Cada cacique, *curaca* o indio principal estaba encargado de la recaudación, que debía entregar al corregidor, aunque ellos quedaban eximidos del tributo y la *mita*. Además, los descendientes de la vieja clase dominante indígena, tenían otros derechos y privilegios, como el de residir en las ciudades españolas.

Estructura social de la colonia

De esta manera, se fue delimitando en el siglo xvi la estructura social hispanoamericana que descansó, en particular en los territorios de abundante población aborigen, en la relación entre dos comunidades étnicas y culturales –«repúblicas» en el léxico de la época–, constituidas por los conquistadores, encomenderos y colonos españoles, de una parte, y las masas indígenas explotadas –ubicadas en sus comunidades y poblados–, de la otra, cada una con sus propias autoridades bien segregadas. Con el correr del tiempo fueron incluidos en la primera, para la que estaban destinados villas y ciudades, los mestizos, pardos o mulatos y negros libres.

El debilitamiento y las expropiaciones paulatinas sufridas por las comunidades, más la necesidad de los terratenientes, dueños de minas y obrajes, de controlar y estabilizar sus recursos de fuerza de trabajo, sustrayéndoles de los límites y reglamentaciones del ciclo impuesto por las reparticiones periódicas –*mita*, *cuatequil*, *concertaje*, *mandamientos*, etc.–, hicieron que durante el siglo xvii se fuera generalizando la práctica de vincular, de modo permanente, a los trabajadores indígenas, en calidad de peones o *gañanes*, a las haciendas y otras explotaciones coloniales. Las «leyes contra la vagancia» dictadas por las autoridades coloniales, fueron obligando a los indios

y mestizos endeudados a vincularse permanentemente a las haciendas agrícolas o a las estancias ganaderas.

Así nació el peonaje, prácticamente al margen de la legislación colonial española, como una forma de esclavitud o servidumbre por deudas, que se trasmitía de forma hereditaria, a pesar de las ordenanzas que se oponían al endeudamiento legal. En otros lugares, los hacendados propiciaban el minifundio y un peculiar sistema de aparcería –*sayana*, *pejugal*, *inquilinato*, *huasipungo*, fueron entre otros, sus distintos nombres–, el cual implicaba toda una gama de servicios personales gratuitos, llamados *pongaje* o *yanaconaje* en las regiones andinas. Para los campesinos, caer bajo la dependencia del hacendado les cobijaba de tributos, *mitas* y ventas forzosas de los corregidores y les proporcionaba acceso a tierras y ganado.

Todo ello dio lugar en las colonias españolas a un orden social heterogéneo, basado en lo fundamental en la esclavitud y la servidumbre, pues el capitalismo no pudo imprimir su sello a la dominación ibérica de nuestro continente. No obstante, el «descubrimiento», conquista y colonización de América por los europeos era un fenómeno de los albores del capitalismo a escala mundial y estaba propulsado por los intereses de la naciente burguesía comercial de España y Portugal, volcada sobre los pueblos indígenas precolombinos.

La explotación de los yacimientos de oro y plata en el Nuevo Mundo representó uno de los factores fundamentales en la acumulación originaria del capital y en el extraordinario crecimiento de las fuerzas productivas, contribuyendo –en aquellas regiones donde las condiciones internas estaban maduras– al triunfo definitivo de las relaciones de tipo burgués. Aunque el capital comercial desempeñó un papel importante en los inicios de la expansión ultramarina de España y Portugal, ello no le imprimió un carácter capitalista a la colonización, ni condujo a la creación de una red de factorías comerciales –excepto durante un breve período en Brasil: ciclo del palo braza–; tampoco al establecimiento de colonias de campesinos libres, como sucedería en el siglo XVII en Nueva Inglaterra.

De ahí que la irrupción de los españoles, y en parte también de los portugueses, al continente americano se quedara en los límites de un movimiento expansivo del feudalismo tardío, cuya dinámica

socioeconómica estuvo en gran medida determinada por los intereses de la corona y de la pequeña nobleza, principales protagonistas de la conquista y la colonización. Este proceso se tradujo en el exterminio de una parte de la población autóctona, la lenta asimilación de otra y la supervivencia de dispersos grupos marginales. Un extendido mestizaje contribuiría a la lenta homogeneización étnica, mientras la creciente diferenciación clasista y el sistema de castas reforzaban la heterogeneidad social.

Apenas pasadas tres generaciones desde el inicio de la conquista, existían en Hispanoamérica más de 200 establecimientos españoles (villas), con una población que se calcula ascendía a 160 mil habitantes, de los cuales unos 4 mil eran encomenderos y el resto estaba formado por colonos, mineros, traficantes y soldados, que dominaban y explotaban una población indígena estimada en más de 5 millones de personas, que se estructuraba en no menos de 10 mil comunidades.

Evangelización

En los primeros momentos de la conquista y colonización, la evangelización de Hispanoamérica estuvo encabezada por miembros de las órdenes regulares de la Iglesia católica. Los primeros misioneros que llegaron a México, poco después de Cortés, fueron los franciscanos en 1524. Luego arribaron los dominicos (1526) y los agustinos (1533).

A partir de 1534 estas y otras órdenes religiosas se extendieron por el territorio peruano. Ya a mediados del siglo XVI laboraban unos 800 misioneros en el Virreinato de Nueva España y 350 en el del Perú, principalmente frailes. Hacia 1568-1572 comenzó la llegada de los jesuitas.

El proceso de evangelización estuvo orientado por la propia corona española, pues las bulas papales le habían concedido esa prerrogativa en las tierras recién «descubiertas». Por una bula de 1496, el papa Alejandro VI le entregó a los Reyes Católicos, tras la reconquista de Granada, el «patronato», el cual fue extendido en 1508 a las Indias, lo que le otorgó a la corona española el derecho a perpetuidad de organizar la iglesia, dándole un grado de poder eclesiástico sin precedentes.

En un principio los representantes de la Iglesia católica en América se dedicaron al bautismo masivo de los pueblos originarios, convencidos de que ese procedimiento permitiría convertir a los indígenas a la fe religiosa. Los sacerdotes españoles creían que los naturales americanos tenían una real vocación cristiana debido al descrédito sufrido por sus dioses ante los conquistadores.

En las décadas que siguieron a la llegada de los europeos, los indígenas fueron movilizados para levantar conventos e iglesias, en algunos casos construidos en los mismos sitios de los centros ceremoniales prehispánicos, valiéndose incluso de los materiales de las viejas edificaciones precolombinas aunque imbuidos de ciertos elementos barrocos, sobre todo en las fachadas. Al mismo tiempo, los aborígenes eran atraídos a la religión mediante la instrucción en los principios del cristianismo, el uso de la música y la pintura.

Así, por ejemplo, los frailes se valieron del teatro con fines didácticos y de proselitismo, sacando muchos temas de la *Biblia*, aunque adaptados a la mentalidad autóctona. Al mismo tiempo, fue surgiendo un arte que desde muy temprano se diferenció del español en cuanto a formas, técnicas y algunas iconografías, distinguiéndose incluso entre las propias regiones del continente.

Aunque el número de conversiones de los indígenas fue muy grande, los sacerdotes descubrieron pronto que era solo una fe aparente, pues los aborígenes continuaban adorando en secreto a sus ídolos y se resistían a aceptar ciertas normas cristianas que eran incompatibles con sus tradiciones y costumbres. Por eso los pueblos originarios, que veían al cristianismo –cuya influencia limitaban al mundo de los españoles– como una fe ajena impuesta por los conquistadores, solo aceptaron aquellos elementos del catolicismo que se ajustaban a sus propias necesidades espirituales y rituales, los que mezclados con su fe ancestral originaron una apariencia de cristianismo que no era otra cosa que una religión sincrética, con su propia vitalidad.

De esta manera, los aborígenes continuaron aferrándose, después de la conquista, a sus propias creencias y ritos, en particular las que tenían un carácter popular y estaban más desligadas de la antigua clase dominante prehispánica; como sucedió en Perú al desaparecer prácticamente los cultos oficiales al Sol y al Inca, mientras

sobrevivían los vinculados a las *huacas* o dioses locales, que los españoles consideraban manifestaciones de idolatría.

La persistencia de las llamadas idolatrías indígenas llevó a que muchos de los primeros misioneros, consagrados a extirparlas, se interesaran por las civilizaciones prehispánicas. Para facilitar también una eficaz colonización española, esos religiosos se volcaron al estudio de las antiguas culturas americanas, aunque finalmente fueron atrapados por ellas, abriendo su mentalidad a todo el nuevo entorno. De ahí que en muchas de las obras de frailes y sacerdotes del siglo XVI puedan encontrarse datos de diversa índole sobre esas culturas, junto a interesantes informaciones de sus costumbres en los primeros tiempos de la colonia y de las sociedades que se proponían evangelizar.

También estos misioneros iniciaron la recolección de las tradiciones orales prehispánicas, el rescate y traducción de pictografías aborígenes y elaboraron vocabularios y gramáticas de varias lenguas americanas, junto a los primeros textos históricos y etnográficos, que abrieron el camino al conocimiento científico del mundo indígena, sentando las bases para ulteriores investigaciones, tal como hiciera de manera paradigmática Bernardino de Sahagún en su extraordinaria *Historia general de las cosas de Nueva España*.

Mientras que el conquistador y los primeros cronistas de Indias solo se valían para la elaboración de sus trabajos de impresiones personales, o de relatos de segunda mano, algunos misioneros, entre los cuales sobresalieron Motolinia, Torquemada, de Landa, Diego Durán, de la Calancha y Bernabé Cobo –junto a los historiadores jesuitas de las misiones del Paraguay (desde Ruiz de Montoya a José Guevara)–, en cambio, emprendieron una amplia indagación que tuvo en el indio –o el esclavo negro como fue el caso singular del jesuita Alonso de Sandoval en Cartagena– su principal objeto de estudio; aunque con el paso de los años se impuso cada vez más la tendencia a condenar que a intentar comprender.

Un caso singular fue el del oidor Vasco de Quiroga, que dirigió su labor evangélica en Michoacán y Tlaxcala al progreso de los pueblos originarios. La formación humanista de este sacerdote, como la de otros misioneros, llevó a algunos de ellos a tratar también de

proteger al indígena frente a los abusos de conquistadores y encomenderos, por lo que apoyaron una política paternalista.

Aunque abundaron los religiosos que llegaron a justificar las tropelías de los invasores europeos, otros, como el franciscano Jerónimo de Mendieta, por ejemplo, denunciaron la terrible situación de los aborígenes; y algunos, como Antonio de Remesal y, sobre todo, Bartolomé de las Casas, ambos dominicos, condenaron con energía los excesos de la colonización. Inclusive en la famosa controversia doctrinal de mediados del siglo XVI, sostenida por este último en Valladolid con Ginés de Sepúlveda –quien legitimaba la explotación indígena siguiendo una vieja tesis aristotélica–, el cronista dominico no solo ofreció una visión idílica del mundo de los pueblos originarios, sino que también, sin proponérselo, inauguró la leyenda negra de la conquista española de América con su conocido opúsculo *Brevísima relación de la destrucción de las Indias* (1552).

El creciente sincretismo religioso de las colonias españolas y de Brasil fue también resultado del fenómeno del mestizaje, que tuvo entre sus primeras expresiones la aparición de vírgenes propiamente americanas, como la de Guadalupe en México, que según la tradición se le presentó a un pastor indio en 1571. Lo mismo vale para la virgen de Copacabana, venerada cerca del lago Titicaca, la de Santa Rosa de Lima, Nuestra Señora de Guápulo, en Ecuador, o la Caridad del Cobre en Cuba.

A partir de las últimas décadas del siglo XVI la iglesia en Hispanoamérica sufrió una serie de transformaciones. Entre ellas merecen mencionarse la entrega de curatos y doctrinas al creciente clero secular, la progresiva frecuencia con que sus miembros fueron designados para ocupar sedes episcopales –hasta entonces dominadas por frailes–, la reclusión de las órdenes a los conventos o a zonas misioneras en las fronteras del imperio colonial español –California, Texas, Guayana, Cumaná, Los Llanos, Meta-Casanare, Alto Orinoco, Maynas, Charcas, Pampa, Chile y Paraguay, sitio este último donde los jesuitas construyeron un verdadero emporio– y el establecimiento de los tribunales de la Inquisición. A ello hay que añadir la paulatina conversión de la iglesia en la principal propietaria territorial, lo que ya fue un hecho en los siguientes siglos coloniales.

Capítulo 3

APOGEO Y OCASO DEL RÉGIMEN COLONIAL

Entre fines del siglo XVI y el XVIII se ubica el auge y la decadencia del imperio español de ultramar, el primero en la historia de la humanidad que alcanzó dimensiones mundiales. Las bases de su erección descansaban en las enormes riquezas mineras encontradas en América. Entre 1545 y 1546 las ricas minas de plata en Potosí (Perú) y Zacatecas (México) estaban en plena producción y veinte años después todos los yacimientos importantes de la meseta mexicana y la sierra andina eran explotados.

Durante los dos primeros siglos coloniales, esto es el XVI y XVII, las zonas medulares de la economía hispanoamericana coincidieron con los únicos virreinatos existentes, Nueva España (México) y Nueva Castilla (Perú), este último con jurisdicción sobre toda la parte española de América del Sur. La designación de los primeros virreyes, Antonio de Mendoza (1535) y Blasco Núñez de Vela (1543) respectivamente, marcó la puesta en funcionamiento de estas grandes estructuras político-administrativas en que fueron divididas las Indias.

Ambos virreinatos fueron descoyuntados, en los dos primeros siglos coloniales, en 35 gobernaciones provinciales y más de una docena de audiencias. El establecimiento en ellos de sistemas de explotación precapitalistas (*mita*, servidumbre, peonaje, esclavitud), estuvo condicionado por la existencia de fabulosos yacimientos de minerales preciosos, para lo que fue necesario expoliar a la población autóctona y aprovechar buena parte de su organización social.

Consolidación del dominio español en las Indias

Las colonias americanas de España y Portugal, salvo tal vez ciertas áreas periféricas, fueron explotadas desde el principio por los europeos valiéndose de formas precapitalistas de producción. Sus dos primeras expresiones en Hispanoamérica fueron la encomienda, que en casi todas partes se transformó en una institución proveedora de rentas, para luego languidecer, y la *mita*. Este último era un sistema heredado de la América precolombina que obligaba a las comunidades indígenas a entregar una cuota de trabajadores forzados –nominalmente asalariados–, para satisfacer sobre todo los requerimientos de la minería colonial.

Desde el siglo XVII, el peonaje –y la esclavitud de africanos, utilizada en forma masiva en la economía de plantación y en algunas zonas mineras– pasó a ser, junto a la hacienda señorial, el principal basamento de un orden que algunos han denominado feudal-colonial. Con este concepto se pretende definir los cinco sectores básicos de las formas de producción que coexistieron en las colonias hispano-portuguesas: economía natural campesina y comunal, producción mercantil simple, esclavitud (patriarcal y de plantación), producción agraria feudal o semifeudal en forma de latifundios y los núcleos embrionarios de actividades productivas capitalistas.

En los lugares donde los españoles no hallaron yacimientos de minerales preciosos, objetivo cardinal de la conquista, la tierra y la explotación de los indígenas devino el único aliciente de la presencia hispánica. Ese fue el caso, por ejemplo, de la Capitanía General de Guatemala –integrada por las provincias de Chiapas (con Soconusco), Guatemala (que incluía Sonsonete y San Salvador), Honduras, Nicaragua y Costa Rica–, considerada por ello una colonia de segundo orden, donde el principal atractivo para la colonización española radicó en su abundante fuerza de trabajo, susceptible de ser explotada por la corona, los conquistadores y encomenderos mediante servicios y tributos.

Volcadas sobre las costas del Pacífico, el también conocido como Reino de Guatemala se vertebró de espalda a la mayor hostilidad climática del litoral Atlántico, dominado por poblaciones más

atrasadas e insumisas: caribes, zambos y misquitos. En estas condiciones, la colonia española de la América Central se caracterizó por una débil vinculación a los circuitos comerciales coloniales y el aislamiento entre sus provincias

A pesar de los despojos e inhumanos sistemas de explotación implantados por los europeos, muchas comunidades indígenas lograron preservarse –sobre todo después de dictadas las llamadas «leyes nuevas» de 1542–, conservando sus tradiciones y culturas. Así se mantuvo la sociedad aborigen al lado de la española –más tarde también de la criolla y la ladina (mestiza)–, constituyendo una gran reserva de fuerza de trabajo –y de tierras– para una economía colonial fundamentada en la despiadada explotación del indio.

En México y Perú, centros claves de las posesiones españolas en los siglos XVI y XVII, el régimen económico y social fue desde el comienzo de la conquista diferente al de otras áreas entonces consideradas marginales. En estas regiones, como las Antillas, Chile, el Río de la Plata, Venezuela y ciertas zonas de Centroamérica, el bajo nivel de desarrollo de las poblaciones autóctonas, dispersas y escasas por lo general, junto a la ausencia de minerales preciosos, no creaba estímulos para su explotación colonial.

Por eso los virreinatos de Nueva España y Perú fueron los ejes políticos y económicos del imperio colonial español durante los dos primeros siglos coloniales y los más firmes baluartes de un orden feudal-colonial. En la cúspide la sociedad novohispana y peruana pronto se ubicó, al lado de los funcionarios y comerciantes monopolistas peninsulares, una rancia aristocracia de propietarios de minas y terratenientes señoriales, vinculados a mayorazgos y al clero.

El proceso de conformación de una poderosa clase terrateniente señorial fue acelerado hacia fines del siglo XVII gracias a las nuevas reglamentaciones sobre la tierra incluidas en el Código de Indias, que en 1680 recopiló todas las normas jurídicas existentes para Hispanoamérica y que facilitaría también el fomento de plantaciones. Ello fue posible porque la mencionada recopilación de leyes reconoció la posesión de todo título legítimo y permitió formalizar la propiedad de las tierras a los que no tuvieran estos documentos, mediante el pago al fisco de una cantidad de dinero o composición.

También autorizaba el remate de las tierras que se habían adjudicado legalmente y todavía estaban sin trabajar.

Los grandes señoríos territoriales de los españoles y sus descendientes se fueron diferenciando y hacia la primera mitad del siglo XVII existían tres tipos principales de gran propiedad: la estancia, la hacienda y las plantaciones. Primero, aparecieron los hatos y luego las estancias, no solo porque eran formas de tenencia más sencillas y que requerían menores inversiones, sino también debido a que los conquistadores que no tenían en un principio ningún derecho legal a la tierra se dedicaron a la cría de ganado.

Con posterioridad, surgieron las haciendas y plantaciones, verdaderos señoríos que, como pequeños poblados, tenían en su interior desde la casa grande del dueño, capillas o iglesias, edificaciones productivas, almacenes y hasta las chozas de los trabajadores, fueran estos indígenas, mestizos o esclavos africanos. Las haciendas se distinguían por una economía autosuficiente, que solo en forma complementaria comercializaba sus productos en los mercados cercanos.

Otro de sus rasgos distintivos era que la agricultura por regla general descansaba en el trabajo aborigen, bien mediante una especie de mita agrícola temporal, de diferentes vínculos de carácter servil o una combinación de ambos. Por su parte, las plantaciones se dedicaban a la agricultura comercial a gran escala, destinada habitualmente a mercados distantes, que incluían la propia Europa.

Además de las haciendas y plantaciones particulares existieron también grandes propiedades territoriales manejadas por la Iglesia. En el Caribe, ciertas zonas de México, Perú y otras colonias, algunas de estas haciendas o plantaciones, cuyos rasgos a veces podían darse entremezclados, se fueron especializando en uno u otro producto de alta demanda internacional, como la caña de azúcar, la vid, el cacao, la coca y el trigo, que dieron lugar a la proliferación de ingenios, trapiches, molinos y viñedos.

Gracias al auge de estas actividades económicas, poco a poco se fue conformando una especie de élite autóctona o aristocracia colonial, compuesta principalmente por los propietarios de haciendas y plantaciones, además de los dueños de minas y grandes comerciantes. Su creciente participación en los cabildos y en otros cargos

gubernamentales de las colonias les proporcionó cierta influencia en la política local.

El cuadro de la sociedad y la economía colonial de esos siglos (XVI-XVII) se completaba con un sistema jurídico tributario precapitalista y un estratificado conjunto de privilegios y relaciones serviles y de castas. Esta jerárquica diferenciación clasista colonial se puede advertir, por ejemplo, en el esplendor de los palacios virreinales, la proliferación de deportes ecuestres para los exclusivos sectores dominantes, las frecuentes procesiones y actividades intelectuales, estas últimas expresadas en numerosas representaciones teatrales, concursos y obras literarias de las que fueron muestra *El divino Narciso* de sor Juana Inés de la Cruz, o el poema «Grandeza mexicana» (1602), del cura Bernardo de Balbuena, que celebra la elegancia de los vestidos y la gracia de las mujeres del Virreinato de Nueva España.

Por sus riquezas mineras, en lo fundamental plata, México fue la colonia más valiosa de todas las posesiones españolas. Al lado de su economía minera, ubicada al norte y en el valle del Anáhuac, se desarrolló la ganadería a costa de antiguas tierras indígenas, que dio lugar al surgimiento de una poderosa aristocracia enfeudada, enriquecida a costa de la despiadada explotación de las masas indígenas y mestizas. En cambio, en la tierra caliente y otras zonas sureñas novohispanas, la tradicional sociedad aborigen fue menos violentada por los conquistadores y encomenderos y la economía se sustentó en el cultivo del azúcar y la grana (cochinilla), insecto parásito del nopal.

Por su parte, Perú fue también, durante los siglos XVI y XVII, junto a México, la otra piedra angular del imperio colonial español. Gracias a sus ricas minas de plata y la existencia de una abundante población indígena, este virreinato se convirtió para España en una de sus más importantes fuentes de riquezas. Su lujosa capital, Lima, pronto se distinguió por los balcones salientes de sus casas, cerrados con celosías, llamadas «de cajón». Sin embargo, en el siglo XVII este virreinato entró en una fase de declive debido al agotamiento del mineral de más fácil acceso en Potosí, lo que vino acompañado de una mayor dispersión de los centros extractivos hacia el sur de Charcas.

El aislamiento y el relativamente bajo intercambio mercantil de estos primeros siglos coloniales –controlado por un sistema regular

de flotas y un rígido monopolio comercial–, limitó la economía de exportación hispanoamericana básicamente a la minería, que fue la actividad fundamental, junto a algunos otros productos de mucha menor significación: maíz, azúcar, cueros y tabaco. No obstante, en el caso del Virreinato de Nueva España la agricultura y, muy en particular la ganadería, se constituyeron también en importantes renglones de la economía colonial, mientras que en Perú estas últimas actividades productivas solo tuvieron una significación secundaria.

Decadencia del imperio colonial de los Habsburgo

A pesar del auge colonial basado en el oro, y sobre todo en la plata, ya a finales del siglo XVI, después de terminado el reinado de Carlos V (1556) y en las postrimerías del de su hijo Felipe II –murió en 1598–, comenzaron a observarse los primeros síntomas de la decadencia de España. Entre estos pueden mencionarse la insurrección en los Países Bajos (1581), el fracaso de la política española en el Mediterráneo, la derrota de la «Armada Invencible» (1588) y el florecimiento de las incursiones de corsarios y piratas, al estilo de las realizadas por Jacques de Sores, Francis Drake, Henry Morgan, John Hawkins, John Oxeham o Piet Heyn, por solo mencionar a los más famosos.

A esos acontecimientos hay que sumar el surgimiento cada vez más exitoso de la competencia de sus rivales europeos en América (Francia, Holanda e Inglaterra), empeñados en romper el virtual monopolio colonial español, anulando la ventaja inicial conseguida por las monarquías ibéricas. Sin duda a ello contribuyó la incapacidad de España de aprovechar los inagotables recursos de las Indias para su desarrollo económico que, en cambio, terminaron por generar una agricultura estancada, una economía dependiente y un aparato burocrático parasitario.

En el siglo XVII esta tendencia al debilitamiento del imperio colonial hispano durante el reinado de los Habsburgo se agudizó, en correspondencia con el estado de descomposición interna de la propia España, lo que coincidió con el recrudecimiento de la

expansión de otros estados europeos en América y la época dorada de la piratería. Ello obligó a la corona española a levantar un rosario de monumentales fortalezas en los principales puertos hispanoamericanos, sobre todo en La Habana, Veracruz, Puerto Rico, El Callao, Puerto Cabello, Portobelo y Cartagena, según las recomendaciones del ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli.

La hegemonía casi absoluta de España en toda América durante el siglo XVI fue seguida por el aumento de la presencia de sus rivales europeos. La irrupción de Francia, Holanda e Inglaterra en los territorios que la bula papal (1493) había entregado a España y Portugal fue facilitada por la ostensible decadencia del imperio de los Habsburgos en el XVII.

La aparición de franceses, holandeses e ingleses en el continente americano hizo pasar a manos de los enemigos de España no solo buena parte del inmenso territorio de Norteamérica, sino también numerosas islas del Caribe, que servirían de base a un creciente tráfico ilegal (el contrabando), con el consiguiente resquebrajamiento del monopolio comercial español. A lo largo del siglo XVII los establecimientos españoles en las Indias Occidentales sufrieron decenas de ataques de corsarios y piratas, siendo uno de los más significativos la breve ocupación y destrucción de Panamá la Vieja por Henry Morgan en 1671.

Junto al auge de la piratería y el contrabando, que alcanzó su cenit entre 1620 y 1680 –período en que España perdió de forma manifiesta el control de los mares–, comenzó el arrebato a España de muchas de sus posesiones en el Caribe. Las Antillas Menores, consideradas hasta entonces por los conquistadores hispanos como «islas inútiles», se convirtieron en el siglo XVII en refugio de piratas y corsarios franceses, holandeses e ingleses. Después Inglaterra se apoderó de la isla San Cristóbal (1624), Barbados (1625), Nevis, las Leeward, las Virginias y las Bahamas (1628-1646) y, finalmente, Jamaica (1655), mientras los holandeses se establecían en Tobago (1632), Curazao (1634), San Eustaquio (1635) y San Martín (1641).

Los franceses, por su parte, se apropiaron de Martinica, Guadalupe y Dominica (1635), así como de Granada y Santa Cruz (1650), junto a la parte occidental de la isla La Española (Saint

Domingue). A ello hay que sumar algunos otros territorios ocupados por estas tres potencias en las Guyanas, además del establecimiento de los ingleses en dos estratégicas áreas de Centroamérica: Belice y la costa de los Mosquitos. La posesión de estas colonias por las potencias europeas mencionadas se convalidó por la paz de Ryswick en 1697, aunque las islas cambiaron varias veces de dueños como resultado de las permanentes guerras coloniales

La política mercantilista de Holanda, Francia e Inglaterra, como había hecho Portugal en el nordeste brasileño desde fines del siglo XVI, impuso desde los primeros tiempos de la ocupación de las pequeñas islas del Caribe una economía agrícola de exportación de productos de gran demanda como el azúcar, índigo, cacao, café y otros. La masiva utilización de fuerza de trabajo esclava, permitió un crecimiento más acelerado del régimen de plantación del que tendría lugar en Hispanoamérica.

Este proceso se vio favorecido por las condiciones geográficas y climáticas de las Antillas Menores, dado que la distancia entre cualquier punto del Caribe y los puertos de Europa era tres veces menor que el de las posesiones europeas en Asia. Eso explica que en los comienzos de la revolución industrial, las islas caribeñas fueran consideradas como las tierras más valiosas del planeta, pues sus producciones se pagaban a precio de oro –en particular el azúcar– y los costos eran notablemente bajos a causa de la explotación intensiva de la fuerza de trabajo esclava.

Importados de lugares tan distantes unos de otros, como Angola y Senegal, la costa oeste y el área contigua a las montañas intermedias de África, los esclavos negros pertenecían a diversas culturas y hablaban disímiles lenguas, entre ellas mandingo, ibo, congo, etc. La trata de esclavos fue tan brutal que solo al atravesar el Atlántico, durante unas seis semanas, moría al menos uno de cada siete cautivos.

Una vez en América, los africanos eran tratados como bestias y obligados a vivir en barracones sin distinción de lengua, origen o creencia. Muchos esclavos se sublevaban contra sus explotadores o huían de las plantaciones (cimarrones), perseguidos con saña por capataces y rancheadores.

La ocupación holandesa de Pernambuco

En realidad, Portugal fue la primera potencia colonial del viejo continente que había fomentado en América una exitosa economía de plantación, que tuvo su centro en la costa del nordeste (Pernambuco) del Brasil. La riqueza azucarera de este territorio atrajo también el interés de las demás metrópolis europeas y particularmente de Holanda, que se apoderó de esta valiosa parte del suelo brasileño en 1630, aprovechando la favorable coyuntura creada con la momentánea fusión de las casas gobernantes de España y Portugal (1580-1640).

La historia de la dominación holandesa en los ricos territorios de Bahía y Pernambuco se inició cuando los portugueses fueron expulsados de muchas de sus posesiones en Asia y África, a raíz de la unión de las coronas de las dos potencias ibéricas. Esos cambios los propició involuntariamente Felipe II en 1594 al decretar el cierre de los puertos a los holandeses, empujando a los comerciantes de los Países Bajos a acudir sin intermediarios a la fuente de su anterior comercio con los lusitanos, estimulada con la creación en Amsterdam (1621) de la compañía holandesa de las Indias Occidentales.

La existencia de esta empresa mercantil imprimió nuevos bríos a las aventuras holandesas en América, en especial después de reanudada la guerra entre los reinos de la península ibérica y los Países Bajos (1621-1640). Aunque los holandeses fracasaron en los intentos por apoderarse de Bahía (1624), Paraiba (1625), Ceará (1626) y Pará (1629), otra cosa sucedió cuando se lanzaron sobre Pernambuco (1627).

La resistencia portuguesa en el rico nordeste brasileño estuvo encabezada por Matías de Albuquerque quien, a pesar de su tenacidad, no pudo impedir que Olinda y Recife cayeran en manos de los invasores. Pero la lucha no concluyó ahí, pues a escasos kilómetros de ambas ciudades se organizó el levantamiento armado que agrupó a los dueños de ingenios de azúcar y sus esclavos, así como a tribus indígenas de los alrededores. La contienda se prolongó por dos años, hasta que muchos *senhores de engenho* se desanimaron y comenzaron a pactar con el enemigo.

A pesar de que la corona lisboeta terminó convalidando de manera oficial la ocupación holandesa de Pernambuco, los colonos se sublevaron alentados por la separación de los tronos de España y Portugal (1640). La rebelión estalló en junio de 1645 y pronto se extendió por todo el nordeste. Con la ayuda de una flota lusitana, los sublevados lograron imponerse en enero de 1654.

La derrota de los holandeses en Brasil reveló el ascendente poderío de los criollos dueños de ingenios azucareros, organizadores de un vasto movimiento popular armado que prácticamente sin ayuda de la metrópoli expulsó a los ocupantes procedentes de los Países Bajos. La guerra contra los holandeses desarticuló el régimen de trabajo en las plantaciones y facilitó la fuga de miles de esclavos negros de las haciendas azucareras (1630), que buscaron refugio en un enorme palenque, ubicado más al interior del continente.

El *Quilombo* de los Palmares

Los primeros actos de rebeldía de los esclavos negros en Brasil se remontan a los mismos inicios de la dominación colonial portuguesa, o más exactamente, al comenzar la explotación de la fuerza de trabajo africana en las plantaciones de caña de azúcar. Las circunstancias históricas de la época no dejaban otra salida a los oprimidos trabajadores traídos a la fuerza de África que la fuga individual o colectiva de las *fazendas*.

Por lo general, los esclavos que escapaban de las dotaciones se internaban en las selvas, llanuras y montañas, donde eran bien recibidos por los indígenas, que les brindaban tierras y amistad. Al no poder vivir mucho tiempo aislados, los cimarrones organizaban comunidades autónomas, que de hecho se convertían en verdaderos centros de liberación social. Durante el siglo XVI ya existían varios refugios estables de este tipo –llamados palenques o en Brasil *quilombos*, palabra de origen africano que literalmente significa campamento–, ubicados en intrincadas áreas del interior.

Una prueba de la magnitud alcanzada por las frecuentes huidas de esclavos lo constituye el decreto real del 6 de enero de 1574,

mediante el cual la corona lusitana regulaba la devolución de los negros fugitivos a sus antiguos poseedores. Por otro lado, el primer palenque de que se tiene noticias en Brasil estuvo enclavado en la capitanía de Bahía y fue liquidado en 1575 por los efectivos militares movilizados por el gobernador Luiz de Brito y Almeida.

El *quilombo* más importante organizado en el territorio brasileño, durante las cuatro centurias que duró la esclavitud, se conformó en las primeras décadas del siglo XVII, precisamente cuando era implantada la institución esclavista en la región de Alagoas, al sur de Pernambuco. Huyendo de la dura vida de las plantaciones de caña, cientos de trabajadores negros se evadieron hacia una zona de la selva dotada de vegetación exuberante y muchas palmeras, a la que por este motivo denominaron Los Palmares.

De manera convencional ha sido escogido el año 1630 como la fecha de fundación del *Quilombo* de Los Palmares, pues parece que su nacimiento estuvo relacionado con los inicios de la ocupación de los Países Bajos en Pernambuco. La guerra sostenida por los portugueses y sus descendientes contra los holandeses, desarticuló el sistema de explotación vigente en las plantaciones del nordeste.

El relajamiento en la férrea disciplina de los ingenios, unido a la activa participación de los esclavos en la lucha contra los invasores holandeses –arrastrados a la contienda por los *senhores de engenho*–, creó condiciones propicias para las fugas hacia los bosques vírgenes. Refugiados en Los Palmares, los ex esclavos construyeron sus viviendas o *mocambos* agrupándolas en varías aldeas, protegidas por toscas empalizadas de manera.

Siguiendo las costumbres africanas, las principales faenas del *Quilombo* se realizaban en forma colectiva. Esas actividades iban desde el cultivo de la tierra y la caza, hasta el contrabando con las vecinas villas portuguesas, así como los ataques y saqueos a las plantaciones de la costa.

Los gobernantes de las aldeas, elegidas a perpetuidad, gozaban de una autoridad parecida a la de los jefes de tribus de África o los caciques indígenas. En su etapa de mayor esplendor, en la segunda mitad del siglo XVII, el *Quilombo* de Los Palmares llegó a tener cerca

de 10 aldeas fortificadas, regidas cada una por su propio gobierno y con una población total calculada en varios miles de habitantes.

Las agrupaciones de *mocambos* más sobresalientes eran Macaco, Sucupira Zambi, Tabocas, Andalaquituche, Aqualtune, Osenga y Dambrabanga. El poblado de Macaco era algo así como la capital de todo el palenque y estaba enclavado en el lugar donde hoy se levanta la ciudad de Uniao, en la propia sierra de las Barrigas, a orillas del río Mudaú. Macaco era también la residencia de los jefes del *quilombo*, el más famoso de los cuales fue Ganga Zumba.

Una de las primeras expediciones enviadas contra Los Palmares fue preparada durante el mandato del príncipe de Orange en Pernambuco. En esa oportunidad, enero de 1644, el conde de Nassau-Siegen lanzó un gran contingente militar comandado por Rodolfo Baro, quien logró destruir dos aldeas y matar a decenas de esclavos fugitivos. Otro fue el resultado del destacamento punitivo holandés que marchó contra el palenque un año después, ya que solo encontró *mocambos* abandonados por sus moradores, replegados a las áreas más tupidas de la selva.

Terminada la dominación de los Países Bajos en Brasil, los portugueses organizaron su primera expedición en 1667. Para tratar de destruir el *quilombo* se movilizó un numeroso destacamento, puesto a las órdenes del maestre de campo Zenobio Acciol y de Vasconcelos, quien desarrolló una ofensiva equivocada sobre áreas exteriores del palenque, en el que solo encontró algunos *mocambos* vacíos. Tras el fracaso de esta nueva campaña, la iniciativa de la lucha contra el refugio cimarrón pasó a las villas cercanas al *quilombo* en especial Porto Calvo, Alagoas, Serinhaem y Penedo.

Una de las columnas de castigo organizadas por estos poblados atacó el palenque en 1671 y logró establecer combate con las defensas de Los Palmares, pero sin poder entrar en las principales aldeas. La acción causó decenas de muertos entre los esclavos fugitivos y sus familias y fueron capturados cerca de 200 prisioneros. No obstante, esa fue una victoria pírrica, pues se estima que hacia 1674 se habían estrellado contra el *quilombo* más de 25 expediciones militares.

Hacia 1675 los efectivos portugueses pudieron asaltar el pueblo de Macaco e infligir a sus habitantes la primera derrota de

envergadura. Mayor ímpetu cobró la ofensiva contra el *Quilombo* cuando esta quedó bajo la dirección del capitán Fernao Carrillo, quien anteriormente había obtenido gran éxito en la destrucción de palenques en la región de Sergipe. El ataque principal se efectuó el 4 de octubre de 1677 y dejó como resultado extensas áreas de cultivos destruidas y decenas de *mocambos* arrasados, y el propio Ganga Zumba quedó herido en los fieros combates.

Como culminación de la campaña se impuso al *Quilombo* un entendimiento, pactado secretamente con los principales jefes cimarrones. El 18 de junio de 1678 Ganga Zumba se acogió a esa especie de amnistía tramitada por Carrillo y a cambio de ciertas promesas y privilegios se comprometió a entregar Los Palmares a los portugueses.

La lectura de las condiciones de la capitulación provocó una enérgica demostración de repudio por parte de la población libre del *Quilombo*. En pago por su traición, Ganga Zumba fue ajusticiado por sus antiguos seguidores y sustituido por su sobrino Zumbí, quien estaba dispuesto a reconstruir el palenque y a proseguir la lucha.

La guerra se reanudó en toda su crudeza hacia 1679 y se extendió por varios años más, con derrotas y victorias para ambos bandos. Durante el gobierno de Zumbí se efectuaron varios asaltos portugueses al *Quilombo*, que fueron dirigidos por el propio Carrillo, Gonzalo Moreira, Joao de Freitas da Cunha y Domingo Jorge Velho. Ya para entonces el monarca portugués se había visto en la necesidad de crear una tropa especial, entrenada en la lucha contra los baluartes de los esclavos fugitivos, a la que se llamó *capitaes do matto*.

La embestida final del palenque comenzó en 1694, bajo la jefatura de un experimentado paulista que desde 1687 combatía sin descanso contra Los Palmares: Domingo Jorge Velho. Un poderoso ejército de más de 3,000 hombres provenientes de Sao Paulo, Alagaos y Pernambuco, reforzado con varias piezas de artillería, fue lanzado contra el irreductible campamento negro.

En poco tiempo las fuerzas de Domingo Jorge pusieron sitio al poblado de Macaco y envolvieron en un cerco de fuego a sus habitantes. De nada valieron las puntiagudas estacas y los fosos ocultos con que los cimarrones minaron los caminos de acceso al palenque.

Imposibilitados de mantener por más tiempo el ametrallado reducto de la capital, convertido en una verdadera ratonera, los ex esclavos protagonizaron entonces una retirada desesperada el 6 de febrero de 1694. El intento por escapar al asedio resultó un fracaso: al salir del área fortificada de la sierra de las Barrigas eran barridos por las armas enemigas.

El cacique Zumbí logró evadirse con varias heridas en el cuerpo, hasta que en definitiva, el 20 de noviembre de 1695, fue sorprendido por una columna paulista y en el encuentro armado perdió la vida el último de los legendarios jefes del *Quilombo*. Lo poco que quedaba en pie del palenque fue destruido y los pobladores que no habían sucumbido en la lucha fueron devueltos, sin distinción de sexo ni edad, a la esclavitud. Para que sirviera de escarmiento a los demás esclavos, la cabeza de Zumbí fue clavada en la punta de una estaca y exhibida, en macabro espectáculo, por las calles de Recife.

Expansión *bandeirante*

La dominación española sobre Portugal también alentó la expansión sistemática de los colonos, asentados en el litoral de Brasil, hacia el interior. La irrupción de estas expediciones de portugueses y criollos (*bandeirantes*) en un área hasta entonces vedada, tenía como meta la búsqueda de oro, plata, piedras preciosas e indios, estos últimos para venderlos como esclavos en las plantaciones costeras.

Los *bandeirantes* se internaban en las intrincadas selvas y permanecían explorando por meses, hasta encontrar algo de valor que trasladar a los mercados costeros. Desde el principio, las condiciones geográficas y los intereses económicos fijaron las rutas de estas expediciones. Las redes hidrográficas del Paraná, el San Francisco y el Amazonas proporcionaron las vías para el avance de los *bandeirantes* procedentes de Bahía o Sao Paulo.

Los *bandeirantes* también se dedicaron a atacar las misiones jesuitas en busca de guaraníes para vender como esclavos. Durante la primera mitad del XVII estos aventureros no dieron tregua a los jesuitas ni dejaron de realizar sus incursiones, haciendo caso omiso

a las disposiciones oficiales que prohibían las *razzias* por el *sertao*. A fines de este siglo, el codiciado oro, buscado en forma afanosa por conquistadores y *bandeirantes* finalmente apareció en ricos yacimientos en una región que se conocería como Minas Geraes.

La actividad de los *bandeirantes* también facilitó el crecimiento del contrabando con las colonias españolas limítrofes. España hizo todo lo posible por frenar el tráfico clandestino que drenaba una parte de la plata altoperuana. Después de 1640, la lucha arreció entre Portugal y España por el dominio de la estratégica ruta al Perú, lo que condujo a la corona lusitana a ordenar la ocupación de la orilla norte del Plata. De esta manera, en enero de 1680, un capitán general de Rio de Janeiro fundó la Colonia del Sacramento.

Esa plaza no tardó en convertirse en el eje del comercio de contrabando con Hispanoamérica, hasta que en 1680 un destacamento español desalojó a los portugueses, aunque la recuperaron dos años después. El descubrimiento de los yacimientos auríferos de Minas Geraes alteró la posición de Portugal en este asunto y, desde 1693, el comercio ilegal comenzó a ser seriamente perseguido en virtud de la acción conjunta de ambos reinos ibéricos.

Guerras coloniales

La llegada de los Borbones al trono español a comienzos del siglo XVIII no constituyó un simple cambio dinástico, sino estuvo acompañado de una sensible modificación de la correlación internacional de fuerzas. El acercamiento de las casas reinantes de Francia y España y el vertiginoso crecimiento del poderío marítimo inglés, repercutieron de inmediato en el mundo colonial.

Las guerras por el dominio del comercio hicieron de las posesiones españolas el eje de las disputas franco-británicas. Uno de los motivos de esas luchas era el control del suministro de esclavos y de otras mercancías en los territorios coloniales.

En la Guerra de Sucesión Española (1701-1714) participaron las llamadas potencias marítimas: Inglaterra y su aliada Holanda, los Habsburgos austríacos, Portugal y Francia. El triunfo del candidato

francés al trono de Madrid, Felipe V, hizo nacer la *entente* franco-española y permitió a los comerciantes galos apoderarse del asiento negrero (1701) y del derecho a abastecer los puertos del Pacífico de la América del Sur.

Los ingleses se opusieron con energía a estos acuerdos. Entre 1702 y 1704, atacaron a La Florida, Puerto Rico y el Darién. Más adelante dirigieron sus incursiones contra Cuba (1707), Venezuela (1708), Guayaquil (1709) y la ruta de los galeones que unía el puerto de Acapulco con Manila (Filipinas).

Al margen de sus consecuencias para Europa, los éxitos militares de Inglaterra costaron a Francia algunas de sus posesiones en América del Norte. Por su parte, España también tuvo que ceder a Londres, por la paz de Utrecht (1713), el codiciado privilegio de introducir negros esclavos en sus colonias americanas.

Los ingleses se valieron de este permiso para impulsar el comercio de contrabando en las posesiones españolas, lo que trajo aparejado prohibiciones e incidentes entre las dos naciones. Estos desembocaron en la célebre Guerra de la Oreja de Jenkins (1739-1742), que permitió a España cancelar las concesiones anteriores.

La entrada de España en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), como aliada de la monarquía francesa en cumplimiento del «pacto de familia» entre los Borbones, motivó la ocupación inglesa de La Habana y Manila (1762-1763). Al final, España perdió a La Florida occidental y tuvo que permitir la presencia de los contrabandistas británicos en las costas de Honduras (Belice). Como compensación, en el Tratado de París (1763) España recibió de Francia la orilla derecha del Mississipi (Luisiana).

Detrás de los conflictos hispano-portugueses del siglo XVIII también se ocultaba Inglaterra. Portugal, totalmente dependiente de Gran Bretaña en virtud del Tratado de Methuen (1703), renovó sus aspiraciones de monopolizar el floreciente comercio de cueros en el Río de la Plata, con base en su flamante Colonia del Sacramento. La fundación por los españoles de Montevideo (1726) inició un pulse de fuerzas que estuvo a punto de llegar a un conflicto de mayor envergadura.

Para zanjar sus diferencias, españoles y portugueses firmaron en 1750 el Tratado de Madrid, que entregaba a los lusitanos extensos

territorios en las cuencas del Amazonas y el Paraná a cambio de la Colonia del Sacramento. Como esta decisión afectaba el destino de las siete misiones jesuitas de Ibicuy, los religiosos de la orden se opusieron propiciando la rebelión de los guaraníes (1753-1756), finalmente sometida por una expedición conjunta de ambas coronas ibéricas.

No obstante estos acuerdos, las disputas hispano-portuguesas por el control de la desembocadura del Río de la Plata se prolongaron. Carlos III se vio obligado entonces, el 12 de febrero de 1761, a denunciar el Tratado de Madrid. En 1771 la ocupación inglesa de las islas Malvinas, en poder de España, complicó todavía más este cuadro.

Reconquistadas estas posesiones, junto a la expulsión de los portugueses de la Colonia del Sacramento, el Tratado de San Idelfonso (1777) confirmó la soberanía española sobre la Banda Oriental del río Uruguay y le devolvió el área ocupada por las antiguas misiones de los jesuitas. El Tratado del Pardo (1776) completó aquellos ajustes.

Reformas borbónicas

La crisis en que se debatía el régimen español, tanto en la metrópoli como en sus colonias, comenzó a ser enfrentada por la dinastía de los Borbones en el siglo XVIII, en particular con el ascenso de Carlos III al trono, quien gobernó de 1756 a 1788. La nueva política colonial elaborada por los más relevantes ministros de Carlos III (Aranda, Campomanes, Floridablanca) se inspiraba en los principios mercantilistas del modelo francés, que consideraba a las colonias fuente de materias primas y mercado privilegiado de productos manufacturados metropolitanos.

En las reformas borbónicas pueden incluirse la supresión del sistema de flotas (1748), la creación de compañías de comercio –la de Caracas (Guipuzcoana), que operó entre 1728 y 1775, fue la más exitosa–, el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, la apertura de puertos al comercio y una amplia reforma administrativa.

Esta última se inició con la aparición de la Secretaría de Indias (1718), que fue sustituyendo al anticuado Consejo de Indias; también incluía la creación de nuevos virreinatos y capitanías, aunque la más original de las instituciones emergentes fue la intendencia que, más allá de sus funciones fiscales, asumió prerrogativas antes ejercidas por virreyes y oidores.

Las intendencias, creadas en Cuba (1764), Caracas (1776), Río de la Plata (1782), Perú (1784), México, Guatemala y Chile (1786), limitaron las autonomías locales y regionales, centralizaron el poder en manos de funcionarios (intendentes) de diversos niveles, que respondían directamente a la corona. Solo en Nueva Granada, sacudida por la rebelión de los comuneros, estas instituciones no llegaron a formalizarse.

Además, durante el reinado de Carlos III también las reformas borbónicas se encaminaron a un mayor control de las audiencias por parte de los funcionarios españoles. En estas instituciones, los enviados peninsulares fueron desplazando a los criollos, limitando la virtual autonomía que hasta entonces disfrutaban muchas audiencias en sus jurisdicciones.

El fortalecimiento del control de la corona sobre sus posesiones se manifestó también mediante una mayor supervisión sobre la burocracia y el desplazamiento de las órdenes religiosas, de lo que fue muestra la expulsión de más de dos mil jesuitas, muchos de ellos criollos, junto a la confiscación de sus bienes. Otro ejemplo fue el establecimiento de un ejército permanente en América, aunque dado los limitados recursos existentes en la metrópoli, este debió sustentarse más en los aportes de las propias colonias.

A fines del siglo XVIII, como parte de las reformas borbónicas emprendidas por la metrópoli, España obligó a sus posesiones a compartir los enormes gastos que implicaba la defensa continental. Desde 1750, el Virreinato de Nueva España subvencionaba con constantes *situados* las fortificaciones militares de Cuba, Puerto Rico, Santo Domingo, Trinidad, Florida, Luisiana y otras colonias españolas del área, mientras el de Lima hacía lo mismo con Chile. En ese contexto, fue mejorada la fortificación del Castillo de San Juan de Ulúa y en 1770 comenzó la edificación del fuerte de San

Carlos de Perote, en el camino del puerto de Veracruz a la ciudad de México.

También en La Habana, las autoridades españolas se preocuparon por modernizar el sistema defensivo del puerto, corrigiendo las fallas detectadas en la desastrosa contienda con Inglaterra y adecuándolo a las nuevas exigencias militares de fines del siglo XVIII. Además de reconstruir las fortalezas de El Morro y La Punta, fueron erigidos los castillos de El Príncipe (1779) y Santo Domingo de Atares (1767) y, sobre todo, la descomunal edificación de San Carlos de La Cabaña.

En particular, la fortaleza de La Cabaña fue levantada entre 1763 y 1774, en la parte este del canal de entrada y a muy poca distancia del Morro, con más de 700 metros de largo, que la convirtieron en uno de los más formidables recintos militares de América. Contaba con un complejo engranaje interno formado por fosos con cortaduras, poternas, escaleras y rampas, que permitían moverse con agilidad por su interior. Además, disponía para las tropas de amplios cuarteles abovedados de piedra y sillar y de dos espaciosas plazas de armas.

Pero no solo se estableció que los territorios hispanoamericanos más ricos aportaran recursos para estas descomunales obras militares, sino también que los habitantes de las colonias se organizaran en milicias. Las mejor vertebradas en Hispanoamérica fueron las que surgieron en las ciudades portuarias, regiones litorales y de frontera, dirigidas por los ricos criollos de cada localidad en calidad de altos oficiales.

Como resultado de esta política, los oficiales nacidos en América pasaron de representar el 34% en 1740 a un 60% en 1800, mientras la proporción de los criollos entre la tropas coloniales subió, en el mismo lapso, del 68% al 80%. En algunas regiones, como en las islas del Caribe, las costas neogranadinas y venezolanas y el litoral peruano, los batallones se complementaron con milicias formadas por criollos y población libre, de pardos y negros, beneficiadas con fueros, inmunidades y exenciones.

Las élites hispanoamericanas quedaron responsabilizadas con uniformar, equipar y entrenar las fuerzas puestas bajo su mando. Las tropas quedaron integradas por elementos populares, peones

mestizos, pardos y morenos e incluso indígenas, que no podían ocupar grados superiores, lo que las convirtió en garantía de preservación del orden social.

Para su funcionamiento, se redactó un minucioso reglamento (1763-1764), basado en las experiencias obtenidas en La Habana en la lucha contra los ingleses. La importancia de la formación militar de prominentes miembros de la aristocracia hispanoamericana, se pondría de relieve tras el estallido de la guerra de independencia, como fue el caso del Virreinato de Nueva España, donde los oficiales criollos tuvieron un destacado papel tanto en las filas insurgentes como en el bando realista. La inexistencia o debilidad del ejército regular español en América, explica que en varias colonias los criollos se hicieran del poder con relativa facilidad.

Cambios socio-económicos en la América Meridional

Hasta el siglo XVIII las colonias hispanoamericanas se caracterizaban por una estructura muy rígida, que solo en forma limitada permitía el desarrollo del elemento productivo capitalista burgués. Las reformas borbónicas, en particular las legislaciones comerciales dictadas entre 1778 y 1782 –aunque desde 1765 se venían emitiendo autorizaciones parciales a determinadas colonias–, permitieron la disminución del tradicional aislamiento de las posesiones españolas provocado por el viejo sistema de monopolio.

Estas medidas no solo facilitaron el comercio libre con España y entre las propias colonias (1795-1796), sino también con los países llamados neutrales. Aunque estas medidas revitalizaron el comercio colonial, la centralización de la corona y el oneroso monopolio comercial seguían gravitando sobre un mayor dinamismo de las economías iberoamericanas.

La relativa apertura propició mayores vínculos de las Indias con los mercados europeo y norteamericano, lo que incentivó la actividad económica en su conjunto. La minería se reanimó en el Virreinato de Nueva España –la producción de plata pasó de 5 millones de

pesos (1762) a 27 millones (1804)– y de manera menos espectacular en el Perú en las dos últimas décadas del siglo XVIII.

A la vez, cobró un nuevo impulso la actividad colonizadora y comenzó una pujante expansión productiva en áreas hasta entonces marginales del imperio colonial español: las Antillas, Venezuela y el Río de la Plata. En contrapartida, los obrajes y artesanías sufrieron una notoria decadencia en la segunda mitad del XVIII, ante la creciente competencia de las manufacturas europeas importadas.

En el siglo XVIII se registró un notable crecimiento en el Virreinato de Nueva España, sustentado en un significativo aumento de la extracción de plata –que convirtió a México en el mayor productor a nivel mundial– y en un incremento sostenido de la población, recuperada de las grandes mortandades de la conquista y los inicios de la colonización española. Prueba de este auge económico y comercial fue el desarrollo de la actividad portuaria: en la última década del siglo XVIII llegaron a Veracruz unos mil barcos, lo que facilitó el crecimiento de activos núcleos de comerciantes en Guadalajara, Puebla y Veracruz, al margen de los ya establecidos en la capital virreinal.

Este proceso vino acompañado de una nueva expansión colonizadora sobre la frontera norte (Texas, Nayarit, Tamaulipas y las Californias) –aunque en 1740 una gran sublevación de los indios yaquis amenazó seriamente la dominación española en esos territorios–, junto a la apertura del puerto de San Blas (1767) y la fundación de San Diego (1769) y Monterrey (1770). En ese contexto, aparecieron periódicos como la *Gaceta de México* y *Noticias de Nueva España* (1722), las primeras publicaciones periódicas de todo el continente –aunque la imprenta funcionaba desde 1536–, al mismo tiempo que en las principales ciudades se levantaban grandes edificios religiosos y palacios.

Por sus riquezas mineras –plata fundamentalmente–, el Virreinato novohispano fue la colonia más poblada y valiosa de España: a fines del siglo XVIII proporcionaba el 66% de todos los ingresos procedentes de sus posesiones. Al lado de la economía minera, ubicada al norte y en el valle del Anáhuac –el principal centro productor era ahora Guanajuato–, se desarrolló la ganadería y

la agricultura a costa de antiguas tierras indígenas, que permitió el surgimiento de una poderosa aristocracia enfeudada –caracterizada por la escasa inversión de capital y escasa producción mercantil–, encumbrada a costa de la despiadada explotación servil de las masas indígenas y mestizas.

En cambio, en la tierra caliente novohispana y otras zonas sureñas, la tradicional sociedad aborigen fue menos afectada por los conquistadores y encomenderos y la economía se sustentó más en la agricultura tradicional –maíz, frijol, chile, maguey, cacao, camote, vainilla, ixtle, henequén y cochinilla– y la grana (cochinilla), insecto parásito del nopal. En algunos lugares, como en Cuautla y otros sitios con un clima apropiado, prosperó la economía de plantación (azúcar) que utilizó fuerza de trabajo esclava africana.

La diversificación económica del Virreinato de Nueva España, unido a las nuevas concepciones mercantilistas metropolitanas que formaban parte de las reformas borbónicas, llevó a la desaparición de la vieja división político-administrativa, que descansaba en los gobernadores de Nueva España (valle de México, Tlaxcala, Puebla, Antequera y Michoacán) Nueva Galicia (Jalisco, Zacatecas y Colima), Nueva Vizcaya (Guadiana y Chihuahua), Nuevo León, Nuevo México y Yucatán (que incluía Tabasco y Campeche). En 1786 fueron sustituidos por doce intendencias, las de México, Puebla, Veracruz, Mérida, Oaxaca, Valladolid, Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas, Durango y Arispe, al margen de las zonas fronterizas para las que fue establecido un *status* especial denominado Comandancia General de las Provincias Internas.

Por su parte, en la Capitanía General de Guatemala se crearon en 1785 las intendencias de El Salvador, Chiapas, Honduras y Nicaragua, además de la gobernación de Costa Rica. Los ingresos de la corona en esta región centroamericana todavía dependían, a principios del siglo XVIII, en un 70% de los tributos que pagaban los pueblos originarios, aunque en 1770 bajó al 37%, como resultado del establecimiento de la alcabala, impuestos de Barlovento y los estancos (aguardiente, tabaco).

No obstante el relativo aislamiento y pobreza económica de esta Capitanía, la villa de Santiago de Guatemala, la más poblada de

toda Centroamérica, tenía desde 1733 su propia Casa de Moneda y Arzobispado (1748) y la Universidad de San Carlos Borromeo, en funcionamiento desde 1681, la Sociedad Económica de Amigos del País (1796) y una imprenta (1660). Entre 1729 y 1731 dispuso incluso de su propio periódico, la *Gazeta de Guatemala*, que reapareció a fines del siglo XVIII.

Pero la villa de Guatemala fue destruida por un devastador terremoto el 29 de julio de 1773. A pesar de la oposición del arzobispo Pedro Cortés, al traslado de la capital, se impuso el criterio del presidente de la Audiencia, Martín de Mayorga –que como sus antecesores tenía poderes equivalentes a los de un capitán general–, por lo que la nueva villa fue levantada en el valle de la Ermita, oficialmente desde el 2 de enero de 1776 con el nombre de Nueva Guatemala de la Asunción. La vieja sede, donde permanecieron algunos pobladores renuentes a abandonar las ruinas de la otrora villa capital, fue conocida desde entonces como Antigua Guatemala.

El Río de la Plata protagonizó el acontecimiento comercial más notable de toda Hispanoamérica en estos años –eso explica la creación en 1776 de este virreinato con capital en Buenos Aires y jurisdicción hasta el Alto Perú y Paraguay–, debido al despegue espectacular de las exportaciones de cueros destinados a abastecer no solo las fábricas europeas de calzado, sino sobre todo los requerimientos de las partes móviles de las máquinas de la primera fase de la revolución industrial. Una evolución similar, pero a menor escala, se observó también en las regiones ganaderas septentrionales de Nueva España y en Los Llanos del Orinoco.

En consecuencia, durante las últimas décadas del siglo XVIII se produjo un considerable incremento de la producción agropecuaria hispanoamericana, cuyo valor no tardó en sobrepasar al de la minería. El comercio de Cuba, que en 1770 requería apenas cinco o seis barcos, dependía de 200 en 1778; mientras el de Saint Domingue necesitaba, antes del estallido de la revolución de los esclavos, de unos 700. En 1740, más de 200 barcos anclaron en el puerto de Veracruz, pero en 1790 lo hicieron 1500.

Según un informe consular, en 1785 arribaron al puerto de Cádiz 51 mercantes procedentes de Cuba, 25 de México, 20 de

Venezuela, 17 del Río de la Plata, 5 de Nueva Granada, 5 del Perú, 3 de Centroamérica y uno de Puerto Rico. Para toda Hispanoamérica el valor total del comercio con España aumentó un 700% entre 1778 y 1788. Al mismo tiempo, se registraba un extraordinario crecimiento demográfico –cerca del 50%–, que revirtió la tendencia negativa prevaleciente desde la conquista ibérica.

En estas condiciones, se produjo la fundación, entre 1793 y 1795, de nuevos consulados en Guadalajara, Veracruz, La Habana, Caracas, Cartagena, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile, que se unieron a los ya activos en México y Lima como celosos guardianes del comercio y de un rígido control sobre las exportaciones e importaciones de las colonias. Algunos consulados, devinieron en fuentes permanentes de créditos para la monarquía y, en particular, los de México, Lima y La Habana proporcionaron a la corona sus más importantes ingresos.

Todas estas transformaciones tuvieron, como contrapartida, sensibles modificaciones en la composición clasista de la sociedad colonial iberoamericana. Hasta entonces la vida colonial había estado dominada por el exclusivo círculo europeo –funcionarios, comerciantes monopolistas y grandes propietarios–, el alto clero y los terratenientes señoriales criollos, dependientes de la economía natural y vinculados a los mayorazgos.

Pero desde el siglo XVIII se hizo ostensible el peso creciente de grupos sociales emergentes, mucho más ligados que los anteriores al comercio exterior y al capital. En determinadas regiones litorales, ciudades y puertos –La Habana, Caracas, Cumaná, Veracruz, Guayaquil, Cartagena, Santa Marta, Puerto Rico, y Buenos Aires, fenómeno visible también fuera del área de Hispanoamérica en Cap Francois, Nueva Orleans y Rio de Janeiro–, era notable la presencia de ciertos elementos protoburgueses. Una consecuencia de ello fue el rápido ascenso social en las colonias de estos comerciantes y plantadores, devenidos en una verdadera aristocracia criolla de mentalidad burguesa, que adquiría sus títulos nobiliarios por compra o matrimonio con descendientes de los viejos propietarios señoriales arruinados.

A la vez se conformaba una más diversa estructura agraria asociada a las particularidades regionales. De esta forma, en las

áreas ganaderas del Río de la Plata, de tardía colonización, la vieja economía autosuficiente de haciendas enfeudadas –que dominó el panorama hispanoamericano en los dos primeros siglos coloniales– carecía de importancia –apenas existían mayorazgos–, situación bien diferente a las zonas más pobladas de Mesoamérica o la parte andina. Una evolución similar a las regiones ganaderas se produjo allí donde despuntaba la economía de plantación y, en menor medida, en el norte de México y Los Llanos venezolanos.

El siglo XVIII, en cambio, marcó la decadencia del virreinato peruano, determinada en gran medida por la disminución de los rendimientos mineros. La visible decadencia peruana era también determinada por la disminución de los rendimientos de Potosí –a lo que contribuyó el agotamiento de los yacimientos de mercurio de Huancavelica–, con sus negativas secuelas sobre las áreas agrícolas y pecuarias articuladas a la extracción de minerales, como el noroeste del Río de la Plata y Quito.

A las afectaciones de la minería andina se sumaron los perjuicios ocasionados al Virreinato del Perú con la desaparición de las flotas. La apertura de nuevos puertos dispuesta por las reformas borbónicas llevó al abandono de la vieja ruta de Panamá, que bajó de 5 barcos anuales a 3 y solo de 500 toneladas cada uno. A ese declive también contribuyó la creación de nuevos virreinatos –los de Nueva Granada (1719-1739) y el Río de la Plata (1776)– y capitanías –las de Venezuela (1731) y Chile (1778)–, que dejaron al Virreinato del Perú constreñido a límites geográficos muy parecidos a los de la actual República Peruana.

De esta forma, al finalizar el siglo XVIII, Hispanoamérica estaba dividida, desde el punto de vista político-administrativo, en cuatro virreinatos: Nueva España, Nueva Granada, Perú y Río de la Plata. Además de cuatro capitanías generales, la de Cuba –que incluía en su jurisdicción a La Florida–, Venezuela, Guatemala y Chile. A los virreinatos y capitanías seguían las audiencias de Nueva España, Nueva Galicia, Guatemala, Panamá, Quito, Nueva Granada, Venezuela, Lima, Charcas, Chile, Cuzco y Buenos Aires.

En el caso de Brasil, a fines del siglo XVIII, la evolución económica iniciada doscientos años antes varió su derrotero, pues se

produjo el traslado de su zona nuclear del Nordeste al centro sur y la capital pasó a su vez de Bahía a Rio de Janeiro. Detrás de estas modificaciones estaba el descubrimiento por los *bandeirantes* de fabulosos yacimientos de oro y diamantes en Minas Geraes, que generó en derredor toda una serie de actividades productivas colaterales que alcanzaron su clímax entre 1721 y 1780. Estimulado por el crecimiento de la minería, el arte brasileño alcanzó entonces uno de sus momentos más significativos, muy en especial con las estatuas de los profetas talladas por Antonio Francisco Lisboa, o *Aleijadinho*, para la iglesia de peregrinación de Congonhas do Campo (1796-1805).

El *boom* económico brasileño también trajo consigo la expansión del poder metropolitano, en detrimento de la tradicional autonomía administrativa y la relativa libertad comercial de que hasta entonces disfrutaban los habitantes de Brasil. Esa fue precisamente la tarea del marqués de Pombal, representante portugués de un despotismo ilustrado muy distinto en cuanto a resultados de su contrapartida hispánica. Ello se reflejó en los primeros conflictos surgidos entre criollos y portugueses como la Guerra de los Emboabas (1707-1711), el motín de Bahía (1711), la rebelión de Felipe dos Santos (1720) y la Guerra de los Mascates (1710-1711).

Detrás del notable ascenso del comercio de exportación registrado en diversas partes de Hispanoamérica y Brasil durante el siglo XVIII se encontraba el crecimiento de la productividad industrial del norte de Europa, en particular de Inglaterra, que exigía materias primas y productos agropecuarios. Además, la población europea aumentó considerablemente en el siglo XVIII, lo que representó un enorme estímulo para la agricultura, el comercio y la manufactura. El tráfico mercantil internacional creció como nunca antes, incorporando áreas de muchas colonias americanas que hasta entonces solo habían estado involucradas marginalmente con el mercado europeo.

Esclavitud y plantación

El fomento de plantaciones en el Caribe estuvo favorecido por las ventajas de su ubicación geográfica, en el paso obligado de las

principales rutas mercantiles, del comercio triangular y muy cerca de las fuentes africanas de esclavos. Entre las características de este tipo de economía se distinguían la producción especializada a gran escala para el mercado externo, el predominio del monocultivo, una mayor capitalización que en las viejas haciendas señoriales, la utilización preferente de fuerza de trabajo esclava africana y su dependencia de los circuitos mercantiles.

Las plantaciones impulsaron la expansión de cultivos tropicales en las Antillas: añil, tabaco, café y, sobre todo, azúcar. Al igual que sucedió en las islas caribeñas, donde la cercanía de las plantaciones al mar influyó en el florecimiento del comercio de exportación, en otras regiones de la masa continental, en particular zonas costeras o en las llanuras cercanas y en áreas interiores bien comunicadas por ríos caudalosos, también esto propició el crecimiento económico, como ocurrió en los cálidos valles próximos a las tierras bajas al sur de la ciudad de México, en el litoral norte del Perú –hasta Guayaquil–, en El Salvador (añil) y, de manera más significativa todavía, en las pampas argentinas (cueros), así como en el litoral venezolano (cacao).

El vertiginoso desarrollo de la economía de exportación en Venezuela –donde a mediados del siglo XVIII ya existían más de 500 plantaciones en los alrededores de Caracas– y, sobre todo, en el occidente de Cuba, llevaron a conformar en estas dos colonias, a fines de esa centuria y principios del XIX, las concentraciones de esclavos más significativas de toda Hispanoamérica. En la Capitanía General de Venezuela, la población esclava, estimada en 90 mil personas, fue ubicada de manera preferente en la franja costera y en los valles de la provincia de Caracas, donde eran utilizados en las plantaciones de cacao, producto destinado al consumo de la metrópoli y del Virreinato de Nueva España.

En Cuba, la población esclava era similar a la de Venezuela –unos 84 mil africanos hacia 1792–, en su mayoría establecida en las plantaciones azucareras surgidas en torno a los puertos de La Habana y Matanzas. Tanto en Cuba, como en el resto del Caribe, el despegue de la economía de plantación se basaba en la intensa explotación de los esclavos africanos, cuya libre trata había sido decretada para las colonias españolas por Carlos IV en 1789.

Se estima que, hacia 1807, la población sometida a esta lacerante condición en toda el área caribeña era de un millón de personas, aunque diseminados por las diferentes islas. De esta cifra, unos 800 mil estaban en las posesiones inglesas –Jamaica 311 mil, 83 mil en Barbados y una cantidad casi equivalente en la Guayana inglesa– y el resto, en lo fundamental, en las colonias francesas de Martinica y Guadalupe, con poco más de 80 mil esclavos en cada una de ellas. En Puerto Rico, existían alrededor de 20 mil esclavos y, en la Luisiana, unos 60 mil.

Los primeros lugares en el monto de la población esclava de toda América Latina correspondían a Saint Domingue y Brasil. A fines del siglo XVIII, la rica colonia francesa del Caribe contaba con medio millón de personas sometidas a este régimen inhumano.

En la inmensa posesión portuguesa en América, vivían hacia 1818 cerca de dos millones de habitantes bajo esta brutal institución. En Perú y Quito, la esclavitud era entonces menos numerosa –50 mil y 8 mil respectivamente–, y estaba extendida por la costa del Pacífico, donde se utilizaban trabajadores forzados negros en las minas auríferas de esmeralda, en las plantaciones de cacao (Guayaquil), de azúcar –en especial entre Santa y Cañete–, vid o trigo –Lima y sus alrededores (valle del Rimac), así como en Pisco, Ica y Nazca–.

Buenos Aires era, en los últimos días coloniales, un activo centro de distribución de esclavos –muchos de ellos destinados a abastecer las plantaciones de azúcar del interior del virreinato (Tucumán)–, tras desplazar a Cartagena de su condición de principal mercado negrero de América del Sur. Pero en todo el extenso territorio rioplatense no había más de 30 mil esclavos.

En ciertas zonas del litoral caribeño de Nueva Granada –desde Cartagena a Santa Marta–, también prosperaron algunos cultivos de exportación que dependían cada vez más de la fuerza de trabajo esclava africana en la medida que escaseaba la aborigen. También significativos núcleos de trabajadores negros sometidos a la oprobiosa institución en Antioquia, Popayán y el valle del Cauca. Los censos de fines del siglo XVIII y principios del XIX fijan la población esclava en este virreinato en unas 70 mil personas.

En virtud de la explotación de sus yacimientos auríferos –al principio mediante la masiva utilización del trabajo aborigen y luego con esclavos africanos–, particularmente en Antioquia, Barbacoas, Popayán y Chocó, estas áreas llegaron a suministrar alrededor del 80% de todo el oro exportado por la colonia. Hasta fines del siglo XVIII, el Cauca mantuvo la primacía como centro minero, fecha en que pasó a Antioquia. Durante todo este siglo, Nueva Granada aportó la mitad de la producción mundial de oro.

También en Nueva Granada se duplicaron, después de 1784, los volúmenes del comercio, aunque no llegó a vertebrarse en rigor una economía de plantación. Las exportaciones neogranadinas, las más reducidas de los cuatro virreinatos, eran casi todas de oro. De ahí su endémica dependencia financiera de los situados de Nueva España y otras colonias españolas.

La incapacidad para hacer despegar la economía de la costa atlántica neogranadina, hizo que en esta región las actividades agropecuarias estuvieran en función de las necesidades derivadas de la construcción de las grandes fortificaciones de Cartagena. En el resto del territorio de este virreinato, existían amplias zonas de población indígena vinculada a la economía natural –como las áreas suroccidentales–, que cubrían con sus cultivos y artesanías las propias necesidades y abastecían los limitados mercados locales. De esta manera, el territorio del virreinato neogranadino se conformó como un verdadero mosaico de diferentes culturas, economías y combinaciones raciales.

Forja de la patria de los criollos

En Hispanoamérica y Brasil la consolidación social de un sector criollo compuesto por plantadores y estancieros no vinculados a mayorazgos, en proceso de aburguesamiento, junto a un dinámico grupo de comerciantes no monopolistas y de una incipiente pequeña burguesía y capas medias –artesanos, intelectuales, pequeños empresarios, etc.– introdujo un componente progresista en los conflictos de clase de la última etapa colonial. Eso explica que algunos de estos

sectores fueran el sostén de las peticiones criollas en favor de una más amplia liberalización comercial, para conseguir acceso directo al mercado ultramarino fuera del dominio de los intermediarios metropolitanos.

La prosperidad de la mayoría de estos grupos y clases protocapitalistas dependía del contacto, directo o indirecto, con la creciente riqueza industrial y comercial de Europa y en especial de Inglaterra, que cada vez consumía más materias primas y necesitaba colocar cantidades crecientes de su manufactura. En España, el propio Conde de Campomanes se quejaba de que por cada dos mil toneladas de comercio legal se realizaban, solo en el Virreinato del Perú, 13 mil toneladas de contrabando.

Los ingleses desde las Malvinas, Colonia de Sacramento y Jamaica y, en menor medida, los holandeses desde Curazao y Paramaribo, controlaban por vía de los intérlopes una parte sustancial del comercio colonial hispanoamericano vulnerando el monopolio español. Además, esta situación se complicó entre 1796 y 1808 como resultado de la casi completa dislocación del comercio marítimo americano, prácticamente suprimido por el eficaz bloqueo inglés contra España y Francia, agudizado desde la derrota española en la batalla naval de Trafalgar (1805).

También los criollos exigían la eliminación o disminución de los más gravosos impuestos tradicionales –alcabalas, avería, almojarifazgo, armada, diezmo y otros–, así como los nuevos establecidos por la corona, que adulteraban los precios de exportación de los productos autóctonos, haciéndolos poco competitivos en los mercados internacionales. La agudización de las contradicciones metrópoli-colonia, básicamente en la esfera de la circulación mercantil, explica el peso de las reivindicaciones antimonopólicas en los principales movimientos precursores de las postrimerías del siglo XVIII.

Esos problemas también explican la aparición de importantes textos contestatarios de la intelectualidad criolla, como el discurso rebelde de José Baquijano en la Universidad de San Marcos de Lima, la *Representación de los Hacendados* de Mariano Moreno, el *Informe del Real Consulado* de Francisco Arango y Parreño y el *Memorial de*

Agravios de Camilo Torres. Esos mismos conflictos explican la misiva dirigida a los españoles americanos por el exiliado jesuita arequipeño Juan Pablo Viscardo y Guzmán.

En su célebre *Carta dirigida a los Españoles Americanos* (1791) –inédita hasta 1799–, el jesuita peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán, exiliado en Londres, llegaba incluso a condenar el despotismo español en América. Este sacerdote revolucionario aseveraba: «El Nuevo Mundo es nuestra patria, su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra situación presente».[1]

Otras muestras de la creciente erosión del orden colonial fue la aparición en las calles de Quito, el 21 de octubre de 1794, de unas pequeñas bandas de tafetán colorado, con inscripciones en latín, consideradas sediciosas por las autoridades coloniales, cuya responsabilidad atribuyeron al intelectual mestizo Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien fue sancionado. En el mismo sentido fue considerado el sermón sobre la Virgen de Guadalupe, pronunciado en el santuario de Tepeyac en el Virreinato de Nueva España, el 12 de diciembre de 1794, por el sacerdote Servando Teresa de Mier, donde afirmó que la evangelización del Nuevo Mundo antecedió a la llegada de los europeos, lo que le acarreó sanciones eclesiásticas y el destierro.

El desencuentro entre las metrópolis europeas y las colonias americanas se acentuó como resultado de la formación de una especie de conciencia *protonacional* criolla y de una ideología que apuntaba al separatismo, al conjuro de la influencia de la ilustración. Para el conjunto de América Latina, las concepciones ilustradas de esta centuria facilitaron la alborada de una conciencia histórica *protonacional*, interesada en conocer con sentido de progreso el pasado y la realidad americanas.

En diferentes colonias iberoamericanas fueron apareciendo obras escritas por criollos que, con orgullo de su condición, mostraron una visión diferente del mundo americano. Siguiendo los pasos del precursor novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora, algunos

[1] Citado por José Luis Roca, *1809. La Revolución de la Audiencia de Charcas en Chuquisaca y en La Paz*, La Paz, Plural Editores, 1998, p. 14.

llegaron incluso a buscar en el pasado indígena y en la exuberante naturaleza americana, los elementos distintivos que los separaban de los españoles y afirmaban la naciente identidad hispanoamericana.

Los planteos sobre la inferioridad del Nuevo Mundo, puestos en boga por determinados pensadores e historiadores iluministas europeos (Buffon, Raynal, Pauw y Robertson), indignaron a intelectuales criollos como Juan José de Eguiara y Eguren o Francisco Xavier Clavijero. Algunos eran sacerdotes jesuitas que fueron expulsados de sus natales tierras americanas en 1767.

En el exilio, escribieron crónicas y libros donde combatían con apasionamiento los mitos sobre la supuesta inferioridad de este continente. En sus obras describían con admiración la naturaleza americana y contaban con añoranza la historia de sus lejanas patrias, usando por primera vez este término, a las que deseaban volver.

Al negar el pasado inmediato y esgrimir de manera idealizada los valores de la relegada antigüedad indígena, los intelectuales criollos de esta generación descubrían los gérmenes de su propia identidad. La creciente toma de conciencia sobre la existencia de un pasado histórico propio los convirtió, sin proponérselos, en forjadores de una embrionaria conciencia «nacional» hispanoamericana y, de cierto modo, en precursores de la lucha independentista.

Manifestación de este fenómeno fue el creciente interés de la aristocracia y la intelectualidad criollas de este continente por las letras y las ciencias naturales, en particular el estudio de la flora y la fauna autóctonas, en lo que se destacó, entre otros, el jesuita chileno Juan Ignacio Molina. En ese contexto aparecieron los primeros periódicos –entre ellos *El Papel Periódico* de La Habana (1790), el *Papel Periódico* de la ciudad de Santa Fe de Bogotá (1791), el *Mercurio Peruano* (1791), y *La Gazeta de Guatemala* (1797)–, portadores de nuevas ideas y convicciones americanistas, así como las sociedades económicas de amigos del país.

Al mismo tiempo, cobraba fuerza la búsqueda de raíces propias y el estudio de las culturas precolombinas, tal como hiciera Clavijero en su conocida *Historia antigua de México*, publicada originalmente en Bolonia (1780-1781), y el riobambeño Juan de Velasco con su *Historia del Reino de Quito* (1789). Entre los objetivos de estos autores

criollos, estaba demostrar que el continente americano tenía un pasado comparable al de Europa, cuyos logros sentían como propios.

En varias obras de la segunda mitad del siglo XVIII, se prefiguraba ya el imaginario –Clavijero es el ejemplo por excelencia– de la independencia de América Latina, que negaba el pasado inmediato, e incluso la conquista, y reconocía como suya la antigüedad indígena, aunque idealizada. Al defender la causa de los vencidos del siglo XVI, y asumir el desaparecido mundo aborigen, reivindicaban lo autóctono frente a lo europeo. De esta manera, contribuían a reafirmar su condición de criollos –blancos, negros o mestizos–, diferentes a los españoles, apropiándose de los agravios cometidos contra los indígenas durante la conquista.

Aunque muchos de estos autores eran descendientes directos de españoles, el injusto sistema colonial los hacía identificarse con los habitantes originarios, sometidos por los invasores europeos en el siglo XVI. Los indígenas habían sido los primeros dueños del espacio americano, antes que los conquistaran a nombre de las coronas europeas, y los criollos aspiraban a recobrar o adquirir ese lugar de esas mismas monarquías.

Con este enfoque, se fueron dibujando los contornos de la patria criolla, de una emergente conciencia americana, distinta a la española, como comunidad imaginada que empezaba a construirse desde el punto de vista ideológico. Otras expresiones que reflejaban la aparición de una nueva identidad pueden encontrarse en obras como *Primicias de la cultura de Quito*, del mestizo Francisco Eugenio Santa Cruz y Espejo, o en la primera novela picaresca de la literatura hispanoamericana: *El periquillo Sarmiento* (1816) de José Joaquín Fernández de Lizardi. Esta última, una sátira nacida del ambiente de la ilustración que cierra toda una época con una severa crítica del régimen colonial.

Ello era también una muestra del orgullo que muchos naturales de América ya sentían por la tierra donde habían nacido y por su condición de criollos, lo que advirtieron avispados viajeros como el barón de Humboldt o Francois Depons. El sabio alemán escribió que a los criollos, «especialmente después de 1789 se les oye decir muchas veces con orgullo: «Yo no soy español, soy americano», pues se «han

aflojado los vínculos que en otro tiempo unían más íntimamente a los españoles criollos con los españoles europeos».[2]

Los elementos sociales emergentes acentuaron las pugnas entre el conjunto de la población americana y, muy en particular, de su cúspide aristocrática, con los funcionarios europeos que dominaban el aparato estatal –en toda la época colonial de 170 virreyes, solo 4 fueron criollos– y se beneficiaban en forma exclusiva de sus prerrogativas: utilización de rentas fiscales, control del comercio legal y de la asignación de tierras baldías y realengas. A ello también contribuyó la «Real cédula de consolidación para la venta de bienes pertenecientes a obras pías» (diciembre de 1804), expedida por la corona española para enfrentar la guerra con Inglaterra y que obligó a muchos propietarios a pagar por sus tierras.

En las posesiones hispanas, pudo observarse en la segunda mitad del siglo XVIII un reforzamiento de los lazos coloniales impuesto por los Borbones que ha sido considerado como una verdadera segunda conquista de América. Manifestaciones de este fenómeno fueron las restricciones establecidas a la autonomía de la Iglesia, a las órdenes religiosas y las comunidades indígenas, la colonización de nuevos territorios, la centralización de rentas, el aumento de las contribuciones al fisco real, así como el incremento de monopolios y estancos.

Como parte de ese proceso, impulsado por José de Gálvez, ministro de Indias de Carlos III, el elemento criollo comenzó a ser desplazado de las posiciones alcanzadas en la Iglesia y audiencias, verdaderos centros de sus actividades en los virreinatos y capitanías. Por ejemplo, de los ocho oidores criollos que tenía la Audiencia de Nueva España en 1769, solo quedaban la mitad diez años después.

En el propio virreinato novohispano, las nuevas disposiciones borbónicas obligaron a la Iglesia a vender bienes y ceder a la corona el beneficio de los censos –decisión revertida en 1809–, lo que afectó en particular los ingresos del bajo clero, constituido en gran parte por criollos. Este elemento, junto con la expulsión de los jesuitas de

[2] Citado por Salvador Méndez R., *Las élites criollas de México y Chile ante la Independencia*, México, Centro de Estudios sobre la Independencia de México, 2004, p. 25. Las cursivas en el original.

los territorios de Brasil (1759) e Hispanoamérica (1767), debilitó el apoyo a las autoridades coloniales de un sector de la Iglesia integrado en gran medida por naturales de este hemisferio.

Las grandes insurrecciones del siglo XVIII

En Hispanoamérica y Brasil, desde los años veinte del siglo XVIII se desencadenaron motines, conspiraciones y levantamientos en diversos lugares que alcanzaron su punto culminante a fines de esa propia centuria. La mayoría de estas insurrecciones populares tenían un carácter diferente a las ocurridas en los siglos anteriores y se desarrollaron a escala local.

Por lo general, no rechazaban al gobierno metropolitano, sino que sus protagonistas consideraban las rebeliones como una defensa justa de los intereses regionales contra la explotación arbitraria ejercida desde el exterior o por inescrupulosos funcionarios. En algunos casos sus líderes expresaban el deseo de las élites criollas locales de tener mayor representación en los gobiernos locales, aspiración que fundamentaban en las doctrinas políticas ibéricas del siglo XVI que otorgaban al pueblo el derecho a la rebelión contra el gobierno tiránico y frente al abuso del poder real.

Ninguno de estos movimientos llegó a perfilarse como procesos nacional-liberadores y no formaban parte todavía de una crisis general del sistema que abarcara a todo el continente, aunque sin duda fueron sus primeros síntomas, pues se produjeron en las vísperas de las luchas por la emancipación de principios del siglo XIX. Uno de los elementos que avivó muchas de estas rebeliones, expresión de los intereses cada vez más discordantes entre criollos y españoles, eran los nuevos gravámenes y monopolios impuestos por las metrópolis europeas.

Entre los diversos movimientos que sacudieron el sistema colonial merecen mencionarse las rebeliones de indígenas, mestizos y criollos pobres en Salta y Jujuy (1724 y 1767), en varias localidades de Perú (1740, 1742 y 1748), en Venezuela –rebelión del canario Juan Francisco de León entre 1749 y 1752 contra los agentes

extorsionadores de la Compañía Guipuzcoana de Caracas–, Quito (1765), y en las misiones de Sonora y Chihuahua (1777-1779).

Solo en el Virreinato de Nueva España pueden mencionarse, entre otros muchos movimientos y protestas, las rebeliones indígenas en San Felipe y San Miguel el Grande, dirigida por el otomí Nicolás Martín en 1734 y 1735; la de los yaquis y mayos en 1740, encabezada por Calixto, el Muni, y Bernabelillo, concluida en 1745; la de los mayas liderados por Jacinto Canek en 1761 y la sublevación organizada por el indio Juan Cipriano en Guanajuato.

A ellas deben agregarse el levantamiento de los trabajadores mineros en San Luis Potosí, a fines de abril de 1767; la llamada conspiración de los machetes dirigida por Pedro de la Portilla en 1799 y las protestas despertadas en el Bajío en 1767 contra la expulsión de los jesuitas, que fueron acalladas con la ejecución de casi cien personas por órdenes del visitador José de Gálvez. En este caso, la brutal represión fue respaldada por las fuerzas del ejército regular guiado por el general Juan de Villalba, llegado a México apenas cuatro años antes.

También en la América del Sur se mezclaron las reivindicaciones económicas motivadas por las abusivas modificaciones impositivas de la corona con la defensa de derechos ancestrales, lo que provocó en el siglo XVIII una ola de manifestaciones y motines populares. Por ejemplo, en las ciudades de Cochabamba y Oruro estallaron protestas entre la población criolla y mestiza, mientras se levantaban varias comunidades indígenas encolerizadas por las disposiciones coloniales que aumentaban los tributos y reafirmaban la *mita*.

La rebelión de Cochabamba se inició a fines de 1730, cuando la población criolla y mestiza protestó por los nuevos impuestos, al grito de «¡Viva el rey, muera el mal gobierno».[3] El movimiento, encabezado por el mestizo platero Alejo de Calatayud, llegó a extenderse por toda la ciudad, tras el saqueo de los comercios de españoles y criollos y la huida del corregidor Rodríguez Carrasco.

A pesar de que los rebeldes proclamaron su fidelidad a la Iglesia y la corona, fueron severamente reprimidos y Calatayud ejecutado

[3] Luis Navarro García (Coordinador), *Historia de las Américas*, Madrid, Universidad de Sevilla/Alhambra Longman/Quinto Centenario, 1991, t. III, p. 105.

(1732). Una protesta de parecidas características abortó en Oruro en 1739, que costó la vida a sus principales figuras: Vela de Córdoba, Pachamira y Castro.

Protestas de distinto signo se produjeron también entre la población indígena en 1751 en Potosí, en 1760 en Torora, en la provincia de Carangas, y en 1770 en Sica Sica, localidad vecina de La Paz. Una de las más importantes de esta etapa fue la que se produjo en Condo Condo, Oruro, en 1774, cuando los airados indígenas se sublevaron contra los abusos de dos caciques cobradores de tributos. También hubo fuertes protestas contra los derechos parroquiales o por problemas de tenencia de la tierra.

A este listado, que no pretende ser exhaustivo, deben sumarse las rebeliones de negros libres y esclavos, ocurridas en diversas partes del continente. Aunque ninguno de estos movimientos, estimulados por una depresión económica sin precedentes, buscaba la independencia, todos dejaban traslucir el creciente descontento de la población americana, preludio de la crisis definitiva del orden colonial.

De todas las rebeliones y protestas ocurridas en el siglo XVIII, las cuales eran de distinto carácter y composición social y étnica, las más significativas fueron los motines de los vegueros en Cuba, el de los comuneros del Paraguay y el Socorro en Nueva Granada, el frustrado movimiento de Tiradentes en Brasil y la revolución de los pueblos originarios del Perú y el alto Perú, encabezadas por Túpac Amaru II y los Katari, que estremecieron el sistema de dominación colonial, dejando una huella imborrable en el imaginario popular.

Motines de los vegueros en Cuba

Uno de esos movimientos fueron las violentas protestas de los cosecheros (vegueros) de tabacos de Cuba, cuyos reclamos en contra del estanco eran ignorados por las autoridades coloniales. Con el objetivo de controlar la creciente producción tabacalera de la Mayor de las Antillas se había fundado en La Habana una factoría, con

extensiones en Santiago de Cuba, Trinidad y Bayamo, las principales villas en cuyas cercanías existían vegas de tabaco.

Las protestas contra el injusto pago que recibían los vegueros por el tabaco se generalizaron en Santiago de Cuba, en la región central (Arimao) –donde los campesinos se negaron a llevar las hojas del tabaco a Trinidad–, aunque fueron las ocurridas en la capital de la colonia las que devinieron en una franca rebeldía. La airada reacción de los vegueros habaneros estalló al conocer que en el puerto iban a ser cargados de tabaco dos galeones por cuenta de la factoría.

En 1717 los cosecheros de La Habana, armados con machetes y fusiles de las milicias, se concentraron en los poblados de Guanabacoa, Santiago de las Vegas y Bejucal, así como a orillas del río Almendares. Unos 500 vegueros se adueñaron del matadero de Jesús del Monte e impidieron el envío de carne a la ciudad.

El clímax se alcanzó en agosto de ese año cuando los propios cosecheros atravesaron las murallas que protegían la ciudad y al grito de «¡Viva Felipe V y abajo el mal gobierno!»,[4] se apoderaron de la capital durante tres días. El capitán general Vicente Raja, junto a los funcionarios reales comisionados para la implantación del estanco, fueron obligados por los amotinados a marcharse a España en los propios galeones que esperaban por el tabaco.

Tres años después de estos sucesos una nueva sublevación de los vegueros estuvo a punto de repetirse, pero fue aplacada por gestiones conciliatorias de la élite habanera encabezada por el rico hacendado José Bayona Chacón, recompensado por la corona con el título de conde de Casa Bayona. En 1723 el movimiento de protesta volvió a desencadenarse, ahora por las demoras en el pago del tabaco por las autoridades coloniales –que dependían para ello del *situado* novohispano–, y la entrega de vales que se devaluaban al hacerse efectivo en los comercios.

En esta ocasión, la mayoría de los indignados cosecheros acordaron no vender ni sembrar más tabaco, hasta que se pagara en efectivo y a un precio oficial. Pero esta vez las autoridades coloniales reaccionaron con una violenta represión, aprovechando la división

4 Citado por Oscar Zanetti, *Historia mínima de Cuba*, México, El Colegio de México, 2013, p. 71.

del movimiento veguero entre un grupo más conciliador, nucleado en Bejucal y Santiago de las Vegas, y los más intransigentes de San Miguel del Padrón, Guanabacoa y Jesús del Monte.

En estas condiciones, el nuevo gobernador español Gregorio Guazo, que había llegado con abundantes refuerzos militares de la metrópoli, atacó a los cosecheros con el saldo de varios muertos y heridos, así como una docena de prisioneros. Por orden expresa de la máxima autoridad colonial, estos últimos fueron ejecutados y sus cadáveres colgados a la vista pública como escarmiento, aunque por varios años el estanco tuvo que ser suspendido.

Rebelión de los comuneros de Paraguay

La revuelta de los comuneros de Paraguay, iniciada en 1721 contra el predominio de las misiones jesuitas –que desde 1588 controlaban gran parte de la fuerza de trabajo aborigen y el comercio de la región–, se transformó una década más tarde en una rebelión masiva de pequeños campesinos o *chacreros*. Los antecedentes de este movimiento se remontan a los años de 1644-1650, cuando bajo la dirección del obispo franciscano Bernardino de Cárdenas los pobladores iniciaron la resistencia al poderío de los jesuitas.

La insurrección de los comuneros de Paraguay se inició en 1717, incitada por los grandes propietarios y encomenderos. Las primeras peticiones de autonomía municipal de los habitantes paraguayos, presentadas por José de Antequera, desembocaron en su nombramiento por el cabildo de Asunción como nuevo gobernador de la provincia, tras la destitución y encarcelamiento del anterior (14 de septiembre de 1721), quien finalmente escapó a Buenos Aires.

Al poco tiempo, el gobernador colonial depuesto regresó a Paraguay acompañado de un numeroso ejército, integrado en gran parte por guaraníes organizados por los jesuitas de las misiones, con el propósito de recuperar sus fueros. Pero en agosto de 1724, las milicias criollas, comandadas por Antequera, lo derrotaron a orillas del Tebicuary.

Un año después, los comuneros fueron finalmente doblegados por las poderosas fuerzas militares despachadas por el Virrey del Perú, a cuya jurisdicción estaba adscripto Paraguay. Como castigo por su rebeldía, Antequera fue encarcelado, junto a su compañero Juan de Mena, y ejecutado en Lima (1731).

Una segunda etapa de la insurrección comunera paraguaya se abrió entonces bajo la dirección de Fernando de Mompox, quien había escapado de la misma prisión donde se encontraba Antequera en Perú. Si al comienzo los levantamientos habían sido orientados por los encomenderos y apoyados por el resto de la población, ahora la dirección pasó al *común*, los representantes de villas y pueblos, esto es, pequeños y medianos propietarios rurales, ganaderos, comerciantes y las capas más pobres del campo. Además, la lucha ya no era solo contra los jesuitas, sino también contra los abusos del virrey y la propia corona.

Conducidos por elementos más radicales se llegó, incluso, a la creación de una junta gubernativa en Asunción, que proclamó que «el poder del Común es superior al del mismo Rey».[5] No fue hasta 1735, después de años de virtual independencia de Paraguay, que el virrey de Perú pudo someter a la provincia rebelde, tras derrotar a las fuerzas comuneras en la batalla de Tabapy, una antigua estancia de los dominicos. Las represalias fueron masivas, mientras los jefes más connotados, Tomás de Lovera, Miguel Giménez y Mateo Arce, eran conducidos a Asunción y descuartizados en público.

Levantamiento comunero en Nueva Granada

En la antigua tierra chibcha la sublevación comunera fue resultado directo de la instrucción colonial del 12 de octubre de 1780, emitida por el regente visitador Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. La disposición, dada a conocer a la población del Socorro mediante un edicto real (marzo de 1781), elevaba impuestos y tributos que afectaban a todos los productores y comerciantes criollos sin diferenciar en condición social o étnica.

[5] Tomado de *Enciclopedia del Paraguay*, Barcelona, Grupo Editorial Océano, [s.f], tomo I, p. 164.

El día 16 de ese mes, algunos vecinos, guiados por José Delgadillo, se concentraron en la plaza central del Socorro, en un concurrido día de mercado, para protestar por los nuevos gravámenes y monopolios establecidos por la corona con el pretexto de sufragar guerras coloniales. Una de las más destacadas ese día fue una vendedora de frutas nombrada Manuela Beltrán. El movimiento de desacato pronto devino en una abierta rebelión al grito de «!Viva el Rey, pero no queremos pagar la armada de Barlovento!».[6]

Las airadas protestas populares obligaron al cabildo a suspender el cobro de los nuevos impuestos, lo que no impidió que las protestas se extendieran a otras localidades vecinas, como Simacota, Barichara, Charalá, Mogotes y San Gil, mientras en el propio Socorro la casa del estanco era atacada y destruidos aguardientes y tabaco de los almacenes reales. El 17 de abril, una gran concentración popular en el Socorro escogió como jefes del movimiento comunero a ricos hacendados y comerciantes criollos, entre ellos Juan Francisco Berbeo y Salvador Plata.

Enterado del levantamiento, el virrey regente, Gutiérrez de Piñeres, huyó de la capital hacia Honda, perseguido por un grupo armado a las órdenes del campesino mestizo, nombrado capitán, José Antonio Galán. A continuación, los comuneros de Socorro, Tunja, Pamplona y Casanare vertebraron en forma espontánea un verdadero ejército puesto a las órdenes del propio Berbeo, el cual venció a las autoridades virreinales en Puente Real de Vélez (8 de mayo).

Las noticias de este triunfo militar, que abría la posibilidad de ocupar la capital virreinal, entusiasmaron a los comuneros e incluso provocó sublevaciones indígenas en Paya, Támara, Pita y otros poblados creados por misioneros jesuitas. En Cundinamarca, los pueblos originarios rebeldes proclamaron a Ambrosio Pisco, un indígena adinerado, lejano descendiente del *zipa*, como cacique de sus comunidades y se unieron a los comuneros.

A mediados de mayo, el ejército guiado por Berbeo ocupó Zipaquirá, donde fue redactado un pliego de reivindicaciones, las que las autoridades virreinales se vieron obligadas a aceptar para

[6] Mario Arango Jaramillo, *El proceso del capitalismo en Colombia*, Medellín, Ediciones Hombre Nuevo, 1977, p. 98.

lograr desmovilizar a los alzados. Entre las demandas, recogidas en 35 cláusulas, se incluía la abolición de impuestos y estancos, disminución de tributos y preferencia en los empleos a los criollos antes que los europeos.

A las capitulaciones de Zipaquirá, firmadas con premura, el 8 de junio de 1781, por el arzobispo de Bogotá, Antonio Caballero y Góngora, en ausencia del virrey, se opuso infructuosamente un ala radical del movimiento comunero, nutrida de indígenas, peones y ex esclavos y capitaneada por Galán. Diez días después, el caudillo popular declaró abolida la esclavitud en los territorios neogranadinos por donde pasaban sus fuerzas (Facatativá, Villeta, Guaduas y el valle del Magdalena), mientras en Ambalema repartía tierras entre los desposeídos, así como mercancías y otros bienes de los caudales de la corona. Paralelamente, continuaron los levantamientos de indígenas y esclavos en Tolima, Cauca y Antioquia.

Lograda la pacificación, el virrey pasó a tomar represalias. Galán respondió continuando la lucha mediante guerrillas de indígenas y ex esclavos negros; pero las divisiones en el bando criollo, dieron al traste con sus planes. Capturado cuando se dirigía a los Llanos Orientales con algunos de sus hombres, el 1 de septiembre de 1781, fue remitido encadenado a la capital virreinal.

Tras un proceso amañado, Galán fue ejecutado y descuartizado, junto con tres de sus lugartenientes, el 2 de febrero de 1782. Otros quince de sus seguidores fueron desterrados a África. Unas pocas semanas después, el 18 de marzo, la Real Audiencia y el regente anunciaron formalmente, y a pregón batiente, la anulación de las capitulaciones firmadas con los comuneros.

Revolución indígena en los Andes: Túpac Amaru II y los Katari

A esta etapa también corresponde la impresionante sublevación indígena encabezada por el cacique José Gabriel Condorcanqui, también conocido como Túpac Amaru II, motivada por los desmanes administrativos de alcaldes y corregidores

en el abandonado escenario andino. En este caso se trataba de una gran sublevación de los pueblos originarios, dirigida por algunos de sus propios jefes o *curacas*, con una menor participación de elementos criollos, en consonancia con el renacimiento de la tradición de restauración del incario que tenía lugar en la segunda mitad del siglo XVIII.

Después del asesinato del primer Túpac Amaru en el siglo XVI se sucedieron varias revueltas y diferentes movimientos de rebeldía protagonizados por la población indígena del Virreinato del Perú. Uno de los más poderosos fue la rebelión de Juan Santos Atahualpa II, entre 1742 y 1752, que pretendía restablecer el Tahuantinsuyo.

Pero la mayor de todas las sublevaciones de los pueblos originarios durante la época colonial estalló en los Andes a mediados de 1780. Le dio comienzo la acción insurreccional de los hermanos Katari, Tomás, Dámaso y Nicolás, en agosto de ese año, quienes ocuparon Chayanta (Alto Perú), junto a otras zonas vecinas.

El gran levantamiento indígena era motivado por las desmesurados contribuciones y tributos, incrementados entre 1777 y 1779, así como los constantes abusos de los corregidores españoles. Ejemplo de ello era la adquisición obligatoria por parte de los aborígenes de objetos traídos de Europa, a lo que se llamaba el «reparto mercantil».

La insurrección de Chayanta, menos conocida que la de Tinta, cobró más fuerza todavía como resultado del asesinato de Tomás Katari, a quien le aplicaron la ley de fuga el 15 de enero de 1781. Después del exitoso cerco indígena a la ciudad de La Plata (antes Chuquisaca), los jefes rebeldes fueron capturados (abril- mayo) y ejecutados.

El movimiento revolucionario de los pueblos originarios de los Andes no adquirió todo su ímpetu hasta que se incorporó José Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungasuca, el 4 de noviembre de 1780. Al parecer, este jefe indígena era descendiente en línea materna del último Inca de Vilcabamba, Túpac Amaru, de quien tomó el nombre para indicar la continuidad de la resistencia anticolonial. Por tal motivo, Condorcanqui reivindicó para sí la denominación de su heroico antepasado y se lanzó a la lucha contra la opresión de los descendientes del incario.

Entre las primeras acciones del segundo Túpac Amaru estuvo la abolición de los repartimientos, entre ellas las onerosas distribuciones forzadas de mercancías superfluas llevadas a cabo por los corregidores. El nuevo Inca también dispuso la abolición del tributo, la *mita* y el diezmo. Además, llegó a prometer la libertad a los negros esclavos de la costa.

Por el dictado para su coronación, Túpac Amaru II denunciaba los maltratos cometidos contra los pueblos originarios, condenaba los abusos de los corregidores y desconocía la autoridad de la corona española. En ese texto se proclamaba *Inca*, *Rey del Perú*, *Santa Fe*, *Quito*, *Chile*, *Buenos Aires y continentes de los Mares del Sud*.

Una de las primeras decisiones de Túpac Amaru II, tras decidir su incorporación al movimiento revolucionario desencadenado por los hermanos Katari, fue el ajusticiamiento del sanguinario corregidor de la provincia de Tinta. A continuación, levantó un impresionante ejército indígena. Tras obtener una indiscutible victoria en la batalla de Sangarará (18 de noviembre), Túpac Amaru II llegó a sitiar el Cuzco en los primeros días de enero de 1781, casi paralelo al cerco de La Paz por los seguidores de los Katari.

Pero las improvisadas tropas indígenas estaban mal armadas y desorganizadas, mientras que los virreyes del Perú y Buenos Aires concentraban en su contra todas las fuerzas militares disponibles. Además, ni los criollos, ni mestizos acomodados acudieron al llamado de Túpac Amaru II y, por el contrario, lo combatieron, incluido algunos poderosos *curacas* indígenas como Mateo García Pumacahua.

La contraofensiva colonialista, que se valía de la forzada participación de miles de aborígenes, se inició a mediados de marzo de 1781, cuando salió del Cuzco, cuyo cerco había sido temporalmente abandonado por los sublevados, un poderoso ejército español al mando del mariscal José del Valle. Derrotadas las fuerzas rebeldes indígenas el 6 de abril, Túpac Amaru II fue apresado en Langui.

A la presión del visitador José Antonio de Areche sobre Túpac Amaru II para que delatara a sus colaboradores, el Inca contestó: «Aquí no hay más cómplices que tú y yo: tú por oprimir al pueblo y

yo por querer liberarlo».[7] La sentencia no demoró, y el 18 de mayo el valiente rebelde fue descuartizado en la plaza pública por cuatro caballos que tiraban de sus miembros en direcciones contrarias. Su familia, incluida su esposa Micaela Bastidas –una de las aguerridas dirigentes de la rebelión–, tampoco escapó al suplicio y la muerte.

El terrible final de Túpac Amaru II no provocó la extinción de la insurrección, verdadera guerra campesina. La dirección de la rebelión quedó en manos de su primo hermano Diego Cristóbal Túpac Amaru y su centro trasladado al Collao, extendiéndose a una parte de la sierra altoperuana y al sur. Los indígenas sublevados llegaron incluso hasta las puertas de la ciudad de Lima.

En forma paralela, otro jefe rebelde, el aymara Julián Apaza –a diferencia de Túpac Amaru II y Tomás Katari no era *curaca* sino un indio de origen humilde–, que adoptó el nombre de Julián Túpac Katari, al frente de más de 40 mil indios, rodeaba La Paz. El asedio indígena a esta villa del altiplano se mantuvo durante varios meses y se considera el acontecimiento militar más importante de la gran rebelión indígena peruana de 1780 a1781.

Capturado también Túpac Katari por los españoles en noviembre de 1781, fue ejecutado con un suplicio similar al del Inca Túpac Amaru II. Según la tradición oral aymara, este jefe rebelde, antes de morir descuartizado en la plaza de Penas el 13 de ese mismo mes, exclamó: «Volveré hecho millones».[8]

Para aplacar la gran insurrección de los pueblos originarios de los Andes, la corona suprimió la institución de los aborrecidos corregidores –sus funciones fueron asumidas por los intendentes– y prometió la supresión de la *mita*. Estas obligadas concesiones, unidas a una cruel represión, permitieron al poder colonial ir poco a poco controlando la situación.

El último capítulo de la rebelión indígena se produjo el 15 de febrero de 1783 cuando fue capturado en Tinta, Diego Cristóbal Túpac Amaru. El movimiento liderado por José Gabriel Condorcanqui repercutió en diferentes partes de Hispanoamérica,

[7] Citado en *Historia de América Andina*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2001, tomo III, p. 343.

[8] Ibídem, p. 348.

al extremo de que se registraron sublevaciones de inspiración *tupamarista* en lugares tan distantes como el norte del Río de la Plata o el Virreinato de Nueva Granada.

La conspiración de Tiradentes en Brasil

Desde principios del siglo XVIII, en Brasil se habían agudizado las contradicciones entre los criollos y los representantes de la corona portuguesa en Minas Geraes por las utilidades provenientes del oro. La apreciable disminución de la producción aurífera, junto al mantenimiento de extorsivos impuestos coloniales y el incremento de las restricciones políticas y comerciales, crearon de nuevo una situación explosiva en el territorio donde ya se habían producido fuertes enfrentamientos entre criollos y portugueses, a principios del siglo XVIII, como la Guerra de los Emboabas y la rebelión de Felipe dos Santos.

Por si esto fuera poco, en 1785 la monarquía de los Braganza había ordenado la extinción de todas las manufacturas textiles en Brasil, lo que afectó de manera particular a los fabricantes de paños de Minas Geraes. En medio de ese clima de descontento, llegaron del exterior varios estudiantes brasileños influidos por la filosofía de la ilustración y la independencia de Estados Unidos, que comenzaron a hacer proselitismo contra los abusos de la metrópoli.

En poco tiempo se fue tejiendo un núcleo criollo, descontento con el orden colonial existente, constituido en su mayoría por acaudalados propietarios de minas. Entre ellos sobresalían Claudio Manuel da Costa, Tomás Antonio Gonzaga e Ignacio José de Alvarenga Peíxoto.

Una de las figuras que pronto descolló en el naciente movimiento contestatario brasileño fue el alférez de caballería Joaquín José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes por su antiguo oficio de dentista. Da Silva Xavier resaltaba entre todos los conspiradores no solo por ser el único de origen humilde, sino también por su vinculación con las masas populares y su fervor revolucionario.

En 1788 los preparativos de la insurrección se aceleraron con la llegada del gobernador colonial de Minas Geraes, Luis Antonio

Furtado de Mendoza, vizconde de Barbacena, al que la metrópoli había encomendado el cobro de las deudas fiscales, conocidas como *la derrama*. Desde hacía varios años los dueños de los yacimientos auríferos habían dejado de pagar los tributos reales alegando la ostensible disminución en la extracción de oro.

Para evitar la erogación obligada de *la derrama*, los criollos prepararon para principios de 1789 una sublevación en Minas Geraes, región que planeaban desempeñara en Brasil el papel que había tenido Virginia en la independencia de Estados Unidos, o sea, la localidad que diera el ejemplo revolucionario al resto de la colonia. Al parecer, el plan preveía establecer una república independiente –con capital en Sao Joao d'El Rei–, que estaría destinada a llevar adelante la emancipación, así como la extinción de los gravámenes atrasados, permitiera el libre tránsito por la colonia y la libertad de comercio.

Para garantizar el éxito del movimiento revolucionario, los conjurados habían establecido contacto con los oficiales criollos de Rio de Janeiro y Sao Paulo. Además, contaban con la colaboración del propio jefe de la fuerza pública de Minas Geraes, el teniente coronel Francisco de Paula Freire Andrade.

Enterado el gobernador de la conspiración *mineira* por la delación de un traidor, suspendió por el momento el cobro de las deudas fiscales y dispuso el encarcelamiento de los principales involucrados en el complot. Con relativa facilidad, los revolucionarios fueron apresados y, tras un dilatado proceso judicial, condenados a diferentes penas, desde el confinamiento y el ostracismo hasta la muerte.

La pena capital fue impuesta a los líderes de la llamada *inconfidencia mineira*, aunque el 20 de abril de 1792 todos los condenados a muerte fueron perdonados y desterrados a África. La única excepción fue Tiradentes que, convertido por la corona en chivo expiatorio, dado su origen humilde, así como por su aureola popular, fue al día siguiente ejecutado y descuartizado.

La fracasada conspiración de Tiradentes se sitúa a medio camino entre las insurrecciones criollas del siglo XVIII, motivadas en lo fundamental por simples reinvindicaciones económicas, y las que se desarrollarían a partir de entonces para conseguir la emancipación. Este paulatino proceso de radicalización política mostraba como de un extremo al

otro del continente se iba agudizando el conflicto entre las metrópolis y sus colonias, compulsado por la explotación económica y comercial a que estaban sometidas todas las posesiones europeas en América.

Para terminar de configurar el clima necesario para la ruptura del orden colonial, se sumaba el régimen de opresión y desigualdad política existente, asociado a la extrema polaridad social y las rígidas reglamentaciones raciales, que crearon las condiciones para la irrupción de auténticos levantamientos populares. Al lado del enfrentamiento entre las colonias y sus metrópolis, entre los europeos beneficiarios del monopolio comercial y los criollos partidarios del libre comercio, latía otra contradicción más profunda: la que existía entre los detentadores del poder económico y los productores desheredados.

Por esa razón, la crisis del régimen colonial en toda la América Latina no solo estaba compulsada por el régimen de opresión política y la explotación económica a que estaban sometidas las colonias americanas por sus metrópolis europeas, sino también por la extrema polaridad social y las rígidas reglamentaciones raciales. Junto a la agudización del conflicto metrópoli-colonia, maduraban las condiciones para el levantamiento de una auténtica revolución de masas, derivada de las contradicciones de una sociedad dividida en clases antagónicas y lastrada por un abigarrado sistema de castas y desigualdades sociales.

Capítulo 4
ESTALLIDO DE LA LUCHA INDEPENDENTISTA

Las luchas por la emancipación, en lo que hoy denominamos América Latina, comenzaron en 1790 con la revolución haitiana y finalizaron con las campañas liberadoras de Simón Bolívar en Perú y Alto Perú, cerradas en forma magistral con la victoria militar patriota en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824. No obstante, la completa liberación del territorio hispanoamericano, con las excepciones de Cuba y Puerto Rico, no se logró hasta 1826. Por tanto, desde 1790 y hasta 1826, durante algo más de treinta y cinco años, se desarrolló la contienda por la primera independencia de nuestra América, aunque la problemática de la emancipación se extendió, de cierta forma, hasta fines de esa misma década (1830).

La liberación de América Latina formó parte de una época de revoluciones que, a escala del mundo occidental, se inauguró a fines del siglo XVIII, bajo el influjo de las concepciones anti feudales y anticlericales de la burguesía europea, cimentadas por el pensamiento ilustrado. El inicio de las revoluciones modernas en las colonias inglesas de Norteamérica y en Europa puso a la orden del día en América Latina el problema de la independencia.

La revolución francesa, muy en especial, proporcionó el lenguaje y los imaginarios políticos, así como las concepciones sobre la naturaleza del vínculo social y de las condiciones de subordinación. La independencia de América Latina se ubica, por tanto, dentro de lo que pudiéramos catalogar de ciclo de las revoluciones burguesas o modernas, orientadas a eliminar los obstáculos al avance capitalista.

En este sentido, los procesos desencadenados en los territorios comprendidos desde Texas hasta la Patagonia, estuvieron conectados con los acontecimientos que sucedían del otro lado del Atlántico, ligados, en forma directa o indirecta, a la revolución francesa y sus secuelas: la crisis política generada por la expansión napoleónica sobre España y Portugal. Un proceso de transformaciones a favor del avance capitalista que en el continente americano se había iniciado desde un poco antes, pues tuvo su preludio con la independencia de las trece colonias inglesas de Norteamérica (1776-1783).

Las revoluciones independentistas latinoamericanas se organizaron en condiciones políticas y económicas muy diversas y adquirieron rasgos singulares en cada región, ya que respondían a diferentes escenarios socioeconómicos. A pesar de sus peculiaridades, todas estaban enlazadas no solo por la lucha común contra la opresión económica y política de las metrópolis europeas y la aparición de embrionarios sentimientos nacionales en los pueblos sublevados, sino también por parecidos fundamentos y similares objetivos que tenían que ver, en última instancia, con la demolición de las trabas al avance capitalista.

En muchas colonias la independencia era dirigida por representantes de los comerciantes, intelectuales y hacendados criollos, mientras la de Haití fue conducida por elementos salidos de los barracones de esclavos. Lo ocurrido en esta colonia francesa fue una muestra de las agudas contradicciones sociales latentes en el hemisferio, como también las constantes rebeliones de esclavos e indígenas ocurridas en todos los siglos coloniales. No obstante, el proceso independentista en América Latina, con las excepciones de Haití y México, fue un movimiento dirigido por la aristocracia criolla.

Las élites de cada localidad, pretendieron manipular en su provecho la inesperada coyuntura externa de extrema debilidad metropolitana de fines del siglo XVIII y principios del XIX, convencidas de su capacidad para ocupar el poder y desplazar a los funcionarios coloniales, sin alterar las bases del viejo sistema de dominación. Eso fue lo que ocurrió, incluso, en un primer momento, en la posesión francesa de Saint Domingue, la más rica economía de plantación del hemisferio.

Louverture y la revolución de los esclavos en Saint Domingue

La Revolución Francesa de 1789 no solo ejerció un enorme impacto ideológico en todo el continente americano, sino que también impulsó el movimiento revolucionario que estremeció a su principal colonia del Caribe: Saint Domingue. Situada en la parte occidental de la posesión hispana de La Española, la colonización francesa de este territorio había sido muy original: se propagó hacia el suroeste de la isla a partir de un pequeño núcleo de bucaneros y corsarios refugiados en sus costas septentrionales desde el siglo XVII.

Después del reconocimiento por España de ese asentamiento francés por la paz de Ryswick (1697), Saint Domingue se convirtió en el territorio más valioso del Caribe y centro de atención de las grandes potencias. Las prósperas plantaciones de azúcar, café y en menor medida añil, algodón y cacao, enriquecieron a los círculos mercantiles del litoral atlántico de Francia y a un reducido grupo de acaudalados terratenientes y comerciantes blancos –los llamados *grandes blancos*– residentes en la isla o en la propia metrópoli.

El extraordinario auge económico de Saint Domingue se sustentaba en un incesante tráfico negrero, que había elevado a casi medio millón la masa de esclavos en la segunda mitad del siglo XVIII, más del 85% de todos sus habitantes, entonces la mayor densidad de esclavos por área de todo el continente americano. Otro rasgo singular de esta colonia francesa era la existencia de un sector emergente de plantadores constituido por mulatos libres –*gente de color* en el léxico de la época– que representaban el 5% de la población. Gracias a la exigua cantidad de propietarios blancos existentes en la colonia –no llegaba al 8% del total de habitantes– y a la protección del *Code Noir* francés de 1685, los plantadores mulatos lograron apoderarse de un cuarto de la tierra cultivable –sobre todo al sur y al oeste–, pese a los rigores de la discriminación racial.

Al calor de la convocatoria francesa de los Estados Generales, los *grandes blancos* quisieron aprovechar la inesperada coyuntura para dominar el gobierno de Saint Domingue, establecer el comercio libre y asegurar el mantenimiento de la trata y la esclavitud, así como

perpetuar sus privilegios. Por ello los plantadores y ricos comerciantes blancos enviaron sus representantes a Versalles y crearon, a fines de 1789, sus propias legislaturas en las tres provincias de la colonia.

En abril de 1790, los *grandes blancos* inauguraron en Saint Marc, pequeña población de la costa central, la llamada *Asamblea General de la Parte Francesa de Santo Domingo*, que se pronunció por reformar el sistema monárquico absolutista. A este congreso solo tuvieron acceso los representantes blancos de los propietarios de más de 20 esclavos.

Para demostrar su desprecio hacia los mulatos y negros libres, se ordenó a las tropas que custodiaban la reunión impedir la entrada a las *gentes de color*. La manifiesta hostilidad de este cónclave hacia la burocracia colonial condujo al gobernador, Conde de Peynier, a disolverla por la fuerza el 8 de agosto de 1790, tras catalogar a sus miembros de enemigos del rey.

Casi a la par, los plantadores mulatos comenzaban a exigir el cumplimiento de las resoluciones igualitaristas de la Asamblea Nacional francesa del 8 de marzo de 1790. Los peticionarios fueron víctimas de sangrientas represalias en la isla, mientras en la metrópoli sus gestiones resultaban infructuosas, a pesar del apoyo del club filantrópico parisino de *Los amigos de los negros* –en realidad de los mulatos. Uno de los líderes del movimiento, Vincent Ogé, regresó a Saint Domingue el 23 de octubre de 1790 y exigió la igualdad civil y el derecho de sufragio.

Perseguido, a Ogé no le quedó otra alternativa que levantarse en armas con algunos de sus partidarios. Negado a dar participación a los esclavos, el líder mulato fue aislado, derrotado y ejecutado salvajemente, el 25 de febrero de 1791. Desde ese momento los mulatos y negros libres comprendieron que todos los blancos, sin distinción de clases, incluyendo a las autoridades coloniales, no pensaban concederles los derechos a que aspiraban, lo que explica que se sucedieran nuevas rebeliones como las de André Rigaud y el ex esclavo negro Henri Christophe.

Fue entonces, el 14 de agosto de 1791, cuando comenzó la gran sublevación de esclavos en el norte –donde se concentraba más de la mitad de los trabajadores negros forzados–, que arrebató la dirección

del proceso revolucionario en ciernes a los plantadores mulatos. La insurrección comenzó al llamado de un sacerdote *vodú* de origen jamaicano, el esclavo Boukman, quien no sobrevivió a los primeros combates. Entre los jefes más importantes de la rebelión figuraban Jean Francois Papillón, George Biassou y Toussaint Louverture.

El alzamiento esclavo se extendió por todas las llanuras del norte, la parte más rica de la colonia, aunque su influencia fue menor en las plantaciones del sur y el oeste, protegidas del contagio revolucionario por un verdadero dique de puestos fortificados construidos apresuradamente por los colonos. Así, mientras el norte quedaba destruido y bajo control de los esclavos sublevados –a excepción de la atrincherada ciudad de Cabo Francés–, en el sur y el oeste la contienda continuaba entre realistas blancos y revolucionarios mulatos, sin alterar el riguroso régimen de trabajo de las plantaciones.

Tres comisarios (Polvérel, Ailhaud y Sonthonax) se presentaron con plenos poderes el 18 de septiembre de 1792, acompañados de abundantes efectivos militares. La llegada a la isla de los delegados de la revolución francesa coincidió con el derrocamiento de Luis XVI, acontecimiento que convirtió definitivamente a los plantadores blancos en defensores de la causa realista.

Para aumentar las diferencias entre los *grandes blancos* y los funcionarios recién llegados de la metrópoli, los comisarios pusieron en vigor la prohibición de la trata, decretada en París el 4 de abril de 1792. Además, hicieron cumplir la plena igualdad civil entre blancos, mulatos y negros libres y sustituyeron las exclusivistas asambleas coloniales por una comisión intermediaria que otorgaba igual representación a blancos y *gente de color*.

Las disposiciones metropolitanas avivaron las airadas sublevaciones de los *grandes blancos* en Cayes, Jacmel y Port-au-Prince, aunque la más extendida fue la de Cabo Francés, pues tenía el concurso del ejército comandado por el propio gobernador, general Francois Thomas Galbaud, rico propietario de esclavos. Para enfrentar la rebelión contrarrevolucionaria, el comisario Sonthonax solo disponía en el norte de un pequeño contingente militar leal, aunque al sur y el oeste lo apoyaban las fuerzas de los jefes mulatos Rigaud, Beauvais,

Villate y de un antiguo artesano libre, también mestizo, llamado Alexandre Petion, declarado a favor de la república francesa.

El 13 de abril de 1793 estas tropas heterogéneas lograron tomar por asalto Port-au-Prince, mientras Sonthonax, para no perder el Cabo, llamaba en su ayuda a los miles de esclavos rebeldes del norte, a los cuales ofreció la libertad si combatían a su lado. La ocupación de esta ciudad por los ejércitos negros el 21 de junio estuvo acompañada de saqueos, destrucciones y la fuga de miles de colonos blancos y del ejército de Galbaud hacia Luisiana, Cuba y otras regiones vecinas. De esta manera, los *grandes blancos* quedaron prácticamente liquidados como clase.

Todos estos hechos tuvieron lugar en el verano de 1793, cuando en Europa arreciaba la lucha entre la Francia revolucionaria y la reacción internacional, tras la ejecución de Luis XVI, lo que dio el pretexto a Inglaterra y España para intervenir en Saint Domingue. Los españoles se pusieron en contacto con los principales jefes negros, prometiéndoles la libertad y riquezas si pasaban a su servicio. George Biassou, Jean Francois, Toussaint Louverture, Jean Jacques Dessalines y Henri Christophe aceptaron la oferta y permitieron que las fuerzas hispanas, reforzadas desde Cuba, penetraran desde el este en territorio de Saint Domingue.

Por su lado los ingleses, respaldados por los colonos blancos y una parte de los plantadores mulatos, asustados ante el curso radical de la revolución, desembarcaron casi al mismo tiempo por diferentes puntos de la isla y se apoderaron de Jerémie, Mole Saint Nicolas, Saint Marc, Leogane, Port-au-Prince, La Arcahie, así como de las colonias francesas de Martinica y Guadalupe.

Acorralado por la amenaza simultánea de las fuerzas militares inglesas y españolas, sin posibilidad de recibir refuerzos de la asediada república francesa y contando en la práctica solo con el apoyo de las fuerzas de los mulatos Rigaud, Beauvais y Villate, así como de un reducido grupo de *pequeños blancos* que habían hecho suyas las ideas revolucionarias, Sonthonax, en una decisión tan audaz como desesperada, abolió la esclavitud: último recurso para preservar la soberanía gala en la isla. El 29 de agosto de 1793, en una solemne ceremonia celebrada en el engalanado y semidestruido Cabo Francés,

Sonthonax proclamó la libertad absoluta de los esclavos y sus plenos derechos como ciudadanos de Francia. Saint Domingue se convirtió en el primer territorio americano sin esclavitud, situación validada por la convención francesa el 4 de febrero de 1794.

Louverture aprovechó la oportunidad para romper su infeliz colaboración con los españoles (18 de mayo de 1794). Acompañado por Dessalines, Christophe, Charles Belair y su sobrino Moysse, entre otros jefes negros, Louverture derrotó en fulminantes operaciones a sus antiguos compañeros Jean Francois y Biassou, quienes mantenían su alianza con España, e impidió que los ingleses se apoderaran de Gonaives. Los impresionantes éxitos militares de Louverture, a nombre de la república francesa, se consolidaron en octubre de 1795 cuando se conoció la paz de Basilea.

Por medio de este tratado, impuesto por la Francia revolucionaria a España, la isla de La Española pasó íntegramente a la soberanía francesa, a la vez que se licenciaban y expatriaban las tropas auxiliares negras de Jean Francois, Biassou y Gil Narciso. En recompensa por sus méritos de guerra, la convención ascendió al grado de generales de brigada a los mulatos Rigaud, Bauvais y Villate, así como a un ex esclavo que bordeaba los 50 años: Louverture.

Eliminada España, la contienda prosiguió contra Inglaterra. Pero cuando las fuerzas de Louverture, Rigaud y Beauvais se enfrascaban en la lucha contra los británicos, el general Villate se apoderó *manu militari* del Cabo e impuso su propio gobierno, respaldado por una camarilla de mulatos ricos. El 30 de marzo de 1796, el ejército de Louverture atacó la ciudad y liberó al gobernador francés Etienne Laveaux. En agradecimiento, Louverture fue nombrado segundo gobernador y ascendido a general de división.

La trayectoria ascendente del jefe negro antiesclavista continuó después gracias a sus decisivas victorias sobre los ocupantes ingleses, lo que le valió el nombramiento de comandante en jefe del ejército francés en Saint Domingue (mayo de 1797). Tras el regreso a Francia de Laveaux y Sonthonax, Louverture asumió también el gobierno de la colonia y se consagró a la tarea de expulsar a los ingleses con la activa colaboración de los ejércitos sureños guiados por Rigaud. En esas condiciones, Inglaterra tuvo que pactar la evacuación de sus

desmanteladas fuerzas, minadas por las enfermedades tropicales, el 31 de agosto de 1798.

Más adelante, Louverture derrotó también a los líderes mulatos (Rigaud, Petion y Beauvais), adueñados de todo el territorio sureño. Este resultado facilitó su plan para apoderarse de la vecina colonia española de Santo Domingo (enero de 1801), en cumplimiento de lo dispuesto en Basilea (1795), pues consideraba que la isla era indivisible. En calidad de gobernador vitalicio de toda La Española (constitución del 8 de julio de 1801), Louverture promulgó varias leyes encaminadas a revivir la arruinada economía de la colonia.

Para tratar de revitalizar las grandes plantaciones, ofreció devolverlas a los colonos blancos –en el sur y el oeste los propietarios mulatos se encargaron de llenar el vacío dejado por los *grandes blancos*– y garantizar una mano de obra estable con los antiguos esclavos, convertidos en peones libres adscriptos a la tierra mediante un sistema de trabajo asalariado obligatorio. Los generales negros jefes de distritos, muchos de ellos antiguos esclavos, eran a la vez inspectores de cultivos, encargados de velar por la disciplina de los trabajadores, incluida la prohibición del cambio de residencia.

Independencia de Haití: Dessalines y Petion

El 1 de febrero de 1802 apareció frente a las costas de Saint Domingue un poderoso cuerpo expedicionario francés de más de 20 mil hombres, a las órdenes del general Victor Emmanuel Leclerc, enviado por Napoleón con el propósito de devolver la isla a su viejo *status*. En esta empresa colonialista se habían enrolado varias destacadas figuras exiliadas de la *gente de color*, Rigaud, Villate, Petion y Jean Pierre Boyer –devenidos en enemigos irreconciliables de Louverture–, lo que facilitó que todo el sur se pronunciara a favor de los invasores.

Los descarnados planes restauradores de Leclerc y las noticias del restablecimiento por los franceses de la esclavitud en Martinica y Guadalupe, levantaron la tenaz resistencia de los ejércitos negros. Muy en especial Christophe en Cabo Francés, Dessalines en Saint

Marc y Maurepas en Port-au-Prince, hicieron fiera oposición al desembarco francés, retirándose después a las montañas para proseguir la lucha.

La imposibilidad de derrotar a los ex esclavos en los campos de batalla, llevó a Leclerc a pactar con los principales jefes negros el 6 de mayo de 1802. El acuerdo permitió a los colonialistas franceses inmovilizar a sus contrincantes y deportar a Louverture, quien murió preso en el fuerte de Joux en Francia el 7 de abril de 1803.

Con posterioridad, las bárbaras e indiscriminadas represiones –que incluían medidas punitivas contra los jefes mulatos– terminaron por provocar una sublevación generalizada, iniciada a partir de espontáneos levantamientos campesinos. El primer oficial importante en rebelarse fue el general negro Charles Belair, que incendió otra vez el norte y el oeste. Entre los alzados que lo imitaron en el oeste (13 de octubre de 1802) estaba ahora Petion, convertido en decidido partidario de la expulsión de los franceses y de abolir la esclavitud, único camino para estabilizar al país.

A fines de ese mes, Dessalines y Christophe, presionados por la creciente sublevación popular contra los franceses, levantaron las tropas bajo su mando y también se incorporaron a la lucha. De esta manera se forjó un bloque de clases, antiesclavista y de liberación nacional, cuyos vértices eran los antiguos esclavos y los propietarios mulatos y que tenía a Dessalines de líder indiscutido, como se evidenció por su destacado papel en el congreso de Arcahaie del 15 al 18 de mayo de 1803.

La ofensiva patriota de la *Armée Indigéne*, como denominaron a su ejército, dirigida por Petion en el sur y Dessalines en el oeste, acorraló a las tropas francesas (julio de 1803) en unos cuantos puntos: Port-au-Prince, Saint Marc, Jacmel, Cabo Francés, Mole Saint Nicolas y Los Cayos.

Las fuerzas francesas, dirigidas por el Vizconde de Rochambeau tras la muerte de Leclerc, fueron expulsadas de esos sitios entre los meses de julio y octubre. Los últimos reductos colonialistas, el Cabo y Mole Saint Nicolas, se rindieron como consecuencia de la batalla de Vertieres, el 18 de noviembre de 1803, que determinó la aplastante derrota del ejército francés, ya diezmado por la fiebre amarilla.

El 1 de enero de 1804, ante una imponente multitud reunida en Gonaives, el máximo jefe de los patriotas, Dessalines, ratificado en esa condición por un segundo congreso nacional, proclamó la constitución de la República de Haití. De esta forma, el primer estado independiente de América Latina, adoptó el viejo nombre aborigen de la región montañosa de la isla.

Dessalines, coronado emperador el 8 de octubre de 1804, adoptó una serie de disposiciones revolucionarias que aseguraron la irreversibilidad de la abolición de la esclavitud, el reparto de tierras entre los campesinos desposeídos y la prohibición a los extranjeros blancos de tener propiedades en Haití. Pero la historia posterior de Haití, tras el asesinato de Dessalines (1806), quedaría ensombrecida por las violentas pugnas por el poder entre la tradicional élite mulata del sur y el oeste y la emergente capa de terratenientes, conformada por los generales negros, apropiados de las abandonadas plantaciones de los antiguos colonos blancos.

Repercusión de la revolución haitiana

Los acontecimientos haitianos tuvieron un enorme impacto en todo el continente y, muy en especial, en el Caribe, alentando las luchas liberadoras de la discriminada población negra y mulata y las dotaciones de esclavos. Rebeliones de esclavos ocurrieron desde 1793 en distintas islas del Caribe, tanto de las Antillas Mayores como Menores –Guadalupe, San Vicente, Grenada y otras–, así como en otras partes del hemisferio.

Al igual que había ocurrido en Saint Domingue, mulatos y negros libres impusieron un gobierno propio en la isla de Guadalupe el 5 de enero de 1793, para respaldar las leyes anticlericales e igualitaristas de la revolución francesa, proceso de cambios interrumpido por la ocupación de fuerzas británicas. Levantamientos de esclavos se produjeron entonces en Trois Rivières, en la propia Guadalupe, que se repitieron los días 28 y 29 de agosto de 1793 en Sainte-Anne, reprimidos con violencia por los plantadores blancos, con ayuda del ejército inglés.

El 6 de mayo del siguiente año se presentaron en la isla fuerzas republicanas de Francia, encabezadas por el comisario francés Víctor Hugues. Con el auxilio de las milicias locales de mulatos y negros libres, así como de ex esclavos, derrotaron y expulsaron a los ocupantes ingleses, que debieron abandonar a su suerte a los grandes propietarios y evacuar la isla en septiembre.

Hugues hizo cumplir en esta pequeña colonia antillana el decreto francés de abolición de la esclavitud y expandió la influencia revolucionaria a Santa Lucía y Grenada. Su proselitismo llegó hasta otras islas vecinas, contribuyendo a las luchas liberadoras de los cimarrones en Jamaica y de los caribes en San Vicente. La legendaria figura de este apasionado representante de la revolución francesa sirvió de inspiración al narrador cubano Alejo Carpentier para su conocida novela *El siglo de las luces*.

Con el apoyo de Hugues, las fuerzas autóctonas de Grenada, partidarias de la revolución francesa y de la abolición de la esclavitud, dirigidas por el mulato Julien Fédon, derrotaron también en esta isla a los ingleses, el 8 de abril de 1795, aunque al final fueron vencidos y masacrados. También tropas británicas desembarcaron en Santa Lucía el 27 de abril de 1796 y, al precio de numerosas bajas, derrotaron a los defensores locales de la república francesa, constituidas en lo fundamental por mulatos y antiguos esclavos, cuyos líderes fueron deportados a África.

Por su parte, el cacique de los garífunas de la isla de San Vicente, Joseph Chantoyer, al frente de la resistencia contra los colonialistas ingleses, fue asesinado el 14 de marzo de 1795. Su muerte fue el preludio de la derrota de los llamados caribes negros, ocurrida al año siguiente, pueblo que en castigo fue repatriado a la isla de Roatán y Belice (1797).

Al igual que había ocurrido en Saint Domingue, en Bayamo, en la porción oriental de Cuba, se vertebró en 1795 un movimiento parecido al que cuatro años antes había estremecido Haití dirigido por Ogé. El 9 de agosto de ese año, el mulato Nicolás Morales, pequeño campesino de la localidad, comenzó el proselitismo para exigir a las autoridades de la villa el cumplimiento de una supuesta cédula real que había concedido la igualdad a los pardos y negros

libres. Detectado por las autoridades españolas, los comprometidos fueron capturados y Morales ejecutado.

Por su parte, en la región de Coro, en la Capitanía General de Venezuela, el negro libre José Leonardo Chirino, quien había visitado Haití, encabezó en la serranía, el 10 de mayo de 1795, una revuelta de centenares de esclavos, zambos e indios, así como negros y mulatos libres, que reclamaban la aplicación de la «ley de los franceses», la abolición de privilegios y alcabalas. Aplastada la sublevación –en la que también figuraban como líderes Cristóbal Acosta y José Caridad González–, Chirino fue ejecutado el 10 de diciembre de 1796, y su cabeza exhibida en una jaula de hierro en el camino hacia los valles de Aragua y Coro.

También bajo el impacto de los acontecimientos haitianos, dos centenares de esclavos del ingenio de Boca de Nigua en Santo Domingo, se sublevaron el 30 de octubre de 1796, exigiendo la libertad, a la que se consideraban con derecho, pues la colonia española había pasado nominalmente a Francia según lo estipulado por la paz de Basilea (22 de julio de 1795) y, en consecuencia, debían aplicarse en este territorio las leyes igualitaristas y abolicionistas de la revolución francesa, vigentes en la parte occidental de la isla. Los sublevados fueron aplastados por las tropas españolas, que todavía estaban en la colonia, y sus líderes ejecutados y descuartizados, entre ellos la llamada Reina Ana María y su marido.

Un carácter peculiar tuvo la llamada revuelta de los *alfaiates* (sastres) en Bahía, que involucró trabajadores libres negros y mulatos, esclavos y artesanos, que exigían la igualdad, el fin de las restricciones a los oficios, el comercio libre y la abolición de la esclavitud. Incluso parece que la llamada *inconfidencia bahiana* acarició la posibilidad de proclamar una república independiente. Aplastados sin contemplaciones por las autoridades portuguesas el 13 de agosto de 1798, los que no fueron encarcelados resultaron muertos, entre estos sus cuatro principales dirigentes, los artesanos mestizos Lucas Dantas, Luis Gonzaga das Virgens, Joao de Deus y Manuel Faustino.

El 19 de mayo de 1799 las autoridades de la Capitanía General de Venezuela descubrieron una conspiración igualitarista en Maracaibo que, al parecer, tenía conexiones con los revolucionarios

de Saint Domingue. El complot estaba encabezado por el sastre mulato Javier Pirela, oficial de las milicias de pardos y morenos, y el negro libre Joseph Francisco Suárez. Más de sesenta personas fueron arrestadas y Pirela enviado preso a La Habana.

Como ocurrió en Haití cuando Francia pretendió restablecer la esclavitud en sus colonias, en Guadalupe estalló, el 11 de mayo de 1802, la resistencia armada de los antiguos esclavos, encabezada por el coronel mulato Louis Delgrés, contra las tropas napoleónicas llegadas cuatro días antes. Ante su inminente derrota, Delgrés terminó inmolándose el 28 de mayo de ese año, junto a trescientos de sus hombres, para no caer prisioneros de los franceses.

También las conquistas de la revolución haitiana inspiraron en Cuba la extendida conspiración igualitarista liderada por el artesano mulato José Antonio Aponte en 1812. Abortada con una despiadada represión por las autoridades coloniales de la isla, Aponte, junto a otros implicados, fue condenado a muerte. Decapitado el 9 de abril de ese año, su cabeza exhibida en una céntrica esquina de La Habana.

La revolución haitiana ejerció una influencia extraordinaria en todos estos acontecimientos y en el propio proceso emancipador de la América hispana y Brasil que estaba a punto de comenzar, aunque fue un impacto contradictorio. Por un lado, el imaginario de Haití soliviantó a los esclavos de las plantaciones y actuó como catalizador de la revolución y la independencia, mientras, por el otro, fue retranca de esos mismos procesos, al atemorizar a la élite criolla ante las imponderables consecuencias que se podían derivar de cualquier alteración del *status quo*.

Pero Haití no solo impactó en la liberación de Hispanoamérica al irradiar por todo el hemisferio el ideario revolucionario y la fuerza de su ejemplo, sino también como una sólida y activa retaguardia para el movimiento independentista. El territorio haitiano proporcionó una segura base de operaciones a los patriotas americanos, como fue el caso de la expedición libertadora del venezolano Francisco de Miranda en agosto de 1806.

Miranda y la liberación del continente colombiano

En el caso de Hispanoamérica, los acontecimientos siguieron en sus primeros momentos un curso muy diferente al radicalismo de la revolución haitiana. El movimiento que conduciría a la independencia comenzó a despuntar desde fines del siglo XVIII y principios del XIX, como expresión de las crecientes contradicciones de los criollos con los comerciantes monopolistas y autoridades coloniales españolas.

El reformismo borbónico y los mayores requerimientos fiscales establecidos por la metrópoli en la segunda mitad del siglo XVIII, paralelo al auge de la economía agrario exportadora, llevó a muchos hispanoamericanos a reaccionar en forma airada frente a lo que consideraban un gobierno despótico, pues los funcionarios designados por los Borbones venían imbuidos de una mentalidad cada vez más colonialista. A las reivindicaciones de las élites iberoamericanas y, sobre todo, su ala más aburguesada, se sumaron las influencias procedentes de la ilustración europea y el ejemplo de la revolución independentista de las trece colonias inglesas de Norteamérica. Esta última se convertiría en un verdadero referente para muchos criollos, al haber logrado armonizar la emancipación política con el mantenimiento de la esclavitud y el *status quo* social.

Uno de los que más temprano recibió este impacto fue el venezolano Francisco de Miranda. *El Precursor*, como le ha llamado la historiografía, fue el primer criollo que se dio a la tarea de vertebrar un amplio movimiento continental para conseguir la independencia de España, después de participar en la guerra de independencia norteamericana (1781), como oficial del ejército español, del que desertó en La Habana en 1783. Con posterioridad, colaboró en forma activa de la revolución francesa y llegó a ser ascendido al grado de mariscal de campo (25 de agosto de 1792).

Desde 1790, Miranda concibió un ambicioso proyecto para la liberación e integración de las colonias hispanoamericanas. Pocos meses después de su llegada a Estados Unidos, tras abandonar el ejército hispano en Cuba, Miranda comenzó a plantear de manera explícita su propósito de «hacer la revolución en las provincias

españolas de la América del Sur»,[1] las que concebía emancipadas como un solo estado, al que puso el nombre de Colombia, comprendiendo desde el Misisipí hasta la Patagonia.

Prueba de que el ambiente hispano americano se iba haciendo propicio para el movimiento anticolonial fue la conspiración de José María España y Manuel Gual en Venezuela, vertebrada sin conexión alguna con Miranda. Este complot independentista comenzó a fraguarse cuando Gual y España ayudaron a escapar de la cárcel de La Guaira, en Venezuela, el 4 de junio de 1797, a los revolucionarios españoles Juan Bautista Picornell y Manuel Cortés Campomanes. Pero el levantamiento previsto para el 16 de julio de ese año fue abortado por las autoridades coloniales y sus líderes obligados a escapar a las Antillas.

Los jefes del movimiento revolucionario venezolano llegaron a redactar un programa –las ordenanzas de 1798–, a componer un himno –la *Canción Americana*– y publicar la *Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano*, en su versión radical de 1793 y no la moderada de 1791. Un tiempo después, José María España fue capturado por las autoridades españolas en La Guaira, cuando pretendía internarse en Venezuela. Ejecutado el 8 de mayo de 1799 en la plaza central de Caracas, su cadáver fue desmembrado y como escarmiento su cabeza fijada en una enorme viga en el camino de la costa a la capital venezolana.

En un ambiente que comenzaba a caldearse, Miranda organizó en Londres en 1797 un proyecto de cuerpo representativo continental denominado *Plan para la formación, organización y establecimiento de un gobierno libre e independiente en América meridional*. El 22 de diciembre de ese mismo año firmó, junto a José del Pozo y Manuel José de Salas, como representantes hispanoamericanos, el *Acta de París*, que recoge las gestiones que consideraban necesarias para conseguir la independencia de las colonias españolas.

En 1801, *El Precursor* preparó un bosquejo de gobierno provisional en su *Proclama a los Pueblos del Continente Colombiano (alias*

[1] Carmen L. Bohórquez Morán, *Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de la América Latina*, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello/Universidad del Zulia, 2002, p. 99.

Hispano-América) y se dio a la tarea de organizar la primera expedición independentista de la historia hispanoamericana. El 3 de agosto de 1806, la pequeña flota libertadora de Miranda, integrada por cientos de hombres, entre ellos varios sudamericanos, desembarcó en la costa venezolana (La Vela de Coro).

Los expedicionarios se apoderaron sin dificultad de un fortín español e izaron la bandera que habían diseñado como estandarte de Colombia, enarbolada por primera vez en el puerto haitiano de Jacmel, donde habían hecho escala previa, el 12 de marzo de ese año. En Venezuela, *El Precursor* dio a conocer también su *Proclama a los habitantes del Continente Américo-Colombiano*, aunque la falta de apoyo lo obligó pronto a reembarcarse y buscar refugio en las Antillas Menores.

De nuevo en Londres, Miranda vertebró una singular organización secreta para hacer proselitismo en los territorios hispanoamericanos, a la que pertenecieron, entre otros criollos, el cubano José Antonio Caro, el peruano José María de Antepara, el chileno Bernardo O´Higgins y el neogranadino Antonio Nariño. Este último se encontraba en Londres desde 1795, tras escapar de una cárcel española en la que estaba recluido por la impresión y distribución en Nueva Granada de la declaración francesa de *Los derechos del Hombre* de 1789.

No obstante, los denodados esfuerzos a favor de la independencia hechos por *El Precursor*, las condiciones todavía no estaban maduras para el éxito de una empresa de esa naturaleza. Pero la labor proselitista de Miranda daría un inesperado giro a raíz de los acontecimientos de 1808, que le hicieron acariciar la posibilidad de alcanzar de inmediato la emancipación hispanoamericana.

Hay constancia, desde abril de 1809, de que *El Precursor* se comunicó con los principales cabildos hispanoamericanos, entre ellos los de México, Buenos Aires, Lima, La Habana y Caracas, para que aprovecharan la inesperada coyuntura creada por la invasión napoleónica a la península ibérica y se hicieran del poder. Con el mismo propósito, Miranda comenzó a editar en Londres, desde el 15 de marzo de 1810, su periódico *El Colombiano*, que circuló por los territorios hispanoamericanos llamando a aprovechar la formación de juntas de gobierno para hacer la independencia.

Inicio del movimiento juntista

A principios de 1808 el pueblo español se sublevó y formó gobiernos locales o juntas para dirigir la lucha contra los ocupantes franceses de Portugal (1807) y España (1808), que habían desalojado de sus tronos a las monarquías respectivas. Como parte de ese proceso, se formó en Sevilla ese mismo año, en nombre de Fernando VII, una Junta Central que desde 1810 fue sustituida por un Consejo de Regencia con sede en Cádiz, el único territorio español no ocupado por tropas napoleónicas.

Estos acontecimientos tuvieron hondo impacto en Hispanoamérica. Al principio los funcionarios coloniales vacilaron ante las nuevas autoridades impuestas por Napoleón, pero enseguida terminaron por subordinarse al gobierno establecido en Cádiz. En cambio, las élites criollas consideraban ilegítimas a las autoridades gaditanas, impuestas sin su participación, y exigían la formación de juntas en América, que tuvieran por base a los cabildos, pues se negaban también a reconocer a los franceses por razones de orden social y económica.

A la existencia de un imaginario hostil a la revolución francesa de 1789 entre la élite criolla –que había estimulado revueltas de esclavos y otros movimientos sociales en varios territorios hispanoamericanos y Brasil–, se sumaba la preocupación de plantadores y comerciantes ante una posible paralización del comercio. Si las colonias españolas aceptaban la soberanía francesa, la poderosa Inglaterra, dueña de los mares desde la batalla de Trafalgar (1805) y en guerra con Francia, se encargaría de obstaculizar toda actividad económica y mercantil de los territorios hispanos en América, que serían considerados adversarios.

Por otra parte, la ocupación de la península ibérica por las fuerzas napoleónicas, obligó a Inglaterra a variar su tradicional postura hacia Hispanoamérica, para buscar un acercamiento con los españoles frente al enemigo común. Hasta entonces, Inglaterra había enfilado su política al arrebato de colonias a España, Francia y Portugal.

En 1795, después de creada la alianza franco-española, el gobierno británico se había dedicado también a propiciar la independencia de las colonias hispanas, con el propósito de encontrar nuevas vías

para incrementar su comercio, colocar sus manufacturas en el vasto mercado americano y adquirir las materias primas indispensables para el desarrollo de su industria. De ahí que Gran Bretaña, sin abandonar su tradicional política colonialista, ejemplificada con la ocupación de Trinidad (1797), las fracasadas invasiones al Río de la Plata (1806-1807) y el proyecto del general Arthur Colley Wellesley para ocupar Nueva España, apoyara los planes independentistas de Miranda y sus expediciones a Venezuela (1806).

Pero desde el 4 de julio de 1808 todo este panorama varió. El gobierno inglés declaró, de manera solemne, que a partir de esa fecha la «nación española es nuestra amiga natural y aliada».[2] En respuesta a la solicitud de ayuda formulada por las juntas peninsulares y la monarquía portuguesa, tropas británicas desembarcaron en Lisboa (1808) y la Coruña (1809), para contribuir a la expulsión de los invasores franceses.

Obligado a mantener una actitud favorable hacia la integridad del sistema colonial hispano, el gobierno londinense debió renunciar por el momento a sus aspiraciones de conquista en América. La coyuntura, permitió a Inglaterra aumentar en forma significativa su comercio con los territorios hispanoamericanos –de los que cada vez más dependía la producción industrial británica–, compulsado por el bloqueo continental decretado por Napoleón (1807) y favorecido por el ventajoso tratado firmado con el representante español en Londres el 14 de enero de 1809.

En esta compleja coyuntura internacional, la promoción de juntas hispanoamericanas por parte de los ricos criollos tenía por objetivo, rechazar la intervención francesa en España y conservar el trono a Fernando VII, lo que en la práctica significaba la autonomía colonial e impedía la paralización del comercio, e incluso su legalización, con Inglaterra y Estados Unidos. Aunque en un principio la mayoría de los criollos no deseaban renunciar a sus vínculos históricos con la metrópoli, principal garante frente a cualquier levantamiento de masas y con la que tenían amplios y viejos lazos –culturales, religiosos, de idiosincracia, etc.–, la formación de juntas

[2] Mariano Picón Salas, *Miranda*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972, p. 135.

en América –opuestas a la pretensión de los funcionarios coloniales de reconocer al Consejo de Regencia– condujo al desplazamiento del poder de las autoridades tradicionales y abrió de manera inevitable el conflicto entre unos (realistas) y otros (juntistas).

El primer intento de establecer una junta de gobierno en las Indias antecedió a la creación del mencionado consejo de regencia y tuvo por teatro a Nueva España, en agosto de 1808, y contó con el entusiasta respaldo del propio virrey, que había caído en desgracia por sus vínculos con el favorito Manuel Godoy de la defenestrada corte borbónica. Pero de manera inmediata se produjo la violenta reacción peninsular organizada por el consulado y la audiencia que con el concurso del cuerpo de voluntarios de Fernando VII –en su mayoría empleados de almacenes, recién llegados de España– desterró al virrey y apresó a los principales jefes criollos.

Un movimiento parecido se gestó en Venezuela el 24 de noviembre de ese mismo año, cuando 45 ricos propietarios criollos, encabezados por el futuro marqués de Casa León, entregaron un memorial al capitán general solicitando la creación de una junta. La petición fue rechazada y los principales comprometidos encausados.

También en La Habana un grupo de acaudalados criollos, entre los cuales descollaba Francisco de Arango y Parreño, intentó el 17 de julio de 1808 convencer al capitán general marqués de Someruelos de la conveniencia de formar una junta, pero el plan fue abandonado por la hostilidad de la intendencia de la real hacienda, la superintendencia de tabacos y la comandancia de la marina, con el apoyo de comerciantes españoles. Desde ese momento, los grandes propietarios de ingenios, hatos de ganado y cafetales de Cuba, en especial los del occidente de la isla, se inclinarían cada vez más a satisfacer sus demandas en acuerdo con la metrópoli, conscientes de la necesidad de preservar un fuerte aparato estatal que garantizara la tranquilidad de las dotaciones de esclavos que constituían más de un tercio del medio millón de habitantes de la isla.

Las juntas de 1809 en Charcas y Quito: primeros enfrentamientos armados

Las juntas hispanoamericanas que formaron parte de un segundo brote en 1809 tampoco buscaban la separación de España, aunque fueron aplastadas sin contemplaciones por la airada reacción de las autoridades tradicionales españolas. Nos referimos a las constituidas en las audiencias de Charcas y Quito (hoy Bolivia y Ecuador, respectivamente), lugares donde el descontento de la élite criolla se había incrementado por ser las únicas colonias no convidadas a enviar representantes a la metrópoli, pues solo estaban facultados para hacerlo los virreinatos y capitanías.

La represión realista se ensañó con el movimiento de La Paz por la manifiesta inclinación radical impuesta por algunos de los dirigentes criollos, entre ellos el mestizo Pedro Domingo Murillo, presidente de la *Junta Nacional Representativa de Tuición*, más conocida como *Junta Tuitiva de los Derechos del Rey y del Pueblo*, y el cura José Antonio Medina, verdadero ideólogo del movimiento altoperuano. Los rebeldes paceños quemaron las listas de deudores al fisco real, eliminaron la alcabala indígena y elaboraron un audaz programa de gobierno.

Estas medidas revolucionarias, despertaron el respaldo de sectores populares de la ciudad de La Paz, pero no tuvieron eco en el resto del altiplano y obligaron, ante el rechazo de los virreyes de Lima y Buenos Aires, a disolver la *Junta Tuitiva* (30 de septiembre). Esto no fue óbice para que el virrey del Perú, José Fernando de Abascal –había proclamado su incondicionalidad a Fernando VII y la guerra a los franceses–, aplastara sin contemplaciones la resistencia de los paceños en los altos de Chacaltaya y en los bosques y montañas de Yungas, así como también la rebelión indígena de Mojos, liderada por el cacique Muiba. De pasada, Abascal consiguió adscribir de nuevo el rico territorio de Charcas al Virreinato del Perú, del que había sido segregado en 1776.

Los enfrentamientos armados de octubre de 1809 en el Alto Perú, resultaron los primeros entre criollos y realistas ocurridos en toda Hispanoamérica y fueron seguidos de crueles ejecuciones de los

principales dirigentes de la *Junta Tuitiva*. Entre los sancionados a la máxima pena estaba Murillo, quien antes de morir en el patíbulo, en enero de 1810, vaticinó que no se extinguiría la antorcha que había encendido.

En cambio, la más moderada junta de los marqueses en Quito, pues la encabezaban los marqueses de Selva Alegre, de Solanda, de Miraflores y de Villa Orellana–, surgida el 10 de agosto de 1809, fue disuelta en forma incruenta por el *Real de Lima*, poco más de dos meses después, ante la apatía de la población criolla, mestiza e indígena. Aunque las juntas hispanoamericanas formadas por las élites criollas en 1809 en Quito y el Alto Perú fueron disueltas sin contemplaciones por las fuerzas realistas, una segunda ronda se desencadenó en 1810.

1810: COMIENZO DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA

La tercera oleada juntista se desarrolló en distintas ciudades hispanoamericanas al conocer las noticias referidas a la caída de Sevilla en manos de los franceses y del refugio en Cádiz de la Junta Suprema, sustituida allí a fines de enero de 1810 por un Consejo de Regencia. El nuevo órgano de gobierno metropolitano, en nombre de Fernando VII, revocó anteriores medidas que beneficiaban los territorios americanos. Los puertos atlánticos, fueron los primeros en reaccionar a estos graves hechos, que parecían indicar el fin de toda resistencia en España

La sensación de inseguridad, ante lo que se consideraba inminente vacío de poder, condujo a la formación en 1810 de juntas autónomas en varias ciudades hispanoamericanas: Caracas (19 de abril), Cartagena (22 de mayo), Buenos Aires (25 de mayo), Santa Fe de Bogotá (20 de julio), Santiago de Chile (18 de septiembre) y Quito (19 de septiembre). Incluso, la conspiración que abortó en La Habana en octubre de 1810, dirigida por el rico criollo Román de la Luz, parece un movimiento dirigido en la misma dirección. Al año siguiente, también se estableció un gobierno autónomo en Asunción (14 de mayo) y se produjeron intentos infructuosos en San Salvador (5 de noviembre).

A partir de la creación en 1810 de estas juntas, por lo general en capitales de virreinatos, capitanías o audiencias, el movimiento pronto se extendió a las localidades y territorios que estaban bajo su jurisdicción. El surgimiento de juntas autónomas, dominadas por los criollos, no implicaba todavía un movimiento separatista –por ejemplo, la de Caracas se denominó de manera sintomática *Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII*–, pues sus pretensiones se limitaban al rechazo de la soberanía francesa y de la Regencia establecida en Cádiz, reivindicaciones comerciales y al establecimiento de la igualdad con los españoles.

A partir de la constitución de las juntas de 1810 comenzó, en la práctica, la guerra de independencia hispanoamericana, desarrollada *grosso modo* en dos etapas: 1810-1815 y 1816-1826. La primera de ellas, fue desencadenada por la formación de las juntas de gobierno en las principales capitales de la América del Sur y se caracterizó, en sentido general, por anárquicos enfrentamientos armados con los realistas, en donde cada foco de la rebelión actuaba acorde a su propia estrategia de lucha. Los escenarios principales de la contienda, que apenas se iniciaba, fueron los territorios de Venezuela, Nueva Granada, Quito, Río de la Plata y Chile, así como México, aunque aquí con rasgos bien singulares.

En todas las antiguas posesiones españolas de América se vertebró al mismo tiempo una corriente reformista, nutrida también con representantes de las clases privilegiadas que, temerosa de las consecuencias del enfrentamiento armado con la metrópoli, depositó sus esperanzas de cambios y libertades comerciales, igualdad de derechos entre criollos y españoles e incluso gobiernos autónomos en la buena voluntad hispana, ilusiones alentadas por la presencia de diputados americanos en las cortes de Cádiz. Por ese motivo, durante los períodos de funcionamiento de las Cortes y el régimen constitucional, primero de 1810 a 1814 y, después, de 1820 a 1823, algunos criollos trataron de alcanzar sus objetivos en el foro metropolitano.

La limitada presencia de los delegados americanos en relación a su población, junto a la arbitraria designación de algunos de ellos, restó expectativas y credibilidad a las Cortes. La discriminación en la elección de los delegados, los propios debates en las Cortes y las

escasas conquistas estampadas en la constitución gaditana, convencieron a muchos criollos, sobre todo a partir del fracaso del trienio liberal (1820-1823), que ni siquiera la victoria final del liberalismo daría la plena igualdad a los territorios americanos. La falta de voluntad de los representantes españoles, cegados por sus estrechos intereses metropolitanos, para dar respuesta favorable a las modestas peticiones de los diputados americanos, unido a la posterior reimplantación del absolutismo con la disolución de las Cortes (mayo-octubre de 1823) y al desarrollo exitoso de la guerra emancipadora en la América hispana, terminaron por desilusionar a muchos diputados criollos.

Desde los comienzos de la lucha por la independencia de la América hispana, se pusieron de manifiesto sus limitaciones, derivadas de la conducción de la élite criolla que, con la excepción del levantamiento del sacerdote Miguel Hidalgo en el Virreinato de Nueva España, pretendía romper la dominación española sin afectar la tradicional estructura socioeconómica. De ahí que en muchos sitios del continente, la participación popular en la contienda fuera muy limitada o incluso adversa a la emancipación.

En casi todas las colonias hispanoamericanas, el proceso emancipador comenzó con muchas indefiniciones, pues no solo se establecieron gobiernos autónomos, que seguían reconociendo la soberanía de Fernando VII, sino que también evitaban cualquier reivindicación social. Las juntas, como la de Buenos Aires o Santiago de Chile, se limitaron a disponer o legalizar, la libertad de comercio –el Consejo de Regencia había reiterado su prohibición el 2 de junio de 1810–, para satisfacción de sus encumbrados promotores criollos, perjudicados con los privilegios mercantiles de los peninsulares y las incapacidades del mercado metropolitano para absorber a plenitud la producción agropecuaria de sus colonias.

Para resistir la tácita insubordinación que significaba la formación de juntas en la América hispana, se agruparon en el bando realista los funcionarios, grandes comerciantes, arrendatarios e intermediarios de los monopolios de la corona, en su mayoría españoles, y el alto clero que, en virtud del real patronato, formaba parte de la poderosa burocracia colonial. A través de la Iglesia, y valiéndose del fanatismo religioso o de las tradiciones paternalistas de la monarquía hispana,

los realistas –a cuyas filas se integró el sector más conservador de la aristocracia criolla, temeroso de perder sus privilegios y ver afectados sus intereses económicos– lograron en muchas ocasiones manipular a capas y clases populares, –artesanos, peones, esclavos y pueblos indígenas– para situarlos contra la independencia. Este fenómeno, se manifestó con mucha fuerza en el sur de Chile, en las dos primeras repúblicas venezolanas y en Santa Marta, Popayán y las provincias suroccidentales de Nueva Granada.

En los principales teatros del conflicto bélico, la lucha se vio lastrada desde sus inicios por los intereses clasistas de la élite criolla. La hegemonía de las capas privilegiadas hispanoamericanas en el proceso emancipador, significó el predominio de fuerzas sociales –terratenientes y grandes propietarios en general– que ocupaban con muchas limitaciones el lugar de una burguesía, en la práctica casi inexistente.

A pesar de las agudas contradicciones sociales latentes en Hispanoamérica, el proceso independentista estalló como un movimiento exclusivo de las clases privilegiadas, convencidas de su capacidad para ocupar el poder y desplazar a los funcionarios coloniales, sin alterar las bases del viejo sistema de dominación. Para este sector aristocrático, puesto a la cabeza de la lucha, la independencia se concebía como una especie de conflicto en dos frentes: «hacia arriba», contra la metrópoli, y «hacia abajo», para impedir las reivindicaciones populares y cualquier alteración del *statu quo*.

La adopción del proyecto independentista por los criollos, puso sobre el tapete el problema del tipo de independencia a que se aspiraba, esto es, al dilema latente a todo lo largo del ciclo emancipador latinoamericano de romper el orden colonial con o sin transformaciones revolucionarias. Las reivindicaciones sociales de esta época no eran solo la supresión del diezmo, de monopolios comerciales y viejos tributos y gravámenes, sino también la eliminación de la servidumbre indígena y, sobre todo, la abolición de la esclavitud.

En realidad, el tema de la esclavitud era la piedra de toque de la independencia, y lo que definía entonces el sentido revolucionario o conservador de la contienda anticolonialista, disyuntiva que sacudió todo el movimiento emancipador latinoamericano. La independencia a que aspiraba entonces la élite criolla era al estilo

norteamericano, pues para este sector social Estados Unidos era el modelo y no la revolución haitiana o la revolución francesa –con cuyas conquistas soñaban las clases explotadas y la intelectualidad radical–, que provocaron más temores que adhesiones en la élite hispanoamericana, asustada ante la gran violencia social desatada en estos procesos.

Los ricos propietarios de las colonias, abogaban por una independencia sin cambios de envergadura; una separación de las respectivas metrópolis europeas que mantuviera la esclavitud y todo el viejo orden de la sociedad. El carácter moderado que constituía el denominador común del movimiento juntista hispanoamericano, limitado prácticamente al establecimiento de la libertad de comercio, contrastaba con la airada revolución popular que el 16 de septiembre de 1810 estalló violentamente en las áreas rurales de México y la cual, en sentido estricto, poco tenía que ver con los estrechos objetivos y restringidas fuerzas motrices del juntismo hispanoamericano, proceso eminentemente urbano y elitista.

Revolución de Hidalgo y Morelos en México

La revolución anticolonialista que estremeció al Virreinato de Nueva España, el territorio más poblado de Hispanoamérica, fue uno de los movimientos genuinamente populares de la independencia. Iniciado a partir de una conspiración criolla en el norte minero de México, tenía al frente a un cura ilustrado de 57 años, Miguel Hidalgo, así como a varios miembros de la aristocracia provinciana, entre ellos los oficiales de las milicias reales Ignacio Allende y Juan Aldama.

El levantamiento comenzó en septiembre de 1810 cuando Hidalgo sublevó al pueblo de Dolores y las poblaciones vecinas con una emocionada arenga contra las autoridades coloniales y en defensa de la religión católica y Fernando VII, ante el peligro de que la invasión francesa de la metrópoli se extendiera a Nueva España. La promesa formulada desde el principio por Hidalgo de devolver las tierras de comunidad a sus legítimos dueños y la desesperación

producida por la vertiginosa subida de los precios del maíz, le atrajo el ferviente apoyo de los peones e indígenas, convertidos en la fuerza motriz de la primera revolución mexicana.

Junto a los *gañanes*, trabajadores de las minas y campesinos pobres que seguían el estandarte de Hidalgo –la virgen de Guadalupe–, se incorporaron también artesanos, intelectuales, miembros del bajo clero e incluso algunos hacendados criollos. Con esas heterogéneas fuerzas, que pronto sumarían decenas de miles de hombres, los insurgentes avanzaron rumbo sur.

En esa arrolladora ofensiva, Hidalgo y Allende se apoderaron en forma sucesiva de Celaya (20 de septiembre), Guanajuato (28 de septiembre) y Valladolid (19 de octubre). En esta última ciudad, que hoy lleva el nombre de Morelia, el cura rebelde, vistiendo por primera vez una elegante casaca militar y nombrado *Capitán General del Ejército de Redención de las Américas* abolió la trata, la esclavitud y el tributo indígena.

El punto culminante de esta vertiginosa ofensiva se alcanzó con la ajustada victoria militar sobre el ejército realista en la larga y costosa batalla del monte de las Cruces (30 de octubre), que despejó de enemigos el camino hacia la lujosa sede virreinal. Pero Hidalgo, de manera inexplicable, prefirió regresar (2 de noviembre) al norte y eludir el choque con las fuerzas españolas que a marcha forzada avanzaban desde San Luis Potosí en auxilio de la capital.

El carácter de verdadera rebelión campesina –como se demostró en la sangrienta ocupación de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato– que tenía el movimiento de Hidalgo, determinó la alianza del grueso de la aristocracia mexicana –la más numerosa y rica de Hispanoamérica– con la burocracia peninsular, el alto clero y los propietarios españoles, para evitar las imprevisibles consecuencias de una revolución «desde abajo». A partir de entonces, el principal sostén del régimen colonial en Nueva España residió en las propias clases privilegiadas criollas, que suministraron sus mejores cuadros a la oficialidad realista.

Dividido el ejército insurgente entre los partidarios de Ignacio Allende y los de Hidalgo, tras el revés de los patriotas en Aculco (Querétaro) el 7 de noviembre de 1810, el cura rebelde marchó a

Guadalajara el día 26, donde permaneció durante mes y medio. Aquí Hidalgo dictó una serie de decretos revolucionarios que confirmaron sus anteriores disposiciones, eliminaban impuestos, estancos y monopolios a la vez que revelaban su creciente inclinación a la ruptura total con España, aun cuando formalmente continuara declarando fidelidad a Fernando VII e inclusive llegara a emitir monedas con su efigie.

No obstante, la vocación independentista de Hidalgo se reflejó claramente en la orientación del periódico *Despertador Americano*. La inclinación de Hidalgo a la independencia se desprende de sus últimas disposiciones, escritos y decretos, en especial aquellos que distinguían a los criollos de los españoles y que fueron publicados en el *Despertador Americano*, encaminados a la forja de la nación mexicana.

En uno de sus artículos en ese periódico insurgente, el 3 de enero de 1811, el cura rebelde se autoproclamó «Padre y Libertador», comparándose con George Washington. Además, llegó a exhortar a los criollos a unirse «al ímpetu de toda una nación levantada por su independencia».[3]

La inevitable proclamación de la emancipación de España quedó trunca por la ofensiva enemiga sobre Guadalajara. El 17 de enero de 1811, las fuerzas del sacerdote de Dolores –reforzadas con los restos de las tropas de Allende, batido poco más de un mes antes en Guanajuato–, a pesar de su abrumadora superioridad numérica, fueron derrotadas por el disciplinado y mejor armado ejército regular realista en el riachuelo del puente Calderón.

Los sobrevivientes, comandados ahora por Allende, pues Hidalgo fue despojado del mando militar, se replegaron más al norte, dirección que seguían cuando fueron sorprendidos en una emboscada, fraguada por un traidor, en las afueras de Monclova (Coahuila), el 19 de marzo de ese año. Condenados a muerte, Hidalgo, Allende y Aldama fueron ejecutados.

Después de este trágico desenlace, la dirección insurgente pasó a un criollo letrado que había sido íntimo colaborador de Hidalgo,

[3] *La Independencia de México*, tomo I, México, Secretaría de Educación Pública, 1985, pp. 150 y 154.

Ignacio López Rayón, quien se empeñó en evitar una mayor radicalización del movimiento. Con ese fin, formó el 18 de agosto de 1811 la junta de Zitácuaro (Michoacán), que juró fidelidad a Fernando VII e intentó llegar a un entendimiento con los realistas.

Al rumbo claudicante que tomaba el gobierno de López Rayón se opuso decididamente un vocal de la junta, el cura mestizo de 46 años José María Morelos. A diferencia de Hidalgo, su antiguo maestro y jefe, Morelos operaba en una región menos poblada –la tierra caliente–, pero contaba con un ejército mucho más efectivo –basado en contingentes más reducidos, aunque bien armados e instruidos–, conformado por peones y rancheros indígenas y mestizos, así como algunos ex esclavos negros.

Gracias a su excelente capacidad combativa, que combinaba la lucha guerrillera con los métodos de la guerra regular, las tropas de Morelos se anotaron, en la segunda mitad de 1811, una cadena de victorias al sur del virreinato (Taxco, Tlapa, Cuautla), convertido –tras la caída de Zitácuaro en enero de 1812– en el nuevo centro de la insurrección mexicana. Más importantes aún fueron los triunfos obtenidos a fines de 1812 y principios de 1813 por destacamentos del ejército sureño guiados por el cura Mariano Matamoros, el hacendado Nicolás Bravo, el arriero Vicente Guerrero y el ranchero Hermenegildo Galeana.

Con ese respaldo, Morelos extendió su control a Tehuacán (noviembre de 1811), Oaxaca (noviembre de 1812) y Acapulco (abril de 1813) y redujo el área meridional realista solo a unos pocos puertos y villas fortificados. Los territorios liberados eran los centros de cultivo del azúcar y la grana, segundo producto de la economía novohispana.

Fue en el transcurso de esta exitosa ofensiva que Morelos, que firmaba sus bandos y decretos como *Siervo de la Nación*, lanzó su célebre *Proyecto de confiscación de bienes de españoles y criollos españolizados*, donde reguló la expropiación y repartos de tierra entre los desposeídos, no solo para privar de recursos al enemigo, sino también por su afán de democratizar la propiedad rural. Para institucionalizar la revolución y sustituir a la desprestigiada junta de Zitácuaro, Morelos, reunió en Chilpancingo, el 14 de septiembre

de 1813, al *Supremo Congreso Nacional de América*, integrado por 17 delegados de la intelectualidad criolla y el bajo clero, entre ellos los antiguos miembros de la junta de Zitácuaro: Carlos María de Bustamante, Andrés Quintana Roo, Ignacio López Rayón y el cura José María Cos.

A la asamblea de Chilpancingo, Morelos presentó un programa revolucionario de 23 puntos denominado *Sentimientos de la Nación*. En ese histórico documento, el líder insurgente profundizaba las medidas de Hidalgo al abogar por la abolición de la esclavitud y el sistema de castas, la liquidación de todos los gravámenes feudales y de la desigual distribución de la riqueza. Morelos también se pronunció por el principio de la soberanía popular, el respeto a la religión católica, el libre comercio y la proclamación de la independencia, propuestas que el Congreso secundó al declarar la separación de España (6 de noviembre de 1813) y aprobar medidas contra la explotación feudal y la discriminación racial.

El 22 de octubre de 1814, el cónclave, reunido ahora en Apatzingán –debido al obligado repliegue patriota tras las pérdidas de Valladolid y Puruarán– aprobó una constitución republicana y centralista, inspirada en principios de la ilustración. La primera carta fundamental de la *América Mexicana*, como se denominó a la nueva nación, no incluía en su texto, sin embargo, las medidas revolucionarias de Hidalgo y Morelos, pues muchos de sus autores eran ricos propietarios criollos atraídos al campo patriota por los esfuerzos de Rayón para moderar el tono de la revolución.

Fue entonces cuando el ejército realista, reforzado con la llegada masiva de tropas españolas y la movilización de buena parte de la alta sociedad criolla, amenazó la existencia del congreso patriota, tras la caída de Oaxaca y Acapulco y la muerte de los valiosos jefes Matamoros y Galeana. Obligado a proteger a los diputados de los intensos ataques enemigos, Morelos fue hecho prisionero en Texmalaca (Puebla) el 5 de noviembre y fusilado el 22 de diciembre de 1815. Su muerte y la dislocación del ejército rebelde en pequeñas partidas insurgentes permitieron el progresivo y casi absoluto restablecimiento del poder colonial en México.

Primera república venezolana

A diferencia de México, estremecido por la revolución popular de Hidalgo y Morelos entre 1810 y 1815, en los restantes territorios hispanoamericanos sublevados contra España la lucha se vio lastrada durante esos mismos años por los intereses clasistas de la élite criolla. Aunque comprometida en muchas colonias con la insurrección, los ricos criollos pretendían romper la tutela metropolitana sin afectar la tradicional estructura socioeconómica.

En Venezuela incluso, las autoridades españolas lograron indisponer a las masas populares con la independencia y movilizarlas para estrangular al gobierno criollo establecido en abril de 1810. Eso fue posible debido a que el movimiento emancipador venezolano era, desde el comienzo, un asunto exclusivo de los grandes plantadores, conocidos como *mantuanos*, que controlaban la junta suprema y temían una rebelión de sus esclavos negros.

Una de las primeras medidas adoptadas por la junta criolla de Caracas fue el envío de delegados a las provincias y representantes a Inglaterra y Estados Unidos, entre los que se encontraban los hermanos Vicente y Simón Bolívar, encumbrados plantadores. La propia junta declaró el comercio libre, suprimió la alcabala y disminuyó impuestos, pero ninguna medida efectiva que manifestara sincera preocupación por los problemas sociales de la colonia.

El primer congreso de Venezuela se reunió en Caracas el 2 de marzo de 1811, cuando arreciaba el bloqueo decretado por España. Entre los delegados escogidos por las provincias rebeldes venezolanas figuraba el legendario general Francisco de Miranda, ya sexagenario, quien acababa de regresar de Inglaterra después de más de cuatro décadas de ausencia, salvo su fugaz estancia en el litoral de 1806. El inesperado retorno de *El Precursor* a su tierra natal era en parte resultado de sus contactos en Londres con el joven Simón Bolívar.

Desde su arribo a Venezuela, Miranda se convirtió en el eje de las discusiones políticas, pues era partidario de la inmediata ruptura con España, que buena parte de la élite *mantuana* rechazaba. Lo más destacado de las sesiones del primer congreso venezolano fue

la labor desplegada por el ala criolla republicana para conseguir la proclamación de la independencia.

Gracias al respaldo de la población humilde capitalina, los partidarios de Miranda obtuvieron la necesaria base de masas para arrancar a la aristocrática asamblea la primera declaración de independencia de toda la América Hispana (5 de julio de 1811). Más adelante, el propio cónclave aprobaría –pese a la oposición de Miranda, Bolívar y otros diputados– una constitución (23 de diciembre) calcada del patrón norteamericano, que establecía el régimen federal para las siete provincias venezolanas y la división en tres de los poderes del Estado.

La carta fundamental instituyó la primera república de Venezuela y reconoció a la religión católica como oficial. Además, adoptó como bandera la tricolor (amarilla, azul y roja) usada por Miranda en 1806, abolía la trata –para congraciarse con los ingleses que la habían prohibido desde 1807–, los títulos nobiliarios, el régimen de castas y establecía la igualdad legal.

Todas estas disposiciones mostraban un abstracto radicalismo, que los *mantuanos* pretendían combinar con una total indiferencia ante la difícil situación de la mayoría de los habitantes de la antigua capitanía y el mantenimiento de la esclavitud. A estas limitaciones, que contribuyeron a restarle base social a la primera república, se sumaron los desastrosos efectos del bloqueo español, que paralizó las exportaciones agropecuarias y provocó una aguda escasez de alimentos. Para agravar más las cosas, la emigración de muchos ricos propietarios a las Antillas condujo a una abrupta falta de circulante que el papel moneda emitido por la junta no logró atenuar.

En ese contexto adverso, se produjo, el 11 de julio de 1811, la sublevación de los inmigrantes canarios en las llanuras cercanas a Caracas y la ocupación española de Valencia. Ante el fracaso del marqués del Toro para desalojar a los realistas de esta estratégica ciudad, el gobierno *mantuano* se vio obligado a designar a Miranda al frente de las milicias republicanas, quien logró recuperar la villa el 13 de agosto, después de encarnizados combates y a un alto precio en muertos y heridos.

Pero ese triunfo no evitaría los éxitos de la contraofensiva realista capitaneada por el isleño Domingo Monteverde. Para lograrlo,

se valió del desaliento provocado por el terremoto del 26 de marzo de 1812 –reportó miles de muertos en las áreas republicanas–, catástrofe explotada por la iglesia para confundir a la población. En su avance, Monteverde se apoderó fácilmente de Barquisimeto (2 de abril) y Valencia (3 de mayo), casi al mismo tiempo que las provincias de Mérida y Trujillo se pronunciaban por la causa realista.

Como un recurso desesperado para salvar la república, el Congreso acordó, antes de disolverse, nombrar a Miranda jefe del ejército republicano (23 de abril) y dictador (3 de mayo). De inmediato, *El Precursor* utilizó sus amplias facultades para imponer la ley marcial, solicitar ayuda a Inglaterra y Estados Unidos y lanzar una exhortación a los esclavos donde ofrecía la liberación –los dueños serían indemnizados– a cambio de su servicio militar (14 de mayo). Fortificado en los pasos que dan acceso a Caracas, Miranda resistió durante tres meses los fieros ataques de Monteverde.

La pasividad de su estrategia y el descontento de la oficialidad criolla por la preeminencia dada a los militares extranjeros traídos por Miranda, más la traición de los *mantuanos* que bajo cuerda pactaban con los realistas, fueron factores que contribuyeron a desmoralizar las filas republicanas. La caída del castillo de Puerto Cabello (30 de junio), al mando del inexperto coronel Bolívar, unido a la inesperada sublevación de 4 mil esclavos de los valles de Barlovento y Tuy que, instigados por los españoles, amenazaban Caracas, selló la suerte de la primera república.

El 25 de julio de 1812, Miranda aceptó la capitulación de San Mateo si se permitía la salida de sus principales colaboradores y se promulgaba la constitución liberal española de 1812. Apresado en la Guaira, cuando se disponía a abandonar el territorio venezolano, por un grupo de jóvenes exaltados guiados por Bolívar, que consideraban el pacto como «capitulaciones vergonzosas»,[4] Miranda fue entregado a los realistas que lo encarcelaron en Puerto Cabello.

[4] Simón Bolívar, *Obras Completas*, tomo I, Caracas, Editorial Piñango, [s.f.], p. 53.

Patria boba neogranadina y efímero gobierno criollo en Quito

Tras el fracaso de la primera república de Venezuela, Bolívar y otros patriotas, escapados de la represión realista, buscaron refugio en el vecino Virreinato de Nueva Granada, en buena parte controlado por los insurgentes criollos. Pero aquí el proceso emancipador, como en Venezuela, no solo tenía una impronta elitista, sino estaba también debilitado por la lucha fratricida que envolvía a sus provincias, limitaba la participación popular e impedía la unidad patriótica y la consolidación de la independencia.

Desde julio de 1810, la mayor parte de las provincias neogranadinas habían sustituido a las autoridades coloniales por juntas de gobierno controladas por los grandes propietarios criollos de cada localidad. Sin embargo, las regiones sublevadas contra la metrópoli habían evolucionado a un irremediable conflicto con la antigua capital virreinal.

Las causas de esta contradicción se relacionaban con la aspiración de la élite criolla de Bogotá de conservar sus viejos privilegios capitalinos, entre ellos el control de las rentas fiscales, aun cuando también tenía su base en las enormes diferencias regionales de Nueva Granada. Separadas las provincias entre sí por las malas comunicaciones y una accidentada geografía, cada una de ellas había seguido su propio derrotero.

Las del litoral atlántico y, muy en particular, Cartagena tenían una economía más abierta al exterior, que favoreció el surgimiento de un pequeño sector de propietarios que con algunos esclavos producían azúcar, cueros y algodón. También, utilizando trabajadores forzados de origen africano, prosperaba en Antioquia la minería aurífera –principal artículo de exportación del virreinato– y las haciendas del valle del Cauca que la abastecían de productos agrícolas.

En cambio, en el altiplano oriental, donde está Bogotá, así como en las regiones suroccidentales, predominaba la economía natural de los grandes terratenientes enfeudados, beneficiados por el trabajo *concertado* (*mita* agrícola) de los indios salidos por temporadas de los resguardos. Tanto aquí como en el altiplano de Cundinamarca,

donde había un extendido campesinado mestizo libre, la artesanía constituía una de las actividades económicas fundamentales.

Las abismales diferencias regionales de Nueva Granada se pusieron de relieve en el primer congreso criollo reunido en Bogotá, el 22 de diciembre de 1810. La reunión se disolvió sin acuerdos por los problemas derivados del reconocimiento de gobiernos locales que pretendían desgajarse de sus provincias matrices: Cartagena y Tunja. El fracaso de la asamblea y la manifiesta inclinación de las provincias a desconocer la jurisdicción de la junta capitalina, dio por resultado que esta ciudad convocara su propio congreso.

El 19 de enero de 1811, una reunión «de notables», promovida por la aristocracia criolla de la vieja capital virreinal, estableció el *Reino de Cundinamarca*, limitada su jurisdicción a la sabana de Bogotá y regiones cercanas. Los mismos delegados reconocieron los derechos soberanos de Fernando VII, los privilegios de la Iglesia y encargaron del Poder Ejecutivo a José Tadeo Lozano como *Vicegerente del Rey*, siguiendo las bases del *Plan de Arreglo* de Camilo Torres para el funcionamiento de la disuelta junta.

Frente al gobierno monárquico y elitista de Lozano se vertebró en la capital un ala criolla republicana liderada por Antonio Nariño, el ya mencionado hacendado neogranadino que había pasado parte de su vida en la cárcel o el destierro y colaborado con Miranda en Londres. Como resultado de una intensa campaña de prensa que exigía el desconocimiento de la soberanía de Fernando VII y la inmediata separación de España, Nariño desalojó a Lozano del gobierno y ocupó la presidencia de Cundinamarca en septiembre de 1811, casi paralelamente a la radicalización del proceso en Cartagena.

En el principal puerto neogranadino, ese fue el resultado de la vigorosa actuación de los hermanos Vicente Celedonio, Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres, que le imprimieron al movimiento revolucionario en Cartagena un carácter anti español y anti aristocrático, con el respaldo de los mulatos y negros libres del barrio de Getsemaní, encabezados por el herrero mulato de Matanzas (Cuba) Pedro Romero. El 4 de febrero de 1811, las fuerzas populares aplastaron un intento sedicioso de los comerciantes españoles aliados al regimiento *Fijo* acantonado en Cartagena.

Nueve meses después, los mulatos y negros libres armados impusieron a la moderada junta aristocrática criolla de esa ciudad portuaria, presidida por el abogado y hacendado José María García de Toledo, el *Acta de Independencia*, tanto de España como de Bogotá. El 15 de junio de 1812, se aprobó la constitución igualitarista del *Estado de Cartagena de Indias*, por un congreso dominado por el pueblo humilde, que al año siguiente también dispuso la confiscación y reparto de todos los bienes de los enemigos de la emancipación.

En medio del ascenso revolucionario de Cartagena y Bogotá se reunió, a principios de noviembre de 1811, otro congreso nacional con la presencia de representantes de todas las provincias. A propuesta del delegado de Pamplona, Camilo Torres, el cónclave aprobó el día 27 de ese mes un acta de federación que dejaba constituidas las Provincias Unidas de la Nueva Granada y rechazaba la jurisdicción del Consejo de Regencia español, aun cuando eludía cualquier pronunciamiento relativo a la independencia. Torres deseaba confederar las provincias, que cada una tuviera su administración y autonomía, ateniéndose al esquema de la constitución de Estados Unidos.

Contra la imitación del modelo político del federalismo norteamericano, se irguió Nariño desde su sede gubernamental en la ciudad de Bogotá. A partir de ese momento se intensificó el diferendo entre el gobierno de Nariño (Cundinamarca), partidario de un sistema centralista y de la preeminencia de la antigua capital virreinal, y el congreso general de Nueva Granada, propulsor del régimen federalista, que tenía como principal figura a Camilo Torres y por base geográfica la provincia de Tunja.

La disputa entre centralistas y federalistas se hizo más agria por las exigencias del congreso para que Cundinamarca entregara sus rentas –casa de moneda, estanco del tabaco y salinas, que eran las principales fuentes del fisco neogranadino–, disolviera su ejército y renunciara a la anexión de territorios. Esta contradicción no tarde en desembocar en enfrentamientos armados fratricidas.

Las luchas intestinas en el campo patriota facilitaron el repunte de la reacción colonialista en el litoral atlántico y en las provincias suroccidentales, así como en la región de Quito. En la serranía quiteña se había vuelto a formar, tras la sangrienta represión del *Real*

de Lima el 2 de agosto de 1810 contra la población local, una nueva junta criolla organizada por Carlos Montúfar, hijo del marqués de Selva Alegre (19 de septiembre).

El congreso de representantes de la antigua presidencia de Quito, reunido poco más de un año después, proclamó su soberanía el 11 de diciembre de 1811 y adoptó una bandera roja con aspa blanca. No obstante, mantuvo el reconocimiento a Fernando VII en la propia declaración y en la constitución adoptada el 15 de febrero de 1812 con el nombre de *Artículos del Pacto Solemne de Sociedad y Unión entre las Provincias que forman el Estado de Quito*.

Las pugnas entre un sector de la aristocracia quiteña que presionaba para romper todo vínculo con España, encabezado por Jacinto Sánchez de Orellana, marqués de Villa Orellana, sobre el grupo moderado pro monárquico del marqués de Selva Alegre y su hijo Carlos Montúfar, dividió a los criollos y facilitó la ofensiva realista encabezada por el mariscal de campo Toribio Montes. A favor de estas fuerzas actuaba también la falta de apoyo popular al gobierno de Quito, en particular entre la población negra e indígena del Patía, Barbacoas y Pasto, reclutados por el gobernador realista Miguel Tacón, mediante la oferta de tierras, suspensión del pago de tributos y manumisión de la esclavitud.

Ni siquiera los desesperados llamados a la resistencia, formulados por el obispo–presidente José Cuero y Caicedo, pudo impedir el inevitable desenlace. La división entre sanchistas y montufaristas, facilitó la toma de la capital por sus enemigos realistas el 8 de noviembre de 1812.

La campaña admirable de Bolívar: segunda república de Venezuela

Fue en esas críticas circunstancias cuando llegó a Cartagena el grupo de venezolanos escapados del desastre de la primera república. Para defenderse del ataque enemigo, el gobierno de Cartagena designó a Bolívar al frente de sus desorganizadas milicias, con cuyas fuerzas el joven caraqueño pasó desde fines de diciembre de 1812

a la ofensiva contra los puntos españoles fortificados en el bajo Magdalena. De victoria en victoria, Bolívar se situó pronto en la misma entrada de Venezuela (Cúcuta), donde desarticuló a las avanzadas de Monteverde.

En premio por sus fulminantes éxitos, que limpiaban de tropas realistas todo el norte de Tunja y abrían la comunicación del interior con Cartagena, el complacido congreso federal neogranadino ascendió a Bolívar al grado de general y le dio la jefatura del ejército destacado en la frontera con Venezuela. Ello le ofreció la oportunidad de reemprender, en mayo de ese año, la liberación de su tierra natal.

Mediante una vertiginosa ofensiva, las fuerzas patriotas guiadas por Bolívar, procedentes de Nueva Granada, integradas por soldados y oficiales venezolanos refugiados en Cartagena y tropas neogranadinas, ocuparon Mérida (23 de mayo de 1813) y Trujillo (10 de junio de ese mismo año). En esta última villa, Bolívar firmó su controvertido decreto de *Guerra a Muerte*, dirigido a impulsar la formación de una conciencia nacional, castigar los desmanes realistas e impedirles la manipulación de las masas populares. La estratégica decisión del *Libertador*, estaba motivada por la manifiesta apatía popular hacia la causa republicana que encontraba en su avance por territorio venezolano, en contraste con el fervor que dejaba atrás en la población neogranadina.

Después de obtener más triunfos militares, en los que se destacaron los jefes José Félix Ribas y Rafael Urdaneta, Bolívar dio cima a su *campaña admirable* –no sufrió ni una sola derrota– liberando las ciudades de Valencia (2 de agosto) y Caracas (6 de agosto), que dejaron acorralado a Monteverde detrás de las gruesas murallas de Puerto Cabello. La cadena de reveses sufridos por los realistas en los meses siguientes, sirvió para confirmar el triunfo republicano y determinaron la sustitución de Monteverde por Juan Manuel Cajigal.

En forma casi simultánea con la ofensiva de Bolívar, se produjo la invasión por el opuesto extremo oriental de Venezuela de un grupo de patriotas a las órdenes de Santiago Mariño, un rico hacendado de 23 años. El 13 de enero de 1813, Mariño y sus seguidores desembarcaron en Güiria procedentes de Trinidad, su refugio después de la reconquista española. Con un pequeño ejército formado por

peones y esclavos de la hacienda familiar y algunos emigrados de las Antillas, Mariño se apoderó de Irapa (15 de enero) y Maturín (20 de marzo), en una veloz ofensiva acompañado del mulato Manuel Piar, José Francisco Bermúdez y Antonio José de Sucre y que casi coincidió con la sublevación de Juan Bautista Arismendi en la isla Margarita (3 de junio).

Más tarde, con el respaldo de la escuadrilla comandada por el italiano Giussepe Bianchi, contratado por los rebeldes, las fuerzas de Arismendi y Mariño se lanzaron sobre la capital del oriente venezolano (Cumaná), donde derrotaron a las huestes del feroz jefe español Eusebio Antoñanzas, lo que les permitió ocupar Barcelona el 19 de agosto. Con estos formidables éxitos, Mariño se apoderó en menos de ocho meses de todo el litoral este de Venezuela (Cumaná, Barcelona y Margarita), una región poco devastada por la guerra y que proporcionaría a los patriotas una sólida base agrícola y ganadera.

La doble victoria obtenida por los patriotas costeños en el oriente y los andinos en el occidente, permitió a Bolívar instaurar ante un congreso de «notables» la segunda república, distinta de la anterior porque el *Libertador* –nombrado así por primera vez por el agradecido pueblo de Caracas– concedió mayor autoridad al Ejecutivo, tal como previera en su *Manifiesto de Cartagena* (1812). Aunque Bolívar aplicó una guerra sin cuartel contra los españoles y sustituyó a las anárquicas milicias del primer gobierno criollo por un ejército regular bien entrenado, no supo comprender las amargas experiencias derivadas de la falta de un programa social, pese a ser el más preclaro representante de la élite *mantuana*.

Las mismas limitaciones de clase que hicieron naufragar la primera república dieron ahora al traste con la segunda, cuando los españoles lograron atraer a su bando a las grandes masas explotadas del campo. Esa fue la obra de dos criminales jefes realistas, el asturiano José Tomás Boves y el canario Francisco Tomás Morales.

Valiéndose de promesas demagógicas y del odio ancestral de los llaneros mestizos contra los opulentos *mantuanos*, Boves logró levantar tras el pabellón español a los peones y vaqueros semisalvajes del interior venezolano, jinetes expertos en el enlace de ganado, el contrabando de cueros y el empleo de la lanza. Para ganar la guerra a los

republicanos, *el terrible asturiano* no vaciló en soliviantar el régimen de castas, saquear las propiedades de los ricos criollos y ofrecer la libertad a los esclavos. La amenaza palpable de un masivo e incontenible levantamiento esclavo y la rebeldía llanera, junto a la división del campo patriota –Mariño, declarado *Jefe Supremo y Dictador del Oriente* se negaba a aceptar la autoridad de Bolívar–, fueron las causas esenciales del fracaso de la segunda república, limitada en sus alcances revolucionarios por los prejuicios clasistas de sus principales dirigentes.

Con vistas a enfrentar el sostenido avance enemigo, la asamblea de Caracas se pronunció por la unión con las Provincias Unidas de Nueva Granada y entregó a Bolívar poderes dictatoriales el 2 de enero de 1814. El mayor peligro provenía del sur, desde donde avanzaban los llaneros del *taita* Boves, ya repuestos de los golpes propinados por el ejército de Ribas a fines de 1813 y principios de 1814, así como de la muerte de José Yáñez (2 de febrero).

La tardía incorporación de Mariño a la lucha contra la *Legión Infernal* de Boves no fue suficiente para inclinar la balanza del lado republicano, como se puso de relieve en la derrota de la Puerta (17 de junio), verdadera puerta de Los Llanos hacia los valles del Aragua y la capital. Este duro revés, que costó la vida a centenares de patriotas, dejó indefensa a Caracas y persuadió a Bolívar y Mariño de evacuarla con los restos de sus tropas.

En su penosa retirada hacia el oriente venezolano, seguido por una parte apreciable de la población capitalina, los republicanos fueron batidos otra vez en Aragua de Barcelona (17 de agosto), lo que obligó a los pocos sobrevivientes a buscar refugio el día 25 en Cumaná. Entretanto, una parte del ejército llanero se apoderaba de la capital (16 de julio), mientras Boves y sus secuaces ponían sitio a Valencia, que resistió un mes (9 de julio).

Las desgracias aumentaron las desavenencias en las filas republicanas, agravadas por la confusión creada con la pérdida de los tesoros de la nación. En esas desastrosas condiciones, Bolívar y Mariño, desconocidos como jefes por sus propios subalternos, debieron expatriarse a Nueva Granada (5 de septiembre) en los barcos de Bianchi, mientras Ribas y Piar quedaban con el mando: el primero como *Jefe Supremo* y el segundo en calidad de *Jefe del Oriente*.

Aunque la arrolladora ofensiva llanera fue por el momento detenida por Bermúdez en Maturín (2 y 12 de septiembre), Boves terminó por imponerse en Los Magueyes y ocupar el 15 de octubre a Cumaná, convertida en una ciudad mártir. El combate decisivo entre los dos bandos se efectuó el 5 de diciembre de 1814 en Urica, donde los llaneros realistas aplastaron a las fuerzas interpuestas por Ribas y Bermúdez, pero sufrieron la pérdida de su jefe.

Perseguidos los patriotas por Morales, sustituto de Boves, y aniquilados en Maturín (11 de diciembre), Ribas fue fusilado y su cabeza exhibida en la semidesierta Caracas. La brutal reconquista española de Venezuela culminó con la llegada el 3 de abril de 1815 de la poderosa expedición del general Pablo Morillo, que obligó a los pescadores y marineros negros que seguían a Arismendi a rendir la isla Margarita, último reducto de la segunda república.

Derrota de Nariño y reconquista española de Nueva Granada

Muchos de los patriotas venezolanos que lograron escapar volvieron a encontrar refugio en la vecina Nueva Granada, donde el panorama de la lucha independentista no era tampoco muy halagüeño. Para aplastar la contraofensiva realista en las provincias suroccidentales y en Quito, Nariño había dejado la presidencia de Cundinamarca y salido en campaña en aquella dirección.

Con el aporte de hombres y armamentos de varias regiones, Nariño preparó un fuerte ejército que partió de Santa Fe de Bogotá el 23 de septiembre de 1813, después de arrancarle al colegio electoral de Cundinamarca una declaración de independencia (16 de julio). Además, Nariño ofreció la libertad a los esclavos que se incorporaran a sus tropas, para intentar contrarrestar el efecto devastador dejado entre la población negra por las promesas demagógicas de los realistas.

El ejército de Cundinamarca, avanzó con éxito al suroccidente hasta que fue hecho pedazos al intentar ocupar la villa de Pasto, donde las fuerzas enemigas contaban con masivo respaldo indígena.

El propio Nariño, fue capturado y remitido preso a España, donde estuvo recluido de nuevo –ya había guardado prisión en 1794– hasta ser liberado en 1820 por la sublevación de Riego.

La ausencia de Nariño posibilitó en Bogotá el paulatino retorno de los conservadores aliados del alto clero, al mismo tiempo que se recrudecían las contradicciones entre centralistas y federalistas. Dispuesto a terminar de una vez con la desobediencia de Cundinamarca, el congreso federal aprovechó la llegada a Nueva Granada de un numeroso grupo de oficiales y soldados conducidos por Urdaneta, que huían de Venezuela tras el fracaso de la segunda república, para encomendarles la tarea de someter a Cundinamarca.

Mediante una arrolladora ofensiva, Bolívar –en tierra neogranadina desde el 25 de septiembre de 1814 y nombrado jefe de esas fuerzas– se apoderó de la antigua sede virreinal el 12 de diciembre del mismo año, a donde se trasladaron después los poderes federales. A renglón seguido el *Libertador*, designado al frente de los ejércitos de la confederación, marchó a combatir al bastión realista de Santa Marta, mientras otros efectivos patriotas, a las órdenes del francés Manuel Serviez y el quiteño Carlos Montúfar, recuperaban otra vez Popayán. Por su parte Joaquín Ricaurte vencía en Casanare a las fuerzas realistas de Calzada.

La victoria de los federalistas, fue facilitada por el apoyo de Cartagena, depositaria del principal poder militar del antiguo virreinato. Además de las ventajas derivadas de su antigua condición de gran fortaleza, el más activo puerto neogranadino se había beneficiado con los permisos dados a embarcaciones corsarias que operaban en el Caribe e ingresaban al tesoro de la ciudad buena parte de su botín. Solo en 1813, fueron apresados cerca de 60 barcos españoles.

Bolívar no pudo cumplir su misión en el litoral atlántico debido a la hostilidad personal del gobernador de Cartagena, Manuel Castillo y Rada, por lo cual prefirió renunciar para evitar una guerra intestina y marchó al exilio en Jamaica (8 de mayo de 1815). Castillo y Rada era el hombre fuerte de la ciudad portuaria tras el desalojo del poder de la tendencia popular de los hermanos Gutiérrez de Piñeres –deportados a Haití junto al cubano Pedro Romero– que había tenido lugar a principios de ese año gracias a la alianza concertada por la

élite local con los numerosos militares extranjeros que deambulaban por Cartagena atraídos por las patentes de corso.

Casi coincidentemente apareció en las costas neogranadinas la mayor expedición militar española enviada a América, integrada por más de 60 embarcaciones y 10 mil hombres al mando del experimentado Morillo. El 22 de julio de 1815, las poderosas fuerzas coloniales desembarcaron en Santa Marta y luego pusieron sitio a Cartagena (20 de agosto), que resistió heroicamente por más de tres meses. Después de rendir por hambre la ciudad, Morillo despachó cuatro columnas en diferentes direcciones para aplastar la resistencia patriota en el resto del virreinato. Tras la victoria realista se desató la terrible *época del terror*, que cegó la vida de varios centenares de los más conspicuos patriotas neogranadinos.

Política *jacobina* de Mariano Moreno en el Río de la Plata

El Río de la Plata fue la región hispanoamericana donde, después de México, cobraron formas más definidas los perfiles de las transformaciones sociales, a la vez que el conflicto anticolonial evolucionaba, como en Nueva Granada, hacia una caótica guerra civil. La lucha fratricida estaba asociada aquí a la política conservadora de la élite de Buenos Aires, empeñada en impedir la pérdida de sus tradicionales privilegios y evitar una verdadera revolución.

Las contradicciones aparecieron dibujadas desde 1810, dentro de la propia junta de mayo, entre los representantes de la oligarquía terrateniente, saladerista y comercial, cuyo principal exponente era su propio presidente, Cornelio Savedra, y los intelectuales radicales encabezados por Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano, que querían hacer irreversible la ruptura del orden colonial. El propio Moreno se valió de su condición de secretario de la junta para decretar la expulsión del virrey depuesto y los oidores (27 de junio), la adopción del comercio libre y la ocupación preferente de los puestos públicos por criollos (3 de diciembre).

Además, Moreno elaboró un atrevido programa de transformaciones socioeconómicas (*Plan de Operaciones*), que no tendría tiempo de poner en práctica, y organizó los primeros núcleos del futuro ejército regular. Las fuerzas tropas, en las que dio acceso como oficiales a indios, pardos y mestizos, hasta entonces marginados en cuerpos de castas, tenían por objetivo neutralizar la influencia conservadora de las milicias patricias de Savedra y esparcir el espíritu de mayo en todas direcciones.

En los primeros momentos, el gobierno criollo de Buenos Aires solo tenía autoridad sobre la provincia capital y regiones aledañas, pues en el resto del virreinato los realistas se habían encargado de organizar la resistencia. Para aplastar la oposición proespañola, Moreno envío al norte a mil soldados bisoños comandados por un jefe nominal, ya que, a imitación de los ejércitos de la revolución francesa, le acompañaba una especie de consejero político con mayor autoridad e instrucciones secretas.

Pero estos primeros comandantes criollos tuvieron que ser sustituidos, ante sus vacilaciones para cumplir la orden de Moreno de ejecutar a los realistas capturados en Córdoba, por Castelli. La incorporación de este intelectual radical (26 de agosto de 1810) le imprimió aliento patriótico al *Ejército del Norte* que, convertido en un verdadero instrumento de la revolución de mayo, avanzó sin ser detenido hasta el Alto Perú, territorio recién anexado por los realistas al Virreinato de Lima. El control de esta estratégica región era vital para los porteños: de sus minas se extraía buena parte de la plata que constituía el principal producto de exportación de Buenos Aires.

Ante la proximidad de los soldados rioplatenses, las principales ciudades andinas (Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Oruro, Potosí, Chuquisaca y La Paz) se sublevaron en forma espontánea, entre los meses de septiembre y octubre, y sus pobladores, armados de hondas, macanas y rústicos arcabuces de estaño, recibieron como libertadores a los miembros del *Ejército del Norte*, vencedor en Suipacha (7 de noviembre de 1810). El entusiasmo aumentó entre los pueblos originarios –representaban más del 80% del millón de habitantes del Alto Perú– cuando Castelli dio a conocer, en lengua quechua y aymara, una serie de disposiciones revolucionarias que

eliminaban el tributo y el servicio personal indígena y repartían tierras y ganado confiscados a los realistas.

La preocupación de Castelli por mejorar la situación del indio y sus drásticas sanciones contra los españoles le enajenaron, sin embargo, el apoyo de la mayoría de los grandes propietarios altoperuanos y, muy en particular, de la antes opulenta ciudad de Potosí, convertidos desde entonces en los más fieles aliados de la metrópoli y enemigos jurados de cualquier acción anticolonialista. En cambio, para el campesinado indígena y una parte apreciable de las capas medias y la intelectualidad mestiza y criolla, la influencia de Castelli estimuló nuevos levantamientos, como el que ocurrió en Tacna (Perú) el 20 de junio de 1811.

La enérgica reacción española, la labor de zapa de la aristocracia altoperuana y las desavenencias entre savedristas y morenistas, debilitaron al *Ejército del Norte*. Derrotado en Huaqui (20 de junio de 1811), las fuerzas rioplatenses se replegaron a Salta, perseguidas de cerca por los realistas, que reconquistaron el Alto Perú. No obstante, las tropas colonialistas se vieron obligadas a detener en Salta la persecución del *Ejército del Norte* y regresar para aplastar, a sangre y fuego, los nuevos focos de la revolución que surgían espontáneamente a sus espaldas (Cochabamba, Huánuco).

A esa altura de los acontecimientos, en Buenos Aires las pugnas entre los partidarios de Savedra y los de Moreno se habían dilucidado en sentido adverso al ala radical. Las contradicciones alcanzaron su cenit después del decreto firmado por Moreno, el 6 de diciembre de 1810, que suprimía los honores a los virreyes, que continuaban tributándose a Savedra como presidente de la junta, con el argumento de establecer la plena igualdad entre los miembros del gobierno bonaerense.

Para desembarazarse de tan incómodos compañeros, Savedra logró, con la complicidad del diputado de Córdoba, el deán Gregorio Funes, ampliar el número de miembros de la junta gubernativa de Buenos Aires con los 12 primeros delegados provinciales llegados a la capital, lo que puso en minoría a los morenistas (18 de diciembre). El virtual golpe de Estado obligó a Moreno a aceptar un puesto diplomático en Londres, a donde nunca llegó, pues murió en la travesía.

La derrota del ala democrático-republicana de mayo se completó con los juicios entablados a Castelli y Belgrano por sus respectivos descalabros militares en los frentes del Alto Perú y Paraguay, aunque el primero no sobrevivió a la prisión. En particular, las acusaciones contra Belgrano se basaban en su supuesta responsabilidad en los fracasos del pequeño ejército, puesto bajo su mando por Moreno (24 de septiembre de 1810), para propagar la revolución sobre las provincias litorales del Paraná y el Uruguay, o sea, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones, la Banda Oriental y el Paraguay.

Durante su ofensiva sobre Paraguay, Belgrano había dado a conocer en lengua guaraní, el 30 de diciembre de ese año, un *Reglamento para el gobierno de los 30 pueblos de Misiones*, inspirado en las ideas igualitarias de Moreno. En su articulado se concedían plenos derechos ciudadanos a los pueblos originarios establecidos en el territorio rioplatense de mayor densidad indígena después del Alto Perú, se les eximía de viejos tributos y otorgaban tierras estatales.

Pero Belgrano fue vencido en Tacuarí y Paraguarí (febrero-marzo de 1811) por las milicias paraguayas al servicio realista, derrota convertida en victoria cuando los propios criollos de Asunción tomaron por su cuenta el poder y formaron una junta similar a la de Buenos Aires. Aleccionado por sus contactos con el general rioplatense –prisionero de los paraguayos por breve tiempo–, el teniente coronel Fulgencio Yegros, rico hacendado criollo, depuso el 14 de mayo de 1811 al gobernador español.

Unas semanas después, un congreso paraguayo, celebrado del 17 al 20 de junio, nombró una junta integrada por Yegros como presidente y otros cinco miembros, entre los cuales descollaba el abogado José Gaspar de Francia. Yegros y el doctor Francia desarrollarían contradicciones muy parecidas a las que había separado a Savedra y Moreno en el gobierno de Buenos Aires.

Artigas y el éxodo del pueblo oriental

Sin embargo, fue en el enfrentamiento con los realistas de la Banda Oriental donde más nítida se reveló la postura conciliadora

de la *junta grande* de Buenos Aires encabezada por Savedra. En este territorio de tardía colonización y pocos habitantes, situado al este del río Uruguay, la contienda independentista comenzó el 28 de febrero de 1811 (Grito de Asencio), dirigida por estancieros, afectados por las disposiciones coloniales que restringían su acceso a las tierras públicas, como Fructuoso Rivera y el oficial criollo José Artigas.

La base social del movimiento insurreccional estaba formada por gauchos, peones y *agregados* mestizos de las haciendas ganaderas e incluso sacerdotes del bajo clero, así como algunos esclavos negros e indios charrúas y chanaes. La incorporación popular a la lucha emancipadora se vio favorecida aquí por la poca estratificación social y la ausencia de jerarquías y mayorazgos.

Gracias al respaldo de masas y a su propia experiencia como capitán del cuerpo de blandengues, Artigas, con 47 años, pronto se convirtió en el principal insurrecto oriental y obligó a los realistas, tras su victoria de Las Piedras (18 de mayo), a abandonar las zonas rurales y refugiarse tras las murallas de Montevideo. Al sitio de Montevideo por los orientales se sumó, el 1 de junio, un ejército de casi 3 mil hombres enviado por Buenos Aires, dirigido primero por Belgrano y después por José Rondeau.

El verdadero objetivo de Buenos Aires no era solo liquidar el peligroso foco realista existente en Montevideo, sino también neutralizar el programa revolucionario enarbolado por los orientales liderados por Artigas. Ante la amenaza que pendía sobre Montevideo, asediado por los ejércitos coligados de Buenos Aires y la Banda Oriental, el virrey español Francisco Javier Elío expulsó a los opositores de la ciudad y solicitó auxilio a los portugueses, que invadieron Uruguay con sus tropas.

La aristocracia porteña, asustada ante las imprevisibles consecuencias de la intervención de Portugal en su territorio, agravadas por el reciente desastre de Huaqui en el Alto Perú, llegó a un acuerdo el 20 de octubre de 1811 (Tratado de Pacificación) con los realistas de Montevideo, logrado en virtud de la mediación del representante inglés en Rio de Janeiro, Percy C.S. Smythe, vizconde de Strangford. Gran Bretaña estaba interesada en mantener a toda costa el comercio en el estuario del Plata y levantar el bloqueo a Buenos Aires, impuesto por la flota española.

El pacto, en el que los signatarios se reconocían mutuamente como defensores de Fernando VII e integrantes de la *nación española*, entregó toda la Banda Oriental a los realistas y estableció un armisticio, así como las bases para un posterior arreglo con los Braganza (Rademaker-Herrera, 24 de mayo de 1812) que permitiría la retirada de su ejército. En cumplimiento de estos acuerdos, Rondeau regresó con las fuerzas rioplatenses a Buenos Aires, mientras Artigas, convertido por aclamación popular en líder indiscutido como *Jefe de los Orientales*, se veía forzado a dirigirse a Ayuí (Entre Ríos), seguido en carretas por una gran parte del pueblo uruguayo que, con unas pocas pertenencias y su ganado, prefería el éxodo a quedar bajo la dominación española.

Durante su obligado retiro en Entre Ríos acabó de forjarse la íntima vinculación de Artigas con las masas populares. Para tratar de contemporizar con el *Jefe de los Orientales*, el gobierno de Buenos Aires lo nombró gobernador de Yapeyú, cargo que facilitó sus primeros contactos con los caudillos de las cercanas provincias del litoral del Paraná. La incesante actividad proselitista de Artigas terminó agriando sus relaciones con el gobierno porteño que, para neutralizarlo, designó como su superior jerárquico, el 14 de junio de 1812, a Manuel de Sarratea.

San Martín, Belgrano y la Asamblea del Año XIII

En el escenario de Buenos Aires, la *junta grande* fue sustituida, el 23 de septiembre de 1811, por un triunvirato ante el desprestigio causado por las vergonzosas componendas de la Banda Oriental y su manifiesta incapacidad política y militar. El nuevo gobierno representaba los intereses de otro sector del patriciado porteño, aunque el verdadero poder pasó a manos de uno de los secretarios: Bernardino Rivadavia.

Bajo su impronta, se promulgó el 22 de noviembre el *Estatuto Provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre de Fernando VII*. En la práctica, este era el primer texto constitucional de Buenos Aires y preveía la convocatoria de un congreso de representantes de todas las regiones rioplatenses.

Favorecido por la tolerancia de Rivadavia, reapareció, dirigido por Bernardo Monteagudo, el club morenista, que ahora funcionaba en la casa del consulado con el nombre de Sociedad Patriótica (13 de enero de 1812). Casi a la par, abrió su sede en Buenos Aires la logia masónica Caballeros Racionales, al parecer filial de las logias surgidas en Europa, y particularmente en Cádiz, para luchar por la independencia hispanoamericana. La logia floreció con la llegada de Europa (9 de marzo) de varios destacados oficiales criollos como Carlos María de Alvear y José de San Martín y coincidió con la Sociedad Patriótica en la oposición al triunvirato.

Ambas sociedades consideraban que el gobierno de Buenos Aires tenía una actitud vacilante frente a la dominación colonial, criterio que había ganado fuerza el 25 de mayo de 1812 cuando Rivadavia desautorizó a Belgrano por hacer jurar al Ejército del Norte una bandera azul celeste y blanco. Además, el estatuto hegemónico puesto en vigor concitaba la oposición de las provincias y entorpecía el camino de la liberación.

Por eso, el 8 de octubre de ese año, efectivos militares, a las órdenes del coronel San Martín, enarbolando el lema *Independencia y Constitución*, disolvieron el gobierno capitalino nombrando otro triunvirato. El nuevo gobierno estaba encargado de llamar a elecciones para un congreso, con delegados de todas las provincias del Río de la Plata, el cual debía pronunciarse sobre el futuro del antiguo virreinato.

En el marco optimista creado por las victorias militares de Belgrano en Salta y San Martín en San Lorenzo, se reunió en Buenos Aires, desde el 31 de enero de 1813, la llamada Asamblea del Año XIII. Este cónclave representó un importante paso de avance en el proceso emancipador del Plata, ya que desconoció la soberanía de Fernando VII y aprobó la bandera e himno nacionales, aun cuando, cediendo al interés de mantener el comercio con Inglaterra –aliada de España en la guerra contra Napoleón–, no sancionó una constitución, ni declaró formalmente la independencia, pese a las propuestas de sus promotores.

Lo más sobresaliente de la asamblea fueron las leyes revolucionarias inspiradas por los voceros de la Sociedad Patriótica y la logia,

entre ellas la de vientres libres y la libertad de los esclavos que se incorporaran a los ejércitos patriotas; la abolición de la trata y de los títulos nobiliarios, además de la supresión de *mitas*, encomiendas, mayorazgos y de los servicios personales de los pueblos originarios. Pero su mayor limitación estuvo en la incapacidad para superar las tendencias hegemónicas de Buenos Aires e imponer la unidad *nacional* en el Plata.

El sistema artiguista y el Paraguay del doctor Francia

La convocatoria a este congreso se conoció en la provincia oriental después de reanudada la guerra, a fines de 1812, y reimplantado el sitio a Montevideo por las fuerzas conjuntas de Rondeau y Artigas. Desde allí, el *Jefe de los Orientales* organizó una reunión para elegir los representantes de la provincia a la Asamblea del Año XIII (5 de abril de 1813).

Ante los delegados, en su mayoría ricos saladeristas, comerciantes y estancieros criollos, Artigas leyó sus *Instrucciones del Año XIII*, en las cuales se pronunció por la independencia y, la libertad civil y religiosa. Además, solicitaba la eliminación de trabas arancelarias al comercio, autonomía provincial y régimen republicano federal, nacionalización de la aduana porteña y libre navegación de los ríos.

El rechazo a los delegados orientales por Buenos Aires condujo a Artigas a declararse en rebeldía y abandonar secretamente el sitio de Montevideo (20 de enero de 1814). A partir de entonces comenzó a hilvanar una alianza federalista antibonaerense con las provincias del litoral del Paraná.

De esta manera, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba y la Banda Oriental se incorporaron entre 1814 y 1815 al *sistema federal* que reconoció a Artigas como *Jefe de los habitantes de la Costa Oriental y Protector de los Pueblos Libres*. Desde el punto de vista económico, esta unión se sustentaba en la garantía ofrecida por Artigas a las provincias litorales, productoras de cueros y carnes saladas, para tener acceso al comercio internacional por los puertos

orientales de Maldonado y Colonia, rehuyendo el monopolio y los impuestos discriminatorios de Buenos Aires.

Este sistema solo ofrecía oportunidades a la economía de las provincias exportadoras del litoral, por lo cual la alianza federalista era más laxa con las mediterráneas (Córdoba, Cuyo, Tucumán), que dependían del mercado interno –incluyendo Chile y el Alto Perú– para la venta de sus cultivos (frutas y algodón), vinos y artesanías y estaban perjudicadas por la libre introducción de manufacturas foráneas. Además, los grandes hacendados señoriales, que explotaban sin restricciones el trabajo servil de indios y mestizos, dominaban el escenario del interior, ambiente adverso a las ideas revolucionarias de Artigas.

La ausencia de los delegados del Paraguay a la *Asamblea del Año XIII* se debió a razones diferentes a las de Artigas. Afectados también por las pretensiones hegemónicas y las restricciones comerciales de Buenos Aires, los paraguayos eligieron su propio camino para solucionar el diferendo con la capital rioplatense.

En vez de intentar imponer el federalismo en el Plata y buscar salida al comercio al margen de Buenos Aires, enfrascándose en un posible conflicto con su gobierno, los habitantes de Paraguay optaron por el aislamiento y la independencia absoluta, tanto de España como de Buenos Aires y la propia Liga Federal. Esa postura fue proclamada por el Bando del 21 de octubre de 1813, aprobada por un congreso multitudinario reunido en Asunción.

El padre de la emancipación paraguaya fue el doctor Francia, el abogado *jacobino* miembro de la primera junta criolla de Asunción, de 47 años de edad. Con el ferviente apoyo de los campesinos (*chacreros*) y peones sin tierra, Francia se las ingenió para desalojar del poder a los terratenientes y estancieros productores de yerba mate y cueros, liderados por el ex presidente Yegros, negados a romper abiertamente con Buenos Aires.

Para complicar más las cosas a los realistas e impedirles la ansiada reconquista del Río de la Plata, en pleno reflujo del proceso revolucionario a escala continental, surgieron guerrillas populares en el Alto Perú –llamadas por los españoles en forma despectiva *republiquetas*– y estalló en la sierra peruana, casi a continuación

(2 de agosto de 1814), una poderosa sublevación indígena, dirigida por el anciano cacique Mateo García Pumacahua, que amenazó con repetir la gesta de Túpac Amaru II, al que paradójicamente se había enfrentado treinta años antes.

La *Patria Vieja* chilena: diferendo entre Carrera y O´Higgins

En Chile la junta criolla formada en Santiago, dirigida por el mendocino Juan Martínez de Rozas, se encaminó a la creación de un gobierno autónomo sin romper los vínculos con el Perú, tradicional mercado del trigo chileno. Entre sus primeras disposiciones estuvo la adopción del comercio libre, la organización de su propio ejército y el establecimiento de contactos con la junta bonaerense, aunque algunos de los criollos, como el cura Camilo Henríquez, quien había vivido las amargas experiencias de la represión realista en Quito (1809), reclamara la abierta ruptura con España.

El 4 de julio de 1811 se reunió el primer congreso chileno con la presencia de 42 delegados, en su mayoría elementos conservadores criollos vinculados al cabildo de Santiago, poseedores de títulos nobiliarios y grandes mayorazgos. Frente a la clase alta, los jóvenes criollos independentistas, entre ellos el cura Henríquez, Manuel Rodríguez y Bernardo O'Higgins, quedaron en minoría. Esa desventaja se plasmó en la elección de una junta ejecutiva moderada que reconoció a Fernando VII.

A partir de ese momento, el sector anticolonialista criollo –compuesto solo por 13 diputados– se retiró del congreso y pasó a conspirar a favor de la emancipación. Rozas dirigía el movimiento en Concepción, mientras en la capital lo hacía un oficial de 27 años recién llegado de España, donde había combatido a los franceses: José Miguel Carrera. El 4 de septiembre de 1811 Carrera y sus hermanos Juan José y Luis, con mando de tropas en Santiago, derrocaron a la junta de un golpe casi sincronizado con el de Rozas en Concepción.

El cambio en la correlación de fuerzas fue capitalizado por el cura Joaquín Larraín, cabeza de una poderosa familia aristocrática

conocida como los «ochocientos» –entre sus allegados figuraban el guatemalteco Antonio José de Irisarri y el irlandés Juan Mackenna–, quien controló la nueva junta. Aunque este gobierno adoptó algunas medidas que rompían con la línea conciliadora anterior –supresión de derechos parroquiales, del estanco del tabaco, del derecho de exportación del 3%, abolición de la trata y una ley de vientres libres (11 de octubre de 1811) que benefició a los hijos de los 4 mil esclavos existentes en Chile–, Carrera, no estaba conforme con la indefinición política y la falta de apoyo popular.

El 16 de noviembre, el caudillo militar desalojó a los Larraín de la junta y creó un triunvirato. Un frustrado intento de asesinar a Carrera diez días después le sirvió de argumento para disolver el congreso, medida rechazada por los otros triunviros, entre ellos O'Higgins.

El centro del movimiento opositor a Carrera, quien había asumido poderes dictatoriales, estaba en Concepción, zona de abundante campesinado libre dedicado al cultivo del trigo, fogueado en la lucha contra los insumisos araucanos. Los mapuches, calculados en más de 100 mil, eran dueños de todo el territorio al Sur del río Bío-bío y tradicionales adversarios de los poderosos terratenientes de Santiago.

Aunque los ejércitos de la capital y el de Concepción estuvieron a punto de chocar en las márgenes del río Maule (abril de 1812), la guerra civil se evitó por coincidir con la caída de Valdivia –apenas un punto fortificado situado en la extremidad austral, en pleno territorio mapuche– en poder de los realistas. El peligro de una ofensiva española, aprovechando la división patriota, y el temor a la total paralización del comercio con la capital, actuó sobre el ánimo de los seguidores de Rozas que lo derrocaron el 8 de julio de ese año.

El clima revolucionario que se extendía por toda la colonia gracias a la propaganda del periódico *Aurora de Chile*, fundado el 13 de febrero de 1812, empujaba hacia la total ruptura con España. Recogiendo el sentir popular, Carrera dispuso la sustitución del pabellón español por una bandera tricolor y proclamó una constitución (27 de octubre de 1812) que de hecho organizaba a Chile como estado independiente. A pesar de la significación de estas disposiciones, no se llegó a romper abiertamente con España –se mantuvo el reconocimiento

formal a Fernando VII–, ni tampoco a aprobar medidas que indicaran una profundización social.

A las visibles limitaciones de la *Patria Vieja*, que minaban la existencia del gobierno criollo, se sumó la llegada, a fines de 1812, de un pequeño ejército realista procedente del Perú. Guiado por el brigadier Antonio Pareja y nutrido con fuerzas irregulares (indígenas), se apoderó de Chiloé, Valdivia, Talcahuano, Concepción y todo el sur de Chile hasta la frontera mapuche.

Carrera, puesto al frente de las mal armadas milicias patriotas, venció a los invasores en Yerbabuenas (27 de abril de 1813) y otros combates. Liberado Concepción y Talcahuano, Carrera puso sitio a Chillán el 29 de julio, pero no pudo impedir que la región quedara infestada de guerrillas realistas.

Los tropiezos de Carrera para someter Chillán y liquidar a las atrevidas bandas armadas enemigas, sirvieron de pretexto a la junta de Santiago para sustituirlo por O'Higgins al frente del ejército (27 de noviembre de 1813), encumbrado por sus éxitos al liberar los pueblos situados cerca del caudaloso Bío-bío. Bajo la nueva dirección militar, en marzo de 1814, las fuerzas chilenas, guiadas en los combates por Juan Mackenna, se anotaron las victorias de las alturas de Quilo y Membrillar, mientras O'Higgins salvaba la capital en el combate de Quecheraguas.

Estos reveses obligaron a los maltrechos contingentes realistas llegados del Perú, en enero de ese mismo año, comandados por Gabino Gainza, a retroceder a su baluarte de Chillán. No obstante, poco después lograron reconquistar toda la provincia de Concepción, así como Valdivia, Chiloé y Talca.

En esta coyuntura, se conoció en Chile el retorno de Fernando VII al trono español, lo que desalentó a muchos patriotas y despejó el camino a negociaciones de paz con los realistas. Tras varias reuniones se firmó, el 3 de mayo de 1814, el Tratado de Lircay. El acuerdo, que recogía las aspiraciones de la élite chilena de conjugar el gobierno propio y comercio libre con el reconocimiento de la soberanía española y el mantenimiento del *statu quo* social, no tardaría en ser rechazado por el virrey del Perú.

En contra del tratado se pronunció Carrera, escapado de la cárcel realista en la que estaba confinado, junto a su hermano Luis, desde

febrero de 1814, quien se presentó en Santiago, sublevó la guarnición el 22 de julio, destituyó al gobierno conciliador y tomó un conjunto de medidas emergentes. La resistencia criolla al audaz golpe fue encabezada por O'Higgins que con sus tropas se enfrentó a Carrera en Tres Acequias (26 de agosto), a orillas del Maule.

Aunque se produjo un primer encuentro armado entre las vanguardias de los dos ejércitos patriotas, las noticias del rechazo del Tratado de Lircay por el virrey, junto al envío a Chile de más contingentes realistas, evitó la lucha fratricida. Los días 1 y 2 de octubre se desarrolló la batalla decisiva en Rancagua, donde los realistas aplastaron a los soldados de O'Higgins.

La grave derrota de Rancagua, facilitada por las persistentes desavenencias entre los patriotas, precipitó el fatal desenlace. El 4 de octubre, después de una cómoda ofensiva sobre las desmoralizadas fuerzas criollas, los realistas entraron en Santiago dejando un rastro de crueles represalias, mientras lo sobrevivientes cruzaban la cordillera andina para buscar refugio en territorio rioplatense.

Reconquista realista: 1814-1815

Al fatal desenlace de la lucha emancipadora hispanoamericana entre 1814 y 1815 contribuyó la llegada de tropas frescas a América, en particular después del restablecimiento de Fernando VII en el trono español y la anulación de la constitución (marzo-mayo de 1814). A partir de entonces arribaron a los territorios americanos trece expediciones militares con más de 26 mil hombres.

Solo el Río de la Plata, al margen de reducidas áreas irreductibles como Oaxaca en México o Casanare en Nueva Granada, logró sobrevivir a la reconquista realista. A ello contribuyó su ubicación geográfica y al imprevisto desvío hacia Venezuela, en alta mar, de la flota de Morillo, originalmente financiada por los comerciantes gaditanos para reabrir Buenos Aires al mercado metropolitano.

Otro elemento decisivo, en la supervivencia patriota en el Río de la Plata, fue el valladar levantado en Salta por las montoneras gauchas de Martín Güemes –conocido, por sus inclinaciones sociales, como

el *Padre de los Pobres*– y las rebeliones populares del Alto Perú (las *republiquetas*), contra los que se estrellaron todas las invasiones realistas organizadas desde Lima. En favor de los rioplatenses, también operó su condición de región ganadera –algo parecido sucedería en los llanos de Venezuela después de 1816–, que permitió movilizar una temible caballería gaucha, en contraste con las dificultades de los ejércitos patriotas para reclutar hombres en áreas de mayoritaria población indígena o esclava.

No obstante, el colofón de esta etapa puede ubicarse en la inoportuna derrota del ejército patriota de Rondeau en Sipe Sipe, el 29 de noviembre de 1815. Este descalabro militar puso a las fuerzas independentistas en su último bastión del Río de la Plata, al borde del colapso. Con razón, los realistas de Europa y América festejaron con *te deums* el triunfo de Sipe Sipe, al que consideraban el fin de la lucha emancipadora en las colonias americanas.

Capítulo 5
CULMINACIÓN DE LA LIBERACIÓN CONTINENTAL

La rendición de Bogotá, la tradicional capital de Nueva Granada, en mayo de 1816, ante el coronel español Miguel de la Torre, último gran éxito de la reconquista realista, fue casi coincidente con el primer desembarco de Simón Bolívar en las costas de Venezuela (isla Margarita), que marca el reinicio de la ofensiva liberadora a nivel continental. Entre mediados de 1816 y principios de 1817 –fecha esta última de la invasión a Chile del ejército de José de San Martín–, la guerra de liberación resurgió por los dos extremos de la América del Sur, lo que puede considerarse el punto de inflexión en la historia de la independencia latinoamericana.

Entre 1816 y 1826 se alcanzó la emancipación de Brasil y de toda la América hispana, con las únicas excepciones de Cuba y Puerto Rico. Este resultado se consiguió por dos vías algo diferentes. De un lado, mediante una costosa guerra, que concitó una amplia participación popular e hizo posible el nacimiento de un rosario de repúblicas soberanas, formadas en base a un programa democrático-liberal. Por el otro, a través de un tránsito más o menos incruento, fundamentado en el conciliábulo de las clases dominantes criollas con los representantes reales, de espalda a las masas populares, que condujo a la proclamación de regímenes monárquicos independientes, defensores del *status quo*.

La vía revolucionaria de la liberación hispanoamericana tuvo por escenario la América del Sur. En estos territorios, la emancipación

solo fue posible mediante una ardua lucha militar, que puso fin a la dilatada y costosa contienda contra la metrópoli, permitiendo la formación de una constelación de estados libres.

Los ejércitos de Bolívar y San Martín, salidos de sus bases logísticas en Venezuela (Los Llanos) y el Río de la Plata (Cuyo) respectivamente, cada uno imbuido de su propia estrategia de lucha y algo distantes en sus perspectivas políticas y sociales, liberaron o consolidaron la independencia, según el caso, no solo de sus respectivas patrias chicas (Venezuela y el Río de la Plata), sino también de Nueva Granada, Quito, Chile, Perú y el Alto Perú. La victoria de Ayacucho impuso la capitulación definitiva de España, que culminó 15 años de intensa guerra.

Esta resonante victoria fue posible gracias a la popularización de la independencia entre la mayoría de los habitantes sudamericanos, que permitió un cambio sustantivo en la composición de las fuerzas militares patriotas, tras la desarticulación de los primeros ejércitos de casta con la reconquista española (1814-1815). La masiva incorporación del pueblo –en particular peones y esclavos–, y su ascenso social en las líneas de mando, produjo una mutación radical en los miembros de los ejércitos libertadores después de 1816 que permitió la derrota de España.

La activa participación de las masas populares en la independencia fue la clave de la victoria criolla, aunque conllevó un aumento de la presión para radicalizar el curso de la lucha emancipadora. En muchas partes de América Latina, el programa original, de carácter político, se abrió a las demandas sociales para intentar transformar la vieja sociedad colonial, de estamentos y castas, en una más igualitaria.

El ejército de San Martín y la independencia de Chile

Uno de los dos grandes ejes de la liberación continental por la vía revolucionaria armada fue el que tuvo su vértice en el Río de la Plata, donde se vertebró un disciplinado y eficiente ejército patriota bajo la conducción de San Martín. Su organización en Mendoza

(Cuyo) estuvo asociado a la última derrota del *Ejército del Norte* en Sipe Sipe (27 de noviembre de 1815), que insistía en avanzar hacia Perú por el agreste territorio altoperuano.

Este severo revés militar, convenció en forma definitiva al general San Martín de buscar una ruta alternativa para doblegar al Virreinato del Perú, verdadero baluarte de la reacción realista en la América del Sur y amenaza permanente sobre la independencia del Río de la Plata. El territorio peruano, controlado por una rancia aristocracia criolla y una poderosa burocracia peninsular, ligadas al régimen colonial, dependía para su liberación de la actuación de fuerzas externas, tras la sangrienta derrota de la sublevación indígeno-mestiza de los Andes, encabezada por el *curaca* Pumacahua, ejecutado el 17 de marzo de 1815.

Estos criterios determinaron que San Martín declinara la jefatura del *Ejército del Norte*, en la que había sido designado el 3 de diciembre de 1813, y aceptara la oscura gobernación de Cuyo (10 de agosto de 1814), donde llevaría adelante su atrevido plan ofensivo. San Martín, que contaba con el respaldo de Juan Martín de Pueyrredón –elegido en 1816 por el congreso de Tucumán *Director Supremo* de las *Provincias Unidas en Sud-América*–, organizó con suma discreción en Mendoza un ejército de unos tres mil hombres, nutrido de campesinos pobres y ex esclavos del norte argentino liberados por sus propietarios.

La campaña liberadora comenzó cuando las fuerzas de San Martín, quien entonces contaba 35 años de edad, cruzaron la cordillera de los Andes para vencer a las fuerzas españolas en las serranías de Chacabuco (12 de febrero de 1817), lo que les permitió apoderarse de Santiago, Valparaíso y todo el centro norte chileno, desde Atacama al Maule. La emancipación de Chile fue resultado de la hábil combinación de una espontánea lucha popular, expresada a través de la actividad guerrillera, organizada con antelación por Manuel Rodríguez, la oportuna ofensiva de un ejército eficiente y las operaciones de distracción de la escuadra bonaerense del almirante irlandés William Brown por el litoral del Pacífico.

Después de ser nombrado O'Higgins *Director Supremo* y proclamada la independencia de Chile el 1 de enero de 1818, se produjo el

inesperado revés patriota de Cancha Rayada (19 de marzo), aunque a continuación las reorganizadas fuerzas de San Martín obtuvieron el definitivo triunfo sobre los realistas en la llanura de Maipú el 5 de abril de ese mismo año. El breve desconcierto provocado por el inesperado revés de Cancha Rayada ahondó las diferencias entre los seguidores de O´Higgins y los de Rodríguez, contradicciones que condujeron al trágico final del jefe guerrillero, asesinado cuando era conducido prisionero, a lo que siguió después la ejecución sucesiva de los hermanos Carrera en Mendoza.

Desde la victoria de Maipú, el control español se redujo otra vez a Concepción, Chillán y el territorio meridional contiguo a la tierra mapuche, hasta que en enero de 1819 los colonialistas fueron expulsados hacia la Araucania. El período que se abrió entonces, caracterizado por las feroces embestidas realistas y los fusilamientos masivos de patriotas, se conoce como la *guerra a muerte* y se extendió de 1818 a 1824.

Las guerrillas enemigas tenían sus reductos en las villas de Chillán, Concepción y La Frontera y su base de masas en los insumisos araucanos. Manipulados por misioneros católicos que, en nombre del rey y valiéndose de los acuerdos firmados por sus representantes, les prometían respeto a sus comunidades y tradiciones, los mapuches se levantaron contra el gobierno criollo a cambio de obtener como botín de guerra armas y ganado. La lucha contra las guerrillas araucanas y españolas se mantuvo con altibajos hasta que el general chileno Joaquín Prieto neutralizó a los indoblegables pueblos originarios de la tierra austral indios con una hábil política de concesiones que le permitió vencer a los realistas en 1824.

Congreso de Tucumán: la emancipación rioplatense

La complicada lucha independentista en el Río de la Plata, que naufragaba en la anarquía y se debatía entre el hegemonismo de la aristocracia de Buenos Aires y los intentos por impulsar la revolución en las provincias, logró escasos avances para superar la crisis

de 1816. En este año decisivo, el gobierno de Buenos Aires carecía de representatividad nacional y su jurisdicción apenas rebasaba los límites de la provincia capital y los pocos territorios del interior controlados por los ejércitos de San Martín y Belgrano. Güemes había proclamado la federación en Salta; en Córdoba se imponía una administración propia; en Paraguay la República independiente estaba consolidándose, mientras la Liga Federal de Artigas dominaba las provincias litorales.

En aras de detener el movimiento centrífugo que amenazaba con desaparecer la pretendida hegemonía de Buenos Aires, el gobierno porteño auspició la celebración de una asamblea reunida en una localidad interior para calmar la desconfianza de las provincias. El Congreso de Tucumán se inició el 24 de marzo de 1816 –boicoteado por los artiguistas–, con la presencia de delegados de Buenos Aires, Cuyo, Córdoba, Tucumán, Salta y el Alto Perú.

Dividido entre unitarios, liderados por Buenos Aires, y federalistas, tendencia dominante entre los diputados provinciales –encabezados por los de Córdoba, la segunda ciudad más poblada del antiguo virreinato–, lo más sintomático de la asamblea fue el intento de establecer una monarquía en el Río de la Plata. Para muchos de los delegados, influidos por las ideas de Belgrano –cada vez más conservador, sobre todo luego de su viaje al Viejo Continente–, este era un requisito indispensable para conseguir el reconocimiento europeo.

Los planteamientos de Belgrano no solo impulsaron la alternativa monárquica, sino también que los representantes altoperuanos llegaran a proponer al Cusco como capital del futuro reino y el restablecimiento de la monarquía incaica –pensaban en el octogenario Juan Bautista Condorcanqui, hermano de Túpac Amaru II, preso en España–, para darle espesor histórico y conseguir respaldo de los pueblos originarios. El predominio de las propuestas monárquicas y la ausencia de reformas sociales hicieron menos trascendentes los resultados del Congreso de Tucumán que los de su antecesora, la asamblea de 1813. No obstante, cediendo a los insistentes reclamos de San Martín, y el propio Belgrano, la reunión proclamó de manera solemne, el 9 de julio de 1816, la independencia del Río de la Plata.

La propia asamblea de Tucumán escogió a Pueyrredón para el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas en Sud América. Además, se aprobó un *Reglamento Provisorio*, que dejó sin definir la forma de gobierno, dejando abiertas la alternativa monárquica o republicana. Durante el mandato de Pueyrredón, el Poder Ejecutivo y la asamblea trasladaron su sede de Tucumán a Buenos Aires en febrero de 1817, con el pretexto del avance de otra expedición realista sobre territorio rioplatense, aunque sería detenida en Salta por la resistencia de los gauchos de Güemes.

El gobierno de Pueyrredón en Buenos Aires, que había secundado con recursos y hombres la ofensiva de San Martín sobre Chile, tenía una cara menos noble: su descarnada hostilidad a las provincias y al movimiento popular. Expresión de esa política negativa, fue el silencio cómplice del Director Supremo bonaerense ante la nueva invasión portuguesa a la Banda Oriental (junio de 1816) y la propia ofensiva militar desencadenada por su gobierno, a fines de 1817, contra las provincias del litoral.

Los partidarios de Artigas fueron atrapados en una guerra de dos frentes, mientras se extendía la guerra civil en el Río de la Plata. La contradictoria política de Pueyrredón no solo debilitaba su gobierno, sino también era una amenaza latente para los esfuerzos emancipadores de San Martín, que preparaba en Chile su ejército, mientras conseguía una flota para llevar sus tropas al Perú y continuaba ardiente la guerra de liberación en el sur chileno.

Derrota de Artigas y consolidación del Paraguay independiente

Acérrimo enemigo del caudillo oriental, Pueyrredón no puso obstáculos a la nueva invasión de la Banda Oriental por los portugueses en junio de 1816. Los desesperados esfuerzos de Artigas por detener aquella avalancha que llegaba de Brasil fueron inútiles.

El 19 de noviembre de ese año, los artiguistas sufrieron una derrota en la batalla de India Muerta y otra, el 4 de enero de 1817, en la de estero Catalán, que permitieron al ejército portugués ocupar Montevideo.

Sobreponiéndose a estos duros reveses, Artigas prosiguió el hostigamiento a las tropas lusitanas, hasta que vencido en Tacuarembó el 20 de enero de 1820, abandonó para siempre el territorio oriental rumbo al litoral del Paraná, mientras arreciaban las luchas entre las provincias federalistas y el gobierno de Buenos Aires, tras la adopción por los porteños de la carta fundamental centralista de 1819. El 23 de septiembre de 1820, el *Protector de los Pueblos Libres* debió buscar refugio en el Paraguay del doctor Francia, donde murió treinta años después.

En el caso de Paraguay, la coyuntura permitió profundizar la revolución popular, tras el fracaso de las conspiraciones de los ricos estancieros y comerciantes criollos que pretendían plegarse a las exigencias de Buenos Aires. Derrotada en 1821 la fronda aristocrática dirigida por Fulgencio Yegros, los participantes fueron fusilados y sus bienes confiscados.

Las tierras expropiadas a traidores y realistas, así como a la Iglesia, fueron repartidas entre los *chacreros*, peones desposeídos y las comunidades guaraníes o convertidas en las célebres *Estancias de la Patria* –administradas por el Estado. Ello convirtió al Paraguay en una nación dominada por los campesinos, aunque aislada del exterior y bajo permanente amenaza de agresión.

Acosado por la redoblada rebeldía del interior y el litoral, que le habían hecho perder a Buenos Aires cuatro ejércitos, Pueyrredón ordenó el regreso de las fuerzas militares de San Martín y Belgrano, con la excusa de la próxima salida de Cádiz de una gran expedición española dirigida contra Buenos Aires. San Martín, enfrascado en los prolegómenos de la invasión al Perú, simuló su regreso al territorio rioplatense, pero en la práctica se limitó a remitir cartas conciliatorias a Artigas y la logia Caballeros Racionales, que había recobrado su fuerza en la capital.

El empecinamiento de Pueyrredón en utilizar a los ejércitos del norte y los Andes, para combatir a las provincias federalistas sublevadas, determinó el amotinamiento y posterior disolución de las fuerzas de Belgrano en Arequito (7 de enero de 1820) y la histórica desobediencia de San Martín, oficializada en el *Acta de Rancagua* del 2 de abril de ese mismo año. Estos acontecimientos determinaron

la desaparición de todo vestigio de gobierno nacional en el Plata hasta diciembre de 1824, lo que vino acompañado de la total fragmentación del antiguo virreinato, pues cada provincia quedó desde entonces al arbitrio de diversos caudillos.

Avances de San Martín en el litoral peruano

Perdido el apoyo bonaerense, y cuando Chile todavía estaba enfrascado en la devastadora lucha liberadora al sur de su territorio, zarpó de Valparaíso, en dos decenas de embarcaciones, el 20 de agosto de 1820, el *Ejército Unido Libertador del Perú*. La expedición, enarbolando la bandera chilena, estaba al mando del propio San Martín e integrada por casi cinco mil hombres, en su inmensa mayoría rioplatenses y chilenos, que trece días más tarde desembarcaba en la península de Paracas.

Perú, dominado por una élite criolla conservadora y una poderosa burocracia peninsular, íntimamente ligadas al régimen colonial, dependía para su liberación de la actuación de fuerzas externas, tras la sangrienta derrota de la sublevación indígena-mestiza de los Andes. Mientras se producía el exitoso avance de la columna del coronel argentino José Antonio Álvarez de Arenales por la sierra peruana y San Martín ocupaba Huaura, la flota patriota guiada por el inglés lord Thomas Cochrane encerraba a la española en El Callao y capturaba, en sorpresivo combate naval, la fragata *Esmeralda* (6 de noviembre de 1820), buque insignia de la marina real.

Como resultado de estos sonados triunfos patriotas, solo empañados por las crueles matanzas de indios cometidas por los realistas, toda la costa septentrional de Perú, incluida la opulenta villa de Trujillo, quedó aislada. Ello facilitó el levantamiento criollo en Guayaquil (9 de octubre) y Trujillo (24 de diciembre), guiado en este último sitio por el propio intendente José Bernardo Tagle, marqués de Torre Tagle, tras obtener garantías de San Martín de «respetar prerrogativas, empleos y propiedades».[1] Estas sublevaciones dejaron

[1] John Lynch, *Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826*, Barcelona, Ariel, 1985, p. 200.

en manos de los patriotas todo el rico litoral norte peruano –de Chancay a Guayaquil–, un territorio cubierto por plantaciones azucareras, algodoneras y cacaoteras basadas en el trabajo de esclavos negros e indios *concertados*.

La actitud favorable a la independencia manifestada ahora por los grandes terratenientes y propietarios peruanos, como el marqués de Torre Tagle, hasta ese momento fiel aliado de España, significó la primera fisura sensible del bloque realista en Perú. En parte era reflejo del malestar despertado en la aristocracia criolla por la reimplantación de la constitución liberal de 1812 y, sobre todo, por la promulgación por las cortes metropolitanas de leyes antifeudales y anticlericales.

El sector privilegiado peruano consideraba ahora menos peligroso para sus intereses el programa de San Martín, que prometía respetar el *status quo* e incluía el establecimiento de una monarquía en Perú en momentos de aguda crisis de la corona española. Eso explica que muchos oficiales criollos, así como todo el batallón *Numancia* –integrado por venezolanos y granadinos–, que servían en las filas realistas, se pasaron en diciembre de 1820 al ejército libertador.

Después del fracaso de las negociaciones de San Martín con el virrey en Punchauca (2 de julio de 1821), los españoles se vieron obligados a abandonar Lima cuatro días después, ya que no podían sostenerse en la capital ante el empuje de las guerrillas indígenas. La huida realista hacia la sierra, el Cuzco y la fortaleza Real Felipe de El Callao, donde las condiciones eran más favorables para una resistencia prolongada, posibilitó la fácil entrada de San Martín en la ciudad fundada por Pizarro (10 de julio), para tranquilidad de la aristocracia limeña que temía el asalto de las *montoneras* indígenas que asediaban la desguarnecida ciudad.

En la barroca sede virreinal, San Martín proclamó la independencia el 28 de julio de 1821 y después aceptó la petición de la filial de la logia Lautaro, constituida con los mandos de su ejército, para que retuviera el Poder Ejecutivo en calidad de *Protector de la Libertad del Perú* (3 de agosto). Entre las primeras disposiciones del gobierno de San Martín figuró la liberalización del comercio y la supresión de aduanas interiores.

Además, dio ciertos pasos hacia el establecimiento de un régimen monárquico de gobierno, en consonancia con las tendencias prevalecientes entonces en el Río de la Plata. Para ello, validó los antiguos títulos nobiliarios y envió una delegación oficial al viejo continente para ofrecer el trono a un príncipe europeo.

A pesar de sus incuestionables preferencias monárquicas, el *Protector* no dejó de preocuparse por los agudos problemas sociales que encontró en el virreinato. Así, en agosto de 1821, dispuso la supresión de la *mita*, el tributo y cualquier tipo de trabajo forzado indígena, a la vez que otorgaba la libertad a los hijos de los miles de esclavos que laboraban en las plantaciones esparcidas por la costa.

Las medidas reformistas de San Martín y la pesada carga financiera que representaba para Perú el sostenimiento del *Ejército Unido* –hubo que recurrir a empréstitos forzosos de los comerciantes y grandes propietarios–, junto a la prolongación de la guerra, terminaron por enajenarle el precario apoyo aristocrático sin darle a cambio el del pueblo humilde. Para complicar más las cosas, el *Protector* no pudo evitar las derrotas de sus fuerzas en el sur y tampoco impedir que un ejército de tres mil hombres entrara y saliera impunemente de El Callao –castillo que no se rendía pese al férreo bloqueo de Cochrane–, llevándose armas y municiones.

Este costoso revés, que no pudo ser compensado ni siquiera por la entrega de esa misma fortaleza (21 de septiembre) a los patriotas por el conde José la Mar, puso al *Ejército Unido* en un verdadero callejón sin salida. Incapacitado para darle a la independencia peruana una base de masas, San Martín se encontró con la renuencia de la élite criolla a proporcionar más recursos para continuar la guerra y la imposibilidad objetiva de obtenerlos en Chile o Buenos Aires. A esto se sumó que Cochrane, enemistado con San Martín por el atraso en el pago de sus servicios, sublevó la escuadra y se retiró con ella el 6 de octubre de 1821.

Golpeado sin cesar en sus posiciones costeras por contingentes realistas que descendían por las laderas de la sierra peruana, el *Ejército Unido* estaba literalmente atrapado entre la espada y la pared. Fue para buscar una salida a su insostenible situación que el *Protector* entregó en forma provisional el gobierno al marqués de Torre Tagle

y se embarcó para Guayaquil (14 de julio de 1822), con el propósito de sostener una imprescindible entrevista personal con el *Libertador* de Colombia.

La ofensiva revolucionaria de Bolívar en Venezuela

La reanudación de la guerra de independencia en la parte septentrional de la América del Sur siguió un camino diferente al Cono Sur. En la región norandina, la contienda adquirió ahora un tono más radical, al concitar la incorporación de las masas populares al ejército patriota, en gran medida gracias al influjo y apoyo de la revolución haitiana.

Fue la república negra que había abolido la esclavitud y extendido la pequeña propiedad rural, presidida por Petion, la que acogió a cientos de criollos perseguidos por los realistas tras el fracaso de la segunda república venezolana y la reconquista de Nueva Granada por las tropas españolas en 1816. Entre los refugiados figuraba el propio Bolívar, en tierra haitiana desde fines de diciembre de 1815, luego de una corta estancia en Jamaica desde mayo de ese año, donde escribió su visionaria *Contestación de un americano meridional* o *Carta de Jamaica*.

En la generosa patria de Louverture, el *Libertador* quedó impactado por la espontánea solidaridad haitiana, por aquella sociedad de hombres libres –la única en todo el continente–, que determinó un cambio profundo en su pensamiento y convicciones revolucionarias. A tal extremo, que todavía once años después de su estancia en este territorio caribeño, el 25 de mayo de 1826, al dirigirse a los diputados al Congreso constituyente de Bolivia, puso a Haití como modelo de nación, a la que calificó «de la República más democrática del mundo».[2]

Después de ser escogido por sus compatriotas como jefe en Los Cayos, el *Libertador* se trasladó a Venezuela en la pequeña flota del

[2] Simón Bolívar, «Discurso del Libertador al Congreso Constituyente de Bolivia», *Obras completas*, tomo III, Caracas, Editorial Piñango, [s.f.], p. 765.

curazoleño Luis Brión, acompañado de más de doscientos veteranos combatientes venezolanos y neogranadinos escapados de la llamada *pacificación española*. En la isla Margarita, lugar del desembarco el 3 de mayo de 1816, territorio sublevado desde hacía seis meses por Arismendi, los expedicionarios –entre los cuales figuraban Carlos Soublette, los hermanos Gutiérrez de Piñeres y Manuel Piar– ocuparon el castillo de Santa Rosa y reconocieron a Bolívar como jefe supremo y a Mariño como segundo.

De aquí siguieron a Carúpano (1 de junio) y Ocumare (6 de julio), sitio en el cual el *Libertador* dio a conocer el trascendente decreto de abolición de la esclavitud. A partir de entonces, Bolívar quedó ligado a la causa popular y completamente dominado por el principio de la igualdad, haciendo coincidir la aspiración a la independencia con la abolición de la esclavitud. «Me parece una locura –diría en carta a Santander– que en una revolución de libertad se pretenda mantener la esclavitud».[3]

Desde que volvió a su patria, el *Libertador* se propuso darle un sentido diferente a la gesta independentista, para lo cual proclamó el perdón a los españoles que se rindieran, el cese de la *guerra a muerte* y la absoluta libertad de los esclavos. Sus medidas contrastaban con la política draconiana del jefe español Morillo contra los rebeldes y esclavos fugitivos.

Pero la radicalización de Bolívar conllevaba el alejamiento de los intereses de su clase, lo que le hizo perder el favor *mantuano* cuando todavía no se había ganado a las masas populares. Derrotado Soublette, uno de sus más destacados oficiales, por fuerzas enemigas, Bolívar se vio forzado a reembarcarse en Güiria, población dominada por Mariño y Bermúdez. Aquí su jefatura no fue acatada y debió regresar a Haití el 16 de agosto de 1816.

El destacamento patriota dejado por el *Libertador* en Ocumare, al mando de Soublette, avanzó sin ser detenido por los realistas en una penosa y larga travesía al este. En su marcha incorporaron a sus filas a campesinos, llaneros y esclavos y terminaron uniéndose con las fuerzas irregulares de origen humilde que ya combatían en la

[3] Ibídem, p. 665.

zona a las órdenes de Piar y José Tadeo Monagas, lo que abrió una nueva dimensión social a la guerra de independencia venezolana.

El ascenso en el ejército patriota del elemento popular a costa de la vieja oficialidad *mantuana*, que desde entonces se observó, tuvo su mejor expresión en el caso de José Antonio Páez, que de oscuro peón de un hato ganadero de Barinas se convirtió, a los 26 años, en jefe indiscutido de los llaneros y en uno de los más importantes generales de la república. En los años de 1815-1816, Páez integró las guerrillas patriotas que operaban en los llanos del Apure y Casanare. Situado al frente de un reducido grupo de combatientes, venció el 16 de octubre de 1816 a los realistas en el combate de la Mata de la Miel y cuatro meses después en Mantecal.

El liderazgo de Bolívar se confirmó en la reunión de Guasdualito, poblado fronterizo entre Apure y Casanare, cuando los llaneros impusieron la renuncia al jefe nominal: Francisco de Paula Santander. La promoción de Páez fue, en parte, resultado de una serie de resonantes triunfos militares que le permitieron liberar Los Llanos y ser aclamado *Jefe del Ejército del Apure*. La decisiva mutación política de los llaneros, aleccionados por el desenmascaramiento de la demagogia realista, los convirtió ahora en los más firmes puntales de la causa patriota.

Estos éxitos facilitaron los planes del *Libertador* para regresar a Venezuela con otra expedición, donde venían también varios oficiales europeos. Bolívar desembarcó, el 28 de diciembre de 1816, en la isla Margarita y luego se trasladó a Barcelona el 31 de ese mes.

Sin embargo, el revés de Clarines, el 9 de enero de 1817, lo obligó a variar su estrategia tradicional, que tenía por eje el litoral cacaotero y esclavista, para marchar al preterido interior (Guayana y Los Llanos) el 2 de abril de ese año. En estas regiones la situación era más favorable, ya que a los triunfos de Páez había que sumar los de Piar y Manuel Cedeño, quienes a fines de 1816 habían ocupado las ricas misiones capuchinas del Caroní.

Después de poner sitio a Angostura, el 11 de abril de 1817, las fuerzas patriotas propinaron en San Félix un golpe demoledor al ejército de La Torre, confirmando su dominio del granero de Venezuela. En contraste con los fracasos de Mariño frente al ejército

de Morillo en la costa oriental, Bolívar obtuvo importantes victorias en la Guayana después de unirse a los efectivos de Piar.

Con el auxilio de la flotilla de Brion, negado a seguir obedeciendo a Mariño, los patriotas lograron despejar el río Orinoco de embarcaciones españolas y capturar la sitiada Angostura el 17 de julio. Desde esta villa interior, convertida en capital provisional del tercer período de la República de Venezuela, Bolívar lanzó un decreto revolucionario que establecía el reparto de bienes y tierras entre los miembros de su ejército, en premio a méritos de guerra.

Esta ley del 10 de octubre de 1817, dirigida en última instancia a democratizar la propiedad rural, junto a la abolición incondicional de la esclavitud, proclamada con anterioridad, contribuyó de manera decisiva a darle el respaldo de las amplias masas y a consagrar su autoridad. En ese contexto, se produjo la desafortunada insubordinación de Piar, que amenazó la indispensable unidad patriota, al intentar soliviantar a los pardos y negros libres, por cuya causa fue fusilado el 16 de octubre.

Durante 1818 las fuerzas de Bolívar y Páez se enfrascaron en un inútil esfuerzo por avanzar desde el Apure sobre los fértiles valles que rodean a Caracas y sublevar a los esclavos de las plantaciones. Aunque Bolívar logró ocupar Maracay –tras vencer a Morillo en Calabozo (12-14 de febrero)– y llegar hasta los valles del Aragua, la inesperada retirada de los llaneros de Páez, negados a seguir alejándose del Apure, facilitó la exitosa contraofensiva de Morillo y Morales, que empujó a los republicanos de nuevo al interior. Casi al mismo tiempo, el general Cedeño perdía la campaña del Guárico, tras librar diez duras batallas con los realistas.

Pese a estos desalentadores reveses, se celebró desde el 15 de febrero de 1819 el Congreso de Angostura. El 5 de agosto los 26 delegados presentes aprobaron una constitución centralista para la tercera República de Venezuela y eligieron a Bolívar presidente. El valioso avance institucional fue opacado por la connotación negativa de una serie de restricciones impuestas por la asamblea –formada por 6 ricos propietarios, 10 abogados, 10 militares, 2 sacerdotes y 2 médicos– a la ley abolicionista de Bolívar, que en la práctica la hacía inoperante.

Liberación de Bogotá y fundación de la Gran Colombia

Después de la impresionante victoria de Bolívar y Páez sobre Morillo en Queseras del Medio, el 3 de abril de 1819, que sacó para siempre a los españoles del bastión llanero del Apure, el *Libertador* tomó la audaz decisión de abandonar la ofensiva sobre los atractivos valles del Aragua y Caracas, ruta por donde lo esperaba el enemigo, para avanzar, con poco más de mil hombres, hacia Nueva Granada (27 de mayo). Tras unírsele las guerrillas de Santander en Casanare y pasar la odisea del cruce de los Andes, el *Libertador* cayó por sorpresa, con un ejército famélico y diezmado, sobre los efectivos enemigos.

Las fuerzas realistas fueron vencidas en Pantano de Vargas, el 25 de julio de 1819 y, de manera más categórica, en Boyacá (7 de agosto), que obligó al virrey neogranadino a retirarse y abrir a los patriotas las puertas de Bogotá. Liberada la capital virreinal y confiscados los bienes enemigos, Bolívar despachó columnas en diferentes direcciones, que le dieron el dominio de la meseta central y otras regiones próximas, aunque las provincias suroccidentales y el litoral atlántico, incluido Panamá, continuaron en poder de España.

Nombrado Santander vicepresidente de las provincias libres de Nueva Granada, Bolívar retornó el 19 de septiembre a Venezuela para rendir cuentas de su exitosa campaña ante el Congreso de Angostura. En la capital del Orinoco, el *Libertador* logró que la asamblea aprobara la fundación de Colombia el 17 de diciembre de 1819, integrada por Venezuela, Cundinamarca (Nueva Granada) y Quito, esta última aún sin liberar.

En esa alentadora atmósfera se establecieron conversaciones de paz con los españoles y se produjo la entrevista entre Bolívar y Morillo, el 27 de noviembre de 1820, gracias a la coyuntura creada por la sublevación de Rafael Riego en España. Aunque en las negociaciones se logró la suspensión de hostilidades por seis meses y un tratado de regularización de la guerra, la lucha se reanudó de todos modos el 28 de abril de 1821, ante la negativa metropolitana de reconocer la independencia de Colombia.

Entonces el general Mariano Montilla ocupó Barranquilla y Soledad, para después liberar toda la costa atlántica y poner sitio a Cartagena, rendida el 5 de octubre de 1821. A la par, los habitantes de Maracaibo se levantaron en armas (28 de enero de 1822) y proclamaron su incorporación a Colombia, mientras el general Bermúdez liberaba, en vertiginosa ofensiva, se apoderaba del valle de Tuy y Caracas (15 de mayo).

Ante la inesperada irrupción republicana en los valles centrales venezolanos, el marqués de La Torre, que había sustituido a Morillo en el mando realista, se hizo fuerte en Carabobo, casi al mismo tiempo que Bermúdez era desalojado por Morales de la capital venezolana después del revés del Calvario de Caracas (23 de junio). No obstante, el 24 de junio de 1821, Bolívar ganaba en Carabobo la batalla decisiva frente a La Torre, que permitió al *Libertador* entrar en Caracas cuatro días después, tras siete años de obligada ausencia, limitando la presencia española en Venezuela a la fortaleza de Puerto Cabello.

A continuación, el *Libertador* se dispuso a dar los toques finales a la derrota del colonialismo en Colombia. Para ello dejó a Venezuela guarnecida por las fuerzas de Páez, Mariño y Bermúdez y salió para Nueva Granada, donde se reunía, desde el 6 de mayo de 1821, el Congreso constituyente en Cúcuta.

La asamblea, instalada con solo 57 de los 95 diputados electos fue inaugurada por Nariño, liberado de su prisión en España por el movimiento de Riego, recién nombrado por Bolívar vicepresidente interino de Colombia. El cónclave ratificó las disposiciones tomadas en Angostura, estableció un régimen rígidamente centralista y eligió a Bolívar presidente y Santander vicepresidente de la gran república norandina.

Por último, el 30 de agosto, el Congreso de Cúcuta aprobó la carta fundamental de Colombia que significó, en materia social, un nuevo retroceso en el programa revolucionario de la independencia. Cediendo a los intereses de los grandes hacendados de Cundinamarca y Venezuela –muchos de ellos reintegrados al bando patriota tras los triunfos de Boyacá y Carabobo–, la convención convirtió a la ley abolicionista de Bolívar en una de vientres libres

(21 de julio), aun cuando suprimía la trata, el tributo indígena y los onerosos impuestos coloniales. Con ello, el ciclo independentista volvía, desde el punto de vista económico-social, casi a su mismo punto de partida en el escenario venezolano-neogranadino, pues las clases privilegiadas desconocían los objetivos revolucionarios de Bolívar e intentaban restablecer el viejo *status* socioeconómico.

Victoria en Quito: encuentro de libertadores en Guayaquil

Para destruir los últimos vestigios de resistencia enemiga en Colombia, Bolívar dejó el gobierno de la república a Santander y salió, en octubre de 1821, en campaña sobre Popayán, con la intención de envolver a Quito en una guerra de dos frentes, pues Sucre avanzaba desde Guayaquil en la misma dirección. El lugarteniente de Bolívar había sido enviado a apoyar la junta independentista de Guayaquil creada, en octubre de 1820 al conocerse las noticias del desembarco de San Martín en la costa peruana.

A diferencia de lo ocurrido en el período 1809-1812, en esta oportunidad los plantadores y comerciantes cacaoteros de la costa de Guayaquil eran los promotores del movimiento separatista. Ahora los movía hacia el campo patriota la ostensible crisis de la dominación española en los territorios vecinos de Perú y Nueva Granada, la necesidad de mantener abierto el comercio y evitar las afectaciones económicas provocadas por los abusivos impuestos coloniales.

El 7 de abril de 1822 el *Libertador* obtuvo en Pasto la victoria de las alturas de Bomboná, que si bien le abrió la ruta a Quito, no pudo impedir la profusión de molestas guerrillas realistas. Esta guerra irregular retardó el avance de Bolívar y determinó que fuera Sucre quien obtuviera el concluyente triunfo en las faldas del volcán Pichincha, el 24 de mayo de 1822, que permitió la total liberación de la presidencia de Quito y su incorporación a Colombia, convertida en la más formidable potencia militar de la América del Sur.

Las noticias de los triunfos patriotas entusiasmaron a los criollos en las colonias españolas de Panamá y Santo Domingo,

destituyendo a las autoridades españolas y solicitando su incorporación a Colombia. En el caso dominicano el proceso se frustró por la ocupación de su territorio por el ejército de Haití encabezado por el presidente Boyer, pues ya Petion había muerto (1818).

En forma casi coincidente, Venezuela era también liberada en forma total. Aunque los realistas, guiados ahora por Morales, luchaban con altibajos contra Soublette, terminaron por apoderase de nuevo de Maracaibo y Coro, el 7 de septiembre y 3 de diciembre de 1822 respectivamente, lugares donde tuvieron que soportar una nueva ofensiva republicana respaldada por la escuadra patriota del coronel mulato José Padilla.

La derrota de la flota española por la colombiana, frente al litoral de Venezuela, precipitó la capitulación de Morales, titulado *Capitán General de la Costa Firme*, y de su segundo, el venezolano Narciso López, el 3 de agosto de 1823. Por su parte, el gobernador español de Puerto Cabello dilató la suya hasta el 8 de noviembre de ese año.

La histórica entrevista de Guayaquil celebrada entre Bolívar y San Martín, los días 26 y 27 de julio de 1822, creó las condiciones para culminar la independencia de Perú y el Alto Perú mediante la cooperación militar de Colombia. Pese a las diferentes concepciones que sobre la forma de gobierno y otras cuestiones tenían los próceres, ambos coincidieron en propulsar la unión de las antiguas colonias hispanoamericanas.

Pero a su regreso a Lima, San Martín se encontró con que su frágil alianza con la aristocracia criolla estaba deshecha. La crisis se había precipitado durante su ausencia por el destierro de su ministro Bernardo Monteagudo, decidido partidario de la expulsión total de los españoles del Perú, en un movimiento inspirado por José de la Riva Agüero.

Desalentado por la creciente animadversión de la élite peruana, que veía empantanarse su economía ante la prolongación de la guerra, y considerándose en el plano personal un obstáculo para el paso de Bolívar a completar la emancipación del Perú, el *Protector* renunció ante el Congreso limeño inaugurado el 20 de septiembre. Detrás de esta decisión, se hallaba su profunda decepción por la actitud hipócrita de las clases privilegiadas peruanas.

El breve imperio de Iturbide

Las exitosas campañas militares de Bolívar y San Martín atemorizaron al ala conservadora de la aristocracia criolla, hasta entonces fiel aliada de España y Portugal. El sensible cambio en la correlación de fuerzas, que desde principios de la década de 1820 –victorias de Maipú y Boyacá– se inclinaba en forma ostensible a favor de los libertadores, compulsó al sector criollo más remiso a romper con la metrópoli y aceptar una independencia ya de hecho inevitable, bajo el influjo de los nuevos acontecimientos europeos.

Las revoluciones de enero y agosto de 1820 en España y Portugal dividieron las fuerzas españolas –liberales y absolutistas–, tanto en Europa como en América. Sus consecuencias en Nueva España y Perú fue abrir una profunda grieta de las respectivas coaliciones realistas de criollos y peninsulares, lo que restringió sus capacidades para contrarrestar el movimiento independentista. Incluso, el gobierno español llegó a dar instrucciones a los virreyes para negociar la paz y cierta autonomía con los patriotas, a cambio del reconocimiento de su soberanía en América.

Ese fue el ambiente que rodeó, entre 1820 y 1821, las entrevistas del general Juan O'Donojú en México con Agustín de Iturbide y la del virrey del Perú, José de la Serna, con San Martín. En este contexto, los virreinatos de Perú y Nueva España alcanzaron sus respectivas independencias en el lapso de tres meses, en julio y septiembre de 1821. En Perú, México y Centroamérica, la emancipación fue acelerada por las peligrosas perspectivas que se abrieron para las élites criollas conservadoras con los triunfos liberales de la península ibérica y las disposiciones anti feudales y anticlericales que siguieron al restablecimiento de la constitución de 1812.

La difícil coyuntura por la que atravesaba España durante estos años convulsos del trienio liberal, explica que disminuyera de manera notable la llegada de nuevas tropas a América, sobre todo después que Riego sublevara en Cádiz (1820) a la ambiciosa expedición de reconquista que allí se preparaba. A esta altura, la corona tenía en América, además de las fuerzas auxiliares de milicias, unos 87 mil soldados, 41 mil en Nueva España, 19 mil en las Antillas

y 27 mil en América del Sur, aunque solo un tercio de ellos eran naturales de España.

La última expedición española de cierta relevancia, antes que la rebelión gaditana cerrara toda posibilidad de enviar nuevos ejércitos, fue la despachada a Lima en mayo de 1819.

En 1823, tras el restablecimiento del absolutismo de Fernando VII por los «cien mil hijos de San Luis», ya era demasiado tarde para revertir el proceso emancipador.

En México el movimiento revolucionario había retrocedido, después de la muerte de Hidalgo y Morelos, en sus perspectivas de transformación social, aunque la llama de la insurrección se sostenía en pequeñas partidas guerrilleras, encabezadas por Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria. La única novedad en este panorama fue el desembarco en Nueva España de una expedición libertadora encabezada por el liberal español Francisco Javier Mina (1817), en la que figuraban el cubano Joaquín Infante y el mexicano fray Servando Teresa de Mier.

Eliminado Mina, la independencia de México parecía bastante lejana hasta que los acontecimientos se precipitaron por la revolución de Riego en España. La reimplantación de la constitución liberal de 1812 y las cortes en la metrópoli amenazaron los intereses del alto clero novohispano y de los terratenientes señoriales criollos, quienes fraguaron la ruptura con España para evitar la aplicación en México de las leyes antifeudales y anticlericales.

La puesta en vigor en Nueva España de la constitución gaditana, el 31 de mayo de 1820, y la publicación en México, en enero del siguiente año, de los decretos anti eclesiásticos de las Cortes españolas, fueron decisivos en la preparación de los planes contrarrevolucionarios de la alianza conservadora. El artífice de este proyecto contrarrevolucionario fue el coronel realista criollo Agustín de Iturbide, quien había sobresalido por sus crueles métodos represivos contra los patriotas.

El plan inicial proponía el establecimiento de una monarquía independiente en el Virreinato de Nueva España –el trono se ofrecía a los Borbones– así como el absoluto respeto a bienes y privilegios de la Iglesia, lo que explica la participación del propio virrey español

y del inquisidor Matías Monteagudo. La ruptura con la metrópoli liberal permitía, como efecto colateral, alejar la posibilidad de una intervención militar foránea en México, al estilo de la conducida por San Martín al Perú o la que había llevado al propio suelo novohispano al revolucionario español Mina.

Iturbide, nombrado a fines de 1820 al frente de un poderoso ejército, constituido en forma predominante por criollos, terminó alejándose de sus socios españoles del complot de La Profesa. En un golpe maestro, buscó la alianza con Guerrero y los insurgentes, lo que dio a su movimiento la base de masas de que carecía.

Para conseguirlo, envió una carta conciliatoria a Guerrero, el 10 de enero de 1821, y unas semanas después se entrevistó en secreto con el principal jefe rebelde en Acatempan. A facilitar el entendimiento entre fuerzas que hasta entonces se combatían a muerte, contribuyó la visible derrota de la guerra independentista mexicana y el virtual abandono por los insurgentes del programa revolucionario de Hidalgo y Morelos.

Sobre bases conservadoras se proclamó el Plan de Iguala (24 de febrero de 1821) o de las tres garantías. En sus 33 artículos, la plataforma de Iturbide, que elogiaba los tres siglos de dominación española en México, proponía el establecimiento en la *América Septentrional* de una monarquía independiente de España –el trono se ofrecía a Fernando VII o a un príncipe Borbón–, el respeto a los bienes y privilegios de la Iglesia y la garantía de la unión e igualdad entre americanos y españoles. Además, basándose en las viejas tradiciones hispánicas, se preveía la convocatoria de unas Cortes en Nueva España y la formación de una junta de gobierno provisional, que se pondría en manos del virrey Apodaca.

Aunque el Plan de Iguala no ocultaba su carácter contrarrevolucionario, tenía dos aspectos positivos: la extinción del sistema de castas –bastante maltrecho por las luchas revolucionarias y las leyes liberales metropolitanas– y la independencia. Con este paso, la aristocracia criolla arrebató la hegemonía del proceso emancipador a los sectores populares y, al mismo tiempo, desplazó del poder a la burocracia colonial y a los grandes propietarios y comerciantes monopolistas peninsulares.

Sin el apoyo de la oficialidad criolla, el gobierno virreinal solo podía contar con una parte muy minoritaria del ejército, constituida en esencia por los pocos mandos españoles, divididos en liberales y absolutistas tras la deposición del virrey Apodaca (5 de julio de 1821). En estas condiciones, la capitulación definitiva de España era solo una cuestión de tiempo, pues los partidarios de Iturbide controlaban casi todo el territorio novohispano.

La adversa correlación, que dejaba a los realistas sin alternativas viables, obligó al recién llegado virrey O´Donojú a firmar el Tratado de Córdoba, el 24 de agosto de 1821, y a convalidar poco después el *Acta de Independencia* (28 de septiembre). El posterior desconocimiento de estos acuerdos por el gobierno de Madrid despejó el camino, al año siguiente, para la proclamación de Iturbide como emperador de México.

Pero el imperio de Iturbide –cuya jurisdicción incluía a Centroamérica– duró poco. Acosado por una creciente oposición republicana y una pronunciada crisis económica y fiscal, el ambicioso Iturbide debió abdicar el 19 de marzo de 1823 y exiliarse. Después de un frustrado intento restaurador, fue ejecutado (19 de julio de 1824).

Formación de la república del Centro de América

Los sucesos desencadenados en el vecino Virreinato de Nueva España, con la proclamación del *Plan de Iguala*, causaron un enorme impacto en toda la América Central. La mayor repercusión se produjo en la provincia capital, Guatemala, que por su abundante población indígena y características socio-económicas, repetía la estructura del sur de México (Oaxaca y Yucatán).

Al igual que hizo la aristocracia criolla de Nueva España, la élite señorial guatemalteca, poseedora de grandes mayorazgos y beneficiada con la explotación servil del indio, mantuvo una incondicional fidelidad a España para alejar cualquier contagio revolucionario. Solo algunos hacendados salvadoreños dedicados a la producción

de índigo, que conformaban el sector propietario más vinculado a la economía mercantil en el istmo, fueron capaces de buscar una alternativa diferente.

Temerosa de un levantamiento de las masas explotadas de indígenas y mestizos –como el que había sacudido Nueva España con Hidalgo y Morelos–, la élite criolla de la Capitanía General de Guatemala mantuvo su fidelidad a las autoridades tradicionales durante todos los años de la crisis española iniciada con la invasión napoleónica. En ese lapso, solo hubo conatos aislados de rebeldía, entre ellos el ocurrido en El Salvador, el 5 de noviembre de 1811, o la frustrada conspiración del convento de Belén en Guatemala (1813).

Detrás de la actitud revolucionaria de los hacendados y comerciantes criollos de El Salvador se encontraban las restricciones coloniales al principal rubro de exportación de la capitanía y las afectaciones derivadas de su extrema dependencia de los comerciantes monopolistas de la ciudad de Guatemala, adueñados de las rutas, mercados y el financiamiento de los cultivos. Junto a intelectuales liberales, pequeños comerciantes y otros exponentes de las capas medias criollas, los grandes propietarios salvadoreños protagonizaron las principales protestas y conspiraciones anteriores a la coyuntura de los años veinte.

Sin embargo, estos sectores radicales, nucleados en El Salvador y Honduras, estaban aislados y no consiguieron alterar la desfavorable correlación de fuerzas, ni hacer avanzar la lucha por la independencia, hasta que la rancia aristocracia señorial de la provincia capital decidió actuar por su cuenta y seguir el ejemplo de la élite novohispana. A favor de ese proceso de transición por una vía incruenta, concertado con las autoridades españolas, actuó el triunfo liberal en España y los acontecimientos del vecino Virreinato de Nueva España, del que siempre la capitanía había dependido.

La dirección de estos acontecimientos estuvo en manos de los ricos criollos guatemaltecos, encabezados por el marqués Mariano de Aycinena, aliados a las autoridades españolas y al propio capitán general Gabino Gainza. En medio de manifestaciones callejeras que exigían la independencia, alentadas por el ala liberal de la élite

criolla, encabezada por el cura José Matías Delgado y el teniente de milicias José Francisco Barrundia, el cabildo capitalino no tuvo otra disyuntiva que aprobar, el 15 de septiembre de 1821, la separación de España.

Para acorralar a los exaltados republicanos de El Salvador y Honduras, cobró fuerza entre la aristocracia conservadora de Guatemala la idea de anexar la capitanía al recién fundado Imperio Mexicano, pues la colonia carecía de un ejército propio que pudiera defender el *status quo*. Por ese motivo, el 5 de enero de 1822, Gainza, en su nueva condición de *Jefe Político Supremo de las Provincias del Centro de América*, aceptó el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba, disolvió la junta constituida en la capital y solicitó a Iturbide la ocupación militar del istmo.

Los proyectos anexionistas de las élites criollas de México y Guatemala, aliadas a los peninsulares, desataron airadas protestas en toda Centroamérica –incluso Costa Rica solicitó ayuda a Bolívar–, aunque la mayor resistencia se vertebró en El Salvador. Encabezados por el cura Delgado, los salvadoreños proclamaron la independencia, tanto de España como de México, y abolieron la esclavitud, institución que no constituía en ninguna parte de la región centroamericana el sostén de la economía.

El improvisado ejército formado por el salvadoreño Manuel José Arce con los peones e indios de las haciendas, fue derrotado el 9 de febrero de 1823 por las experimentadas tropas mexicanas del general italiano Vicente Filísola. Pero las noticias de la caída del Imperio de Iturbide, ocurrida diez días después, junto a los levantamientos y protestas en varias provincias centroamericanas, despejaron el camino a la apertura de un congreso propio en Guatemala el 24 de junio de 1823.

La asamblea istmeña no tardó en proclamar la independencia absoluta de las Provincias Unidas del Centro de América (1 de julio). El 22 de noviembre de 1824, los diputados emitieron la constitución de la República Federal de Centroamérica –la provincia de Chiapas quedó unida a México– y cinco meses más tarde escogieron al primer presidente en la persona del salvadoreño Arce.

Proclamación del Imperio de Brasil

Aunque el movimiento emancipador en esta colonia portuguesa fue paralelo y, en gran medida, similar al de México y Centroamérica, tuvo sus rasgos distintivos. Ello se originó en el traslado a Rio de Janeiro de la familia real, que huía de la ocupación napoleónica de la península ibérica. La presencia de la monarquía lusitana en territorio americano, desde enero de 1808, forzó la adopción de la virtual autonomía de su colonia brasileña, para satisfacción de la aristocracia criolla, formada por ricos productores de azúcar, algodón y café, así como de traficantes de esclavos.

En Brasil la élite criolla supo combinar con mucha habilidad la defensa del *status quo*, que implicaba la total fidelidad a los Braganza, con las reivindicaciones comerciales, las audaces innovaciones técnicas e industriales y el respaldo irrestricto a la trata de esclavos, imprescindible para sostener la expansión de la economía de plantación. Pero el idilio con la monarquía lusitana fue cortado en forma inesperada por la revolución liberal metropolitana.

La exitosa rebelión militar de Oporto, en agosto de 1820, inició un movimiento liberal burgués dirigido a reformar todo el viejo sistema monárquico y a lograr la retirada de las fuerzas británicas que todavía ocupaban Portugal. Si en estos aspectos la sublevación tenía un signo positivo, todo lo contrario sucedía con su proyección hacia la valiosa América portuguesa, pues perseguía la recolonización del Brasil.

Para conseguirlo, era indispensable comenzar con el regreso de los Braganza a Lisboa, símbolo del restablecimiento de la vieja relación metrópoli-colonia. Como resultado de la presión de las Cortes de Lisboa, Juan VI se vio forzado a retornar a Portugal el 26 de abril de 1821.

Ese fue el principio de la ruptura de la élite criolla de Brasil con el gobierno liberal portugués, ante la inminente amenaza de perder el privilegiado *estatus* alcanzado. Para los liberales portugueses, que como en España eran revolucionarios hacia adentro y colonialistas hacia fuera, el proceso recolonizador solo estaría consolidado con la permanencia del rey en Lisboa junto a las Cortes. Ello permitiría

restablecer la preeminencia portuguesa y detener el creciente peso de los brasileños en el llamado Reino Unido de Portugal, Brasil y los Algarves.

El 9 de enero de 1822, el hijo del monarca Juan VI, Pedro de Braganza, desconocido como príncipe-regente por las Cortes, se negó a regresar como su padre a Portugal, quizás en acuerdo previo con su progenitor. Ante nuevas presiones de los liberales lusitanos que disminuían sus prerrogativas, el heredero al trono portugués declaró el 7 de septiembre de ese año la independencia de Brasil –grito de Ipiranga (Sao Paulo)– y proclamó al país libre de la tiranía de las Cortes de Lisboa, en la que los representantes brasileños apenas constituían un tercio de los diputados.

La clave de la exitosa maniobra, orquestada por el aristócrata paulista José Bonifacio Andrade y Silva, estuvo en la alianza de las élites criollas de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Minas Geraes, principales beneficiarias de la expansión cafetalera, con la burocracia, la nobleza y los comerciantes portugueses no monopolistas radicados en Brasil. En particular, los propietarios y plantadores de la capital fueron los principales suministradores de recursos financieros y hombres para conseguir la expulsión de las tropas liberales portuguesas del territorio brasileño, fortificados en sus reductos de Bahía y Gran Pará.

La aristocracia fluminense se sentía amenazada con la posible repatriación de Pedro de Braganza, que no solo daría al traste con la autonomía brasileña y pondría fin al libre comercio y la trata de esclavos, sino también terminaría por propiciar la desintegración del Brasil. El temor al establecimiento de un rosario de pequeñas repúblicas, como ocurría en Hispanoamérica, y a un levantamiento popular que diera al traste con la esclavitud, fueron las razones que llevaron a la élite brasileña a apoyar la singular independencia de Brasil, realizada con el apoyo de los absolutistas portugueses.

El Imperio de Brasil se consolidó después de la disolución de la Asamblea Nacional el 12 de noviembre de 1823, pues el ala democrático-republicana de los diputados, encabezada por Januario da Cunha Barbosa y Cipriano Barata, pretendía restringir los poderes al monarca. A ello también contribuyó la retirada total de las

fuerzas lusitanas el 12 de abril de 1824 y la derrota de la rebelión republicana en Pernambuco el 17 de noviembre de ese mismo año.

La sublevación nordestina era la reedición, corregida y aumentada, de un movimiento similar que en 1817 ya había estremecido durante 75 días a esa región brasileña, afectada por la irreversible crisis de la producción azucarera local. En Pernambuco, actuaba también la corriente democrático-republicana, revitalizada con los éxitos del movimiento emancipador hispanoamericano.

La implantación por Pedro I de una constitución autoritaria el 25 de marzo de 1824 –que desconocía los intereses de la aristocracia criolla–, coincidió con el restablecimiento del absolutismo en Portugal. La amenaza de una posible reunificación de los tronos de Rio de Janeiro y Lisboa fue un factor adicional que llevó a la formación en Recife de la efímera Confederación del Ecuador (2 de julio), aplastada a sangre y fuego por el ejército imperial.

Como ya había ocurrido con la república nordestina de 1817, los grandes plantadores esclavistas de Pernambuco se alarmaron con las proclamas igualitaristas de algunos líderes revolucionarios como fray Joaquín Caneca, a pesar de que no incluían en su discurso la abolición de la esclavitud. El programa social de los republicanos, terminó por enajenarles el apoyo de la élite criolla local, sin conseguir a cambio el de los explotados trabajadores negros de las plantaciones.

La completa independencia de Brasil solo se consiguió con la nacionalización del trono. Ese proceso estuvo facilitado por la creciente debilidad del emperador, cuyo prestigio se fue afectando por la crisis económica, las consecuencias de la pérdida de la Banda Oriental y sus intentos de reunificar la corona con Portugal tras la muerte de su padre en 1826.

El 7 de abril de 1831, luego de varias jornadas de violentos enfrentamientos callejeros entre criollos y portugueses, Pedro I fue obligado a renunciar en favor de su hijo de cinco años de edad. La salida del monarca, dejó por fin todo el poder en manos de los representantes de la aristocracia brasileña.

Ayacucho: derrota final del colonialismo

La salida de San Martín de Perú, el 20 de septiembre de 1822, dejó el gobierno patriota en manos de un congreso dominado por elementos de las capas medias y la intelectualidad que, liderados por el cura Francisco Javier Luna Pizarro, logró arrinconar a los representantes aristocráticos más conservadores para imponer su plataforma liberal. Nombrada una junta presidida por La Mar, los diputados declararon constituida la República Peruana, desautorizaron las gestiones en Europa en busca de un monarca promovida por el *Protector* y aceptaron unas bases o estatutos (16 de diciembre) que eliminaban los títulos nobiliarios y establecía un régimen más democrático que el anterior.

Las graves derrotas militares infligidas por los realistas a los ejércitos dejados por San Martín dieron el pretexto para un golpe militar en la capital, alentado por la aristocracia criolla. El 23 de febrero de 1823 las tropas al mando de los peruanos Andrés de Santa Cruz y Agustín Gamarra destituyeron a la oficialidad rioplatense, a la que responsabilizaban con los reveses, y nombraron a Riva Agüero presidente, abriéndose un período de luchas intestinas por el poder en la capital.

Al final, sin posibilidades reales de detener la ofensiva de los españoles, que incluso durante dos días habían ocupado Lima, obligando a los patriotas a refugiarse en El Callao (18 de junio de 1823), el congreso peruano –que nombró a Torre Tagle al frente del gobierno, desconociendo el de Riva Agüero en Trujillo– debió entregar el mando militar a Sucre. Además, solicitó la urgente ayuda de Bolívar.

El *Libertador* consideraba entonces muy peligrosa y comprometida la situación de los nuevos estados hispanoamericanos ante los últimos acontecimientos europeos, después de restablecido el absolutismo en 1823. Bolívar estaba preocupado con la posibilidad de que España pudiera organizar una expedición de reconquista con el apoyo de la Santa Alianza, por lo que creía imperdonable «dejar una puerta abierta tan grande como la del Sur, cuando podemos cerrarla antes que lleguen los enemigos por el Norte».[4]

[4] S. Bolívar, «Carta a Santander del 16 de marzo de 1824», *Obras completas*, tomo I, p. 932.

Por eso, Bolívar no vaciló en marchar al Perú, donde encontró un clima generalizado de desaliento. Tras recibir amplios poderes al día siguiente de su llegada a El Callao (1 de septiembre de 1823) y después de poner en vigor una constitución democrática, elaborada por el congreso, que sancionaba la ley de vientres libres dictada por San Martín, salió en campaña hacia el norte. El Libertador dejó al frente del gobierno en Lima a Torre Tagle, quien no tardó en pasarse al enemigo.

El presidente provisional se había plegado a los realistas con la intención de evitar mayores perjuicios a su clase, después del amotinamiento de la desmoralizada guarnición rioplatense de El Callao (5 de febrero) y de la disolución del Congreso, tras destituirlo de su cargo. Estos acontecimientos posibilitaron la fácil reconquista realista de Lima y El Callao el 29 de febrero de 1824. Para justificar su traición, y la de 340 jefes y oficiales peruanos que le siguieron, Torre Tagle dio a conocer una proclama en la que acusaba al *Libertador* de todas las desgracias y reveses sufridos por Perú.

Bolívar, gravemente enfermo en Pativilca, recién nombrado dictador del Perú por el Congreso limeño –su última decisión antes de disolverse– y aislado en la costa norte con las avanzadas del ejército colombiano traídas por Sucre y las pocas fuerzas peruanas y rioplatenses aún leales, tomó entonces una serie de medidas de emergencia para la reorganización patriota. Primero ordenó la total destrucción del territorio que se abandonaba al enemigo y la recaudación de una contribución obligatoria entre todos los grandes propietarios, junto a la expropiación del ganado, haciendas y objetos de valor de las iglesias.

A continuación, el *Libertador* decretó la entrega en propiedad a los pueblos originarios de las tierras comunales que trabajaban (8 de abril de 1824) y otras disposiciones favorables a las comunidades indígenas. Con la adopción de medidas revolucionarias, Bolívar rompió toda posibilidad de entendimiento con la aristocracia peruana y se lanzó a arrebatar a los españoles el apoyo de la mayoritaria población aborigen.

A aliviar la comprometida situación del ejército bolivariano contribuyó la inesperada división realista surgida en enero de 1824,

a consecuencia del restablecimiento del absolutismo en España el año anterior y la oportuna llegada de refuerzos colombianos (marzo). Ello permitió al *Libertador* salir sin dilación, ya repuesto de su grave enfermedad, con todo su ejército sobre la sierra, donde se le unieron las *montoneras* peruanas.

El 6 de agosto de 1824, en las pampas de Junín, Bolívar destrozó a las fuerzas realistas, empujadas hacia el Cuzco y Alto Perú. El 7 de diciembre el *Libertador* entró otra vez en Lima, liberada definitivamente, y dos días después Sucre obtenía el memorable triunfo de Ayacucho, sobre los 12 mil hombres de los ejércitos del virrey, que de hecho significó la derrota total del colonialismo español en la América continental.

La extraordinaria victoria de Ayacucho facilitó a los sobrevivientes guerrilleros de las *republiquetas* ocupar La Paz y proclamar, el 25 de enero de 1825, la total independencia del Alto Perú. La separación era también promovida por los terratenientes de La Paz –escala obligada entre Lima, el Sur andino y Potosí–, deseosos de cortar los vínculos comerciales con las provincias peruanas de Arequipa y Cuzco, para dominar el abastecimiento agrícola de los mercados mineros.

Puesto ante hechos consumados, Sucre autorizó la reunión en Chuquisaca de un congreso altoperuano de 49 delegados (9 de febrero), dominado por la aristocracia criolla local. Este cónclave ratificó el 6 de agosto de 1825 la independencia de la nueva república que, en honor al *Libertador*, llevaría por nombre su apellido: República de Bolívar o Bolivia.

Designado el *Libertador* al frente del gobierno altoperuano –cargo que no demoraría en dejar en manos de Sucre para regresar a Perú y Colombia–, dispuso varias medidas de amplio beneficio social. Entre ellas figuró la abolición de los servicios personales de los indios, la igualdad jurídica de todos los ciudadanos y repartos de tierra que incluían no solo a miembros de su ejército, sino a todos los desposeídos.

Además, Bolívar incluyó una serie de disposiciones democráticas en el texto de la constitución, que elaboró especialmente para la

nueva república del altiplano. Como confesara a Santander, la carta magna bolivariana revocaba «desde la esclavitud para abajo, todos los privilegios».[5]

El Congreso de Panamá y el problema colonial de Cuba y Puerto Rico

Desde el mismo inicio del ciclo independentista de 1808 a 1825, Cuba fue objeto de reiterados intentos dirigidos a su emancipación de España. El ejemplo de la independencia de las colonias españolas de la masa continental creó durante la década del veinte, en determinados estratos de la población de la isla, un ambiente favorable para las conspiraciones separatistas.

El incremento de los complots anticolonialistas en Cuba, que contaban con el respaldo de la Colombia de Bolívar y del primer gobierno republicano de México, presidido por Guadalupe Victoria, debió desarrollarse a contrapelo de los plantadores criollos del occidente de la isla. Este sector de grandes propietarios había obtenido de España importantes reivindicaciones económicas: abolición del estanco (1817), libertad de comercio (1818), propiedad de las tierras mercedadas (1819), supresión del arancel restrictivo de 1821, creación de un puerto libre en La Habana y garantías para el mantenimiento de la esclavitud.

A este factor, que debilitaba la organización de la lucha emancipadora en la Mayor de las Antillas, se unía el reforzamiento español en la isla, convertida en el principal refugio de las tropas y familias realistas que se retiraban del resto del continente. Por eso los protagonistas de los movimientos separatistas de estos años en Cuba –las conspiraciones de los Soles y Rayos de Bolívar y la de la Legión del Águila Negra– procedieron, por lo general, de sectores ajenos a los ricos plantadores esclavistas del occidente de la isla, y estuvieron vinculados a personalidades latinoamericanas, muy en particular a los gobiernos de México y Colombia.

[5] Indalecio Liévano Aguirre, *Bolívar*, Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 1979, p. 426.

Eso explica que en el Congreso de Panamá, reunido del 22 junio al 15 de julio de 1826 con representantes de México, Centroamérica, Colombia y Perú, se presentara la propuesta de liberar a Cuba y Puerto Rico, cónclave que además debería pronunciarse sobre la futura confederación de las antiguas colonias españolas, rechazar los planes de la Santa Alianza para auspiciar la reconquista realista, tras el restablecimiento absolutista de Fernando VII en 1823, así como enfrentar las crecientes amenazas del expansionismo norteamericano. La reunión, bajo el clima de presión diplomática de las grandes potencias (Inglaterra y Estados Unidos), no logró consolidar sus propósitos integracionistas y tampoco conformar el ejército continental que debería liberar a las Antillas españolas.

El abandono por Colombia y México de sus proyectos independentistas para Cuba y Puerto Rico, debido a los cambios en la coyuntura internacional –fracaso de los planes de reconquista de España y la Santa Alianza– y las presiones norteamericanas en concordancia con su política de la *fruta madura* –espera paciente para apoderarse de la mayor de las Antillas–, unido al *boom* de la plantación azucarera, las oportunas concesiones españolas a la aristocracia esclavista antillana y el temor a una repetición de lo ocurrido en Haití, entre otros factores, explican que las dos islas del Caribe siguieran siendo colonias después de conseguida y consolidada la emancipación en los restantes países latinoamericanos.

Resultados de la independencia

Bolívar fue el mejor exponente del genio militar y político de la etapa final de la independencia, avalado por sus ideales de integración y brillantes victorias de armas. Además sintetizó, desde 1816, lo más avanzado del pensamiento criollo, al enarbolar un avanzado programa social. El ejército bolivariano –la única institución fuerte y organizada en el campo patriota– se hizo portador desde 1816 de la iniciativa revolucionaria: abolición de la esclavitud y de la servidumbre, eliminación de privilegios y gravámenes feudales, repartos agrarios, régimen republicano de gobierno, etc.

Con este programa de amplias transformaciones sociales y económicas, se logró en forma temporal compensar tanto la extrema debilidad del componente burgués de la revolución, como la derrota o neutralización de los representantes más radicales del movimiento popular. Nos referimos en particular, a Hidalgo y Morelos en México, Moreno y Artigas en el Río de la Plata y, en menor medida, Manuel Rodríguez en Chile. Esto vale también para el caso del doctor Francia, aislado en Paraguay, aunque el único de esos dirigentes revolucionarios de la independencia que no pudo ser vencido.

Los reveses y fracasos del movimiento popular fueron, sin embargo, las premisas que permitieron concretar un virtual bloque de clases anticolonial que en varios lugares –de manera paradigmática en los territorios liberados por el ejército bolivariano– amplió las bases sociales de la lucha independentista tras objetivos más acordes a las posibilidades históricas. A la formación de este amplio frente poli clasista también contribuyó el terror contrarrevolucionario, desatado por los realistas en las áreas reconquistadas que afectó sin distinción de clases o raza a los diferentes estratos de la sociedad hispanoamericana. La brutal e indiscriminada represión colonial, creó poco a poco las condiciones para una mayor participación de las masas populares en la lucha independentista, al mismo tiempo que compulsó la radicalización de muchos dirigentes, como ocurrió con el propio Bolívar.

En estas nuevas circunstancias, las guerrillas, que gozaban de un auténtico respaldo popular, devinieron en importante auxiliar de los ejércitos libertadores. Así ocurrió con las *republiquetas* altoperuanas de Juana de Azurduy, Ignacio Warnes, José Miguel Lanza y otros caudillos, las montoneras de Martín Güemes, en Salta, los insurgentes de Vicente Guerrero en México, las guerrillas chilenas de Manuel Rodríguez o las peruanas de Isidoro Villar y José Félix Aldao.

De este modo, la perspectiva social de la independencia estuvo presente en el programa del proceso independentista latinoamericano a través de las aspiraciones de las clases oprimidas y del ideario de Bolívar, Moreno, Hidalgo, Morelos, Artigas, Francia, Petion y

demás representantes de la corriente criolla más avanzada. Ellos aportaron el indispensable componente social a la emancipación, pues no solo lucharon por la liberación política, sino también por una amplia redistribución agraria y la liquidación del régimen de explotación basado en la esclavitud y la servidumbre.

Además, la guerra independentista terminó con un profundo desquiciamiento de la sociedad, que alteró la correlación de fuerzas de clase, cambió la ideología dominante, las mentalidades, la vida cotidiana y, en general, toda la supra estructura forjada durante varios siglos de coloniaje. En síntesis, la magnitud de la lucha popular convirtió a la independencia en un movimiento social de profunda envergadura histórica. En este sentido, hay también que registrar el impulso dado al complejo proceso de formación nacional, la eliminación definitiva de las formas más retrógradas de explotación –como la *mita*–, el establecimiento del sistema de gobierno republicano –con excepción de Brasil– y el principio de la igualdad legal, así como la abolición de viejos tributos feudales, monopolios comerciales, títulos nobiliarios y el vejaminoso régimen de castas.

Aunque la emancipación desató incontenibles ansias de justicia social, al final no logró sostener o realizar un cambio sustancial de las viejas estructuras económicas y sociales, salvo en Haití y Paraguay. La posibilidad histórica de realizar la independencia de España junto con una profunda transformación socio-económica de América Latina, fue cortada por la aristocracia criolla, que preparó las condiciones para revertir las conquistas sociales inmediatamente después de conseguida la emancipación.

Tras el programa social impuesto a la lucha independentista por las clases explotadas y algunos dirigentes de la talla de Bolívar, se produjo, una vez conseguida la derrota metropolitana, el retroceso. Para la aristocracia criolla, que en cierta forma ocupaba el lugar que correspondía a una inexistente burguesía nacional, la revolución anticolonialista había ido demasiado lejos.

En realidad, los principales logros democráticos de la independencia comenzaron a revertirse desde 1826, o incluso en algunos lugares desde antes, cuando los grupos conservadores

de la élite criolla, aliados a la Iglesia, aprovecharon la debilidad de los elementos más radicales para imponer un brusco giro a la derecha y echar por tierra las principales conquistas populares. Como parte de ese proceso, la mayoría de los libertadores fueron apartados en forma violenta del poder por la aristocracia criolla, como ocurrió con Artigas en 1820, San Martín en 1822, O´Higgins en 1823, Sucre en 1828 y Vicente Guerrero en 1830 –ambos asesinados poco después–, así como el propio Bolívar en este último año.

Pero la frustración del programa revolucionario de la independencia, y su incapacidad para imponer un nuevo tipo de sociedad en América Latina, no pueden empañar las trascendentales conquistas históricas de aquel acontecimiento, que ni el auge ulterior de la reacción clerical terrateniente de signo conservador pudo liquidar en forma completa. Por eso, el retorno registrado en los logros de la independencia, debe ser entendido solo en forma relativa, pues en modo alguno significó un regreso al mismo punto de partida, ya que la sociedad nunca volvería a ser la misma de antes, como sucedió, por ejemplo, en el convulso escenario de las zonas mineras de Nueva Granada o en las plantaciones venezolanas. En estos lugares, aunque la esclavitud persistió jurídicamente, en la práctica el viejo régimen había quedado desarticulado para siempre y fue imposible restablecerlo a plenitud.

Aunque los resultados de la independencia de América Latina –consiguió sus objetivos políticos nacionales, pero quedó muy por debajo en sus aspiraciones económicas y sociales– no dieran respuesta a todas las expectativas, ella constituyó, sin duda alguna, un importante paso de avance histórico. A pesar de sus incuestionables limitaciones, la independencia, conseguida a costa de dramáticos sacrificios humanos y de acontecimientos heroicos que no pueden olvidarse, fue un punto de inflexión en la historia del continente que dio inicio a la vida republicana de los países latinoamericanos, abriendo espacio a un amplio espectro de procesos sociales y revolucionarios que de otra manera no hubieran sido posibles o se habrían postergado durante mucho más tiempo.

Así lo comprendió el propio Bolívar cuando, acosado en todas partes por sus implacables enemigos, declaró el 20 de enero de 1830, en mensaje al Congreso de Bogotá para renunciar al poder supremo: «¡Conciudadanos! Me ruborizo al decirlo: la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás. Pero ella nos abre la puerta para reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y la libertad».[6]

[6] Citado por Giuseppe Cacciatore y Antonio Scocozza (compiladores), *El gran majadero de América, Simón Bolívar: pensamiento político y constitucional*, Nápoles, La Cittá del Sole, 2008, p. 399.

Capítulo 6
EL ORDEN CONSERVADOR POSINDEPENDENTISTA

Después de la derrota del colonialismo hispano-portugués y hasta casi finalizar el siglo XIX la historia de América Latina se desarrolló en un complejo proceso de formación de la conciencia y el estado nacional. La independencia de las metrópolis europeas, alcanzada a mediados de la década del veinte por Brasil y los territorios hispanoamericanos con excepción de Cuba y Puerto Rico, significó un importante paso de avance histórico al conseguir la emancipación política y dar inicio al ciclo revolucionario dirigido a imponer el capitalismo.

Sin embargo, no fue capaz de modificar en forma sustancial las estructuras económicas y sociales de la época colonial. El triunfo alcanzado con la emancipación tampoco pudo despejar el camino para un desarrollo verdaderamente independiente, frustrado por la acción de Estados Unidos y las grandes potencias europeas, así como por los intereses de las élites de cada localidad.

Visto desde una perspectiva continental, el período de formación de los estados nacionales en América Latina puede ser dividido en dos momentos principales: de la independencia a mediados del XIX y de ahí hasta fines de ese mismo siglo. Estas dos etapas tienen que ver directamente con las luchas intestinas de las élites criollas por imponer su hegemonía en el penoso proceso de restructuración

de la economía, junto al desarrollo de la sociedad y el nuevo sistema político en los jóvenes países latinoamericanos.

Predominio conservador

Al terminar la guerra emancipadora, los grupos más aburguesados de las élites criollas, vinculados a la economía mercantil, como los comerciantes y plantadores, y en general los grandes propietarios en proceso de aburguesamiento, perdieron fuerza frente a los sectores rurales tradicionales –en primer lugar los hacendados patriarcales desvinculados de los mercados y el capital–, menos afectados por las sacudidas revolucionarias, las destrucciones de cultivos de exportación, la paralización de las minas y la apreciable disminución de la ganadería. El resultado fue un nuevo equilibrio fundado en el predominio conservador y en el mantenimiento del tradicional poderío de la Iglesia católica, el cual anuló importantes logros de la independencia, entre ellos la abolición de la esclavitud, los mayorazgos, las restricciones a los privilegios del clero y otras conquistas de las primeras legislaciones republicanas.

Ello también fue una consecuencia del carácter incompleto de la revolución de independencia que llevó al poder a los sectores señoriales enfeudados, mientras los embrionarios elementos auténticamente capitalistas y protoburgueses quedaron en cierta forma marginados o en franca desventaja. No solo se conservó el viejo sistema impositivo, sino también las relaciones serviles y esclavistas y un régimen de propiedad típicamente precapitalista, todo lo cual entorpeció –junto a la inexistencia de un mercado nacional integrado y al aislamiento del exterior– el desarrollo de las actividades económicas y comerciales, obstaculizando la acumulación de capital y el crecimiento de la naciente burguesía.

Asimismo, poco varió la situación de las masas indígenas. La absorción de las tierras comunales en las antiguas zonas centrales y la «conquista del desierto» en las marginales, prosiguió con lentitud, más por el relativo estancamiento de la economía mercantil que por la resistencia de la población autóctona. En el área andina y

mesoamericana, asiento de las grandes civilizaciones precolombinas, los viejos tributos, pagados ahora al fisco de las nuevas repúblicas, y otras contribuciones internas anticuadas, heredadas de la época colonial, superaban a veces los ingresos proporcionados por el exiguo comercio exterior.

En estas condiciones, los ejércitos, engrosados durante las luchas por la independencia, consumían una buena parte del limitado presupuesto de las emergentes repúblicas y se convertían en un factor adicional de inestabilidad. La debilidad de los nuevos estados hizo depender en muchos lugares las menguadas finanzas nacionales del agio nativo y los préstamos extranjeros. La Iglesia, por su lado, siguió acumulando riquezas, monopolizando las mejores tierras –protegidas por la legislación feudal de «manos muertas»– y compitiendo con los usureros laicos en las transacciones monetarias y la actividad refaccionista.

La permanente crisis económica y fiscal fue otra de las características de la mayoría de los países latinoamericanos en este período, aunque Cuba, todavía colonia de España, y en cierta forma Brasil, Chile y el Río de la Plata, constituyeron las principales excepciones. Ello fue posible porque estuvieron al margen de una costosa guerra y, por ende, de la crisis económica posindependentista –Cuba y de cierta manera Brasil– o entraron en forma rápida en un proceso de recuperación del sector externo, como fueron los casos de Chile y el Río de la Plata.

Exponentes de este tipo de régimen conservador, sustentado por las fuerzas más retrógradas, que dominó el escenario de la América Latina posindependentista, en la primera mitad del siglo XIX, fueron las dictaduras de Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata, Rafael Carrera en Guatemala, Antonio López de Santa Anna en México y José Antonio Páez en Venezuela, por solo mencionar las más significativas. Una excepción lo constituyó el singular gobierno autoritario del doctor Gaspar de Francia en Paraguay, nombrado *Dictador Supremo* por un congreso popular en 1814, cuyo mandato se prolongó hasta su muerte en 1840 y que se sostenía en una muy diferente base social.

El doctor Francia expulsó del poder a la élite criolla local, expropió a la Iglesia y los terratenientes señoriales, propiciando el

desarrollo de una sociedad campesina, dominada por un poderoso estado paternalista. Las medidas proteccionistas de Francia, junto al aislamiento del exterior impuesto por sus vecinos, propiciaron cierto desarrollo de las artesanías nacionales, fenómeno que también se produjo en la década del treinta en muchos otros países al conjuro de la crisis del sector externo y gracias al amparo de regímenes conservadores que sostuvieron el viejo sistema tributario español, tal como ocurrió en el Chile de Diego Portales y el México de Lucas Alamán.

En el curso de este proceso de estabilización conservadora de la sociedad se fueron desarrollando las fuerzas sociales que intentarían imponer el capitalismo o presionar para realizar reformas liberales de carácter más o menos radical. Eso fue lo que intentaron hacer de manera prematura, poco después de la emancipación de España, Valentín Gómez Farías en México (1833-1834) y Mariano Gálvez en Guatemala (1831-1838), cuando sin éxito se propusieron llevar adelante la llamada primera reforma.

Todo el drama de las luchas entre liberales y conservadores en la formación de los nuevos estados latinoamericanos puede seguirse en el vibrante relato testimonial *El Matadero* (1840), del argentino Esteban Echeverría, enfilado contra la larga y cruel dictadura de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Echeverría fue también uno de los autores del *Dogma Socialista*, un proyecto constitucional en el que los jóvenes liberales bonaerenses recogieron sus aspiraciones de progreso, democracia, sufragio universal y libertad religiosa.

En este texto subyace también el conflicto entre civilización y barbarie, tema de la obra *Facundo* (1845) del pensador argentino Domingo Faustino Sarmiento. En el ángulo contrario a la posición liberal, representada por este autor, se ubicaría después el *Martín Fierro* (1879) de José Hernández, poema de protesta social que recogió elementos del folklore gaucho amenazados por la imposición de elementos exógenos a su cultura.

Casi al mismo tiempo se desarrolló el complejo proceso de constitución de los primeros grupos políticos, embriones de dos partidos clásicos en la historia latinoamericana, el liberal y el conservador. Típicas organizaciones de élite, expresaban en forma esquemática las luchas inter oligárquicas de las clases dominantes, o sea, el

enfrentamiento del clero y los terratenientes señoriales de economía natural, de un lado, a un grupo social emergente –plantadores no vinculados a mayorazgos, comerciantes, intelectuales, profesionales, pequeños propietarios–, interesado en modernizar la sociedad con un programa de avance capitalista.

En las difíciles condiciones posindependentistas, los países latinoamericanos adquirieron una aparente fisonomía burguesa, debido a la debilidad intrínseca de los elementos constitutivos del estado y la nación desde Texas al cono sur, o sea, las estructuras clasistas propias de la sociedad capitalista. La hipertrofia del factor institucional, la endémica crisis financiera y el caudillismo militar, junto a la supervivencia del viejo orden económico-social, propiciaron la inestabilidad política y obraron en favor de la desunión y desintegración hispanoamericana.

A diferencia de lo ocurrido en buena parte del occidente de Europa y en Estados Unidos, el estado surgido en los países latinoamericanos, como consecuencia de la emancipación de España, no tuvo un bien definido carácter burgués, ni tampoco logró constituirse en verdadero modelador de la unidad nacional, en sociedades donde ni los indios ni los esclavos formaban parte, en la práctica, del proyecto de nación diseñado por las élites criollas. El sólido control aristocrático terminó legitimado por dictaduras y legislaciones antidemocráticas, basadas en un sistema político restringido, excluyente de la población indígena y negra, los iletrados, las mujeres y los no propietarios.

Los estados latinoamericanos surgieron, a fin de cuentas, impuestos sobre una incipiente conciencia hispanoamericana común, todavía en proceso de construcción y antes de que se hubiera madurado su propio imaginario. Desde el punto de vista jurídico-formal, ello predeterminó la temprana identificación del estado y la nación, bajo el influjo de los modelos organizativos de Europa y Estados Unidos, adoptados por los nacientes gobiernos de América Latina. De hecho, la Iglesia y el ejército eran las únicas instituciones con alguna fortaleza en aquellos escuálidos estados emergentes, dominados por élites que todavía actuaban a escala regional o local, lo que acentuaba el terrible cuadro de la dispersión posindependentista y sus calamidades.

En otras palabras, los nuevos estados latinoamericanos se encargaron de ir modelando una conciencia nacional y un imaginario de patria chica, dentro de los límites geográficos de las emergentes repúblicas, edificados en el espejo de la aristocracia criolla blanca de cada localidad, pre capitalista, hispanista y católica. Por ello, los constructores de las repúblicas emergentes no tardaron en renegar del pasado indígena como elemento constitutivo de la nación, lo que representó un significativo retroceso en relación al pensamiento ilustrado criollo de fines del XVIII y principios del XIX.

Para intentar evitar el surgimiento de conflictos fronterizos entre los nuevos estados independientes, los gobiernos hispanoamericanos recién surgidos reconocieron los límites existentes al inicio de la lucha emancipadora contra España. De esta manera, se aceptó en forma tácita el principio jurídico del *uti possidetis juris* de 1810, esto es, que los países emergentes se conformaban en el entorno de las fronteras de Hispanoamérica en esa fecha.

El término *juris* quería indicar los espacios geográficos que los nuevos estados tenían derecho a poseer en forma legal, o sea, que quedaban dentro de su jurisdicción, aun cuando en realidad no los tuvieran ocupados, lo que tuvo mucha importancia en la lucha por la soberanía sobre los territorios heredados de España. La adopción de este precepto, buscaba también impedir que alguna potencia europea o los Estados Unidos, se valieran del pretexto de que ciertas zonas hispanoamericanas estaban despobladas para declararlas *terra nullius*, esto es, libre a la ocupación de cualquier país.

En otras palabras, la aplicación del principio del *uti possedetis juris* de 1810 era una especie de valladar ante las pretensiones colonialistas sobre tierras hispanoamericanas en el momento fundacional de las nuevas naciones. El reconocimiento del principio del *uti possidetis* por las emergentes repúblicas no solo estaba dirigido a impedir las depredaciones y ambiciones territoriales de las grandes potencias, sino también a evitar las luchas fratricidas encendidas por disputas fronterizas. Aunque la aceptación de los límites dejados por España en las postrimerías de la administración colonial, no significaba en modo alguno que los mismos fueran adecuados o estuvieran en consonancia con

el sustrato social, étnico, histórico y económico de los nuevos estados latinoamericanos.

Fragmentación de las nuevas repúblicas

Al margen de la aspiración integradora de la América Meridional, compartida por muchos de los libertadores, durante los años de la emancipación de España o en el período inmediato posterior, las antiguas colonias terminaron por descoyuntarse, lo que dio lugar a una verdadera constelación de países. En este proceso de fragmentación del antiguo imperio colonial español, los estados emergentes se conformaron en los límites de los viejos virreinatos y capitanías, respetando las tradicionales jurisdicciones de las audiencias, devenidas en verdadera matriz de las nuevas repúblicas.

Las antiguas divisiones administrativas creadas por España habían contribuido a forjar en sus habitantes, a lo largo de los tres siglos coloniales, un cierto imaginario de patria chica y un estrecho sentido de pertenencia, aprovechado por las élites criollas de cada localidad para constituir pequeñas repúblicas estructuradas en función de sus intereses particulares.

Prueba de ello es que de las audiencias existentes en la última etapa colonial, esto es, Nueva España, Guatemala, Santo Domingo, Panamá, Quito, Nueva Granada, Venezuela, Lima, Charcas, Chile, Buenos Aires, Nueva Galicia y Cuzco, todas se convirtieron en estados independientes, salvo las dos últimas. De esta forma, la guerra de liberación contra España terminó, a pesar del espíritu unitario existente en la mente de la mayoría de los libertadores, en la formación de un rosario de repúblicas.

Al contrario de lo ocurrido en Hispanoamérica, donde la tendencia unionista de Bolívar y los libertadores fue derrotada, el Brasil posindependentista logró preservar su integridad territorial. El régimen de los Braganza, extendido de 1822 a 1889, fue el responsable de garantizar esa unidad, después de costosas guerras civiles en las cuales las fuerzas imperiales se impusieron (1848) sobre diversos movimientos secesionistas y regionales –los cábanos en Pará, Alagoas

y Pernambuco, la república *farroupilha* de Rio Grande do Sul, la revolución *praiera* y la república bahiana, entre otros movimientos separatistas.

A este resultado contribuyó que la aristocracia brasileña, para preservar sus privilegios –en primer lugar la esclavitud– cerrara filas en torno a la monarquía, amparándose en el poder centralizador ejercido por el emergente polo cafetalero del área de Rio de Janeiro. El más sobresaliente de estos movimientos secesionistas fue la guerra de los *farrapos* (1835-1845) en Rio Grande do Sul, que contó con la participación y apoyo del italiano Giussepe Garibaldi.

En cambio, en Hispanoamérica las fuerzas descentralizadoras impidieron la consolidación de grandes unidades estatales, muestra de lo cual fueron el fracaso de la Gran Colombia –convertida en 1830 en tres estados independientes: Venezuela, Nueva Granada y Ecuador–, la división de la Confederación Peruano-Boliviana (1839) y la disolución en cinco repúblicas (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica) de las Provincias Unidas del Centro de América (1839-1848). También puede incluirse la desarticulación, entre 1813 y 1828, del antiguo Virreinato del Plata en otros cuatro países: Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, así como la división de la isla de La Española en dos pequeños estados: Haití y República Dominicana, aun cuando en este caso se trataba de dos territorios que pertenecieran a dos potencias distintas.

Entre las causas de este proceso centrípeto figuran los obstáculos de una inmensa y accidentada geografía y factores objetivos derivados de las pronunciadas diferencias económico-sociales entre las distintas regiones hispanoamericanas, junto a la ausencia de una burguesía y de un proyecto nacional integrador, lo que facilitó la atomización regional impuesta por los intereses encontrados de las aristocracias locales. Sin duda, detrás del proceso que descoyuntó a Hispanoamérica actuaban heterogéneas fuerzas centrífugas internas –los poderosos grupos de poder de cada localidad– y externas, o sea, las grandes potencias (Estados Unidos e Inglaterra).

Otro obstáculo a la unidad lo interponía el accidentado relieve y las malas comunicaciones, que separaban las diferentes regiones hispanoamericanas. Desaparecida la forzada vinculación de las colonias

con la monarquía española, el proceso de dispersión terminó por imponerse, favorecido por las enormes distancias y las barreras geográficas que obstaculizaban la integración de las antiguas posesiones de España.

Cerrado a fines de la década del veinte el ciclo independentista latinoamericano, la búsqueda de la unidad del continente colombiano –como lo había denominado Miranda–, perdió vigor y consistencia, aunque nunca desapareció en forma completa. Eso explica que, fracasado el proyecto integrador en el Congreso de Panamá, las ideas de unidad continental resurgirían en distintos momentos posteriores, sobre todo cuando un grave peligro externo amenazaba la soberanía e independencia de los países de América Latina. A pesar de los esfuerzos unificadores de Simón Bolívar y otras figuras, el antiguo imperio español de ultramar terminó dividido en varias repúblicas, desvinculadas entre sí, lo que facilitó un proceso recolonizador que no tardó en convertirlas en simples apéndices de los centros del capitalismo mundial.

La utopía bolivariana de la Confederación de los Andes

Concluida la emancipación, la situación de Perú no podía ser más ruinosa. Las largas y costosas guerras independentistas se habían sumado a muchos años decadencia minera. Las escasas rentas de la república apenas alcanzaban para sufragar los gastos del ejército. Solo las disposiciones de Bolívar contra los elementos oligárquicos y la Iglesia permitían –junto a percepciones arancelarias insignificantes– nutrir en algo el depauperado fisco peruano.

En febrero de 1825, después que el Congreso limeño prorrogó su mandato, Bolívar acometió el proyecto de la Confederación de los Andes, que debía reunir en un solo estado a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. La malograda unión o federación de los Andes pretendía agrupar a todas las colonias españolas liberadas por las tropas bolivarianas. Como escribiera el *Libertador* el 12 de mayo de 1826, la integración de estas regiones era imprescindible para impedir la

pérdida de todo lo alcanzado. La base de esta imaginada federación andina, sería la constitución elaborada por el propio *Libertador* para Bolivia, a la que consideraba una tabla de salvación.

Para Bolívar solo podía evitarse el naufragio que vislumbraba para Hispanoamérica después de la emancipación mediante una federación general entre Bolivia, el Perú y Colombia, que según su opinión debía ser más estrecha que la de los Estados Unidos, mandada por un presidente y vicepresidente y regida por la constitución boliviana, que podrá servir para los estados en particular y para la federación en general, haciéndose aquellas variaciones del caso. La intención de este pacto es la más perfecta unidad posible bajo de una forma federal, pues en su criterio: «La capital será un punto céntrico. Colombia deberá dividirse en tres estados, Cundinamarca, Venezuela y Quito; la federación llevará el nombre que se quiera; habrá una bandera, un ejército y una sola nación».[1]

A fin de implantar su carta magna, el *Libertador* convocó a una convención constituyente en Lima en marzo de 1826. Aunque la ley fundamental fue aprobada, en el cónclave se manifestó una fuerte corriente antibolivariana, auspiciada por la aristocracia peruana. Los voceros de la reacción comenzaron a declararse enemigos de la constitución vitalicia y de su creador, calificando de *persas* a los partidarios del régimen bolivariano.

En esta situación, estalló en Venezuela, el 30 de abril de 1826, la sublevación separatista conocida como motín de la Cosiata, dirigida por el general José Antonio Páez, contra la integridad de la Gran Colombia. Mientras tanto, en el estado colombiano de Cundinamarca, las fuerzas antibolivarianas se agrupaban alrededor del vicepresidente de la república Francisco de Paula Santander.

Los graves acontecimientos determinaron la salida del *Libertador* del antiguo bastión colonialista y su regreso a Colombia, pues era proclamado tanto por Santander como por Páez árbitro supremo de sus disputas. Cuando Bolívar abandonó el Perú para siempre, el 3 de septiembre de 1826, quedó allí como presidente interino el general altoperuano Andrés de Santa Cruz, quien ratificó

[1] S. Bolívar, *Obras completas*, tomo II, pp. 366-367.

la constitución vitalicia y firmó un primer tratado de confederación con la vecina Bolivia.

Pero al año siguiente la reacción antibolivariana, incitada por la rancia aristocracia peruana, logró la retirada de las tropas colombianas de Perú –sublevadas por atrasos en el pago de sus salarios– y el control de la convención constituyente, que seleccionó al general José La Mar como nuevo mandatario en sustitución de Santa Cruz. La furia contra los seguidores de Bolívar no se limitó a ajustar cuentas a los que estaban en Perú, sino que se extendió a las repúblicas vecinas.

Para lograr este propósito, La Mar despachó al general Agustín Gamarra contra Bolivia y, en enero de 1829, envió barcos de Perú para bloquear Guayaquil, mientras el propio mandatario peruano invadía el sur de Colombia. La ocupación de La Paz, Oruro y Cochabamba por el ejército de Gamarra obligó al gobierno de Bolivia, encabezado entonces por el general Antonio José de Sucre, a aceptar el tratado de paz de Piquiza (6 de julio de 1828), que estableció la salida de las tropas colombianas del antiguo Alto Perú y determinó también la renuncia de Sucre a la presidencia.

Si en ese escenario los antibolivarianos se anotaron un triunfo, diferente fue el resultado del ejército peruano en tierra colombiana. Aquí el propio Sucre los venció en Portete de Tarqui, el 27 de febrero de 1829, lo que obligó a La Mar a aceptar a su vez el tratado de paz de Girón.

La derrota peruana en Tarqui trajo aparejada la caída del gobierno de La Mar en Lima, obligado a exiliarse en América Central. Pese a este resultado, ya era imposible intentar crear la Confederación de los Andes, máxime cuando la propia Gran Colombia naufragaba ante la emergente oposición a Bolívar, el crecimiento de los regionalismos y las desenfrenadas ambiciones de los caudillos y las diferentes oligarquías locales.

Disolución de la Gran Colombia

Las destrucciones y los sacrificios derivados de la gesta independentista, a la cual los colombianos contribuyeron en forma

decisiva al sostener las campañas bolivarianas más allá de sus fronteras, dejaron un país exhausto. La economía en crisis, el comercio virtualmente paralizado, las haciendas arruinadas, junto a una parcial redistribución de bienes y propiedades –los gobiernos republicanos repartieron entre la alta oficialidad y otros patriotas meritorios tierras confiscadas a los realistas–, conformaban el desolador panorama del nuevo estado.

La fuerza de trabajo escaseaba; una parte considerable del ganado –en el caso venezolano sus dos terceras partes– y los animales de tiro había desaparecido, mientras la agricultura estaba reducida en muchas regiones a simples labores de subsistencia. Todo ello se reflejó en una falta casi absoluta de capital.

En esos primeros años de vida republicana las pugnas por el poder de las clases privilegiadas en Hispanoamérica todavía no se expresaban a través de partidos políticos, sino por medio de grupos aún algo imprecisos en cuanto a objetivos. En el caso colombiano, una de esas facciones estaba formada por los más cercanos partidarios de Bolívar –*serviles* les denominaban sus adversarios–, en su mayoría oficiales de origen venezolano, defensores de un Ejecutivo central fuerte.

A los bolivarianistas se oponían los seguidores de Santander, la principal figura de la independencia en Nueva Granada tras la muerte de Antonio Nariño en 1823, llamados indistintamente *civilistas*, *legalistas* o *liberales*, adeptos a un programa clásico de equilibrio de los poderes estatales, que propugnaban una política fiscal librecambista y de exclusión de los militares del ejercicio de gobierno. Estos incipientes bandos políticos habían comenzado a vertebrarse en 1826 al regresar Bolívar del Perú –con el pretexto de que no había sancionado a Páez por su intentona separatista de ese año– y tomaron forma más definida en la convención de Ocaña (abril-junio de 1828) donde ambas tendencias presentaron distintos proyectos de constitución y que finalmente se disolvió sin acuerdos.

La falta de una economía colombiana integrada, las abismales diferencias regionales, las contradicciones interoligárquicas, el aislamiento y la incomunicación, unido al estado ruinoso del país –provocado por los enormes gastos de las campañas militares y la política

tributaria liberal de Santander, que incluía la centralización de rentas en Bogotá–, fueron factores que fomentaron las luchas fratricidas y guerras intestinas que colorearon la historia de Colombia después de la separación de España. En rigor, la primera guerra civil después de la emancipación surgió al calor de los antagonismos entre los santanderistas y el gobierno autoritario implantado por Bolívar, el 24 de junio de 1828, ante la creciente inestabilidad de la república. El *Libertador* eliminó la política fiscal centralista y liberal de Santander, que tanto descontento había levantado entre los propietarios de diferentes regiones, especialmente en Quito y Venezuela.

El enfrentamiento fratricida tuvo por escenarios principales las comarcas que formarían después el departamento de Cauca y se extendió por el sur hasta el denominado Distrito de Quito. En esta guerra los caudillos de la independencia, coroneles José Hilario López y José María Obando, levantaron las banderas del «liberalismo» y se sublevaron contra la dictadura establecida por Bolívar tras el fracaso de la convención de Ocaña.

En medio de estos acontecimientos se produjo, el 25 de septiembre de ese año, el frustrado intento de asesinar al *Libertador* en el propio Palacio de San Carlos en Bogotá –del que escapó gracias a la ayuda de su compañera Manuela Sáenz–, fraguado por un grupo de exaltados santanderistas. La revuelta fue sofocada por el general José María Córdova y el propio Bolívar, aunque en realidad no hubo combates importantes salvo el de los ejidos de Popayán (11 de noviembre).

Vale la pena aclarar que López y Obando capitularon –en condiciones tan generosas que conservaron el mando en el Cauca– solo después de conocer la mencionada derrota, a manos de Sucre, del ejército peruano en Portete de Tarqui, pues fueron acontecimientos casi simultáneos. Varios de los implicados fueron fusilados y el propio Santander, cómplice de estos hechos, desterrado. A pesar de la victoria de las armas bolivarianas, el *Libertador* aceptó el compromiso de restaurar las «libertades civiles» que reclamaban sus adversarios y acatar las decisiones de una convención constituyente que se reuniría en 1830.

Fue en estas condiciones que el 20 de enero de 1830 se reunió el llamado Congreso Admirable. Este último cónclave de la Gran

Colombia, presidido por el propio Mariscal de Ayacucho, escuchó la renuncia de Bolívar, quien deseaba evitar a la república colombiana un desmembramiento o una nueva guerra intestina, y concluyó con la adopción de una carta magna conciliatoria con la oposición santanderista (10 de mayo).

Ante la decisión irrevocable del *Libertador*, ya gravemente enfermo, la asamblea designó el 1 de marzo a Joaquín Mosquera como presidente de la Gran Colombia y al general Domingo Caicedo como vicepresidente, ambos naturales de Nueva Granada. Tras conocer estos resultados, Bolívar emprendió viaje hacia la costa atlántica con la intención de abandonar el país.

Pocas semanas después, el 4 de junio de 1830, se perpetró el monstruoso asesinato de Sucre en Berruecos. Aunque la muerte de Sucre nunca fue esclarecida, algunos acusaron al general Juan José Flores de ser el autor intelectual, en connivencia con la aristocracia quiteña, para impedir que la entrada en tierra ecuatoriana del *Gran Mariscal de Ayacucho* impidiera los planes separatistas iniciados con la instalación, el 13 de mayo, de una Asamblea de Notables en Quito. Para otros, el instigador principal del crimen fue el coronel José María Obando, enemigo declarado de los bolivarianos.

El asesinato de Sucre, el alejamiento de Bolívar, la virtual desintegración de la Gran Colombia –pues el general Páez también había reunido en Valencia (Venezuela) a un congreso separatista (6 de mayo de 1830)– y el creciente despunte de la facción santanderista, desencadenaron una violenta reacción bolivariana. El batallón Callao, integrado mayoritariamente por militares venezolanos, descontentos con los planes del gobierno de Mosquera para licenciarlo, fue el primero en sublevarse. Luego la rebelión se extendió a los partidarios del *Libertador* en el Socorro, Tunja y otras provincias e incluso a los destacamentos estacionados en Guayaquil, Cuenca e Ibarra.

La insurrección culminó el 5 de septiembre de 1830 cuando el general venezolano Rafael Urdaneta se hizo cargo del gobierno de Bogotá, como Encargado del Poder Ejecutivo, con el propósito de entregarlo a Bolívar. El enérgico rechazo del *Libertador* a su regreso al poder y la tenaz resistencia de los «liberales» –entre ellos López en Popayán y Obando en Pasto–, echó por tierra los planes restauradores.

La muerte de Bolívar el 17 de diciembre de 1830 en la Quinta San Pedro Alejandrino (Santa Marta) –tras haber escrito una semana antes un patético mensaje a los colombianos en el que decía «Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la Unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro»[2]– y la derrota de las tropas de Urdaneta en la batalla de Palmira (Cauca) frente al autotitulado *Ejército de la Libertad* de Obando y López, selló la suerte de los últimos partidarios del *Libertador* y, con ellos, la de toda la Gran Colombia.

De esta manera, la enorme nación norandina se desmembró en las repúblicas de Nueva Granada –recuperó su antiguo nombre colonial–, Venezuela y el Distrito del Sur (departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca) redenominado Ecuador por su ubicación geográfica. Estos dos últimos países quedaron bajo el gobierno de los generales venezolanos Páez y Juan José Flores, respectivamente.

El 14 de abril de 1831, el vicepresidente Caicedo se declaró otra vez en ejercicio del Poder Ejecutivo, victoria confirmada en la reunión de juntas de Apulo (28 de abril) que significó la derrota final de los bolivarianos y despejó el camino de Santander a la presidencia de Nueva Granada, que ocuparía de 1832 a 1837. A partir de estos acontecimientos se desató una sostenida persecución contra los partidarios de Bolívar, quienes en su mayoría fueron borrados del escalafón militar y expulsados a Venezuela, desde donde continuarían infructuosamente sus luchas por la reunificación de la Gran Colombia.

Desintegración de la efímera Confederación Peruano-Boliviana

A pesar del fracaso de la proyectada Confederación de los Andes y de la desaparición de la Gran Colombia, todavía en la década del treinta se haría un último esfuerzo de integración siguiendo las ideas de Bolívar. El artífice de este proyecto fue el general Andrés de Santa Cruz, quien incluso había fundado una logia con este propósito.

[2] S. Bolívar, *Obras completas*, tomo III, p. 824.

En enero de 1829 sus planes se vieron facilitados con su elección a la presidencia de Bolivia, en momentos que la anarquía sacudía al Perú –existían tres gobiernos paralelos con sedes en Lima, Trujillo y Cuzco– tras la caída del presidente La Mar. Al frente del ejército de Bolivia, Santa Cruz no solo impuso por la fuerza de las armas la unidad en Perú, sino que el 20 de octubre de 1836 declaró oficialmente constituida la Confederación Peruano-Boliviana.

La unión comprendía tres estados confederados: el norperuano, encabezado por el rico propietario de Trujillo Luis José de Orbegoso; el surperuano, gobernado por Pío Tristán, y el altoperuano, presidido por el general José Miguel de Velasco. La cohesión de la confederación descansaba en dos pilares: la persona del general Santa Cruz, declarado su *Protector* –el mismo título utilizado por el general San Martín en Perú– y una carta magna inspirada en la constitución vitalicia de Bolívar.

La división político-territorial estaba avalada por las vinculaciones históricas de los pueblos de Perú y Alto Perú, centro del antiguo Tahuantinsuyo, y tomaba también en cuenta las características económicas y geográficas de las tres regiones que la integraron. Entre el norte y el sur peruano se interpone el desierto de Islay, mientras que el altiplano está separado del Bajo Perú por un brazo de la cordillera andina. Pero desde sus inicios, la Confederación encontró un tenaz enemigo en la persona de Diego Portales, hombre fuerte de Chile.

Originaba este antagonismo las medidas de Santa Cruz que perjudicaban los intereses comerciales chilenos, dominantes en el Pacífico. El *Protector* de la Confederación había derogado, por ejemplo, el tratado mercantil recién firmado con Chile que favorecía al puerto de Valparaíso en detrimento de El Callao y aumentado los aranceles a todas aquellas mercancías que no entrasen directamente en sus puertos desde Europa. Todo ello amenazaba arruinar el tácito monopolio mercantil chileno en el Pacífico, vinculado a casas comerciales inglesas y de otros países que habían establecido allí su sede.

En su lucha contra Perú-Bolivia los conservadores chilenos lograron aliarse al gobierno de Buenos Aires, encabezado por Juan Manuel de Rosas, aunque en la práctica los argentinos no tuvieron

una participación de importancia en el conflicto y el ejército de la confederación los venció en las batallas de Yruya y Montenegro (1838). En realidad las cercanías del Pacífico fueron el escenario principal de la guerra, declarada por el gobierno de Chile el 26 de diciembre de 1836.

En la segunda mitad de 1837, el ejército chileno, dirigido por el almirante Manuel Blanco Encalada, quien fuera primer presidente de Chile en 1826, desembarcó en el desierto de Islay. La resistencia de los confederados, y su parcial éxito en la batalla de los Balcones de Paucarpata, en diciembre de 1837, llevaron a los contendientes a concertar un tratado de paz que estipulaba la firma de un nuevo acuerdo comercial entre la Confederación y Chile, única condición para la retirada del cuerpo expedicionario invasor.

Descontentos los conservadores chilenos con estos resultados, Blanco Encalada fue llevado a consejo de guerra y comenzaron los preparativos para otra agresión. La segunda expedición chilena contó con la estrecha colaboración de los emigrados peruanos, principalmente Gamarra y Manuel Ignacio Vivanco, general originario del sur del Perú.

En esta oportunidad, las fuerzas agresoras se encontraban bajo el mando del general Manuel Bulnes, quien desembarcó en Perú en julio de 1838. Para derrotar a Santa Cruz, los chilenos azuzaron las contradicciones que minaban desde dentro la unidad de la Confederación.

Poco después del reinicio de la contienda, los norperuanos –procedentes de la región menos beneficiada por el nuevo proteccionismo comercial– se sublevaron. La anarquía se extendió por todas partes –a fines de 1838 coexistían siete gobiernos en el territorio de la Confederación– y los ejércitos chilenos pudieron seguir avanzando hacia el norte, hasta vencer a las tropas de Santa Cruz en la batalla de Yungay, el 18 de enero de 1839.

La reorganización de las fuerzas confederadas se hizo imposible por el pronunciamiento del general altoperuano Velasco contra Santa Cruz. Así, bajo los auspicios del ejército chileno, se restablecieron por separado las repúblicas de Perú y Bolivia, respectivamente gobernadas ahora por los conservadores Gamarra y Velasco.

Comenzaba el régimen de *La Restauración* en Perú. De este modo, carente ya de asideros y combatida encarnizadamente por los intereses comerciales ingleses y chilenos, desapareció la efímera Confederación Peruano-Boliviana.

Fin de la federación centroamericana

La debilidad intrínseca en la formación de la Federación del Centro América, tras la caída del Imperio de Iturbide (1823), fue el caldo de cultivo de las guerras civiles que dominaron todo el período posterior a la independencia, hasta el colapso de la república unida y su fragmentación (1839-1840). A ese inexorable destino se llegó por el violento enfrentamiento entre conservadores y liberales, los dos sectores en que se desvertebró la clase dominante criolla acorde a sus diferentes intereses e ideologías.

Las luchas entre el poderoso sector conservador y los emergentes grupos liberales no solo generaron conflictos al interior del Estado de Guatemala, sino en todo el ámbito geográfico de América Central. Las principales causas de las guerras civiles que llenaron el breve período de existencia de las Provincias Unidas del Centro de América se relacionan, de una u otra manera, con las contradicciones entre la aristocracia señorial –cuyo baluarte era el Estado de Guatemala, capital de la extinguida Capitanía–, aliada a la Iglesia en defensa de los privilegios heredados de la época colonial, y los sectores emergentes, menos comprometidos con el viejo régimen –dedicados a la producción de índigo o bálsamo–, asentados en el Estado de El Salvador o en otras áreas de Centroamérica. No obstante sus apreciables diferencias en cuanto a ideología e intereses económicos, ambos sectores estaban ligados por un denominador común: su *status* de privilegio sobre las masas indígenas y ladinas.

Los primeros conflictos internos estallaron por el problema de jurisdicción administrativa entre el gobierno del primer presidente de la federación, Manuel José Arce (1825-1828), y el Ejecutivo del Estado de Guatemala, encabezado de 1824 a 1827 por Juan

Barrundia. Las pugnas se agravaron con la destitución de Barrundia y su relevo por Cirilo Flores.

Para tratar de evitar nuevos roces con el gobierno central, Flores se refugió en Quezaltenango, villa donde estaba el más fuerte núcleo del balbuceante liberalismo guatemalteco. Aquí las contradicciones se avivaron con el clero; Flores fue asesinado en 1827 por fanáticos religiosos y ocupó entonces su puesto un miembro de la élite conservadora, Mariano Aycinena, quien presidiría el gobierno de Guatemala hasta 1829.

Pero las luchas entre el sector más conservador de la aristocracia y el ala más liberal no solo generaron conflictos al interior de Guatemala, sino también en todo el extenso ámbito de la federación. Ante las arbitrariedades del presidente Arce –que había impuesto a Aycinena en el gobierno guatemalteco–, los liberales salvadoreños y hondureños se sublevaron e invadieron Guatemala. Tras la derrota liberal en Arrazola, la guerra se volcó sobre el territorio salvadoreño, atacado el 12 de mayo por los efectivos federales guiados por el general conservador Manuel Arzú.

Después de algunos vaivenes, la lucha se inclinó a favor de los rebeldes gracias al arrojo y genio militar de un general hondureño hasta entonces desconocido: Francisco Morazán. El 6 de julio de 1828, Morazán ganó la batalla de la hacienda de Gualcho y liberó la angustiada plaza de San Salvador. A continuación, reorganizó a sus partidarios en el Ejército Aliado Protector de la Ley y pasó a la ofensiva en enero de 1829, asestando un golpe demoledor a las fuerzas del gobierno federal, comandadas por el general conservador Antonio de Aycinena, que le abrió las puertas de Guatemala (abril).

Tras su victoria, Morazán emprendió la tarea de consolidar el triunfo liberal. Los principales cabecillas conservadores fueron encarcelados; en Guatemala el gobierno estadual volvió a manos de Barrundia, mientras su hermano José Francisco ocupaba, a título provisional, la dirección de la federación, en sustitución del depuesto presidente Arce.

De inmediato se adoptaron algunas disposiciones anticlericales, entre ellas la abolición del fuero eclesiástico y la supresión de

órdenes religiosas. Después Morazán fue electo presidente de las Provincias Unidas (1829), cargó que ostentaría hasta 1839.

El artífice de la primera reforma liberal en Guatemala fue Mariano Gálvez, quien en 1831 ocupó la máxima magistratura del Estado. A partir de su segundo mandato, iniciado en 1836, dictó una serie de reformas, entre ellas la supresión del diezmo, el restablecimiento del registro civil y la abolición de la llamada Ley de la Vagancia (1829), que obligaba a los indios a trabajar en las haciendas. Sin embargo, las leyes agrarias de Gálvez, tendentes a la ampliación de la pequeña propiedad campesina, no solo afectaron a los grandes terratenientes, sino también los derechos ancestrales de los aborígenes sobre sus tierras comunales.

La amenaza que pendía sobre los resguardos estimuló las protestas de las masas indígenas, movimiento que fue capitalizado por la aristocracia conservadora y el clero. Al final se produjo un gran levantamiento en el oriente de Guatemala, nutrido fundamentalmente de indígenas, a cuyo frente figuraba un joven caudillo ladino: Rafael Carrera.

La rebelión conservadora fue contrarrestada por los efectivos de Morazán, así como por los pocos seguidores del presidente Gálvez. Acosados por las huestes de Carrera y por los propios liberales, Gálvez buscó refugio en México.

Entretanto, en Quezaltenango se constituyó, el 2 de febrero de 1838, como último recurso para detener a los conservadores, el estado de Los Altos. Aquí Carrera aplastó dos veces a los liberales. En 1840, la segunda vez, al grito de ¡*Viva la religión y mueran los extranjeros*!, los seguidores de Carrera entraron a sangre y fuego en Quezaltenango y fusilaron en masa a decenas de sus adversarios.

El triunfo conservador en Guatemala, sin duda el estado más poderoso del istmo, puso en crisis la existencia de las Provincias Unidas, que no tardaron en desintegrarse en las actuales cinco repúblicas de América Central: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. La propia Guatemala rompió el ya inexistente pacto federal el 17 de abril de 1839.

Ese final fue sellado con la derrota de Morazán por las fuerzas de Carrera el 19 de marzo de 1840. Tras nuevos enfrentamientos

entre liberales y conservadores centroamericanos en los años siguientes y un frustrado intento de reunificación que costó la vida al propio Morazán (15 de septiembre de 1842), el general Carrera quedó convertido no solo en el hombre fuerte de Guatemala –incluso su presidente–, sino también de toda América Central.

Esta atribulada historia explica que Francisco Morazán quedara en el imaginario de la región como lo más avanzado del pensamiento de su época, pues pretendió modificar el atrasado e injusto orden económico-social, e incluso jurídico, heredado de la época colonial y, al mismo tiempo, preservar la independencia nacional y la precaria unidad centroamericana.

Creación de Uruguay y la compleja organización de Argentina

La historia de la creación de Uruguay como país independiente del Río de la Plata está asociada a los apetitos expansionistas del recién constituido Imperio del Brasil, que no solo había expulsado a Artigas de la Banda Oriental y anexado este territorio, sino también pretendido apoderarse, después de la batalla de Ayacucho, del despoblado oriente altoperuano. Cuando Sucre todavía se enfrentaba a las fuerzas realistas en el Alto Perú, tropas brasileñas ocuparon la provincia de Chiquitos (28 de marzo de 1825), adscripta a la audiencia de Charcas, con el pretexto de auxiliar a las fuerzas españolas en plena desbandada.

En realidad, el propósito brasileño era apropiarse de esta región limítrofe entre Brasil e Hispanoamérica. La enérgica reacción de Sucre, dispuesto a entrar sin dilación en guerra con el imperio de los Braganza y llevarles a su propio territorio «los estandartes de la revolución», los obligó a replegarse.[3]

En estas condiciones, se presentó en el Alto Perú una representación oficial del gobierno de Buenos Aires, encabezada por el general Carlos María de Alvear, con el objetivo de «solicitar para

[3] Jorge Alejandro Ovando Sanz, *La invasión brasileña a Bolivia en 1825*, La Paz, Librería Editorial Juventud, 1986, pp. 76 y 97.

su patria la protección del Gran Bolívar para la guerra contra el Brasil».[4] Los rioplatenses propusieron la fusión en un solo estado del Río de la Plata y el Alto Perú, ofrecimiento que no prosperó, aunque la guerra entre Brasil y el Río de la Plata estalló de todos modos.

La atomización política del inmenso territorio rioplatense se había mantenido sin solución de continuidad desde la disgregación de 1820 –se llegaron a vertebrar 13 entidades independientes–, cuando desapareció el último gobierno considerado «nacional». En diciembre de 1824 el general porteño Juan Gregorio de las Heras, apremiado por la posibilidad de un pronto reconocimiento internacional a la independencia, consiguió reunir un congreso de cierta representatividad que restableció un gobierno con jurisdicción sobre el antiguo Virreinato del Río de la Plata, excluyendo a Paraguay y el Alto Perú (Bolivia), ya convertidas en repúblicas soberanas.

Casi en forma simultánea a la reconstitución de las Provincias Unidas del Río de la Plata, el 19 de abril de 1825, dos lugartenientes de Artigas, Juan Antonio Lavalleja y Manuel Oribe, al frente de 33 hombres (La Cruzada Libertadora) desembarcaron en la playa oriental de la Agraciada. Pronto se les unió en el levantamiento contra la dominación brasileña Fructuoso Rivera, hasta entonces plegado al gobierno de Rio de Janeiro.

Una asamblea de patriotas uruguayos proclamó el 25 de agosto la reincorporación de la Banda Oriental –desde 1820 pertenecía, con el nombre de provincia Cisplatina, al Imperio de Brasil– a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ello abrió la guerra entre Brasil y el gobierno de Buenos Aires.

Durante el transcurso de la contienda se escogió al unitario Bernardino Rivadavia, el 7 de febrero de 1826, como primer presidente argentino. La guerra de 1827 contra Brasil se caracterizó por la concentración de fuerzas del ejército conjunto argentino-oriental, llamado Republicano, comandado por Carlos María de Alvear, que determinó los encuentros de Bacacay y Ombú.

A pesar de estas victorias, y del indiscutido triunfo rioplatense en la batalla de Ituzaingó el 20 de febrero de 1827, el presidente

[4] Ibídem, p. 132.

Rivadavia cedió a las exigencias inglesas de crear con el territorio al este del río Uruguay un estado cuña entre Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata, pues el representante inglés, Lord John Ponsonby había advertido que su gobierno «no consentirá jamás que solo dos estados, el Brasil y la Argentina, sean dueños exclusivos de las costas orientales de la América del Sur».[5]

De esta manera, la Banda Oriental fue convertida, por la desembozada presión de Inglaterra, en un estado tapón entre Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 4 de octubre de 1828 se creaba de manera oficial la República Oriental de Uruguay con José Rondeau como primer mandatario.

El surgimiento de la nueva República cercenó una porción importante del territorio argentino, entonces en plena expansión económica y comercial, sobre todo de su provincia cabecera (Buenos Aires). Ese proceso fue solo un paréntesis en las incesantes guerras intestinas entre las provincias del litoral y el interior del Río de la Plata, que apostaban por el federalismo desde la época de Artigas, y el viejo unitarismo porteño.

Estas luchas, iniciadas de hecho desde 1810, no concluyeron con el ascenso al poder en 1829 del rico estanciero Juan Manuel de Rosas, facilitado por la ola de indignación que provocó el fusilamiento del federal Manuel Dorrego por orden del unitario Juan Lavalle.

Rosas ocupó primero la jefatura del gobierno de la provincia de Buenos Aires y luego de todo el Río de la Plata (1835), tras el asesinato de Juan Facundo Quiroga, caudillo de Cuyo, convertido en jefe omnímodo del federalismo.

No obstante, en lo fundamental la política rosista fue semejante a la unitaria. Mantuvo el monopolio de la aduana y sus rentas en beneficio de Buenos Aires y también la clausura de los ríos interiores, afectando sobre todo a la economía de las provincias del litoral (Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe) y de la república de Paraguay.

El largo mandato de este dictador, quien aspiraba a restablecer las antiguas fronteras virreinales, se fundamentó en un precario

[5] Vivian Trías, *Los caudillos, las clases sociales y el Imperio*, Montevideo, Cámara de Representantes, 1988, pp. 189-190.

equilibrio de fuerzas con los caudillos federales que dominaban las restantes provincias rioplatenses. Ello lo llevó a defender la soberanía nacional.

En 1835 Rosas implantó una ley de aduanas proteccionista a favor de las manufacturas y artesanías de las provincias mediterráneas, frente a las pretensiones de Francia e Inglaterra, potencia esta última que ya se había reapoderado de las islas Malvinas (1833). Las metrópolis europeas, que buscaban imponer a toda costa la libre navegación por los ríos, abrieron un enfrentamiento con Rosas que se extendió durante una década (1838-1848) y que terminó, tras el combate de Vuelta de Obligado (noviembre de 1845), en una especie de empate.

Rosas defendía con esa actitud intransigente sus intereses personales y el de los grandes estancieros porteños. La política del caudillo bonaerense obstaculizaba la penetración de los mercados sudamericanos por las manufacturas de las potencias industriales, pero al mismo tiempo impedía el comercio exterior de las provincias interiores y del litoral del Paraná, así como el de la República del Paraguay.

Por eso, el gobierno de Rosas se había convertido en el eje fundamental sobre el que giraban las contradicciones entre unitarios y federales, detrás de los cuales se escondían los intereses antagónicos de los grandes comerciantes y ganaderos de Buenos Aires –que disfrutaban el monopolio del puerto–, frente a los habitantes de las provincias interiores y del litoral. Esas agrias disputas originaron las endémicas guerras civiles en el Río de la Plata y fueron la causa, en última instancia, de la desintegración del antiguo virreinato.

También el régimen de Rosas se caracterizó por la cruel represión contra los «salvajes unitarios», valiéndose de sus partidarios organizados en La Mazorca, que degollaba, destruía casas y confiscaba bienes a sus enemigos. Entre estos figuraba el político y escritor liberal Domingo Faustino Sarmiento, obligado a exiliarse en Chile, así como los promotores de la Asociación de la Joven Generación Argentina (1838), Juan Bautista Alberdi y Esteban Echeverría, este último uno de los autores del programa ya mencionado conocido como *Dogma Socialista*.

La dictadura de Rosas se extendió hasta la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852, que puso fin a la llamada Guerra Grande

(1839-1852), conflicto que envolvió a las provincias rioplatenses y a Uruguay. La Banda Oriental se vio involucrada en esta contienda, pues los *blancos* –nutridos por los grandes estancieros conservadores encabezados por Manuel Oribe– se pusieron al lado de Rosas frente a los *colorados* de Fructuoso Rivera, representantes de los comerciantes liberales y las casas mercantiles inglesas y francesas establecidas en Montevideo. También el Imperio de Brasil intervino militarmente contra Rosas.

El derrocamiento de Rosas fue un acontecimiento de singular importancia en la historia del Río de la Plata. El triunfo del caudillo de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, era también la victoria de los hacendados y estancieros del interior y del litoral, que reclamaban el comercio libre por el Paraná sin el monopolio de Buenos Aires. Entonces se formó la Confederación Argentina (1852-1862). Entre los primeros decretos del gobierno encabezado por Urquiza estuvo la declaración de libre navegación por los ríos interiores y el reconocimiento de la independencia del Paraguay.

La constitución de 1853 organizó la Confederación Argentina, estableció el federalismo y la apertura de los ríos a la libre navegación. La capital se situó en Paraná, pues Buenos Aires, dominada por los unitarios –reorganizados en el Partido Liberal–, se vertebró como estado independiente, hasta que el propio Urquiza fue a su vez derrotado por el general Bartolomé Mitre en la batalla de Pavón (1861).

Tras la victoria unitaria, Mitre se hizo cargo de la presidencia de la Argentina (1862), abriendo un proceso de unificación nacional bajo hegemonía bonaerense que continuó primero con el gobierno de Sarmiento (1868-1874) y después con el de Nicolás Avellaneda (1874-1880), cuando Buenos Aires fue declarada capital federal. La larga y penosa conformación de la nación argentina culminó con la incorporación de la Patagonia y parte de la Tierra del Fuego por el general Julio A. Roca en la eufemísticamente llamada *conquista del desierto* (1878), luego de exterminar a sus poblaciones aborígenes.

Independencia de la República Dominicana

A este proceso de desmembración de las grandes unidades estatales latinoamericanas en la época posindependentista pudiera agregarse el caso singular de la isla de La Española, resultado de un proceso histórico bien diferente a los anteriores. La antigua parte española de la isla había sido anexada *manu militari* al Estado haitiano el 8 de febrero de 1822 por el presidente Jean Pierre Boyer, sucesor de Alexandre Petion –muerto en 1818. Con anterioridad Boyer también había conseguido reincorporar la zona norte de Haití, separada por Henri Christophe después del asesinato de Dessalines y convertida en un efímero estado monárquico (1811-1820) que Alejo Carpentier recreara magistralmente en su novela *El reino de este mundo* (1940).

La primera etapa del gobierno de Boyer en Santo Domingo se extendió hasta 1825 y se distinguió por sus leyes progresistas, democráticas y anticlericales: abolición de la esclavitud, reparto de tierras entre los desposeídos y expropiación de bienes de la Iglesia. Sin embargo esta fase, caracterizada por la aplicación en la antigua parte española de las leyes revolucionarias vigentes en Haití, entre ellas los modernos códigos napoleónicos, concluyó cuando Boyer, buscando el reconocimiento a la independencia y la recuperación económica de la isla, aceptó pagar a Francia 150 millones de francos.

Lejos de paliar la crisis, el acuerdo con los franceses la agravó. La economía haitiana siguió deprimida, mientras se implantaban gravosos impuestos y un draconiano código rural (1826) que restableció el trabajo forzado de los campesinos en las plantaciones.

El fracaso de este código y los proyectos para sanear la economía, las avivadas contradicciones entre los sectores negro y mulato de la clase dominante haitiana, junto al rígido centralismo y autoritarismo de Boyer, fomentaron desde la década del treinta un movimiento reformador que se extendió por toda la isla. En el caso dominicano la oposición a Boyer se vertebró en torno a una organización secreta, La Trinitaria, fundada el 16 de julio de 1838 por jóvenes intelectuales influidos por el liberalismo como Juan Pablo

Duarte. En esas circunstancias estalló una sublevación generalizada que derrocó al presidente Boyer el 13 de marzo de 1843.

El nuevo gobernante, Charles Rivière-Hérard, tampoco pudo estabilizar la economía ni poner coto a las luchas por el poder entre las facciones dirigentes de la sociedad haitiana. Cuando el prestigio del gobierno de Rivière llegaba a su punto más bajo, y la parte occidental era sacudida por movimientos regionalistas y revueltas campesinas, se organizó un vasto movimiento independentista en Santo Domingo, aunque algunos dominicanos –como el gran propietario de Azua, Buenaventura Báez– establecieron contactos con los franceses para recolonizar la isla (*Plan Levasseur*).

Para neutralizar este proyecto de matriz racista y conseguir la formación de un amplio frente nacional que viabilizara la emancipación, los trinitarios, dirigidos por Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella –pues Duarte se hallaba en el exilio desde el año anterior–, lograron coordinar sus acciones con el grupo aristocrático de Tomás Bobadilla, un ex funcionario de la administración de Boyer, y los prominentes hateros Pedro y Ramón Santana, estos últimos partidarios de la vuelta al viejo *status* colonial español.

Adelantándose a los planes recolonizadores, el 27 de febrero de 1844 estalló la incruenta rebelión en la ciudad de Santo Domingo que determinó la expulsión del ejército haitiano y permitió, establecer un gobierno propio en el territorio que se denominó desde entonces República Dominicana. Los haitianos reaccionaron con el envío de tropas, las que fueron derrotadas por los efectivos comandados por Pedro Santana y Antonio Duvergé.

Aprovechando su triunfo militar, Santana se presentó en Santo Domingo, depuso al gobierno y expulsó del país a Duarte, Sánchez y Mella (agosto de 1844), para después dar inicio a sus proyectos favorables a la recolonización española. Además, Santana convocó a un congreso constituyente que lo designó presidente con plenos poderes, de los que se valió para reprimir duramente a los opositores.

Así, entre otros, fue fusilado el patriota José Joaquín Puello (1847), mientras Santo Domingo resistía nuevas invasiones haitianas enviadas por Faustin Soulouque, quien gobernó en Haití desde 1847 hasta 1860, período en el que llegó a restablecer la monarquía. En

ese contexto, el 18 de marzo de 1861, Santana proclamó la anexión a España.

Hasta ese momento, en los primeros 17 años de vida independiente de la República Dominicana, Buenaventura Báez y Pedro Santana, se disputaron el poder y se sucedieron uno al otro. En particular, Báez, cinco veces presidente dominicano, intentó en varias ocasiones sin éxito la «protección» de una potencia extranjera, lo que finalmente consiguió su rival Santana aprovechando las ambiciones colonialistas de España y la coyuntura favorable creada por la Guerra de Secesión en Estados Unidos.

La historia de la recolonización española no solo tenía que ver con el ruinoso estado de la economía y la permanente amenaza haitiana, sino también al temor a los apetitos de Estados Unidos, puestos al descubierto cuando en octubre de 1860 un grupo de norteamericanos se apoderó de la isla dominicana de Alto Vela –rica en yacimientos de guano–, de donde fueron expulsados por el gobierno de Santana. Francisco del Rosario Sánchez, opuesto a la anexión a España, penetró desde Haití con algunos de sus partidarios, pero traicionado fue ejecutado (4 de julio).

El nuevo período de dominación española en Santo Domingo fue breve. Las medidas restrictivas aplicadas por el poder colonial –entre ellas la sustitución de los funcionarios dominicanos por españoles, como el propio Santana, relevado en su cargo de capitán general (julio de 1862)– y el incumplimiento de las expectativas de mejoramiento económico, provocó el movimiento de restauración republicana, que comenzó con el levantamiento popular en Capotillo el 16 de agosto de 1863.

Los dominicanos hicieron una guerra de emboscadas y guerrillas que se extendió hasta el 3 de marzo de 1865, en la que se destacó el general mulato Gregorio Luperón. Al triunfo de los patriotas también contribuyeron las enfermedades tropicales, que causó terribles estragos en el ejército español.

Cuatro meses después de concluida la Guerra de la Restauración con el restablecimiento de la república independiente, los dominicanos que habían formado parte de las reservas del ejército español en Santo Domingo, y combatido a las órdenes de Santana –muerto

en junio de 1864–, fueron retirados por la metrópoli al oriente de Cuba. Paradójicamente, muchos de estos combatientes, entre los cuales figuraban Modesto Díaz, los hermanos Marcano y Máximo Gómez, estarían llamados a jugar un significativo papel en las guerras cubanas por su liberación que se iniciarían el 10 de octubre de 1868.

Expansión territorial de Estados Unidos a costa de México

En medio del marasmo y los endémicos conflictos armados que caracterizaron esta convulsa etapa de la historia de los países latinoamericanos se produjo la pérdida de la mitad del territorio de México, arrebatado por Estados Unidos. Esta acción fue facilitada por la inestabilidad política y las permanentes luchas interoligárquicas –logia yorkina (liberal) *versus* logia escocesa (conservadora)– existentes en el desaparecido Virreinato de Nueva España tras la adopción del régimen republicano mediante la constitución federal de 1824.

El completo predominio de la aristocracia clerical-conservadora mexicana sobre los nacientes grupos liberales, interesados en hacer avanzar las relaciones capitalistas, se había conseguido tras el derrocamiento (1829) y posterior asesinato de Vicente Guerrero (1831). El antiguo caudillo insurgente, había sustituido en el gobierno a Guadalupe Victoria, primer presidente de México (1824-1829).

Desde ese momento el general Antonio López de Santa Anna, ex oficial realista, devino el *factótum* de la política mexicana hasta mediados del siglo XIX. Fue una etapa en que fracasó la llamada primera reforma liberal, promovida por el vicepresidente Valentín Gómez Farías (1833-1834), se produjeron masivas rebeliones –entre ellas la llamada guerra de «castas», una poderosa sublevación indígena que estremeció Yucatán entre 1847 y 1853– y se registraron agresiones extranjeras como las de España (expedición de reconquista de Isidro Barradas en 1828) y Francia (Guerra de «los pasteles», 1838), aunque sin duda las más traumáticas y de peores consecuencias fueron las norteamericanas.

Estas últimas fueron resultado de la expansión territorial de Estados Unidos, que se venía desarrollando desde antes de la independencia de las trece colonias inglesas, incentivada por colonos norteamericanos al estilo de los pioneros Daniel Boone y George Rogers Clark. Ellos querían apoderarse de las tierras del oeste, abiertas a la colonización por las ordenanzas de 1785 y 1787.

Gracias a esas disposiciones, muchos montañeses, veteranos de las guerras, numerosos ciudadanos pobres, inmigrantes y, sobre todo, compañías especuladoras y plantadores del sur de Estados Unidos, ocuparon magníficas tierras con grandes facilidades, expulsando a las poblaciones indígenas. Detrás de este proceso también se encontraban las necesidades de la economía algodonera esclavista, de carácter extensivo, que de manera voraz reclamaba nuevas áreas que poner en explotación.

A aumentar esa necesidad de tierras contribuyó decisivamente el invento de Eli Whitney, en 1793, de una máquina para sacar las pegajosas semillas de algodón (desmotadora), lo que permitió multiplicar la producción de ese cultivo sobre la base de aumentar la cantidad de esclavos y las áreas en explotación. El algodón era entonces una materia prima de creciente demanda por la industria europea, particularmente la inglesa, disparada por la revolución industrial.

En estas condiciones, la cosecha de algodón del sur de Estados Unidos alcanzó en 1820 un valor de 160 millones de libras, duplicándose después cada diez años. Ya en 1830 este producto representaba más de la mitad del valor de todas las exportaciones norteamericanas.

El centro productor algodonero fue desplazándose paulatinamente al oeste, en dirección al río Mississipi, ya que los suelos de los estados del sur, colindantes con el Atlántico, no tenían la misma fertilidad de las vírgenes tierras del interior. Como parte de esa vertiginosa expansión, que sería considerada por muchos norteamericanos como un verdadero *destino manifiesto*, los Estados Unidos compraron en 1803 la Luisiana a Francia –fracasado el plan napoleónico de expansión colonial en América ante la enconada resistencia de los haitianos–, duplicando su territorio y poniendo dentro de sus límites todo el valle al oeste del río Mississipi.

A continuación, entre 1810 y 1813 se apoderaron, por la fuerza de la Florida occidental y en 1819 de la oriental, que pertenecían a España. De esta última región no solo expulsaron a los representantes de Madrid, sino también a patriotas de México y Venezuela que reclamaban la independencia de esa península.

No conformes con estas significativas adquisiciones de territorios, colonos norteamericanos, encabezados por Stephen Austin, autorizados primero por la administración colonial española y después por el gobierno de México encabezado desde 1821 por Agustín de Iturbide, se fueron asentando en Texas, favorecidos porque esta región carecía de una frontera natural que la separara de Estados Unidos. Aquí fomentaron plantaciones de algodón con fuerza de trabajo esclava o se dedicaron a la ganadería.

Quince años más tarde, las medidas centralistas adoptadas por el presidente mexicano Santa Anna, en particular la puesta en vigor de constitución de 1836 –que incluía la prohibición de la esclavitud en México–, sirvieron de pretexto a estos mismos colonos para anunciar su secesión y crear una «república independiente» (2 de marzo). La nueva carta magna mexicana convertía los estados en simples provincias, suprimía sus legislaturas y ponía todas sus rentas a disposición del gobierno central, lo que provocó incluso intentonas separatistas de regiones como Yucatán.

La guerra contra los colonos norteamericanos en Texas, dirigidos por Sam Houston, apoyada abiertamente por Estados Unidos, en realidad se inició con el descarnado ataque norteamericano a San Antonio de Béjar el 5 de diciembre de 1835, respondido tres meses después con las victorias mexicanas de El Alamo (9 de marzo de 1836) –donde murieron conocidos personajes de la historia estadounidense como David Crookett y James Bowie– y Llano del Perdido (19 de marzo). Pero el 21 de abril las fuerzas de Santa Anna fueron derrotadas en San Jacinto.

Prisionero de los norteamericanos, el presidente Santa Anna negoció su libertad a cambio de reconocer la separación de Texas –el límite con México se fijó en el río Nueces–, aunque con la condición de que este territorio no podría integrarse a Estados Unidos. De esta manera se constituyó la artificial «República de Texas», que el

29 de diciembre de 1845 fue anexada oficialmente a la unión norteamericana, lo que provocó que el gobierno mexicano rompiera sus relaciones diplomáticas con Washington.

La ambición de territorios mexicanos por parte de Estados Unidos no terminó con esta presa, pues desde marzo y abril de 1846 sus tropas invadieron el territorio norteño de México argumentando que el río Grande (hoy río Bravo) y no el Nueces era la frontera entre los dos países, para quedarse con la extensa zona existente entre ambas arterias. La declaración formal de guerra solo fue formulada el 11 de mayo de ese año, aunque ya había tenido lugar el primer enfrentamiento armado entre los dos países en el sitio de La Rosita el 25 de abril.

La ofensiva norteamericana tuvo dos direcciones principales: una por la frontera común y la otra sobre la capital. Así, un ejército estadounidense, comandado por el general Zachary Taylor, se fue apoderando de inmensos territorios fronterizos –entre ellos la ciudad de Monterrey (23 de septiembre), donde fue vencido el general de origen cubano Pedro Ampudia– tras vencer en las batallas de Palo Alto (8 de mayo) y Resaca de la Palma (9 de mayo) a las fuerzas del general Mariano Arista; mientras, otro contingente guiado por el general Stephen W. Kearny, apoyado por la flota del Pacífico del comodoro John D. Sloat, ocupaba California –donde ya el aventurero John C. Fremont había proclamado una «república independiente»– y Nuevo México.

A su vez las fuerzas del general Alexander W. Doniphan se adueñaban de Chihuahua. Como colofón, el 23 de febrero de 1847, Taylor vencía en Buena Vista (Coahuila) a las fuerzas interpuestas por el general Santa Anna, quien a toda la carrera había regresado de su exilio en Cuba.

Por su parte, el general Winfield Scott –que en 1838 se había «distinguido» trasladando más al oeste de sus territorios originales a los indios cherokees y creeks por la «vereda de lágrimas»–, con otro ejército transportado por mar en la flota del comodoro David Connor, desembarcaba en Veracruz y tras rendir la fortaleza de San Juan de Ulúa (29 de marzo de 1847) y liquidar la heroica resistencia en ese puerto del general Juan Morales, seguía la ruta de Cortés con

el propósito de ocupar la capital y rendir al gobierno mexicano. El 18 de abril de ese mismo año, el general Santa Anna –procedente de Coahuila–, luego de destituir un efímero gobierno liberal establecido en la ciudad de México a fines de 1846, fue derrotado por el general Scott en la batalla de Cerro Gordo, que le permitió ocupar Xalapa y Puebla.

En Padierna, Scott venció después al general Gabriel Valencia, que el 20 de agosto, desobedeciendo las órdenes de Santa Anna, presentó batalla al invasor y sin proponérselo facilitó la ocupación enemiga de Churubusco, que provocó la apertura de conversaciones de paz. En ellas los norteamericanos exigieron la entrega de las dos Californias, Tehuantepec, Nuevo México, Coahuila, Arizona, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, condiciones inadmisibles para el gobierno mexicano.

La guerra se reanudó el 8 de septiembre de 1847 con la dura batalla de Molino del Rey, seguida el 13 por la del Castillo de Chapultepec, última defensa de la ciudad de México, donde se inmolaron heroicamente un grupo de jóvenes cadetes, entre ellos cinco niños. Al día siguiente, tropas norteamericanas comandadas por el general John A. Quitman izaban el pabellón de Estados Unidos en el Palacio Nacional y Santa Anna abandonaba el país.

El gobierno mexicano que le sustituyó se vio obligado a refugiarse en Querétaro, desde donde abrió nuevas negociaciones diplomáticas con los invasores. El 2 de febrero de 1848 se firmó, entre México y Estados Unidos, el tratado Guadalupe-Hidalgo, que obligaba al país derrotado a aceptar la pérdida de California, Arizona, Texas y Nuevo México, que comprendían unos 2.5 millones de kilómetros cuadrados, a cambio de una ridícula compensación de 15 millones de dólares.

Todavía en 1855 el gobierno de Santa Anna, vuelto al poder dos años antes y autoproclamado *Alteza Serenísima*, como parte de un proyecto conservador dirigido a la reimplantación de la monarquía, vendía a Estados Unidos el valle de la Mesilla (Chihuahua), pues por ahí pasaba la ruta más expedita de Texas a California. Fue otro ajuste de la frontera con el poderoso vecino del norte, lo que conllevó un nuevo perjuicio para los mexicanos.

El enorme territorio arrebatado a México no puso fin a la expansión norteamericana. En 1846 Estados Unidos obtuvo de Inglaterra la cesión de la comarca de Oregón y en 1867 se produjo la compra de Alaska a Rusia. Desde entonces el territorio continental de Estados Unidos quedó conformado como hasta hoy, aunque no terminarían sus adquisiciones: en 1894 se apoderaron de las islas Hawai.

La guerra de América Central contra la intervención norteamericana

A pesar de su enorme extensión y creciente industria, Estados Unidos no pudo competir en las primeras décadas del siglo XIX con los eficientes comerciantes ingleses, por lo que debió limitar sus pretensiones hegemónicas en este continente a una ambiciosa declaración programática contentiva de sus aspiraciones (doctrina Monroe, 1823), a los intentos de apoderarse de Cuba y a las acciones de fuerza contra débiles repúblicas latinoamericanas. Eso fue lo que sucedió a México entre 1836 y 1848, como acabamos de ver, y fue también el caso cuando extendieron sus tentáculos a Nicaragua y otros países centroamericanos (William Walker, 1855-1860) y Nueva Granada (Tratado Mallarino-Bidlack de 1848).

En realidad, fue Inglaterra el único escollo serio a la expansión norteamericana sobre Cuba y América Central en los años que antecedieron a la Guerra de Secesión de Estados Unidos (1861-1865), lo que explica el interés de la Casa Blanca en la firma de un acuerdo con los británicos. En 1839 los ingleses se habían apoderado de la isla de Roatán –frente al litoral septentrional de Honduras–, restablecido el protectorado sobre los indios mísquitos en la costa atlántica de Nicaragua y Honduras (1843) y ocupado la población de San Juan del Norte en la desembocadura del río del mismo nombre, al que denominaron Greytown.

Pero la región no era una zona priorizada para los intereses británicos, por lo que Inglaterra aceptó firmar con Estados Unidos, el 19 de abril de 1850, un *modus vivendi* (Tratado Clayton-Bulwer)

relacionado con su posible uso como tránsito entre los dos océanos. Así los ingleses renunciaron de hecho a todas sus pretensiones excepto Belice, que se convirtió en 1862 en la colonia denominada Honduras Británica.

La expansión de Estados Unidos sobre América Central se inició justamente al término de la guerra contra México en 1848. Apenas acababan de ser arrebatados los territorios mexicanos cuando se produjo el descubrimiento de ricos yacimientos auríferos en California, desatándose la fiebre aventurera de los norteamericanos que en su afán de marchar al oeste pusieron sobre el tapete la necesidad de encontrar rutas apropiadas y seguras.

Miles de personas querían llegar de inmediato a California y Oregón, a la par que comerciantes e industriales norteamericanos de los puertos del este buscaban expandir sus negocios y mercados en aquella dirección. La magnitud de este fenómeno también se relaciona con el extraordinario crecimiento de la inmigración en Estados Unidos: en el período entre 1845 y 1854 se produjo el flujo proporcionalmente más grande de inmigrantes en toda la historia norteamericana, pues fue de 2.4 millones, equivalente al 15% de la población total de 1845.

Ante la ausencia de vías de comunicación expeditas –el ferrocarril transcontinental solo sería terminado en 1869– que atravesaran los territorios robados a México, muchos de los cuales eran habitados por tribus indígenas insumisas, los istmos centroamericanos –fundamentalmente Tehuantepec (México), Nicaragua y Panamá– devenían una ruta más rápida y menos peligrosa. Por ello se fletaban barcos a vapor o paquebotes que hacían la travesía de Nueva York a San Juan o Chagres o Panamá, con destino final en San Francisco, o incluso veloces *clippers* que daban la vuelta al cabo de Hornos.

Por todas partes surgían compañías de capitalistas dedicadas a este floreciente negocio de transporte. En 1853 Estados Unidos obtuvo de México una concesión para usar la vía del istmo de Tehuantepec, pero era menos eficiente que las de Nicaragua o Panamá.

En el caso de Nicaragua, la ruta interoceánica fue explotada por una empresa, la Accesory Transit Company, controlada por el

millonario norteamericano Cornelius Vanderbilt, que le hacía la competencia a los barcos de las líneas de Sloo y de Harris (Pacific Steamship Company) que utilizaban la de Panamá. Los pasajeros de Vanderbilt viajaban por mar desde la costa atlántica de Estados Unidos hasta la entrada del río San Juan (Greytown), lo surcaban en pequeñas embarcaciones hasta el lago de Nicaragua y la bahía de La Virgen y luego recorrían en diligencias, por un camino asfaltado, las doce millas hasta San Juan del Sur, sobre el Pacífico.

Entre 1851 y 1856 la cruzaron cien mil personas y el gobierno de Nicaragua recibía a cambio el 10% de las utilidades. Esta vía era la más barata y corta, ya que se llegaba a San Francisco dos días antes que por Panamá, a pesar que desde enero de 1855 funcionaba un ferrocarril que unía la costa del Atlántico (Colón) con la del Pacífico (ciudad Panamá).

El interés de Estados Unidos en la región se incrementaba por la presión de los plantadores sureños, que querían agregar nuevos estados esclavistas para obtener una balanza de poder más favorable en el Congreso norteamericano. Este problema se fue agudizando en la medida que la mayor riqueza y población del norte inclinaba la correlación de fuerza a su favor, en particular después que fue prohibida la esclavitud por encima de la línea Mason-Dixon (1820), lo que limitaba las posibilidades sureñas de sumar nuevos miembros esclavistas a la Unión.

Estos proyectos alcanzaron su clímax con los gobiernos de Franklin Pierce y James Buchanan, extendidos de 1853 a 1861, ambos del Partido Demócrata y favorables a los intereses sureños, lo que explica que muchos norteamericanos pusieron sus ojos en Cuba y América Central como manera de compensar la ya previsible creación de nuevos estados antiesclavistas. Por eso las redobladas gestiones para obligar a España a ceder Cuba a Estados Unidos y el auspicio sureño a las expediciones de Narciso López a esta isla (1850-1851) y de William Walker a Nicaragua (1856-1857), empresas que contaron con el respaldo de destacadas personalidades políticas del sur como Jefferson Davis, John C. Calhoun, Pierre Soulé y los generales John A. Quitman y Robert E. Lee, entre otros.

En Nicaragua, convertida en república independiente tras la ruptura del pacto federal centroamericano (1848), la presencia

norteamericana fue facilitada por las luchas entre liberales y conservadores. Estos últimos, liderados por Frutos Chamorro y José María Estrada, eran muy fuertes en la capital (Granada), mientras los liberales, encabezados por Máximo Jerez y Francisco Castellón, tenían sus baluartes en la ciudad de Rivas y el puerto de Corinto. El 5 de mayo de 1854, los liberales se sublevaron contra el gobierno conservador de Chamorro y la constitución vigente.

Cuando la lucha entre ambos bandos era de resultado incierto, el norteamericano Byron Cole se presentó en Nicaragua y ofreció sus servicios a los liberales, a cambio de dinero y tierras. Estos aceptaron y así llegó a Nicaragua, el 13 de junio de 1855, un nutrido grupo de mercenarios norteamericanos –la Falange Americana– comandados por William Walker, a quien de inmediato se le dio el grado de coronel y la ciudadanía nicaragüense.

Walker, que tenía entonces 31 años, era el prototipo de aventurero texano expansionista. Ya en 1853 había invadido el territorio mexicano de la Baja California con el objetivo de anexar ese territorio a Estados Unidos, llegándose a proclamar «presidente», intento que había repetido en Sonora en mayo de 1854.

El 29 de julio de 1855 las fuerzas norteamericanas, involucradas de lleno en la guerra civil nicaragüense, fueron derrotadas en Rivas, pero el 3 de septiembre vencieron al general hondureño Santos Guardiola en La Virgen. Cinco días después, Walker, ascendido a general, obligó a rendirse al general Ponciano Corral –fusilado más tarde (8 de noviembre)–, lo que llevó a los conservadores a firmar un acuerdo de paz a nombre del gobierno de Estrada, quien había ocupado la presidencia tras la repentina muerte de Chamorro.

Por último, el 13 de octubre de 1855, el aventurero norteamericano se apoderó de Granada, refugio de los conservadores. La ciudad fue saqueada por las huestes de Walker y dos semanas después impuso en la primera magistratura de Nicaragua al liberal Patricio Rivas en lugar de su antiguo aliado Francisco Castellón.

En premio a sus actividades, el 18 de febrero de 1856, el nuevo gobierno de Nicaragua traspasó la concesión de Vanderbilt, para la explotación de la ruta transoceánica por Nicaragua, a Walker y sus socios Charles Morgan y C.K. Harrison. Entretanto, continuaban

llegando refuerzos desde Estados Unidos para las tropas de Walker, en su mayoría veteranos de la guerra contra México, procedentes de California, a los que se había ofrecido tierras y otros beneficios.

Debido a las depredaciones de Walker y sus compinches, los países centroamericanos, que sentían seriamente amenazadas sus soberanías, se unieron contra los invasores extranjeros, encabezados por el presidente costarricense Juan Rafael Mora y apoyados con recursos materiales proporcionados por el gobierno de Perú dirigido entonces por el mariscal Ramón Castilla. Así comenzó la llamada guerra nacional de Centroamérica contra Walker.

En la primera etapa del conflicto, Costa Rica llevó el peso de la contienda de la liberación nacional centroamericana, cuando se celebraron las batallas de Guanacaste (20 de marzo de 1856), en su propio territorio, y la de Rivas en Nicaragua (11 de abril), que dejaron centenares de muertos. Una epidemia de cólera, que diezmó a la población costarricense, obligó al ejército de Mora a regresar a su país.

En medio del paréntesis creado en la guerra con Costa Rica, el 20 de junio de 1856, tras enemistarse con Rivas, negado a hacer más concesiones a los norteamericanos, Walker puso al frente del gobierno nicaragüense a Fermín Ferrer, aunque poco después se auto nombró presidente de Nicaragua (12 de julio), sin ocultar su plan de imitar el ejemplo de Texas y anexar el país a Estados Unidos. Para ese proyecto contaba con el apoyo de los hacendados sureños y del propio mandatario norteamericano Pierce, que de inmediato le extendió su reconocimiento diplomático.

Para llevar adelante esos objetivos, el «presidente» Walker restableció la esclavitud (22 de septiembre de 1856) y proclamó el inglés como idioma oficial en Nicaragua, así como la igualdad de derechos entre nativos y naturalizados, a la vez que distribuía tierras entre los miembros de su Falange. Además, canceló la licencia al cónsul británico y trató de intervenir en la zona de Mosquitia, entonces colonia inglesa, y de hacer pagar impuestos a los propietarios de esa región.

Ante tantos agravios, el ex presidente Rivas se sublevó contra Walker (26 de junio), declarándolo enemigo de Nicaragua. Después

de conseguir el respaldo de la mayoría de los integrantes de los partidos tradicionales (12 de septiembre), llamó en su ayuda a los gobiernos centroamericanos, que respondieron enviando contingentes militares a Nicaragua para enfrentar a los invasores.

En ese momento el sentimiento antinorteamericano se había esparcido por toda América Latina ante las provocadoras y descarnadas actividades intervencionistas de Walker. En Panamá, la irritación de la población dio lugar al incidente llamado de la tajada de sandía (15 de abril de 1857): una reyerta entre panameños y estadounidenses partidarios de Walker que dejó un saldo de decenas de muertos y heridos en ambos bandos.

Reiniciada la campaña militar a fines de septiembre de 1856, los ejércitos aliados centroamericanos liberaron León, Managua, Masaya y Rivas, para después poner sitio a Granada. En esa coyuntura, Walker incendió esta última ciudad antes de abandonarla y se refugió en Rivas, después de autoproclamarse también «presidente» de El Salvador.

La ofensiva centroamericana se dirigió ahora a ocupar la llamada vía del tránsito sobre el río San Juan, que permitía a los filibusteros norteamericanos mantener sus vínculos con Estados Unidos y obtener nuevos reclutas, armas y recursos económicos para proseguir su plan de apoderarse de toda Centroamérica. En ese sitio, los invasores se vieron obligados a capitular el 13 de abril de 1857.

En estas condiciones, el ejército unido de Centroamérica atrapó a Walker en la ciudad de Rivas, desde donde huyó el 1 de mayo de ese año en un navío de guerra norteamericano, anclado en la costa nicaragüense. El retorno de Walker a Estados Unidos fue triunfal, acogida que lo estimuló a organizar su retorno a la América Central.

El 11 de noviembre de 1857 regresó a Centroamérica con 400 hombres en el buque *Fashions* y ocupó otra vez San Juan del Norte. Pero buques de guerra ingleses y norteamericanos lo obligaron a reembarcarse a Estados Unidos, donde prosiguió con sus planes para volver a Centroamérica.

En agosto de 1860 repitió el intento y se apareció en la isla de Roatán, desde donde se trasladó al puerto hondureño de Trujillo. Compelido a retirarse por el ejército de este país, se refugió en

un buque inglés, el *Icarus*, cuyo capitán lo entregó al gobierno de Honduras, que lo fusiló el 12 de septiembre, poniendo fin a sus correrías por la región.

Últimos intentos de integración hispanoamericana

Las agresiones sufridas por los países de América Latina tras su independencia, como las realizadas por William Walker, propiciaron la recuperación del legado bolivariano de unidad, a pesar de que la conciencia *nacional* hispanoamericana, que buscaba la integración, se había debilitado tras el cierre del ciclo emancipador. Eso explica que fracasado el proyecto integrador del Congreso de Panamá (1826), y del intento de su prolongación en Tacubaya (México), donde los delegados se reunieron por última vez el 9 de octubre de 1828, las ideas de unidad solo fueran retomadas cuando un grave peligro amenazaba la soberanía de los países de América Latina.

Hay que advertir que los esfuerzos integracionistas hispanoamericanos no lograron concretarse por el predominio de heterogéneas fuerzas centrífugas, internas y externas. A ello debe añadirse las dificultades entonces insalvables derivadas de las utópicas aspiraciones de querer imponer grandes unidades estatales sobre estructuras socioeconómicas precapitalistas, incapaces de proporcionar las bases objetivas para una sólida unidad hispanoamericana.

En ese contexto, la famosa doctrina Monroe solo constituyó un episodio de la temprana rivalidad anglo-norteamericana y una proclamación unilateral de las intenciones expansionistas de Estados Unidos. Dos años después de esta declaración, en 1825, la superioridad de Inglaterra en el comercio con los países latinoamericanos era sustancial, pues sus transacciones duplicaban el monto de las norteamericanas y, en ciertos lugares, como en el Río de la Plata y Brasil, era incluso seis veces mayor.

Tres años después de la infeliz reunión de Tacubaya, la iniciativa para otro intento de unidad hispanoamericana correspondió a México, agobiado por las groseras violaciones de sus fronteras por

colonos y aventureros procedentes de Estados Unidos y las desmedidas exigencias comerciales de Inglaterra. Con esa finalidad, el canciller mexicano Lucas Alamán dio a conocer en noviembre de 1831, a raíz de un encuentro con su homólogo centroamericano, una convocatoria para recuperar las ideas de Bolívar con el argumento de que la desunión e inexperiencia había traído graves consecuencias para los nuevos estados.

Compulsado por las agresiones militares de Francia a México (1838) y el Río de la Plata (1839) se renovaron de un extremo al otro del hemisferio las propuestas para hacer renacer el proyecto unionista de Panamá. Explícitamente se refirió a ello, en enero de 1839, el Congreso mexicano. Una perspectiva semejante tuvo la solicitud presentada en septiembre de 1839 al Congreso constituyente peruano reunido en Huancayo (Perú) tras la desarticulación de la Confederación Peruano-Boliviana impuesta por los ejércitos chilenos.

Pero no fue hasta el 9 de noviembre de 1846 que el gobierno peruano resucitó la idea de un congreso hispanoamericano, alarmado ante los preparativos de la frustrada expedición de reconquista que entonces tramaba Juan José Flores, con el respaldo económico de la regencia española y la complicidad inglesa, y cuyos preparativos coincidieron en tiempo con el desarrollo de la Guerra de Estados Unidos contra México. Gracias a esas circunstancias, del 11 de diciembre de 1847 al 1 de marzo de 1848, los representantes de Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Nueva Granada se reunieron en Lima, lo que constituyó en la práctica el primer congreso hispanoamericano que se concretó después del de Panamá, aunque sus acuerdos no llevaron a ninguna parte.

Las continuadas agresiones del expansionismo norteamericano, reveladas en toda su crudeza con el robo a México de más de la mitad de su territorio (Tratado Guadalupe Hidalgo de 1848), y las posteriores actividades de bandidaje de William Walker en Centroamérica a mediados de la década del cincuenta, dieron aliento a nuevos proyectos de integración continental. La iniciativa para promover un nuevo congreso hispanoamericano correspondió esta vez a Venezuela, a través de su canciller Jacinto Gutiérrez, quien

en 1856 envió una circular a los distintos países del subcontinente donde planteaba dar adecuada respuesta a las actividades de Walker.

En esa peligrosa coyuntura para la soberanía e independencia de las naciones latinoamericanas se firmó el tratado continental o *Tratado que fija las bases de unión de las Repúblicas Americanas*, concretado en Santiago de Chile, el 15 de septiembre de 1856, entre Chile, Perú y Ecuador, al que se adherirían después los gobiernos de Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México y Paraguay. Al mismo tiempo, el ministro de Guatemala en Washington, el escritor conservador José María Irisarri, proponía la firma de otro acuerdo enfilado contra el expansionismo norteamericano, que se materializó en un tratado de alianza, que tampoco tuvo resultados prácticos.

La oleada recolonizadora que se volcó sobre la América Latina en los años sesenta compulsó otra vez la urgencia de la unidad continental. Nos referimos a la intervención francesa en México, el restablecimiento colonial de Santo Domingo, la agresión española a los países del Pacífico y al intento del aventurero francés Aurelie Antoine de Tounens por instaurar una monarquía europea en la Araucania chilena.

En ese contexto, el 11 de enero de 1864, el gobierno peruano invitó a un nuevo congreso para coordinar la defensa de los países hispanoamericanos. Ante la posibilidad de invitar a Estados Unidos, que en ese momento concluía la Guerra de Secesión bajo la presidencia de Abraham Lincoln, cuyo gobierno despertaba esperanzas de una nueva política exterior norteamericana hacia la región, el gobierno peruano, en su condición de anfitrión, se vio obligado a precisar: «El congreso americano deberá formarse de plenipotenciarios de las repúblicas americanas de origen español exclusivamente».[6]

La reunión hispanoamericana de Lima se efectuó del 15 de noviembre de 1864 al 13 de marzo de 1865, con la participación de delegados plenipotenciarios de Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador, El Salvador y Perú. Este cónclave, donde se aprobaron cuatro tratados, entre ellos el de unión y alianza defensiva, fue el último gran congreso de unidad continental siguiendo el ideario de

[6] Ricaurte Soler, *Idea y cuestión nacional latinoamericanas, de la independencia a la emergencia del imperialismo*, México, siglo XXI, 1980, p. 183.

Bolívar que se celebró en el siglo XIX, aunque como los anteriores sus acuerdos no tuvieron consecuencias ulteriores.

Bajo el influjo inmediato de este cónclave de 1864-1865, y sobre la base de sus resoluciones, se firmó en Lima, en mayo de 1867, otro tratado entre Chile, Ecuador y Bolivia, y en octubre uno semejante entre los representantes de Chile, Perú y Bolivia. También en la propia capital peruana un congreso de juristas, al que no asistió Estados Unidos, procedentes de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, reunidos entre 1877 y 1878, elaboró un proyecto de tratado unionista con la presencia, por primera vez, de un representante del gobierno cubano que luchaba contra el colonialismo español desde 1868. En 1881 se celebró en Panamá una reunión de representantes de Costa Rica, El Salvador, Colombia y Guatemala con el propósito de acordar un tratado colectivo de arbitraje.

Al conmemorarse el primer centenario del nacimiento de Bolívar, en 1883, se reunió en Caracas una asamblea oficiosa con delegados de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Venezuela. Todavía en 1886 los embajadores de este continente acreditados en Francia acariciaban la idea de sugerir a sus respectivos gobiernos la conveniencia de convocar a una reunión de manera «que siguiendo un antiguo pensamiento de Bolívar los delegados de las naciones hispano-americanas, se ocupen, en ese congreso, de establecer las bases de una unión perfecta entre sus respectivos pueblos y aun de una alianza ofensiva y defensiva».[7]

En la década del ochenta, con el advenimiento del panamericanismo promovido por Estados Unidos, terminaron los esfuerzos oficiales de los gobiernos de América Latina de avanzar hacia la unidad continental siguiendo la tradición bolivariana. A partir de ese momento, concluida con grandes insatisfacciones la época de las transformaciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX, los principales esfuerzos y llamados en favor de la unidad latinoamericana quedaron en manos de figuras intelectuales aisladas o determinados sectores y fuerzas políticas antimperialistas.

[7] Ibídem, p. 187.

Capítulo 7

LAS REFORMAS LIBERALES

Una serie de trasformaciones de orientación liberal burguesa sacudió a los países latinoamericanos a partir de mediados del siglo XIX ante el empuje del avance capitalista a escala internacional y el tremendo impacto de la oleada revolucionaria europea de 1848. Entre sus causas se hallaba el significativo retroceso experimentado en América Latina después de la independencia, que llevó al establecimiento en casi todas partes de un régimen conservador encargado de restablecer el viejo orden socio-económico colonial, incluida la esclavitud, el tributo indígena y el régimen de mayorazgos.

Las revoluciones liberales adquirieron características distintas en cada uno de los países latinoamericanos donde se desarrollaron, determinadas por las tareas objetivas y el grado de madurez de la conciencia burguesa, aunque fue muy frecuente que las transformaciones sociales, económicas y políticas fueran resultado de reformas «desde arriba». Entre sus principales propósitos figuraba la modificación de las anquilosadas estructuras sociales y económicas y la necesidad de impulsar el desarrollo capitalista como premisas para la creación de naciones modernas.

El ciclo de las reformas liberales y sus variantes

El reformismo liberal, al propiciar la integración económica del territorio nacional –abolición de aduanas interiores, peajes y

estancos, eliminación de obstáculos a las comunicaciones interregionales mediante la libre navegación de los ríos, la construcción de ferrocarriles, etc.–, su adecuación a los límites formales de las repúblicas –colonización interior o conquista de insumisas zonas indígenas– y la desamortización de las formas arcaicas de la propiedad comunal y corporativa –laica o eclesiástica–, impulsó la difusión de las relaciones mercantiles y la ampliación de los sectores burgueses, aspirando a la remodelación del Estado a imagen y semejanza de los grandes países capitalistas industrializados.

El ascenso de la burguesía y las relaciones capitalistas, acompañó o sucedió al triunfo de las emergentes fuerzas políticas liberales. Estos procesos, iniciados con las revoluciones liberales del medio siglo en Colombia (1849) y la de Ayutla en México (1854), se desarrollaron en varias partes de América Latina en diferentes momentos de la segunda mitad del siglo XIX y en algunos casos incluso más tarde. Por lo general, las reformas liberales fueron más traumáticas y profundas donde mayor resistencia a los cambios ofrecían los defensores de viejo sistema socio-económico heredado del obsoleto régimen feudal colonial.

En algunos países, el principal obstáculo al avance capitalista lo interponía la Iglesia, íntimamente asociada a los terratenientes conservadores. Estos fueron los casos de México y, en menor medida, Centroamérica, Colombia y Ecuador. En otras naciones, el predominio de la aristocracia enfeudada amparaba los privilegios de un clero mucho menos poderoso –como en Perú, Chile y Venezuela– o el predominio de viejas oligarquías locales o regionales, negadas a aceptar proyectos liberales de organización nacional, como en el Río de la Plata, que no respetaran las prerrogativas de las provincias.

Las reformas liberales sustantivas se desarrollaron en México de 1854 a 1867, durante el gobierno de Benito Juárez; de 1849 a 1854 y de 1861 a 1864 en la actual Colombia, bajo la dirección de José Hilario López y Tomás Cipriano de Mosquera respectivamente; en Venezuela a partir de la Guerra Federal (1859), verdadera revolución campesina, y con el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, de 1870 a 1888. Por su parte, en Centroamérica se generalizaron después de la revolución liberal guatemalteca emprendida por el presidente Justo Rufino Barrios a partir de su triunfo en 1871 y cerró con la tardía

de José Santos Zelaya en Nicaragua en 1893, casi simultánea a la llevada adelante por Eloy Alfaro en Ecuador (1883 y 1895), una de las últimas del continente.

Casi todas siguieron un curso menos radical que la desarrollada por Juárez en México, devenida, bajo la presión de una intervención extranjera (Imperio de Maximiliano, 1864-1867), en verdadera gesta de liberación nacional. La contienda mexicana por su soberanía fue paralela a la lucha emancipadora que tuvo lugar en Santo Domingo para restaurar la República Dominicana (1862-1865) y casi coincidente con el estallido de la guerra de independencia cubana de 1868 a 1878, iniciada por Carlos Manuel de Céspedes. También la Guerra de Paraguay contra la Triple Alianza (1864-1870), en defensa de su territorio, se produjo en la misma década del sesenta.

Como resultado de las transformaciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX se amplió el territorio de muchos países latinoamericanos para acomodarse mejor a las fronteras estatales, se avanzó en la formación de los mercados nacionales y se activó la conformación de la sociedad y la propia nación, sobre la que se había establecido una imagen modelada en el espejo de la aristocracia blanca, de raíz española y católica. Desde entonces comenzaron a configurarse, todavía un tanto tímidamente, nuevos patrones culturales más representativos de la idiosincrasia nacional, como el gaucho argentino, el guajiro cubano o el charro mexicano, indicativo de que cada país latinoamericano se iba identificando con un arquetipo social singular, símbolo de su población más característica.

Como ya había sucedido con la independencia, tampoco las reformas liberales pudieron imponer a plenitud la formación capitalista, pues la aguda debilidad socioeconómica de la naciente burguesía no le permitió actuar como clase hegemónica de avanzada ni como elemento aglutinador de los intereses nacionales. El lugar que le correspondía al frente de las luchas antifeudales y democráticas fue ocupado por sectores que no pertenecían a la burguesía moderna en sentido estricto, como la élite terrateniente, los comerciantes y la intelectualidad, que cumplían con muchas dificultades la función de una clase inexistente en la articulación del interés nacional general de las fuerzas antifeudales y anticlericales.

A esto debe agregarse las propias limitaciones de la intelectualidad y la pequeña burguesía democrática para actuar de enlace entre el movimiento popular y las fuerzas sociales hegemónicas a escala nacional. Al no incluir en sus demandas la decisiva cuestión agraria –a la que estaban ligados los principales problemas sociales de América Latina–, la izquierda radical se vio incapacitada de vertebrar una alternativa viable democrático-revolucionaria del desarrollo capitalista. Todo ello conspiró contra la estructuración de un amplio bloque revolucionario y restringió los alcances de las transformaciones liberales de la segunda mitad del siglo XIX.

Aunque casi todas las reformas tuvieron un definido carácter anticlerical y antifeudal, solo cumplimentaron parcialmente su papel impulsor de las transformaciones burguesas. Si bien en todas partes se extendieron las relaciones capitalistas, avanzó el proceso de integración nacional, se instauró el derecho burgués frente a los privilegios y fueros del viejo régimen conservador y el monopolio territorial de la Iglesia fue quebrado –allí donde era realmente importante–; no obstante subsistió, e incluso en algún sentido se amplió, la explotación servil de los pueblos originarios y el predominio de la gran propiedad terrateniente.

Pese a sus limitaciones, las transformaciones liberales favorecieron el ascenso de la burguesía terrateniente, los grandes comerciantes y de algunos sectores de las capas medias urbanas. Incluso hubo países donde comenzó a despuntar, a contrapelo del capital extranjero, una muy incipiente burguesía nacional (Brasil, Argentina, Chile, México), a la vez que se conformaban los primeros núcleos obreros.

Consecuencias de la penetración comercial y financiera de Inglaterra

Al mismo tiempo que avanzaba la reforma liberal, crecían las exportaciones y se extendían las relaciones capitalistas en los países al sur del río Bravo, se iba ampliando y consolidando el predominio comercial y financiero de Inglaterra en América Latina. La

penetración británica estuvo favorecida por la política librecambista adoptada en casi todas partes por los liberales, que trajo aparejado efectos desastrosos para la economía latinoamericana en su conjunto.

Una de ellos fue la fuga del exiguo capital y el permanente desajuste de las balanzas de pago, convirtiendo a muchos países en víctimas del capital bancario inglés que, con sus préstamos de muy elevadas tasas de interés, se aseguraba un mayor control de las débiles economías del continente. Estas eran verdaderas operaciones agiotistas, que imponían condiciones muy onerosas a los países deudores, como la hipoteca de las rentas de aduana y de los impuestos de consumo.

De manera indirecta, a este resultado también contribuyó la orfandad de los nuevos estados, bosquejados en su interior solo a medias, que fue aprovechada por Inglaterra para convertirse en acreedora y principal suministradora de bienes manufacturados, teniendo por bases las casas comerciales establecidas desde principios de siglo en los principales puertos de la América Latina. Desde mediados del siglo XIX el predominio comercial de Inglaterra era casi absoluto en este continente, pues adquiría buena parte de sus productos de exportación y los abastecía de manufacturas.

Ello se vio favorecido por el significativo crecimiento de las exportaciones latinoamericanas, sobre todo a partir de 1870, expansión que se extendería sin solución de continuidad hasta la depresión de 1929. A principios de la década del setenta, Cuba era el principal país exportador de América Latina –a pesar de los efectos de la guerra independentista de 1868 a 1878–, pues duplicaba las ventas de sus cuatro seguidores más cercanos –Argentina, Chile, Perú y México–, que exportaban cada uno por valor aproximado de 30 millones de pesos anuales.

Otra consecuencia del predominio comercial de Inglaterra, favorecida también por la política de *laissez faire* implantada por los liberales, fue el dramático desplazamiento de las artesanías nacionales por la industria europea. Este proceso había comenzado a fines del siglo XVIII, bajo los embates de la política comercial del despotismo ilustrado, aunque la crisis posindependentista le había dado un breve respiro a las producciones autóctonas.

La capacidad de las artesanías para sobrevivir dependía ahora, más que antes, del aislamiento natural de algunas regiones. Los residuos de mercantilismo en el sistema impositivo y las aduanas interiores, junto a los obstáculos geográficos y las malas comunicaciones internas, actuaban en el mismo sentido.

Pero alrededor de 1850, la irrupción de las mercancías extranjeras se intensificó, penetrando a profundidad el mercado latinoamericano, favorecidas por sus bajos costos de producción, la modernización de los transportes y la disminución de las tarifas aduaneras. De esta forma, el vertiginoso desarrollo de la revolución industrial en determinados países de Europa occidental y sobre todo en Inglaterra, no solo tuvo por consecuencia la destrucción de los pequeños productores metropolitanos, sino también aniquiló a los artesanos de los territorios más atrasados al mismo ritmo con que estas áreas se integraban al mercado mundial en formación y se extendían a escala internacional las relaciones capitalistas.

De esta manera, la industria europea, y en primer lugar la británica, fue controlando todo el mercado latinoamericano. Era lo mismo que sucedía en casi todas partes del planeta al conjuro de la revolución industrial, mientras el capitalismo se imponía como sistema mundial.

En consecuencia, miles de talleres artesanales de América Latina que abastecían el consumo popular fueron aplastados por la desleal competencia de las mercancías importadas de Europa occidental y de Estados Unidos. En respuesta los artesanos se organizaron para luchar por leyes proteccionistas y contra la indiscriminada importación de los artículos industriales europeos.

En México, los artesanos estructuraron en 1843 una Junta de Fomento, entre cuyos propósitos estaba la defensa de la producción nacional; mientras en Perú los airados pequeños productores de Lima y El Callao destruyeron en 1858 las mercancías almacenadas en el puerto e impidieron su traslado a la capital. Sin duda el punto más alto en estas luchas en defensa de las producciones autóctonas se registró en Bogotá cuando los artesanos de la república neogranadina, vertebrados en sociedades democráticas y aliados a un sector moderado del liberalismo –llamado *draconianos*– encabezados por el

general José María Melo, llegaron a ocupar el poder en la capital durante nueve meses (1854).

Los artesanos neogranadinos y la revolución del medio siglo

Las disposiciones reaccionarias adoptadas por los conservadores en Nueva Granada, después de su separación de la Gran Colombia de Bolívar, permitieron modelar una república centralista o «señorial», dirigida por un gobierno autoritario dotado de facultades extraordinarias –los liberales la comparaban con una monarquía–, que permitió garantizar los privilegios y fueros de los grandes hacendados y el alto clero. Se mantenía el sistema tributario colonial, que gravaba con exorbitantes y absurdos impuestos las actividades mercantiles, productivas, de transportes y de comunicaciones.

En base al sistema vigente de monopolio fiscal, acorde a las viejas concepciones heredadas de la época colonial, muchos artículos estaban sujetos a estancos –por ejemplo el tabaco, la sal y el aguardiente– y un gravamen específico afectaba a cada transacción comercial. Las rentas estancadas y los derechos de aduanas constituían, después de la abolición de la capitación indígena, las fuentes principales del presupuesto estatal, el cual tenía que dedicar una parte apreciable de sus ingresos a sufragar la complicada recaudación de tributos y otra porción al mantenimiento de un costoso ejército, así como al pago de la deuda externa.

Ante el brusco descenso de las entradas fiscales, los continuos déficits en la balanza comercial y la creciente falta de circulante, el gobierno del general conservador Tomás Cipriano de Mosquera, extendido de 1845 a 1849, se vio compelido a buscar nuevas fuentes de ingresos para las arcas estatales y la amortización de la gravosa deuda inglesa adquirida durante la guerra de independencia. De ahí que los proyectos gubernamentales apuntaran hacia un aumento significativo del comercio, por medio de nuevos productos, para compensar la caída de las ventas de oro, pues el valor de las exportaciones granadinas había mermado

como resultado de los recientes descubrimientos auríferos de California y Australia.

Eso explica que el gobierno de Mosquera fomentara la navegación por el Magdalena y ofreciera subsidios en compensación por posibles pérdidas a las empresas navieras, a la vez que aprobara una serie de leyes –preparadas por su ministro de Hacienda, Florentino González– destinadas a activar el comercio y fomentar los cultivos agrícolas. Nos referimos, en primer término, a la Ley del 23 de mayo de 1847, que concedió la libertad de cosechar tabaco, producto de creciente demanda en los mercados europeos, pero hasta entonces limitado por el estanco. La otra disposición importante, fue una sustancial rebaja de las tarifas aduaneras por la ley del 14 de junio de 1847.

Estas disposiciones favorecieron el aumento en las entradas de manufacturas extranjeras en Nueva Granada. Para protegerse de la creciente competencia de las manufacturas importadas, los artesanos del altiplano de Cundinamarca, que representaban casi el 40% de toda la población trabajadora en esa región, encabezados por el sastre Ambrosio López, el zapatero José María Vega y el herrero Miguel León, fundaron en noviembre de ese año la Sociedad Democrática de Bogotá.

En poco tiempo la asociación artesanal se convirtió en la más poderosa del país, influida por algunos preceptos del socialismo utópico procedente de Francia. En ese ambiente, se inició la revolución liberal neogranadina con el ascenso a la presidencia, en 1848, de José Hilario López, electo por un atemorizado congreso que cedió ante las presiones de las sociedades democráticas de artesanos extendidas ya por muchas ciudades.

Durante su mandato, los liberales impusieron la expulsión de los jesuitas, la libertad de prensa, la extinción de censos y estancos, la abolición del diezmo y de la esclavitud (1851). Además, prohibieron toda actividad a las órdenes religiosas, separaron la Iglesia del Estado e introdujeron otras reformas democráticas y civilistas en la constitución liberal de 1853.

En su defensa de las producciones de los artesanos, la Sociedad Democrática de Bogotá confió inicialmente en una petición dirigida

al Congreso Nacional, donde exigía el alza de los derechos de aduana. Pero el 19 de mayo de 1853 los diputados la rechazaron, en consonancia con los intereses del sector agrario-comercial que en su mayoría representaban.

La decisión adoptada por el parlamento, dominado por los liberales extremistas (llamados *gólgotas*) hizo a los artesanos enemigos irreconciliables de la naciente burguesía comercial y los terratenientes. La rápida agudización de la lucha de clases que ello trajo aparejado se expresó mediante trifulcas callejeras en Bogotá entre los *cachacos*, jóvenes liberales que usaban casacas importadas de tartán escocés, y los artesanos, vestidos con la *ruana* tradicional.

Las contradicciones clasistas alcanzaron su clímax cuando la Sociedad Democrática capitalina decidió derrocar al régimen liberal, dominado por los *gólgotas*. Para conseguirlo, se aliaron a los liberales moderados, conocidos como *draconianos*, y a un sector descontento del ejército, afectado por una drástica disminución de sus efectivos dispuesta por los *gólgotas* y los conservadores.

El 17 de abril de 1854, los artesanos, armados sigilosamente, y el cuerpo de húsares encabezado por el general José María Melo, un antiguo oficial de Bolívar, depusieron al indeciso gobierno de José María Obando, derogaron la constitución de 1853 y establecieron una dictadura. Contra lo previsto por Melo y los artesanos, el movimiento no tuvo éxito en las restantes provincias y tampoco repercutió entre los campesinos e indígenas, pues el nuevo gobierno no enarboló ninguna de sus reivindicaciones.

En cambio, los conservadores y liberales olvidaron sus viejas rencillas y organizaron un poderoso ejército, puesto a las órdenes del general Tomás Cipriano de Mosquera. Aislado en el altiplano de Bogotá, y sin respaldo en otras ciudades neogranadinas, el movimiento revolucionario estaba condenado al fracaso. La capital fue ocupada en diciembre después de arduos combates y días de sitio. La guerra civil terminó con una cruel represión que tuvo en los arruinados artesanos sus principales víctimas.

Fundación de los Estados Unidos de Colombia

Derrotada la «república artesana» de Bogotá, el conservador Manuel María Mallarino fue encargado de terminar el período de Obando –condenado por el Congreso por traición y rebelión–, mientras el ejército quedaba prácticamente disuelto. Además, se estableció el carácter laico del Estado (1856) y se abrió el proceso de creación de estados federales: Panamá, Antioquia, Boyacá, Santander, Magdalena, Bolívar y Cauca.

En las siguientes elecciones, celebradas en 1857, se impuso el conservador Mariano Ospina Rodríguez sobre el aspirante *gólgota* –o radicales como se les comenzaba a llamar– Manuel Murillo Toro y el independiente general Tomás Cipriano de Mosquera, al frente del recién creado Partido Nacional, agrupación en la que militaban figuras como Florentino González y José Hilario López. Los derrotados en la contienda electoral, Murillo Toro y Mosquera, quedaron entonces al frente de los estados soberanos de Santander y Cauca.

Durante el gobierno de Ospina, iniciado el 1 de abril de 1857, se autorizó el regreso de los jesuitas y una convención, dominada por los liberales, aprobó la nueva constitución federal (1858), inspirada por Florentino González, que puso al país el nombre de Confederación Granadina y reiteró la separación Iglesia-Estado. Pero los intentos del mandatario de imponer el centralismo, junto con la rebelión conservadora en el estado de Santander contra las disposiciones liberales de su presidente Murillo Toro (1859), abrieron una nueva guerra civil, en la que en principio se impuso el ejército gubernamental encabezado por el general Herrán.

El levantamiento de Mosquera en el Cauca, en mayo de 1860, profundizó el enfrentamiento y, tras la muerte en combate de su nuevo aliado, el general Obando (29 de abril de 1861), el ejército del presidente Ospina fue derrotado y su principal contrincante se apoderó de la capital el 18 de julio. No obstante, la guerra librada por Mosquera contra los conservadores todavía continuó durante un año, hasta que sus principales jefes, entre los que sobresalía Julio Arboleda, fueron derrotados.

Una vez en el poder, Mosquera dictó, con el apoyo de los *gólgotas*, medidas dirigidas a someter a la Iglesia y expropiar sus bienes, con vistas a dar un respiro al exhausto presupuesto estatal tras tantos años de luchas armadas y guerras intestinas. El 20 de julio de 1861, el mandatario sancionó el decreto de tuición, que puso al clero bajo control del Estado, y a fines de ese año encarceló al arzobispo Antonio Herrán, clausuró conventos y expulsó de nuevo a los jesuitas, tras confiscar sus propiedades.

Además, el 9 de septiembre de 1861, fueron expropiados a la Iglesia los bienes de manos muertas y puestos a la venta. Esta medida anticlerical terminaría contribuyendo a la expansión del latifundio, pues esas propiedades fueron a parar a manos de comerciantes, usureros, burócratas, especuladores y grandes hacendados, los únicos que tenían dinero en efectivo o bonos de la deuda pública para comprarlas.

Las reformas liberales de Mosquera fueron validadas por la convención de Río Negro (Antioquia), presidida por Francisco Javier Zaldúa y Eustorgio Salgar, que aprobó la constitución de 1863. Esta carta magna estableció una nación laica, ratificó la separación Iglesia y Estado, del matrimonio y divorcio civil, condenó la esclavitud, suprimió la pena de muerte y consagró amplios derechos individuales

Además, la propia constitución adoptó puso al país el nombre de Estados Unidos de Colombia, como parte de un intento fallido de restablecer la antigua gran república norandina de Bolívar. El propio Mosquera, dos días después de su victoria, el 20 de julio de 1861, había declarado que la redención de Colombia era su principal objetivo y el artículo 90 de la ley fundamental de Río Negro dejaba claro su propósito de «iniciar con los Gobiernos existentes en Venezuela y el Ecuador, las negociaciones que conduzcan a las tres secciones en un cuerpo de nación».[1]

En este proceso para restaurar la Colombia bolivariana estaban concordes, además del propio Mosquera, otras destacadas personalidades contemporáneas como el venezolano Antonio Leocadio Guzmán, el panameño Justo Arosemena, el granadino Aquileo Parra

[1] *Pensamiento político venezolano del siglo XIX. Textos para su estudio*, tomo VI, Caracas, Congreso de la República, 1983, p. 154.

y el ecuatoriano Eloy Alfaro. El propio Guzmán exclamaría en 1863, en su discurso ante la mencionada convención de Río Negro: «¡Ojalá pudiera hacerse de toda la América una nación! Pero como eso no es posible, hagamos a Colombia».[2] Pero el ambicioso proyecto no prosperó y Colombia quedó integrada solo por las antiguas provincias neogranadinas, convertidas ahora en los estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima.

Descentralizada por completo la administración por la constitución federalista de Río Negro, se exacerbaron los sentimientos regionalistas, la exclusión de los conservadores y las pugnas civiles, mientras se aplicaban al extremo los principios del *laissez faire* y se reducía en forma sensible el papel del Estado. De esta forma, la victoria del liberalismo radical quedó consagrada en la cuasi libertaria y federalista constitución de Río Negro, que como señaló Justo Arosemena había establecido «principios nuevos, contradictorios e impracticables».[3]

Las dos décadas que se abren con la puesta en vigor de la constitución de Río Negro representa el desalojó del poder, durante dos décadas, de los conservadores, así como el triunfo absoluto de los intereses librecambistas. Ello favoreció el crecimiento de las exportaciones de tabaco, que alcanzaron su máximo en 1868-1869.

El *boom* tabacalero contribuyó a la hegemonía del Partido Radical. Esta agrupación, fundada por Santiago Pérez, a partir de antiguos liberales *gólgotas* que desaprobaban el control establecido por Mosquera sobre el viejo liberalismo, alcanzaría una extraordinaria influencia en el país.

La propia convención de Río Negro escogió a Mosquera como presidente hasta 1864. Las contradicciones del viejo caudillo militar y los radicales se exacerbaron tras el retorno de Mosquera al poder el 1 de abril de 1866, pues el Congreso, dominado por sus opositores, se negaba a avalar un empréstito con Inglaterra. La disolución del Legislativo llevó al golpe de Estado del general Santos Acosta (23 de

[2] Ibídem, p. 150.
[3] José Alejandro Bermúdez, *Compendio de historia de Colombia*, Bogotá, Editorial Cromos, 1934, p. 227.

mayo de 1867), que dejó a Mosquera sin otra alternativa que la de marchar al exilio.

A partir de ese momento, se impuso la hegemonía radical sin ningún contrapeso. Miembros de esta agrupación se repartieron sucesivamente la presidencia, la mayoría de ellos elegidos por períodos de dos años, más algunos otros que ocuparon la primera magistratura por menos tiempo, en condición de designados. La imposición de la hegemonía radical a principios de la década del setenta tuvo a su favor también la relativa bonanza económica producida por las crecientes exportaciones de añil y quina, que junto a las de tabaco, permitió alcanzar cierta estabilidad interna.

Prueba de ello es que durante el bienio presidencial de Murillo Toro, iniciado en 1872, el valor de las exportaciones colombianas pasó de 7.5 millones de pesos a 12 millones de pesos. A este crecimiento, se sumaron los efectos de nuevas inversiones directas del capital inglés, especialmente en telégrafos, ferrocarriles y otros servicios públicos, entre ellos el alumbrado de gas de la ciudad de Bogotá.

A mediados del bienio presidencial de Santiago Pérez, las exportaciones colombianas empezaron a mermar, afectadas por la crisis mundial capitalista de 1875, lo cual creó una difícil situación económica que estimuló nuevos levantamientos armados conservadores. Detrás de esas rebeliones estaba la marcada declinación de la exportación de tabaco, producto que iba siendo sustituido en la economía colombiana por la quina –que alcanzaría su máximo histórico en 1881–, el añil y, sobre todo, el café.

Elegido en 1880 por una coalición de liberales independientes, Rafael Núñez hizo de los conservadores los únicos beneficiarios del cambio de poder y de la nueva constitución (1886). Sin embargo, su controvertida política no se caracterizó por un respaldo del inmovilismo económico: la llamada «regeneración» de Núñez buscó racionalizar los mecanismos de dominación de las clases privilegiadas y, apoyada por la expansión cafetalera promovida por pequeños y medianos agricultores mestizos, se empeñó en construir un nuevo sistema ferroviario, modernizar el sistema bancario y proteger algunas producciones nacionales.

Núñez fue escogido de nuevo para la primera magistratura en los períodos de 1886 a 1892 y de 1892 a 1898. Aunque en esos no siempre ejerció directamente la presidencia, fue el verdadero poder tras el trono durante las postrimerías del siglo XX.

Ezequiel Zamora y la guerra federal venezolana

Tan poderoso como en Nueva Granada a mediados del siglo XIX, el movimiento popular venezolano gestado al calor de la disputa liberal-conservadora no llegó a crear sus propias organizaciones, como lo hicieron los artesanos de Bogotá, ni a definir sobre bases programáticas un plan concreto de reivindicaciones. En este sentido, los sectores rurales desposeídos dependían, de forma mucho más directa que los urbanos, de los caudillos militares, aun cuando desde 1840 se había vertebrado el partido liberal venezolano, encabezado por Tomás Lander, José Manuel García, Manuel María Echeandia y Antonio Leocadio Guzmán.

Las dificultades de la economía de Venezuela, que desde los años cuarenta dependía en lo fundamental de las exportaciones de café, para adaptarse a las oscilaciones del mercado por la crisis del sistema esclavista, llevaron a fines de los años cuarenta a poner punto final a la larga hegemonía conservadora. El viejo caudillo José Antonio Páez, conocido antaño como el *León del Apure* cuando combatía a las órdenes de Bolívar, era hasta entonces la figura dominante del escenario venezolano, y con el apoyo de la aristocracia conservadora ocupó directamente el poder de 1830 a 1835 y de 1839 a 1847.

Para deshacer la perniciosa influencia de Páez, el popular publicista liberal, Antonio Leocadio Guzmán, se apoyó en el presidente José Tadeo Monagas, también un antiguo alto oficial de la independencia, para liquidar la avasalladora influencia del *León del Apure* en Venezuela. Empujado a la rebelión y derrotado en su intento restaurador (1849), Páez debió exiliarse.

Dos años después, José Tadeo Monagas fue sustituido en la primera magistratura por su hermano José Gregorio, por lo que el dominio de esta verdadera dinastía familiar se mantuvo hasta 1858,

pues el primero regresó a la presidencia en 1855. Fue entonces que estalló la llamada revolución de marzo, encabezada por el general Julián Castro, con el concurso de jefes liberales como José Laurencio Silva y conservadores como León de Febres Cordero, que sacó a los Monagas del poder.

Una vez en la presidencia, Castro persiguió con saña a los liberales, obligados a expatriarse, entre ellos Ezequiel Zamora, creando además las condiciones para el retorno al país y al gobierno en 1861 de Páez. Los intentos del *León del Apure* por prolongar el orden conservador con una nueva constitución frente a la rebelión del liberalismo *amarillo* (federalista), radicalizaron la lucha, la cual se transformó en una masiva sublevación de los desheredados del campo.

La revolución federalista, iniciada el 20 de febrero de 1859, se convirtió en una sangrienta guerra de cinco años de duración contra el predominio del centralismo conservador. Su jefe más popular, el general Ezequiel Zamora, que procedente de Curazao desembarcó el 23 de febrero de ese año en Coro, de inmediato se perfiló como el líder natural de los campesinos pobres y llaneros, que reclamaban una reforma agraria y la disminución de impuestos.

Desde la costa venezolana, Zamora emprendió una ofensiva militar como Jefe de Operaciones de Occidente, en dirección al centro del país y de respaldo a su cuñado, Juan Crisóstomo Falcón, proclamado primer jefe del movimiento federalista nacional. Entre las metas de la revolución federalista, enfilada por Zamora contra los privilegios de la oligarquía conservadora, se incluía la libertad de cultos, de prensa, abolición de la pena de muerte, disminución de aranceles de aduana (25%), ratificación del fin de la esclavitud –que había sido abolida en 1854– y eliminación de la prisión por deudas.

Después del asesinato de Zamora, ocurrido en enero de 1860, durante el asedio sobre San Carlos, el rumbo de la revolución liberal se moderó. Ello fue resultado de la conducción del propio Falcón, Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio, y Monagas, representantes de los terratenientes, la burguesía urbana y los militares.

El 24 de abril de 1863, Guzmán Blanco firmaba el Tratado de Coche, en nombre del general Falcón, cabeza del movimiento

federalista nacional. Los acuerdos, que pusieron fin a la larga y costosa guerra civil, permitieron establecer los Estados Unidos de Venezuela y a Guzmán, representante del ala terrateniente del liberalismo, escalar la vicepresidencia, con lo que el centro del poder pasó de las élites orientales a las occidentales.

Después de los gobiernos de Falcón, de 1863 a 1868, y de José Ruperto Monagas, entre 1868 y 1870, se hizo cargo de la primera magistratura Guzmán Blanco, quien estableció una dictadura hasta 1888. Apoyado en un pacto de caudillos regionales, su entretenimiento favorito era coleccionar objetos de arte y levantarse estatuas, derribadas por sus opositores cada vez que emprendía uno de sus frecuentes viajes a Europa.

Fundamentado en un discurso liberal positivista y en la defensa formal del federalismo, detrás del federalismo de Guzmán Blanco se escondía el verdadero rostro centralista de su régimen. Durante sus mandatos, Guzmán Blanco creó una extensa burocracia, realizó una reforma educativa, endeudó y consolidó la condición de Caracas como capital nacional, como parte de un proyecto modernizador de la nación.

La reforma liberal radical de Benito Juárez en México

En tierra mexicana, el último mandato del caudillo Antonio López de Santa Anna, sostenido por el clero y los grandes terratenientes señoriales, no duraría mucho tiempo, pues fue barrido por la revolución de Ayutla, enfilada contra el orden conservador y el viejo régimen socioeconómico precapitalista. Los emergentes sectores liberales, integrados por la naciente burguesía agraria y comercial y, sobre todo, por campesinos, intelectuales, artesanos y pequeños mercaderes, pretendían con el derrocamiento de Santa Anna transformar esa sociedad atrasada, heredada de la época colonial y hacer avanzar las relaciones capitalistas.

El esfuerzo renovador se había materializado –y frustrado– en dos oportunidades (1833-1834 y 1846-1847), bajo la dirección de

Valentín Gómez Farías, padre de la llamada primera reforma. Pero el éxito liberal solo se vino a alcanzar a mediados del siglo XIX, cuando se generalizó la oposición al gobierno conservador y autoritario de Santa Anna y la correlación de fuerzas se inclinó a los grupos burgueses emergentes.

El movimiento revolucionario que prendió en todo el territorio mexicano logró estructurarse tras el plan de Ayutla, emitido el primero de marzo de 1854. La sublevación liberal estaba encabezada por el prestigioso general de la independencia Juan Álvarez, viejo luchador de la tierra caliente, y por el coronel Ignacio Comonfort. Muy pronto la rebelión abarcó todo el territorio nacional, hasta obligar a huir al dictador Santa Anna el 18 de agosto de 1855.

Así se inició el gobierno provisional de Juan Álvarez. El caudillo sureño formó su gabinete ministerial con miembros prominentes del ala izquierda del Partido Liberal, los llamados *puros*: Benito Juárez, Melchor Ocampo y Miguel Lerdo de Tejada.

Este sector radical del liberalismo mexicano, vinculado a las masas populares, aspiraba a limitar el poderío de la Iglesia católica y a convertir al país en una república democrático-burguesa, liquidando los obstáculos al desarrollo capitalista. Entre sus planes estaba también la sustitución del ejército tradicional, baluarte de la reacción y pesada carga sobre el exhausto presupuesto estatal, por una modesta milicia.

Algunos de los *puros* eran incluso partidarios de prohibir el latifundio y defendían la extensión de la pequeña propiedad campesina. Se diferenciaban de los liberales moderados –naciente burguesía, funcionarios acomodados y latifundistas y grandes comerciantes–, en que estos solo pretendían realizar ciertas reformas de tipo burgués –supresión de corporaciones, aduanas interiores, estancos y algunas medidas contra el poderío del clero– que les crearan mejores posibilidades para sus actividades económicas y financieras, sin entrar en abierto conflicto con las fuerzas conservadoras.

Desde el principio del gobierno de Álvarez se evidenció que los liberales radicales estaban resueltos a llevar adelante su programa de reformas democráticas, que incluía profundas trasformaciones económicas y sociales. El 22 de noviembre de 1855 esto se confirmó

cuando Benito Juárez, al frente de la Secretaría de Justicia y Negocios Eclesiásticos, hizo aprobar un decreto que suprimía los fueros y privilegios del clero y los militares.

Era la primera de las leyes de reforma. La medida, denominada «ley Juárez», levantó gran revuelo entre sacerdotes y oficiales del ejército. Cuando Juárez, además, pretendió disminuir los efectivos militares, el presidente Álvarez no pudo resistir las críticas a su gobierno y, presionado por el ala derecha del Partido Liberal, dimitió el 11 de diciembre.

En lugar de Álvarez ocupó entonces la presidencia Comonfort, hasta entonces su ministro de guerra, destacado liberal de tendencia moderada. Durante su gobierno, sin embargo, se promulgó la segunda de las leyes de reforma, la «ley Lerdo», del 28 de junio de 1855.

El decreto, elaborado por el secretario de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada, establecía la desamortización de todos los bienes del clero y las colectividades civiles. Su objetivo era entregar las tierras eclesiásticas, protegidas por las «manos muertas», a los que las tenían en arriendo o a los mejores postores en subastas públicas. Con ello se pondrían en circulación las extensas propiedades territoriales de la Iglesia.

Vale la pena aclarar que la ley de desamortización no expropiaba, sino tan solo obligaba a vender las tierras, no así los edificios y demás bienes, que permanecerían en poder del clero. La aplicación de la «ley Lerdo» tendría como resultado que la mayor parte de las propiedades eclesiásticas fueran a parar a manos de la naciente burguesía, los latifundistas y grandes comerciantes, y no a los campesinos sin tierras. Por otro lado, el decreto facilitó a largo plazo el despojo de las comunidades indígenas, proceso que se aceleraría a fines del siglo XIX.

Entretanto, tuvo lugar la convención constituyente, cuyas sesiones se celebraron del 14 de febrero de 1856 al 5 de febrero de 1857. La asamblea, controlada por los liberales, concluyó sus labores con la emisión de una nueva constitución, que fue aprobada en forma entusiasta por los diputados radicales del liberalismo: Valentín Gómez Farías –que la consideró su testamento político–, Ponciano Arriaga, José María Mata, Melchor Ocampo y otros.

La nueva carta fundamental legalizaba el régimen liberal y recogía los postulados más avanzados del programa de ese partido. Se establecían libertades democráticas, se derogaban los títulos hereditarios y privilegios, se ratificaba la abolición de la esclavitud –decretada en 1829 por el presidente Guerrero–, se suprimía la servidumbre indígena, los impuestos y gravámenes feudales y además, se prohibía a la Iglesia poseer bienes raíces.

La aprobación de la constitución de 1857 y la aplicación de la «ley Lerdo» activaron la vida económica del país, poniendo en manos de la burguesía los antiguos bienes del clero. La transformación de los inmensos feudos de la Iglesia en propiedad civil, junto a las diversas reformas realizadas al vetusto régimen socioeconómico, creó las premisas para el avance del capitalismo en México.

Al amparo de la nueva carta fundamental, Ignacio Comonfort fue elegido presidente constitucional en septiembre de 1857. A su vez Benito Juárez era también escogido para encabezar la Suprema Corte de Justicia, cargo que equivalía, según los preceptos de la constitución de 1857, a la vicepresidencia de la república. Al mismo tiempo, quedó organizado el Congreso Nacional, dominado por los diputados liberales.

En esas condiciones, la reacción clerical conservadora acogió con desagrado la ley básica y los obispos se dedicaron a excomulgar a todo el que jurara la constitución. El sostenido avance del liberalismo mexicano terminó por provocar el levantamiento armado de los conservadores.

La sublevación más importante estalló el 17 de diciembre de 1857 encabezada por el general Félix Zuloaga, quien enarboló el Plan de Tacubaya. Comonfort, en un desesperado intento por conciliar lo inconciliable, se adhirió a ese documento y dos días después derogó la debatida constitución liberal.

El Congreso Nacional condenó la traición de Comonfort y le retiró su apoyo. Por su parte los conservadores aprovecharon la división de sus contrincantes para desconocer al gobierno liberal y proclamar, el 11 de enero de 1858, al propio Zuloaga como presidente de México. Zuloaga ocuparía ese cargo solo unos días, pues fue reemplazado por el general Miguel Miramón.

Aislado, sin ningún asidero, Comonfort optó entonces por marchar a Estados Unidos. La guerra civil era ya inevitable, pues Benito Juárez, en su condición de vicepresidente de la república, se negó a aceptar el golpe de Estado clerical conservador.

En Querétaro, con el respaldo de varios gobernadores y diputados liberales, Juárez formó su gabinete con Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, León Guzmán y Manuel Ruiz. Acosado por los conservadores que ocupaban la ciudad de México y otros puntos estratégicos, Juárez debió establecer su gobierno en Guanajuato y después en Guadalajara, en donde Guillermo Prieto le salvó la vida ante una intentona sediciosa.

El nuevo presidente de México era un indígena nacido en San Pablo Guelatao, Oaxaca, el 21 de marzo de 1806. Hijo de indios zapotecas, había quedado huérfano a los tres años. Vivió con sus abuelos paternos hasta que fallecieron, y entonces pasó al cuidado de un tío, con quien comenzó el aprendizaje del español. Fue pastor de ovejas.

Juárez asistió a la escuela municipal y después continuó estudios en el seminario gracias al respaldo del fraile Antonio de Salanueva. Entre 1825 y 1828 terminó cursos de gramática latina, filosofía escolástica y teología moral, pero cuando estaba a punto de ordenarse sacerdote se inscribió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca (1829), y en 1834 se graduó de abogado.

Formó parte del grupo de liberales oaxaqueños que encabezaba Miguel Méndez, un indígena de la sierra. Fue electo regidor del ayuntamiento en 1831 y diputado a la legislatura local, donde propuso confiscar los antiguos bienes de Hernán Cortés en beneficio del Estado.

A fines de 1834, siendo magistrado del tribunal superior de justicia en Oaxaca, Juárez defendió a los habitantes de Loxicha frente a los abusos del párroco, debido a lo cual debió abandonar las actividades públicas. A partir de 1841 fue juez civil y de hacienda.

En 1843 Juárez contrajo matrimonio con Margarita Maza y al año siguiente fue secretario de Gobierno en la administración de Oaxaca, puesto que abandonó en protesta por encausar a los que se negaban a pagar el diezmo eclesiástico. En 1845 se hizo cargo de la fiscalía en el tribunal de justicia y luego compartió el gobierno del

Estado. Diputado federal (1846-1847) en el período de la lucha contra la invasión norteamericana a México, fue después gobernador interino de Oaxaca, cargo en el que resultó reelecto.

Juárez ocupó la rectoría del Instituto de Ciencias y Arte y volvió a su labor de abogado, pero en 1853, al ocupar el gobierno nacional el viejo dictador Santa Anna, fue detenido y enviado prisionero a Xalapa, después a San Juan de Ulúa y finalmente expulsado a La Habana. De la capital cubana pasó a Nueva Orleans, donde se vinculó a otros liberales expatriados.

En Estados Unidos trabajó en una imprenta y fue torcedor de tabacos. Protestó públicamente por la entrega del territorio de La Mesilla a los norteamericanos por parte de Santa Anna y, tras la proclamación del Plan de Ayutla, se incorporó a la revolución liberal. Al comienzo de la Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma, los conservadores estaban mejor preparados para la contienda, pues no solo disfrutaban del respaldo del clero y los terratenientes, sino que además tenían jefes militares de experiencia como Miramón, Leonardo Márquez y Tomás Mejía.

Sin embargo, los liberales contaban con la participación de las masas populares, lo que les daba una fuerza incontenible, a pesar de que su ejército era dirigido por oficiales improvisados: Santos Degollado, Jesús González Ortega, Ignacio Zaragoza, Porfirio Díaz y Mariano Escobedo. A la larga, los liberales lograron controlar las ricas zonas del norte y el estratégico puerto de Veracruz –donde Juárez situó la sede de su gobierno en mayo de 1858, luego de una larga travesía (Acapulco, Panamá, La Habana y Nueva Orleans)–, lo que no solo le permitió mantener las exportaciones mexicanas, sino también obtener fondos para la guerra gracias a las rentas de aduana.

Un factor decisivo del triunfo liberal fue sin duda la promulgación, en medio de la contienda bélica, de las «grandes leyes de reforma». Con esos decretos revolucionarios se perseguía privar a la Iglesia y a los conservadores de recursos, radicalizando la lucha para ganar aliados entre los sectores sociales beneficiados con las propiedades confiscadas.

Las grandes leyes de reforma, dictadas en Veracruz, entre el 12 de julio de 1859 y el 4 de diciembre de 1860, establecían la

nacionalización sin indemnización de todos los bienes eclesiásticos, creaban el registro civil, disponían la libertad de cultos y la secularización de los cementerios. En dos palabras, se hacía efectiva la separación de la Iglesia del Estado, adoptándose una legislación progresista de claro sentido anticlerical y antifeudal.

Debe mencionarse que hasta la aplicación de la reforma, la Iglesia poseía en México más de la mitad de las tierras de cultivo y las que no le pertenecían, pagaban cuantiosos censos o capellanías o estaban en gran parte en manos de los terratenientes señoriales. Estos hacendados, que constituían una especie de aristocracia enfeudada, estaban vinculados al clero por las leyes canónicas y mediante el vínculo de las deudas.

La última batalla de la Guerra de Reforma se produjo en Calpulálpam, el 22 de diciembre de 1860. Allí las fuerzas liberales, guiadas por el general González Ortega, se impusieron en forma rotunda sobre las tropas de Miramón.

A partir de esta aplastante derrota, la resistencia conservadora se quebró y quedó reducida a bandas aisladas que bajo la dirección de Zuloaga, Márquez y Mejía –pues Miramón abandonó México–, se dedicaron al pillaje y al asesinato. Dramático ejemplo de estas fechorías fueron los crímenes cometidos en junio de 1861, que costaron la vida a los destacados liberales Melchor Ocampo, Santos Degollado y Leandro Valle.

Invasión francesa a México y derrota del imperio de Maximiliano

El 11 de enero de 1861 el triunfo liberal en México se confirmó con la entrada del presidente Juárez en la capital. Gracias a su enorme popularidad, sobre todo entre la población humilde, Juárez fue elegido primer mandatario de México para un nuevo período.

La guerra había terminado, pero el país estaba en ruinas. La situación de la economía era desastrosa. El gobierno no tenía recursos ni medios para emprender la reconstrucción. En tales circunstancias, el presidente Juárez se vio obligado a dictar una moratoria por

dos años en el pago de la deuda externa, ascendente a 70 millones de pesos con Inglaterra, 9 con España y 3 con Francia.

A esas cifras se debe añadir los 15 millones de pesos reclamados por el banquero suizo Jecker, asociado a los capitalistas parisinos. En virtud de estas deudas, las administraciones nacionales tenían gravado sus ingresos, por lo que el 25% de todas las recaudaciones fiscales por ese concepto se destinaban al pago de los empréstitos y reclamaciones foráneas.

En respuesta a esa medida soberana de México, España, Francia e Inglaterra decidieron, el 31 de octubre de 1861, formar una alianza militar para obligar por la fuerza al gobierno mexicano a pagar la deuda externa y otras exigencias monetarias. La negativa del presidente Juárez a aceptar las reclamaciones europeas, muchas de las cuales eran compromisos contraídos por el derrotado gobierno conservador de Miramón, llevaron a las tres potencias europeas a seguir adelante con los planes de agresión a México.

Así se organizó una expedición militar tripartita, a la que Carlos Marx calificó de «nueva Santa Alianza» y que definió como «una de las empresas más monstruosas que se haya registrado en los anales de la historia universal.» El propio Marx añadió que Inglaterra, al organizar esta aventura «envía al partido eclesiástico que está exhalando suspiros, nuevos refuerzos desde Europa».[4]

En esa coyuntura, a fines de 1861 y principios de 1862, apareció frente a Veracruz una poderosa flota de guerra compuesta por más de 38 buques artillados, al mando del francés Jaurien de la Graviere, el español Juan Prim y el inglés sir Charles Wyke. Fue en medio de ese clima hostil en el que se desenvolvieron las conversaciones oficiales entre el gobierno de Juárez y los invasores extranjeros, en el pueblecito de La Soledad, cerca de Veracruz.

En esa localidad se firmaron los convenios preliminares el 19 de febrero de 1862, verdadero triunfo de la diplomacia mexicana, que comprometió a las fuerzas europeas a retirarse. A pesar de lo acordado en La Soledad, las tropas de Napoleón III se negaron a abandonar el país, no obstante el retorno a Europa del cuerpo expedicionario inglés y español.

[4] A. Belenki, *La intervención extranjera en México, 1861-1867*, México, Ediciones de Cultura Popular, 1976, p. 56.

Para ello el emperador francés se valió de la abierta complicidad de los conservadores mexicanos, quienes establecieron el 20 de abril de 1862 una comisión negociadora encabezada por Juan Nepomuceno Almonte, quien solicitó apoyo a Francia. Mediante esta jugarreta, Napoleón III pretendió, como parte de su política expansionista que ya lo había llevado a Argelia e Indochina, convertir a México en una especie de protectorado francés, para explotar en forma directa sus abundantes riquezas y recursos naturales.

Unos días después de esos sucesos comenzó la guerra del pueblo mexicano para expulsar de su suelo al invasor extranjero. La ofensiva del ejército francés, dirigida por el general Lorencez, se estrelló contra la tenaz resistencia patriota en Puebla el 5 de mayo de 1862, encabezada por Ignacio Zaragoza.

La inesperada derrota de las fuerzas de Napoleón III retardó durante todo un año el avance colonialista en México, pues Puebla no se rindió hasta el 17 de mayo de 1863, cuando ya los franceses habían desembarcado refuerzos calculados en 30 mil hombres, al mando del general Forey. Perdida esta plaza, el presidente Juárez se vio forzado a abandonar la capital, emprendiendo un largo peregrinar lleno de dificultades que lo llevó sucesivamente a San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y, por último, a El Paso, en la frontera con Estados Unidos.

Las tropas mexicanas que se enfrentaban a la ofensiva colonialista estaban encabezadas por los generales González Ortega, Manuel Doblado e Ignacio Comonfort, quien se había reincorporado al ejército para defender la patria agredida. El ex presidente liberal murió en combate, heroicamente, luchando contra el invasor extranjero, el 9 de junio de 1863. Mientras, los franceses, que contaban con fuerzas y armamentos muy superiores al de los mexicanos, se iban apoderando de las principales ciudades y puertos.

Una vez ocupada la capital, los invasores europeos organizaron un gobierno provisional, en el cual figuraban los conservadores Almonte, Mariano Salas y el arzobispo de México Pelagio Antonio de Labastida. A la vez se integraba una aristocrática junta de notables con 215 personajes de la más rancia oligarquía mexicana. Estos órganos ofrecieron la base legal para restablecer la monarquía

–vieja aspiración conservadora desde el fracaso del efímero imperio de Iturbide– y ofrecer el trono de México a un hermano del emperador de Austria, Francisco José: el archiduque Maximiliano de Habsburgo.

El titulado emperador Maximiliano desembarcó en Veracruz el 28 de mayo de 1864. Meses antes había firmado con Napoleón III el Tratado de Miramar, en el cual comprometía a México a pagar una deuda a Francia de 346 millones de francos, además de sufragar todos los gastos en que incurrieran los franceses durante su aventura mexicana. Maximiliano también contrajo en Londres un empréstito por valor de 8 millones de libras esterlinas, préstamo y deuda que el presidente Juárez, a nombre de la república, desconoció de inmediato.

La política del imperio de Maximiliano fue muy compleja. Si bien la constitución monárquica, publicada el 10 de abril de 1865, satisfizo algunos de los objetivos de los conservadores mexicanos, ella no fue capaz de dar marcha atrás a las leyes de reforma, ya que esto hubiera significado enemistarse con todos los ricos propietarios mexicanos que habían adquirido los antiguos bienes de la Iglesia. Además, esa moderna legislación estaba más en consonancia con la mentalidad e intereses de la burguesía francesa a quienes, en última instancia, respondía Maximiliano.

Ello le enajenó al emperador parte del apoyo de los terratenientes señoriales mexicanos y, sobre todo, del clero, sin darle a cambio el respaldo que esperaba de los liberales moderados, pues solo unos cuantos de estos se plegaron al imperio. De manera que Maximiliano se sostuvo, en la práctica, gracias a las bayonetas francesas del mariscal Bazaine, nuevo jefe de las tropas invasoras.

La impetuosa lucha de liberación nacional del pueblo mexicano hicieron valederas las premonitorias palabras de Juárez apenas comenzada la resistencia nacional contra los invasores. El 28 de agosto de 1862 había declarado: «sean cuales fueren los elementos que se empleen contra nosotros, no logrará ese Gobierno la sumisión de los mexicanos, ni tendrán sus ejércitos un solo día de paz».[5]

[5] *Benito Juárez: pensamiento y acción*, La Habana, Casa de las Américas, 1975, p. 127.

Tras la pérdida de la capital, el presidente Juárez se vio forzado, con todo su gobierno, a emprender un azaroso peregrinar, atiborrado de peligros y amenazas, en unos humildes carruajes, que lo llevó sucesivamente a San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y, por último, a El Paso, en la frontera con Estados Unidos. El obligado periplo tenía por objetivo impedir la aniquilación o captura por los franceses del núcleo central de poder republicano, cuya sobrevivencia simbolizaba el mantenimiento de la resistencia frente al ocupante foráneo.

Cuando el presidente Juárez marchaba rumbo al norte, con los enemigos pisándole los talones, escribió a un íntimo amigo sobre el significado que en estas dramáticas circunstancias había adquirido su figura indoblegable para la causa nacional. «Dondequiera que yo esté, sobre la cima de una montaña, o en el fondo de una barranca, abandonado de todos, quizás, no dejaré de empuñar la bandera de la República hasta el día del triunfo.»[6]

De esos dramáticos tiempos datan una importante medida adoptada por el presidente Juárez: el 8 de noviembre de 1865 prolongó el período presidencial para evitar la división en el campo patriota. Al decreto reeleccionista se opusieron el ministro liberal Guillermo Prieto y el general González Ortega, que exigían, sin comprender la gravedad de aquellas circunstancias, elecciones para mantener la periodicidad regular en la primera magistratura de la república.

También la guerra contra el invasor extranjero, como ocurriera con anterioridad con la de reforma, fue aprovechada por Juárez para profundizar en su programa revolucionario y democrático. En los años duros de la lucha contra los invasores franceses y el imperio de Maximiliano, Juárez decretó numerosas confiscaciones contra los traidores de la patria, amparadas en su decreto del 25 de enero de 1862, con lo que afectó propiedades del sector más conservador de la aristocracia señorial o incluso de algunos terratenientes liberales moderados.

Cuidadoso en sus decisiones y respetuoso de la legalidad, el mandatario mexicano procedió siempre con cautela y sus más

[6] Ralph Roeder, *Juárez y su México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, p. 881.

audaces decisiones, enfiladas contra el viejo orden heredado de la época colonial, se produjeron en el momento preciso, para no comprometer la defensa de la nación. En su ideario se entrecruzaban dos concepciones, el radicalismo democrático y una filosofía liberal que le proporcionaba la estructura racional para defender, desde posiciones realistas, los intereses populares. A diferencia de otros gobernantes liberales latinoamericanos de su generación, que se proponían educar al pueblo –como el argentino Domingo Faustino Sarmiento, imbuido de una concepción elitista–, el adusto presidente indio de México pretendía liberarlo de la miseria, los abusos y la ignorancia.

Al mismo tiempo, se desarrollaba de manera impetuosa la lucha de liberación nacional del pueblo mexicano. Los patriotas, encabezados ahora por el general Mariano Escobedo, expulsaron a los invasores de casi todo el norte y buena parte del sur desde el verano de 1866.

Al incontenible avance de las fuerzas de Escobedo se sumó la compleja evolución política internacional. La posición de Napoleón III se debilitaba en virtud de los enormes gastos que provocaba la aventura mexicana y por la creciente amenaza que significaba para Francia la unificación alemana preconizada por Bismarck.

Eran las vísperas de la guerra franco-prusiana y Napoleón III necesitaba concentrar todas sus fuerzas en Europa. Además la costosa contienda de ultramar se había convertido en una guerra impopular y tanto la prensa como la intelectualidad francesa, encabezada por el famoso escritor Víctor Hugo, la condenaban públicamente.

A esto debe añadirse, que desde 1865 la presión diplomática de Estados Unidos arreció, una vez terminada la Guerra de Secesión –contienda que había mantenido a este país al margen de los asuntos de política exterior–, pues el gobierno norteamericano veía con preocupación la presencia francesa en su tradicional zona de influencia. Por todas estas razones, Napoleón III se vio obligado, el 10 de enero de 1867, a ordenar la retirada inmediata de todas sus fuerzas destacadas en México.

En estas condiciones, los pocos partidarios que le quedaban a Maximiliano, luego de la evacuación francesa, quedaron aislados en

la capital, Querétaro y Veracruz. En la ciudad de México el general Porfirio Díaz encerró en el perímetro urbano a Márquez y al liberal traidor Santiago Vidaurre, jefes al servicio del imperio. Por su parte, Escobedo puso sitio a Querétaro, donde se habían refugiado los generales Miramón y Mejía, así como el propio emperador.

El 15 de mayo de 1867, las fuerzas monárquicas fueron derrotadas. Un mes después eran fusilados en el cerro de las Campanas, Miramón, Mejía y Maximiliano, mientras el general Díaz liberaba la capital. La guerra había concluido.

El 15 de julio el presidente Juárez entraba triunfalmente en la capital, por segunda vez en su vida, acompañado de sus fieles ministros Lerdo de Tejada y José María Iglesias. La victoria definitiva del presidente mexicano contra los colonialistas franceses y sus aliados conservadores consolidó la existencia de México como nación independiente y confirmó la vigencia de las leyes anticlericales y antifeudales de la reforma liberal.

Reformismo liberal en Guatemala y sus repercusiones en Centroamérica

En la América Central los resultados de la reforma liberal fueron mucho más modestos que en México. El proceso de cambio contó en Guatemala con un paladín tan enérgico como Justo Rufino Barrios, y en varios países vecinos con el concurso de algunos de sus discípulos: Marco Aurelio Soto en Honduras (1876-1883), Rafael Zaldívar en El Salvador (1876-1885) y José Santos Zelaya en Nicaragua (1893-1909).

En los años duros de la dictadura de Rafael Carrera –quien murió el 14 de abril de 1865 ostentando los títulos de presidente y capitán general vitalicio de Guatemala–, la economía y la sociedad guatemalteca registraron sensibles transformaciones. El precio de la grana, hasta entonces principal producto de exportación, cayó en los mercados internacionales debido a la invención de los tintes artificiales.

En forma paralela, cobraba fuerza la producción cafetalera, la que no tardaría en ocupar el privilegiado lugar de la grana en las

exportaciones. De esta forma, entre 1870 y 1880, el cultivo y la venta del café crecerían en un 150%. Alrededor de esta actividad se fue formando una numerosa clase de agro exportadores, en su mayoría mestizos de ideología liberal, que pronto rivalizaría por el control político y económico de la sociedad con los sectores hegemónicos tradicionales, o sea, la aristocracia señorial conservadora y el clero.

Los cambios estructurales no tardaron en repercutir en el escenario político. En 1866, tras la muerte de Carrera, los liberales volvieron a levantarse en armas contra el nuevo dictador, mariscal Vicente Cerna, quien había ocupado el Ejecutivo luego del breve interinato del aristócrata Pedro Aycinena.

Una vez más, los liberales fueron aplastados y tuvieron que huir a México, en donde fueron calurosamente acogidos por el presidente Benito Juárez. Desde allí, pequeñas partidas rebeldes, a cuya vanguardia pertenecía Justo Rufino Barrios, se encargaron de mantener en jaque al gobierno de Cerna por medio de incesantes incursiones fronterizas.

A esa altura del conflicto, el final del régimen conservador ya no estaba lejano. En 1869 el dictador Cerna se hizo reelegir en medio de una grave crisis económica y financiera, cuando el café aún no lograba ocupar el lugar de la grana en las recaudaciones fiscales y la deuda externa –el primer empréstito con una casa inglesa databa de 1825– ascendía a un millón de libras esterlinas.

Estos factores, unido a la expulsión del diputado Miguel García Granados, por sus virulentos ataques al gobierno, empujaron a la oposición al sector aburguesado de los grandes hacendados. Esta situación allanó el camino para la reconciliación de las dos alas del liberalismo guatemalteco.

La última ofensiva militar se inició bajo la dirección de Barrios y Serapio Cruz. Los primeros éxitos se obtuvieron al ocupar diversos pueblos en Huehuetenango, hasta que sufrieron una derrota en Palencia, en enero de 1870, combate en el que fue capturado, muerto y decapitado Cruz.

Entonces las fuerzas liberales se reorganizaron en territorio mexicano y pasaron al contraataque guiadas por Barrios y el general Miguel García Granados. En los primeros meses de 1871 estos

efectivos penetraron de nuevo en Guatemala y lograron el triunfo de Tacaná, que les permitió ocupar San Marcos y Retalhuleu.

Después vencieron el 28 de mayo de 1871 en Laguna Seca y ocuparon Antigua Guatemala. Más tarde se firmó el Acta de Patzicia (Chimaltenango), que dejó constituido un gobierno liberal provisional presidido por García Granados. Al ocupar su viejo bastión de Quezaltenango, los liberales decretaron el libre cultivo del tabaco y la apertura al comercio del puerto de Champerico.

El desenlace de la guerra civil tuvo por teatro a San Lucas Sacatepéquez, en donde luego de varios días de cruentas luchas se impuso el ejército liberal con el auxilio de fuerzas salvadoreñas, el 30 de junio de 1871. La entrada triunfal en la capital se efectuó al día siguiente. Una vez en la ciudad de Guatemala, García Granados dispuso la adopción de ciertas libertades civiles y nombró a Barrios como gobernador militar de la convulsa región de Los Altos.

Desde esta región montañosa, Barrios inició el 2 de agosto la reforma anticlerical con la expulsión de la orden de los jesuitas y la nacionalización de sus bienes. Como era de esperar, este decreto provocó una sublevación, alentada por el clero y el gobierno conservador de Honduras, que obligó a García Granados a ponerse al frente del ejército, mientras Barrios lo sustituía en la jefatura del Estado.

En realidad, la realización de la reforma liberal en Guatemala fue obra del gobierno de Barrios, iniciado el 4 de julio de 1873. Entre sus principales disposiciones se encuentran la consolidación de los bienes procedentes de manos muertas, la secularización de propiedades eclesiásticas, la abolición del censo enfitéutico, el exclaustramiento de religiosas y frailes y el establecimiento del registro civil.

También durante el período de Barrios se variaron los aranceles de aduana y se estableció un gravamen proporcional a las extensiones de tierras. Las principales conquistas liberales fueron recogidas en la constitución de 1879, que entre sus postulados incluía la separación de la Iglesia del Estado.

En sentido general, la reforma de Barrios, en muchos aspectos más moderada que la implantada años antes en México por Juárez, tenía un definido carácter anticlerical y antifeudal, pero solo pudo cumplimentar a medias su papel impulsor de la revolución burguesa

en Guatemala. Si bien las relaciones capitalistas comenzaron a extenderse, se instauró el derecho burgués frente a los privilegios y fueros del viejo régimen feudal-colonial, y el monopolio territorial de la Iglesia fue quebrado, no obstante subsistió, e incluso en algún sentido se amplió, la explotación servil de la población aborigen y el predominio de la gran propiedad terrateniente.

Era la consecuencia directa del débil componente burgués de la reforma guatemalteca, así como también resultado de que las filas liberales estuvieran nutridas de finqueros cafetaleros, interesados solo en una aplicación parcial de las transformaciones propias del capitalismo. Las tierras baldías y las que se le arrebataron a la Iglesia fueron subastadas a los grandes hacendados, que pudieron engrosar las áreas cafetaleras en expansión.

Como parte de ese acelerado proceso de concentración de la propiedad rural, en 1877 fueron afectadas las tierras de comunidades y ejidos indígenas, al ponerse en vigor una concepción burguesa de la tenencia individual del suelo, lo cual determinó que con el paso del tiempo la mayor parte de las áreas campestres estuvieran en manos de los voraces latifundistas. También la abolición del censo enfitéutico despojó a miles de aborígenes y ladinos pobres, que no tenían recursos para adquirir la parcela en usufructo.

Detrás de este proceso masivo de expropiación estaban las necesidades abiertas por el cultivo del café, que a diferencia de la cochinilla solo se extraía del centro y algunos departamentos del oriente de Guatemala. Así las fincas cafetaleras, en manos de los grandes propietarios, se extendieron por casi todo el país, en particular Quezaltenango, San Marcos y Alta Verapaz.

Todavía en la década del sesenta, antes de la reforma liberal, más de la mitad de las mejores tierras se encontraban en manos de las casi mil comunidades indígenas guatemaltecas. El decreto 170, del 8 de enero de 1877, firmado por el presidente Barrios, permitió la privatización y venta de las mejores tierras comunales.

Otro rasgo que distinguió la reforma guatemalteca fue el desarrollo de un tipo de acumulación que en vez de aniquilar las formas serviles las utilizaba en su provecho. El basamento legal para la

explotación de la fuerza de trabajo de los pueblos originarios despojados de sus tierras fue el decreto 177, del 3 de abril de 1877, llamado eufemísticamente Reglamento de Jornaleros –también el 222, del 14 de mayo de 1878, titulado Contra la Vagancia–, el cual estableció la obligación del trabajo en las fincas cafetaleras.

En las haciendas, los indios se endeudaban –a esto se llamaba la *habilitación*–, por lo general con métodos inescrupulosos, convirtiéndose en la práctica en simples peones que recibían un jornal nominal, pero que en rigor era una verdadera servidumbre medieval. Este mecanismo opresivo posibilitó el traslado violento de indígenas del altiplano a las haciendas y dio lugar a la conformación de una numerosa masa de trabajadores forzados, empobrecidos y expropiados, obligados por ley a vincularse a las fincas cafetaleras por medio de relaciones aparentemente capitalistas. Los abusos legales no dejaron de provocar airadas revueltas, como la de los quichés en 1877, y la aparición de guerrillas indígenas como la de Momostenango

Al mismo tiempo, el gobierno liberal guatemalteco dio nuevo impulso al viejo sistema del repartimiento de indios. La población aborigen que milagrosamente logró conservar sus tierras –en particular en el frío altiplano, no apto para el cultivo del café– tenía de todos modos, como en la colonia, que trabajar cierto número de días al año en las haciendas cafetaleras (*mandamientos*). De ahí la gráfica frase del propio presidente Barrios: «Esta fusta es la Constitución con la cual gobierno».[7]

El resultado fue un extraordinario crecimiento de la producción cafetalera, al disponer los finqueros de tierras baratas –baldías, eclesiásticas y las de comunidades–, fuerza de trabajo casi gratuita y buenos precios en el mercado internacional. Para favorecer aún más el avance de la economía agro exportadora, el estado liberal asumió la indispensable tarea de crear una infraestructura adecuada a estas nuevas condiciones.

Fueron habilitados puertos, se construyeron almacenes y caminos, se instalaron telégrafos, alumbrado público y en 1884 se

[7] Héctor Pérez Brignoli, *Breve historia de Centroamérica*, Madrid, Alianza Editorial, 1985, p. 77.

inauguró la línea férrea pionera del país. Primero la capital quedó comunicada por ferrocarril con el Pacífico (San José) –tramo que solo sería concluido en 1908– y el puerto de Champerico en Retalhuleu, para después iniciarse la instalación de las rutas del norte y la costa atlántica.

En gran medida, estas costosas inversiones fueron realizadas por el capital estatal, con el apoyo técnico y financiero de empresas norteamericanas. Ello por supuesto gravó el presupuesto nacional –en 1874 se había fundado el banco nacional–, en un momento en que la deuda inglesa por sí sola consumía el 27% de las recaudaciones de aduana (1882). También por estos años, inmigrantes y capitalistas alemanes iniciaron sus inversiones en plantaciones cafetaleras de Cobán y en la naciente industria eléctrica.

Una de las viejas aspiraciones del movimiento liberal dirigido por Justo Rufino Barrios era el restablecimiento de la unidad centroamericana perdida desde mediados del siglo XIX, aspiración que incluso fue incluida en el texto de la constitución liberal guatemalteca de 1879. Imposibilitado de conseguir este objetivo por la vía pacífica, Barrios decidió imponerla a sus vecinos, pese a la oposición de México y los Estados Unidos.

Con este propósito, y al parecer también para impedir se consumara la entrega de la región canalera de Nicaragua a Estados Unidos, el 28 de febrero de 1885 el presidente guatemalteco declaró restablecida la integración política de América Central e invadió El Salvador. En tierra salvadoreña, Barrios obtuvo las victorias de Coco y San Lorenzo, pero en el combate por Chalchuapa, el 2 de abril de ese año, perdió la vida y sus fuerzas desmoralizadas, al mando de Adolfo Hall, regresaron a Guatemala.

Pese a la inesperada muerte del presidente Barrios, el reformismo liberal terminó por imponerse en toda la región centroamericana, bajo el control de los acaudalados cosecheros de cada país. Ese proceso fue casi coincidente con el rápido avance de la recolonización imperialista de América Latina.

Eloy Alfaro y el cierre del ciclo revolucionario liberal

La última de las revoluciones liberales latinoamericanas triunfó en Ecuador a finales del siglo XIX, lo que puede considerarse el cierre del ciclo reformista abierto a mediados de esa misma centuria. El líder de este proceso fue el general Eloy Alfaro Delgado.

En esta república norandina se había consolidado un acusado dualismo estructural entre las economías de la sierra y la costa, cuyas raíces se perdían en el tiempo. Detrás de las contradicciones entre los grupos dominantes en ambas regiones se escondía el secular atraso socioeconómico y la supervivencia de los viejos privilegios coloniales del clero y los *gamonales* –terratenientes señoriales–, en particular de la más poblada región serrana de Quito.

La naciente burguesía comercial y los plantadores tenían su base principal en Guayaquil y la costa, centros de la economía cacaotera, principal producto de exportación ecuatoriano hasta la tercera década del siglo XX. Los grupos liberales emergentes, nutrido de estos sectores y las capas medias y la intelectualidad, se propusieron transformar aquella sociedad injusta, de contornos precapitalistas, en una moderna y democrática.

Las discrepancias entre liberales y conservadores desembocaron en la revolución de 1895 dirigida por Eloy Alfaro, quien venció a los partidarios del viejo orden patriarcal-clerical que había llegado a sus extremos durante el período hegemónico de Gabriel García Moreno (1860-1875), cuando incluso se estableció una carta magna de tipo confesional excluyente. Gracias al amplio apoyo de *montoneras* –masas de mulatos, negros costeños e indios–, el general Alfaro impuso su concepción liberal-progresista en las avanzadas constituciones de 1897 y 1906, que consagraron la transformación del Ecuador en un país laico al adoptar la separación Iglesia-Estado, la secularización de bienes eclesiásticos y un régimen de libertades públicas y garantías ciudadanas.

En 1908, como parte esencial de su proyecto modernizador, el estadista inauguró el ferrocarril de Guayaquil a Quito, concebido como punto de despegue de un nuevo Ecuador, más vinculado al mundo

exterior. Además, en política internacional dio pasos importantes en favor de la unidad hispanoamericana y la revitalización de la Gran Colombia de Bolívar. Por eso abogó por el internacionalismo liberal, encaminado a promover la independencia de las Antillas españolas, restablecer la Colombia bolivariana y propiciar la alianza militar y política de los revolucionarios latinoamericanos para transformar el viejo orden socio económico y detener la voraz e insaciable penetración foránea.

Además, por sus manifiestas preocupaciones sociales y las críticas al librecambio, al que los liberales de su generación veían como una varita mágica que resolvería el atraso económico de América Latina, el *Viejo Luchador* desbordó el clásico liberalismo predominante en su época, pues devino en verdadero precursor del nacionalismo revolucionario que dominaría el escenario latinoamericano en la primera mitad del siglo XX. Alfaro defendía una nueva concepción liberal, impregnada de contenido social, que se propuso conjugar con el desarrollo nacional sin injerencia foránea, superando las abstractas concepciones ortodoxas de sus correligionarios sobre el *laissez faire* y que, como se sabe, condujeron a la conformación de un capitalismo subdesarrollado y dependiente en Nuestra América. Para avanzar en esa dirección, pensó en la organización de una Dieta de plenipotenciarios de las tres repúblicas norandinas, con el propósito de refundar la Unión Grancolombiana.

Para enfrentar a las poderosas fuerzas conservadoras y a las del emergente imperialismo norteamericano –desde 1898 había comenzado la voraz expansión imperialista de Estados Unidos sobre el continente–, el *Viejo Luchador* firmó el 9 de noviembre de 1900, en su condición de primer mandatario ecuatoriano, un pacto secreto con los presidentes Cipriano Castro, de Venezuela, y José Santos Zelaya de Nicaragua «inspirados por el deseo de precaver á los tres países de todo peligro internacional y de velar colectivamente por la conservación del orden público en cada uno de los tres Estados».[8]

Sin embargo, las reformas liberales y los renovados proyectos bolivarianos de unidad continental, realizados en un contexto

[8] Jorge Núñez Sánchez, «Eloy Alfaro, un revolucionario de Talla Continental», en Ramón Torres Galarza (compilador), *Eloy Alfaro. Memoria insurgente*, Caracas, Fondo Editorial Ipasme, 2011, p. 188.

caracterizado por la política recolonizadora del capital monopolista, no alcanzaron a destruir las ancestrales bases de dominación de las viejas élites y la Iglesia. En esas condiciones, la alianza defensiva de los tres gobiernos liberales nacionalistas, decididos a defender sus intereses patrios frente a los Estados Unidos fracasó.

Prueba de ello, fue que el pacto secreto tripartito no pudo impedir el derrocamiento del presidente Castro en Venezuela en diciembre de 1908, ni tampoco el de Santos Zelaya en Nicaragua justo un año después, quien había negado el derecho de soberanía a Estados Unidos sobre una posible vía canalera por su territorio y rechazado un leonino empréstito norteamericano. Este fue también el principio del fin del propio Eloy Alfaro, sacado del poder a su vez por una revuelta militar financiada por la banca en agosto de 1911.

Estos elementos, unido a la división del liberalismo ecuatoriano promovida por los «notables» de este partido, alarmados por la popularidad y el radicalismo del programa alfarista, crearon un clima de inestabilidad que propició, para evitar su regreso al poder, el brutal asesinato del anciano caudillo en el penal Panóptico de Quito, el 28 de enero de 1912, cuando contaba 70 años de edad. Con la muerte de Alfaro y sus más cercanos colaboradores, en la horrenda masacre quiteña, se cierra el ciclo revolucionario del liberalismo en Ecuador y, en cierto modo, también de toda América Latina.

Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay

La etapa final de las transformaciones liberales en América Latina coincidió con el fin del capitalismo de libre concurrencia y los comienzos de la penetración imperialista, fenómenos que se manifestaron en un grave enfrentamiento fratricida entre cuatro países de la América del Sur. Detrás de ese conflicto actuaban los intereses de los sectores oligárquicos liberales y los apetitos expansionistas de los comerciantes y capitalistas foráneos, afincados en Brasil y Argentina.

La Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay, desarrollada entre 1864 y 1870, fue una de las primeras expresiones de los

intereses de las nacientes potencias capitalistas volcadas brutalmente sobre los países latinoamericanos. La historia de este devastador conflicto, instigado por Inglaterra, tiene que ver con los inicios del reparto del mundo en zonas de influencia por las naciones industrializadas, necesitadas de mercados, fuentes de materias primas y terreno para sus inversiones, a lo que se resistía, casi en solitario, la República de Paraguay, situada en el corazón de la América del Sur.

La política nacionalista paraguaya no era un hecho fortuito, sino la herencia de la postura soberana de la generación revolucionaria que había realizado la independencia, encabezada por el doctor José Gaspar de Francia, *Dictador Supremo* de Paraguay desde 1814 a 1840. El gobierno del doctor Francia –llevado a la literatura por Augusto Roa Bastos en su novela *Yo, el supremo* (1975)– había desalojado a los terratenientes y comerciantes del poder político, proclamado la monopolización estatal del comercio exterior y detenido la libre penetración de las manufacturas y el capital extranjero.

Derrotada una sublevación oligárquica en 1821, el *Dictador Supremo* expropió los bienes de los grandes estancieros y la Iglesia. Las tierras fueron repartidas a los campesinos en parcelas (*chacras*) y con otra parte de ellas se constituyeron las *Estancias de la Patria*, que permanecieron bajo control gubernamental.

La interrupción del comercio exterior, debido a la hostilidad de Buenos Aires –que consideraba a Paraguay provincia suya–, unido a los aranceles proteccionistas implantados por el doctor Francia, facilitó la consolidación de las artesanías, mientras los comerciantes importadores se arruinaban. La entrada al país de capitalistas y negociantes extranjeros fue prohibida y el gobierno se dedicó a apoyar con recursos a los campesinos y artesanos, construyendo un tipo de sociedad igualitarista sin paralelo en el resto del continente.

A la muerte del doctor Francia le sucedió Carlos Antonio López, quien en líneas generales continuó la política de su antecesor. Conseguida la libertad de navegación por el Paraná en 1852, tras la caída de la dictadura de Rosas en Buenos Aires y la instauración de la Confederación Argentina (1852-1862) por Justo José de Urquiza,

el gobierno paraguayo asumió la tarea de organizar una flota propia, buena parte de ella construida en astilleros nacionales.

Fue una etapa de auge económico en la cual, con recursos estatales, se abrió una fundición en Ybicui, se fabricaron barcos de acero, se instaló el telégrafo y comenzó a operar entre 1854 y 1861 el primer ferrocarril del Río de la Plata. López realizó también una serie de reformas políticas liberales, plasmadas en la constitución de 1844, junto a una política exterior más activa que la de su predecesor, que le permitió obtener el reconocimiento internacional; aunque también debió enfrentar agresiones contra la soberanía del país con el propósito de abrir los ríos interiores paraguayos a la libre navegación. Ejemplo de ello fue la amenaza de intervención de la escuadra de Estados Unidos, que en forma agresiva remontó el Paraná en 1858.

En 1862 murió el presidente Carlos Antonio López y le sucedió su hijo Francisco Solano López, que unos años antes había sido nombrado por su padre jefe del ejército. Por esa época, los círculos esclavistas del imperio del Brasil –Paraguay era un verdadero refugio de esclavos fugitivos– y los sectores comerciales liberales de Buenos Aires vinculados al capital británico, llegados al poder a principios de la década del sesenta, comenzaron a fraguar planes para destruir al pujante y singular Estado paraguayo. Dejando a un lado sus viejas rencillas, y con el auspicio de Inglaterra, los gobiernos argentino y brasileño se prepararon para atacar la tierra guaraní, atraídos por sus potencialidades económicas y preocupados ante la creciente fortaleza militar de Paraguay, capaz de variar el precario equilibrio rioplatense que los beneficiaba.

La guerra se precipitó cuando los gobiernos de Argentina y Brasil se lanzaron sobre Uruguay, para sacar del poder al presidente conservador Bernardo Berro, aliado del presidente Solano López, y completar así el cerco tendido al Paraguay, cerrándole toda posible salida fluvial alternativa al Atlántico. Una desesperada petición de ayuda del gobierno de Montevideo, llevó al mandatario paraguayo a demandar respeto a la soberanía de Uruguay. La negativa de Brasil a retirar sus fuerzas del territorio oriental, invadido en octubre de 1864, obligó a Solano López a declarar la guerra al vecino imperio.

En esa coyuntura, el presidente argentino Bartolomé Mitre prohibió el paso por Misiones de las fuerzas paraguayas que marchaban en auxilio de los orientales, mientras que su descarnado apoyo y el de Brasil permitían sustituir en Uruguay al gobierno de Berro por el de Venancio Flores. Ello despejó el camino para establecer, el 1 de mayo de 1865, una triple alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) contra Paraguay, fraguada en secreto bajo la tutela de la diplomacia inglesa.

Cuando las hostilidades se iniciaron, los paraguayos llevaban la iniciativa y la guerra se desarrollaba fuera de sus fronteras, pero después de la derrota de la flota de Paraguay en El Riachuelo, el 12 de junio de 1865, y el desastre militar de Uruguayana (septiembre) la contienda se volcó sobre su territorio. En las grandes batallas de estero Bellaco y Tuyutí (mayo de 1866) –juntas fueron las más mortíferas y monumentales de la historia latinoamericana–, la larga resistencia de Curupaytí y la tenaz defensa de la fortaleza de Humaitá –rendida en 1868–, así como en un sinnúmero de otros encarnizados combates, los soldados paraguayos demostraron arrojo y valor asombrosos.

Caída Humaitá y dominado el río por la moderna flota brasileña, la superioridad en efectivos y en armamento de los aliados se impuso. A pesar de ello, Solano López siguió peleando al frente de sus hombres –al final, niños, ancianos e invalidos– hasta perecer en Cerro Corá combatiendo junto a los últimos restos de su ejército, después de trasladar la capital cuatro veces a lugares cada vez más intrincados.

Como resultado de esta larga y cruenta guerra, desapareció la mitad de la población paraguaya. El triunfo de la coalición permitió a Brasil y Argentina apoderarse de partes del territorio del país vencido, que estuvo ocupado hasta 1876. Los restos de la nación fueron cubiertos con el manto de una república liberal por la constitución de 1870, que concedía a los extranjeros exención de impuestos y derecho a tener propiedades.

Paraguay quedó abierto desde entonces al capital foráneo, sobre todo inglés, que comenzó su penetración mediante empréstitos para «reconstruir» el país y pagar reparaciones de guerra. A cambio, el gobierno paraguayo impuesto por los invasores debió entregar las

mejores tierras y el ferrocarril, convertido en la empresa británica The Paraguay Central Railway Company.

Destruida gran parte de la producción agrícola y restablecida la propiedad latifundista a gran escala, sobre todo a partir de 1885, cuando el régimen conservador legalizó las ventas masivas de los bienes nacionales para cubrir las deudas del fisco, el sector fundamental de la economía paraguaya pasó a ser el de las estancias y plantaciones orientadas a la exportación. A ellos se agregó a finales de siglo la extracción del tanino de quebracho y el aprovechamiento de los bosques por empresas extranjeras. Hasta la yerba mate, el cultivo tradicional, quedó bajo el control de firmas inglesas, brasileñas y argentinas.

Con el regreso de los exiliados, muchos de ellos integrantes de la llamada «Legión Paraguaya», constituida en Buenos Aires y al servicio de los invasores, comenzó la lucha entre dos facciones políticas por controlar el poder. El núcleo de los liberales eran los propios emigrados, que al principio de la ocupación extranjera de Asunción fueron encargados de la administración local, entre ellos José Segundo y Juan José Decoud, Benigno Ferreira, Facundo Machaín y Juan Silvano Godoi.

El otro grupo estaba constituido por antiguos colaboradores de Solano López que había preferido colocarse bajo la protección brasileña. Entre estos sobresalían el general lopista Bernardino Caballero, Cándido Barreira, Cayo Miltos y Rufino Tabeada, que comenzaron a llamarse *colorados*, en oposición a los *azules* o liberales.

Detrás de cada uno de estos bandos estaba la influencia directa de Argentina o Brasil. Al amparo del prestigio de Caballero –uno de los valientes oficiales de Solano López, el último en rendirse a los invasores– los *colorados* se mantuvieron en el poder desde 1874 hasta 1904, cuando una rebelión de las dos facciones liberales, los «cívicos» y los «radicales», obligó al presidente, coronel Juan A. Escurrra, a firmar el Pacto de Pilcomayo y retirarse del gobierno.

A esa altura de los acontecimientos (1886), las dos tendencias principales se habían organizado en partidos políticos: el liberal,

vocero de los intereses de un grupo de latifundistas y comerciantes burgueses, vinculados al capital anglo-argentino, y la Asociación Nacional Republicana, integrada por terratenientes y militares conservadores, de cierta manera subordinados a la influencia de la cancillería brasileña. La dependencia de azules y colorados, como respectivamente se les llamó, de los intereses foráneos era una muestra más de la conversión de Paraguay en una verdadera semicolonia, subordinada a los intereses imperialistas acorde a la nueva etapa en que se adentraba el capitalismo a escala mundial.

Capítulo 8
LA RECOLONIZACIÓN IMPERIALISTA

Desde fines del siglo XIX los países latinoamericanos se desenvolvieron en un contexto histórico mundial caracterizado por la introducción del sistema capitalista metropolitano en su proceso de producción y no solo como se había hecho hasta entonces limitado a la esfera de la circulación. Con esa modificación, las potencias industriales, en respuesta a las necesidades de sus emergentes monopolios, se convirtieron ya no solo en exportadores de mercancías, sino también de capitales, dando origen a una agresiva política recolonizadora.

En forma simultánea, cobraba fuerza la lucha de las grandes potencias industriales por el dominio directo de las fuentes de materias primas y los mercados y por un nuevo reparto del mundo. Ello tuvo lugar en medio de una gran expansión industrial metropolitana, que se prolongaría hasta los inicios de la tercera década del siglo XX. Para América Latina, el establecimiento y consolidación de las relaciones capitalistas había sido consecuencia del extraordinario crecimiento de la economía latifundista y minera de exportación, en función de los intereses de la burguesía no manufacturera y de las necesidades de las grandes potencias industriales.

Ese proceso estuvo favorecido por la capacidad de la burguesía comercial latinoamericana para aprovechar y conservar en su acumulación formas de producción y explotación precapitalistas. Ello explica la liquidación de las artesanías y la sustitución de sus producciones por las mercancías importadas de los países europeos y Estados Unidos.

Estos problemas se relacionan con las limitaciones de las revoluciones burguesas y la formación de un capitalismo dependiente en América Latina. En esta región, el desarrollo capitalista siguió el derrotero impuesto por la oligarquía exportadora asociada y subordinada al capital extranjero, por lo cual no se pudo generar una industria nacional sino un capitalismo deforme.

Penetración imperialista en América Latina

Para la América Latina, los efectos de ese proceso fueron múltiples. La penetración del capital extranjero impuso a este continente una estructura socioeconómica dependiente, en un esquema de división internacional del trabajo en el cual se asignó a los países latinoamericanos la simple condición de vendedores de materias primas y alimentos e importadores de mercancías elaboradas, que terminó por especializarlos en uno o dos rubros básicos de exportación.

Así, unas repúblicas basaron cada vez más sus economías en productos agrícolas de clima templado (carnes y cereales), casos de Argentina y Uruguay; en rubros agrícolas tropicales (azúcar, café, bananos, tabaco, etc.), como Brasil, América Central, Venezuela y el Caribe y, por último, en minerales (plata, cobre, salitre, estaño y petróleo), casos de México, Chile, Perú, Bolivia y desde principios del siglo XX Venezuela. Las bases de esta desigual relación fueron creadas desde fines del siglo XIX mediante el dominio por parte del capital extranjero de la producción, el transporte y la comercialización de los artículos latinoamericanos, liquidando cualquier posibilidad de desarrollo propio.

El fracaso de los intentos de ciertos sectores del liberalismo por vertebrar una revolución «desde abajo», facilitó el triunfo de una vía oligárquica de transición al capitalismo, basada en un compromiso de clase entre las distintas facciones antes en pugna. La venta de las propiedades eclesiásticas, la división de las comunidades indígenas y el crecimiento sin precedentes de la economía agrario-minero exportadora fue, entre otros, factores que sirvieron de fundamento

para liquidar las viejas luchas entre liberales y conservadores, motivadas por sus intereses hasta entonces antagónicos.

Por estos motivos, la definitiva imposición del capitalismo en América Latina no produjo una sustancial modificación de la atrasada estructura agraria, sino que, por el contrario, el latifundio se fortaleció, preservándose muchas características de la economía precapitalista. El aburguesamiento de los viejos terratenientes o la aparición de un nuevo sector de latifundistas asociado a intereses comerciales era reflejo de la gradual transición a un nuevo orden económico y social.

Al imponerse el ala terrateniente del liberalismo frente a los reclamos progresistas de la intelectualidad y de otros sectores, cuyos principales representantes fueron marginados, neutralizados o cooptados por la oligarquía, quedó abierto el camino hacia una modernización restringida de las relaciones socioeconómicas y la creación de un nuevo bloque de poder «nacional». Este hizo suyos los planes de promover la inmigración, introducir los adelantos técnicos de la época y movilizar los recursos productivos en aras de la expansión primario exportadora, pero sin permitir una verdadera democratización de las relaciones socio-políticas y de eliminar –no solo en forma legal– las relaciones precapitalistas, que el bajo nivel de las fuerzas productivas convertía en mecanismo insustituible de la acumulación originaria.

Debido a ello, no puede hablarse, salvo quizás en algunos lugares como Argentina y Uruguay, de un verdadero avance capitalista en la agricultura. Por ello, el crecimiento «hacia fuera» –como lo han denominado los economistas–, que los liberales consideraban la base para el florecimiento de la civilización burguesa en América Latina, terminó por vigorizar el subdesarrollo económico y social.

La homogenización de los terratenientes y la formación de verdaderas oligarquías «nacionales», interesadas en aplicar solo de manera parcial las relaciones de tipo burgués, facilitó el ascenso al poder desde fines del siglo XIX, de los círculos más reaccionarios del liberalismo. Junto a la consolidación del régimen liberal oligárquico –que redujo a su mínima expresión la participación del Estado en la economía– se configuró una «nueva» élite en cada país

latinoamericano, diferente en cierta forma a la precedente por su mayor vinculación y subordinación con el capital extranjero y por su más completa integración a escala nacional.

En consecuencia, se establecieron regímenes de corte liberal-positivista al estilo de Porfirio Díaz en México (1876-1911), Antonio Guzmán Blanco en Venezuela (1870-1889), Lorenzo Latorre en Uruguay (1875-1880), Juan Vicente Gómez en Venezuela (1908-1935), Gerardo Machado en Cuba (1925-1933) y Manuel Estrada Cabrera en Guatemala (1898-1920), este último que sirviera de inspiración a Miguel Ángel Asturias para su extraordinaria novela *El señor presidente* (1946), obra pionera de la narrativa latinoamericana dedicada al tema de las dictaduras.

A esos regímenes puede sumarse, desde esta perspectiva, la *Republica Velha* constituida en Brasil entre 1889 y 1930, tras el derrocamiento del imperio de Pedro II, por el ejército y un grupo de políticos positivistas que proponían un tipo de estado similar en más de un aspecto al implantado por los *científicos* en el México porfirista. La república oligárquico-liberal, extendida por toda América Latina a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, fue despojada de todo vestigio democrático y conformada en íntima asociación con el capital extranjero.

Surgimiento de la clase obrera latinoamericana

Al margen de la estructuración de las oligarquías «nacionales», del vertiginoso crecimiento de las capas medias y la pequeña burguesía, fue a fines del siglo XIX y principios del XX cuando se registró la aparición de los primeros conglomerados apreciables de obreros en América Latina. En gran medida ello fue resultado de las grandes necesidades de fuerza de trabajo calificada que despertaron las masivas construcciones de líneas férreas, sistemas de comunicaciones y transportes, silos de cereales, ingenios de azúcar, explotaciones mineras, frigoríficos, instalaciones portuarias y mediante el avance de ciertas industrias como la textil; aunque el ritmo de este proceso, como el del propio capitalismo, fue desigual en los diferentes países latinoamericanos.

Por esas razones, los sindicatos y primeros partidos obreros surgieron donde se desarrollaron con mayor rapidez y profundidad las relaciones de producción capitalistas y en los que las influencias foráneas provenientes de la inmigración se hacían sentir con más fuerza. De una u otra manera, algo de eso fue lo que ocurrió en Argentina, Chile, México, Cuba, Uruguay y, en cierta forma, en Brasil.

La llegada masiva, desde fines del siglo XIX, de cientos de miles de obreros franceses, así como de millones de inmigrantes europeos de diferentes nacionalidades, fundamentalmente al Brasil central y meridional, a Argentina, Chile, Cuba y Uruguay, con una conciencia social más desarrollada, ayudó directamente a la difusión de las ideas anarquistas y socialistas en el seno del naciente movimiento obrero de este continente. En otros países, como Bolivia, Perú, Colombia y los de América Central, donde la influencia de la inmigración fue mucho menor y el avance capitalista más lento, la formación de una clase obrera fue un fenómeno más tardío.

En este segundo grupo de repúblicas, la casi totalidad del proletariado se constituyó sobre la base de campesinos e indios expulsados de sus tierras o por artesanos arruinados. Aunque México siguió también este derrotero, el movimiento obrero mexicano se organizó más temprano, compulsado por el sindicalismo norteamericano, el extraordinario crecimiento de la infraestructura, así como las agudas luchas sociales despertadas por la revolución mexicana de 1910.

El mutualismo representó durante años la primera forma de organización de la naciente clase obrera latinoamericana, en especial en aquellos países que ya en la segunda mitad del siglo XIX contaban con un proletariado relativamente apreciable. Asociaciones mutualistas de envergadura florecieron en la mayoría de las repúblicas de América Latina, con variable duración en tiempo. Ejemplos de ellas fueron el Gran Círculo de Obreros de México (1872), la Unión Universal del Perú (1884) y las mancomunales chilenas.

También los sindicatos surgieron en las regiones en donde crecían con rapidez y alcanzaban mayor profundidad las relaciones de producción capitalistas y en los que las influencias foráneas provenientes de la inmigración se hacían sentir con más fuerza. Además,

cobraron mucha importancia las organizaciones anarcosindicalistas, cuyos integrantes llegaron a organizar grandes centrales sindicales nacionales.

Entre ellas pueden mencionarse la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) en 1904, la Federación Obrera Regional Uruguaya (FORU) en 1905, la Federación Obrera Regional Brasileña (FORB) en 1906 y la Casa del Obrero Mundial en México (COM, 1912). Los anarco-sindicalistas fueron los promotores de las primeras huelgas importantes en la historia de América Latina, como las que estremecieron a Iquique (Chile), Cananea y Río Blanco (ambas en México), todas ocurridas entre 1906 y 1907, con saldo de decenas de muertos y centenares de heridos.

Por esta época, también aparecieron organizaciones sindicales dominadas por los socialistas, entre ellas la Federación Obrera de Chile (FOCH) y la Unión General de Trabajadores (UGT) de Argentina. Casi al mismo tiempo fueron fundados los primeros partidos socialistas de significación, entre ellos los de Argentina (1896), Chile (1906) y Uruguay (1912), encabezados respectivamente por los luchadores sociales Juan B. Justo, Luis Emilio Recabarren y Emilio Frugoni.

Hegemonía del imperialismo inglés

A partir de mediados del siglo XIX, y sobre todo desde la década del setenta, comenzaron las primeras inversiones directas del capital extranjero en América Latina, en lo fundamental de procedencia británica. Hasta esta época, Inglaterra se había conformado con monopolizar el comercio desde afuera –llegó a tener en este terreno un dominio casi absoluto en el continente–, pero en la segunda mitad del siglo XIX trató de asegurar su posición privilegiada controlando no solo la comercialización de mercancías y el crédito, sino también la producción y el transporte de las materias primas.

Este proceso estaba relacionado de manera directa con el paso del capitalismo premonopolista al imperialismo. El predominio de Inglaterra en América Latina estaba en consonancia con su condición de primera potencia económica del mundo, poseedora del más

grande imperio colonial, con la flota de guerra más poderosa y la mayor marina mercante.

Por esa razón, desde entonces y hasta la crisis capitalista de 1929, las inversiones inglesas se dedicaron a la creación de toda una infraestructura que facilitara la explotación eficaz de las materias primas y su exportación. O sea, comenzó la era de las llamadas inversiones tradicionales o de tipo colonial, como se les ha denominado, encaminadas a la construcción de ferrocarriles, tranvías, telégrafos, instalaciones portuarias, redes telefónicas, frigoríficos, electricidad, alumbrado y otras. Todo con vistas a facilitar la exportación de los productos que requería la moderna industria capitalista.

Como resultado de este proceso inversionista, las líneas ferrocarrileras en América del Sur que tenían en 1870 una longitud de 2800 kilómetros ya en 1900 superaban los 41 mil; mientras que solo en México pasaron de 578 kilómetros (1875) a 20 mil (1910). Al mismo tiempo, se intensificaba la actividad minera, desarrollándose nuevas ramas extractivas, con métodos más modernos y productivos. Además, con la formación de las grandes urbes latinoamericanas, se creó un mercado para ciertos productos que por sus características no podían ser importados, como la electricidad.

A principios del siglo XX, en la práctica no existía un país latinoamericano sin inversiones inglesas o fuera de su órbita de influencia. Se calcula que hacia 1914 la inversión británica en América Latina alcanzaba los 5 mil millones de dólares, el 35% de ellos ubicados en Argentina, el 20% en Brasil, el 16% en México, seguidos por Chile, Uruguay, Perú y Cuba, entre los cuales se repartía un 18%. Conviene tener presente que una parte apreciable de este capital no provenía de importantes inversiones llegadas del exterior, sino de ganancias reinvertidas.

El avance del capital extranjero tuvo una gran repercusión en América Latina. Hasta ese momento los productores nacionales habían tenido una participación importante en la explotación de los recursos naturales, pero en lo sucesivo el capital foráneo se esforzaría por dominar de manera directa esos renglones, así como las fuentes de materias primas que la industria requería. En consecuencia, los países latinoamericanos fueron convirtiéndose poco a poco

en verdaderas semicolonias de las grandes potencias industriales, en especial de Inglaterra.

En algunas ocasiones ese resultado fue facilitado por costosas contiendas fratricidas entre países de América Latina, como fueron los casos de las guerras de la Triple Alianza, analizada en el capítulo anterior, y la del Pacífico. Esta última enfrentó a Chile con Perú y Bolivia y tuvo, como inesperado colofón, la derrota del primer gobierno nacionalista latinoamericano que trató de frenar la penetración del capital británico: el del presidente chileno José Manuel Balmaceda, derrocado por el alzamiento oligárquico de 1891.

La Guerra del Pacífico

Las causas de este conflicto, que involucró a Chile, Perú y Bolivia entre 1879 y 1883, extienden sus raíces en el desigual desarrollo capitalista de estas tres repúblicas surandinas. Chile había sido escenario de un rápido ascenso de las fuerzas liberales, favorecidas por la prolongada bonanza experimentada por su economía desde la independencia, que permitió la consolidación del estado nacional sobre bases conservadoras, entre 1830 y 1850.

Con el progresivo aburguesamiento de la aristocracia conservadora (*pelucona*) y la paralela moderación de los políticos liberales (*pipiolos*), no extraña que una coalición entre estas dos corrientes reemplazara al último gobierno *pelucón*, el del conservador Manuel Montt (1851-1861), con un presidente de «conciliación nacional». Este fue José Joaquín Pérez, que se encargó del poder hasta 1871.

El lucrativo negocio minero atrajo desde muy temprano a los inversionistas británicos, favorecido por la legislación liberal. Nuevas vías férreas –financiadas por los ingleses– agilizaron el transporte del cobre en bruto hasta los puertos, desde donde se le despachaba hacia los centros procesadores en Europa. Unido a ello, Inglaterra logró un tácito monopolio comercial sobre el tráfico marítimo entre Valparaíso y Liverpool.

Pero hacia 1873 Chile fue sacudido por una recesión económica sin precedentes, no solo motivada por la caída de los precios

agrícolas, sino también por el descenso de las exportaciones, lo que coincidió con el agotamiento de las minas de plata. La depresión, que alcanzó su punto culminante en 1878, explica que adquiriera cada vez más importancia la colonización chilena de Antofagasta y Tarapacá, territorios pertenecientes a Bolivia y Perú, respectivamente.

En estas regiones vecinas, la burguesía de Chile, en íntima sociedad con empresarios británicos, fue invirtiendo sus capitales, trasladando en forma masiva trabajadores chilenos y apoderándose de los yacimientos salitreros. Esto último fue favorecido por el crónico estancamiento económico de Bolivia.

La envoltura precapitalista del antiguo Alto Perú cancelaba cualquier perspectiva de desarrollo social y toda posibilidad de sacar provecho de su salida al Pacífico por Antofagasta, así como de los valiosos yacimientos salitreros ubicados en ese departamento, para reafirmar los intereses nacionales. Estos eran ampliamente burlados por los terratenientes del altiplano y caudillos envilecidos al estilo de Mariano Melgarejo, encaramado en el poder de 1865 a 1870.

Por su parte, la evolución de Perú era diferente a la de Chile y Bolivia. Aquí el régimen liberal de Ramón Castilla, extendido de 1845 a 1851 y de 1855 a 1862, representó un importante paréntesis de progreso en una época políticamente inestable, plagada de constantes luchas intestinas. Los avances sociales y económicos de estos años –extinción del tributo indígena, el diezmo y la esclavitud (1854)– se apoyaron en la favorable coyuntura creada a partir de las exportaciones del guano, estiércol de aves acumulado por siglos en sus costas e islas, de gran valor fertilizante.

Agotada gran parte de esta fuente de recursos hacia los años sesenta, Perú se precipitó en una nueva etapa de inestabilidad política que lo tornó más vulnerable a las presiones desde el exterior, financieras, diplomáticas y hasta militares, como fue la aventurera campaña colonialista de España (1863-1866), que intentó apoderarse de las islas guaneras. Superada esta agresión europea, sobrevino el conflicto con Chile, apoyado por el capital inglés. Ello coincidió con la fundación del primer partido político peruano, denominado Civil (1871), el que llevaría a su fundador, Manuel Pardo, a la presidencia (1872-1876) cuando se agudizaban las contradicciones con su vecino del sur.

El detonante del conflicto que enfrentó a estas tres naciones surandinas fue la explotación de los valiosos yacimientos salitreros existentes en el desierto de Atacama, escenario geográfico limítrofe común de Perú, Chile y Bolivia. Uno de esos territorios era Tarapacá, departamento meridional de Perú, cuya importancia se había acrecentado en la segunda mitad del siglo XIX gracias a la explotación del salitre, de creciente demanda en el mercado internacional.

Esta provincia peruana, como la boliviana de Antofagasta, eran regiones desérticas y poco pobladas, por lo que los empresarios extranjeros alentaron la inmigración de fuerza de trabajo procedente de Chile. Así, mientras la naciente burguesía peruana –la boliviana era prácticamente inexistente– se dedicaba a los negocios derivados de la comercialización del guano, los inversionistas chilenos, aliados a los capitalistas ingleses, fueron controlando la actividad salitrera.

En 1873 la crisis financiera derivada del agotamiento del guano condujo al gobierno de Perú a buscar una solución a costa del salitre que se explotaba al sur de su territorio. Para ello decretó su estanco y, dos años después, dispuso la expropiación de todos los yacimientos de este mineral en Tarapacá, pertenecientes en un 72% a empresarios peruanos y chilenos. Puesto también ante insolubles problemas económicos, Bolivia decidió imitar a Perú y, en febrero de 1878, decretó un impuesto al salitre exportado por las compañías chilenas desde Antofagasta.

La expropiación de las salitreras de Tarapacá, decretada por el gobierno peruano, y la posterior anulación por Bolivia de la mayoría de las concesiones extranjeras en la provincia de Antofagasta, afectó el corazón de la burguesía de Chile, estrechamente ligada al capital británico. Ante las reiteradas negativas chilenas de pagar este gravamen, el gobierno boliviano dispuso que todos los bienes de las compañías salitreras fueran subastados, lo que precipitó el conflicto con Chile.

Perú, que atravesaba problemas similares con el gobierno chileno, fue arrastrado al conflicto en virtud de una alianza secreta concertada previamente con Bolivia que establecía la protección mutua ante cualquier posible agresión extranjera. En esas circunstancias actuaron los resortes del poder, y el Estado chileno decidió

invadir a sus vecinos para arrebatarles los ricos territorios salitreros. Comenzaba la Guerra del Pacífico.

El 14 de febrero de 1879 la provincia boliviana de Antofagasta fue ocupada por el ejército de Chile. El 23 de marzo se produjo el primer enfrentamiento sangriento entre Bolivia y Chile que tuvo lugar en el oasis de Calama, población en la frontera con Tarapacá, donde se inmoló el boliviano Eduardo Abaroa y un puñado de civiles armados en la defensa del puente del Topáter.

Al mes siguiente, tras la declaración formal de guerra por parte del gobierno chileno, Perú entraba en la contienda fratricida (6 de abril). En reacción a la inesperada agresión a su territorio, el presidente boliviano Hilarión Daza ordenó la confiscación de todos los bienes chilenos en Bolivia.

En los dos primeros meses de la guerra del Pacífico, Chile se apoderó del litoral de la disputada región de Antofagasta, incluido el puerto de Cobija, despojando a Bolivia de su salida al mar. Además, la flota de guerra chilena bloqueó el puerto peruano de Iquique, donde se concentraban una parte importante de los efectivos aliados peruano-bolivianos.

La primera etapa de la contienda se extendió hasta el 8 de octubre de 1879 y se caracterizó por la lucha por el dominio del mar entre las escuadras de Perú y Chile, pues Bolivia carecía de flota de guerra. Tras la batalla del 12 de abril, que enfrentó a la cañonera chilena *Magallanes* con las corbetas peruanas *Unión* y *Pilcomayo*, ambos contendientes procedieron a reforzar sus respectivas armadas.

El segundo gran combate naval se libró el 21 de mayo de 1879. La escuadra peruana hundió a la *Esmeralda*, que desapareció junto con su heroico capitán, Arturo Prat, mientras Perú se quedaba sin su más poderosa unidad bélica, el buque *Independencia*. Esta última pérdida fue un duro golpe para la flota peruana, ya que salvo el *Huáscar* –al mando del contralmirante Miguel Grau–, el resto de sus embarcaciones eran de madera. De ahí en adelante, la marina de guerra chilena se dedicó a cazar al *Huáscar*.

El 8 de octubre, frente a Mejillones, los buques chilenos lograron cercar a la flotilla del contralmirante Grau, integrada por el *Huáscar* y el *Unión*. En Punta Angamos, la tripulación del *Huáscar*

se defendió gallardamente. Solo después de la muerte de Grau y el grueso de su oficialidad pudieron los chilenos abordar el desmantelado navío peruano y conducirlo a Valparaíso como trofeo de guerra, mientras el *Unión* lograba escapar.

Reafirmada la supremacía naval de Chile en el Pacífico, vital para el desarrollo ulterior de la contienda, un cuerpo expedicionario del país austral, de unos 10 mil hombres previamente concentrados en Antofagasta, partió hacia Tarapacá. Se iniciaba así la segunda etapa de la guerra del Pacífico, caracterizada por la guerra de posiciones y el enfrentamiento de grandes unidades militares, que se extendería hasta el 17 de enero de 1881.

El 2 de noviembre de 1879 el ejército chileno desembarcó en la población costera de Pisagua y, gracias al ferrocarril existente, se internó con facilidad en la codiciada provincia de Tarapacá. En lugar de entablar combate con los invasores, el presidente boliviano Daza retiró precipitadamente a sus tropas del frente dejando abandonados a sus aliados peruanos. Esta desastrosa decisión facilitó la ocupación chilena de Iquique y contribuyó a la derrota peruana en la batalla de Dolores el 19 de noviembre.

En la sangrienta batalla del Alto de la Alianza (Tacna), el 26 de mayo, se impuso la abrumadora superioridad numérica del bando chileno. El Batallón Colorados de Bolivia, comandado por Narciso Campero y Eliodoro Camacho, que se destacó por su arrojo en este duro enfrentamiento fue prácticamente aniquilado, por lo que la república del altiplano se retiró de manera definitiva de la contienda.

Una nueva victoria chilena en Arica, el 7 de junio, puso fin a esta fase de la guerra, aunque el héroe de la jornada fue el coronel peruano Francisco Bolognesi, quien resistió hasta la muerte al mando de sus 1,200 hombres. A pesar de las derrotas sufridas, el 11 de junio de 1880 quedaron establecidas en Lima las bases de una nueva confederación Perú-Bolivia; proyecto muy combatido por la oligarquía boliviana deseosa de desvincularse del conflicto con Chile.

En esas condiciones, el tratado no pudo prosperar y Perú quedó de hecho solo frente al agresor chileno. El 15 de noviembre de 1880 zarpó de Arica un poderoso ejército chileno –compuesto por 12 mil soldados– que desembarcó en el puerto peruano de Paracas, al sur de

Pisco. Un mes más tarde, llegó a la caleta de Curuyaco otro cuerpo integrado por 14 mil hombres.

Concentradas en el valle de Lurín, estas fuerzas iniciaron, el 12 de enero de 1881, la ofensiva contra Lima. El 13 de enero comenzó en Chorrillos la batalla por la capital peruana. Dos días después los chilenos ganaron un gran combate a las puertas mismas de la ciudad. El 17 de enero los invasores la ocuparon, donde permanecieron por dos años.

Por último, la tercera etapa de la guerra del Pacífico se extendió hasta la derrota peruana en la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883. Fueron los años de la resistencia popular contra el invasor extranjero, de la destrucción de las grandes plantaciones de la costa norte y de las hazañas de las guerrillas o *montoneras* dirigidas por Andrés Avelino Cáceres, apodado el *Brujo de los Andes*.

También durante esta fase, el gobierno norteamericano ofreció al gobierno de Perú su interesada mediación a cambio de concesiones y la entrega del puerto de Chimbote, para establecer una base naval. Este proyecto, que figura entre las primeras expresiones de los apetitos imperialistas de Estados Unidos, se frustró por la rápida reacción chilena al destituir y apresar al mandatario peruano Francisco García Calderón, complicado en estas negociaciones subrepticias.

Como resultado directo de la guerra del Pacífico, el área territorial de Chile creció a costa de Bolivia –que perdió toda la provincia de Antofagasta y con ella su salida al mar– y Perú –se quedó definitivamente sin Tarapacá y Arica–, anexándose unos ciento ochenta mil kilómetros cuadrados muy ricos en yacimientos minerales. Pero el verdadero vencedor de la contienda fratricida fue el imperialismo inglés.

Todo sucedió como si los pueblos surandinos se hubieran desangrado para que el capital británico se quedara con el salitre y sus principales recursos. Así Perú, con su economía postrada, vio pasar a manos inglesas las arruinadas plantaciones azucareras de los valles más fértiles de la costa septentrional, que fueron concentradas en enormes explotaciones.

Además, para cancelar la deuda con Inglaterra, el gobierno peruano debió enajenar los ferrocarriles del estado –construidos en

la época del auge exportador guanero y que pasaron a ser operados por la Peruvian Railway Company–, otorgar distintos privilegios comerciales, entregar medio millón de hectáreas y el usufructo de las islas guaneras. Es la etapa en que se crearon en Perú las bases de la llamada «república aristocrática» (1895-1919), iniciada con el gobierno de Nicolás de Piérola (1895-1899).

Para Chile, supuesto vencedor en la contienda, las consecuencias no fueron muy diferentes. En junio de 1881 el gobierno chileno decidió devolver las salitreras expropiadas por los peruanos a los tenedores de los bonos entregados en 1875. Esos documentos habían sido emitidos por Perú para indemnizar a los empresarios afectados.

Pero durante la guerra, los valores de los bonos peruanos se depreciaron rápidamente y algunos especuladores británicos, radicados en Chile, aprovecharon la coyuntura para adquirirlos con créditos otorgados por los propios bancos chilenos. El más afortunado de todos resultó ser el inglés John Thomas North, quien después de terminada la guerra del Pacífico emergió como indiscutido «rey del salitre».

Derrocamiento del gobierno nacionalista de Balmaceda en Chile

La penetración del imperialismo inglés en Chile se consolidó en los años siguientes, al extremo que en 1890 el capital británico invertido en minas, salitreras, ferrocarriles y bancos, ascendía a 16 millones de libras esterlinas, mientras los empréstitos británicos habían elevado la deuda chilena a 8 millones. En otras palabras, ya en 1886 el imperialismo inglés controlaba el 70% de la producción de la principal riqueza de Chile, el salitre, y en 1890 había triplicado sus inversiones en este país.

Ante este panorama, el presidente chileno José Manuel Balmaceda encaminó su gobierno, iniciado el 18 de septiembre de 1886, a la recuperación de esos recursos naturales básicos. Para conseguirlo, Balmaceda intentó aprovechar las ya visibles contradicciones interimperialistas de la época para promover un desarrollo

nacional libre de la asfixiante tutela inglesa. Sus esfuerzos en este sentido estuvieron dirigidos a atraer los intereses alemanes, norteamericanos y franceses, rivales del imperialismo británico en América Latina.

Sin embargo, la oposición de los grupos ingleses y oligárquicos le impidió consumar sus planes. Los intereses antinacionales perjudicados por la política económica de Balmaceda, nucleados en el Congreso, poderoso reducto de la oligarquía aliada al capital británico, se le enfrentaron abiertamente. Finalmente, el 7 de enero de 1891, la flota de guerra chilena surta en Valparaíso, siguiendo órdenes de Jorge Montt, se rebeló contra el gobierno de Balmaceda.

La resistencia a la sublevación se prolongó por varios meses, pero el 19 de septiembre, un día después de terminado su mandato constitucional, el presidente Balmaceda se suicidó en la embajada donde estaba asilado. Su muerte puso fin al régimen presidencialista en Chile y a uno de los primeros intentos de desarrollo nacionalista registrados en la historia contemporánea de América Latina. El resultado fue que al terminar el siglo los chilenos solo controlaban el 16% de su industria salitrera.

Fin del imperio en Brasil

El régimen imperial en Brasil, instaurado desde la independencia en 1822, se extendió hasta 1889. Tras la emancipación, este país confrontó las mismas dificultades económicas y financieras que frenaban el desarrollo de las restantes naciones latinoamericanas.

Tampoco aquí pudo ser quebrantado el tradicional dominio de la aristocracia terrateniente –los coroneles y *senhores de engenho*– y de la Iglesia. En un principio, hasta 1831, ni siquiera los ricos criollos pudieron desplazar a los portugueses del comercio y el aparato estatal al que estaban aferrados desde la época colonial, esferas que finalmente debieron abandonar con la abdicación de Pedro I.

Después de diez años de regencias –entre las cuales descolló la muy activa del padre Feijó– la llegada al poder de Pedro II en 1841 coincidió con los inicios de una relativa estabilización interna

–terminada las sangrientas turbulencias de los años anteriores– en la que claramente se advierten los síntomas del avance capitalista. Esos signos no fueron solo la instalación de una más moderna infraestructura –en función de la creciente economía agrario-exportadora– y el desarrollo de centros urbanos, industrias y comercio, sino también la aparición de una clase dominante aburguesada –los grandes cafetaleros de Sao Paulo y Rio de Janeiro–, así como otros sectores burgueses y pequeño burgueses. Otro indicio del mismo fenómeno fue el aumento del capital inglés en la economía brasileña.

De esta manera, a fines del siglo XIX se conformó un nuevo Brasil, al que la anacrónica monarquía de los Braganza poco podía ofrecer ya, a pesar de sus esfuerzos por modernizarse mediante leyes electorales algo más amplias y una tardía abolición de la esclavitud (1888). A la insatisfacción popular por estas limitadas y lentas reformas monárquicas se añadieron los conflictos del emperador con la Iglesia y el ejército.

La crisis definitiva de la monarquía está relacionada con cuatro cuestiones: la electoral, la esclavista, la religiosa y la militar. Las dos primeras dieron como resultado una merma sustancial del prestigio de Pedro II, por su manifiesta pasividad para solucionar los dramáticos problemas del país. Una conclusión parecida se derivó del conflicto con la Iglesia y del diferendo con los militares.

La cuestión religiosa surgió a principios de la década del setenta relacionada con la identidad de la Iglesia y el Estado, que databa de la colonia. El monarca estaba facultado para designar candidatos al obispado y para decidir sobre el cumplimiento de las disposiciones papales, lo que fue minando sus relaciones con la alta jerarquía eclesiástica. Preocupado por las proporciones que adquiría el conflicto, el emperador decidió conciliar con la Iglesia. La derrota sufrida por la monarquía en la cuestión religiosa contribuyó a debilitar su ya precaria autoridad.

Pero la causa principal del derrumbe del imperio fue el problema militar. La ley de retiro despertó desde 1883 protestas entre la oficialidad, lo que contribuyó a resquebrajar la disciplina dentro del ejército. El creciente enfrentamiento con la corona se agravó ante la negativa de los mandos militares a perseguir cimarrones y

por su postura contraria a la esclavitud. Incluso, en 1887 el general Manuel Deodoro da Fonseca, comandante de Rio Grande do Sul, apoyó a sus subordinados en estos temas de confrontación con la corona.

Al crecimiento de la disidencia contribuyó la divulgación de la filosofía positivista –sintetizada en el lema *orden y progreso*– entre la joven oficialidad educada en la Escuela Militar. Un papel sobresaliente le correspondió al teniente coronel Benjamín Constant Botelho de Magalhaes, quien no se limitaba a adoctrinar a los cadetes, sino que también predicaba sobre la necesidad de implantar una dictadura militar republicana.

Con el ánimo de calmar el creciente descontento –en 1888 se habían producido choques callejeros entre policías y militares–, el emperador nombró jefe del gabinete al liberal Alfredo Celso Assis Figueiredo, vizconde de Ouro Preto. El premier llegó al gobierno con un ambicioso programa de reformas –que debía ser presentado al parlamento el 20 de noviembre de 1889– que incluía las elecciones a la cámara, el nombramiento de un militar para la cartera de guerra y marina, la autonomía regional, la libertad de cultos, incentivos a la inmigración y reducción de las atribuciones del Consejo de Estado.

Sin embargo, las promesas contenidas en los planes de Ouro Preto, quien además se proponía disminuir el papel del ejército, llegaban demasiado tarde. El 15 de noviembre de ese año, las tropas del general Da Fonseca salieron de los cuarteles, ocuparon posiciones en la capital y exigieron la dimisión del gobierno, mientras un grupo de exaltados republicanos proclamó en el ayuntamiento de Rio de Janeiro el fin de la monarquía y el advenimiento de la república.

Al día siguiente, se consumaba el golpe militar al ser publicado un decreto, firmado por el general Da Fonseca, en el que se creaba la república. En 1891 se adoptaría, por medio de una nueva constitución de carácter federal, el nombre de Estados Unidos del Brasil y el clásico lema positivista sería puesto en su nueva bandera: *orden y progreso*.

Primeras rivalidades interimperialistas en América Latina

Durante la Guerra del Pacífico brotaron las primeras contradicciones, correspondientes a la etapa del capitalismo monopolista, entre Estados Unidos e Inglaterra por el dominio de América Latina. En este conflicto fratricida entre naciones sudamericanas, Londres apoyó al gobierno chileno para quedarse con los ricos yacimientos salitreros en disputa con Bolivia y Perú, enfrentamiento que terminó con la derrota de las aspiraciones de Estados Unidos.

En esa misma década, el gobierno de Washington, con el propósito fundamental de contrarrestar la preponderante influencia inglesa en el continente, sacó a la luz su proyecto panamericano. La idea fructificó en 1889 en la primera Conferencia de las Naciones Americanas, cuyos resultados quedaron por debajo de las expectativas de sus promotores, que pretendían formar con los participantes una unión aduanera, construir un ferrocarril panamericano y establecer una moneda y un banco hemisféricos.

En lo adelante, las conferencias panamericanas se convirtieron en el eje de toda la política exterior de la Casa Blanca, dirigida a alejar de la influencia inglesa a las débiles repúblicas latinoamericanas y lograr su absoluta supremacía económica y política en este continente. De ahí la exhumación de la vieja doctrina Monroe, para convertirla en base de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.

Aunque en las primeras reuniones panamericanas se discutieron cuestiones aparentemente de poca monta, como regulaciones comerciales, acuerdos postales, arbitraje internacional y otras por el estilo, y se evitaban los temas que tenían que ver con problemas políticos, en realidad se encubría el objetivo norteamericano de buscar un mecanismo que limitara la penetración inglesa en la región. Por ello, entre 1889 y 1910, Estados Unidos auspició las primeras cuatro conferencias panamericanas: Washington, 1889; ciudad México, 1901; Rio de Janeiro, 1906 y Buenos Aires, 1910, lugar este último donde se fundó la Unión Panamericana como organismo permanente presidido por el secretario de Estado de Estados Unidos.

El primer choque agudo entre ambas potencias anglosajonas ocurrió en 1895, con motivo de los problemas fronterizos entre la Guayana Británica y Venezuela, que determinó el envío por el gobierno de Estados Unidos de la nota Olney, redactada en forma de ultimátum: «En la actualidad Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente».[1] En la comunicación diplomática, Washington acusaba a Inglaterra de violar la doctrina Monroe y exigía la aceptación del arbitraje internacional.

A pesar de que en ambos países se llegó a crear un ambiente de guerra, la crisis de los bóers en África del Sur y, sobre todo, las crecientes amenazas de Alemania llevaron al gobierno británico a contemporizar, aceptando los «buenos oficios» de Estados Unidos. De esta manera, los ingleses debieron reconocer tácitamente el predominio norteamericano en este continente, para obtener el apoyo de Washington ante la creciente rivalidad con Alemania. En esa decisión también influyó el peso de las enormes inversiones británicas en Estados Unidos, la importancia de su mercado, así como el entrelazamiento de sus intereses bancarios.

Inicios de la expansión imperialista de Estados Unidos

En los últimos años del siglo XIX y en los primeros del XX se produjeron importantes cambios en la estructura económica mundial. Uno de los aspectos más relevantes de ese fenómeno fue el relativo debilitamiento del peso que la industria inglesa tenía en la economía internacional.

En cierta forma, ese era el resultado de la aparición en la palestra mundial de varias potencias emergentes que igualaron y aun superaron las producciones inglesas. Nos referimos a Estados Unidos, Japón y Alemania, quienes en 1865, 1868 y 1878, respectivamente, vivieron acontecimientos trascendentales en sus respectivas historias

[1] Hernán Ramírez Necochea, *Historia del imperialismo en Chile*, La Habana, Edición Revolucionaria, 1966, p. 193.

nacionales que impulsaron el desarrollo capitalista y el crecimiento y competitividad de sus industrias.

Inglaterra dejó así de ser el taller del mundo y su predominio comenzó a ser desafiado por países como Alemania y Estados Unidos. Entre 1890 y 1914 las industrias pesadas norteamericana y alemana arrebataron la hegemonía a la inglesa. Estas nuevas potencias industriales, dotadas de modernas tecnologías, superaron a Inglaterra en los rubros más importantes de la producción fabril, tales como artefactos y maquinarias eléctricas, químicos y elementos mecánicos.

En 1913 ya los alemanes cubrían el 48.5% de la industria eléctrica, los norteamericanos el 17.7% y los ingleses el 23.4%. Casi al mismo tiempo, Inglaterra disminuía en forma sensible su participación en el comercio internacional.

Como resultado de su formidable actividad productora y mercantil, tanto Estados Unidos como Alemania acumularon una gran masa de capital que buscaba colocación en el exterior. En consecuencia, se produjo un aumento vertiginoso de la exportación de capitales de estas dos potencias hacia las zonas coloniales y semicoloniales, lo que trajo aparejado un amplio movimiento mundial de expansión imperialista. En el caso norteamericano, su área natural de influencia era América Latina, sobre la que había ejercido siempre sus aspiraciones y aventuras expansionistas, en particular desde la proclamación en 1823 de la doctrina Monroe.

La acción imperialista de Estados Unidos, como las de Europa occidental y Japón, estaba motivada por las mismas causas económicas. Entre los primeros ideólogos del imperialismo norteamericano estuvo el almirante Alfred T. Mahan, quien en 1890 y 1897 diera a conocer dos obras ampliamente difundidas: *La influencia del poder marítimo en la historia* –donde criticaba la tradicional política aislacionista de Estados Unidos y vaticinaba que este país estaba destinado a intervenir en los asuntos mundiales de manera decisiva– e *Interés de los Estados Unidos en el poder naval*, en el que proclamaba que una tercera etapa del «destino manifiesto» estaba en marcha –la primera había sido la extensión de la frontera al Mississipi y la segunda el arrebato territorial a México–, la cual exigía la posesión de una ruta canalera por Centroamérica, bases estratégicas en el

Pacífico y el dominio de los pasos del Caribe, entre la costa oriental de Norteamérica y Panamá.

Con la breve guerra contra España en 1898, Estados Unidos se adentró en la tercera etapa señalada por Mahan al iniciar una violenta ofensiva expansionista que combinó los viejos métodos colonialistas con las más modernas formas de penetración del capitalismo. El interés por apoderarse de las últimas colonias españolas en este hemisferio (Cuba y Puerto Rico), no solo tenía que ver con su valor material –fuente de materias primas y mercados–, sino también con su importancia estratégica como futuras bases de operaciones para la irrupción del capital norteamericano por el resto del continente.

Los siguientes pasos de la ofensiva norteamericana en este hemisferio estuvieron relacionados con sus brutales intervenciones militares en el Caribe y Centroamérica aplicando el «garrote» (*big stick*). Este período de brutal expansionismo norteamericano coincidió con los 16 años (1897-1913) de gobiernos republicanos de los presidentes William McKinley, Theodore Roosevelt y William H. Taft, quienes se convirtieron en verdaderos campeones del imperialismo. Pese a todas las conquistas y «hazañas» de estos mandatarios, durante el siguiente gobierno norteamericano del demócrata Woodrow Wilson, extendido de 1913 a 1921, Estados Unidos realizó más intervenciones armadas en América Latina que las de sus tres antecesores republicanos juntos.

Luchas por la independencia de Cuba y la intervención norteamericana

Cuba fue, junto con Puerto Rico, los únicos territorios hispanoamericanos que no alcanzaron su emancipación en las primeras décadas del siglo XIX. Diversos factores, entre ellos la tenaz oposición de Estados Unidos, que aspiraba a heredar a España en su dominio de la Mayor de las Antillas, impidieron que Cuba se convirtiera también en una república soberana al término del ciclo revolucionario latinoamericano y que su guerra emancipadora se postergara, desarrollándose, en lo fundamental, de 1868 a 1878 y de 1895 a 1898.

Bajo el dominio español siguió creciendo la producción azucarera cubana, que a mediados del siglo XIX alcanzó grandes proporciones, en su mayor parte destinada al mercado norteamericano, lo que unido a la necesidad de preservar la esclavitud –la persecución inglesa de la trata obligó a España a ilegalizarla– alentó entre los plantadores cubanos –fundamentalmente del occidente de la isla– el proyecto de anexar la isla a Estados Unidos. Las manifestaciones más estructuradas de los planes anexionistas fueron los tres intentos expedicionarios del venezolano Narciso López, entre 1850 y 1852, quien perdería la vida en el último de ellos a manos de las autoridades coloniales. El resultado de la guerra de Secesión en Estados Unidos hizo perder vigencia a esta alternativa, propiciada por los grandes plantadores cubanos asociados a los esclavistas sureños.

En definitiva, la guerra de independencia de Cuba estalló en 1868. Entre los múltiples factores que estimularon el comienzo de la llamada Guerra de los Diez Años (1868-1878) estuvo la caída de los precios del azúcar, acompañada de la elevación de las tasas de interés y la supresión casi total de los créditos, que provocaron las crisis económicas mundiales de 1857 y 1866, a lo que se sumaba la política extorsiva de la administración colonial, que había implantado nuevos impuestos, entre ellos el real decreto de 1867.

Los efectos de todo esto se hicieron sentir con mayor crudeza en la parte este de la isla, que no era el eje de la economía basada en la plantación esclavista, ubicada en las provincias occidentales de La Habana y Matanzas, lo que explica que la región oriental fuera el centro de la conspiración y del movimiento revolucionario. Bajo la dirección de hacendados cubanos de esa zona, encabezados por Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte, se inició el 10 de octubre de 1868 la guerra de independencia y poco después, se constituyó en Guáimaro, la primera asamblea nacional.

La guerra, larga y cruenta, se extendería durante diez años –aunque limitada al oriente del país–, y durante su transcurso la dirección pasó de los grandes hacendados del este de la isla –Céspedes (1873) y Agramonte (1874) murieron en combate en los primeros años de la contienda– a figuras de extracción popular, como el dominicano Máximo Gómez y el mulato Antonio Maceo. Bajo su impronta, la

contienda se fue convirtiendo no solo en una campaña por la plena liberación nacional, sino también para lograr objetivos sociales más amplios, como la total eliminación de la esclavitud, que tendría que ser abolida por España en 1886.

Acontecimientos importantes de este sangriento conflicto fueron también la destitución de Manuel de Quesada como jefe del Ejército Libertador por la Cámara de Representantes (diciembre de 1869); el fusilamiento en La Habana de varios estudiantes de medicina por los españoles (1871); la destitución de Céspedes como presidente de la República en Armas en 1873 y la captura al año siguiente del general Calixto García. También la extensión de la guerra al centro de la isla en 1875 por Máximo Gómez y las sediciones de Lagunas de Varona (1875) y Santa Rita (1877), encabezadas por el general Vicente García, que contribuyeron a debilitar el campo patriota.

El empantanamiento de la guerra, las divisiones entre el poder civil y el militar, el regionalismo y oportunas concesiones de España, entre otros elementos, llevaron a la firma con la metrópoli, el 10 de febrero de 1878, de una paz sin independencia (Pacto del Zanjón), a la que se opuso infructuosamente el general Maceo en la Protesta de Baraguá. Tras el paréntesis abierto con aquel tratado, la guerra emancipadora solo se reinició en 1895, aunque los años de tregua no estuvieron exentos de intentos por reabrir la contienda (Guerra Chiquita de 1879 a 1880) y de aisladas expediciones y malogradas conspiraciones como el abortado plan Gómez-Maceo (1884-1886).

El 24 de febrero de 1895, la guerra de independencia se reanudó teniendo otra vez como principales jefes militares a los generales Maceo y Gómez, aunque ahora bajo la guía y la organización de José Martí, que a esos fines había constituido en 1892 el Partido Revolucionario Cubano (PRC). Su conducción era un claro indicio de la radicalización de la revolución, pues bajo la impronta martiana se proyectaba la formación de una república democrática capacitada para detener los apetitos expansionistas de Estados Unidos.

Prueba de esta estrategia, fue lo escrito por Martí la noche antes de caer en combate en Dos Ríos, el 18 de mayo de 1895, en carta inconclusa a su amigo mexicano Manuel Mercado. En esa misiva, el *Apóstol, de la Independencia de Cuba* anotó: «[...] de impedir a tiempo

con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América».[2]

La temprana muerte de Martí –a la que siguió después la de Maceo–, el 7 de diciembre de 1896, junto a la brutal resistencia de España –concentró en la isla más efectivos que los movilizados a principios del siglo para aplastar la emancipación hispanoamericana–, que aplicó políticas genocidas como la reconcentración en las ciudades de la población campesina (1896-1987) –provocó la muerte de cerca de 200 mil personas–, dilataron la contienda más allá de lo esperado. Hechos puntuales de la última guerra de independencia cubana fueron, entre otros, la firma por Martí y Gómez del *Manifiesto de Montecristi* en República Dominicana, verdadero programa del movimiento emancipador (marzo de 1895) y el encuentro de La Mejorana (5 de mayo) entre Gómez, Maceo y Martí donde, a pesar de las desavenencias entre los dos últimos, se delineó la organización del nuevo gobierno cubano.

También durante el desarrollo de la guerra de 1895 se adoptó la constitución de Jimaguayú (septiembre de ese año, que restableció la República de Cuba en Armas creada en 1869, presidida ahora por Salvador Cisneros Betancourt y con Gómez como general en jefe del Ejercito Libertador; se efectuó la invasión del occidente de la isla, culminada exitosamente por Maceo en Mantua en enero de 1896 y se produjo la toma de la fortificada plaza de Victoria de Las Tunas por el general Calixto García (1897).

Cuando la victoria cubana era ya prácticamente inevitable, pues las desgastadas fuerzas coloniales estaban exhaustas y el régimen autonómico –implantado por la corona el 1 de enero de 1898– tenía escasas perspectivas, los Estados Unidos declararon la guerra a España. La intervención utilizó como pretexto la misteriosa voladura, el 15 de febrero de 1898, del acorazado norteamericano *Maine*, surto en la bahía de La Habana.

El conflicto bélico hispano-cubano-norteamericano se extendió solo entre abril y agosto de ese mismo año, lo que le permitió a

[2] J. Martí, *Obras completas*, tomo I, La Habana, Editorial Lex, 1953, p. 271.

Estados Unidos ocupar militarmente la isla, tras la capitulación de España (Tratado de París del 10 de diciembre de 1898), hasta el 20 de mayo de 1902. En aquellas circunstancias, y bajo una constante presión popular sobre el gobierno de ocupación, una convención nacional reunida en la capital aprobó la constitución de 1901.

Pero esta carta fundamental, diseñada por los constituyentes para la nueva república de Cuba, tuvo que incluir la enmienda Platt –estaría en vigor hasta mayo de 1934– impuesta por el gobierno de McKinley como condición para dar acceso a los cubanos al gobierno de su propio país. Mediante este apéndice a la constitución de 1901, Estados Unidos se arrogó el derecho a intervenir militarmente en la isla –lo que se produjo de nuevo, tras la insurrección liberal conocida como la «Guerrita de Agosto», entre 1906 y 1909– y retener una estratégica porción del territorio nacional para establecer una base militar (Guantánamo) y desconocer la soberanía sobre otra (Isla de Pinos), abriendo el proceso de subordinación a los intereses de los capitalistas norteamericanos que caracterizaría la historia republicana cubana durante seis décadas. Manuel Sanguily y Juan Gualberto Gómez, prestigiosas figuras de la lucha emancipadora, fueron los mejores exponentes del rechazo nacional al virtual protectorado impuesto a la isla por Estados Unidos, reforzado por los llamados tratados de reciprocidad de 1903.

Guerra de los Mil Días en Colombia e injerencia estadounidense en Panamá

Fue en Panamá donde se aplicó por primera vez la famosa política norteamericana del *big sitck* o del garrote. Este pequeño istmo, que desde la independencia de España era parte integrante de Colombia –a la que había estado vinculado desde la colonia–, atrajo por primera vez la atención de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, cuando fue necesario ocuparlo para facilitar su comunicación interna, antes de la construcción del ferrocarril trascontinental.

En cambio, a principios del XX, el renacido interés del gobierno de Washington por la región istmeña tenía que ver con la expansión

de Estados Unidos en la fase imperialista de su desarrollo. Durante la guerra contra España (1898), el crucero norteamericano *Oregon* empleó 68 días para llegar al Caribe pasando por el estrecho de Magallanes. Ahora que los Estados Unidos habían adquirido posesiones en el Pacífico (Filipinas y Guam) y tenían crecientes intereses en China y la costa oriental de los países latinoamericanos, su flota y mercaderías debían llegar de manera expedita a estas regiones.

El proyecto de abrir una ruta canalera por alguno de los istmos centroamericanos chocaba con el viejo Tratado Clayton-Bulwer de 1850, firmado con Inglaterra, que no solo impedía el control exclusivo de la vía por un solo país, sino también era percibido como una violación de la doctrina Monroe. Por ello, se abrieron negociaciones con el gobierno británico que dieron por resultado un nuevo tratado entre las dos potencias, el Hay-Pauncefote del 18 de noviembre de 1901 –abrogaba el anterior y autorizaba a Estados Unidos a construir un canal y mantener su control–, que virtualmente daba luz verde a la expansión norteamericana por América Central y el Caribe.

La construcción de un canal en Panamá, sin embargo, ya se había iniciado desde principios de 1881 bajo la dirección del ingeniero Ferdinand de Lesseps, el artífice del canal de Suez, contratado por la Compañía Francesa para la Apertura del Canal Interoceánico. Aunque los franceses habían avanzado en las obras –excavado unos 40 kilómetros– y adquirido el viejo ferrocarril norteamericano, la construcción se había empantanado a principios de la década del noventa ante dificultades financieras de la primera empresa francesa –desde 1894 fue sustituida por la Compañía Nueva del Canal– agravada por los efectos devastadores de la fiebre amarilla sobre los trabajadores inmigrantes y un errado diseño del proyecto, que no tomaba en consideración los desniveles existentes entre los dos océanos.

Después de una lucha enconada con ciertos intereses norteamericanos que preferían la apertura del canal por Nicaragua, derrotados por el dictamen de una comisión del Congreso de Estados Unidos, el presidente Theodore Roosevelt consiguió que el Legislativo lo autorizara (ley Spooner), el 19 de junio de 1902, a comprar por 40 millones de dólares la concesión francesa. Para completar el plan,

era necesario también obtener los derechos exclusivos para la construcción del canal por parte del gobierno de Colombia.

En principio, el acuerdo con el gobierno colombiano se consiguió con el Tratado Hay-Herrán, del 22 de enero de 1903, que entregaba a Estados Unidos una franja interocéanica de hasta diez kilómetros de ancho y una concesión para su explotación por períodos renovables de un siglo, a opción exclusiva de los norteamericanos. Pero el documento no fue ratificado por el Congreso colombiano el 12 de agosto de ese año debido a que lesionaba seriamente su soberanía y no recibía a cambio la compensación económica a que aspiraba.

Ante el inesperado obstáculo, Estados Unidos decidió entonces propiciar la separación de Panamá de Colombia, para negociar con la futura débil república istmeña un tratado contentivo de todas sus exigencias. La perspectiva de la construcción de un canal por Panamá, aun en las lesivas condiciones fijadas por el Hay-Herrán, significaría un alivio para el empobrecido pueblo panameño y prometía grandes negocios a la oligarquía conservadora de Panamá, cuyos miembros eran apodados los *rabiblancos*.

Por eso, el rechazo del tratado por el gobierno de Bogotá fue interpretado en el istmo como una amenaza potencial para su muy deteriorada economía, lo que se sumaba a la peligrosa posibilidad de que la vía se construyera entonces por otro lugar (Nicaragua), echando por la borda todas las expectativas de mejoramiento creadas en Panamá. Eso explica que los norteamericanos pudieran aprovechar fácilmente, para sus objetivos, las legítimas aspiraciones del pueblo panameño de crear una nación independiente.

Los arraigados sentimientos nacionales istmeños se habían afianzado en los años de 1899 a 1903, cuando Colombia fue sacudida por una de las más mortíferas contiendas civiles de su historia –se calcula que arrojó más de cien mil muertos–, conocida como la Guerra de los Mil Días, que Gabriel García Márquez escogiera como trasfondo de su famosa novela *Cien años de soledad* (1967). La Guerra de los Mil Días (1899-1902) estuvo originada por el prolongado monopolio conservador del poder en Colombia y la imposibilidad de los liberales de desplazarlos del gobierno por la vía pacífica.

En el trasfondo estaban los elevados impuestos establecidos para las exportaciones de café y la crisis originada por la caída de los precios del grano en los mercados internacionales.

La adopción por el gobierno conservador colombiano de leyes represivas, destinadas a sancionar cualquier intento insurreccional, y el encarcelamiento de opositores en los departamentos de Cundinamarca y Santander, en julio de 1899, valiéndose de esa dura legislación, precipitó la sublevación liberal. En agosto de ese año, los liberales, encabezados por Gabriel Vargas Santos, Rafael Uribe Uribe, Benjamín Herrera y Justo L. Durán, se alzaron en armas contra el gobierno conservador.

Además de los levantamientos diseminados en distintas partes del país, columnas militares invadieron Colombia procedentes de Venezuela y Ecuador, donde habían recibido el respaldo de los respectivos gobiernos liberales de Cipriano Castro y Eloy Alfaro. La batalla del puente de Peralonso, el 15 y 16 de diciembre de 1899, favoreció a los efectivos guiados por el general Gabriel Vargas Santos, quien fue declarado *Supremo Director de la Guerra*.

En mayo de 1900, se produjo una batalla monumental que involucró a más de 15 mil hombres por cada bando, aunque de ahí en adelante la sangrienta contienda civil continuaría durante tres años más a través de acciones guerrilleras. En noviembre de 1901, tropas liberales, comandadas por Benjamín Herrera, intentaron invadir Panamá, pero *marines* norteamericanos impidieron la ocupación del territorio istmeño a solicitud del gobierno conservador de Colombia.

A pesar de los éxitos militares gubernamentales, en los departamentos de Panamá, el Cauca, Magdalena y Tolima los liberales continuaron la guerra. En estas circunstancias, ambos sectores contendientes aceptaron la mediación norteamericana, pues Estados Unidos estaba urgido de pacificar el país para continuar adelante con su plan de terminar la construcción del canal de Panamá.

De esta forma se firmó, el 24 de octubre de 1902, el llamado Pacto de Norlandia, entre el jefe militar del gobierno, general Juan B. Tovar, y el general insurrecto Rafael Uribe Uribe. Un mes más tarde, el 21 de noviembre, a bordo del acorazado norteamericana *Wisconsin*, integrante de la flota de Estados Unidos anclada en

Panamá, el general Benjamín Herrera ratificó la vigencia del pacto para el istmo con el general conservador Nicolás Perdomo, lo que significaba la rendición de los primeros a cambio de garantías para sus dirigentes.

Hasta ese momento Panamá se había marginado sistemáticamente de las luchas intestinas entre liberales y conservadores colombianos, pero en esta ocasión el apoyo a los primeros significaba la posible recuperación de la autonomía istmeña, perdida en 1886. Por eso la guerra tuvo aquí un escenario particular, al extremo que mientras los liberales eran derrotados en Colombia se imponían en Panamá.

Además, aquí la contienda había adquirido contornos sociales con las demandas agraristas de los miles de *cholos* que seguían al jefe guerrillero campesino Victoriano Lorenzo. Eso explica el fusilamiento en Chiriquí de Lorenzo, el 15 de mayo de 1903, víctima de una traición, y la salida de Panamá de los principales caudillos liberales.

Conseguida la tranquilidad de Panamá, los Estados Unidos pudieron seguir adelante con sus planes para la construcción de un canal interoceánico, para lo cual tenían de aliados a los *rabiblancos*, o sea, la oligarquía conservadora de Panamá, encabezada por Manuel Amador Guerrero, Tomás Arias y Federico Boyd. En septiembre de 1903, el francés Philippe Buneau-Varilla, abogado y copropietario de la compañía francesa dueña de las instalaciones canaleras en construcción, y el panameño Manuel Amador Guerrero, urdieron en Nueva York todos los detalles del último capítulo del plan.

El 3 de noviembre de ese año, bajo la protección de los cañones de la escuadra norteamericana anclada en las aguas cercanas, se proclamó la independencia de Panamá y el propio Amador Guerrero fue declarado su primer presidente, gobierno reconocido al día siguiente por Estados Unidos. Las tropas colombianas enviadas a impedir la separación, comandadas por el general Daniel Ortiz, fueron detenidas en Titumate por buques norteamericanos y obligadas a suspender cualquier acción ofensiva.

Solo dos semanas después, el 18 de noviembre, se firmó el Tratado Hay-Buneau Varilla, en una ceremonia en Estados Unidos donde el propio abogado de la empresa francesa representó al recién

creado gobierno de Panamá. Las cláusulas de este acuerdo eran todavía más onerosas que las del Hay-Herrán, pues ahora la concesión era a perpetuidad y se entregaban 10 millas a todo lo largo de ambas riberas del futuro canal, cediendo la soberanía sobre toda esa franja terrestre a Estados Unidos.

A continuación, entre el 3 y el 6 de diciembre de 1903, se «negoció» entre los dos países el farisaico convenio Taft, que mediatizaba la nueva república. Desde ese momento, Panamá quedó convertido en una especie de protectorado de Estados Unidos, al que se le impuso una constitución en 1904 que, como la enmienda Platt impuesta a la carta magna cubana de 1901, permitía la intervención militar norteamericana en su territorio.

El canal fue inaugurado finalmente en 1914, tras ser resueltos los problemas financieros, de diseño y de salubridad –este último gracias al descubrimiento del agente trasmisor de la fiebre amarilla por el cubano Carlos J. Finlay– que habían paralizado el proyecto francés. Para terminar la descomunal obra, fue necesario movilizar más de 27 mil negros antillanos, de habla inglesa y francesa, indios y chinos y 12 mil obreros europeos, fundamentalmente españoles, italianos, griegos y franceses.

El canal de Panamá reportaría a Estados Unidos ganancias incalculables, no tanto por el cobro del peaje, sino sobre todo por el ahorro en tiempo y distancia para el tráfico marítimo internacional. También las bases militares en la zona se convertirían en un arma de control sobre América Latina y centro de instrucción y adoctrinamiento de sus oficiales jóvenes.

El corolario Roosevelt

Después de la ocupación de Panamá, los Estados Unidos continuaron ampliando su influencia e intereses en la región de Centroamérica y el Caribe mediante diversos métodos, aunque los más usuales fueron los de establecer gobiernos adictos y/o la intervención militar directa (*big sitck*), bajo el amparo del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe.

El origen de este corolario se relaciona con otro episodio de las rivalidades interimperialistas. Desde la independencia de los países latinoamericanos era usual que las potencias europeas resolvieran sus reclamaciones financieras a las débiles naciones de este continente mediante el bloqueo y bombardeo de sus costas y puertos –los primeros se habían registrado ya en 1838–, práctica que aún se utilizaba a comienzos del siglo XX.

Por ejemplo, el 9 de diciembre de 1902 Inglaterra, Alemania e Italia bloquearon y hostilizaron las costas de Venezuela (Maracaibo, La Guaira y Puerto Cabello) con sus escuadras, para exigir al gobierno de Cipriano Castro la satisfacción de sus reclamaciones financieras. Al frente de la llamada revolución liberal restauradora, Castro se había alzado contra el gobierno del *liberalismo amarillo* de Ignacio Andrade el 23 de mayo de 1899.

Tras la victoria militar en la sangrienta batalla de Tocuyito (Carabobo), se hicieron del poder en Venezuela, desde octubre de ese año, los caudillos andinos procedentes del Táchira, encabezado por Cipriano Castro y su compadre Juan Vicente Gómez. Pero su victoria no tranquilizó la tierra venezolana, pues la guerra civil entre las facciones liberales se prolongó hasta fines de 1902 y principios de 1903, dejando como saldo un país exhausto, arruinado y endeudado.

De ahí la presencia de barcos de las potencias acreedoras en el litoral de Venezuela desde diciembre de 1902, que bloquearon durante dos meses, llegando incluso a atacar poblados costeros y puertos. En esas condiciones, Estados Unidos presionó a todos los involucrados a aceptar el arbitraje internacional –las escuadras europeas aceptaron retirarse el 19 de febrero de 1903–, a pesar de los llamados de la prensa norteamericana para no hacer nada en favor de «los desacreditados e insolventes países sur y centroamericanos».[3] Al final, los Protocolos de Washington obligaron al presidente Castro a aceptar las reclamaciones de las potencias imperialistas europeas.

Como la endémica insolvencia financiera de los países latinoamericanos era el pretexto esgrimido por las potencias acreedoras europeas

[3] Apolinar Díaz-Callejas, *Colombia Estados Unidos. Entre la autonomía y la subordinación de la independencia a Panamá*, Santafé de Bogotá, Planeta, 1997, p. 388.

para este tipo de intervención militar, el presidente norteamericano aprovechó la quiebra fiscal de la República Dominicana en 1904 para lanzar, en su mensaje anual de diciembre de ese año, su doctrina de intervención preventiva. En ella señalaba que si una nación de este continente no cumplía con sus obligaciones en el pago de sus deudas, Estados Unidos se vería obligado «a ejercer la facultad de policía internacional».[4]

Esta fórmula, permitía a Estados Unidos satisfacer los intereses y demandas de los acreedores y, al mismo tiempo, mantener vigente la doctrina Monroe, al evitar la intromisión directa de potencias extracontinentales en América. Frente a estas tesis intervencionistas, algunos gobiernos latinoamericanos habían esgrimido dos doctrinas elaboradas por los diplomáticos argentinos, Carlos Calvo y Luis Drago. La primera exigía el respeto a la soberanía jurídica de los estados, al que los extranjeros debían someter sus reclamaciones y aceptar sus decisiones (1896), mientras la segunda rechazaba el uso de la fuerza para cobrar deudas contraídas por una nación (1902).

El garrote que Roosevelt pretendía blandir sobre América Latina descansaba en lo fundamental en la fuerza del ejército norteamericano, cuyos efectivos se habían empezado a fortalecer desde la guerra hispano-cubano-norteamericana de 1898. Además, la economía de Estados Unidos estaba en plena expansión, al extremo que su comercio se triplicaría entre 1900 y 1910, lo que proporcionó una indispensable base interna a la agresiva política exterior de Roosevelt.

La primera víctima de la aplicación del corolario Roosevelt a la doctrina Monroe fue precisamente la República Dominicana el 4 de febrero de 1905, a la que Estados Unidos, alegando la inminente amenaza de una intervención europea –barcos de guerra de las potencias acreedoras, Alemania, Francia, Italia y Holanda, merodeaban por sus costas–, impuso el control de sus finanzas y aduanas, convirtiendo en nominal su soberanía. No obstante, en 1916 el presidente Wilson llegó todavía más lejos cuando dispuso la ocupación militar directa, que se extendió hasta 1924.

[4] «Discurso del presidente Theodore Roosevelt al Congreso de Estados Unidos». En Leslie Bethell [editor], *Historia de América Latina*, tomo VII, Cambridge University Press-Editorial Crítica, 1991, p. 89.

A la primera intervención norteamericana en Santo Domingo seguirían muchas otras en la región de Centroamérica y el Caribe, algunas de ellas fundamentadas con otros argumentos, como las de Cuba (1906-1909), Nicaragua (1912-1925), México (1914 y 1917), Haití (1915-1934) y la ya mencionada de República Dominicana (1916-1924). Como colofón, Estados Unidos compró en 1916 las islas Vírgenes a Dinamarca, con lo que dispuso de una virtual base para controlar todos los accesos a la región.

Como parte de esa ofensiva desenfrenada, Estados Unidos logró convertir al Caribe en un verdadero *mare nostrum* norteamericano, mediante una brutal expansión intervencionista (garrote) y los más sutiles mecanismos de la dominación económica (diplomacia del dólar), supuestamente dirigida a sustituir las balas por el capital. La llamada diplomacia del dólar fue enarbolada por el sucesor de Roosevelt en la presidencia de Estados Unidos, el también republicano William H. Taft, y alentaba a los banqueros norteamericanos a refinanciar los bonos de los países latinoamericanos insolventes para prevenir una posible intervención europea.

Estas políticas agresivas, típicas de una potencia imperialista que llegaba tarde al reparto del mundo, terminó por convertir a las naciones de la región en un rosario de repúblicas bananeras o en simples eslabones de una cadena de virtuales protectorados sometidos al absoluto control de los monopolios de Estados Unidos. Para alcanzar esos resultados en América Central y el Caribe se llegó al extremo de la ocupación militar (Cuba, Panamá, República Dominicana, Haití, Nicaragua, etc.), mientras que en otros países del hemisferio, más alejados, se empleaban técnicas más sutiles como las del control financiero (Bolivia, Colombia, Perú, Chile).

Por lo general, a los primeros, cuyos territorios quedaban bajo el control de la infantería de marina de Estados Unidos, se les imponían constituciones, leyes y tratados comerciales que facilitaran la ulterior penetración de los capitales y las manufacturas norteamericanas, en perjuicio de los intereses nacionales y europeos. Esa política seguía la pauta que había estado detrás de la intervención en Cuba (1898) y la adopción de la enmienda Platt (1901), fórmula que se había vuelto a aplicar en Panamá (1903-1904).

República Dominicana: protectorado norteamericano

La intervención norteamericana en Santo Domingo tuvo como pretexto las reclamaciones europeas a su erario público. El origen de la deuda dominicana se remontaba al contrato del presidente Buenaventura Báez, que había gobernado la República Dominicana por última vez de 1868 a 1873, período cuando firmó con la casa Hartmond de Londres (1869) un empréstito muy oneroso para el país.

Después, el presidente Ulises Heureaux, antiguo subordinado de Luperón –bajo cuya impronta se hicieron varias reformas positivas en el país– y figura dominante durante las dos últimas décadas del siglo XIX, consiguió dos décadas de estabilidad económica y política a costa de dos nuevos préstamos foráneos, en 1888 y 1890, con la compañía holandesa Westendorp. Tras su asesinato, el 26 de julio de 1899, se reiniciaron las convulsiones políticas y la inestabilidad económica en esta agobiada nación caribeña.

La deuda dominicana siguió creciendo en forma espuria hasta su traspaso a la Santo Domingo Improvement Company of New York (1893), lo que la convirtió en la manzana de la discordia con Estados Unidos. Fue precisamente el problema del pago de la deuda el motivo esgrimido para la ocupación norteamericana de la República Dominicana a partir del 15 de mayo de 1916, incumpliendo lo pactado con esta nación en el tratado de 1907, que la había convertido en un virtual protectorado.

A esta llamada convención domínico-americana se había llegado como resultado del protocolo firmado en enero de 1903 entre el gobierno norteamericano y el presidente dominicano, general Horacio Vázquez, que establecía plazos para amortizar la deuda, adquirida por Estados Unidos, y obligaba, en caso de incumplimiento, a entregar la aduana de Puerto Plata a un agente financiero estadounidense, lo que en definitiva ocurrió al año siguiente. En esas condiciones, otras potencias acreedoras (Francia y Bélgica) exigieron también el control de otras aduanas en la República Dominicana, lo que llevó a Estados Unidos, para impedir la intervención militar de

estos países como acababa de ocurrir en Venezuela, a proclamar el corolario Roosevelt.

Eso explica que el gobierno norteamericano impusiera a Santo Domingo, en febrero de 1905, durante el mandato de Ramón Cáceres (1905-1911), un protocolo, seguido en 1907 de un tratado formal entre las dos naciones. Este acuerdo dejó en manos de Estados Unidos la totalidad de las aduanas, quedándose con más de la mitad de las recaudaciones para el pago a los acreedores norteamericanos y europeos.

En 1916, los Estados Unidos exigieron al siguiente presidente de la República Dominicana, Juan Isidro Jimenes, la modificación de algunos artículos del convenio de 1907 sobre la deuda pública, con la finalidad de aumentar el control norteamericano en la economía dominicana y sustituir al viejo ejército por uno más moderno puesto a su servicio. El 7 de mayo el presidente Jimenes fue derribado por un golpe militar liderado por el general Desiderio Arias, que no fue aceptado por Estados Unidos pues lo acusaban de germanófilo. Unos días después (15 de mayo) los *marines* desembarcaron y ocuparon el país.

Pero la invasión estuvo lejos de ser tranquila. Focos de resistencia aparecieron en distintos lugares del territorio nacional. La ciudad de Puerto Plata, negada a rendirse, fue bombardeada por barcos norteamericanos. Ante la abrumadora supremacía enemiga, el general Arias se vio obligado a capitular y a aceptar la disolución del ejército.

En esas condiciones, el Congreso dominicano, con el respaldo de todos los partidos y facciones políticas eligió, en un acto de soberanía, a Francisco Henríquez y Carvajal, un reconocido intelectual nacionalista y que fuera gran amigo de José Martí, como nuevo presidente el 25 de julio de 1916. En ese momento, el flamante mandatario radicaba en Santiago de Cuba –donde residía desde 1904–, y acababa de llegar a esta ciudad del oriente cubano tras cumplir una encomienda diplomática en Buenos Aires del propio presidente Jimenes.

Cuatro días después arribó a Santo Domingo, en donde fue recibido y aclamado por una inmensa muchedumbre. Desde ese momento, el presidente Henríquez y Carvajal hizo múltiples y persistentes intentos para, en las difíciles condiciones en que asumió el cargo, hacer respetar

a los *marines* la soberanía dominicana, abriendo arduas negociaciones con los Estados Unidos, que en violación del convenio de 1907 habían asumido en forma unilateral, e ilegalmente, el control absoluto de las rentas del país, dejando al gabinete sin fondos para funcionar.

La postura digna y valiente del presidente Henríquez y Carvajal frente a los invasores de su patria, determinó que el gobierno de Estados Unidos no lo reconociera como mandatario. Al final, los norteamericanos, *manu militari*, obligaron al presidente dominicano a renunciar el 8 de diciembre de 1916, cuatro días después de protestar por la infame proclama del 29 de noviembre que establecía un gobierno interventor, firmada por el capitán de navío Harry. S. Knapp desde su barco fondeado frente a Santo Domingo. La República Dominicana quedó así totalmente sometida por los Estados Unidos.

El gobierno militar de ocupación impuso entonces una política proclive a la penetración del capital y las manufacturas norteamericanas. Para facilitar el despojo de tierras a favor de los monopolios estadounidenses fue aprobada una legislación especial (1920) –permitió a las compañías azucareras de Estados Unidos apoderarse de la cuarta parte de la superficie agrícola del país–, se impusieron nuevos empréstitos y un arancel de aduanas en beneficio de los exportadores norteamericanos.

En esas condiciones, la producción de azúcar se duplicó, desplazando la producción autóctona de cacao, tabaco, café y otros rubros. Por último, el 7 de abril de 1917, se organizó una Guardia Nacional comandada por oficiales norteamericanos.

Esta fuerza militar auxilió a los *marines* en la lucha contra la resistencia armada de los *gavilleros*, bandas armadas de campesinos pobres, dirigidos por Vicente Evangelista, Ramón Nativa, Ramón Baitia, Martín Peguero y Fidel Ferrer, negados a aceptar la presencia norteamericana en suelo dominicano. En la cruel represión contra los *gavilleros*, que hacia 1922 estaban prácticamente aniquilados, sobresalió por su carácter represivo y ambicioso el joven oficial de la Guardia Nacional Rafael Leónidas Trujillo.

En 1922, sobre la base de lo acordado en el Plan Hughes-Peynado (1921), se validaron todos los actos de los invasores norteamericanos y los mecanismos de control de 1907, a lo que se opuso la Unión Nacional Dominicana, exigiendo la desocupación

sin concesiones. Establecido un gobierno provisional se convocó a elecciones, en las que resultó triunfador Horacio Vázquez. Después de la toma de posesión del nuevo mandatario, el 12 de julio de 1924, las fuerzas de ocupación abandonaron el territorio de la República Dominicana.

Como garante de los intereses de Estados Unidos quedó la Guardia Nacional, encabezada por el general Trujillo, quien no tardaría en hacerse con la presidencia de la República Dominicana. En febrero de 1930 estalló una exitosa revuelta, encabezada por el general Rafael Estrella Ureña contra el presidente Vázquez que pretendía reelegirse, a la que se unió Trujillo, lo que le allanó el camino a la primera magistratura, el 16 de mayo de ese mismo año, en unos comicios en donde figuraba como único candidato. Se iniciaba la terrible era de Trujillo, que se extendería por tres décadas.

Agresiva presencia estadounidense en Nicaragua

Los estrechos vínculos existentes entre el garrote de Roosevelt y la diplomacia del dólar de su sucesor Taft quedaron ilustrados con los sucesos de Nicaragua en 1909. En este país centroamericano gobernaba desde 1893 el liberal José Santos Zelaya, quien había dictado una serie de reformas de carácter antifeudal y anticlerical y recuperado la costa de los Mosquitos a la soberanía nacional. Pero el mandatario nicaragüense había negado cualquier derecho de soberanía a Estados Unidos sobre una posible vía canalera por su país y rechazado un leonino empréstito norteamericano.

El fusilamiento de dos estadounidenses por el gobierno de Zelaya, el 16 de noviembre de 1909, sirvió de pretexto a Estados Unidos, en medio de una sublevación conservadora encabezada por Emiliano Chamorro y Adolfo Díaz, para exigir su renuncia. Barcos de guerra norteamericanos facilitaron armas y abastecimientos a los sublevados. Para evitar una intervención militar directa de Estados Unidos, Zelaya se vio obligado a dimitir el 16 de diciembre de ese año, lo mismo que tendría que hacer su sucesor en la presidencia,

José Madriz, el 20 de agosto de 1910, lo que de todos modos no impidió el desembarco de los *marines*.

Bajo el nuevo gobierno de Juan J. Estrada, hechura de la intervención, se aceptó un empréstito norteamericano y la entrega de las aduanas a Estados Unidos por los llamados acuerdos Dawson. La revelación pública del contenido de este pacto entreguista provocó la caída del gobierno de Estrada, sustituido por Adolfo Díaz. En repudio a estos hechos se produjo la sublevación de los generales Luis Mena y Benjamín Zeledón, el 29 de julio de 1912.

Ello determinó la nueva intervención norteamericana del 3 de octubre de ese año, que dio por resultado la expulsión de Mena a Panamá y la muerte de Zeledón en combate con los *marines* norteamericanos un día después. No obstante la derrota de sus opositores, la ocupación de las fuerzas armadas de Estados Unidos se mantuvo hasta 1925.

En ese contexto, Estados Unidos impuso a Nicaragua el tratado Bryan-Chamorro de 1916. El acuerdo garantizaba al gobierno de Washington el control sobre una posible ruta interoceánica por el territorio nicaragüense, el arrendamiento de las islas Maíz y la concesión para establecer una base naval en el golfo de Fonseca.

Ocupación de Haití por los marines

La historia de la ocupación de Haití por los *marines* norteamericanos está relacionada con las endémicas guerras civiles que sacudieron a la primera república latinoamericana independiente. Detrás de las continuas luchas por el poder y la inestabilidad política se encontraban las contradicciones entre los terratenientes negros del norte y los comerciantes y propietarios mulatos del sur.

Uno de los acontecimientos más trágicos de estas sangrientas luchas intestinas por el poder se produjo en 1912. El 8 de agosto el Palacio Nacional estalló a causa de una explosión que mató a centenares de soldados, incluido el presidente Cincinatus Leconte. A partir de estos sucesos, la crítica situación interna se agudizó: en menos de un año el país tuvo cinco presidentes.

El 27 de julio de 1915, fuerzas opositoras atacaron el Palacio Nacional y el jefe militar de la capital, general Oscar Etienne, ordenó la ejecución de un centenar de presos políticos. Al día siguiente, la airada población de Port-au-Prince asaltó los cuarteles, ejecutó al general Etienne y al presidente Vilbrum Guillaume Sam –refugiado en la legación francesa– y saqueo viviendas y comercios.

Estos graves acontecimientos sirvieron de pretexto para el desembarco de tropas norteamericanas, que en poco tiempo, ocuparon todo el país. Entre los objetivos de Estados Unidos estaba favorecer la libre entrada del capital y las manufacturas norteamericanas, hacerse del control del Banco Nacional, las aduanas y de la estratégica bahía de San Nicolás.

Para ocupar la presidencia de Haití, los norteamericanos desestimaron al doctor Rosalvo Bobo, quien tenía el respaldo de casi todos los líderes de los *cacós*, bandas armadas de campesinos pobres que generalmente servían como *guardia de corps* de los ricos propietarios negros del norte. Aunque los *marines* lograron desarmar a todos los bandos en pugna, los *cacós* se resistieron a entregar sus armas, por lo que fueron cruelmente combatidos por las fuerzas de ocupación, en particular en su baluarte de Cabo Haitiano. Uno de los últimos jefes *cacós* en caer, Ismael Codio, murió en combate en Fonds Parisien (1916).

El 12 de agosto de 1915 la Asamblea Nacional, en connivencia con las fuerzas militares norteamericanas, escogió como nuevo mandatario haitiano a Sudre Dartiguenave, quien el 16 de septiembre firmó un tratado con Estados Unidos que legalizaba la ocupación y la entrega de las aduanas, junto con otras importantes concesiones. Al año siguiente, el presidente Dartigenave disolvió la convención constituyente, por negarse los legisladores a aceptar las imposiciones estadounidenses a la constitución en preparación.

Al final, los haitianos debieron aceptar una nueva carta magna, elaborada por el entonces subsecretario de Marina de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. La constitución de Roosevelt para Haití suprimía la disposición de 1805 que prohibía la posesión de tierras a los extranjeros –lo que abrió las puertas al capital norteamericano– y en cierta forma permitía el restablecimiento de la

vieja *corvée*, sistema que obligaba a los campesinos pobres a trabajar en la construcción de caminos.

En este ambiente se revitalizó la lucha de los *cacós*, enardecidos por esta especie de «reforma agraria» al revés. Ahora el movimiento estaba encabezado por los líderes Chalemagne Peralte y Benoti Batraville. El 1 de noviembre de 1919, Peralte cayó prisionero, víctima de una traición, y murió brutalmente asesinado por los *marines* norteamericanos.

Pero la lucha de los *cacós* continuó bajo la dirección de Batraville, que llegó incluso a asediar la capital, pero a fines de 1919 fue también capturado y ejecutado. El fin de la resistencia de los *cacós* permitió extender la ocupación norteamericana de Haití hasta el 21 de agosto de 1934.

Avances del imperialismo norteamericano en América Latina hasta 1914

Hasta la década de 1890, las inversiones de Estados Unidos en América Latina eran relativamente pequeñas, concentradas en ferrocarriles y minas de México, en ingenios azucareros en Cuba. Estos dos países eran receptores del grueso de los intereses norteamericanos fuera de su territorio, con inversiones superiores a los 900 millones de dólares.

Al margen de Cuba y México, los capitalistas norteamericanos solo habían invertido a fines del siglo XIX en unas pocas líneas de ferrocarriles y plantaciones de plátanos de América Central, construidas por la United Fruit Company, así como por otras compañías similares que comenzaban a invertir en Ecuador, Colombia y Perú. En algunos de estos sitios, las empresas norteamericanas desarrollaron el sistema de enclave, que en la práctica enajenaba todo un vasto territorio a la soberanía de la nación.

Dos emprendedores empresarios de Estados Unidos fueron los prototipos de la desenfrenada actividad del capital norteamericano de esta época, que se expresó en la construcción de ferrocarriles en Perú y América Central: Henry Meiggs y Minor C. Keith, quien también levantó plantaciones bananeras en Costa Rica y Guatemala. De este modo, antes del estallido de la Primera Guerra Mundial,

la inversión estadounidense –tanto directa como en cartera– en América Latina pasó de unos 900 millones de dólares en 1897 a 1600 millones en 1914, concentrándose el 87% de este capital en México, Cuba, Chile y Perú, pues en estos dos últimos países había aumentado mucho la presencia de empresas de Estados Unidos en la minería.

A pesar de estos significativos avances de la inversión norteamericana en América latina, Inglaterra mantenía la supremacía. En 1914, el capital de Estados Unidos en la región representaba todavía menos de la mitad de la inversión de las compañas inglesas, calculadas en 5 mil millones de dólares, y solo era la tercera parte si sumamos todo el capital europeo, estimado en unos 7 mil millones de dólares.

Sin embargo, en la esfera comercial la situación era bien distinta, pues el predominio norteamericano era palpable en México, América Central, el Caribe hispánico y los países andinos –exceptuando a Chile–, que importaban más de los Estados Unidos que de Inglaterra, lo que era un cambio significativo en comparación con la situación de la última década del siglo XIX. En estas condiciones, las contradicciones interimperialistas por el dominio de América Latina en este período alcanzaron su máxima virulencia en México, durante las postrimerías del largo régimen porfirista, lo que contribuyó al estallido de la revolución de 1910 que trajo aparejado un verdadero despertar de movimientos nacionalistas y protestas sociales por todo el continente.

CAPÍTULO 9
DESPERTAR DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y NACIONALISTAS

La intervención militar de Estados Unidos en varios países de América Central y el Caribe alimentó, desde los inicios del siglo XX, los sentimientos de rebeldía en vastos sectores populares, impulsando el desarrollo de la conciencia nacional y las fuerzas nacionalistas y antimperialistas latinoamericanas. Incluso, en algunos lugares, surgieron espontáneos movimientos de resistencia que obligaron a la retirada de las tropas norteamericanas.

Manifestaciones de este fenómeno fueron la espontánea reacción armada de campesinos pobres en Haití, los llamados *cacós*, encabezados por Charlemagne Peralte, enfrentados a los *marines* estadounidenses que habían invadido su país y, en la vecina República Dominicana, la lucha contra los ocupantes extranjeros desarrollada por los *gavilleros.* Sin duda, la más alta expresión de estos movimientos fue la lucha armada de los seguidores de Augusto César Sandino contra la intervención norteamericana en Nicaragua.

Otra expresión de la resistencia latinoamericana a las descarnadas y brutales agresiones de Estados Unidos provino de los propios sectores gubernamentales, protagonizadas por figuras liberales con un ideario nacionalista y de defensa de la patria. Pueden mencionarse los casos relevantes de los mandatarios Cipriano Castro (1908) en Venezuela, José Santos Zelaya (1909) en Nicaragua, Francisco Henríquez y Carvajal en República Dominicana (1916) y los presidentes mexicanos Francisco I. Madero (1911) y Venustiano Carranza

(1914 y 1917). A ese listado debe agregarse la figura del gobernante chileno José Manuel Balmaceda, que de manera precursora enfrentó en Chile la injerencia imperialista, en este caso del capital británico, en una verdadera guerra civil en defensa de los intereses nacionales (1891) y que fue examinada en el capítulo anterior.

No obstante, lo más significativo de la arrancada del siglo XX fue el desarrollo de nuevos movimientos revolucionarios marcados por un programa social avanzado, de corte social, nacionalista y antimperialista, que sacudieron al continente de un extremo al otro. Uno de los más trascendentes fue la revolución mexicana de 1910, que incorporó a las luchas modernas a los pueblos originarios y a amplias poblaciones campesinas y sectores obreros, detrás de un ideario de justicia social y verdadera independencia.

En el plano de la cultura, el clima de efervescencia nacionalista y social se reflejó en la aparición de varias novelas que expresaban los acuciantes problemas que aquejaban a la sociedad latinoamericana sometida por los monopolios imperialistas y dictaduras entreguistas. Así en *La vorágine* (1924), el colombiano José Eustacio Rivera incursionó con profundidad en el tema de la despiadada explotación soportada por los trabajadores de las grandes plantaciones de caucho situadas en medio de la selva.

Por su parte, el venezolano Rómulo Gallegos recogía en *Doña Bárbara* (1929) toda la dura vida en una hacienda patriarcal de Los Llanos de Venezuela, mientras el argentino Ricardo Güiraldes en *Don Segundo Sombra* (1926) describía con crudeza las actividades del humilde gaucho. Casi en forma paralela, hacía su aparición en el Caribe la poesía *negrista* con las *operas primas* del puertorriqueño Luis Palés Matos y el cubano Nicolás Guillén, a la vez que en el campo de la antropología se realizaban las rigurosas investigaciones dedicadas a los aportes de los esclavos africanos y sus descendientes a la formación nacional de Brasil y Cuba, realizadas por Gilberto Freyre y Fernando Ortiz, respectivamente.

Auge de las luchas revolucionarias y antimperialistas

Una expresión más radical del despertar de la conciencia antimperialista se registró con el auge de las luchas obreras y la formación de los primeros partidos comunistas, bajo el impulso que representó la Revolución Rusa (1917), así como con el estallido de airadas revueltas campesinas y populares, entre ellas la revolución mexicana de 1910. Otras manifestaciones de ese fenómeno fueron la creciente radicalización de las capas medias, evidenciada con la reforma universitaria de Córdoba (1918), extendida después por casi toda América Latina, anunciando la incorporación del estudiantado a la lucha antimperialista y antioligárquica al lado de los trabajadores.

También debe mencionarse la fundación en Buenos Aires en 1922, por los socialistas argentinos José Ingenieros y Alfredo L. Palacios de la Unión Latinoamericana, con claros contornos antiimperialistas, y el surgimiento del *tenentismo* brasileño (1922), coronado por la larga marcha por el interior del Brasil, entre 1925 y 1927, de la legendaria columna rebelde de Luis Carlos Prestes. A esa relación debe agregarse la vertebración de movimientos patrióticos como el de Sandino en Nicaragua y la fundación de la Liga Antimperialista de las Américas. Los representantes de estas ligas, el cubano Julio Antonio Mella, el ítalo-argentino Vitorio Codovilla, el mexicano José Vasconcelos y el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, entre otros, participaron activamente en los trabajos del Congreso internacional de Bruselas contra el imperialismo y la opresión colonial (1927).

Haya fue también el creador en 1924, influido por la revolución mexicana y el Kuomintang de Sun Yat Sen en China, de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), cuyo lema original era: «Por el Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales contra el imperialismo. Por la unión económica y política de Indoamérica».[1] Uno de los fundadores de este movimiento fue el

[1] Eugenio Chang-Rodríguez, *Opciones políticas peruanas*, Trujillo-Perú, Editorial Normas Legales S.A., 1987, p. 118.

destacado pensador marxista peruano José Carlos Mariátegui, hasta que en 1927 se separó de esta organización tras condenar su anunciada conversión en un partido político peruano más, con un rumbo claudicante y reformista.

En consecuencia, en octubre de 1928, Mariátegui fundó el Partido Socialista del Perú, devenido después de su muerte en Partido Comunista (1930). Dos años antes Mariátegui había dado a conocer sus conocidos *Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana*, primera obra que se propuso aplicar las ideas de Marx a las peculiares condiciones de América Latina.

Sin duda, la revolución mexicana, iniciada en 1910, fue uno de los acontecimientos que más influyó en el extraordinario desarrollo de los movimientos revolucionarios y antimperialistas de las primeras décadas del siglo XX en América Latina, dominada entonces por regímenes antidemocráticos, plegados al capital extranjero y las oligarquías locales. Las consignas agraristas y de reivindicación nacional, primero, y la reforma agraria y la nacionalización del petróleo, después, concitaron grandes expectativas en el hemisferio, acompañadas de una gran ola de solidaridad y el despertar de sentimientos revolucionarios en vastos sectores populares.

La huella del imaginario mexicano puede encontrarse en la gesta de Augusto César Sandino en Nicaragua y en otros movimientos revolucionarios de la época y se expresó en la fundación de nuevas organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles, entre ellas las ligas antimperialistas y federaciones anticlericales. Varios procesos latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX fueron marcados de manera directa por la impronta revolucionaria de México y, muy en concreto, por la reforma agraria y la expropiación de empresas extranjeras.

La influencia de la Revolución Mexicana trascendió más allá del ámbito político y social. El reconocimiento del elemento mestizo e indígena como componente esencial en la formación nacional de América Latina impregnó diferentes manifestaciones de la cultura, expresión de lo cual fue, por ejemplo, el muralismo mexicano, e impulsó también novedosas investigaciones etnológicas, encaminadas al conocimiento de las preteridas poblaciones autóctonas del hemisferio.

Gracias al clima creado por el proceso revolucionario de México, a fines de los años veinte y principios de los treinta, se desarrolló en los países latinoamericanos una nueva novelística, que enfatizó en la crítica social. Una muestra de ello fue el creciente interés por reflejar en la literatura los problemas nacionales y, en particular, el tema de la explotación del campesinado. Las campañas educativas masivas, quedaron como referentes que luego fueron imitados en varios lugares del hemisferio.

La revolución mexicana de 1910

A diferencia de la tendencia que había prevalecido en el resto de América Latina en los inicios de la penetración imperialista, en México fue Estados Unidos y no Inglaterra quien primero dominó sus recursos naturales, la esfera productiva y los medios de transporte con una inversión que casi alcanzaba los 900 millones de dólares –en lo fundamental en ferrocarriles, así como en minas de cobre y plata. Esa cifra representaba casi la mitad de todo el capital norteamericano invertido entonces fuera de sus fronteras.

Sin embargo, en los primeros años del siglo XX, el gobierno de Porfirio Díaz, quizá para balancear la enorme influencia norteamericana en la economía y el comercio de México, otorgó cierta preferencia a los ingleses en la emergente producción petrolera. Ello le permitió al Reino Unido controlar la extracción de hidrocarburos en más del 65% (1910).

Desde ese momento, el volumen del capital británico en México ascendió a los 650 millones de dólares. En consecuencia, se agudizaron las rivalidades interimperialistas entre Inglaterra y Estados Unidos por el control de las enormes y variadas riquezas mexicanas, lo que se expresó en un aumento de las presiones de diversa índole que se hicieron sentir en México durante la última etapa del gobierno de Díaz.

Las causas de la revolución mexicana de 1910 se relacionan con los complejos procesos desatados por la prolongada dictadura de Porfirio Díaz, iniciada en 1876 tras la muerte de Benito Juárez

(1872) y el derrocamiento por la fuerza del presidente Sebastián Lerdo de Tejada (1876). Durante el porfirismo, la reforma liberal fue desviada en provecho exclusivo de la oligarquía terrateniente exportadora y el capital extranjero.

Durante su largo mandato, extendido hasta 1911, Porfirio Díaz no solo estableció un régimen represivo que acallaba a sangre y fuego cualquier brote opositor –como sucedió con las huelgas obreras de Cananea y Río Blanco (1906 y 1907)–, sino que también permitió que la propiedad latifundista, tanto nacional como foránea, se ampliara a costa del campesinado y las empobrecidas masas indígenas y mestizas. Como resultado de ese masivo proceso de expropiación, la población de México, estimada en 15 millones de habitantes en 1910, vivía en el campo el 77% y el 96.6% de ellos carecía de tierras.

Ese monumental despojo fue acelerado por la actividad de las llamadas «compañías deslindadoras», que con el pretexto de colonizar áreas despobladas, se apropiaron de tierras indígenas, comunales y de los pequeños campesinos. Por esta vía, y también por compras, trampas y otras ilegalidades, la mayor parte de los campesinos e indígenas fueron expulsados de sus parcelas y ejidos.

De esta manera, los trabajadores sin tierras fueron obligados a laborar en pésimas condiciones en la agricultura o en obras de infraestructura, en particular ferrocarriles, mientras se conformaban inmensas haciendas donde revivían viejos métodos serviles como el de los peones *acasillados*. Todo esto explica que en los años que anteceden al estallido de 1910, el campo mexicano fuera sacudido por una oleada de protestas campesinas, rebeliones y la proliferación de bandas armadas.

Contra el régimen porfirista no solo se producían las huelgas y protestas obreras, junto a los espontáneos levantamientos campesinos e indígenas, sino también se erguía la oposición de otros sectores sociales, en particular ciertos estratos de la burguesía y las capas medias. En este sentido, se fueron configurando entre 1900 y 1910 tres líneas principales de oposición: una organizada por el Partido Liberal Mexicano (PLM) –fundado en 1901– de los hermanos Enrique y Ricardo Flores Magón; otra en torno a los partidarios del general Bernardo Reyes; y, la tercera, vertebrada en torno al

Partido Antirreleccionista de Francisco I. Madero, creado el 15 de abril de 1910.

El gran descontento que el porfirismo generó en los más disímiles sectores de la sociedad mexicana con su política entreguista y antipopular estalló en 1910. La revolución comenzó cuando Francisco I. Madero, un terrateniente ligado a la relegada burguesía nacional –derrotado en la última reelección fraudulenta de Díaz en junio de ese año– proclamó el Plan San Luis Potosí que llamaba a la insurrección nacional contra la dictadura.

Este programa, elaborado en octubre de 1910, desconocía al gobierno de Díaz, esgrimía la «no reelección» presidencial, ofrecía la igualdad de derechos de mexicanos y extranjeros e incluía vagas promesas de devolución de tierras a los campesinos e indígenas. Además, convocaba para un levantamiento armado que debía estallar el 20 de noviembre de ese mismo año.

Entre los principales jefes surgidos en esta fase inicial de la revolución mexicana se encontraban Emiliano Zapata en Morelos, así como Pascual Orozco y Francisco, *Pancho*, Villa en Chihuahua. Para intentar mellar el filo social de la insurrección, que rápidamente se extendía por todo el país, la oligarquía porfirista –conocida como *científica* por su apego a la filosofía positivista entonces en boga– y los intereses extranjeros obligaron al viejo caudillo a firmar con los representantes de Madero los acuerdos de ciudad Juárez (mayo de 1911).

Este pacto entre los contendientes allanó el camino para entregar el gobierno al líder opositor, a cambio de desmovilizar sus ejércitos campesinos y de mantener intactos el aparato burocrático y las fuerzas represivas porfiristas. Sobre la base de esta transacción interburguesa, Madero pudo ocupar la presidencia –tras el breve interinato de Francisco León de la Barra– el 6 de noviembre de 1911, luego de unos comicios electorales en que no tuvo oposición.

La promesa incumplida de devolver las tierras usurpadas a los campesinos, contenida en el Plan San Luis Potosí, pronto le enajenó a Madero el apoyo de Zapata, quien terminó por enarbolar en Morelos su conocido Plan de Ayala, donde exigía una inmediata reforma agraria (25 de noviembre). Casi a la par, Orozco se volvió a sublevar en Chihuahua (marzo de 1912), mientras Ricardo Flores

Magón daba a conocer un manifiesto anarquista en el que se pronunciaba contra el capital, la autoridad, el clero y la propiedad privada.

Otros levantamientos antimaderistas, claramente identificados con el viejo porfirismo, ocurrieron casi en el mismo lapso protagonizados por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. El primero se produjo a partir del regreso a México del general Reyes, luego de los acuerdos de Ciudad Juárez, aunque este alto oficial fue capturado y enviado a prisión (diciembre de 1911). Por su parte, el general Félix Díaz, sobrino del ex dictador, sublevó el 16 de octubre de 1912 a la guarnición de Veracruz, pero el movimiento fue revertido y encarcelados sus principales jefes.

Estas intentonas reaccionarias contra Madero estaban también motivadas por las medidas nacionalistas y democráticas de su gobierno –que permitieron la fundación en la capital de la Casa del Obrero Mundial– y, sobre todo, por su tolerancia con las protestas obreras y campesinas que sacudían al país. Todo esto fue lo que condujo, el 9 de febrero de 1913, a la «decena trágica» –como fueron denominados los enfrentamientos armados en la capital entre las tropas gubernamentales, divididas en leales y contrarias a Madero–, que culminó con el sangriento golpe de Estado del general Victoriano Huerta, resultado de una descarnada conspiración fraguada en la propia sede de la Embajada de Estados Unidos en ciudad México.

El régimen de Huerta, erigido sobre los cadáveres de Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez –asesinados impunemente el 25 de febrero–, fue una reedición, corregida y aumentada, de la dictadura de Porfirio Díaz, quien murió exiliado en Francia a los 85 años de edad (1915). Contra ella se levantaron en armas Zapata en Morelos, donde operaba su denominado Ejército Libertador del Sur, y los titulados *constitucionalistas* de Venustiano Carranza, ex ministro de Madero y gobernador del estado de Coahuila.

Carranza enarboló el Plan de Guadalupe donde se proclamaba continuador del ideario maderista y fue secundado por las fuerzas rebeldes organizadas por los generales Álvaro Obregón, Pablo González y Pancho Villa, este último situado al frente de la poderosa División del Norte. La ofensiva militar contra Huerta se libró en lo fundamental por las tropas de Villa y Obregón, que se desplazaban

por las líneas de los ferrocarriles del centro y el oeste, respectivamente. Por su parte, el Ejército del Noreste, al mando del general Pablo González, desarrollaba una lucha incierta y marginal en los territorios de Tamaulipas, Nuevo León y otras zonas adyacentes a la costa atlántica.

El constante deterioro de la situación política mexicana y la postura pro europea de Huerta condujo en definitiva a los capitalistas estadounidenses –sobre todo los intereses financieros y ferrocarrileros– a pedir desde julio de 1913 una intervención militar en el vecino país. De ahí en adelante, la política de Estados Unidos se dirigió, al margen de algunas incongruencias y vacilaciones, a avivar la guerra civil en México, con la esperanza de que este paso debilitaría los bandos contendientes y facilitaría una solución favorable a sus intereses. El colofón fue el desembarco de tropas norteamericanas en Veracruz el 21 de abril de 1914.

En ese mismo mes los constitucionalistas, en su inexorable avance hacia la capital, tomaron Torreón, mientras por todo México se extendía la insurrección. Pero Huerta resistía más que Porfirio Díaz, pues las clases dominantes tradicionales comprendían que ahora no era posible una componenda como la vez anterior y presentían una mayor amenaza a sus privilegios y propiedades. Aunque Carranza, a diferencia de Zapata y Villa, se había opuesto a incorporar reivindicaciones sociales radicales en su Plan de Guadalupe, estaba decidido a rechazar las dos exigencias fundamentales de la vieja oligarquía: la conservación del ejército federal y la disolución de las fuerzas revolucionarias.

La estrepitosa caída de Huerta, acelerada por los efectos de la ocupación norteamericana de Veracruz, puso de nuevo sobre el tapete las latentes contradicciones entre los componentes burgués y campesino de la revolución. El primero, representado por Carranza y buena parte de sus generales; el segundo, por la División del Norte de Villa y el movimiento zapatista.

Carranza era continuador de la política liberal de Madero, pues se negaba a poner en vigor un programa de reivindicaciones populares fundamentales, mientras se rodeaba de un gabinete formado por intelectuales y figuras representativas de la burguesía, excluyendo en

la práctica a sus propios jefes militares de una participación efectiva en el gobierno. A pesar de ello, la composición social del movimiento constitucionalista se diferenciaba radicalmente del que apoyara a Madero, pues en este no ejercían influencia los viejos hacendados del porfiriato –derrotados y desalojados del poder–, sino un emergente grupo de políticos y oficiales, casi todos procedentes de las heterogéneas capas medias.

Este sector se había ido apoderando de muchas haciendas y negocios de la antigua oligarquía y, por tanto, tenía mucho que perder de retornar el antiguo régimen. Por eso, a diferencia de lo que hizo Madero, ahora se disolvió sin contemplaciones al ejército federal –acuerdos de Teoloyucan, 13 de agosto de 1914– y se expulsó a la burocracia porfirista de sus posiciones en el aparato estatal.

El 10 de octubre de 1914, con el propósito de definir el curso de la revolución, según lo acordado en el Pacto del Torreón (8 de julio), se reunió la Convención Militar de Aguascalientes. Aquí afloraron rápidamente las divergencias que separaban al ejército *constitucionalista* entre un ala campesina (Villa) –que pronto se alió a los representantes del ejército zapatista, invitados al cónclave– y otra burguesa (Carranza-Obregón) de la revolución mexicana.

El gobierno de la convención, encabezado por el general Eulalio Gutiérrez, que había nombrado a Villa comandante en jefe de las fuerzas militares y establecido su sede en la ciudad de México, no era un verdadero poder revolucionario y carecía de capacidad de gestión y autoridad, consecuencia directa de la incoherencia del movimiento campesino para vertebrar una política propia. Ni Villa ni Zapata tenían una proyección nacional de gobierno y solo se preocupaban del tema de los repartos agrarios, con agendas puramente regionales.

Tampoco pudieron establecer un clima de estabilidad en la capital, agobiada por una severa escasez de alimentos, agravada por comerciantes inescrupulosos, y una ola de extorsiones, saqueos y asesinatos. Por si esto fuera poco, los dos líderes campesinos abandonaron la ciudad de México entre los días 9 y 10 de diciembre de 1914.

Mientras los convencionistas controlaban por el momento la capital, además de la mayor parte del territorio nacional, y demostraban su incapacidad para gobernar el país, los seguidores de

Carranza fijaban en Veracruz la sede de un poder alternativo. Desde el principal puerto mexicano, los carrancistas aprobaban apresuradamente decretos sociales, adicionados al Plan de Guadalupe, y una ley agraria (6 de enero de 1915) para dejar sin programa a sus contrincantes.

En gran medida, este era resultado también de la creciente presión ejercida sobre Carranza por la oficialidad nacionalista, que lo obligaron a adoptar disposiciones sociales que terminarían por inclinar la balanza a su favor. Sin duda, ello facilitó después la toma de Puebla y la posterior ocupación de ciudad México por las fuerzas comandadas por Obregón (28 de enero de 1915).

Con su política reformista, los partidarios de Carranza lograron en esa difícil coyuntura atraerse también el apoyo de un amplio sector de la clase obrera. A lograrlo no solo contribuyó la postura nacionalista de Carranza y su respaldo a la formación de sindicatos en el territorio ocupado por sus fuerzas, sino también las contribuciones extraordinarias y requisas impuestas a ricos propietarios y comerciantes por Obregón, tras recapturar la ciudad de México, que aliviaron las penurias de la población urbana.

A partir de ese momento, el avance carrancista fue indetenible. Después de la recuperación de Puebla y la capital, la campaña del Ejército de Operaciones se extendió hacia el centro-norte del país (10 de marzo), en persecución de las fuerzas villistas, mientras las zapatistas quedaban aislados en su bastión de Morelos. Esa ofensiva culminó a mediados de 1915 cuando Obregón derrotó en cuatro grandes batallas –dos de ellas en Celaya (6-7 y 13 de abril) y las otras en Trinidad y Aguascalientes– a la División del Norte, que determinó el repliegue y la disolución de sus efectivos.

A este desenlace contribuyó la llamada invasión punitiva del ejército de Estados Unidos por la frontera norte, en marzo de 1916, enfilado contra los restos de las antiguas fuerzas del jefe de la División del Norte. No obstante, las tropas norteamericanas no pudieron cumplir sus objetivos –entre ellos la captura de Villa– y debieron retirarse de México un año después, ante las protestas de Carranza por esta injerencia extranjera en territorio mexicano y la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial.

A mediados de 1916, Pancho Villa reapareció al frente de sus huestes. Ya en octubre hacía un nuevo llamado a la resistencia nacional contra los invasores norteamericanos. Convertida otra vez Chihuahua en el centro de sus operaciones, y con un ejército estimado en más de cinco mil hombres, Villa devino en un verdadero azote a la estabilidad del gobierno carrancista. En noviembre y diciembre de ese año logró incluso tomar transitoriamente las ciudades de Torreón y Chihuahua.

Pero esta vez, el vertiginoso ascenso del villismo no duraría mucho tiempo. Su decadencia comenzó tras ser sorprendido por fuerzas carrancistas en la hacienda Babicora, en abril de 1917, aunque gracias a su experiencia guerrillera logró mantenerse en actividad hasta 1920, cuando finalmente depuso las armas. Tres años después fue asesinado. Sin duda en la derrota de Villa tuvo mucho que ver el cierre de la frontera decretado por Estados Unidos a principios de 1917, que cortó su fuente tradicional de aprovisionamiento.

Casi a la par proseguía en el sur la guerra genocida de Pablo González contra los seguidores de Zapata, que se transformaba otra vez en una campaña de exterminio contra la población campesina. Mediante una proclama, emitida el 11 de noviembre de 1916, González decretó el fusilamiento de todos los zapatistas y a quienes los apoyaran.

Pese a estas duras medidas, se consolidaban las bases campesinas del Ejército Libertador del Sur, pues el antiguo aparato estatal estaba destruido, las haciendas expropiadas y repartidas e instituido un sistema democrático basado en órganos electivos municipales. En esas circunstancias, Zapata pudo pasar a la ofensiva, hasta recuperar su dominio absoluto sobre el territorio de Morelos en febrero de 1917.

Por esta época, Zapata había devenido en un dirigente de estatura nacional, proclamando su solidaridad con los sindicatos –ya reprimidos duramente por Carranza– y ofreciendo todo su apoyo a las reivindicaciones económicas y sociales fundamentales de la clase obrera: derecho de asociación, de huelga, jornada de ocho horas y beneficios sociales. Además, el líder agrarista de Morelos no se limitaba a organizar eficientemente la administración de los territorios liberados, sino que llegó a

incursionar en asuntos de política exterior como ocurrió al saludar la revolución rusa, a la que comparó con la mexicana.

A pesar de que Zapata se esforzaba, en medio de grandes dificultades –agravadas por las crecientes disensiones internas de su movimiento–, por reconstruir la economía y la vida política de los pueblos en Morelos, su aislamiento se acentuaba, sobre todo, tras la promulgación de la constitución de 1917. A fines de ese año, cortadas sus vías de comunicación y aprovisionamiento con el exterior, las tropas de González lograron empujar otra vez a las fuerzas zapatistas hacia las montañas, donde siguió librándose la lucha guerrillera.

En esas condiciones Zapata, engañado por una argucia de las fuerzas enemigas guiadas por el coronel carrancista Jesús Guajardo, a las órdenes del sanguinario Pablo González, fue asesinado a traición en la hacienda de Chinameca el 10 de abril de 1919. El asesinato de Zapata, casi coincidente con la captura, enjuiciamiento y ejecución del lugarteniente de Villa, Felipe Ángeles, en noviembre de 1919, fue precedido de la puesta en vigor de la constitución de Querétaro; acontecimientos que sin duda contribuyeron a consolidar el triunfo carrancista y a estabilizar su dominio sobre el país.

La constitución de 1917, elaborada por una convención constituyente reunida en Querétaro desde el 21de noviembre de 1916, fue posible por la presión ejercida sobre Carranza por amplios sectores de sus propias fuerzas, que exigían el cumplimiento de las promesas y programas revolucionarios. En la flamante ley fundamental, aprobada el 31 de enero de 1917, fueron incluidos dos célebres artículos (27 y 123) destinados a asegurar a las nuevas clases dominantes, en un momento de agudas confrontaciones internas y externas, el indispensable respaldo popular para consolidarse en el poder.

El artículo 27 declaraba el derecho de los campesinos a la tierra y limitaba las prerrogativas del capital extranjero, al establecer claramente la potestad de la nación para confiscarla en su beneficio. Esto creaba el precedente constitucional para anular el derecho de las grandes compañías foráneas a explotar el hidrocarburo mexicano y abría la posibilidad de su expropiación legal.

Por su parte, el artículo 123 de la constitución de 1917 recogía toda una serie de reivindicaciones de los trabajadores, como el

derecho de sindicalización y huelga, la jornada de ocho horas en la industria y la seguridad social, que la hicieron la más avanzada del planeta. Otras disposiciones progresistas, en su mayoría tomadas de la plataforma de 1906 del Partido Liberal, fueron incluidas en otros artículos, como el 3 referido a la educación y el 130 sobre la secularización de los bienes de la Iglesia. Muchos de ellos fueron adoptados gracias a la actuación en la convención constituyente de figuras del ala nacionalista y de izquierda del carrancismo, entre ellos Francisco J. Mujica y Heriberto Jara.

Con la adopción de la constitución de 1917, se considera terminada la fase armada de la revolución mexicana. Ella recogió un avanzado articulado de corte social y antimperialista, entre ellos la proscripción del latifundio y la nacionalización del subsuelo, aunque más que un compendio de conquistas alcanzadas era todo un programa para las luchas futuras. A pesar de sus limitaciones, y la trágica desaparición del sector más avanzado del campesinado –representado por Zapata y Villa–, la revolución mexicana de 1910 fue el movimiento político-social más radical que hasta ese momento se había producido en el continente americano.

Reformismo democrático-burgués en Argentina y Uruguay

A diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, Argentina y Uruguay consiguieron ciertas ventajas en el proceso de su incorporación a la división internacional de trabajo creada a fines del siglo XIX y principios del XX, que les permitió ir conformando un sector popular urbano con niveles de ingresos más altos que en el resto de América Latina. Ello sentó las bases para que en las primeras décadas de esta última centuria surgieran regímenes políticos que, en cierta forma, se apartaron de la tradicional dependencia y sumisión a los dictados de las grandes potencias.

Factores de diversa índole favorecieron en Argentina y Uruguay el desarrollo de relaciones capitalistas más profundas y extendidas, en el contexto de un tipo de dominación menos directa que no anulaba,

como en las clásicas «repúblicas bananeras» de América Central, la relativa autonomía del estado nacional. En el caso argentino, ello se evidenció con el ascenso al poder en 1916 de Hipólito Irigoyen, candidato de un partido fundado en las postrimerías del siglo XIX: Unión Cívica Radical.

Los radicales, favorecidos por la reforma electoral de 1912 que implantó el sufragio universal masculino y el voto secreto (ley Sáenz Peña), gobernaron el país hasta 1930, cuando la oposición oligárquica, a través de un golpe militar, los sacó del poder. Irigoyen, presidente radical entre 1916 y 1922 y otra vez de 1928 a 1930, realizó una política contradictoria y zigzagueante.

Por un lado, realizó concesiones al movimiento obrero, como el establecimiento de la jornada de ocho horas. Por el otro, daba rienda suelta a la represión, de lo que fue muestra la violencia de la llamada «semana trágica» de diciembre de 1918, mientras ofrecía estímulos a la industria ligera nacional y daba rienda suelta al capital extranjero, salvo en el ramo del petróleo, donde fundó una empresa estatal (Yacimientos Petrolíferos Fiscales).

Otros ejemplos fueron la de entrega de tierras estatales a inmigrantes y campesinos medios, a través de la denominada ley del hogar de 1917, así como su relativa pasividad ante los privilegios de los grandes propietarios; de decidida condena a las intervenciones norteamericanas en el Caribe y Centroamérica y completa abulia frente a la desenfrenada penetración de los capitales de Estados Unidos en diversas ramas de la economía nacional. A su favor, sin embargo, debe mencionarse la digna postura asumida por su gobierno durante la Primera Guerra Mundial y el rechazó el nuevo reparto del mundo propugnado por las potencias imperialistas en la Liga de las Naciones.

Terminado su mandato, en 1922 se impuso la llamada tendencia «antipersonalista» del radicalismo, representada por Marcelo T. de Alvear, quien intentó acercarse a la derecha oligárquica y favoreció en forma más descarnada a los monopolios norteamericanos. El regreso de Irigoyen al poder en 1928, ya anciano y con el radicalismo muy debilitado, junto a la crisis económica de 1929, facilitaron el golpe de Estado militar que abrió la llamada «década infame» en

Argentina, poniendo al país bajo control de los militares al servicio del gran capital nacional y extranjero.

En Uruguay, por su parte, este proceso reformista adquirió sus propios contornos, a causa de la labor desplegada por un hábil político liberal, José Batlle y Ordóñez, líder del tradicional Partido Colorado. Desde su primera administración, de 1903 a 1907 –la segunda transcurrió entre 1911 y 1915, aunque su influencia en la política uruguaya se extendió hasta su muerte en 1933–, Batlle comenzó a echar las bases de la renovación de las instituciones estatales.

Tras liquidar el alzamiento de sus opositores del Partido Blanco (conservador) en 1904, el presidente colorado inauguró todo una era de profundas transformaciones democrático-burguesas que, sin afectar el gran latifundio exportador, impulsaron cierto desarrollo interno. Para ello implantó un capitalismo de estado, fundamentado en ciertas nacionalizaciones, proteccionismo aduanero, impulso a la actividad industrial y la creación de «entes autónomos», como las Usinas Eléctricas del Estado (1911).

También Batlle y Ordóñez promovió un novedoso sistema de gobierno de carácter colegiado inspirado en el de Suiza, sostenido por un Consejo Nacional de Administración para el manejo de todos los asuntos económicos internos. A ello hay que sumar la adopción de una legislación social progresista, que incluía jubilaciones, pensiones, jornada de ocho horas, enseñanza gratuita, descanso semanal y salario mínimo. Gran parte de estas conquistas fueron plasmadas en la constitución de 1917, que incluyó el voto secreto y universal, así como la separación de la Iglesia del Estado.

No obstante, en política exterior el batllismo se manifestó totalmente pronorteamericano, a diferencia de lo que hizo Irigoyen en la Argentina, contrario a las intervenciones de Estados Unidos en América Central y el Caribe. Esta postura de Batlle estaba en consonancia con su apertura al capital y al comercio de Estados Unidos en detrimento del británico: en el quinquenio 1889-1893 Inglaterra vendió a Uruguay entre un 27% y un 32% de sus importaciones y Estados Unidos solo entre el 4% y el 9%, mientras en 1920 las ventas inglesas eran solo 17% y las norteamericanas más del 35%.

Desarrollo del movimiento comunista en América Latina

A esa altura de los años veinte el movimiento comunista latinoamericano ya había alcanzado cierto desarrollo. El triunfo de la revolución rusa de 1917 impulsó en los pocos países donde existían partidos socialistas de cierta envergadura, en primer lugar Argentina, Uruguay y Chile, la diferenciación entre elementos radicales (leninistas) y moderados (socialdemócratas) que ya se venía registrando, como eco de los problemas que aquejaban a la II Internacional.

Al mismo tiempo, en varios países latinoamericanos se iban debilitando las fuerzas reformistas y anarquistas en el movimiento obrero organizado, mientras ascendían las influencias marxista bajo el influjo de la revolución bolchevique. Los acontecimientos rusos también encontraron partidarios y propagandistas en diversos periódicos y revistas de izquierda o progresistas e incluso en la propia prensa anarquista, apareciendo en ellos decretos y artículos de Lenin y otros dirigentes comunistas. Incluso figuras revolucionarias como el caudillo agrarista Emiliano Zapata, el pensador socialista argentino José Ingenieros o el líder anarquista Ricardo Flores Magón, saludaroz entusiasmados la revolución de Rusia.

En los países latinoamericanos donde existían agrupaciones socialistas, como el cono sur o México, estas se dividieron o radicalizaron entre 1918 y 1920, y de los sectores partidarios de Lenin surgieron partidos de nuevo tipo (comunistas) que enseguida se afiliaron a la III Internacional. En forma parecida surgieron, a fines de los años veinte y principios de los treinta, aunque en otro contexto histórico-mundial, los partidos comunistas en Colombia, Perú y Ecuador.

En otras repúblicas del continente, en cambio, como Brasil, Paraguay y las repúblicas de América Central, la aparición de partidos comunistas fue el resultado de la radicalización de pequeños núcleos de obreros e intelectuales anarquistas, en un proceso más distendido en el tiempo. Formas intermedias caracterizó la formación de la primeras organizaciones marxistas-leninistas en Cuba (1925), Bolivia (1928), Panamá (1930), Venezuela (1931), Puerto

Rico (1933) y Haití (1934), países donde fueron fruto de la unión de dirigentes obreros revolucionarios e intelectuales de izquierda, proceso promovido por la activa presencia de representantes de la III Internacional. Personalidades latinoamericanas descollantes en este proceso fundacional fueron Luis Emilio Recabarren, en todo el cono sur, José Carlos Mariátegui en Perú y Julio Antonio Mella en Cuba y México.

El *tenentismo*

El período de la llamada *República Velha* (1889-1930) en Brasil estuvo marcado por grandes turbulencias sociales y políticas, siendo el movimiento *tenentista* el de mayor repercusión. A fines del siglo XIX, la inestabilidad comenzó por las pugnas entre los partidarios de la defenestrada monarquía, los jefes militares artífices de la caída de Pedro II y las distintas tendencias republicanas, ejemplo de lo cual fue la rebelión federalista de Rio Grande do Sul (1892-1897).

Al margen de esos conflictos de las clases dominantes, se produjeron brotes de violencia campesina e intensas luchas obreras, expresión de las reivindicaciones insatisfechas de la mayoría del pueblo brasileño. Entre ellas pueden citarse la actividad de las bandas de asaltantes conocidas como *cangaceiros* –el más famoso fue Lampeao–, que lo mismo robaban en las haciendas que servían de *guardia de corps* de los *coroneles*. La lucha campesina que mayor conmoción causó en esos años fue la de Canudos (Bahía), un movimiento de carácter místico religioso, en ebullición de 1893 a 1897, y que serviría al escritor peruano Mario Vargas Llosa como tema de su novela *La Guerra del Fin del Mundo* (1981).

Brasil tampoco estuvo ajeno a las profundas consecuencias derivadas de la Primera Guerra Mundial. Ello se expresó en la eclosión de grandes huelgas obreras en los años de 1917 a 1920 dirigidas por el anarco-sindicalismo local en Rio de Janeiro y Sao Paulo; la fundación del Partido Comunista (1922) por un grupo de intelectuales y dirigentes obreros encabezados por Astrogildo Pereira; el estallido de revueltas campesinas como las del Contestado (1912-1915) en

Santa Catarina, así como a través de la radicalización de sectores de las capas medias que pretendían superar el obsoleto régimen de la oligarquía cafetalera con ciertas reformas nacionalistas y democráticas.

Eso fue precisamente el *tenentismo*, un movimiento militar que dejaría profunda huella en la historia contemporánea de Brasil. El 5 de julio de 1922 comenzó la sublevación de un grupo de jóvenes oficiales que deseaban impedir el acceso al poder de un nuevo representante de la oligarquía, Artur da Silva Bernardes, escogido como primer mandatario por el sistema del «café con leche», como se llamaba con fina ironía a la hegemonía de los ricos ganaderos de Rio Grande do Sul aliados a los poderosos cafetaleros de Sao Paulo.

Bajo el mando del capitán Hermes Rodrigues da Fonseca –hijo del Mariscal de Hierro–, los jóvenes oficiales, en su mayoría tenientes, se apoderaron del fuerte de Copacabana en Rio de Janeiro y la Escuela Militar del Realengo. La rebelión castrense se extendió a otras unidades del ejército, aunque pronto fue aplastada por el ejército.

La última resistencia la escenificó un grupo de 17 oficiales inmolados en la playa de Copacabana. Solo dos tenientes, Antonio Siquiera Campos y Eduardo Gomes, sobrevivieron. Por su parte, las tropas sublevadas en Minas Geraes se rindieron al enterarse del fracaso de la sublevación capitalina.

Al conmemorarse el segundo aniversario de estos sucesos, el 5 de julio de 1924, brotó de nuevo la sublevación *tenentista*, mucho mejor organizada que la anterior, pues logró el control de la populosa ciudad de Sao Paulo. Los rebeldes dieron a conocer un manifiesto donde abogaban por un nuevo gobierno, la elección de una constituyente y reformas políticas, entre ellas el voto secreto y la prohibición de la reelección presidencial.

Cuando fue imposible a los militares rebeldes continuar en Sao Paulo, se retiraron por tren a las zonas boscosas del Paraná, donde resistieron atrincherados por siete meses, rodeados por tropas varias veces superiores. Aunque la rebelión de la armada fracasó, en Paraná se les unieron las fuerzas sublevadas por el joven capitán Luis Carlos Prestes en Rio Grande do Sul, quien terminaría por imponer su tesis de la guerra móvil por el interior del país.

La marcha de la invicta columna Prestes duró varios meses y terminó en marzo de 1927 tras recorrer, a caballo o a pie, trece estados brasileños –más de 26 mil kilómetros– y de celebrar decenas de combates victoriosos contra las fuerzas regulares y bandas de *cangaçeiros* guiadas por 18 generales. Incapacitados para incorporar a las masas populares a un movimiento que se mantenía en los estrechos límites castrenses, sin inscribir en su lucha las reivindicaciones de las clases oprimidas, la columna estaba condenada al fracaso. Pero el recorrido sirvió para que muchos *tenentistas*, conmovidos por la terrible miseria del campo, se radicalizaran.

Incapacitados por sus prejuicios de casta y clase de incorporar a las masas a un movimiento exclusivamente militar, sin inscribir en sus objetivos las demandas económicas y sociales de las masas populares oprimidas, la columna Prestes quedó aislada con sus abstractos objetivos de democratización política. No obstante, muchos *tenentistas*, como el propio Prestes, terminarían radicalizándose y todos, de una u otra manera, estarían llamados a desempeñar un papel destacado en la sociedad y la política brasileñas.

Reverdecer del unionismo centroamericano

El ideal de la unidad de la América Central, por el que murieron en el siglo XIX figuras como el hondureño Francisco Morazán y el guatemalteco Justo Rufino Barrios, reverdeció con gran fuerza a principios del siglo XX. Ahora el movimiento unionista centroamericano tenía por eje a Guatemala, donde crecía la oposición a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, iniciada en 1898.

El eje del movimiento antidictatorial era la debilitada oligarquía conservadora, que había sido desalojada del poder a partir de la revolución liberal de 1871. También participaban en la lucha anticabrerista algunos representantes de la incipiente burguesía nacional, cuyos negocios se limitaban a una fábrica de cervezas y otra de cemento en la capital, así como ciertas industrias textiles en Quezaltenango. Sus líderes eran figuras prominentes de familias

acaudaladas, entre ellos, Manuel Cobos Batres, el obispo José Piñol y Batres, Emilio Escamilla y Rafael Aycinena.

El movimiento oposicionista no alcanzó verdadera fuerza hasta que se incorporaron las masas populares y sobre todo los reducidos núcleos de obreros y artesanos. De esta forma, la lucha contra el régimen cabrerista fue también la primera acción importante del naciente proletariado guatemalteco que, por primera vez en la historia, participaba en contiendas políticas.

La utilización de los trabajadores como tropa de choque por los círculos oligárquicos oposicionistas fue posible dada la escasa conciencia clasista de la naciente clase obrera guatemalteca, todavía agrupada en organizaciones mutualistas. Entre estas pueden mencionarse la Sociedad Joaquina (1898), La Gremial de Albañiles, la Sociedad de Tipógrafos, la Central de Artesanos y Albañiles, la Fraternidad de Barberos (1908) y la Federación de Sociedades Obreras (1912).

De todas las organizaciones proletarias, la más influyente era la Federación Obrera de Guatemala para la Protección Legal del Trabajo (FOG), fundada en 1918, que se hallaba dominada por agentes del gobierno y solo tímidamente planteaba algunas reivindicaciones. El predominio de la corriente mutualista en el movimiento obrero, junto a la unificación de las incipientes organizaciones ya existentes en una central «apolítica», determinó que los trabajadores más activos en la lucha anticabrerista, como Silverio Ortiz, Bernabé Salazar y Eusebio Castillo, vertebraran su propia asociación. Así nació, en julio de 1919, el Comité Patriótico Obrero, que más tarde se convirtió en la Liga Obrera.

Por su parte, los grupos burgueses y conservadores opuestos al régimen de Estrada Cabrera también creaban en 1919 su propia organización: el Partido Unionista. La agrupación adoptó un programa que giraba en torno a la reconstrucción de la unidad centroamericana en el centenario de la independencia. La plataforma incluía, junto a ciertas invocaciones religiosas, la demanda de elevar el nivel de vida de la población y de mejorar la instrucción pública, así como el derrocamiento de la dictadura y la formación, mediante elecciones libres, de un gobierno democrático de tipo parlamentario.

Con estas banderas, el movimiento anticabrerista creció en forma extraordinaria, mientras se incrementaba el descontento popular debido al incesante deterioro de la economía. Huelgas obreras –como la ferroviaria–, manifestaciones populares, protestas públicas y motines, pusieron en crisis a la dictadura que, tras resistir estos embates durante toda una semana, cayó finalmente el 9 de abril de 1920. Estrada Cabrera fue declarado «enfermo mental» y encarcelado –moriría en prisión tres años después– y en su lugar asumió la presidencia el magnate azucarero Carlos Herrera.

El gobierno de Herrera constituyó un breve paréntesis democrático. Durante su mandato, fue disuelto el abyecto congreso cabrerista y el 23 de junio se convocó a una Asamblea del Estado, llamada así pues Guatemala, siguiendo el ideario unionista, pasaba a integrarse en una federación con el nombre de República Mayor de Centroamérica, a la que también se habían adherido El Salvador y Honduras.

Otras medidas del gobierno de Herrera, dictadas bajo la presión parlamentaria, fueron la anulación de los contratos realizados en 1908 por la dictadura con la United Fruit Company (UFCO), cancelándose además la bochornosa concesión de la antigua planta eléctrica alemana, expropiada por Guatemala durante la Primera Guerra Mundial, a la Electric Bond and Share. Las medidas soberanas del presidente, quien tampoco aceptó las recomendaciones de la comisión presidida por Edwin Kemmerer para una reforma monetaria, le granjearon la hostilidad de Estados Unidos y sus aliados internos.

Para hacer más difícil la estabilidad gubernamental, la economía continuaba empeorando ante la indetenible caída de los precios del café en los mercados internacionales. Cuando Herrera se negó a contraer un nuevo empréstito con la banca norteamericana el ejército no esperó más y lo derrocó el 5 de diciembre de 1921.

El golpe de Estado contra el gobierno de Herrera estaba encabezado por militares de filiación liberal positivista. Ellos eran José María Orellana, Miguel Larrave y José Miguel Lima. La jefatura del nuevo régimen quedó en mano del general Orellana, ratificado por la disuelta asamblea cabrerista. Fue este mismo órgano el que

sancionó, el 14 de enero de 1922, la salida de Guatemala del efímero Pacto Federal.

Por su parte, el general Orellana derogó las disposiciones nacionalistas y democráticas de Herrera, aplicó la cuestionada reforma bancaria –fundación del Banco Central de Guatemala con capital mixto y establecimiento del quetzal como moneda oficial– y pagó una generosa compensación de un millón de dólares a la International Railway of Central America (IRCA), a cambio de una hipotética participación estatal en las utilidades de la empresa. Además, exoneró de impuestos a la UFCO y legalizó (1924) sus plantaciones en el litoral atlántico (Izabal).

Las luchas obreras contra la dictadura de Estrada Cabrera y las frustraciones posteriores, estimularon la radicalización de un grupo de vanguardia de la clase obrera guatemalteca. Ello ya pudo advertirse en el propio 1921, cuando en medio del clima democrático creado por Herrera aparecieron los primeros sindicatos, todavía con apreciables contingentes de artesanos en sus filas. Como parte de este proceso de concientización surgió Unificación Obrera, que poco después adoptaría el nombre de Unificación Obrera Socialista, clara muestra de su inclinación política.

Esta organización, en la que ejercían cierta influencia las ideas marxistas, quedó disuelta a raíz del golpe militar del general Orellana. Atacada por el aparato represivo del gobierno, la Unificación Obrera Socialista se fragmentó. Los más moderados terminaron atrapados por la maquinaria de los partidos tradicionales. Otro sector fundó una débil agrupación socialdemócrata llamada Partido Laborista. En cambio, un tercer grupo participó activamente en 1922 en la fundación de la sección guatemalteca del Partido Comunista de Centroamérica.

La matanza de las bananeras en Colombia

El principal problema que debieron enfrentar en Colombia los gobiernos conservadores y pronorteamericanos que dominaban la política nacional fue el despertar de las luchas sociales, en particular

de la clase obrera. El número de trabajadores había crecido en forma significativa como resultado de la modernización del país, el desarrollo de la infraestructura –puertos, ferrocarriles, electricidad, etc.–, la expansión de la economía de enclave –bananos y petróleo– y el despegue de la industria, particularmente en Antioquia, Barranquilla y Bogotá.

Fiel reflejo de ello, fue que los periódicos obreros se multiplicaron, entre ellos *El Ideal Obrero*, *El Socialista* y *El Obrero Moderno*, algunos bajo el influjo del pensamiento revolucionario del general Rafael Uribe Uribe. Este prestigioso líder liberal de inclinaciones socialistas, había sido asesinado en 1914, casi al mismo tiempo que se producían los primeros intentos de formar un partido marxista en Colombia.

En ese contexto, el 3 de enero de 1918, se inicio una de las primeras grandes huelgas de Colombia, al parar en sus labores los obreros portuarios de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, movimiento que se repitió al año siguiente en Girardot y Honda. La huelga fue dirigida por trabajadores ya permeados por ideas marxistas, pues a diferencia de otros países latinoamericanos la presencia anarco-sindicalista en el movimiento obrero colombiano era relativamente menor, debido quizás a la escasa influencia de inmigrantes.

A principios de 1919, se produjeron airadas protestas públicas en Bogotá por un contrato suscrito por el gobierno para adquirir en el extranjero los uniformes del ejército. La represión gubernamental contra los trabajadores y artesanos urbanos provocó la muerte de varias personas y el encarcelamiento de otras.

Al año siguiente, hubo nuevas huelgas en fábricas de Medellín, encabezados por Betsabé Espinosa, una activa líder femenina, en reclamos de aumentos salariales, al tiempo que se realizaban paros en el ferrocarril de La Dorada, propiedad de una compañía inglesa, y entre los trabajadores portuarios de Barranquilla y Puerto Colombia. En medio del ascenso de las protestas obreras, aparecieron los primeros sindicatos colombianos, favorecidos por las leyes que el gobierno se vio obligado a adoptar entre 1919 y 1920, entre ellas el reconocimiento del derecho de huelga de los trabajadores.

Ya a fines de 1918 había surgido la Confederación de Acción Social, algunos de cuyos dirigentes organizaron un partido obrero

de tendencia socialista, permeado por el liberalismo. Ya en las elecciones de 1921, el Partido Socialista logró en los barrios obreros de Medellín el 23% de los votos, mucho más que el alcanzado por el Partido Liberal (15%). En los comicios de 1922, los socialistas, encabezados por Juan de Dios Romero, Jorge Uribe y Salvador Murcia, apoyaron la candidatura del general liberal Benjamín Herrera.

En 1924 se celebró en Bogotá el primer congreso obrero, dominado por la ideología liberal, al que asistió el propio presidente de la República. Aprovechando las sesiones de este congreso de trabajadores reunido en la capital, y con algunos de los mismos delegados, se celebró la conferencia socialista nacional. El 5 de mayo de ese año, ella aprobó por amplia mayoría la adhesión del Partido Socialista a la Internacional Comunista de Moscú.

El tercer congreso obrero, celebrado en 1926 –dirigido por el sindicalista Ignacio Torres Giraldo y la líder antioqueña María Cano–, se produjo en medio de una marcada radicalización de las luchas populares, de marcado carácter antimperialista. Prueba de ello fue la fundación del Partido Socialista Revolucionario (PSR), pese a la resistencia de los líderes anarquistas Carlos F. León y Juan de Dios Romero.

El PSR, encabezado por Tomás Uribe Márquez, tenía entre sus miembros a figuras destacadas en las luchas obreras como Torres Giraldo, María Cano, Raúl E. Mahecha y Francisco de Heredia. En el proceso de acercamiento al marxismo leninismo de muchos de estos líderes socialistas había influido la prédica revolucionaria del emigrado ruso Silvestre Savitski, que fue expulsado del país en agosto de 1925.

En forma simultánea se iban organizando los estudiantes, que celebraron su primer congreso en Medellín en 1922, de donde saldría la Federación Nacional de Estudiantes. También en el seno del movimiento estudiantil se desarrollaría, desde 1927, un sector proclive al marxismo, donde figuraba Diego Montaña Cuellar.

En forma simultánea se intensificaban las huelgas y paros obreros. En octubre de 1924, los trabajadores de la Tropical Oil Company fueron a la huelga, llegando a ocupar la ciudad de Barrancabermeja. Este movimiento se extendió a Magdalena, Ambalema, Beltrán,

Girardot y La Dorada, así como a los trabajadores que construían un oleoducto.

Pero la huelga fue reprimida con gran violencia por el gobierno conservador, lo que no impidió que en 1927 se produjera otro intento similar contra la Tropical Oil Company, en esta ocasión con el saldo de dos obreros muertos. La huelga petrolera de 1927 y los paros de solidaridad de otros sectores proletarios fueron un verdadero hito en la historia del movimiento obrero colombiano.

El cuatrienio presidencial de Nel Ospina –y la primera etapa de su sucesor Miguel Abadía Méndez, extendida de 1926 a 1930– estuvo caracterizado por una bonanza económica que algunos llamaron la «danza de los millones». Entre los factores que la propiciaron estaban los altos precios del café en el mercado mundial –extendidos hasta fines de esa década–, y el inusitado crecimiento de las exportaciones colombianas, triplicadas entre 1923 y 1928, sobre todo de café, que llegó a representar más del 70% de ellas.

Al mismo tiempo fue implantada una nueva política financiera, propuesta por el técnico norteamericano Edwin Kemmerer, quien trasplantó a Colombia los modelos impositivos y financieros de Estados Unidos. Bajo su orientación, se constituyeron el Banco de la República –único autorizado para emitir papel moneda– y la Contraloría, se adoptó una ley bancaria, acompañada de una completa reforma del sistema fiscal y contable del Estado, a la vez que se otorgaban garantías a los inversores estadounidenses.

Como resultado de ello, la dependencia de Estados Unidos alcanzó niveles sin precedentes. En 1928 los préstamos norteamericanos superaban los 200 millones de dólares, a los que deben sumarse el monto del capital de Estados Unidos ubicado en el petróleo, banano, ferrocarriles y servicios públicos, calculado en unos 180 millones de dólares (1928). Por añadidura, la participación estadounidense en el comercio colombiano pasó de un valor de 61 millones de dólares en 1913 a 200 millones en 1929.

Fue en esas condiciones que las luchas sociales llegaron a su clímax. A esto contribuyó que en 1928 el Partido Socialista Revolucionario, que aglutinó a los primeros núcleos marxistas-leninistas colombianos, fuera admitido en la Internacional Comunista,

lo que impuso en esta organización la línea insurreccional conocida de «clase contra clase».

El conflicto de las bananeras se desató el 6 de octubre de 1928 en la provincia de Santa Marta, en contra del enclave agrícola de la United Fruit Company, empresa que violaba de manera sistemática las leyes laborales colombianas. La lucha obrera contra el monopolio frutero alcanzó grandes proporciones, pues los trabajadores agrícolas contaban con el apoyo de comerciantes y agricultores de la región, también afectados por el poderío y los métodos monopólicos de la empresa norteamericana.

La huelga fue encabezada por el comunista Raúl Eduardo Mahecha y José Russo y comprendió a los 20 mil obreros de costa atlántica colombiana. Durante tres semanas, los trabajadores de la United Fruit abandonaron pacíficamente sus labores, mientras el gobierno de Abadía Méndez establecía el estado de sitio.

Los obreros bananeros, dirigidos por la Unión Sindical de Trabajadores de Magdalena, exigían entre otras reivindicaciones, un contacto colectivo de trabajo, jornada de ocho horas, descanso dominical, aumento de los salarios y la superación de pago en vales. La unión de los obreros y la incapacidad gubernamental para quebrar la huelga, provocó que el general Carlos Cortés Vargas se decidiera a reprimir de forma sangrienta a los trabajadores.

El 6 de diciembre las tropas masacraron en forma indiscriminada a los obreros en la estación del ferrocarril de Ciénega, dejando en la zona a varias decenas de trabajadores muertos, entre ellos el líder del movimiento, Erasmo Coronel. La brutal acción gubernamental levantó protestas por todo el país.

La violencia de la represión gubernamental provocó sublevaciones populares, encabezadas por los dirigentes comunistas. Estas rebeliones alcanzaron grandes proporciones en Líbano, Santander, Tolima, San Vicente y Valle, en las que se destacaron los trabajadores ferroviarios.

En 1929, los dirigentes del Partido Socialista Revolucionario se reunieron en Bogotá, luego de las protestas populares de principios de junio de ese año por la destitución del alcalde de Bogotá Luis A. Cuervo, y continuaron adelante con sus planes insurreccionales,

produciéndose infructuosos levantamientos armados en varios lugares del país. El gobierno contrató entonces en la Italia fascista una misión para que asesorara a las fuerzas gubernamentales en métodos represivos más efectivos y regímenes carcelarios rigurosos.

En medio de la efervescencia revolucionaria, sobrevino la inesperada crisis económica capitalista de 1929 que derrumbó los precios del café y agravó repentinamente la ya difícil situación de los trabajadores. En estas circunstancias, el Partido Liberal se reestructuró, incorporó en su programa algunas demandas populares y cierta orientación nacionalista, y con estas características se presentó a las elecciones de 1930.

El Partido Liberal trató de canalizar en su favor los desmanes del gobierno conservador y las crecientes inquietudes e insatisfacciones populares, por lo que desplegó una campaña antigubernamental por la masacre de Santa Marta que fue dirigida por el joven líder Jorge Eliécer Gaitán. Como resultado de todo esto, el régimen conservador se desplomó, pues en las elecciones presidenciales triunfó el antioqueño Enrique Olaya Herrera, candidato de los liberales.

Nuevos avances de la dominación imperialista

Los años posteriores a la Primera Guerra Mundial tuvieron un profundo significado, pues se ahondaron las diferencias entre los intereses de las grandes potencias imperialistas y el de los pueblos explotados de este continente. Al mismo tiempo, Estados Unidos devino centro financiero de todo el planeta y sus monopolios intensificaron la penetración económica en América Latina, lo que trajo aparejado la agudización de las pugnas interimperialistas en la región, preludio de una nueva conflagración mundial.

La terminación de la Primera Guerra Mundial no produjo de inmediato el fin de la bonanza en la economía latinoamericana, aun cuando se registró una paulatina y cada vez más sensible caída de los precios de sus exportaciones y la quiebra de muchas industrias sustitutivas después del restablecimiento de las importaciones de manufacturas y productos fabriles. Pero en 1920 sobrevino de nuevo

una crisis de superproducción, que liquidó de golpe las ilusiones de un ininterrumpido proceso de prosperidad, aunque sin evidenciar todavía la caducidad de las viejas estructuras como se pondría de manifiesto a fines de esa misma década.

En consecuencia, entre 1914 y 1929, los ritmos de crecimiento de las inversiones norteamericanas en América Latina superaron de manera considerable a las inglesas, pues mientras estas pasaban en ese lapso de 5,589 a 4,983 millones de dólares, las de Estados Unidos lo hacían de 1,242 a 5,587 millones de dólares. Además, la tercera parte de todas las inversiones norteamericanas en el extranjero se concentraba en este hemisferio.

Otra prueba de la creciente superioridad de Estados Unidos estaba en el terreno financiero. En los años veinte los bancos estadounidenses concedieron empréstitos a las repúblicas latinoamericanas por un monto de 2,175 millones de dólares, mientras los ingleses se limitaban a 650 millones. También en la esfera mercantil, Estados Unidos aventajaba a Inglaterra: en 1929, el 34% de las exportaciones y el 39% de las importaciones de América Latina eran con los norteamericanos, mientras la proporción inglesa era del 19% y el 15%, respectivamente.

La creciente influencia de Estados Unidos en la región también puede medirse por la fuerza que iba cobrando el panamericanismo. Sus viejos planes de institucionalizar la alianza con los países latinoamericanos, para dejar fuera del juego a las otras potencias imperialistas, rindieron sus primeros frutos durante la década del veinte en las conferencias de Santiago de Chile (1923) y, sobre todo, de La Habana (1928), donde se aprobó una convención diseñada para regularizar el funcionamiento de la Unión Panamericana.

De esta forma, los países latinoamericanos, y en primer lugar los de Centroamérica y el Caribe, terminaron atrapados en las redes del capital foráneo, fundamentalmente norteamericano, que los convirtió en verdaderos prolongaciones o enclaves de su economía. Los monopolios de Estados Unidos se fueron apoderando de la producción, el transporte y la comercialización de los principales rubros de estos débiles y atrasados países, liquidando cualquier posibilidad de desarrollo propio y restringiendo al máximo sus soberanía; esto

es, las famosas «repúblicas bananeras» de las que se burlara el escritor humorista norteamericano O. Henry, por lo general coronadas con un dictador como especie de monarca tropical.

Para el gobierno de Estados Unidos, la existencia de dictaduras, respaldadas por un ejército organizado, entrenado y equipado por sus *marines*, se convirtió en la mejor garantía a sus intereses y en instrumento privilegiado para sostener su dominación en la región. Eso explica que ninguno de estos tiranos hubiera podido consolidarse en el poder sin la bendición norteamericana.

No por casualidad, casi todos los países centroamericanos y caribeños que fueron dominados por dictaduras habían sido víctimas de intervenciones militares, ocupación de territorios y despojos por parte de Estados Unidos, lo que fue el caldo de cultivo de estos regímenes tiránicos. Varios de los clásicos sátrapas caribeños de principios del siglo XX fueron fruto directo de la intervención militar norteamericana, que resguardó sus intereses mediante un nuevo cuerpo armado moldeado por Estados Unidos, haciendo innecesaria por más tiempo la presencia de los *marines*.

Esa tesis la enunció en 1928 el presidente electo estadounidense Herbert C. Hoover, quien declaró en Buenos Aires en ocasión de su recorrido por América Latina: «En el futuro, el gobierno norteamericano nunca intervendrá en los asuntos internos de otros países y respetará su soberanía».[2] Aunque el propio Hoover inició esa práctica, la misma fue consagrada por su sucesor en la primera magistratura de Estados Unidos Franklyn D. Roosevelt durante su mandato de 1933 a 1945 y fue conocida como la política del «buen vecino».

Desde entonces, el dictador caribeño devino en una especie de administrador local del capital norteamericano –aunque en determinados casos hicieron gala de cierta autonomía y de alguna resistencia a las decisiones imperiales que atentaban contra sus propios intereses–, el cual contribuía a despejar el camino hacia una modernización restringida de las relaciones socioeconómicas, acorde a las

[2] En Frank Moya Pons [Coordinador]: *Historia de la República Dominicana*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Academia Dominicana de la Historia/Ediciones Doce Calles, 2010, p. 465.

necesidades de los monopolios estadounidenses. Para afianzar ese papel, favorecieron los planes de introducir los adelantos técnicos de la época y movilizar los recursos productivos en aras de la expansión primario exportadora, promoviendo la inmigración de fuerza de trabajo barata y haciendo concesiones impositivas, legales, y otras, que estimularan la inversión extranjera.

Pero todo ello, sin permitir una democratización real de las relaciones sociales y políticas y de eliminar realmente, y no solo en lo nominal, las prácticas precapitalistas, que el bajo nivel de las fuerzas productivas convertía en mecanismo insustituible de la acumulación originaria. Así, en las primeras décadas del siglo XX, Centroamérica y el Caribe fueron dominadas por una generación de dictadores, algunos de los cuales sirvieron de fuente de inspiración a las obras *El recurso del método* (1974) del cubano Alejo Carpentier, *El otoño del patriarca* (1975) del colombiano Gabriel García Márquez y *La fiesta del Chivo* (2000) del peruano Mario Vargas Llosa.

A pesar de estar emparentadas por una serie de rasgos comunes, de desenvolverse en escenarios históricos parecidos, así como por su casi completa subordinación al capital estadounidense, los dictadores centroamericanos y caribeños de principios del siglo XX se diferenciaron entre sí por muchos elementos que les dieron sus propias singularidades y matices. Las primeras de estas dictaduras entreguistas fueron la de Juan Vicente Gómez en Venezuela y Gerardo Machado en Cuba, aunque la de Trujillo en República Dominica y los Somoza en Nicaragua se convirtieron en las expresiones clásicas de estos regímenes tiránicos.

La dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela

La primera de las dictaduras caribeñas que cumplimentó las características enunciadas fue la del general Juan Vicente Gómez en Venezuela, aun cuando en sentido estricto su régimen tiránico fuera una especie de transición de los viejos estilos caudillistas decimonónicos a los que vendrían después. El ascenso al primer plano de

Gómez estuvo asociado a la denominada revolución liberal restauradora que llevó al gobierno al general Cipriano Castro en 1899, de la que fue segundo jefe.

Desde ese momento, los caudillos andinos procedentes del Táchira, zona montañosa colindante con la República de Colombia, se hicieron del poder, rompiendo la tradicional procedencia regional de los gobernantes venezolanos, oriundos siempre de otras zonas del país. Pero el gobierno de Castro, que había golpeado duramente al viejo caudillismo regional y liquidado los desprestigiados partidos tradicionales, que tanto daño habían hecho al país, terminó expulsado por su compañero de armas y compadre Juan Vicente Gómez, quien inició entonces su larga dictadura en el país que duraría 27 años. El desplazamiento comenzó cuando Castro viajó a Europa en noviembre de 1908 y dejó a Gómez encargado de la presidencia.

Aprovechando su ausencia, Gómez se las arregló, con el apoyo de las potencias europeas y Estados Unidos –atraídas por el petróleo venezolano–, así como de las emergentes élites mineras que servían de testaferros a empresas foráneas, los terratenientes, grandes comerciantes y propietarios del país, para hacerse con el poder absoluto el 19 de diciembre de ese año.

Prueba de que una política diferente a la de su antecesor comenzaba fue el inmediato restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Además, se solicitó abiertamente la protección norteamericana, prometiendo a cambio abrir de par en par las puertas al capital foráneo y reconociendo todas las exigencias de Estados Unidos a Castro. Una nueva etapa en la historia de Venezuela se inauguraba, caracterizada por la política entreguista en materia petrolera de la dictadura gomecista.

El 13 de febrero de 1909 fueron firmados en Caracas los protocolos Buchanan-Gómez, que aceptaban todas las peticiones hechas por Estados Unidos a Venezuela, incluida la anulación de la indemnización a que había sido condenada por un tribunal venezolano la New York and Bermúdez Company. Eso explica que el gobierno norteamericano impidiera el regreso del ex presidente Castro a su tierra natal, quien se vio obligado a residir en Puerto Rico, donde murió en 1925. En esas condiciones, un dócil congreso nombró de

manera oficial al general Gómez como presidente de la república para el período 1909-1913.

Durante ese primer mandato, Gómez, favorecido por el mejoramiento de la situación económica –gracias a la recuperación de los volúmenes y precios de los productos de exportación–, terminó el proceso de liquidación de los caudillos liberales regionales, que históricamente desafiaban la autoridad del poder central, a la vez que permitió cierto ejercicio de las libertades públicas. Como disponía de mayores recursos que su antecesor, pudo regularizar los pagos de la deuda externa, cumpliendo los compromisos con los acreedores europeos y norteamericanos. Ese relativo crecimiento de la economía se vio estimulado por la eliminación de los impuestos a la exportación de café, cacao y cueros.

Entretanto, se dedicó también a fortalecer y modernizar al ejército, manteniendo en sus manos en forma férrea, hasta su muerte, la máxima jefatura militar. Al margen del ejército, Gómez creó un cuerpo especial armado denominado *La Sagrada*, compuesto en lo fundamental por hombres de su absoluta confianza provenientes del Táchira.

Al aproximarse el fin de su primer período presidencial, Gómez comenzó a maniobrar para perpetuarse en el poder, lo que trajo aparejado las primeras protestas estudiantiles contra su régimen y la clausura, por una década, de la Universidad Central de Caracas. En 1913, abortó la conspiración del general Román Delgado Chalbaud, encarcelado, con grilletes en sus pies, en la siniestra prisión de La Rotunda, durante catorce años.

Para facilitar su continuidad en la presidencia, Gómez colocó a sus acólitos en los cargos más importantes, a la vez que perseguía a los opositores, como al periodista Rafael Arévalo González, así como a los aspirantes a la sucesión, entre ellos el doctor Félix Montes, que fue obligado a exiliarse por 22 años. Con el pretexto de supuestas conspiraciones para derrocarlo o asesinarlo, suspendió las garantías constitucionales e impuso una reforma en la constitución, mientras promovía un movimiento nacional que reclamara su permanencia en el poder.

Entre 1915 y 1922 la presidencia fue ocupada formalmente por Victorino Márquez Bustillos, a quien siguió Juan Bautista Pérez,

de 1929 a 1931, y a continuación, en forma interina, el historiador José Gil Fortoul. Como Gil Fortoul, varios otros intelectuales de renombre sirvieron al dictador en diferentes puestos gubernamentales y/o diplomáticos, como fueron los casos de Román Cárdenas, Gumersindo Torres, César Zúmeta, Rubén González, Pedro M. Arcaya y Laureano Vallenilla Lanz, entre otros.

Ahora bien, lo que en definitiva garantizó la permanencia en el poder de la dictadura de Juan Vicente Gómez fue el auge de las exportaciones petroleras, que se convertiría en poco tiempo en el principal producto de exportación del país. El proceso de desplazamiento de los tradicionales rubros agropecuarios por el petróleo estuvo precedido de la crisis de la agricultura, desatada por la caída de los precios y las dificultades para las exportaciones que trajo aparejada la Primera Guerra Mundial.

El resultado inmediato fue la sensible disminución de las recaudaciones de aduana, principal fuente hasta entonces de los ingresos fiscales. Esta situación se prolongó con altibajos hasta la depresión capitalista de 1929, cuando el auge petrolero sepultó en forma definitiva a los productos agropecuarios de exportación.

Fue precisamente en esa coyuntura que se intensificó la extracción petrolera comercial a gran escala, iniciada por la Royal Dutch Shell en 1917, aunque los hidrocarburos no ocuparon el primer puesto en las exportaciones venezolanas hasta 1926, cuando su valor fue de 247 millones de bolívares. Esa cifra se duplicaría en pocos años, superando en forma amplia a los 149 millones reportados como ingresos por las exportaciones de los productos agropecuarios. En 1928 ya Venezuela se había convertido en el segundo productor mundial de petróleo –solo superado por los Estados Unidos– y en su primer exportador.

El *boom* petrolero facilitó también el debilitamiento de las arruinadas clases dominantes tradicionales, muchas de cuyas propiedades y haciendas fueron a manos del dictador, sus familiares y allegados. Este proceso estuvo asociado al desarrollo de nuevos sectores burgueses y de las capas medias y la aparición de un proletariado vinculado en lo fundamental a la extracción del petróleo.

Pero la tiranía gomecista no estuvo exenta de oposición, pues varios movimientos revolucionarios y conspiraciones se prepararon

en su contra. El primero de ellos fue el alzamiento en 1914 de Emilio Arévalo, casi al mismo tiempo del vertebrado por el general José Rafael Gabaldón y de la entrada por el oriente venezolano de un tercer grupo rebelde encabezado por Horacio Ducharne –quien fue asesinado tras ser hecho prisionero–, intentos todos fracasados.

En 1918 penetró por el Táchira procedente de Colombia otro contingente opositor comandado por el general Juan Pablo Peñaloza, también aniquilado; mientras al año siguiente se frustraba una conspiración militar vertebrada por el capitán Luis Rafael Pimentel. Muchos de los participantes en este último movimiento opositor murieron torturados en la mencionada cárcel gomecista de La Rotunda en Caracas. Entre 1919 y 1921 se produjeron otros intentos de derrocar a la dictadura protagonizados por viejos generales como Matías Peñuela, Constantino Pérez, Jesús Matamoros y Francisco Linares Alcántara, entre otros.

A la oposición tradicional pronto se unieron nuevos sectores sociales. Expresión de ello fueron las airadas manifestaciones estudiantiles que sacudieron la capital en 1919 y entre cuyos dirigentes se destacaron Gustavo Machado, Salvador de la Plaza y Pedro Zuloaga, los tres jóvenes procedentes de familias encumbradas de la antigua oligarquía. El gobierno de Gómez clausuró varias veces la Universidad Central de Caracas. Algunos de los participantes, como Gustavo Machado, estuvieron también complicados en la mencionada conspiración del capitán Pimentel y debieron abandonar el país.

También estallaron protestas y paros entre los artesanos y obreros, como la de los trabajadores tranviarios de la capital en 1921, que fueron respaldados por los estudiantes universitarios y que llevó otra vez a la clausura de la principal casa de estudios hasta 1925. Algunos de los líderes estudiantiles huyeron del país y se refugiaron en Cuba y México, país este último donde fueron acogidos con simpatía por el presidente Álvaro Obregón, lo que llevó a Gómez en 1923 a romper relaciones diplomáticas con el gobierno mexicano.

Fue precisamente en México donde se fundó en 1926 el Partido Revolucionario Venezolano (PRV) –núcleo inicial del Partido Comunista Venezolano–, entre cuyos organizadores estaban Gustavo y Eduardo Machado, Miguel Zúñiga, Julio Martínez y

Pedro Brito. El PRV adoptó un programa democrático liberal y de modernización del país, que incluía vigorizar el papel del Estado y regular al capital extranjero.

En julio de 1929 se creó en París la Junta de Liberación de Venezuela, en la que ocuparon sitio, entre otras figuras, Santos Dominici, Alberto Smith, José Rafael Pocaterra y el historiador Rufino Blanco Fombona, quien había puesto al dictador venezolano el mote de Juan *Bisonte* Gómez. Esta Junta llegó a organizar una expedición que desembarcó en Cumaná, pero que fue neutralizada por efectivos gubernamentales.

En 1927, después de reabierta la Universidad Central de Caracas, se fundó la Federación de Estudiantes de Venezuela (FEV), que a principios del año siguiente organizó protestas contra la dictadura gomecista, que llevaron a la cárcel a sus principales figuras, entre ellos Jóvito Villalba, Pío Tamayo, Antonio Arráiz, Rómulo Betancourt y Guillermo Prince Lara, la llamada «generación de 1928». El respaldo de la población al movimiento estudiantil y a las manifestaciones contestatarias fue de tal magnitud que significó el más serio desafió registrado hasta entonces a la dictadura venezolana.

Una muestra de ello fue que la juventud opositora ganó simpatías en amplios sectores de la oposición. Incluso su influencia llegó hasta el propio hijo del dictador, José Vicente Gómez –que era Inspector General del Ejército y segundo vicepresidente de la república– y a algunos oficiales, que el 7 de abril de 1928 protagonizaron un conato de rebelión militar en dos cuarteles de la capital. Relacionado con estos sucesos, parece que estuvo el nunca esclarecido asesinato, ocurrido en sus habitaciones palaciegas en Caracas, el 30 de julio de 1923, de su tío Juan Crisóstomo (Juancho) Gómez, que era entonces primer vicepresidente de la república.

En medio de la más profunda crisis de la dictadura –que llevó a Gómez mediante una reforma constitucional a eliminar el cargo de vicepresidente y a establecer que la sede del gobierno se hallaría en el lugar donde él estuviera–, fracasó al año siguiente una nueva expedición armada que desembarcó por las costas orientales del país. El grupo revolucionario se había organizado en Curazao por Gustavo Machado, Ramón Torres y Rafael Simón Urbina, quienes

el 9 de junio de 1929 asaltaron el fuerte Amsterdam para obtener armas para la invasión de Venezuela.

A continuación, unos 250 revolucionarios, entre los cuales estaban también Miguel Otero Silva y Guillermo Prince Lara, tras apoderarse de una embarcación, desembarcaron en el occidente venezolano el 9 de julio de ese mismo año, donde fueron derrotados. Casi en forma simultánea, aparecía en el estado de Sucre la expedición de los generales Román Delgado Chalbaud y Pedro Elías Aristeguieta, mientras el general José Rafael Gabaldón se sublevaba en Portuguesa y Norberto Borges en el estado Miranda.

A la par se iban vertebrando otras fuerzas opositoras con aspiraciones socialistas, como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Asociación Revolucionaria de Izquierda (ARDI). El 17 de diciembre de 1930, al conmemorarse el centenario de la muerte de Simón Bolívar, se efectuó en Caracas una gran manifestación popular contra la dictadura que fue disuelta a sangre y fuego, con el saldo de varios muertos y heridos.

Sin embargo, ninguno de estos movimientos y protestas sociales, que como hongos brotaban por todas partes, lograron derribar a la dictadura, que en los siguientes años logró estabilizarse. A ello contribuyó, sin duda alguna, que la economía venezolana, gracias a las crecientes exportaciones del petróleo, estaba en mejores condiciones que sus vecinos del Caribe para resistir los embates de la crisis capitalista de 1929.

En esas condiciones, el 17 de diciembre de 1935, murió Juan Vicente Gómez, uno de los pocos dictadores del Caribe que lo hicieron en el ejercicio del poder. Se calcula que, al morir, su fortuna era de unos 40 millones de dólares. Para sucederle fue designado otro de los integrantes del grupo militar originario del Táchira, compañero de Gómez y Cipriano Castro en la revolución de fines del siglo anterior, el también general Eleazar López Contreras.

El nuevo mandatario debió concluir el período presidencial que se extendía hasta el 19 de abril de 1936. Ese año, por decisión confiscatoria del Congreso de la república, la inmensa fortuna y propiedades del dictador fallecido pasaron al patrimonio nacional.

El machadato en Cuba

La dictadura del general Gerardo Machado en Cuba, extendida de 1925 a 1933, tiene en varios aspectos muchas similitudes con la de Juan Vicente Gómez en Venezuela, además de ser contemporáneas. El machadato se desarrolló cuando ya Estados Unidos había convertido a Cuba en un verdadero protectorado norteamericano, pues como se ha mencionado desde 1901 regía una constitución a la que el gobierno de Washington había impuesto un apéndice –la enmienda Platt–, que permitía inmiscuirse en los asuntos internos de la isla.

Desde principios del siglo XX, el capital norteamericano, aprovechando las facilidades dadas primero por los gobiernos interventores de Estados Unidos y, después, por los sucesivos primeros presidentes cubanos, invadió los principales sectores de la depauperada economía isleña. Así, las inversiones norteamericanas en Cuba, que en 1896 apenas ascendían a 50 millones de dólares, se elevaron a 160 millones en 1906, a 205 millones en 1911 y a 1200 millones en 1923 –que situó a la Mayor de las Antillas en el primer lugar entre los países latinoamericanos receptores de capital estadounidense–, año en que ya controlaban más del 70% de la producción azucarera, principal renglón de la economía nacional.

La penetración de Estados Unidos fue favorecida por los regímenes corruptos que llegaron al poder en las primeras décadas del siglo XX, encabezados por figuras del Partido Liberal o Conservador que se habían destacado en la guerra de independencia: los civiles Tomás Estrada Palma (1902 a 1906) y Alfredo Zayas (de 1921 a 1925) y los generales de la última contienda contra España José Miguel Gómez (1913-1921) y Mario García Menocal (1913-1921). En mayor o menor medida, todos facilitaron que las mejores tierras, fábricas, bancos, minas, medios de transporte y de comunicaciones, así como otras instalaciones de infraestructura, quedaran en manos norteamericanas.

De este modo, la economía de la isla cayó rápidamente en una absoluta dependencia de Estados Unidos, con el cual se realizaba la mayor parte del comercio, aunque teniendo como contrapartida

un significativo crecimiento y la relativa modernización del país. De ello fueron muestras, suntuosas construcciones, muchas de las cuales endeudaron a Cuba con la banca norteamericana. La época de mayor bonanza de la economía cubana se alcanzó con el estallido de la Primera Guerra Mundial, que abrió un extraordinario auge económico.

A pesar de que era visible el progreso material –que atrajo casi dos millones de inmigrantes, sobre todo gallegos, asturianos y antillanos, estos últimos como braceros para las extensas plantaciones y enormes fábricas de azúcar ubicadas ahora, sobre todo, en el oriente de la isla–, el desarrollo económico fue unilateral, pues el sector productivo principal se hipertrofió, estancándose desde fines de los años veinte, sin poder resolver las necesidades vitales de la población.

El gobierno de Zayas fue la antesala de la dictadura del general Gerardo Machado, cuando el control político y económico estadounidense llegó a niveles sin precedentes, mientras el embajador de Estados Unidos, Earl Crowder, se había convertido en un verdadero procónsul. El representante norteamericano intervenía en las principales decisiones gubernamentales y hasta participó en la selección del llamado irónicamente «gabinete de la honradez». Los mayores excesos del presidente Zayas tuvieron que ver con los fraudes vinculados a la ley Tarafa o de subpuertos, que beneficiaba a muchas compañías azucareras norteamericanas; y los oscuros negocios tejidos en torno a la pretendida compra del convento de Santa Clara.

El fin de la llamada «danza de los millones», dio paso a la inesperada crisis de 1920-1921 que arruinó a una parte importante de la burguesía cubana, lo que casi coincidió con el despertar de significativos movimientos sociales, enfilados a la búsqueda de la igualdad ciudadana y contra la opresiva dominación extranjera. Manifestaciones de ello fueron el surgimiento del feminismo, expresado primero en la aparición del Partido Nacional Femenino (1912) y después en el Primer Congreso Nacional de Mujeres (1923); la vertebración de los excombatientes de las guerras de independencia, indignados por los turbios negocios gubernamentales, en la Asociación de Veteranos y Patriotas (1923-1924) y el nacimiento, entre 1920 y 1925, de la mayor agrupación de trabajadores, la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC).

También debe mencionarse en esta relación, la irrupción de jóvenes intelectuales en la lucha cívica, como Rubén Martínez Villena, puesta de relieve con la denominada «protesta de los trece» (1923), y de estudiantes, que exigían la autonomía universitaria y constituyeron la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en 1923, encabezada por Julio Antonio Mella, fundador dos años después del Partido Comunista (1925).

Ese era el convulso panorama nacional cuando el general Gerardo Machado llegó a la presidencia en los comicios celebrados el 1 de noviembre de 1924, gracias al apoyo financiero recibido y, en particular, de un generoso donativo de medio millón de dólares de la Electric Bond and Share. La oligarquía nacional y Estados Unidos esperaban que este militar se convirtiera en el hombre fuerte que estabilizara el país y metiera en cintura la ascendente intranquilidad ciudadana. El apoyo obtenido durante su campaña electoral era la mejor prueba de las expectativas despertadas por su candidatura a la primera magistratura del país.

Machado, que era un destacado líder del Partido Liberal y había sido general de la guerra de independencia de 1895 –también jefe del ejército nacional y ministro de Gobernación–, tenía fama de ser un hombre de mano de hierro, ganada por sus actividades represivas. Su gobierno, iniciado el 20 de mayo de 1925, se convertiría en poco tiempo en una descarnada y terrible dictadura, lo que ya se vislumbraba cuando declaró que bajo su gobierno ninguna huelga duraría más de quince minutos.

Durante la primera parte de su mandato, Machado intentó desarrollar un novedoso programa económico –que incluía una reforma arancelaria en 1927 favorable a la producción autóctona–, que permitiera impulsar la precaria industria nacional y promover el desarrollo de la infraestructura, aprovechando sus excelentes relaciones con Washington y el mejoramiento de los precios del azúcar que se observaba desde 1923. Pero las restricciones gubernamentales a la cosecha azucarera, con vistas a equilibrar oferta y precios, solo trajo como consecuencia la reducción de la participación cubana a escala mundial –junto a la caída sostenida su valor–, pues los competidores no disminuyeron su producción.

Por otro lado, la reforma arancelaria de 1927 no logró sus objetivos. Aunque se desarrollaron parcialmente algunos rubros de la industria ligera, como textiles, jabonería, lácteos, pinturas y otros, el aumento de los aranceles a productos foráneos, para incentivar la producción interna, no pudo alterar en forma sustancial lo convenido en el Tratado Comercial de 1902 con Estados Unidos.

Para desarrollar el costoso plan de obras públicas del gobierno, que contemplaba terminar la sede del Legislativo en un monumental Capitolio –que sería inaugurado en enero de 1928, en la VI Conferencia Panamericana, con la presencia del mandatario estadounidense Calvin Coolidge–, ampliar la Universidad de La Habana, extender el malecón habanero y remodelar varias zonas de la capital y, sobre todo, trazar la carretera central de Cuba, Machado obtuvo empréstitos de la banca norteamericana que superaban los contraídos por todos los gobiernos anteriores juntos, endeudando aún más al país.

Desde los inicios de su gestión, Machado con el apoyo de los sectores oligárquicos, de los grupos políticos y de los partidos tradicionales –el liberal y el conservador, así como sus desprendimientos–, respaldó el proyecto del «cooperativismo» para mantenerse en el poder, a la vez que reprimía con crudeza cualquier síntoma de oposición. Una temprana expresión de esto último fue el asesinato, el 20 de agosto de 1925, del conocido opositor Armando André, director del periódico *El Día*.

A un intenso ritmo avanzaba también la represión contra el naciente movimiento obrero mediante la deportación de trabajadores extranjeros –como el canario José Miguel Pérez, primer secretario del Partido Comunista–, la prisión o la muerte de dirigentes sindicales, entre estos Enrique Varona, José Cuxart y Alfredo López.

En 1927 surgió en la Universidad de La Habana el Directorio Estudiantil Universitario (DEU) contra la prórroga de poderes, de poca duración. Julio Antonio Mella, expulsado de la universidad dos años antes, realizó una huelga de hambre que movilizó en su favor a diferentes sectores nacionales. Obligado a exiliarse desde enero de 1926, Mella, que había calificado al dictador cubano de Mussolini tropical, fue asesinado en México por sicarios enviados por Machado (1929).

No obstante el significativo crecimiento del movimiento opositor, la dictadura de Machado se legitimó en una convención constituyente, reunida solo unas semanas entre abril y mayo de 1928, que modificó la constitución de 1901 para permitir la reelección del mandatario por un período de seis años que debía concluir en 1935. Los espurios comicios se celebraron el 1 de noviembre 1928 y en ellos el gobernante figuró como único candidato. Tomó posesión el 20 de mayo de 1929, cuando estaba a punto de estallar el *crack* capitalista mundial que agudizaría la profunda depresión que venía atravesando la economía cubana ante el sostenido deterioro de los precios del azúcar.

La crisis política y económica en que se iba hundiendo la dictadura machadista propició el crecimiento acelerado desde 1930 de las protestas, huelgas y manifestaciones populares, combinadas con actividades terroristas, conspiraciones y alzamientos armados. Prácticamente todos los sectores de la sociedad salieron a enfrentar la cada vez más represiva dictadura de Machado con proyectos revolucionarios, derechistas y nacional-reformistas.

Muchos de los políticos que habían apoyado el *cooperativismo* se fueron alejando del régimen. La oposición se nutrió de figuras de los partidos tradicionales, como el coronel Carlos Mendieta –líder de la recién creada Unión Nacionalista–, el ex mandatario conservador general Mario García Menocal y el hijo del desaparecido presidente liberal, José Miguel Gómez, Miguel Mariano. Ellos mismos encabezaron la formación de la Junta Revolucionaria de Nueva York, a la que se adhirió el DEU, y que promovía el derrocamiento de la dictadura por la vía armada y buscaba el respaldo de Estados Unidos.

Estos grupos políticos tradicionales encabezados por Menocal y Mendieta, realizaron un simulacro de alzamiento en Río Verde, en agosto de 1931, el que fue velozmente sofocado por las tropas de Machado. Como parte de esta intentona, ocurrieron también levantamientos armados en varias localidades del país.

Entre estos movimientos opositores pueden mencionarse el del general Francisco Peraza en Pinar del Río –que le costó la vida– y el dirigido por el joven Antonio Guiteras en Oriente –quien luego de este fracaso crearía su propia organización: Unión Revolucionaria–;

al que debe sumarse la expedición que desembarcó en el norte de la provincia oriental encabezada por Emilio Laurent. En ese contexto, apareció la organización secreta, de estructura celular y de marcado carácter terrorista, denominada ABC, conformada mayormente por personas de las capas medias.

Los universitarios, por su parte, restablecieron, en 1930, el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), mucho más fuerte que el anterior, y del que se desprendería en 1931 el Ala Izquierda Estudiantil, que sostenía vínculos con el partido comunista. El 30 de septiembre de 1930, en una manifestación multitudinaria atacada por el régimen, y en la que hubo algunos heridos, cayó muerto el dirigente estudiantil Rafael Trejo, con lo que la lucha de los universitarios se recrudeció.

Para contrarrestarla, el dictador cerró la Universidad de La Habana, estableció la censura de prensa y designó supervisores militares en casi todas las provincias del país. Por su parte, el DEU y el ABC unieron desde 1932 sus recursos para impulsar la actividad terrorista y los atentados, como los que realizaron con éxito contra el jefe de la policía Miguel Calvo y el presidente del Senado, Clemente Vázquez Bello.

Además, en torno al partido comunista, se vertebró una red de organizaciones sindicales, sociales y políticas, como la CNOC, que pusieron en jaque a la dictadura con sus protestas y huelgas. Entre ellas estuvo el paro general obrero del 20 de marzo de 1930, encabezado por Rubén Martínez Villena, quien había calificado a Machado de asno con garras.

Ante la gravedad de la situación cubana, Estados Unidos decidió enviar a La Habana a un nuevo embajador, Benjamín Sumner Welles, en mayo de 1933, para poner de acuerdo a los diversos sectores y buscar una salida negociada a la crisis que se conoce como la mediación. El enviado del presidente Franklyn D. Roosevelt pretendió lograr el consenso entre los grupos políticos, que en su mayoría pasaron a cooperar con el funcionario norteamericano, aunque ni los estudiantes ni los comunistas lo aceptaron. Tampoco los seguidores de Guiteras se sumaron a la mediación norteamericana, la que consideraban injerencista en los asuntos internos de Cuba.

Aunque Machado se vio obligado a participar en la mediación de Welles y forzado a liberar presos políticos y a restablecer las garantías, se negó a abandonar el poder. En medio de estas intensas gestiones del enviado diplomático norteamericano, estalló una huelga general en agosto de 1933, que a pesar de la sangrienta represión, culminó con la caída del dictador –el ejército, presionado por Welles, le retiró su apoyo–, el 12 de agosto de 1933.

Guerra del Chaco

Los años entre las dos conflagraciones mundiales fueron también de agudización de las rivalidades interimperialistas. Ello se puso de relieve, en forma trágica, en la lucha de los monopolios petroleros ingleses y norteamericanos por la región del Chaco que condujo a fines de los años veinte a un sangriento conflicto entre países latinoamericanos prolongado hasta los primeros años de la década siguiente.

Como ya había ocurrido a fines del siglo XIX, las contradicciones entre las potencias imperialistas llevaron a un conflicto fratricida entre naciones latinoamericanas. Nos referimos a la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, que eran los países más pobres del continente.

Las compañías petroleras norteamericanas e inglesas, empeñadas en consolidar sus respectivas zonas de influencia en la América del Sur, lanzaron a Bolivia –que en 1903 había perdido otra porción del territorio nacional (El Acre) en un breve conflicto con Brasil– a una contienda bélica con el vecino Paraguay, aprovechando la situación desesperada de la república del altiplano y la disposición de su oligarquía a «pisar fuerte en el Chaco»,[3] región donde se suponía existían fabulosos yacimientos petrolíferos. Para ello, la banca de Estados Unidos concedió a Bolivia 23 millones de dólares destinados a la compra de armamentos (1927).

Para esta época, Bolivia había caído en la órbita de la dependencia de Estados Unidos, mientras la situación del país se agravaba

[3] Julio César Chaves, *Compendio de Historia Paraguaya*, Buenos Aires, Talleres Gráficos Lumen, 1958, p. 240.

según descendía el precio del estaño, proceso al que contribuyó la llegada al poder del líder del Partido Republicano: Bautista Savedra. En el propio 1920, los republicanos concertaron el empréstito Ullen Contracting, para después contratar, en 1923, el famoso préstamo Nicolaus –por treinta y tres millones de dólares al 8%–, que hipotecaba las acciones del gobierno en el Banco de la Nación y la casi totalidad de los ingresos públicos.

A semejanza de lo que ocurría en el Caribe, se creó una comisión fiscal con representantes de los prestamistas. Pero la cosa no quedó ahí: Savedra cedió a la Standard Oil Company de California en ese mismo año, los recursos petrolíferos bolivianos.

Meses más tarde –en 1924– se «internacionalizó» la empresa Patiño en los Estados Unidos. Los accionistas norteamericanos concentraron y controlaron entonces las cuatro firmas más grandes del país: Patiño Mines; Bolivia Tin and Tungsten Mining; Compañía Agrícola Oploca de Bolivia y Sociedad Empresa Estaño Araca.

A continuación, el gobierno contrajo un nuevo empréstito con la Glyn Mills and Company, comprometiendo los impuestos que la Patiño Mines debía pagar. La condición exigida por los banqueros y aceptada, fue no elevar los derechos de exportación de los minerales. Y así, tres préstamos más hasta 1930, por un total de 29 millones de dólares.

Al mismo ritmo que se endeudaba la nación, crecía el descontento social. Ello obligó a Savedra a reconocer algunas demandas populares en 1924, lo cual no fue óbice para que las protestas obreras pagaran un precio de sangre, como ocurrió en Uncía. En 1926 se produjo el estreno de otro presidente republicano, Hernando Siles, digno continuador de la política entreguista de Savedra. Durante su gobierno, el capital norteamericano en Bolivia pasó de cien millones de dólares; de los cuales cuarenta millones eran obligaciones del Estado y el resto inversiones en minas y petróleo.

En las condiciones de dependencia económica y financiera que se encontraba Bolivia, la gran crisis capitalista de 1929 afectó directamente los ingresos del Estado y, sobre todo, los de las clases trabajadoras de los centros urbanos y las minas. En otras palabras, se proyectó sobre aquellos sectores sociales vinculados a la actividad exportadora, o subordinados de una manera u otra dentro de la

economía interna al nivel de los precios del estaño, que pasaron de 289 libras por tonelada en 1927 a 141 en 1930.

Sobre el gobierno de turno –Hernando Siles– se comenzó a ejercer presión desde dos direcciones distintas: mientras los obreros y la pequeña burguesía exigían una política protectora de los intereses populares, «la rosca», como se denominaba a la élite minera, procuraba descargar sobre el pueblo y el estado nacional todo el peso de la crisis. Asumiendo una actitud agresiva, los «barones del estaño», como también se le llamaba a la oligarquía, organizaron en 1930 un golpe de Estado antes de que el gobierno decretara una nueva legislación fiscal –elevación de impuestos a la minería–, al tiempo que se pretextaba defender la constitución frente a las intenciones de Siles de prorrogar su mandato.

Los políticos antigubernamentales agitaron, por su lado, el problema de la autonomía universitaria, y provocaron una sublevación de estudiantes y militares que echó por la borda al presidente. Hasta el 5 de marzo de 1931 una junta militar se hizo cargo de la dirección estatal y, en esa fecha, entregó el poder a Daniel Salamanca y a Luis Tejada Sorzano, candidatos victoriosos en unos comicios arreglados por el «pacto sagrado» entre los liberales y las dos ramas de republicanos escindidos.

La economía boliviana se encontraba completamente en ruinas desde 1930. En 1932, la libra fina de estaño llegó a valer 22 centavos de dólar, menos de la mitad que en 1929; el país había perdido casi toda su capacidad de importar y las empresas mineras no reconocían la autoridad del gobierno.

Paraguay, por su parte, había caído de lleno bajo la dependencia de Inglaterra por intermedio de sus socios argentinos. Desde 1913, 68 compañías anglo-argentinas poseían 10 millones de hectáreas en el Chaco Boreal, dedicadas a la explotación ganadera y madera (incluido el quebracho), y los primeros frigoríficos funcionaban como simple prolongación de los existentes en Argentina, país que ya acaparaba el 90% del comercio exterior paraguayo. Aunque las inversiones inglesas no superaban los 16 millones de dólares –tres millones las norteamericanas–, Paraguay se encontraba en las mismas manos que dominaban el resto de la región.

Los esfuerzos paraguayos por elegir una barrera frente a las pretensiones bolivianas fomentando la colonización del Chaco –con el asentamiento de inmigrantes menonitas– acercaron el conflicto en lugar de alejarlo. La cuestión de la frontera común entre los dos países había surgido a finales del siglo XIX, cuando en gobierno de La Paz trató de compensar la pérdida del litoral del Pacífico con la adquisición de una franja del litoral fluvial de Paraguay.

Los dos primeros tratados se firmaron en 1879 y 1887, pero ninguno fue ratificado por el Congreso de Asunción, como tampoco el de 1894. La ocupación paraguaya en 1888 de la población de Bahía Negra, fundada poco antes por los bolivianos, dio lugar a una violenta protesta del país vecino y a agudizar la disputa por todo el territorio del Chaco.

El conflicto alcanzó su clímax a fines de la década del veinte, unos años después de que la Standard Oil Company se apoderara de grandes concesiones otorgadas allí por el gobierno boliviano (1922).

La expansión de la empresa norteamericana, necesitada de hallar una vía de salida para los hidrocarburos de Tarija y Santa Cruz, no tardó en suscitar la firme resistencia de los intereses petroleros ingleses, representados por la Royal Dutch Shell, afincados en Argentina y Paraguay. Ello explica la negativa paraguaya –en 1928 Inglaterra rebajó la suma de la deuda de este país para facilitar la compra de armas– a autorizar el libre paso del petróleo boliviano a través de su territorio, con destino a un puerto del Atlántico, y la decisión del gobierno de La Paz de responder con la guerra a su vecino, confiando en una supuesta superioridad militar.

En febrero de 1927 comenzaron los primeros enfrentamientos militares entre los dos países, aunque el verdadero detonante fue el ataque boliviano al fortín Carlos Antonio López el 15 de junio de 1932. Las grandes operaciones bélicas en el Chaco comenzaron en 1932 y se extendieron hasta fines de 1935. La primera gran batalla tuvo por escenario a Boquerón, en septiembre de 1932, que dejó un saldo de miles de muertos y 500 prisioneros bolivianos.

La región donde se libraba la lucha era el territorio predesértico del Chaco Boreal, con una forestación espinosa, sin agua, donde llegaron a combatir 150 mil soldados semidesnudos, con

ametralladoras, obuses y carros blindados. El 10 de mayo de 1933 Paraguay declaró el estado de guerra con Bolivia, mientras su ejército, guiado por el general José Félix Estigarrabia, vertebraba un largo sistema de trincheras, cuyo más alto exponente fue la línea Nanawa-Gondra-Arce-Herrera-Toledo. Por su parte, las fuerzas bolivianas, mandadas por el general alemán Hans Kundt, apelaron a concentradas ofensivas contra las fortificaciones enemigas.

Siguiendo los patrones de la guerra convencional, Kundt atacó infructuosamente Nanawa en julio de 1933 y el fortín Gondra. Una nueva ofensiva de Bolivia –sus tropas estaban mucho mejor equipadas que las de Paraguay– se efectuó en agosto de ese año. Nueve meses resistieron los paraguayos las furiosas embestidas bolivianas, hasta que el 11 de diciembre de 1933 pasaron a la ofensiva, destrozaron el regimiento de Ayacucho e hicieron rendirse a dos selectas divisiones del altiplano, con el saldo de más de diez mil prisioneros.

Estos acontecimientos y el conato de rebelión de los regimientos bolivianos Junín y Azurduy, además del que estalló en el fortín de Savedra, determinaron una petición de tregua solicitada por el gobierno de La Paz. Aquello era suficiente y Kundt fue relevado de su cargo por el boliviano Enrique Peñaranda. Los paraguayos, por su lado, ascendieron a José Félix Estigarribia a general.

Terminado este paréntesis de paz, el año 1934 se inició con una coordinada progresión paraguaya en tres direcciones: Muñoz-Magariños, Platanillos-Cabezón, Camacho-Cañada Tarija. A pesar de los continuos contrataques bolivianos, la ofensiva, sobre todo en la zona meridional del Chaco Boreal, no pudo ser detenida. Las acciones de Ballivián, Fortín Ingaví y Cañada del Carmen, empujaron a los bolivianos hasta los contrafuertes andinos.

Peleando en su propio territorio, los soldados del país andino se crecían e infringían grandes pérdidas a los atacantes, como la sufrida por los paraguayos en el Camino Lobrego, su peor revés en toda la contienda. No obstante, el 15 de agosto de 1934, el ejército de Paraguay se impuso en Picuiba, lo que le permitió llegar hasta la sierra de Carandaity, preludio de otras victorias a fines de ese año que obligaron a los bolivianos a retirarse hacia el Pilcomayo y Villa Montes.

El 16 de enero de 1935, las tropas de Estigarribia llegaban a las márgenes del Parapeto, poniendo en peligro, no solo Villa Montes, sino Camiri y Santa Cruz. Miles de hombres combatían y morían en la zona donde se alzaban, como testigos mudos de aquel desastre, los primeros pozos de la Standard Oil Company.

En ese momento empezó a dar frutos la mediación internacional. Los poderosos «padrinos» de Bolivia propiciaron un acuerdo –confirmado en 1938 con la firma del tratado de paz– que salvaba el petróleo de la Standard Oil y satisfacía, al mismo tiempo, el orgullo nacional paraguayo: las dos terceras partes del Chaco quedaban en manos del tácito vencedor, mientras Bolivia mantenía los territorios donde se hallaban los yacimientos petrolíferos explorados y obtenía, además, una salida al río Paraguay: Puerto Suárez.

La guerra del petróleo, formalmente una guerra de fronteras, dejaba un saldo calculado en ciento veinte mil víctimas, setenta mil bolivianos y cincuenta mil paraguayos, y un clima de efervescencia nacionalista en los dos países. De ello serían exponentes los héroes del conflicto del Chaco, los coroneles Germán Busch (Bolivia) y Rafael Franco (Paraguay), llegados al poder en sus respectivos países a fines de los años treinta, en la llamada década de las revoluciones frustradas.

Capítulo 10
LA CRISIS DE 1929 Y LAS REVOLUCIONES FRUSTRADAS

La crisis capitalista de 1929 abrió una nueva etapa en la historia de América Latina. En octubre de ese año estalló de improviso una de las mayores conmociones que haya sufrido el capitalismo en toda su historia. Desde la década del veinte las potencias industriales europeas se venían recuperando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y ya hacia 1925 habían alcanzado los niveles productivos de 1914. La producción fabril de Estados Unidos no cesaba su intenso crecimiento. La lucha por el dominio de los mercados mundiales se agudizó de nuevo y sobrevino una inevitable crisis de superproducción.

Así comenzó la gran depresión económica mundial. La caída de los precios en la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York, el viernes 24 de octubre de 1929, fue su inicio, desatando el pánico en sus similares europeas. El colapso se sintió, de una u otra manera, en todas partes.

Caracterizada por su extensión y profundidad, la crisis de 1929 afectó al conjunto del sistema capitalista. Muchos bancos quebraron, las fábricas cerraban y los obreros eran despedidos en masa. En tres o cuatro años la producción industrial cayó entre 30% y 40%, retrocediendo a los niveles de 1908-1909.

Solo en Estados Unidos, entre 1929 y 1932, el ingreso nacional declinó de 82 mil millones a 40 mil millones –el rural se contrajo a menos de la mitad– y los salarios bajaron en el mismo período de 17 mil millones de dólares a 7 mil millones, mientras se registraba una

caída de cerca del 50% en los precios de los productos de consumo. El índice de ocupación (base 1923-1925=100) descendió de 106 a 66 puntos –los parados pasaron de 1.6 millones de personas en 1929 a 12.8 millones en 1933– y el valor conjunto de las exportaciones e importaciones se redujo de 9640 a 2933 millones de dólares. La producción de hierro y de acero retrocedió 28 y 31 años respectivamente. De cinco millones de automóviles en 1929, la fabricación de estas máquinas bajó a solo un millón.

Los acontecimientos de 1929 marcaron un punto de viraje para la economía y la sociedad de América Latina. Lo más notable fue la prolongada pérdida de dinamismo en la demanda de los productos primarios que acompañó a la pronunciada disminución de la producción industrial en Estados Unidos (46%), Alemania (40%), Francia (33%), Inglaterra (24%) y otras metrópolis. Sus efectos se hicieron sentir en forma directamente proporcional a las deformaciones sufridas por los distintos países latinoamericanos en el proceso de su integración a la división internacional del trabajo.

Revoluciones de los años treinta

El desempleo, la ruina y el hambre afectaron a las masas populares de América Latina, mientras los golpes de Estado y la proliferación de situaciones revolucionarias pusieron de manifiesto la crisis de las estructuras establecidas por los mecanismos de la dominación imperialista. El descalabro reveló en toda su crudeza los límites del régimen de *laissez faire* y las consecuencias de minimizar el papel del Estado en la economía, políticas adoptadas por las repúblicas latinoamericanas como parte de las reformas liberales instauradas desde la segunda mitad del siglo XIX.

La gran hecatombe financiera, industrial y comercial afectó sobre todo a los países de América Latina más estrechamente vinculados al mercado internacional. Las repúblicas latinoamericanas orientadas a la exportación de materias primas y alimentos, monoproductoras, fueron las más golpeadas por la brutal contracción del mercado. La caída del precio y del volumen de las exportaciones

tradicionales, la aguda disminución en la capacidad de importar y la consiguiente bancarrota fiscal, conmovieron los cimientos de un orden socioeconómico basado en los privilegios de las élites agroexportadoras.

Por añadidura, el flujo de capital extranjero hacia América Latina se detuvo casi por completo. En consecuencia, las exportaciones latinoamericanas se redujeron en un 65% y su capacidad de importar en un 37% durante los años duros de la crisis, lo que obligó no solo a reducir los presupuestos estatales, sino a suspender el pago de la deuda externa en 1934, con solo dos o tres excepciones, entre ellas Argentina.

Los sectores burgueses exportadores trataron de retener el poder estatal recrudeciendo la represión y patrocinando una serie de maniobras golpistas, destinadas a liquidar experiencias reformistas y detener la democratización emprendida por determinados exponentes de la burguesía nacional en algunos países (Argentina, Uruguay) o recomponer, con la ayuda del ejército, la alianza entre las oligarquías nacionales y el capital extranjero (Perú, Cuba, Colombia y parte de Centroamérica).

La parálisis del sector exportador y el abrupto retroceso en los ingresos del Estado golpearon muy en particular a la clase obrera, al campesinado y las capas medias: cundió el desempleo y la disminución salarial de la población económicamente activa. A partir de entonces aumentó una literatura y un arte latinoamericanos de hondas preocupaciones sociales, como se pudo apreciar en las obras de César Vallejo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Enrique Gil Gilbert y José de la Cuadra.

La característica principal de estos narradores fue la de señalar que la explotación económica de los trabajadores era la causa fundamental de los problemas sociales del continente. Exponentes de esta novedosa literatura comprometida con las causas populares fueron *Mamita Yunai* (1941) de Carlos Luis Fallas, o *Metal del diablo* (1946) de Augusto Céspedes; mientras, José Revueltas se valía del monólogo interior para expresar los sentimientos de un grupo de campesinos pobres en su novela *El luto humano* (1943). Paralelamente, se desarrollaban otras vigorosas manifestaciones artísticas en América

Latina de contenido social como el muralismo mexicano, entre cuyos continuadores estaría más adelante la relevante obra pictórica del ecuatoriano Oswaldo Guayasamín.

Al calor de los efectos de la depresión, y de determinados factores internos que agudizaban la situación en determinados países, florecieron en América Latina una serie de movimientos nacionalistas, sublevaciones populares, revueltas campesinas y fallidos intentos revolucionarios que estremecieron al continente de un extremo al otro. Entre ellos se pueden mencionar la sublevación de los trabajadores salvadoreños en 1932, encabezado por el Partido Comunista y su secretario general Agustín Farabundo Martí; los experimentos revolucionarios de Chile, bajo la égida del coronel Marmaduke Grove, que condujeron a la implantación de la efímera *República Socialista*; así como la huelga general obrera que derribó en Cuba la dictadura de Machado y desencadenó un proceso de luchas populares, conocido como la revolución del treinta, que tuvo entre sus representantes más radicales a Rubén Martínez Villena y Antonio Guiteras.

A esta relación de movimientos revolucionarios pueden añadirse la sublevación aprista de 1932 en Trujillo (Perú), que provocó sangrientos choques con el ejército; las victorias del movimiento liberador en Nicaragua contra la ocupación norteamericana, que se desarrolló hasta el asesinato de Augusto César Sandino (1934); las luchas por la independencia de Puerto Rico dirigidas por don Pedro Albizu Campos y la revuelta armada de la Alianza Nacional Libertadora de Brasil (1935), organizada por Prestes y el Partido Comunista.

También deben agregarse las fracasadas expediciones armadas dirigidas a derrocar la dictadura de Juan Vicente Gómez en Venezuela (1929), en la que participaron entre otros Rafael Urbina, Carlos Aponte y Gustavo Machado; el movimiento militar progresista en Ecuador que el 24 de agosto de 1929, encabezado por el coronel Luis A. Larrea, estableció un efímero gobierno popular; así como los del mismo corte que se desarrollaron en Paraguay y Bolivia, dirigidos por los coroneles Rafael Franco, David Toro y Germán Busch, como parte de las secuelas de la Guerra del Chaco. Algunos de estos procesos de cambios, que contaron con el apoyo

de ciertos sectores burgueses nacionales, guardan puntos en común, en cuanto a características y objetivos, con gobiernos nacionalistas burgueses, también calificados de populistas, que se desarrollaron en los años treinta (México), cuarenta e incluso en los cincuenta, como los casos de Brasil y Argentina.

La efímera *República Socialista* de Chile

Chile fue uno de los países latinoamericanos más golpeados por la gran crisis de 1929. La caída vertical de sus exportaciones –disminuyeron en un 85%– afectó la balanza de pagos y anuló prácticamente su capacidad para importar. Los artículos esenciales –azúcar, combustible– comenzaron a escasear y fue necesario utilizar las reservas del Banco Central para adquirirlos en el exterior.

Las ventas del salitre, que en 1929 habían alcanzado 3 millones 200 mil toneladas, se redujeron a unas 700 mil y a solo 400 mil en 1933. El descenso del cobre no fue tan acentuado, pero este rubro no ocupaba en aquella época el lugar privilegiado que le correspondería después en el comercio exterior chileno.

En estas circunstancias, se extendió un amplio movimiento de repulsa al régimen del general Carlos Ibáñez, establecido en 1927 con el apoyo de la banca norteamericana, que había endeudado el país con préstamos por valor de unos 250 millones de dólares. El 26 de julio de 1931, en medio de grandes tensiones sociales, Ibáñez debió renunciar.

A pesar de las maniobras electoreras urdidas desde el gobierno, el 23 de agosto comenzó una huelga general convocada por la Federación Obrera de Chile (FOCH), organización que entonces dirigía el comunista Elías Lafferté. Unos días más tarde, al paro se sumó la imprevista sublevación de la marina de guerra.

La escuadra chilena anclada en el puerto de Coquimbo se rebeló el 1 de septiembre de 1931 y el movimiento pronto se extendió al resto de la flota estacionada en Talcahuano y Valparaíso. Reprimida por efectivos gubernamentales, los marinos capitularon el 5 del mismo mes. No obstante, durante la primera mitad de 1932 la nación siguió conmovida por las continuas huelgas obreras, los motines y

conspiraciones militares, así como los movimientos de ocupación de tierras protagonizados en el sur por los hambreados campesinos y mapuches expulsados de las haciendas.

A mediados de ese año cobró fuerza un complot militar encabezado por el comodoro del aire coronel Marmaduke Grove, nombrado jefe de la aviación luego de los sucesos de Coquimbo. Su objetivo era instaurar un sistema de gobierno que permitiera al Estado dirigir la anarquizada economía nacional y mejorar la terrible situación de los trabajadores. Por ello, Grove estableció contactos con los nacientes grupos socialistas.

Enterado de la conspiración, el gobierno destituyó a Grove el 3 de junio de 1932, lo que precipitó el estallido del movimiento revolucionario. Al día siguiente se constituyó una junta que por un decreto estableció la *República Socialista* de Chile.

Entre las primeras medidas del gobierno *socialista* estuvo la prohibición al desalojo de los vecinos que tuvieran una renta inferior a 200 pesos y se ordenó la devolución a sus dueños de objetos y utensilios indispensables para la vida y el trabajo que estuvieran empeñados en la caja de créditos. También se repuso a los maestros cesanteados y se permitió el regreso de los alumnos a sus aulas, así como se promulgó una amplia amnistía.

Decidida a acabar con el experimento de la *República Socialista*, que ya perfilaba nuevas medidas para crear un área estatal en la economía y establecer el control gubernamental sobre el comercio, la reacción interna encabezada por el vetusto Partido Conservador llegó a pedir públicamente la intervención de Estados Unidos. Atacado por la derecha y la izquierda –pues el poderoso Partido Comunista desconocía al gobierno *socialista* y llamaba a la formación de *soviets* de obreros, soldados y campesinos–, el 16 de junio se produjo el contragolpe militar encabezado por Carlos Dávila.

Grove y otros líderes de la efímera *República Socialista* fueron apresados en el Palacio de La Moneda, cuando dirigían una alocución radial al pueblo, y enviados al campo de prisioneros establecido en la isla de Pascua. El reaccionario gobierno de Dávila persiguió con saña a los dirigentes populares y tomó severas medidas represivas contra la población. La ciudad de Santiago fue puesta bajo la

ley marcial y se implantó el toque de queda. Fue dictada una rígida censura de prensa y derogadas las libertades sindicales y políticas.

Sublevación de los trabajadores salvadoreños en 1932

La insurrección salvadoreña fue también consecuencia directa de la gran crisis capitalista de 1929, que llegó a esta nación ampliada por las conexiones del comercio internacional. Estados Unidos dominaba la economía y la mayor parte de la producción cafetalera de este pequeño país centroamericano. La caída del poder adquisitivo del mercado estadounidense afectó con fuerza la endeble economía de este país.

La depresión mundial provocó una caída del 65% en los precios del café y de 74% en el valor de las exportaciones de El Salvador, así como en un 66% las importaciones, fundamentalmente de materias primas y alimentos. La crisis del café provocó la quiebra de dos de los cuatro bancos nacionales y redujo a la mitad los ingresos estatales. En consecuencia, miles de trabajadores y, en especial, los vinculados a la recolección cafetalera, quedaron sin trabajo, pues en el campo el desempleo abarcó a casi la mitad de la población.

Desde finales de 1931 los trabajadores cafetaleros del occidente del país, desesperados ante los efectos de la depresión económica, comenzaron a pasar de las protestas y manifestaciones a un movimiento huelguístico e insurreccional de vastas proporciones. La oligarquía salvadoreña, alarmada ante la magnitud del movimiento popular, y descontenta con la política vacilante del gobierno de Arturo Araujo, propició el 2 de diciembre de 1931 un golpe militar.

Como resultado de la asonada castrense se instaló una férrea dictadura encabezada por el general Maximiliano Hernández Martínez. *El Brujo* Martínez, como fue apodado, adoptó un programa represivo dirigido a acallar las crecientes protestas y demandas de las masas hambreadas de trabajadores, campesinos e indígenas.

Ante el inminente estallido de la sublevación popular, el Partido Comunista, que había sido organizado en marzo de 1930,

hizo ingentes esfuerzos por encauzar el movimiento espontáneo de los desesperados obreros y campesinos salvadoreños, entre cuyos líderes figuraba el indígena José Feliciano Ama. El secretario general del Partido era entonces Agustín Farabundo Martí, quien acababa de regresar a El Salvador, luego de combatir a los norteamericanos a las órdenes directas de Sandino.

Martí y otro dirigente comunista salvadoreño, Miguel Mármol, se reunieron en secreto el 7 de enero de 1932 con otros líderes populares para confeccionar los planes de la rebelión, fijada para el día 16 de ese mes. Luego la fecha del levantamiento se aplazó para el 19 y después para el 22.

Al parecer, la postergación de la sublevación dio margen suficiente al gobierno para conocer parte de los preparativos y pasar a la ofensiva. La represión, que desde diciembre de 1931 se había iniciado, se desató ahora en gran escala.

Miles de campesinos y obreros fueron detenidos, torturados y asesinados. El propio Farabundo Martí fue capturado en compañía de dos estudiantes, Alfonso Luna y Mario Zapata, responsables de la edición del periódico *Estrella Roja*, y fusilados (1 de febrero).

De todas formas, la incontenible revolución popular estalló los días 22 y 23 de enero en la región occidental del país. Gobiernos de obreros, campesinos e indígenas (*soviets*) se instalaron durante varios días en los pueblos de Juayúa, Izalco, Nahuizalco. Sonzacate, Salcoatitán y otros. En muchos sitos los encolerizados trabajadores quemaban alcaldías, oficinas de correos y puestos militares. El ejército y la aviación del régimen aplastaron la rebeldía popular, valiéndose de todos los recursos militares a su alcance.

Alarmados ante el curso de los acontecimientos, barcos ingleses y norteamericanos se presentaron en el puerto de Acajutla para ayudar al dictador a controlar la situación. Miles de trabajadores fueron masacrados por las fuerzas gubernamentales, calculándose en 30 mil las víctimas de aquellas trágicas jornadas. El Partido Comunista y las organizaciones sindicales cayeron bajo los brutales golpes gubernamentales de los que no se repondrían hasta varios lustros después.

El Ejército Sandinista Defensor de la Soberanía de Nicaragua

La lucha de los nicaragüenses contra la intervención de Estados Unidos fue una de las grandes epopeyas de esta convulsa década, aunque la resistencia sandinista contra los invasores norteamericanos se había iniciado con anterioridad al estallido de la gran crisis capitalista. En 1926 los *marines* habían ocupado otra vez Nicaragua con el pretexto de detener los enfrentamientos armados entre liberales –apoyados por el gobierno mexicano de Plutarco Elías Calles– y conservadores, para lo cual impusieron el Tratado de Tipitapa (4 de mayo de 1927).

Este acuerdo puso al descubierto la traición de los liberales a los intereses nacionales y despertó el descontento en la mayoría de la población. Uno de los generales liberales más prestigiosos que aún combatía contra los conservadores, Augusto César Sandino, entonces con 32 años de edad, se negó a aceptar el tratado y con sus partidarios inició la resistencia en las zonas boscosas de las Segovias, al norte de Nicaragua. Ya el 19 de mayo de ese año Sandino daba a conocer un manifiesto donde llamaba a la lucha contra el ocupante extranjero, pues los norteamericanos «pretenden privarnos de nuestra Patria y nuestra Libertad».[1]

En respuesta, comenzó a formarse un verdadero ejército popular. El 2 de septiembre de ese año se aprobaron los estatutos del Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua. Esta fuerza se convirtió muy pronto en todo un símbolo para los pueblos latinoamericanos amenazados por el imperialismo norteamericano, levantando una ola de solidaridad que abarcó a todo el hemisferio. En casi todos los países de América Latina se organizaron comités ¡*Manos fuera de Nicaragua*!, al mismo tiempo que las filas sandinistas se nutrían de combatientes de las más diversas procedencias.

En reacción a los avances del Ejército Defensor de la Soberanía de Nicaragua, el gobierno títere de Adolfo Díaz declaró el estado

[1] J. Bosch, *De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial*, La Habana, Casa de las Américas, 1981, p. 325.

de sitio, mientras el arzobispo de Managua excomulgaba a todos los seguidores de Sandino y las tropas norteamericanas incrementaban su capacidad combativa con el empleo de artillería y aviación. Estas y otras medidas represivas no pudieron impedir el aumento de las acciones armadas de los sandinistas y el crecimiento de sus fuerzas en 1928.

A mediados del año siguiente, como resultado de la maniobra electoral fraguada por los norteamericanos y que llevó a la presidencia al antiguo jefe liberal José María Moncada, Sandino se vio obligado a abandonar Nicaragua. Durante un tiempo residió en México, cuyo gobierno, emanado de la revolución mexicana de 1910, había condenado la intervención de Estados Unidos.

El 7 de mayo de 1930 Sandino regresó a su patria y reinició la lucha de liberación nacional, en medio de los desastrosos efectos de la crisis económica que comenzó el año anterior. La segunda etapa que se abrió entonces se caracterizó por operaciones militares de mayor envergadura, ampliando los sandinistas su control a zonas de los departamentos de León y Chinandega y librando acciones en la costa atlántica del país. Incluso, en octubre de 1932, los sandinistas llegaron a las puertas de Managua, la capital.

El empantanamiento de la guerra en Nicaragua, la propia evolución de la situación interna de Estados Unidos, sumados a las crecientes protestas internacionales, obligó al gobierno norteamericano a buscar fórmulas más sofisticadas para acabar con la lucha de los sandinistas. Con ese propósito crearon una Guardia Nacional, anunciaron la retirada de sus fuerzas militares y realizaron nuevas elecciones que llevaron al poder al liberal Juan Bautista Sacasa (1933-1936).

De inmediato, el nuevo mandatario propuso a Sandino iniciar conversaciones para terminar la guerra. El 8 de enero de 1933, seis días después de la retirada del último *marine* norteamericano, se iniciaron las negociaciones entre Sandino y los representantes de los partidos tradicionales. En ellas el *General de Hombres Libres*, como le había llamado Henri Barbusse, aceptó desarmar su ejército y retirarse con sus tropas a las tierras que se le ofrecían junto al río Coco.

Traicionado por sus interlocutores, Sandino fue emboscado y asesinado en la noche del 21 de febrero de 1934, por órdenes expresas

del jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza, y del embajador norteamericano en Nicaragua Arthur Bliss Lane. Al fusilamiento de Sandino siguió pocas horas después la masacre de sus compañeros acantonados, sin armas, junto al río Coco.

A pesar de su trágica desaparición, el nombre del *General de Hombres Libres* devino bandera del movimiento de liberación nacional en América Latina y forzó a Estados Unidos, entonces gobernado por el presidente Franklyn D. Roosevelt, a reexaminar las formas y métodos de su dominio en la región. Ello no impediría al propio Roosevelt recibir en Washington cinco años después, con todos los honores, al principal responsable directo del asesinato de Sandino, Anastasio Somoza, convertido ya en dictador de Nicaragua (1937).

Albizu Campos y las luchas por la independencia de Puerto Rico

En la década del treinta también en Puerto Rico se radicalizaron las luchas populares, en este caso dirigidas a la obtención de la independencia de Estados Unidos, que se había apoderado de la isla como botín de la guerra ganada a España en 1898. Al frente de este movimiento se encontraba ahora don Pedro Albizu Campos, fundador en 1922 del Partido Nacionalista de Puerto Rico.

En la coyuntura de los años treinta, bajo los efectos de la crisis económica de 1929, las luchas por la independencia de la isla se redoblaron. En 1930 Albizu Campos, después de peregrinar durante cinco años por países de América Latina, abogando por la liberación de su patria, pasó a presidir el Partido Nacionalista, al que imprimió una línea revolucionaria, de resistencia al colonialismo norteamericano y de no colaboración con el régimen político impuesto a su país.

Para ello proclamó la necesidad de la lucha armada para alcanzar la emancipación y organizó, desde el 1 de enero de 1936, al Ejército Libertador de la República de Puerto Rico. Desde su misma aparición pública, el Partido Nacionalista fue víctima de las represalias del gobierno colonial norteamericano. El 16 de abril de

1932, más de 20 mil personas enarbolaron en las calles de San Juan la bandera de Puerto Rico, en protesta por la ofensa legislativa que pretendía convertirla en enseña colonial.

Otra manifestación cívica fue bárbaramente atacada por la policía en las inmediaciones de la ciudad universitaria el 24 de febrero de 1936. Este día, las fuerzas represivas del régimen colonial, encabezadas por el coronel norteamericano Elisha Francis Riggs, perpetraron una sangrienta matanza en la localidad de Río Piedras que dejó un saldo de cuatro nacionalistas muertos y más de cuarenta heridos.

Al año siguiente, el 26 de febrero, dos jóvenes militantes del Partido Nacionalista ejecutaron en las calles de San Juan al asesino coronel Riggs, en represalia por la masacre de Río Piedras. Capturados, estos militantes fueron fusilados, sin juicio previo, en un cuartel policial de la capital, y unas semanas después arrestados varios dirigentes nacionalistas, entre ellos el propio Albizu Campos, acusado de conspirar para derrocar por la fuerza y la violencia al gobierno colonial norteamericano. El legendario líder independentista fue finalmente condenado a catorce años de prisión y destierro, con trabajos forzados, en la prisión federal de Atlanta (Georgia).

La ola represiva de las autoridades estadounidenses en la isla no se detuvo y el 21 de marzo de 1937, por orden del gobernador colonial Blanton D. Winship, fue brutalmente reprimida en Ponce otra manifestación pacífica de los independentistas, que reportó más de veinte muertos y dos centenares de heridos. La respuesta de los patriotas a estas bárbaras agresiones no se hizo esperar: en 1938 los nacionalistas realizaron un fracasado atentado contra el odiado gobernador colonial, preludio de nuevas acciones armadas por la independencia de Puerto Rico.

Rebelión aprista en Perú

El 24 de agosto de 1930 un movimiento militar puso fin al largo gobierno de Augusto B. Leguía, iniciado en 1919. Como en otros países de América Latina, la crisis mundial del capitalismo

se traducía en el desplome del gobierno peruano y el incremento de la intranquilidad social. Pero aquí venía precedida de protestas de los estudiantes universitarios –entre cuyos dirigentes se encontraba Víctor Raúl Haya de la Torre, ex presidente de la recién creada Federación de Estudiantes (1919-1920) y organizador de la Universidad Popular González Prada (1921)–, movimientos campesinos y sublevaciones indígenas.

La revuelta castrense había comenzado el 22 de agosto de 1930 en los cuarteles de Arequipa, segunda ciudad del país, y representó el advenimiento de un nuevo gobierno militar. El flamante presidente de la junta que envió a la cárcel a Leguía y lo dejó morir olvidado en prisión, era el comandante Luis M. Sánchez Cerro.

El golpe de este jefe militar avivó en lugar de apaciguar las tensiones sociales. Por todos lados estallaban sublevaciones populares y rebeliones de sectores del ejército y la marina. En el propio 1930 centenares de indígenas desesperados atacaron en septiembre el centro minero de La Oroya, perteneciente a la Cerro de Pasco Corporation.

El amenazador clima político provocó varios cambios efímeros de gobierno entre el 28 de febrero y el 8 de diciembre de 1931, cuando una nueva junta, presidida por el civil Elías Sámanez Ocampo, entregó el poder otra vez a Sánchez Cerro, elegido presidente en unos comicios amañados celebrados tres meses antes. Las mencionadas elecciones se efectuaron en medio de una atmósfera revolucionaria que presagiaba constantes movimientos contra las clases privilegiadas y el gobierno.

En una hábil maniobra destinada a neutralizar la actividad conspirativa de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), fundada en 1924 por Haya de la Torre, se había permitido el regreso de los exiliados políticos, ofreciendo a su dirigencia la plena participación en el juego electoral. Dispuesto a participar en la justa, el APRA, que desde septiembre de 1930 había abandonado sus pretensiones de organización continental, con un programa antimperialista que además ponía el acento en el indigenismo, se convirtió en un partido nacional más. Con el nombre de Partido Aprista Peruano (PAP), se orientó a afianzar sus bases populares haciendo

proselitismo en los medios urbanos y entre los trabajadores agrícolas de las haciendas azucareras del norte.

El triunfo de Sánchez Cerro burló las aspiraciones de la máxima dirigencia aprista e hizo víctima una vez más a la organización de una feroz persecución. El 23 de diciembre de 1931 las oficinas centrales del APRA fueron clausuradas y el 20 de febrero de 1932 tuvieron que salir expulsados del país los 27 diputados apristas electos en septiembre del año anterior.

Por último, el 5 de marzo de 1932, se ordenó el arresto de Haya de la Torre y de todo el comité ejecutivo del APRA. Al día siguiente, un joven aprista hirió a Sánchez Cerro en un atentado. Pocas semanas después, el 6 de mayo, Haya de la Torre fue detenido por efectivos gubernamentales en los suburbios de Lima.

Como respuesta del APRA, o en muchos casos obedeciendo a la espontánea rebeldía popular, las sublevaciones, sabotajes y conspiraciones contra el régimen se pusieron a la orden del día. La acción aprista más importante se desarrolló en Trujillo, del 7 al 11 de julio de 1932, y fue dirigida por Manuel *Búfalo* Barreto. En esa ciudad, verdadera plaza fuerte de la organización, los militantes del APRA se apoderaron de la alcaldía, la prefectura y las instalaciones militares, provocando la muerte de decenas de oficiales del ejército que residían en el cuartel O'Donovan.

Sánchez Cerro movilizó a todas las fuerzas gubernamentales para aplastar la revuelta popular en Trujillo, a pesar de que se agudizaba un conflicto limítrofe con Colombia que llevaría a la guerra entre los dos países (1932-1934). La resistencia de la ciudad terminó por ceder al bombardeo aéreo y naval y los ataques terrestres del ejército. Entre las víctimas de estos acontecimientos –que se contaron por miles– estuvieron varios cientos de jóvenes apristas fusilados en las ruinas de la ciudad preincaica de Chan Chan.

Sumidos los apristas en la actividad clandestina –que se prolongaría hasta 1945– o la prisión, el 9 de abril de 1933 Sánchez Cerro hizo promulgar una nueva constitución, para caer abatido a balazos 21 días más tarde a la salida del hipódromo. Inmediatamente, la propia convención constituyente designó al jefe del ejército, general Oscar R. Benavides, para que ocupara el gobierno. La vieja pugna

entre civilistas y militaristas, ya casi olvidada, cedía el paso a la nueva animadversión entre el APRA y el ejército.

La revolución del treinta en Cuba

Tras la huida del dictador Gerardo Machado, el 12 de agosto de 1933, y sus principales personeros –cuyas propiedades fueron saqueadas por turbas populares–, buques de guerra norteamericanos se presentaban en la bahía de La Habana. A duras penas se establecía un débil gobierno, conformado a la carrera por los participantes de la mediación entre el régimen defenestrado y una parte de la oposición –desarrollada por el embajador de Estados Unidos Benjamín Sumner Welles– y encabezado por Carlos Manuel de Céspedes, hijo del Padre de la Patria, tras el fracasado intento de dejar en el poder al jefe del ejército, general Alberto Herrera.

El gobierno del presidente Céspedes, que contaba con el respaldo de Estados Unidos, la oligarquía y los políticos que habían participado en la mediación de Sumner Welles, fue derrocado el 4 de septiembre de 1933 por los sargentos, cabos y alistados encabezados por Fulgencio Batista. La sublevación militar, enfilada inicialmente a demandas castrenses, fue aprovechada por algunos sectores revolucionarios, como los estudiantes del Directorio Estudiantil Universitario (DEU), descontentos con la injerencia norteamericana y la continuación del machadato sin Machado, para deponer al gobierno de Céspedes.

Pero el inoperante gobierno colegiado que le sucedió –la Pentarquía– apenas duró unos días, después de que uno de sus integrantes, Sergio Carbó, de manera inconsulta, designara al sargento Batista como jefe del ejército, con el grado de coronel, ante el desacato de la vieja oficialidad a aceptar el nuevo orden. Por la misma razón, todos los jefes y oficiales del ejército, muchos de ellos desprestigiados por su apoyo a la dictadura de Machado, fueron sustituidos por sargentos, cabos y soldados.

En lugar de la Pentarquía ocupó la presidencia, desde el 10 de septiembre de 1933, el prestigioso profesor universitario Ramón

Grau San Martín. En el autotitulado *Gobierno Revolucionario* de Grau actuaba un ala antimperialista, encabezada por el ministro Antonio Guiteras, que impulsó medidas nacionalistas y de corte social.

Combatido por la oligarquía y los Estados Unidos –que no otorgó su reconocimiento diplomático y mantuvo la isla rodeada con sus barcos de guerra–, e incomprendido por el Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda, el llamado «gobierno de los cien días» cayó finalmente el 15 de enero de 1934 víctima de sus propias contradicciones. Un papel central en ese desenlace correspondió a la traición del jefe del ejército, el ex sargento devenido coronel, Fulgencio Batista, convertido en el hombre fuerte de Cuba, quien pasaba a ser el agente de la reacción y el imperialismo norteamericano para aplastar el proceso revolucionario cubano y restablecer el viejo orden de dominación.

Ese resultado fue también favorecido por la desmovilización de la vieja oficialidad del ejército, que fracasó en un postrero e inútil esfuerzo de resistencia desesperada en el Hotel Nacional de La Habana, de donde fue desalojada a cañonazos por el propio Batista el 2 de octubre de 1933, ya puesto a las órdenes de la embajada de Estados Unidos. Lo mismo ocurrió con el alzamiento de ex oficiales, la aviación y parte de la policía el 7 y 8 de noviembre de ese año.

A partir de estos sucesos, Batista quedó convertido en el verdadero poder en Cuba, dominando el panorama nacional durante toda una década, lo que puede considerarse, en la práctica, el comienzo de su dictadura, aun cuando todavía actuaba tras bambalinas. Con el apoyo del nuevo representante de Estados Unidos en la Isla, Jefferson Caffery, y de la alta burguesía cubana, el papel de Batista fue decisivo en el derrocamiento del presidente Grau –una manifestación en su apoyo fue reprimida por las tropas batistianas frente al Palacio Presidencial, con un saldo de varios muertos y heridos– y la designación de un nuevo mandatario, Carlos Mendieta, típico representante de la vieja política.

En apoyo a Mendieta, no solo fue reconocido de inmediato por Estados Unidos, sino que poco después el gobierno norteamericano firmó un nuevo tratado de reciprocidad comercial con Cuba (mayo de 1934) y fijó una cuota para el azúcar cubano en su mercado. Además, eliminó la aborrecida enmienda Platt, que lesionaba la soberanía

cubana, concesión esta inscrita en la política del «buen vecino» preconizada por el presidente Franklyn D. Roosevelt. Pero las medidas dirigidas a estabilizar la situación nacional no consiguieron su propósito, pues siguió la agitación popular y los movimientos contestatarios de distinto signo político dirigidos a alterar el *status quo*.

Para garantizar la fidelidad de las fuerzas armadas, Batista obligó al presidente Mendieta a incrementar los salarios de sus miembros y convalidar ascensos a oficiales, junto con otras prebendas y concesiones a los militares. También comenzaron a edificarse nuevas estaciones de policías y cuarteles militares, mientras Estados Unidos ofreció su apoyo a la modernización del ejército cubano, proporcionando asesoría técnica y adiestramiento.

Con estos recursos, Batista, en su condición de jefe del ejército, fue el encargado de reprimir en forma brutal a las fuerzas revolucionarias, el movimiento obrero y los brotes oposicionistas procedentes de sectores burgueses y pequeño burgueses. Para facilitar estas operaciones, fueron creados tribunales de urgencia –que en procesos sumarios podían emitir condenas por simples presunciones–, establecida la pena de muerte para los que sabotearan la cosecha azucarera, abolida la autonomía universitaria, restringidos los derechos ciudadanos y suspendidas las garantías constitucionales.

Aplastada la huelga general de marzo de 1935 –y asesinado el líder de Joven Cuba,[2] Antonio Guiteras, junto al revolucionario venezolano Carlos Aponte–, se logró el llamado pacto institucional, entre las fuerzas más derechistas del país, para realizar unas elecciones que crearan la sensación de normalidad en el país y que se efectuaron en enero de 1936. En estos comicios, de escasa representatividad, se impuso el líder liberal Miguel Mariano Gómez, que era el candidato de Estados Unidos y el ejército.

Sin embargo, el flamante mandatario, que ocupó su cargo el 20 de mayo de 1937, solo pudo estar en el gobierno hasta fines de ese mismo año, pues entró en abierta pugna con el coronel Batista por el uso de recursos estatales. Bajo la amenaza de un golpe militar si el primer mandatario no era sustituido, el Congreso depuso a Miguel

[2] Organización revolucionaria de lucha contra los gobiernos que respondían a los intereses de los Estados Unidos. (Nota del editor).

Mariano Gómez el 24 de diciembre de 1937 y lo sustituyó por el dócil vice presidente Federico Laredo Brú, lo que demostraba el poder omnímodo que ya había alcanzado Batista.

Prueba de que la verdadera autoridad del país la ejercía Batista fue la adopción, en agosto de 1937, de un demagógico *Plan Trienal* dirigido a impulsar el desarrollo socio-económico de las zonas rurales, mediante 176 promesas a cumplir en tres años, y que demostraba el insistente propósito batistiano de crearse una base social entre el empobrecido y atrasado campesinado cubano. Pero la única materialización de orden práctico de este programa fue la ley de Coordinación Azucarera –solo beneficiaba a los campesinos medios y pobres dedicados al cultivo de la caña de azúcar–, dirigida a regular la principal industria cubana en sus tres factores esenciales; el fabril, el agrícola y la fuerza de trabajo.

El abandono oficial del *Plan Trienal* por parte de Batista, en mayo de 1938, indicaba que el astuto jefe del ejército iba a realizar un cambio de política que lo desmarcara de proyectos de inspiración fascista, acorde a las nuevas circunstancias internacionales, y que, al mismo tiempo, le permitieran modificar su imagen de militar represivo y despótico por una más democrática, despejando el camino a la primera magistratura del país.

Nacionalismo populista

La crisis capitalista de los años treinta, además de favorecer el estallido de movimientos sociales y revoluciones populares, propició el desarrollo de movimientos nacionalistas burgueses de distinto signo, que alcanzaron mayor concreción en aquellos países latinoamericanos que habían logrado vertebrar una cierta industria. En estos casos, los sectores emergentes, que representaban los intereses de la naciente burguesía nacional, alcanzaron o compartieron el poder e impusieron nuevas políticas orientadas a promover el desarrollo interno sobre la base de una serie de medidas proteccionistas y nacionalistas, típicas del capitalismo de estado.

De esta manera, aumentó sensiblemente la participación gubernamental en la economía y la sociedad, controlando los recursos

naturales y revirtiendo al patrimonio nacional importantes ramas productivas y de servicios, dominadas hasta entonces por el capital extranjero, creándose con ellas grandes monopolios estatales. Antecedentes de estos gobiernos nacionalistas fueron, en cierta forma, los de Balmaceda en Chile, Irigoyen en Argentina y Batlle y Ordóñez en Uruguay.

Para las repúblicas de América Latina que contaban con índices relativamente altos de urbanización y crecimiento industrial, el desarrollo de un capitalismo de estado comenzó o cobró un segundo impulso con la crisis capitalista de 1929-1933. Se trataba de un grupo de países latinoamericanos en los cuales la burguesía nacional era más o menos fuerte, como Brasil, Argentina, México y, en menor medida, Colombia, Chile y Uruguay.

Al contrario de lo ocurrido con el resto de los países al sur del río Bravo, en donde la depresión económica se trató de resolver mediante la recuperación de los mercados perdidos, acentuando el libre comercio y con una mayor entrega al capital foráneo –el llamado «crecimiento hacia afuera»–, en aquel grupo de países los efectos del *crack* bancario de 1929 se combatieron de una manera muy diferente. Así, los países latinoamericanos con mayor desarrollo industrial apostaron por una política económica basada en una mayor participación estatal en la economía, esto es, el «crecimiento hacia adentro».

Entre las medidas adoptadas por este grupo de países estaban la promoción de mecanismos inflacionarios, tarifas proteccionistas y, la adopción de controles cambiarios, que permitieran equilibrar la balanza comercial y de pagos, devaluando la moneda. Además, impulsaron una mayor intervención estatal en la infraestructura, la esfera productiva y los gastos sociales. El movimiento obrero fue reorganizado por el Estado a través de estructuras sindicalistas y se promovió una legislación laboral paternalista que incluía beneficios sociales y el derecho de huelga.

La política de «crecimiento hacia adentro» y de sustitución de importaciones, puesta en práctica en América Latina por los gobiernos nacionalistas populistas para beneficio de la burguesía industrial, terminó por alterar la tradicional división internacional

del trabajo impuesta a finales del siglo XIX por las grandes potencias. Los representantes de estas corrientes auspiciaron distintas formas de participación popular, introduciendo la incorporación de sectores tradicionalmente excluidos en la actividad política, a través de mecanismos de movilización controlados por el Estado.

Uno de sus principales rasgos fue el carácter parainstitucional de la movilización popular, con gran variedad de símbolos, estilos e incluso ideologías, que los sociólogos bautizaron de populistas. Sin embargo, ello no impidió que en la mayoría de estos países las reformas se detuvieran en ciertos límites y que los sectores industriales llegaran a un compromiso con la oligarquía agro-exportadora, para no afectar su principal fuente de recursos en divisas.

Ejemplo de ello fue el régimen de Getulio Vargas en Brasil, quien a fines de los años treinta implantó un gobierno nacionalista burgués de corte fascista, apoyado tanto por la emergente burguesía industrial como por la oligarquía tradicional. En cambio, México fue el paradigma de un nacionalismo de un signo político y social completamente diferente.

Nos referimos, en particular, al gobierno del general Lázaro Cárdenas, desarrollado entre 1934 y 1940, que puso fin al período caudillista de la revolución mexicana, poniendo sobre el tapete los principales objetivos postergados de esa epopeya, que hasta entonces habían quedado en la letra muerta de la constitución de Querétaro. La política cardenista adoptó una línea abiertamente revolucionaria y popular, al extremo de atreverse a nacionalizar el petróleo e impulsar una reforma agraria radical.

El cardenismo

Tras la promulgación en México de la constitución de 1917 y los asesinatos de Emiliano Zapata (1919) y PanchoVilla (1923), el gobierno nacional continuó en manos de Venustiano Carranza, quien congeló cualquier posibilidad de llevar adelante los objetivos de la revolución mexicana, hasta que murió en 1920 luego de un levantamiento militar encabezado por el general Álvaro Obregón.

Aunque durante el mandato de Obregón, extendido hasta 1924, se adoptaron algunas disposiciones revolucionarias, en realidad pocos avances se consiguieron en las metas plasmadas en la constitución de 1917.

No obstante, en esos años se inició un gran renacimiento cultural promovido por José Vasconcelos desde la Secretaría de Educación Pública –entre sus colaboradores figuraban la joven poetisa chilena Gabriela Mistral, que ya había dado a conocer sus *Sonetos de la muerte* (1915), y el líder peruano Haya de la Torre– que tuvo importantes expresiones en la novelística, como las obras de Mariano Azuela y Martín Luis Guzmán sobre la revolución y cuyo punto culminante se alcanzó con el muralismo mexicano. Esta reconocida corriente pictórica, que llenó de inmensos y sugerentes murales los principales edificios públicos de la capital, rescató el papel de las masas populares, y especialmente a los pueblos originarios, como factor decisivo en la historia y, tuvo entre sus figuras descollantes a David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco.

El indigenismo también alcanzaría gran resonancia en la novelística mexicana y de otros países latinoamericanos. Entre sus primeras expresiones literarias pueden citarse *El Indio* (1935) del mexicano Gregorio López y Fuentes, *Huasipungo* (1934) del ecuatoriano Jorge Icaza y *El mundo es ancho y ajeno* (1941) del peruano Ciro Alegría.

A partir de 1924, el poder en México pasó a manos de Plutarco Elías Calles, titulado Jefe Máximo de la Revolución, quien dominó el escenario político durante una década, afianzado en el poder tras el asesinato de Obregón (1928), etapa denominada el *Maximato*. Durante ese período se sucedieron en la presidencia, bajo la sombra de Elías Calles, Emilio Portes Gil (1928-1930), Pascual Ortiz Rubio (1930-1932) y Abelardo Rodríguez (1932-1934).

Fueron también los años en que se fundó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), devenido en el gran partido oficial del sector triunfador en la revolución mexicana y que fue concebido originariamente por Calles para manejar a su antojo la política del país. Además, se rompieron las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (URSS) –establecidas por Obregón, lo que había convertido a México en el único país latinoamericano que lo hizo–, mientras

las conquistas de la revolución eran paralizadas y se acentuaba la tendencia derechista, favoreciendo abiertamente la entrada masiva del capital extranjero y los intereses de los emergentes sectores burgueses.

El general Lázaro Cárdenas, llegado a la presidencia de México el 1 de diciembre de 1934, debió comenzar su gestión, para poder desarrollar un gobierno verdaderamente independiente, libre de ataduras y compromisos con el pasado reciente, distanciándose de las figuras vinculadas al *Maximato* de Elías Calles. Por eso alejó a poderosos caudillos –como Saturnino Cedillo y Juan Andrew Almazán– y, finalmente, expulsó del país al propio Plutarco Elías Calles (1936) y sus más cercanos secuaces, entre ellos Luis N. Morones –que controlaba el movimiento sindical oficialista.

El motivo de la sanción al antiguo Jefe Máximo de la revolución era su constante intención de inmiscuirse en asuntos de gobierno, tras las numerosas huelgas que estallaron en la primavera de 1935. Poco antes, el Ejecutivo había decretado una amplia ley de indultos, a la vez que moderaba la campaña antirreligiosa de sus predecesores en el cargo –que había dado lugar a levantamientos armados fanáticos en la llamada guerra cristera– y legalizaba al Partido Comunista.

Con estas medidas, el mandatario puso fin a la hegemonía militar, a las endémicas querellas parlamentarias y fortaleció la centralización política, a la vez que despejaba el camino para la radicalización de su gobierno. Además, Cárdenas tuvo también que propiciar la reorganización del movimiento obrero, lo cual consiguió con la creación, en 1936, de la unitaria Confederación de Trabajadores de México (CTM) –que declaró su aspiración de lograr una sociedad sin clases–, encabezada por Vicente Lombardo Toledano, quien había dirigido con anterioridad la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM).

Con el apoyo gubernamental –Cárdenas había prometido que las conquistas obreras podrían llegar hasta donde dieran la capacidad productiva y financiera de las empresas– las huelgas obreras se multiplicaron –se calculan unas 900 entre 1935 y 1939–, lo que permitió la obtención de muchas reivindicaciones y la significativa elevación del nivel de vida de los trabajadores. Además, el mandatario mexicano

reestructuró al propio partido de gobierno, transformándolo en uno nuevo de estructura corporativista, con un programa nacionalista y de justicia social mucho más acentuado y con mayores vínculos y representatividad populares, que desde 1938 se denominó Partido de la Revolución Mexicana (PRM).

Los grandes hitos del gobierno de Cárdenas estuvieron relacionados con su política soberana e independiente: asilo concedido a León Trotsky (9 de enero de 1937), condena a las agresiones fascistas en África y Europa, así como de la invasión de Finlandia por la Unión Soviética (URSS), respaldo a los judíos perseguidos por los nazis y defensa del derecho de no intervención en foros panamericanos. Esa postura alcanzó su cenit, en materia de política exterior, con el comprometido respaldo de México a la república española. Gracias a ello, más de 20 mil republicanos españoles obtuvieron cálido refugio en México.

También durante su mandato se dio gran impulso a la educación popular, que por su sentido social había sido tildada, desde la reforma realizada en diciembre de 1934 al artículo tercero constitucional, de *socialista*. La educación *socialista* pronto se convirtió en piedra angular del gobierno de Cárdenas, al mismo tiempo que se inauguraba una Universidad Obrera (1936).

Una de las medidas revolucionarias de mayor significación del período cardenista fue sin duda la reforma agraria, destinada a resolver lo que el mandatario consideraba el problema social más grave de México. A la llegada al poder de Cárdenas, los terratenientes todavía poseían el 83.4% de la tierra laborable y solo poco más de medio millón de campesinos se habían beneficiado hasta entonces con los exiguos repartos agrarios, unos siete millones de hectáreas entre 1915 y 1934, en su mayoría realizados a costa de las tierras estatales. La única excepción era por supuesto el estado de Morelos, único lugar del país donde los hacendados habían sido realmente afectados por la aplicación zapatista del Plan de Ayala.

Para llevar adelante una verdadera reforma agraria fue necesario expropiar a los latifundistas nacionales y extranjeros –más de 18 millones de hectáreas–, lo que en gran medida fue posible por la debilidad en que se encontraba este sector como resultado del

proceso revolucionario. Ese proceso abrió el camino para la creación de algunos ejidos colectivos –esto es, entrega de tierras a un pueblo o núcleo de población, el cual no podía venderla, rentarla o enajenarla de ninguna forma–, revitalizando las ancestrales comunidades aborígenes. Preocupado por el secular abandono de los pueblos originarios, el mandatario mexicano fundó en enero de 1936 el Departamento de Asuntos Indígenas.

De 1935 a 1938 el presidente Cárdenas promulgó también una amplia legislación para proteger a la industria nacional en desarrollo de la competencia extranjera. Especial importancia tuvo la ley de 1938 que estableció aranceles proteccionistas –después se pondría en vigor el impuesto a la renta (1939)– para la importación de todas aquellas mercancías que se produjeran en México. La aplicación de esta disposición, junto con los créditos y el apoyo brindado a la inversión privada y estatal –que creció de 377 millones a 773 millones de pesos–, permitió que la manufactura que representaba el 13.7% del ingreso nacional en 1935 llegara al 24.2% en 1940.

En el mismo lapso, las empresas industriales aumentaron de 6,916 a 13 510, incrementándose el valor de la producción en las 24 ramas fabriles más importantes del país: pasó de 598 millones de pesos en 1930 a 1526 millones de pesos en 1940. Fue también entonces que alcanzó gran desarrollo la industria tipográfica y comenzó a fomentarse, con apoyo gubernamental, la producción de películas, creando las bases para la llamada época dorada del cine mexicano que se alcanzaría en los años cuarenta.

En la legislación nacionalista adoptada en este período ocupó un lugar destacado la ley sobre expropiación en beneficio de la nación, firmada por Cárdenas en noviembre de 1936, según la cual el Estado tenía pleno derecho a confiscar bienes de particulares en provecho de la sociedad y que iba mucho más lejos de lo establecido en el artículo 27 de la constitución. Gracias a estas disposiciones, fueron recuperados también los ferrocarriles (junio de 1937) que estaban en manos del capital extranjero desde los tiempos de Porfirio Díaz.

A las profundas transformaciones realizadas durante su presidencia, que coronaron la revolución mexicana iniciada en 1910 –estatización de los ferrocarriles, reforma agraria, organización del

movimiento obrero, educación *socialista*, política soberana e independiente– se sumó la valiente expropiación petrolera efectuada el 18 de marzo de 1938: sin duda la más radical medida antimperialista adoptada hasta entonces en toda la atribulada historia de América Latina. Para adoptar esta histórica decisión, Cárdenas, demostrando una audacia y valentía muy superior a todos sus predecesores, aprovechó la existencia de un insoluble conflicto obrero con los monopolios petroleros y la compleja correlación de fuerzas existentes a escala internacional con el ascenso del fascismo en Alemania e Italia.

Las represalias de los monopolios petroleros fueron duras: impusieron un boicot mundial que dejó a México desprovisto de financiamiento, técnicos, transportes, piezas de repuesto y mercados para sus hidrocarburos. Para complicar más las cosas, a los tres meses de la expropiación estalló la rebelión de Saturnino Cedillo –un antiguo líder campesino devenido en hacendado–, caudillo de San Luis Potosí, aupado por todas las fuerzas internas y externas contrarias a Cárdenas y que fue aplastada por el gobierno en enero de 1939. Otro síntoma del incremento de la oposición derechista fue la aparición de la Unión Nacional Sinarquista (1937) y del Partido Acción Nacional (PAN), este último fundado en 1939 en la sede del Banco de Londres y México por Manuel Gómez Morín.

En respuesta a la presión de las empresas petroleras expropiadas, amparadas por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, Cárdenas pidió un esfuerzo a la nación en su discurso del 23 de marzo de 1938 ante una gigantesca concentración popular reunida frente al Palacio Nacional. La mayor intensidad del conflicto se alcanzó con Inglaterra, pues tras la ruptura de las relaciones diplomáticas (3 de mayo de 1938), el gobierno de Londres adoptó medidas para aislar económica y políticamente a México.

A partir de abril de 1938, el gobierno de Cárdenas lograba romper el bloqueo y realizar significativas exportaciones de petróleo mexicano, mientras la producción alcanzaba los 176 mil barriles (1939). Al final, las empresas confiscadas se vieron obligadas al reconocimiento de la soberanía mexicana y a aceptar la indemnización por sus propiedades.

Sin duda, las leyes revolucionarias del gobierno de Cárdenas constituyeron el punto más alto alcanzado por la revolución mexicana. Después de más de un siglo de independencia, fue el primer intento serio de transformación radical de las relaciones económicas de un país de América Latina, sacudió hasta sus raíces las arcaicas estructuras agrarias y desafió a las cada vez más agresivas potencias imperialistas. Todo ello convirtió al régimen cardenista en un profundo movimiento nacionalista de izquierda, que inauguró una nueva época de luchas populares contra las oligarquías y la dominación extranjera en todo el continente, dejando su impronta en el imaginario revolucionario del pueblo mexicano.

Estado Novo brasileño

La otra cara del nacionalismo burgués fue Brasil con el *Estado Novo*, implantado por Getulio Vargas en 1937, tras el breve ensayo corporativo establecido por la constitución de 1934. El *Estado Novo*, inspirado en el modelo fascista y erigido sobre las cenizas de la insurrección comunista de 1935, era un nacionalismo de corte conservador y antidemocrático, muy diferente al cardenismo, cuyos rasgos autoritarios se fueron atemperando en los años de la Segunda Guerra Mundial.

Detrás de ese esquema totalitario, se ocultaba también una estrategia de desarrollo integral y la búsqueda de independencia económica y política. La estabilidad del sistema no solo se fundamentaba en la alianza de la oligarquía exportadora y la emergente burguesía industrial, sino en un nuevo tipo de relaciones con el proletariado, el cual se encuadraba en organizaciones sindicales manejadas por el Estado mediante líderes corruptos, a cambio de ciertas concesiones derivadas de una legislación social bastante avanzada.

Este resultado fue posible porque las insurrecciones *tenentistas* contribuyeron a resquebrajar la vieja república oligárquica, proceso que se conjugó con los efectos de la gran crisis económica capitalista de 1929 que contribuyó a crear una situación revolucionaria. En esas condiciones, se había producido la llamada revolución de 1930.

Dirigida por Getulio Vargas, un pragmático hacendado y gobernador de Rio Grande do Sul, la rebelión de 1930 triunfó con el apoyo de importantes grupos de la emergente burguesía industrial y la pequeña burguesía, descontentos con el régimen oligárquico, y dispuestos a encontrar una solución nacional a la crisis capitalista de 1929. Invitado Luis Carlos Prestes a adherirse al movimiento, que contaba con el respaldo de los *tenentistas* y la mayor parte del ejército, se negó con el argumento de que era una revuelta burguesa que no resolvería los problemas del proletariado y el pueblo.

Ya para entonces el legendario comandante de la columna a la que dio nombre, Prestes, había sido captado por el dirigente comunista Astrogildo Pereira y viajado a la Unión Soviética. Condicionado por las consignas sectarias de la III Internacional –que también provocaron en América Central la ruptura de Farabundo Martí y Sandino–, el *caballero de la esperanza* –como lo denominó el famoso escritor brasileño Jorge Amado– rompió con sus antiguos compañeros de armas, sumados al movimiento de Vargas, perdiendo la posibilidad de influir en la llamada revolución de 1930.

Gracias a esa insurrección, se hizo del poder ese año un sector marginado de la propia oligarquía y la emergente burguesía industrial, representado por Getulio Vargas, quien de forma ininterrumpida mantuvo el control del gobierno hasta 1945. La primera etapa de su mandato fue convulsa, no solo como resultado de las agitadas luchas políticas, sino también por la sublevación del poderoso estado de Sao Paulo en 1932 –centro de la producción cafetalera y de la naciente industria–, sometido finalmente por la fuerza.

Hasta 1937 Vargas introdujo ciertas reformas democráticas y sociales que quedaron incorporadas a la constitución de 1934, una especie de compromiso entre las viejas fuerzas oligárquicas y los núcleos burgueses en ascenso. En esa coyuntura, comenzaron a actuar los grupos profascistas brasileños –como los integralistas– para detener el auge del movimiento de masas, estimulados por el clima internacional –ascenso de Hitler al poder en Alemania. Simultáneamente, crecían los vínculos económicos y comerciales entre la Alemania nazi y el gobierno de Vargas.

Para luchar contra la arrolladora influencia fascista surgió, en marzo de 1935, la Alianza Nacional Libertadora (ANL), dirigida tras bambalinas por el Partido Comunista del cual Luis Carlos Prestes era ahora su secretario general. Perseguida implacablemente por el gobierno, la ANL promovió la sublevación de algunas guarniciones militares (Rio Grande do Norte, Recife, Rio de Janeiro) en noviembre de ese año para crear *soviets* de obreros, soldados y campesinos, pero fueron aplastados en un verdadero baño de sangre.

El fracaso del levantamiento comunista facilitó los planes de Vargas para acentuar los rasgos autoritarios y represivos de su gobierno, proceso que culminó en 1937 con la instalación del *Estado Novo*. La represión desarticuló a las organizaciones democráticas y posibilitó un repunte de los partidos tradicionales con vistas a las elecciones de 1938.

Los comicios abrían la posibilidad de un regreso al esquema de la *Republica Velha*. Este factor, unido a los obstáculos para la reelección presidencial, llevó a Vargas a urdir una asonada militar. Para completar los planes golpistas, Vargas encomendó a Francisco Campos, conocido simpatizante del nazifacismo, la tarea de confeccionar una constitución autoritaria y centralista, que garantizara la prolongación del régimen y permitiera controlar al movimiento popular.

La atmósfera para la asonada fue preparada en septiembre de 1937 con la divulgación de una falsa conspiración comunista: el *Plan Cohen*. El supuesto proyecto revolucionario, elaborado en realidad por los integralistas, proporcionó a Vargas el pretexto que necesitaba para declarar el estado de guerra interno. El 10 de noviembre, con la activa colaboración de los integralistas, convertidos en verdaderas tropas de choque, Vargas clausuró el Congreso, disolvió los partidos y destituyó a los gobernadores opositores.

Esa noche, el flamante dictador anunció por la radio el contenido de la nueva constitución del *Estado Novo*. El llamado Nuevo Estado, basado en una constitución de tipo fascista, significó la implantación de un régimen dictatorial y centralista. El Congreso, las cámaras estaduales y los gobiernos locales, que habían quedado disueltos tras el golpe de Estado, dejaron de funcionar y se atribuyeron poderes excepcionales al Ejecutivo.

Otra faceta del *Estado Novo* fue encuadrar al movimiento obrero en una estructura burocrática, calcada de la carta del trabajo de Mussolini (1927), dirigida a convertir las combativas organizaciones proletarias en sindicatos de patrones y empleados, que fomentaran la colaboración de clases. A los sindicatos, encabezados por líderes designados por el gobierno (*pelegos*), se les prohibieron las huelgas o cualquier tipo de protesta, así como firmar contratos colectivos de trabajo, reduciéndose su gestión a actividades recreativas y de asistencia social. De forma parecida se organizó a los alumnos de la enseñanza secundaria y superior en la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), creada en 1937.

La implantación del *Estado Novo* vino también acompañada de una férrea censura, la creación de un aparato oficial de propaganda –que presentaba a Vargas como «el padre de los pobres»–, la designación de nuevas autoridades en los distintos cargos públicos y la clausura de todos los partidos, incluido el integralista, que finalmente se sublevó contra el gobierno y fue aplastado. El desesperado levantamiento fascista no fue suficiente para impedir la consolidación de Vargas, gracias al apoyo que recibió de la oligarquía agroexportadora, la burguesía industrial y ciertos sectores de las capas medias, satisfechos con la estabilidad alcanzada.

La oligarquía fue neutralizada por el mandatario al respetar la gran propiedad rural –solo el 3% de los hacendados poseían el 60% de la tierra– y apoyar la exportación de los productos tradicionales. Por su parte, los industriales, reunidos en la Confederación Industrial Brasileña recibieron del *Estado Novo* oportunidades para ampliar el campo de sus negocios, mientras las capas medias eran contentadas con empleos bien remunerados en el dilatado aparato estatal.

La coyuntura económica internacional fue un factor adicional que contribuyó a cimentar la dictadura. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial los precios del café y las materias primas subieron de manera significativa, mientras la creciente orientación bélica de la industria europea y norteamericana creaba posibilidades inesperadas para el aumento y diversificación de la producción autóctona. Ello permitió que se ampliaran o fundaran fábricas de papel y celulosa, de motores de camiones y de aviación, de cemento, material ferroviario,

aluminio, vidrios, máquinas de coser, productos químicos y bienes de consumo.

El centro de ese brote industrial era Sao Paulo, que ya en 1938 concentraba el 60% de la actividad fabril, atrayendo a miles de trabajadores y campesinos que se radicaban en su periferia, dando origen a las tristemente célebres *favelas* o villas miseria. La gran beneficiaria con las transformaciones económicas del *Estado Novo* fue la industria.

En 1940 los bienes de capital ya representaban el 38% del total de la producción fabril y tres años después los tejidos ocupaban el 13% de las exportaciones brasileñas. Por entonces existían más de 600 mil obreros industriales, cuando la población total del país sobrepasaba los 40 millones de habitantes.

El crecimiento industrial estaba avalado por el apoyo gubernamental, que posibilitaba la acumulación privada de capital con créditos –el *mil reis* fue remplazado por el *cruzeiro* (1942)–, aranceles, control de precios y salarios, exenciones fiscales y la propia política cambiaria. Vargas fundó empresas estatales en sectores claves –acero, energía, transporte, etc.–, que no eran atractivos para los capitalistas privados o tenían una importancia estratégica y recuperó otros con las divisas acumuladas en Europa –especialmente en Inglaterra–, durante la conflagración mundial. Los dos proyectos de desarrollo más ambiciosos, correspondieron a la compañía minera del valle del Rio Doce y a los altos hornos de Volta Redonda.

La Segunda Guerra Mundial puso fin a los coqueteos de Vargas con los regímenes fascistas. A partir de ese momento, el gobierno norteamericano volvió a ofrecer a los brasileños préstamos, armamentos y la construcción de bases militares. En consecuencia, en 1940 el comercio brasileño con el Reich fue prácticamente nulo –menos del 2%–, mientras con los norteamericanos alcanzaba el 50%.

La política de Vargas en contra del fascismo se acentuó desde 1942, acelerada por el curso adverso a los nazis que tomaba el conflicto y por los indiscriminados ataques alemanes a los mercantes de Brasil. Después de romper relaciones con el Eje, fueron desarticulados varios centros de espionaje alemán y japonés en Sao Paulo, Rio de Janeiro y Santa Catarina.

Desde ese momento, Brasil obtuvo un tratamiento privilegiado de los Estados Unidos. En ese clima, comenzó la revitalización de los sectores de oposición, que exigían una amplia amnistía, la democratización, el desmantelamiento del *Estado Novo* y la entrada de Brasil en el conflicto mundial.

El 21 de agosto de 1942, Vargas declaró la guerra al Eje fascista. Las propiedades alemanas fueron confiscadas, entre ellas la compañía Cóndor, con cuyos aeroplanos se constituyeron las empresas estatales VASP y VARIG. Al año siguiente, el gobierno de Vargas decidió formar una Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB), mientras con ayuda norteamericana se construía un triángulo defensivo en Natal, Recife y la isla Fernao de Noronha.

Entretanto, la presión oposicionista sobre el gobierno no amainaba. El 24 de octubre de 1943, un grupo de noventa intelectuales y políticos de Minas Geraes, en su mayoría vinculados al extinguido régimen del «café con leche», dio a conocer el Manifiesto de los *Mineiros*. En ese documento, plagado de referencias a la *Carta del Atlántico* de Roosevelt y Churchill, se pronunciaban a favor de reformas democráticas, pero sin mencionar los acuciantes problemas económicos y sociales del país. En los meses siguientes, arreció la campaña contra el *Estado Novo* por parte, sobre todo, de los más destacados personeros de la *Republica Velha*.

Poco a poco la prensa rompió las ataduras de la censura. El 22 de enero de 1945 destacados intelectuales emitieron una declaración favorable a la democratización y un mes después el periodista Carlos Lacerda daba a conocer una entrevista a un conocido político que pedía elecciones sin Vargas como candidato. Al día siguiente, el influyente periódico *O Globo* anunció la postulación del brigadier Eduardo Gomes, ex *tenentista* y uno de los pocos oficiales superiores que se había opuesto al *Estado Novo*.

Detrás de esa nominación estaban los intereses de la oligarquía y otros sectores vinculados a la *Republica Velha* que darían vida a la Unión Democrática Nacional (UDN). Su programa, definidamente anticomunista, propugnaba el establecimiento de un gobierno liberal burgués, opuesto a la ampliación del área estatal de la economía.

La reacción de Vargas fue la firma, el 28 de febrero, del Acta Adicional No. 9 a la constitución de 1937 y fijar un plazo de noventa días para anunciar la fecha de las elecciones. En abril, cuando el Ejército Rojo irrumpía en Berlín, Vargas estableció relaciones con la Unión Soviética, permitió el regreso de los exiliados y concedió la libertad a más de 600 presos políticos, entre ellos a Prestes. En mayo, esta organización fue legalizada, mientras el gobierno emitía un nuevo código electoral que establecía el voto obligatorio, directo y secreto, aunque se mantenía la restricción a los analfabetos (50% de la población).

La negativa de Vargas a postularse allanó el camino al general Eurico Gaspar Dutra, cuya candidatura estaba respaldada por las dos fuerzas políticas adictas al gobierno: el Partido Social Democrático (PSD) y el Partido Trabalhista Brasileño (PTB). El primero estaba dominado por los representantes de los sectores burgueses ligados al *Estado Novo*, mientras el otro era de base sindicalista, dirigido por líderes *pelegos* y otras figuras gubernamentales.

A deslindar los campos entre los partidarios de la vieja oligarquía asociada al capital extranjero y los defensores de los intereses nacionales contribuyó la firma por el presidente Vargas –convertido ahora en campeón de la democracia y el antimperialismo–, el 21 de junio de 1945, del decreto *antitrust* No. 7666. La *Ley Malaia*, como se le llamó, limitaba las actividades de las empresas extranjeras, lo que provocó la airada reacción de Estados Unidos.

La posibilidad de una convención constituyente, antes de los esperados comicios presidenciales, caldearon los ánimos de los candidatos ya nominados, que en complicidad con los tres principales partidos, los mandos militares y la embajada norteamericana, decidieron derrocar a Vargas ante el temor de que la constituyente le permitiera prolongarse en el poder. El 29 de octubre de 1945, Vargas fue depuesto por el ministro de guerra Goes Monteiro y el jefe del estado mayor, Osvaldo Cordeiro de Farias.

La revolución en marcha de López Pumarejo en Colombia

Una manifestación morigerada del nacionalismo populista se desarrolló en Colombia durante los años treinta. Aquí también su vertebración estuvo asociada a los efectos de la crisis económica capitalista de 1929 que produjo una brutal caída de la cotización del café en los mercados internacionales.

El descenso del valor de las exportaciones cafetaleras redujo los ingresos por este concepto de 122 millones de pesos en 1929 a solo 67 millones tres años después –el propio presupuesto estatal pasó de 75 millones de pesos a 35 millones en el mismo lapso–, lo que agudizó los problemas sociales existentes, entre ellos el desempleo, el hambre y la miseria de amplios sectores de la población. La crisis fomentó protestas obreras, que obligaron al gobierno al reconocimiento de los sindicatos en 1931, y alentó levantamientos campesinos en varias regiones, sobre todo en las muy golpeadas zonas cafetaleras de Tolima y Cundinamarca.

En medio de esa inestabilidad, las fuerzas que se inclinaban a proteger los intereses nacionales y sacar al país del atolladero mediante la adopción de reformas económicas y sociales –inspiradas en el *New Deal* de Franklyn D. Roosevelt– se impusieron en los comicios de 1934. En esas elecciones se produjo el triunfo arrollador –obtuvo la mayor votación en la historia de Colombia– del candidato liberal progresista Alfonso López Pumarejo.

Favorecido por la abstención de sus opositores conservadores, López ganó además la mayoría en el Congreso, cosa que no había podido lograrse en el período anterior. En la contienda electoral, el Partido Comunista, fundado en 1931, encabezado ahora por Luis Vidales, se opuso a la candidatura liberal con su propio aspirante, el líder indígena Eutiquio Timoté.

La política reformista desarrollada por el gobierno de López desde el 7 de agosto de 1934 se caracterizó, en términos generales, por una mayor intervención estatal en la economía y cierta orientación social en beneficio de las masas populares, que el propio mandatario denominó *la revolución en marcha*. Las transformaciones

abarcaron disímiles aspectos, llegando incluso a formar con Ecuador y Venezuela un bloque de intereses comunes a favor del desarrollo económico.

Un énfasis especial puso el presidente López en la protección de la naciente industria nacional, lo que fue combinado con la elevación de los salarios de los trabajadores, ampliando la capacidad de consumo del mercado. Ello se tradujo, entre 1933 y 1938, en una tasa de crecimiento del 10.8%, mientras se duplicaba el número de establecimientos industriales y se triplicaba la inversión pública. A estos resultados también contribuyó la recuperación de los precios del café y el crecimiento de la extracción de petróleo, que alcanzó entre 1925 y 1939 sus más altos niveles, cuando llegó a representar el 20% de las exportaciones colombianas.

Como parte de su acción gubernamental, el presidente López se propuso limitar los privilegios de la vieja oligarquía, estableciendo impuestos directos y progresivos sobre el patrimonio y el exceso de ganancias, para lo cual adoptó una reforma tributaria por la ley 78 de diciembre de 1935. La puesta en vigor del impuesto sobre la renta permitió al Estado realizar grandes gastos sin tener que acudir a la ayuda exterior, pues los ingresos fiscales por este concepto pasaron de representar el 4.5% en 1934 al 21% en 1938. En materia educativa, por otro lado, López no solo limitó la intervención de la Iglesia católica en la educación, sino que estableció la enseñanza primaria obligatoria y gratuita.

En 1936 se realizó una importante reforma integral a la carta magna de 1886 que fortaleció el Poder Ejecutivo, la participación gubernamental en la economía, la separación de la Iglesia y el Estado y otras cláusulas nacionalistas y de contenido social. Entre estas pueden mencionarse el reconocimiento del derecho de huelga, la libertad de enseñanza y la introducción de la noción de la función social de la propiedad. Además, se estableció el sufragio universal.

Otra legislación sin precedentes fue la adoptada en materia agraria. Nos referimos a la ley 200 de 1936 que se propuso atacar el latifundio improductivo e impulsar las relaciones capitalistas en el campo. Este decreto presidencial estableció que los predios no explotados pasaran a manos del Estado a los diez años de promulgada

la ley y daba la posibilidad de que terrenos en arriendo –o que hubiese sido explotados durante cinco años– pasaran a propiedad del inquilino.

Al mismo tiempo, el movimiento obrero se fortaleció con el apoyo del gobierno y el impulso dado por el Partido Comunista. Prueba de ello fue la creación en 1935 de la primera central obrera del país, la Confederación Sindical de Trabajadores (CST). En 1938 se transformaría en la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), que llegó a agrupar unos novecientos sindicatos, influidos por liberales y comunistas.

Las medidas de *la revolución en marcha* despertaron la virulenta oposición del clero, los latifundistas y los comerciantes, así como de los grandes monopolios extranjeros –que tildaban de socialista a López–, contexto en el que se inscribe la aparición en 1934 de la Asociación Patriótica Económica Nacional (APEN). Esta organización tuvo su órgano de expresión en el periódico *La Razón* y de principal dirigente a Juan Lozano y Lozano.

La conformación de un clima de confrontación, unido a la persistente campaña opositora de la Iglesia católica, facilitó a los sectores de ultraderecha, encabezados por el político conservador de ideas fascistoides Laureano Gómez –para cuyos fines fundó el periódico *El Siglo*–, desatar en 1936 una ola de atentados. Entre las organizaciones fascistas que la promovían estaba la llamada Acción Intrépida y el grupo conocido como los *leopardos*, dirigidos por Silvio Villegas. Este individuo, junto a Álzate Avendaño, promovería poco después un partido de matriz falangista: Acción Nacionalista Popular, salido de la derecha conservadora.

El crecimiento de la propaganda fascista y anticomunista, los desembozados ataques al gobierno de López y la creciente violencia contra las organizaciones democráticas y populares llevó al Partido Comunista –siguiendo al pie de la letra las directrices del VII Congreso de la Internacional Comunista de noviembre de 1935– a proponer infructuosamente a López y al Partido Liberal la formación de un frente popular. Sin el concurso liberal, la amplia coalición antifascista quedó organizada de todos modos en la primera mitad de 1936 con la participación de sindicatos, ligas campesinas,

figuras de la izquierda liberal y representantes de la organización Vanguardia Socialista, de corta vida –fue sustituida por la Liga de Acción Política–, que tenía entre sus dirigentes a Gerardo Molina.

La muerte de Olaya Herrera, en febrero de 1937, despejó el camino a la primera magistratura a Eduardo Santos, dueño del periódico liberal *El Tiempo* y ubicado más a la derecha que Darío Echandía, el aspirante de su propio partido a la presidencia promovido por el Frente Popular. Santos, que ocupó el Ejecutivo el 7 de agosto de 1938, gozaba del apoyo de sectores conservadores y del propio liberalismo, deseosos de poner fin a la *revolución en marcha* de López. En determinados momentos de su mandato, extendido hasta 1942, liberales como Jorge Eliecer Gaitán, Carlos Lleras Restrepo y Luis López de Mesa formaron parte del gabinete ministerial del presidente Santos.

Durante su período estalló la Segunda Guerra Mundial, lo que facilitó al mandatario sacar a relucir su vocación pronorteamericana. En el clima internacional creado por el conflicto, el gobierno de Santos contrajo dos nuevos empréstitos con Estados Unidos, uno de ellos para la adquisición de material bélico, mientras la economía registraba un descenso del volumen de las exportaciones y de la extracción de petróleo. Esta última descendió de 23 millones de barriles en 1939 a 13 millones en 1943.

Probablemente lo más positivo del gobierno de Santos fue la creación del Instituto de Fomento Industrial (IFI). Esta entidad gubernamental patrocinó la creación de una serie de industrias esenciales –favorecidas por la disminución de las importaciones provocada por el conflicto mundial y las medidas proteccionistas adoptadas con anterioridad–, lo que permitiría al país alcanzar, entre 1945 y 1950, la tasa de crecimiento fabril más alta registrada hasta entonces: 11.5%.

No obstante, la escasez de artículos básicos derivadas de los efectos de la contienda bélica, unido a la inestable situación económica nacional de esos años, propiciaron el regreso al poder, el 7 de agosto de 1942, con un explícito apoyo popular, del ex presidente López. Combatido tenazmente por los conservadores, que amenazaban con levantarse en armas si el propulsor de *la revolución en marcha* volvía al gobierno, y una parte del propio liberalismo –que

propulsó la candidatura opositora de Carlos Arango Vélez–, López logró vencer en los comicios con el inesperado apoyo de última hora del presidente saliente y del Partido Comunista.

Al segundo mandato de López, mucho más apagado que el anterior en materia de reformas y realizaciones, se le enfrentaron los mismos intereses oligárquicos y antinacionales que en el primero, a lo que hubo que sumar cierta erosión del prestigio gubernamental por las campañas sobre supuestas corrupciones, sobre todo tejidas en torno al destino de una empresa expropiada a los alemanes. En 1943, el presidente López formalizó las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, enfrentada entonces a la Alemania nazi, aunque ya durante su anterior gobierno se había producido el reconocimiento diplomático (1935).

También durante su segundo período fue promulgada la ley 100 de 1944, creada para amparar a los aparceros, dos años después de creada la primera organización campesina de carácter nacional: la Federación Campesina e Indígena, afiliada a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). También surgió la Federación Agraria Nacional (1946), bajo el influjo de la Iglesia católica, y aparecieron asociaciones gremiales como la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) y la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).

En un ambiente muy adverso, orquestado por la oposición derechista con sus campañas de prensa e injurias al gobierno, al que se atribuían hechos de corrupción, se produjo el golpe de Estado militar –López fue apresado en la ciudad de Pasto–, dirigido por el coronel Diógenes Gil, el 10 de julio de 1944. La inmediata sustitución del mandatario por su ministro Darío Echandía –quien ya lo había remplazado durante sus cuatro meses de estancia en Estados Unidos a fines de 1943 y principios de 1944– y, sobre todo, la amplia reacción popular –que unió a liberales, sindicatos, estudiantes, etc.– hizo fracasar la asonada militar y López tuvo que ser liberado.

El mandatario decretó entonces el estado de sitio, mientras algunos de sus más acérrimos opositores, como Laureano Gómez, huían del país. Aprovechando la reacción popular a su favor, López suspendió las sesiones del Congreso y dictó nuevos decretos beneficiosos para los trabajadores, entre ellos el pago de horas extras,

salarios mínimos, contratación colectiva, etc. (decreto 2350) y de prohibición de expulsión de los campesinos de las tierras que trabajaban (decreto 1788).

Pero las nuevas disposiciones gubernamentales encresparon todavía más a la oposición, lo que llevó finalmente al presidente a renunciar el 19 de julio de 1945. Para terminar su mandato, que concluía al año siguiente, López fue sustituido por uno de sus ministros: Alberto Lleras Camargo.

El mandatario liberal interino debió enfrentar la grave crisis política existente, en medio de la agitación popular –incluido un fracasado intento de huelga general en noviembre de 1945– y el cada vez más violento enfrentamiento de los partidos tradicionales. Para tratar de salir de la peligrosa situación fue promulgada una nueva reforma constitucional (1945) y dio participación en su gobierno a los conservadores. Ese fue el preludio del retorno del Partido Conservador al poder en la persona de Mariano Ospina Pérez, miembro de una familia de la rancia aristocracia colombiana y descendiente de los ex presidentes Ospina Rodríguez y Nel Ospina.

De esta manera se abrió, en agosto de 1946, otro período de hegemonía conservadora que llevaría directamente a una franca y abierta represión a las instituciones democráticas y progresistas, mientras se dilapidaban las divisas acumuladas durante la guerra mundial –más de 128 millones de dólares– y las obtenidas por las crecientes exportaciones cafetaleras, cuyo valor se triplicaría entre 1945 y 1950. Al mismo tiempo, aumentaba la presencia del capital norteamericano en el país, en particular en la industria, cuyo monto pasó en el mismo lapso de 117 millones a 193 millones de dólares.

Movimientos nacionalistas de posguerra en Paraguay y Bolivia

De manera todavía más pálida se expresó el nacionalismo populista en Paraguay y Bolivia, donde tuvo como protagonistas a sectores militares descontentos con la recién terminada Guerra del Chaco. La

frustración dejada en Bolivia y Paraguay por el conflicto fratricida del Chaco, concluido en 1935, junto a las revelaciones de la prensa internacional del oscuro papel jugado por los monopolios petroleros en la contienda, sumado al ascenso en el escalón militar de oficiales jóvenes no comprometidos con la oligarquía, abrió el camino al poder de gobiernos nacionalistas en estos dos países. Uno de ellos fue la revolución febrerista en Paraguay.

Este movimiento militar estalló el 17 de febrero de 1936 encabezado por el coronel Rafael Franco, quien disolvió el parlamento y creó entonces un gobierno provisional respaldado por algunas figuras civiles del Partido Colorado. Desde el poder, el jefe nacionalista paraguayo trató de organizar a sus seguidores en un nuevo partido: la Unión Nacional Revolucionaria –más conocida como febrerista–, ilegalizó el liberalismo y derogó la constitución de 1870. El nuevo fervor patriótico se manifestaba también en actos solemnes: la población asunceña fue testigo de la consagración de un monumento destinado a guardar las cenizas del mariscal López junto a los restos del soldado desconocido de la guerra en el Chaco.

Además, los febreristas se dispusieron a llevar a cabo un programa de modernización del país, dando respuesta a algunos de los más urgentes reclamos populares, poniendo fin, según las declaraciones de sus dirigentes, «al régimen y a la política de las oligarquías tradicionales que rigieron los destinos de la nación durante más de 60 años».[3] Entre las primeras medidas adoptadas por los febreristas estuvo una reforma agraria democrática –los soldados exigían recuperar las tierras enajenadas entre 1883 y 1885– que pusiera en manos del campesinado paraguayo, empezando por los veteranos del Chaco, un lote de tierra donde trabajar y erigir su casa.

La organización de crédito agrícola y la fijación de precios justos para los productos del campo completaban el plan. Se quería atraer de paso a la mayor parte de los 200 mil emigrados que el latifundio había obligado a refugiarse en las naciones vecinas. También el febrerismo reafirmó su orientación progresista inicial decretando la jornada de ocho horas, la asistencia médica obligatoria en los

[3] Víctor Jacinto Flecha, *Breve historia del Paraguay*, Asunción, FONDEC, 2012, p. 209.

centros fabriles, sustanciales aumentos salariales y favoreciendo la organización sindical.

Pero la vieja oligarquía maquinaba junto a sectores del ejército ligados al general José Félix Estigarribia. Además, las propias vacilaciones del gobierno febrerista y sus coqueteos con las ideas fascistas, facilitaron que el 13 de agosto de 1937 el coronel Franco fuera derrocado.

Bajo el influjo del estratega del Chaco, la constitución de 1870 quedó restablecida y un civil, Félix Paiva, ocupó la presidencia provisional. La gravitación de los militares sobre la vida nacional se hizo explícita dos años después con la elección del propio Estigarribia, que ocupaba la jefatura del ejército, como candidato del liberalismo, bajo el estado de sitio y la exclusión de colorados y febreristas.

La historia de Bolivia en esos años siguió un derrotero semejante a la de Paraguay. Terminada la Guerra del Chaco, diversas acusaciones públicas provocaron un escándalo en la república del altiplano sobre la participación de la Standard Oil en el desencadenamiento de la contienda fratricida que había estremecido al país.

Tratando de atajar la situación, el gobierno de José Tejada Sorzano ordenó una amplia investigación sobre la actuación de la poderosa compañía imperialista. Las indagaciones demostraron el sucio papel de la Standard Oil durante la contienda, violando los contratos firmados con el gobierno y defraudando al fisco.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales por detener el descontento popular, las huelgas y manifestaciones no parecían tener fin. El 10 de mayo de 1936 se produjo incluso una huelga general. En forma paralela, crecían las contradicciones en el seno de la élite minera, denominada *la rosca*, como resultado de la política aplicada por el Comité Internacional del Estaño (CIE) –creado en 1930– de asignar cuotas a los países productores. Ello ahondaba las diferencias entre los grupos mineros que rivalizaban por recibir los mayores cupos de exportación.

Pero los acontecimientos se escaparon, sorpresivamente, al control de los *barones del estaño*. La corriente nacionalista había calado en las filas de la joven oficialidad, arrebatando la iniciativa política a la vieja oligarquía y a sus representantes tradicionales. Los grupos

nacionalistas se nucleaban en logias fundadas en los propios campamentos de prisioneros bolivianos del Paraguay. La más influyente organización de este tipo era la logia militar «Mariscal Santa Cruz», integrada por oficiales dispuestos a encabezar un movimiento de renovación nacional y de rescate de las riquezas naturales del país.

El 17 de mayo de 1936 los militares complotados contra el gobierno, encabezados por el coronel Germán Busch, burlando los designios del alto mando y de la oligarquía, colocaron en lugar del presidente Tejada Sorzano al coronel David Toro, en tanto Busch conservaba el control del estado mayor. Con este golpe, concluía el predominio de los partidos oligárquicos, sepultados junto con la llamada «república liberal».

En su calidad de jefe del gobierno, Toro solo se atrevió a realizar algunas tímidas innovaciones administrativas dirigidas a calmar el descontento de los trabajadores, como la creación de la Secretaría de Trabajo. Enredado en los manejos de *la rosca*, específicamente el grupo de Aramayo, Toro otorgó una participación mayoritaria a este magnate en las cuotas de exportación del estaño; llevó algunos de sus acólitos al gabinete y le entregó concesiones auríferas en la rica región de Tipuania.

Bajo presión de los oficiales nacionalistas que lo habían llevado al poder, Toro tuvo que decretar las primeras disposiciones contra la Standard Oil Company, así como varias medidas sociales y políticas insólitas en la historia del país. Fue cancelada, por ejemplo, la existencia jurídica de los partidos de la oligarquía y se autorizó el funcionamiento de una organización política única: el Partido Socialista de Gobierno, dirigido por militares y civiles de la nueva «generación del Chaco». Al amparo de la legislación de agosto de 1936, nacieron los primeros sindicatos obreros y campesinos.

El 21 de diciembre de 1936, Toro aprobó la medida nacionalista de mayor trascendencia hasta entonces: la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Significativamente, este decreto fue firmado en la casa del millonario Aramayo, lo cual revelaba la fuerza y a su vez la debilidad que tenían entonces los *barones del estaño*.

Presionado por la oficialidad joven, Toro fue aún más lejos: decretó la caducidad de todas las concesiones que violaran las

estipulaciones de la ley del 20 de junio de 1921, que restringía su otorgamiento a un máximo de cien mil hectáreas por un plazo no mayor de 55 años. Por último, el 13 de marzo de 1937, firmó la *Resolución Suprema*, mediante la cual se declaraban caducas las concesiones de la Standard Oil en Bolivia y se disponía la intervención de todas sus propiedades por el Estado. La compañía poseía 31 pozos de petróleo, dos destilerías y siete millones de hectáreas.

Hasta entonces, los intereses de *la rosca* no habían sido tocados, y sus buenas relaciones con el coronel Toro no auguraban la realización de una política que modificara su absoluto control sobre la economía del país. Ello precipitó un segundo golpe de Estado que llevó el coronel Busch al poder, en el instante cuando se desarrollaba un poderoso movimiento huelguístico.

Durante los primeros meses de su gestión, Busch se dedicó a liberarse de los comprometedores nexos que lo unieron al consorcio Patiño en su acción contra el gobierno de Toro. Poco tiempo más tarde, convocaba a una convención (1938) que lo proclamó presidente de la república y emitió una constitución de inspiración nacionalista.

La nueva carta magna reivindicaba el derecho inmanente del Estado sobre todas las riquezas naturales de la nación, se aludía a la función social de la propiedad y se reconocía, por primera vez, el derecho de los campesinos a sus tierras comunales. Asimismo, Busch promulgó el primer Código de Trabajo y creó el Banco Minero –presidido por Víctor Paz Estenssoro–, encargado de proteger y fomentar la pequeña minería.

El turbulento ambiente político favoreció la aparición de dos nuevos partidos: la Falange Socialista Boliviana (FSB), agrupación derechista al servicio de los terratenientes, y el Partido Obrero Revolucionario (POR), producto de la labor proselitista desarrollada por el líder trotskista Tristán Marof. Por su parte, el Congreso Nacional, controlado por la élite minera, se opuso enseguida a la política nacionalista de Busch y aprovechando la creciente demanda de estaño en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, promovió medidas liberales sobre impuestos y transferencias de divisas.

La respuesta del coronel Busch fue la disolución del cuerpo legislativo, asumiendo plenos poderes. El 7 de junio, dispuso la

entrega obligatoria al Estado del ciento por ciento de las divisas provenientes de la exportación de minerales y un férreo control fiscal sobre el comercio exterior.

Herida en su punto más vulnerable, la gran minería se apresuró a aislar al audaz oficial nacionalista cuando este no había logrado aún crearse una base social. El ejército lo abandonó y dos meses después de su acción más radical, el 23 de agosto de 1939, fue encontrado muerto de un balazo en su residencia.

Gracias a la inesperada muerte de Busch, *la rosca* recuperó su absoluto control sobre el Estado boliviano. Como había sucedido en Paraguay, en Bolivia se cerraba el paréntesis nacionalista volviendo al mismo punto de partida.

Ascenso del fascismo en América Latina

La llamada década de las revoluciones frustradas y el desarrollo de movimientos nacionalistas favorecieron la eclosión de las más diversas y encontradas tendencias políticas e ideologías, entre ellas las impulsadas por el apogeo del falangismo y el nazismo. El fascismo europeo ejerció cierta influencia en los países latinoamericanos en los años que antecedieron a la Segunda Guerra Mundial.

Desde finales de los veinte se hizo sentir en todo el continente el ascenso del régimen de Benito Mussolini, sobre todo por la actividad proselitista desplegada por algunos asesores contratados por gobiernos conservadores y oligárquicos de América del Sur. Sin duda, la mayor resonancia de esta corriente ultraderechista europea se alcanzó en los años treinta, luego del profundo impacto de la crisis capitalista de 1929.

Tributarias de la versión hispana del fascismo fueron aquellas agrupaciones, como la Falange Nacional de Chile (1937) y la Falange Socialista Boliviana (1938), surgidas en el contexto de la guerra civil que estremecía a España y que, en cierta medida, se nutrieron de la emigración. Por su parte, las apegadas al hitlerismo aparecieron asociadas a los avances de la penetración nazi en América Latina y también a los núcleos de inmigrantes germanos.

Uno de los elementos que explica la influencia alcanzada entonces por estas corrientes reaccionarias era la atracción ejercida en muchos sectores de la sociedad latinoamericana por la revalorización ultranacionalista del fascismo. La defensa y exaltación de los valores nacionales sin duda levantó simpatías en países sometidos históricamente por las grandes potencias como ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, traumatizada por su aplastante derrota en la reciente Guerra del Chaco.

Como se ha visto, bajo los gobiernos bolivianos de los coroneles Toro y Busch, la defensa de los intereses patrios –expropiación de los bienes de la Standard Oil– y ciertas preocupaciones sociales –recogidas en la constitución de 1938–, dirigidas a alcanzar lo que llamaron «la libertad económica de Bolivia»,[4] aparecieron envueltas en proyectos e ideas de cierta matriz fascista, lo que explica alguna de las medidas adoptadas por esos regímenes militares y la fundación del llamado Partido Socialista de Gobierno. Lo mismo vale para algunas otras experiencias de ese período en América Latina, como el Plan Trienal de Batista en Cuba o el *Estado Novo* brasileño.

Sin duda, fue en los países del cono sur donde mayor arraigo alcanzaron las agrupaciones de corte fascista, particularmente en Chile y Brasil, debido a la existencia de numerosas colonias de emigrados alemanes. También en esto influyó que esa región estaba todavía fuera de la órbita de influencia de Estados Unidos, lo que favoreció la considerable penetración económica, comercial e ideológica de la Alemania nazi.

Sin duda, la mayor amenaza a la preponderancia norteamericana en este continente, en los años que anteceden a la Segunda Guerra Mundial, provino de la expansión del comercio y las inversiones del *Reich* hitleriano. En 1938 esta potencia ocupaba el segundo lugar en el mercado latinoamericano, solo detrás de Estados Unidos.

En ese año, Alemania exportó el 16.9% de todos los artículos consumidos por América Latina e importó el 17.9% de materias primas y productos agropecuarios de este hemisferio, cifras alcanzadas en gran medida gracias al comercio de trueque (marcos *aski*). Incluso el capital alemán llegó a controlar todo el transporte aéreo en la América del Sur.

[4] Citado por Dardo Cúneo en su prólogo al libro de Carlos Montenegro, *Nacionalismo y coloniaje*, Buenos Aires, Pleamar, 1967, p. 3.

En algunos países este intercambio comercial fue aún mayor, pues Brasil llegó a consumir el 37% de mercancías alemanas y Chile un 26%. Guatemala fue un caso especial de la penetración nazi, pues existía desde principios de siglo una activa colonia de alemanes dedicados al negocio del café, lo que explica que el comercio con Alemania llegara a significar el 32.4% del total en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

Para su actividad conspirativa y propagandística en América Latina los alemanes se apoyaron en grupos filofascistas como la Unión Nacional Sinarquista de México, el Movimiento Nacional Socialista de Chile o el Partido Integralista de Brasil. Quizás el punto culminante de la actuación de los simpatizantes del nazismo en los países al sur del río Bravo se alcanzó en 1938, cuando los grupos fascistas intentaron hacerse del poder en Brasil y Chile, lugares donde estas fuerzas actuaban amparadas por los gobiernos derechistas de Getulio Vargas y Arturo Alessandri.

En el primero de ellos, el Partido Integralista de Plinio Salgado –cuyos seguidores inclusive usaban camisa verde y un brazal con la letra sigma–, que había servido de fuerza de choque al presidente Vargas en noviembre de 1937 para la instalación del *Estado Novo*, intentaron su propio *putsch*. El cierre de los clubes integralistas abrió desde principios de 1938 el enfrentamiento entre esta organización fascista y el gobierno.

Finalmente, el 11 de mayo de ese año, los integralistas atacaron el Ministerio de Marina, la Radio Mayrink Veiga y el Palacio de Guanabara, donde estuvieron a punto de apresar a Vargas y su familia. Tras cinco horas de intenso tiroteo, los fascistas fueron derrotados. En consecuencia, el embajador del *Reich* en Rio de Janeiro fue declarado *persona non grata* y expulsado del país.

En el caso de Chile, los acontecimientos fueron bastante parecidos. El Partido Nacional Socialista chileno, dirigido por un descendiente de alemanes, Jorge González von Marees, se lanzó con sus adeptos al asalto del gobierno, sin ningún éxito, en septiembre de 1938. El resultado fue la muerte de 75 jóvenes fascistas masacrados en el edificio de la Caja del Seguro Obrero.

Estas peligrosas circunstancias condujeron a las fuerzas progresistas a intentar la unidad del movimiento obrero para detener

los avances del fascismo. El camino en esta dirección había sido abonado por los acuerdos de la segunda conferencia de los partidos comunistas de América Latina, que apareció fechada en Montevideo en octubre de 1934 –la primera se había efectuado en Buenos Aires (1929)– y, particularmente, por los del VII Congreso de la III Internacional (*Komintern*) reunido en Moscú en julio de 1935.

En ese marco, a raíz de la sublevación falangista en España, los trabajadores y partidos democráticos latinoamericanos se pronunciaron resueltamente en defensa de la república española, recaudando fondos, enviando medicinas y alimentos y organizando brigadas que marcharon a la península ibérica a enfrentar al fascismo, como hicieron mil cubanos, más de cien mexicanos y decenas de voluntarios de otros países del hemisferio. Uno de esos heroicos combatientes que ofrendó su vida en España fue el poeta y periodista cubano Pablo de la Torriente Brau.

Como parte de este extendido movimiento antifascista, en varios países de América Latina surgieron entonces centrales sindicales unitarias. Trece de ellas se integraron en México, en septiembre de 1938, en la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), a la vez que en diferentes partes del hemisferio se intentaban organizar frentes populares, aunque el de Chile fue el único verdaderamente exitoso.

En la tierra austral, el Frente Popular se vertebró en 1937 al incorporarse el Partido Radical al bloque de izquierda integrado por comunistas y socialistas, con vistas a los comicios presidenciales del año siguiente. Su candidato, el radical Pedro Aguirre Cerda, ganó las elecciones con el 50.3% de los votos, lo que le permitió hacerse cargo del gobierno, a fines de 1938, con un gabinete compuesto por ministros de su partido y socialistas, entre estos últimos el doctor Salvador Allende.

Durante el mandato de Aguirre Cerda, extendido hasta su inesperada muerte en 1941, las libertades públicas alcanzaron plena vigencia y se incrementó el control estatal de la economía. Lo más significativo del gobierno del Frente Popular en Chile, además de los progresos en el campo de la asistencia social, fue el desarrollo de industrias nacionales, apoyadas por la recién creada

Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), que propició la creación o la expansión de fábricas de neumáticos, manufacturas de cobre, talleres textiles y de otros rubros.

Política del «buen vecino»

Ante el desarrollo de los movimientos fascistas, la vertiginosa penetración económica y comercial de la Alemania nazi, las crecientes protestas antimperialistas, el auge antifascista y los movimientos nacionalistas que sacudían América Latina, al calor de las secuelas de la crisis capitalista, Estados Unidos intensificó sus esfuerzos políticos, económicos y militares para contrarrestarlos.

Las repercusiones de la profunda crisis económica de 1929–1933, los cambios ocurridos en los propios Estados Unidos, así como en la correlación de fuerzas a escala internacional, unido a la tenaz resistencia de Sandino, que había desatado como nunca antes los sentimientos antimperialistas de un extremo a otro del hemisferio, precipitaron cambios cosméticos de la tradicional política de Estados Unidos hacia América Latina.

Esbozada por el presidente Herbert Hoover en Buenos Aires a fines de los años veinte, la adopción de la nueva política correspondió a su sucesor, Frankliyn Delano Roosevelt, quien ocupó la primera magistratura norteamericana desde el 4 de marzo de 1933. A la llegada de Roosevelt al poder los sentimientos antimperialistas en América Latina habían alcanzado magnitudes sin precedentes. El descontento no se limitaba a los sectores populares y elementos nacionalistas, sino también se había extendido a amplios círculos de la propia burguesía latinoamericana afectada por la ley Smoot-Hawley, que estableció una de las más altas tarifas arancelarias de la historia norteamericana.

De este modo, frente a la creciente penetración alemana y el incremento del repudio latinoamericano a las intervenciones militares de Estados Unidos y, al mismo tiempo, con el propósito de estimular las relaciones económicas y comerciales con los países del hemisferio, deterioradas por los efectos de la crisis de 1929, la Casa

Blanca impulsó una nueva política hacia el continente. Denominada del «buen vecino», fue dada a conocer en el mensaje enviado por el presidente Roosevelt a la VII Conferencia Panamericana de Montevideo (1933).

En esta misma reunión interamericana los países de América Latina propusieron una moratoria de las deudas y la reducción de las tasas de interés. En el cónclave diplomático de Uruguay, Estados Unidos se vio obligado, ante la formidable presión de las repúblicas latinoamericanas encabezadas por México, Haití, Nicaragua y Cuba a aceptar «con reservas» la convención sobre los derechos y deberes de los estados. Esta incluía el principio de la igualdad jurídica entre ellos, la no intervención en los asuntos internos o externos de otros países, la inviolabilidad territorial y la necesidad de proscribir el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Otro hito en la política panamericana del período fue la celebración en Buenos Aires (1936), auspiciada por Estados Unidos, de una conferencia especial para el mantenimiento de la paz. El objetivo era la creación de un bloque político-militar con los países latinoamericanos, a fin de asegurarse la retaguardia ante la peligrosa situación que se configuraba a escala internacional.

De esta forma, Estados Unidos introdujo en la titulada *Convención para el mantenimiento, preservación y restablecimiento de la paz* el principio de consulta, elemento vital a la hora de agilizar la participación de América Latina en la estrategia internacional de la Casa Blanca. Para hacer operativo el nuevo mecanismo, se reunió la VIII Conferencia Panamericana en Lima, en diciembre de 1938, donde se propuso una alianza defensiva de las naciones hemisféricas contra la agresión externa, pues ya el gobierno de Roosevelt vislumbraba la posibilidad de un enfrentamiento armado con Alemania y Japón.

En correspondencia con la política del «buen vecino», impulsada por el presidente Roosevelt, y ante los constantes reclamos del pueblo cubano, fue eliminada en 1934 la llamada enmienda Platt, impuesta a la constitución de Cuba en 1901, que daba derecho a Estados Unidos a intervenir en la isla, y retiradas las tropas

norteamericanas que ocupaban Haití. En 1936, el gobierno de Roosevelt se vio obligado también a abstenerse de derechos semejantes a los de la mencionada enmienda con relación a Panamá, que databan de principios de siglo.

Para ello el nuevo Tratado Arias-Roosevelt reinterpretaba el espíritu de las relaciones entre las dos naciones y se derogaban dos oprobiosos artículos que durante años habían lacerado la vida de la república istmeña. Nos referimos a la cláusula en virtud de la cual Estados Unidos se comprometía a garantizar la independencia de Panamá como estado soberano y el que permitía a los norteamericanos intervenir en la vida interna de la nación cuando lo creyeran necesario.

Aunque no resolvía la cuestión de los derechos panameños sobre la zona del canal –que fraccionaba el territorio istmeño en dos mitades, con una virtual colonia norteamericana en el medio–, el tratado de 1936 constituyó sin duda un paso adelante en el camino de la recuperación de la total soberanía de Panamá. Además, el gobierno norteamericano respondió con cierta cautela a la expropiación de sus compañías petroleras y ferrocarrileras en México durante el gobierno de Cárdenas y aceptó una indemnización casi simbólica por esos intereses (1942).

Para entender la nueva política del «buen vecino» en sus aspectos económicos, al margen de las implicaciones diplomáticas y políticas de la «no intervención», hay que tomar en consideración la relativa disminución de la influencia estadounidense en la región como resultado de la crisis económica. En 1935 el capital norteamericano invertido en América Latina había descendido a 4,555 millones de dólares, de los 5,429 millones que tenían en 1929. Al mismo tiempo, la participación de Estados Unidos en el comercio exterior del continente descendió entre 1929 y 1937 del 38.5% al 33.9%.

Un porcentaje similar afectó a los ingleses, cuyo comercio con América Latina bajó del 15 al 13.2%, mientras que el de la Alemania nazi pasaba en el mismo lapso del 10.8% al 15.4%. La creciente competencia de los alemanes –también de los japoneses, que aumentaron en esos años 2.5 veces su comercio con los países

latinoamericanos, en especial con Perú–, hizo que Roosevelt adoptara una serie de iniciativas en el terreno económico como parte de su política de «buena vecindad».

Una de ellas fue el establecimiento de un sistema de cuotas para las exportaciones de América Latina, firmas de «tratados de reciprocidad» –11 en total, solo de 1934 a 1940, que conllevaba la renuncia a todo desarrollo industrial independiente por la contraparte–, estímulos a las inversiones del capital norteamericano y la fundación en febrero de 1934 de una entidad crediticia: el Banco de Exportación e Importación (EXIMBANK).

Los verdaderos objetivos de este banco eran reactivar la economía de Estados Unidos. Los países latinoamericanos, seriamente afectados por la crisis, carecían de recursos para importar las mercancías norteamericanas. Los créditos del banco –solo en sus primeros cinco años fueron del orden de los 306 millones de dólares–, al restaurar en parte su capacidad de compras, le prestaban una ayuda indispensable a la industria estadounidense, tan necesitada de reactivarse. De este modo, el EXIMBANK se convirtió en un decisivo instrumento de la dominación norteamericana en este hemisferio.

Por otra parte, con las inversiones mixtas Estados Unidos buscaba neutralizar los intentos de los gobiernos latinoamericanos para desarrollar su industria, como eran los casos de México, Chile, Brasil, Colombia y otros, ampliar su base social y asegurar sus inversiones contra posibles medidas nacionalistas o expropiaciones. Fue sobre la base de esta política, de fines del período de entreguerras, que Estados Unidos creó las premisas para el desplazamiento definitivo de Inglaterra y demás competidores europeos de América Latina, al mismo tiempo que se acentuaba la dependencia neocolonial de los países situados al sur del río Bravo.

Ello traería aparejado, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, los años del absoluto predominio norteamericano en lo económico, político, militar e institucional en la región, que le permitiría crear un verdadero bloque latinoamericano al servicio de sus intereses mundiales de dominación.

América Latina en la Segunda Guerra Mundial

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se produjo el consiguiente alineamiento de la mayoría de los países latinoamericanos con Estados Unidos, en particular desde el momento en que este país se involucró en la conflagración tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. Como consecuencia, la influencia fascista entró en rápida decadencia.

En realidad, el continente americano no fue escenario de los grandes enfrentamientos bélicos que caracterizaron la contienda mundial. La única excepción fue el aparatoso combate naval entre ingleses y alemanes, el 18 de diciembre de 1939, que arrojó el hundimiento del *Graff Spee* en la desembocadura del Río de la Plata en los inicios de la Segunda Guerra Mundial.

Uno de los pocos casos de no alineamiento con la política norteamericana fue Argentina, donde un grupo de militares de derecha simpatizantes de la Alemania nazi se hizo del poder en junio de 1943, adoptando una serie de medidas autoritarias y ratificando la neutralidad argentina en el conflicto mundial. En represalia, una escuadra de guerra de Estados Unidos bloqueó el puerto de Buenos Aires en enero de 1944, hasta obligar a la junta militar a romper con el eje fascista y convocar a elecciones.

Hacia 1945 todos los países de América Latina habían declarado la guerra a las potencias fascistas, aunque solo México y, sobre todo, Brasil participaron de manera efectiva en la conflagración mundial. El gigante sudamericano declaró la guerra al Eje el 21 de agosto de 1942, después de que submarinos nazis –en solo cinco días– hundieron varios indefensos mercantes brasileños con más de 600 personas a bordo.

Las propiedades alemanas –tal como había sucedido durante la Primera Guerra Mundial– fueron confiscadas y se constituyó en 1943 la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB). A fines del año, Brasil desembarcó a los 25 mil integrantes de su ejército en el frente italiano, donde brindaron una destacada contribución a los aliados.

La Segunda Guerra Mundial dio un gran impulso a la economía latinoamericana, valorizando sus exportaciones y permitiendo

la creación de cuantiosas reservas en oro y divisas, a pesar de que la mayoría de los gobiernos de la región aceptaron su papel de simple retaguardia aliada, proporcionando materias primas y alimentos a bajos precios con la promesa de un futuro trato preferente. Además, se acordó la creación de una hipotética zona de seguridad de 300 millas, dentro de la cual reclamaba que los países beligerantes se abstuvieran de actos de guerra, así como la concesión a Estados Unidos, mientras durase el conflicto, de numerosas bases militares en el hemisferio.

Como sucedió durante la Primera Guerra Mundial, la disminución de los vínculos económicos con los países directamente involucrados en el conflicto, junto a la reconversión bélica de la industria norteamericana, permitieron a algunas naciones, en primer lugar México, Brasil y Argentina, acelerar los ritmos de su desarrollo industrial. Otra consecuencia económica del conflicto mundial fue el incremento del comercio entre los propios países latinoamericanos, que antes de la guerra era insignificante. Desde el punto de vista político, la lucha antifascista a nivel mundial estimuló las luchas y reivindicaciones populares en América Latina, que dieron lugar a una oleada democratizadora por todo el hemisferio.

Capítulo 11
FRACASO DEL NACIONALISMO POPULISTA

Al término de la Segunda Guerra Mundial, la bancarrota del fascismo a escala internacional estimuló la rebeldía popular en América Latina y provocó la caída sucesiva de dictaduras y regímenes tiránicos avalados con largos años de represión y terror. Con intensas jornadas revolucionarias y populares se puso de manifiesto el significativo crecimiento de las organizaciones de izquierda, de las fuerzas obreras y del movimiento democrático.

Entre 1944 y 1947 las masas populares, de un extremo al otro del continente, se lanzaron enardecidas con consignas antioligárquicas y antifascistas, en reclamo de una mayor democratización de la sociedad, de elecciones libres, en favor de las plenas actividades de los partidos y sindicatos, así como por la satisfacción de reivindicaciones sociales y nacionales de envergadura y contra la asfixiante dominación de las grandes potencias capitalistas. Los cambios trajeron aparejado un nuevo impulso al nacionalismo populista, cuyas últimas manifestaciones cayeron a mediados de los cincuenta, víctima de sus propias debilidades e inconsecuencias, así como de la intolerancia de Estados Unidos sumido en la Guerra Fría con la Unión Soviética.

Oleada democratizadora de posguerra

La magnitud del movimiento democratizador de mediados de los años cuarenta, a pesar de su carácter espontáneo, obligó a

la oligarquía, aliada al capital norteamericano, a hacer en muchos lugares importantes, concesiones a los trabajadores y al pueblo en general, restableciendo las libertades e implantando una legislación social que a veces excedía sus intereses clasistas. En varios países, los partidos comunistas salieron de la clandestinidad, en algunos casos por primera vez, al mismo tiempo que se constituían sindicatos legales de proyección nacional.

A la par se fortalecía el movimiento obrero a escala continental. Ya el segundo congreso de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) pudo reunir en Colombia (1944) a centrales sindicales que representaban a buena parte del proletariado de quince naciones latinoamericanas.

El basamento de muchos de estos cambios políticos se encontraba en el relativo auge que experimentaba la economía de América Latina desde la Segunda Guerra Mundial. Incentivado por un inusitado crecimiento de la demanda externa, el sector agropecuario se reanimó –hasta cierto punto también el minero– luego de la prolongada recesión derivada de la crisis capitalista de 1929-1933. Desde entonces, y hasta el fin de la Guerra de Corea, se registró un notable incremento de las exportaciones de materias primas y productos alimenticios latinoamericanos.

También se producía un sensible mejoramiento coyuntural en los términos de intercambio, que contribuyó a propiciar esta ola de relativa prosperidad, la cual se hizo sentir mediante cierta elevación del nivel de vida de la población. Incluso, algunos países europeos tuvieron que liquidar muchas de sus inversiones en América Latina para saldar la deuda adquirida durante la contienda bélica mundial con varias de las repúblicas al sur del río Bravo.

En estas condiciones favorables, la burguesía latinoamericana amplió su acumulación de capital, que fue canalizado en los países con un desarrollo económico relativamente mayor (Brasil, México, Argentina y, en menor medida, Colombia, Chile y Uruguay) hacia el proceso de industrialización que se venía registrando, con más o menos intensidad, desde finales del siglo XIX y principios del XX. De este modo, en varias de estas naciones pudo observarse a mediados de los años cuarenta un aumento de su producción industrial estimado en un 50%.

No obstante, Estados Unidos trató de fortalecer sus posiciones económicas en América Latina, al mismo tiempo que se intensificaban las críticas de derecha a la política del «buen vecino». Ello se reflejó en el *Plan Clayton*, presentado en la Conferencia Panamericana de Chapultepec, celebrada en México entre febrero y marzo de 1945.

Clayton propuso eliminar el nacionalismo económico, extender la colaboración con el capital estadounidense y promover un desarrollo industrial basado en la empresa privada y la libre concurrencia. Mediante el *Acta de Chapultepec*, todos los países latinoamericanos representados en la reunión, con la solitaria excepción de Argentina que no asistió, quedaron comprometidos a dar su apoyo al orden económico impuesto por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial.

Los renovados aires democráticos de posguerra alcanzaron diferente intensidad de un país a otro. Sus primeros efectos se advirtieron en Centroamérica desde principios de 1944, donde se creó una verdadera situación revolucionaria. Las luchas comenzaron por El Salvador en abril de ese año, cuando se desató una incontrolada sublevación popular que exigía la renuncia de Maximiliano Hernández Martínez, verdugo de miles de campesinos en 1932.

En el movimiento revolucionario participaban los trabajadores, representantes de las capas medias, jóvenes oficiales del ejército y hasta elementos de la propia oligarquía. Una huelga estudiantil, seguida por imponentes manifestaciones callejeras y una paralización total de actividades, obligó al tirano a huir en mayo de 1944.

Los acontecimientos salvadoreños repercutieron en Honduras y Guatemala, gobernadas a su vez por las dictaduras bananeras de Tiburcio Carias y Jorge Ubico. Si bien el movimiento hondureño no pudo conseguir sus objetivos, a pesar de las impresionantes acciones de las masas populares en mayo y julio de 1944, en Guatemala, en cambio, dio lugar a un proceso de cambios revolucionarios extendidos durante una década, la que el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón llamara, parafraseando al Barón de Humboldt, los diez «años de primavera en el país de la eterna tiranía».[1]

[1] Luis Cardoza y Aragón, *La revolución guatemalteca*, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1956, p. 51.

La revolución guatemalteca de 1944

El movimiento revolucionario guatemalteco de 1944 puso fin a la dictadura oligárquico-proimperialista de Jorge Ubico, iniciada en 1931. Los factores que aceleraron la caída de este viejo régimen represivo estaban relacionados con las transformaciones económicas, sociales y políticas que a escala nacional e internacional se produjeron con la Segunda Guerra Mundial.

Al margen de esos cambios, el clima internacional adverso a los regímenes fascistas y dictatoriales, estimuló la rebeldía del pueblo guatemalteco y despertó las inquietudes y aspiraciones democráticas de amplios sectores populares. Los primeros brotes oposicionistas aparecieron en 1942 en la Universidad San Carlos de Guatemala, donde se organizaron los estudiantes encabezados por Mario y Julio César Méndez Montenegro, José Manuel Fortuny, Alfonso Marroquín y Manuel Galich. Las protestas universitarias detonaron finalmente como repercusión de la caída en el vecino El Salvador de la dictadura de Hernández Martínez.

La tarde del 24 de junio de 1944 los estudiantes, maestros y profesionales guatemaltecos se lanzaron a las calles, amenazando al gobierno de Ubico con una huelga general si no aceptaba las reivindicaciones académicas y magisteriales, entre ellas la autonomía universitaria y otras peticiones democráticas. A estas protestas, el dictador respondió de la forma acostumbrada.

La dictadura implantó el estado de sitio y suspendió las inexistentes «garantías constitucionales», bajo cuyo amparo se inició la persecución contra estudiantes y maestros, muchos de los cuales tuvieron que refugiarse en embajadas extranjeras y abandonar el país. La brutalidad de la reacción gubernamental alentó nuevas protestas en otros sectores de la población capitalina, manifestaciones que fueron acalladas brutalmente por el ejército (25 de junio), ocasionando la muerte de la joven maestra María Chinchilla.

Ese mismo día, algunos de los participantes en las manifestaciones redactaron un histórico documento conocido, por el número de firmantes, como el *Memorial de los 311*, que exigió la inmediata renuncia de Ubico. Al día siguiente, se desencadenó una inesperada

huelga general que paralizó el país durante una semana, hasta que el 1 de julio de 1944 el dictador tuvo que dimitir.

El vasto movimiento opositor, en el que ocupaban sitio no solo representantes de las capas medias y los trabajadores urbanos sino también elementos progresistas de la burguesía, obligó a un relevo de figuras en la conducción del gobierno. Por ello, desde el 4 de julio el general ubiquista Federico Ponce ocupó la presidencia.

Para tranquilizar al país, el nuevo gobierno militar puso en vigor ciertas concesiones a la oposición, haciendo algunas reformas que no alteraban la esencia del sistema de dominación oligárquico-imperialista que apoyara a Ubico. De esta manera, el general Ponce autorizó la libre actividad de los partidos políticos, eliminó la censura y convocó a elecciones generales. En estas circunstancias, los exiliados pudieron regresar, se reanimó la lucha política y se fundaron nuevos partidos.

Los más importantes eran aquellos que aglutinaron a las figuras que habían sobresalido en la campaña antidictatorial. Nos referimos al Frente Popular Libertador (FPL), formado por estudiantes y profesionales jóvenes de ideas democráticas y el Partido de Renovación Nacional (PRN), integrado por otros elementos de las capas medias y la intelectualidad, en particular maestros, los cuales también pretendían modificar el asfixiante régimen político. Ambos partidos postularon como candidato a las elecciones fijadas para diciembre de 1944 a Juan José Arévalo, un carismático profesor universitario radicado en Argentina.

Las exiguas conquistas democráticas arrancadas por el pueblo al general Ponce comenzaron a resquebrajarse cuando los altos mandos militares comprendieron que el movimiento de masas escapaba a su control y que peligraban las posibilidades de supervivencia del régimen. A las pocas semanas de su llegada al poder, el general Ponce desató una escalada represiva contra los partidos democráticos y fuerzas revolucionarias, cuyo punto culminante fue el asesinato del director del diario oposicionista *El Imparcial*.

El intento de Ponce de establecer un ubiquismo sin Ubico fue respondido por las fuerzas revolucionarias el 16 de octubre de 1944 con un llamado a la huelga general. Por añadidura, en la madrugada

del 20 de octubre, parte de la Guardia de Honor se insurreccionó cumpliendo órdenes del mayor Francisco Javier Arana y de un audaz capitán de solo 29 años: Jacobo Arbenz.

Aunque algunos cuarteles mantuvieron su obediencia al general Ponce, la victoria estaba de parte de los rebeldes pues contaban con el decisivo respaldo popular y el apoyo de la únicas fuerzas blindadas del ejército (12 tanques). El triunfo de lo que desde entonces se conoce como la revolución de octubre de 1944, llevó al poder a una junta integrada por los militares Arana y Arbenz y el líder del Movimiento Cívico Jorge Torriello. El alzamiento cívico-militar que derrocó al gobierno de Ponce se fundamentaba en un heterogéneo frente policlasista, encabezado por la pequeña burguesía, las capas medias y una fracción progresista de la burguesía, forjado al calor de ideales liberal-democráticos y que produjo la más profunda grieta en el orden oligárquico-imperialista de toda la historia guatemalteca.

Entre las primeras disposiciones del gobierno provisional merecen destacarse la disolución del desprestigiado parlamento ubiquista y el descabezamiento del ejército –fueron separados más de 60 generales y abolido este grado militar–, junto a la creación de una Guardia Cívica nutrida de estudiantes, maestros y obreros. Los objetivos de la revolución de octubre fueron recogidos y ampliados por la Asamblea Constituyente, formada el 9 de enero de 1945, que sustituyó a la anacrónica carta magna liberal por una nueva. La flamante constitución, de corte democrático-burgués avanzado, incorporó a su texto el reconocimiento de la función social de la propiedad y la necesidad de transformar la anquilosada estructura agraria del país.

En las elecciones presidenciales venció arrolladoramente Juan José Arévalo, quien logró el 83,6% de los sufragios, con lo cual superó ampliamente a sus más cercanos adversarios. La aplastante victoria de Arévalo fue también la del FPL y RN, coaligados en el Frente Unido de Partidos Arevalistas (FUPA), que dominaron el Congreso Nacional y las municipalidades.

La puesta en vigor en 1947 del Código del Trabajo alentó las adormecidas reclamaciones obreras, abriéndose un período de conflictos y huelgas laborales a lo largo y ancho de la república que, por

lo general, terminaban con la obtención de las principales demandas sindicales. La mayor resistencia patronal se produjo donde operaban empresas extranjeras y, en particular, en las áreas dominadas por la UFCO, ya que el monopolio frutero estaba habituado a explotar a los trabajadores guatemaltecos sin ninguna regulación.

En 1948, la empecinada negativa de la UFCO a aceptar las reclamaciones de sus obreros desencadenó un conflicto que se extendió a las dos divisiones de la empresa (Atlántico y Pacífico). Para respaldar al consorcio imperialista, la embajada norteamericana se valió de los servicios del coronel Arana, a la sazón jefe de las fuerzas armadas, quien envió tropas a las plantaciones para reprimir a los trabajadores, maniobra que fracasó ante la oportuna intervención del presidente Arévalo. Tras la retirada de los soldados, el conflicto terminó cuando el ministro del Trabajo, Alfonso Bauer Paiz, logró que el 7 de mayo de 1949 la UFCO aceptara un contrato colectivo que satisfizo las principales exigencias obreras.

Este tipo de reveses, junto a la imposibilidad de suceder a Arévalo en la presidencia, empujó al coronel Arana a los brazos de la contrarrevolución. Alentado por la UFCO, la alta jerarquía eclesiástica, la oligarquía y un grupo de políticos derechistas agrupados en el Frente Unido Aranista, el jefe militar fraguó un golpe de Estado –el número 28 de los registrados contra Arévalo– para el cual contaba con el respaldo de algunas guarniciones y las armas de la Legión del Caribe que había incautado.

Advertido el gobierno de sus trajines conspirativos, Arana fue muerto al resistir su detención el 18 de julio de 1949. De todas formas, la Guardia de Honor y otras unidades comprometidas, orientadas por Mario Méndez Montenegro, atacaron al Palacio Presidencial, pero fueron aniquiladas el día 20 por las fuerzas civiles y militares leales al coronel Arbenz, ministro de Defensa, al costo de más de 150 muertos y cientos de heridos.

El período de Arévalo (1945-1951), fase inicial de la revolución guatemalteca, supo aprovechar una coyuntura internacional favorable, creada por los excelentes precios del café, para vertebrar un régimen democrático que consagró ciertos derechos a los trabajadores, dio por resultado una efectiva elevación del nivel de vida de

la población y permitió la ampliación de las relaciones capitalistas. Entre los logros de esta etapa pueden mencionarse la formulación de una política exterior independiente y la puesta en vigor de una avanzada legislación contenida en la constitución de 1945, el Código del Trabajo (1947) y el del Seguro Social (1948).

Además, se efectuaron importantes reformas económicas, como la ley de bancos de 1946, que dinamizó los créditos a los pequeños productores, se creó una banca nacional estatal y congelaron los precios y la renta de viviendas, todo lo cual le trajo aparejado la hostilidad del gobierno de Estados Unidos. Pero a la terminación del mandato de Arévalo, el proceso guatemalteco se encontraba ante la alternativa de conformarse con estas reformas o pasar a cambios más profundos, que transformaran la atrasada estructura económica y social del país y crearan una nación verdaderamente independiente.

Esta perspectiva se abrió con la victoria electoral del coronel Jacobo Arbenz, en las elecciones presidenciales del 12 de noviembre de 1950, en las que obtuvo el 66% de los sufragios con el respaldo del Frente Democrático Nacional, integrado por agrupaciones políticas y organizaciones sindicales, incluido el Partido Comunista, refundado el 28 de septiembre de 1949. Desde fines de 1952 la organización comunista, encabezada por Fortuny, pasó a actuar en plena legalidad con el nombre de Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), fortalecida con el reingreso de los seguidores de Víctor Manuel Gutiérrez, el más prestigioso líder sindical de Guatemala, que había conseguido el 12 de octubre de 1951 la reunificación del movimiento obrero en la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG).

Durante la segunda etapa de la revolución guatemalteca, bajo la presidencia de Jacobo Arbenz, de 1951 a 1954, el proceso se radicalizó. Cediendo a los reclamos de las clases oprimidas, el gobierno se orientó hacia el nacionalismo revolucionario, adquiriendo un definido contenido agrario, antifeudal y antimperialista. En este período no solo se puso mayor énfasis en la modernización y diversificación de la agricultura, así como en el desarrollo económico del país, sino también se implantó una avanzada legislación revolucionaria que incluía beneficios a los pueblos originarios y la quiebra del dominio oligárquico-imperialista mediante una audaz redistribución agraria.

Por eso se inició la construcción de la carretera del Atlántico y el puerto nacional de Santo Tomás y se concibió el proyecto de la hidroeléctrica Junun-Marinalá, con los cuales se pretendía romper el monopolio norteamericano en los transportes y la electricidad. Sin duda, la medida más avanzada del gobierno de Arbenz fue la ley de reforma agraria del 17 de junio de 1952, que expropiaba las áreas ociosas de los latifundios para intentar dar una solución democrática al problema de la tierra, dominada por los terratenientes nacionales y extranjeros.

La aplicación de la ley no solo afectó a los grandes propietarios guatemaltecos, sino también a los extranjeros y entre estos a la UFCO. Tan solo al monopolio frutero le fueron confiscadas 1,859 caballerías en el Pacífico y 1,558 en el Atlántico. En los dos años de ejecución de la inconclusa reforma agraria fue expropiada la cuarta parte de las tierras cultivables y repartidas a más de 100 mil familias –beneficiando a medio millón de habitantes–, de las cuales 30 mil lo habían sido con propiedades del Estado.

La creciente agitación obrero-campesina y las expropiaciones de tierras eran más de lo que podía aceptar la vieja oligarquía y el imperialismo norteamericano. Las conquistas de la revolución guatemalteca y la influencia de su ejemplo alarmaron a los enemigos del proceso. Así, mientras se iba cerrando el cerco contra Guatemala organizado por Estados Unidos, las fuerzas progresistas encabezadas por Arbenz se perfilaban como la única alternativa consecuente en lo que constituía ya una nueva fase de la revolución de carácter democrático-popular.

La hostilidad de Estados Unidos contra la revolución guatemalteca se hizo más descarnada cuando Washington, el 14 de octubre de 1953, emitió una declaración en la que atacaba al gobierno de Arbenz. Ella formaba parte de un plan intervencionista confeccionado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) –denominado PBSUCCESS– que incluía, en su primera etapa, la firma de un rosario de pactos militares con los gobiernos títeres del área centroamericana –a la vez que se prohibían las ventas de armas al de Arbenz–, para dar la impresión de que estos países eran amenazados por Guatemala. A la par, en estas repúblicas vecinas –donde incluso funcionó una radio

contrarrevolucionaria–, se entrenaban grupos mercenarios que en pocos meses deberían invadir el territorio guatemalteco y derrocar al gobierno revolucionario.

El 17 de junio de 1954, haciendo caso omiso a las denuncias de Guatemala en los foros internacionales –como la realizada en la conferencia interamericana de Caracas por el ministro de Exteriores, Guillermo Toriello–, se inició la agresión imperialista. Un llamado Ejército de Liberación, concentrado en Nicaragua y Honduras, invadió Guatemala bajo la dirección del ex coronel Carlos Castillo Armas, mientras barcos norteamericanos se aproximaban a sus aguas jurisdiccionales.

En su avance, los invasores ocuparon las poblaciones de Bananera y Morales, aprovechando las instrucciones dadas por Arbenz a sus fuerzas de evitar choques en la zona limítrofe con Honduras, para no dar pretexto a una guerra con este país. Mientras esto ocurría en la zona por donde habían penetrado los «liberacionistas», aviones mercenarios suministrados por la CIA bombardeaban los días 25 y 28 de junio la capital y otras ciudades guatemaltecas.

Cuando la invasión parecía flaquear, y la CGT llamaba al pueblo a formar comités de defensa, se produjo la traición de los desmoralizados mandos militares complotados con la contrarrevolución. Ya unas semanas antes de la intervención, el 15 de mayo de 1954, la jefatura del ejército había cuestionado a Arbenz sobre los alcances de su programa y sus vínculos con el PGT, aprovechando la llegada a un puerto guatemalteco del barco sueco *Alfhem*, portador de armas compradas a Checoslovaquia.

Puesto entre la espada y la pared, el presidente Arbenz se opuso a las exigencias de los altos mandos y prefirió renunciar (27 de junio), considerando erróneamente que su permanencia al frente del gobierno era el obstáculo para liquidar a los invasores y preservar los logros de la revolución. Pero la junta militar que le sustituyó, pronto sustituida por otra más a la derecha, ilegalizó al PGT, persiguió a sus dirigentes y comenzó a negociar con los invasores (30 de junio), mientras Arbenz se asilaba en la embajada de México. Para consolidar su victoria, desde el 3 de julio de 1954 Castillo Armas se posesionaba de ciudad Guatemala con sus huestes a sueldo.

La caída de Arbenz, y la instauración de un gobierno hechura de la oligarquía y Estados Unidos, cerró el breve y único capítulo de serias transformaciones revolucionarias en la historia contemporánea de Guatemala. A partir de entonces reaparecieron en toda su intensidad el autoritarismo y la represión sin límites que habían caracterizado al estado oligárquico hasta 1944.

Otros cambios democráticos a mediados de los cuarenta

Como ocurrió en Guatemala, en otros países latinoamericanos también se produjeron importantes transformaciones democráticas en la coyuntura favorable de mediados de los cuarenta. Así en Ecuador, las fuerzas progresistas se unieron en un amplio frente policlasista, la llamada Alianza Democrática, que reunió a conservadores, liberales, socialistas y comunistas.

El frente ecuatoriano se oponía a la política arbitraria y reaccionaria de Carlos Alberto Arroyo del Río, cuyo régimen había adquirido un claro perfil dictatorial. Multitudinarias manifestaciones públicas, seguidas de una huelga nacional y de un levantamiento del ejército, en mayo de 1944, en contra del odiado cuerpo de carabineros terminaron por derribarlo.

La llamada revolución gloriosa, como se le denominó, llevó a la presidencia a un hábil y carismático líder que tendría una larga trayectoria política: José María Velasco Ibarra. Gracias a aquellas intensas jornadas, los trabajadores ecuatorianos consiguieron importantes reivindicaciones, entre ellas la creación, en julio de 1944, de una confederación obrera unitaria.

Un proceso parecido al de Ecuador se desarrolló también en Venezuela. Aquí un grupo de oficiales jóvenes, entre los cuales sobresalían Carlos Delgado Chalbaud y Marcos Pérez Jiménez, en complicidad con la dirigencia del recién creado Partido Acción Democrática (AD), Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni, entre otros, derrocaron al gobierno el 17 de octubre de 1945 en un proceso que denominaron la revolución de octubre.

A pesar de la connotación que pudiera atribuirse a su denominación, el movimiento cívico militar solo se proponía realizar elecciones inmediatas, con la única novedad que incluyeran la votación universal, directa y secreta del presidente. El golpe de Estado derrocó al gobierno del general Isaías Medina Angarita, en el poder desde 1941, poniendo fin a casi medio siglo de ininterrumpido caudillismo militar andino.

Aunque en honor a la verdad, el gobierno de Medina Angarita se había desmarcado de los regímenes que le habían precedido: Juan Vicente Gómez y Eleazar López Contreras. Para ello, Medina Angarita promulgó en 1943 una legislación nacionalista en materia petrolera, otra de reforma agraria y leyes democráticas que permitieron el regreso de los exiliados y la legalización de los partidos de oposición, entre ellos el Partido Comunista (1945).

El nuevo gobierno provisional, encabezado por Rómulo Betancourt, satisfizo algunas exigencias populares al democratizar el ejercicio del sufragio y organizar la elección de una asamblea constituyente en diciembre de 1946. Aprobada la nueva carta fundamental, una abrumadora mayoría electoral llevó a la presidencia, en febrero de 1948, al candidato adeco (AD): el célebre novelista Rómulo Gallegos.

En la pequeña República de Haití también se desbordaron incontenibles las masas, ahora contra la dictadura entreguista de Elie Lescot, respaldada por la oligarquía mulata. Los gobiernos haitianos, en manos de la élite mulata desde la retirada de los ocupantes norteamericanos en 1934, habían alentado los prejuicios y la represión contra las prácticas religiosas de origen africano –el vudú–; así como externado su menosprecio por la intelectualidad negra, que esgrimía la defensa de los derechos sociales y las ideas renovadoras de la negritud, como en 1928 ya había hecho Jean Price-Mars con su célebre libro *Así habló el tío*.

Desde 1945 la resistencia al régimen venía creciendo, en particular entre los estudiantes. El 11 de enero de 1946 una huelga de este sector atrajo el apoyo de las capas medias, sobre todo de origen negro, convirtiéndose en un paro nacional que obligó a Lescot a dimitir bajo la presión de los jefes militares Frank Lavaud, Antoine Levelt y Paul Magloire.

Pese a los obstáculos interpuestos por la junta que le sucedió en el poder, la democratización se impuso. En los comicios celebrados

en agosto de 1946 triunfó Dumarsais Estimé, quien se vio obligado a legalizar los partidos Comunista y Socialista Popular, a permitir la organización de sindicatos y a dictar medidas de beneficio social, entre ellas el salario mínimo.

En otros países del continente, el proceso de apertura democrática de la posguerra fue menos espectacular, aun cuando también se caracterizó por un notorio ascenso político de las masas y el repliegue de las fuerzas oligárquicas. En Brasil, por ejemplo, la oleada mundial antifascista obligó al presidente Getulio Vargas, quien desde 1937 gobernaba en forma dictatorial, a desmontar su represivo *Estado Novo* y conceder amplias libertades.

En febrero de 1945 los presos políticos fueron excarcelados y se convocó a elecciones generales. Estas disposiciones no lograron apaciguar la desconfianza del ejército y de la oposición oligárquica, que obligaron al presidente Vargas a dimitir en octubre de ese año. En los comicios fue elegido a la primera magistratura Eurico Gaspar Dutra, junto a una asamblea constituyente en la que figuraban catorce diputados comunistas, entre ellos Luis Carlos Prestes y Carlos Marighela.

Tendencias democráticas semejantes se observaron en países del continente donde las condiciones eran mucho más favorables. Nos referimos a Chile, México, Colombia, Panamá, Uruguay y Costa Rica. En México, por ejemplo, el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), para fortalecer su imagen democrática, concedió registro oficial al Partido Comunista.

Incluso en aquellas naciones donde las dictaduras tradicionales lograron sobrevivir a la ofensiva democrática de la posguerra, como ocurrió con Anastasio Somoza en Nicaragua o Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, ello se logró a costa de hacer concesiones a la oposición y tras realizar maniobras cosméticas que les permitieron ciertos retoques de fachada. En cierta forma, fue también el caso de Fulgencio Batista en Cuba.

El general Batista, convertido en el verdadero poder tras el trono desde la caída del gobierno de Ramón Grau San Martín en enero de 1934, comenzó a dar pasos a fines de la década del treinta hacia una apertura democrática. Para ello, su presidente títere Federico Laredo Bru dictó una ley de amnistía, que liberó a más de tres mil

presos políticos y permitió el regreso de los exiliados, reconoció la autonomía universitaria, la libre actividad de los partidos políticos –incluido el Comunista–, contexto en el que se fundó, en enero de 1939, una gran central sindical nacional.

Durante todo este período, Batista se las arregló para tejer alianzas políticas que viabilizaran su aspiración de acceder a la primera magistratura sin abandonar su base militar. Lo más insólito fue el apoyo del Partido Comunista, que desde octubre de 1935 habían asumido como propia la táctica de los frentes populares orientadas por la Internacional Comunista de Moscú y que, ante la imposibilidad de concertar una alianza con otras fuerzas políticas, terminaron concretándolas con el jefe del ejército.

Tras la aprobación de la carta magna de 1940, Batista consiguió su elección como presidente de la república, luego de derrotar a su oponente y líder del Partido Auténtico, Ramón Grau San Martín. De esta forma, Batista pudo ser presidente constitucional hasta octubre de 1944, lo que coincidió con los años de la Segunda Guerra Mundial.

El gobierno de Batista tuvo el respaldo del Partido Comunista, fuertemente imbuido del browderismo –corriente que preconizaba la colaboración de clases promovida por Earl Browder, entonces máximo líder de los comunistas norteamericanos–, lo que le permitió tener a dos de sus miembros dentro del gabinete, algo que no se repitió entonces en ningún otro país de América Latina. Por otro lado, durante este período de 1940 a 1944, Batista adoptó una política liberal que permitió la obtención de conquistas democráticas y sindicales, en sintonía con la alianza a escala internacional de Estados Unidos con la Unión Soviética –con la que se establecieron relaciones diplomáticas en octubre de 1942– para la derrota del fascismo.

A pesar de que el conflicto mundial favoreció las exportaciones cubanas, sacando a la economía de la isla de su prolongada crisis, las interrupciones de las transportaciones marítimas crearon cierta escasez que afectó a los sectores populares. Además, la corrupción administrativa, las violaciones de los preceptos constitucionales y el ambiente violento que siguió existiendo en el país, llevaron al

desprestigio gubernamental y facilitaron la resonante victoria de la oposición en los comicios presidenciales del 14 de julio de 1944.

A la resonante victoria de Grau y los auténticos en esas elecciones se le llamó la «jornada gloriosa», cercenando toda posibilidad de continuación de Batista y sus seguidores en el poder. Atrapado en sus propias maquinaciones, Batista esta vez sin alternativas para prolongar su mandato, debió entregar el poder, aunque dejando la puerta abierta para un futuro regreso.

También en Paraguay el dictador Higinio Morínigo, en el gobierno desde 1940, propició una apertura democrática. En la coyuntura de la posguerra, Morínigo permitió la libre actividad de sus opositores y, en febrero de 1946, formó un gabinete en el que tuvieron cabida figuras de los partidos tradicionales y del febrerismo.

En el Caribe, también la situación posbélica dejó su impronta, estimulando aquí los diversos movimientos autonomistas que actuaban en las colonias holandesas (Aruba, Curazao y Surinam) y francesas (Guayana, Martinica y Guadalupe). En estas dos últimas posesiones de Francia, las fuerzas de izquierda –en lo fundamental socialistas y comunistas– consiguieron una redoblada presencia política favorecida por el gobierno popular establecido en París tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ello permitió que en 1946 a Martinica y Guadalupe se les reconociera el *status* de departamentos franceses de ultramar.

El período democrático que siguió a la terminación de la Segunda Guerra Mundial no duró mucho tiempo. Erosionado por un limitado desplazamiento oligárquico, sucumbió ante los primeros embates del enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias: Estados Unidos y la Unión Soviética.

El presidente ahorcado y el MNR en Bolivia

En Bolivia, como también en Perú, se promulgaron reformas democráticas y se celebraron elecciones presidenciales en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial. En este último país, en junio de 1945, el candidato del Frente Democrático Nacional –respaldado

por los apristas–, José Luis Bustamante, venció y se integró un congreso en el cual había siete parlamentarios comunistas. Un ambiente de ascenso democrático favoreció la formación de sindicatos y organizaciones estudiantiles independientes.

A diferencia de lo sucedido en la vecina república peruana, en Bolivia este proceso fue mucho más complejo. Se había iniciado en diciembre de 1943, cuando jóvenes oficiales nacionalistas apoyados por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), liderado por Víctor Paz Estenssoro, dieron un golpe de Estado, derrocaron al gobierno oligárquico y nombraron presidente al mayor Gualberto Villarroel.

Realizadas elecciones parlamentarias se constituyó un congreso en julio de 1944 con predominio del MNR que seleccionó al propio Villarroel como presidente. En esa situación, se dictaron una serie de leyes progresistas en materia social, muchas de las cuales fueron recogidas en la constitución de 1945.

Los Estados Unidos no tardaron en declarar una cerrada oposición al nuevo gobierno boliviano. Sus principales ataques se dirigieron, sin embargo, contra el partido que constituía la fuerza fundamental dentro del gabinete de Villaroel: el MNR. Acusando de «pro-nazis» a sus integrantes, Washington puso en movimiento el sistema panamericano y logró que 19 países de la América Latina aprobaran, en enero de 1944, un *Memorando Confidencial* del Departamento de Estado en el que se sindicaba a los miembros del régimen boliviano como «francamente hostiles a los propósitos de la defensa interamericana».[2]

Todos los gobiernos del hemisferio, con la solitaria excepción de Argentina, decidieron no reconocer oficialmente a Villarroel. La segunda andanada de Estados Unidos fue suspender el intercambio comercial y cancelar las negociaciones sobre futuras ventas de estaño.

Atrapado en la red de estas presiones, Villarroel decidió ganarse la confianza de Estados Unidos y expulsó de su gabinete a los miembros del MNR. Al mismo tiempo, ordenó represalias contra los residentes japoneses y alemanes, invitó a colaborar a los llamados «políticos independientes» y recibió a una misión norteamericana en La Paz.

[2] Alberto Ostria Gutiérrez, *Un pueblo en la cruz. El drama de Bolivia*, Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1956, p. 25.

Los reconocimientos diplomáticos a su gobierno comenzaron entonces a llegar. Dispuesto a encontrar un lugar entre los presidentes «democráticos» del hemisferio, Villarroel llamó a elecciones generales el 2 de julio de 1944. El triunfo del MNR –sobre todo en Oruro y Potosí– sobre la Unión Democrática Bolivia resultó arrollador. Integrado mayoritariamente por diputados del MNR, el nuevo congreso eligió a Villarroel como presidente de la república. A continuación, se dictaron leyes de beneficio social y se reconoció a la Unión Soviética (URSS), aun cuando no llegaron a establecerse relaciones diplomáticas.

Además, se expropiaron los yacimientos auríferos de Carlos V. Aramayo. El recién fundado Ministerio de Trabajo y Previsión Social creó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Encabezada por un ex-perforista de Catavi, Juan Lechín Oquendo, pronto sería esta la más fuerte y combativa organización obrera del país.

Por su lado, el ministro de Hacienda, Víctor Paz Estenssoro, aumentó el porcentaje de divisas que debía entregar al Estado los grandes exportadores de minerales y preparó el primer Plan de Desarrollo Económico de Bolivia. Al concluir el primer congreso indígena, reunido en abril de 1945, Villarroel decretó la supresión oficial de los servicios personales que todavía se veían obligados a prestar los pueblos originarios. En ese mismo mes, ofreció a los campesinos de Tarbuco realizar una redistribución general de tierras. Todas estas innovaciones progresistas fueron recogidas en el texto de una nueva constitución, dictada en 1945.

Mientras tanto, la oposición se reorganizaba y arreciaba su campaña contra el gobierno. La Unión Democrática Boliviana se transformó en el llamado Frente Democrático Antifascista, aglutinador de toda una constelación de agrupaciones políticas de diversas tendencias: los partidos Liberal, Republicano Socialista, Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR), Socialista y Republicano Genuino; además de algunas organizaciones sindicales, la Unión Cívica Femenina y la Federación Universitaria de Bolivia.

La complicada situación financiera no solo se debía al hecho de que las limitadas transformaciones sociales no habían estado

acompañadas por sustanciales reformas económicas. Carentes de divisas, desacreditado a nivel internacional por las campañas norteamericanas en su contra, impotente para resolver la escasez de alimentos, el gobierno de Villarroel se fue quedando sin apoyo, sobre todo en los más importantes núcleos urbanos.

El 13 de junio de 1946, un grupo armado de derecha, financiado por la élite minera conocida como *la rosca*, atacó el cuartel de Calama y la base aérea de El Alto. Frustrado el asalto, el gobierno expropió los diarios *La Razón* y *Última Hora*. Pocos días más tarde, el 8 de julio, los maestros se lanzaron a la huelga. Cuando los estudiantes se sumaron al paro, la Universidad fue asaltada por el ejército.

Una manifestación iniciada en el barrio aristocrático de Sopocachi, el 19 de julio, fue dispersada a balazos por los soldados. Las calles aledañas a la Plaza Murillo quedaron salpicadas de cadáveres. Finalmente, el domingo 21 se produjo el desenlace. El presidente fue obligado a sacar a los ministros del MNR, primero, y a renunciar a favor del general Dámaso Arenas, después. Cuando Villarroel preparada su dimisión, llegó frente al Palacio Quemado una gran manifestación opositora a la cual se habían sumado algunas unidades militares.

A las dos de la tarde, el edificio fue asaltado por la multitud. Al penetrar al recinto, individuos armados ametrallaron al presidente y a varios de sus ayudantes. El cadáver de Villarroel fue arrastrado hasta uno de los balcones, lanzado a la vía pública y después colgado por los amotinados en una de las farolas de la Plaza Murillo.

Primeras manifestaciones de la Guerra Fría en América Latina

A partir de 1947 se desató en América Latina una furiosa oleada antidemocrática y anticomunista promovida directamente desde Estados Unidos. Su principal objetivo era frenar las ostensibles conquistas populares, conseguidas al calor de la victoria sobre el fascismo, y alinear a los países latinoamericanos en el enfrentamiento con la Unión Soviética y los emergentes países socialistas.

Aunque algunos de los primeros atisbos de la Guerra Fría y de la histeria anticomunista eran visibles a escala internacional desde antes de 1947, sin duda la señal para la oficialización en este continente de la nueva doctrina diseñada por los círculos más reaccionarios de Estados Unidos provino de la reunión de cancilleres de las repúblicas americanas efectuada en Rio de Janeiro. En septiembre de ese año se aprobó en la capital brasileña el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Poco después, la conferencia panamericana celebrada en Bogotá en abril de 1948 sirvió para impulsar los planes norteamericanos de conformación de un bloque político-militar al servicio de Estados Unidos y definir la línea de «contención del comunismo». En ella participó el propio secretario de Estado norteamericano, general George C. Marshall, uno de los artífices de la Guerra Fría.

En esta ocasión se condenó, por primera vez de manera explícita, al comunismo, en el marco del interés norteamericano por imponer a los países de América Latina la doctrina estadounidense de las fronteras ideológicas. A partir de entonces, uno tras otro, los gobiernos latinoamericanos fueron obligados a alinearse con el antisovietismo, a romper sus vínculos comerciales y diplomáticos con la URSS y el naciente campo socialista y a desatar, en el plano interno, una feroz campaña anticomunista que nada tenía que envidiar a la del senador Joseph McCarthy dentro de Estados Unidos.

Poco después, en 1951, se fundó con financiamiento norteamericano, la Organización Regional Interamericana del Trabajo (ORIT), para contraponerla a la CTAL La ORIT pronto se constituyó en instrumento para la persecución de los sindicatos progresistas.

Esta fue precisamente la política que se siguió en México durante el gobierno de Miguel Alemán de 1946 a 1952, quien en 1947 expulsó de la Central de Trabajadores de México (CTM) a los líderes obreros comunistas y a los seguidores de Vicente Lombardo Toledano e instauró un sindicalismo oficialista sometido a un férreo control gubernamental (*charrismo*). Al mismo tiempo, se acentuaban los rasgos autoritarios del Estado, después que el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), fundado por Cárdenas, había sido sustituido en 1946 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Algo semejante sucedió en Cuba durante los años finales del gobierno de Ramón Grau San Martín (1944-1948) y durante el de Carlos Prío Socarrás (1948-1952. Aquí los dirigentes obreros comunistas no solo fueron desalojados de la Confederación de Trabajadores de Cuba (CTC), sino que varios de ellos murieron asesinados a manos de los agentes a sueldo de la reacción, como ocurrió con el líder azucarero Jesús Menéndez y el portuario Aracelio Iglesias.

La extensión a Chile de esta rabiosa política anticomunista dio lugar a un sorpresivo viraje del presidente Gabriel González Videla, del Partido Radical, quien acababa de ganar las elecciones en 1946 gracias a su oportunista alianza con el Partido Comunista, que tenía un caudal electoral superior al 12% de la votación. En abril de 1947, y para ponerse a tono con las orientaciones de Washington, el mandatario chileno expulsó a los tres ministros comunistas de su gabinete.

Unos meses más tarde, en septiembre de 1948, González Videla firmó la llamada «ley de defensa de la democracia» que oficializó la persecución contra los comunistas tras arrogarse «facultades extraordinarias». El Partido Comunista quedó ilegalizado, sometidas las organizaciones sindicales al control policial, anuladas las libertades constitucionales y el derecho de huelga, y rotas las relaciones con la URSS.

A la vez, cientos de comunistas y dirigentes obreros fueron conducidos al campo de concentración instalado en Pisagua. La víctima más connotada de la histeria anticomunista en Chile fue el afamado autor de *Veinte poemas de amor y una canción desesperada* (1924), el poeta y senador comunista Pablo Neruda, obligado a huir al exterior clandestinamente.

También en Ecuador, como en Cuba, Chile y México, el inicio de la despiadada política anticomunista no requirió derrocar a los gobiernos establecidos. En el país ubicado en la línea ecuatorial, el presidente Velasco Ibarra se proclamó dictador en marzo de 1946, pretextando su desacuerdo con la constitución democrática aprobada un año antes. Ello le permitió reprimir a la izquierda y dictar una nueva carta fundamental más a su gusto. La creciente inclinación derechista en Ecuador se agudizó a raíz de la caída del gobierno de Velasco Ibarra, en agosto de 1947, expulsado por los militares.

Una evolución parecida a la ecuatoriana tuvo lugar en Haití. En agosto de 1946, a pocos meses de estrenado su gobierno, el presidente Estimé mostró su cara represiva y antidemocrática persiguiendo a comunistas y socialistas. El golpe de Estado de mayo de 1950, perpetrado por el coronel Paul Magloire, le dio acceso a la presidencia desde el 6 de diciembre de ese año, acrecentando la política represiva y pronorteamericana del régimen depuesto.

En Puerto Rico este proceso se expresó mediante la adopción del llamado Estado Libre Asociado (ELA) entre 1950 y 1952. Los años de la Segunda Guerra Mundial habían aupado al Partido Popular Democrático (PPD) y su principal líder Luis Muñoz Marín, tras abandonar el ideal independentista y aplicar una serie de reformas de corte populista, entre ellas repartos agrarios (1941) y fomento industrial.

En la coyuntura de la Guerra Fría, el PPD retomó la vieja fórmula autonómica del ELA, que le convenía al gobierno norteamericano para contrarrestar los ataques procedentes del proceso mundial de descolonización auspiciado por las recién creadas Naciones Unidas (ONU). La constitución del ELA, elaborada por una asamblea puertorriqueña dominada por los seguidores de Muñoz Marín, fue finalmente aprobada en un referéndum en febrero de 1952.

Estos cambios cosméticos, en esta isla convertida en colonia de Estados Unidos desde 1899, fueron antecedidos por un verdadero levantamiento popular ocurrido en 1950. Organizado por el Partido Nacionalista, el estado independiente fue proclamado en Jayuya, mientras la bandera nacional era enarbolada por Blanca Canales al grito de ¡Viva la República de Puerto Rico! Como parte de la brutal represión, trece nacionalistas fueron masacrados.

La insurrección independentista de 1950 terminó con el violento asalto, el 2 de noviembre de ese año, de la casa de don Pedro Albizu Campos, quien fue encarcelado de nuevo y solo saldría de la cárcel para morir, el 21 de abril de 1965. Como colofón de la lucha armada independentista, el 1 de marzo de 1954 se produjo el ataque a la Casa Blair, y al propio Congreso norteamericano en Washington, por tres patriotas puertorriqueños encabezados por Lolita Lebrón.

En varios países latinoamericanos, la oligarquía y Estados Unidos aprovecharon la coyuntura para favorecer el acceso al poder de regímenes militares de derecha –como ocurrió en Ecuador y Haití–, encargados de llevar adelante el plan de eliminar muchas de las reivindicaciones populares del período anterior, sin la resistencia de algunos de los gobiernos democráticos. Por eso, otra de las características de esta oleada derechista residió en que no solo se proyectó contra el movimiento obrero y comunista, sino que también causó estragos entre los partidos democráticos y reformistas, como Acción Democrática (AD) y el APRA. Esto fue lo que sucedió en 1948, cuando los militares depusieron sucesivamente a los gobiernos de José Luis Bustamante Rivero en Perú (octubre) y Rómulo Gallegos en Venezuela (noviembre).

En Paraguay, Costa Rica y Colombia la contraofensiva reaccionaria de finales de los años cuarenta estuvo vinculada a una guerra civil. En Paraguay, el dictador Morínigo, para ponerse a tono con la Guerra Fría, protagonizó en enero de 1947 una especie de autogolpe de Estado: eliminó a los representantes del Partido Febrerista de su gabinete, implantó el estado de sitio y lanzó una violenta represión contra sus opositores, encubriéndola con los ropajes de un burdo anticomunismo.

Pero el 7 de marzo de ese mismo año, los oficiales «institucionalistas» decidieron sublevarse. Encabezados por el teniente coronel Fabián Saldívar Villagra, soldados y marinos, apoyados por estudiantes y militares de los partidos Comunista, Febrerista y Liberal, convirtieron a la ciudad de Concepción en el centro de la rebelión.

Con el respaldo de una parte del ejército, el gobierno de Asunción empujó al país a una larga guerra civil. Las vacilaciones e inútiles controversias dentro del comando rebelde permitieron a las tropas de Morínigo –asesoradas por un oficial norteamericano y sostenidas con dólares y armas desde la embajada de Estados Unidos– poner fin a la insurrección en agosto de 1947. Atemorizados por la bárbara represión, una serie de líderes liberales y febreristas se acogieron a la amnistía decretada por el dictador, mientras otros se refugiaban en Argentina, abandonando a sus aliados revolucionarios.

A diferencia del Paraguay, la guerra civil de Costa Rica estuvo motivada por causas diferentes. En esta pequeña república centroamericana, de bases democráticas más sólidas, los gobiernos liberales de Rafael Ángel Calderón Guardia, de 1940 a 1944, y Teodoro Picado, de 1944 a 1948, habían promulgado una avanzada legislación social con el entusiasta respaldo de los comunistas (Vanguardia Popular), partido que poseía una pequeña pero activa representación parlamentaria.

Sin embargo, en marzo de 1948 estalló un levantamiento armado promovido por los opositores al gobierno, que rechazaban la anulación de las recientes elecciones presidenciales que los favorecía. La breve guerra civil concluyó en abril con el triunfo de los partidarios del líder reformista José Figueres, devenido fundador de la llamada segunda república.

Esto trajo consigo la ruptura de relaciones con la URSS, la ilegalización de Vanguardia Popular –situación que se prolongó hasta 1974– y de la confederación de trabajadores, muchos de cuyos dirigentes debieron pasar a la clandestinidad o salir del país. Para alcanzar su triunfo Figueres contó con el abierto respaldo de la Legión del Caribe y los dirigentes políticos reformistas y anticomunistas de la región como Luis Muñoz Marín y Rómulo Betancourt.

El bogotazo

En Colombia la guerra civil tuvo sus peculiaridades y estuvo originada por un período de hegemonía conservadora, abierto en agosto de 1946, que conduciría a una franca y abierta represión a las instituciones democráticas y progresistas. El impopular régimen de Mariano Ospina, presionado por la derecha conservadora y Estados Unidos, enrareció todavía más el ya tenso ambiente político apoyando persecuciones *macarthistas*, junto con una violenta represión en las zonas rurales y de liquidación de las organizaciones obreras, calificadas de comunistas y anticristianas.

La mayoría liberal en el parlamento, guiada por Jorge Eliécer Gaitán desde junio de 1947, rompió toda colaboración con el

gobierno y frente al creciente clima de violencia optó por hacer un llamado a la movilización popular. En la multitudinaria marcha del silencio, el 7 de febrero de 1948, Gaitán desafió al régimen conservador y advirtió que «un partido que logra esto, muy fácilmente podría reaccionar bajo el estímulo de la legítima defensa».[3] Gaitán se venía radicalizando después de las elecciones de mayo de 1946, de lo que era prueba su lenguaje antimperialista y los llamados a la movilización de los trabajadores.

El visible auge de la lucha popular, y las consignas revolucionarias agitadas por Gaitán, alarmaban a la oligarquía, que solo buscaba una provocación para dar rienda suelta a la violencia. Este pretexto se encontró con el *bogotazo*. El 9 de abril de 1948, cuando en Bogotá sesionaba la IX Conferencia Panamericana, que daría nacimiento a la Organización de Estados Americanos (OEA), Gaitán fue asesinado en las calles de Bogotá por un fanático conservador.

El airado pueblo capitalino, volcado espontáneamente a las calles, dio muerte de inmediato al criminal y emprendió el ataque al Palacio Presidencial, pues por instinto y acumulados rencores responsabilizó al gobierno conservador con lo sucedido. Ante la frustración de las ansias renovadoras de las masas, que se canalizaban en torno a Gaitán, se desató incontrolable una verdadera insurrección urbana (el *bogotazo*), con apoyo de la principal central sindical e incluso de la policía capitalina, que puso al gobierno oligárquico al borde del colapso.

En algunos sitios, como en Barrancabermeja, se formaron juntas revolucionarias que por varias semanas desafiaron al gobierno conservador, mientras en zonas rurales brotaban bandas armadas que se proponían vengar a sus víctimas y defenderse de la represión. Para intentar acallar las protestas y levantamientos armados, el presidente Ospina, luego de largas sesiones con la directiva liberal en el virtualmente sitiado Palacio Presidencial, nombró algunos ministros del partido opositor en su gabinete, entre ellos Darío Echandía, quienes hicieron llamados a la calma.

El *bogotazo* abre el período conocido en la historia de Colombia como «la violencia», que vino acompañado de una bárbara represión

[3] Medófilo Medina, *Historia del Partido Comunista*, tomo I, Bogotá, Centro de Estudios de Investigaciones Sociales, 1980, p. 558.

de tipo fascista que dejaría un saldo de miles de muertos. Ya el 18 de octubre de 1948 el gobierno puso en funcionamiento tribunales militares, los consejos de guerra, y la censura a la prensa. La policía fue depurada, junto a ciertos sectores militares proclive a los gaitanistas.

También el *bogotazo* facilitó los planes de la ultraderecha conservadora. Así, el presidente Mariano Ospina, tras romper relaciones con la URSS y producirse la retirada de los ministros liberales del gabinete, en mayo de 1949, clausuró el Congreso (noviembre), suspendió las garantías constitucionales y traspasó el poder el 7 de agosto de 1950, en unos comicios sin oposición, a un correligionario de ideas fascistoides: Laureano Gómez, quien regresó de su exilio dorado en la España de Franco.

Bajo un estado de sitio perpetuo se implantó una verdadera dictadura, que sirvió para aplastar mediante la intimidación y otros crueles métodos –hubo secuestros y asesinatos masivos–, al liberalismo radical y las organizaciones de izquierda. Al mismo tiempo, el gobierno se encaminaba sin tapujos a la erección de un estado corporativo de partido único, calcado del falangismo español, mediante una pretendida reforma constitucional.

En el campo de la represión sobresalieron las famosas bandas conocidas como los *pájaros*, lideradas por León María Lozano, alias *El Cóndor*. Entre sus víctimas estaba el Partido Comunista que, bajo la dirección de Gilberto Vieira, había recuperado, en julio de 1947 su nombre histórico y expulsado de su seno a los browderistas, que habían llevado en la práctica a la disolución de esta agrupación.

El gobierno fascista de Gómez subordinó totalmente los intereses nacionales a la política de Estados Unidos, una de cuyas peores expresiones fue el envío de tropas colombianas a la Guerra de Corea, único país latinoamericano que lo hizo. Además de favorecer la inversión norteamericana –cuyo capital alcanzó en 1955 los 274 millones de dólares–, se negociaron grandes préstamos en Estados Unidos, a pesar de los buenos precios que entonces tenía el café.

Gómez solo pudo gobernar poco más de un año, hasta el 31 de octubre de 1951, fecha en que entregó el mando al «presidente designado» Roberto Urdaneta Arboláez, mientras el Congreso se reinstalaba con pleno dominio conservador ante el retraimiento

electoral de los liberales. Los perseguidos por la reacción, liberales y comunistas, respondieron con huelgas y paros, mientras las zonas rurales se inundaban con miles de guerrilleros que combatían la represión gubernamental. En particular, la resistencia a la violencia conservadora se centró en los Llanos Orientales, dominados por grupos liberales armados, o en las zonas campesinas de Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Valle y otros departamentos del área andina.

El 6 de septiembre de 1952 la violencia se apoderó de nuevo de Bogotá, cuando sectores de la derecha conservadora sembraron el pánico en las calles, agrediendo a los periódicos liberales *El Tiempo* y *El Espectador* y las casas de sus líderes Carlos Lleras Restrepo y Alfonso López Pumarejo. En estas condiciones, varios líderes liberales se vieron obligados a abandonar el país, camino seguido más tarde por algunos conservadores.

Ante la inminencia de una verdadera guerra civil –aumentaban las luchas populares, la crisis del sistema bipartidista crecía, mientras se generalizaba la violencia en el campo–, junto a la posibilidad del regreso al poder de Gómez, se produjo el golpe de Estado militar del 13 de junio de 1953. Apoyado por los conservadores ospinistas, los mandos militares y un sector de la propia jerarquía liberal, se abrió de 1953 a 1957 el paréntesis de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.

Dictadura de Anastasio Somoza

Otra de las características de la Guerra Fría en América Latina fue el establecimiento de dictaduras como la de Rojas Pinilla o la consolidación de otras más añejas, como la de Trujillo en República Dominicana y la dinastía de los Somoza en Nicaragua. El prolongado reinado del régimen militar patrimonial de los Somoza se había iniciado el 1 de enero 1937, después de que en mayo del año anterior el presidente Juan Bautista Sacasa fuera sacado del Palacio de Tiscapa por un golpe de Estado dirigido por el ambicioso jefe de la Guardia Nacional.

El gobierno de Anastasio Somoza García fue el fruto de unas amañadas elecciones, realizadas el 8 de diciembre de ese año, que

contaron con el aval de Estados Unidos. Además de estas importantes apoyaturas, Somoza contaba con el respaldo de un sector de la clase dominante nicaragüense, con la que terminó organizando una nueva agrupación política: el Partido Liberal Somocista. Desde los primeros momentos, el régimen de Somoza, que nació bañado en sangre con el asesinato de Sandino y la masacre de sus hombres, se caracterizó por su carácter represivo y violento.

También desde el principio el dictador nicaragüense se dedicó a enriquecerse. Con esa finalidad, expropió a los alemanes radicados en el país aprovechando la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, apoderándose de los bienes de la familia Bahkle, dueña de las mejores haciendas cafetaleras, además de otras propiedades agrícolas y urbanas.

Ya en 1946 Somoza figuraba entre los más acaudalados exportadores de café de Nicaragua. Otras fuentes de sus ingresos fueron las comisiones recibidas de empresas norteamericanas por las concesiones otorgadas para la explotación de yacimientos auríferos o la exportación de maderas y caucho, así como el contrabando, junto a pagos recibidos por tolerar los juegos de azar, la producción y la fabricación y venta de alcohol.

También durante la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, el dictador simuló una apertura democrática, para ponerse a tono con la alianza entre la Unión Soviética y Estados Unidos, a pesar de que con anterioridad había manifestado sus simpatías por el fascismo y reconocido a Francisco Franco antes de su victoria sobre los republicanos. Para mejorar su imagen, el dictador nicaragüense permitió el funcionamiento del recién creado Partido Socialista Nicaragüense (PSN), que en agradecimiento respaldó al gobierno cuando en 1944 fuerzas del Partido Conservador intentaron organizar una huelga en su contra.

Al año siguiente, el dictador reciprocó el gesto promulgando un Código de Trabajo (12 de enero de 1945) que recogía muchas de las demandas del naciente movimiento obrero nicaragüense y de los propios socialistas. Pero en 1948, en el contexto de la Guerra Fría, y tras lograr un entendimiento preliminar con la oposición conservadora, Somoza desató una violenta represión contra el Partido

Socialista, desarticulando las organizaciones obreras que habían surgido en los años anteriores.

En el ínterin de sus mandatos, pues Somoza gobernó de 1937 a 1947 –tras una reforma constitucional en 1939– y de 1951 a 1956 –hasta que fue asesinado–, dejó en la presidencia, para darse un barniz democrático, a sus acólitos Leonardo Argüello, Benjamín Lacayo Sacasa, ambos en 1947, y de 1948 a 1950 a Víctor M. Román y Reyes.

Pero uno de estos presidentes intentó no ser una marioneta. Fue el caso de Leonardo Argüello, quien solo pudo gobernar unas semanas, tras desafiar a Somoza. Hay que decir que el dramático desenlace del caso Argüello tenía que ver también con el cambio del clima político que estaba teniendo lugar a escala mundial, al terminar la luna de miel democrática que había dejado la Segunda Guerra Mundial y comenzaba el *macarthismo* en Estados Unidos. El día de su toma de posesión, el 1 de mayo de 1947, el efímero presidente Argüello, con el respaldo del Partido Socialista, el Liberal Independiente, la Confederación del Trabajo y los estudiantes, se había atrevido a anunciar sus intenciones del librarse del yugo económico norteamericano.

Quizás por eso el golpe de Estado fue respaldado por los opositores de Somoza, Carlos Cuadra Pasos y el líder conservador Emiliano Chamorro, y entre sus consecuencias estuvo la abolición del Código de Trabajo y una nueva modificación de la constitución. La desorganizada resistencia popular fue aplastada por los efectivos de la Guardia Nacional y las brigadas somocistas paramilitares llamadas *Cascos de Acero*.

La distensión con sus tradicionales adversarios del Partido Conservador se consolidó en la década del cincuenta a partir del llamado «pacto de los generales». Este acuerdo, firmado con el anciano general Emiliano Chamorro, líder histórico del Partido Conservador, aseguró a Somoza la primacía a cambio de una participación minoritaria de sus adversarios políticos en el aparato del Estado.

Sin embargo, la oposición contra la dictadura siguió adelante. En 1948 se registró un levantamiento guerrillero, organizado por el veterano general sandinista Ramón Raudales, quien repitió una

década después su intentona revolucionaria, cuando ya el aborrecido dictador Somoza había sido eliminado.

En septiembre de 1956 el patriarca de la familia gobernante, Anastasio Somoza García, fue ajusticiado por Rigoberto López Pérez, cuando ya era el más grande terrateniente ganadero, cafetalero y productor de caña de azúcar del país. Sus hijos, Luis y Anastasio Somoza Debayle, se encargaron de la sucesión, el primero entre 1956 y 1963 y el segundo desde 1967, tras abandonar formalmente la jefatura de la Guardia Nacional.

La Era de Trujillo

En el caso de la República Dominicana, la historia de la dictadura trujillista comenzó un poco antes, en febrero de 1930, cuando estalló una exitosa revuelta, encabezada por el general Rafael Estrella Ureña contra el presidente Horacio Vázquez que pretendía reelegirse con el apoyo del dictador cubano Gerardo Machado. A este movimiento opositor se unió Rafael Leónidas Trujillo, que era el jefe de la Guardia Nacional formada por Estados Unidos tras abandonar los *marines* el país seis años atrás.

Esa posición le allanó el camino a la primera magistratura, el 16 de mayo de 1930, en unos comicios fraudulentos en donde figuraba como único candidato: era el inicio de la terrible *Era de Trujillo*, que se extendería por tres décadas. Para lograrlo, Trujillo se convirtió en protector y garante de las inversiones norteamericanas en el país, particularmente en el azúcar, eliminando todas aquellas disposiciones gubernamentales que pudieran afectar los intereses de Estados Unidos.

Al mismo tiempo, siguió desarrollando su fortuna personal, en particular con negocios en el comercio y seguros, base del futuro crecimiento de su patrimonio. Una de las características que desde muy temprano distinguió al régimen trujillista fue la utilización indiscriminada del aparato y los recursos del Estado para su enriquecimiento personal.

Sobre estas bases, en los primeros diez años de su mandato, Trujillo se convirtió en dueño de grandes estancias ganaderas, de industrias de leche, carne y otras ramas alimenticias. Además, operaba

exitosas compañías comerciales, entidades financieras y empresas de seguros, obligando a los particulares a contraer préstamos y pólizas, lo que se convertiría en una práctica aplicada en todas esferas económicas a lo largo de su dictadura. También monopolizó ramas enteras de la economía nacional.

Valiéndose de un plan de austeridad que impuso a la administración pública, Trujillo consiguió en 1935 reanudar el pago de la deuda externa, a la vez que trataba de renegociar la convención de 1924 con Estados Unidos para recuperar el control de las aduanas del país. El 24 de septiembre de 1940, con la firma del Tratado Trujillo-Hull, Estados Unidos devolvió las aduanas a la República Dominicana, lo que posibilitaría al ambicioso dictador aumentar los ingresos fiscales, que combinado con una política proteccionista, y en medio de la favorable coyuntura para los precios del azúcar creada por la Segunda Guerra Mundial, permitió liquidar la deuda externa (21 de julio de 1947) junto al despegue de una modesta industria, buena parte de ella de su propiedad.

También Trujillo llegó a apoderarse del 70% de la producción azucarera nacional –pues llegó a ser dueño de 10 de los 14 ingenios del país–, adquiriendo a las compañías norteamericanas sus fábricas y tierras, lo mismo que sucedió con la empresa productora de electricidad. Como resultado de este proceso, en las postrimerías de la dictadura (1961), el 51% de la inversión industrial era de la familia Trujillo y del Estado –que era prácticamente lo mismo–, el 42% de extranjeros y solo el 7% de nacionales, concentrados en las actividades comerciales, de servicios y agrícolas.

Otro de los rasgos del régimen trujillista fue la brutal represión contra la oposición, la que se manifestó desde los inicios de la dictadura. Una de sus primeras expresiones fue el asesinato de los generales opositores Alberto Larancuent, Cipriano Bencosme y Desiderio Arias, como parte de su plan para meter en cintura a todos los caudillos que dominaban distintas regiones del país antes de su ascenso al poder.

Esto explica que Trujillo sobre dimensionara sus fuerzas armadas, convertidas en una de las más poderosas del Caribe. La militarización estuvo acompañada de la erección de una industria militar

propia, como la fábrica de armas emplazada en la ciudad natal del dictador: San Cristóbal.

La recuperación de la soberanía nacional sobre las aduanas sirvió también a la dictadura para darse una imagen nacionalista que legitimara su dominación, la que estuvo acompañada de una campaña mesiánica y de exaltación del pasado hispano de la nación, de corte racista, claramente enfilada contra Haití. La política antihaitiana de Trujillo se fundamentaba en que la República Dominicana había obtenido su independencia en 1844 de su vecino, con el cual sostuvo varias guerras durante el siglo XIX.

En 1937, motivado por la entrada masiva de haitianos para trabajar como braceros en la cosecha azucarera dominicana, muchos de los cuales no regresaban después a su patria, Trujillo desató, entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre de ese año, una terrible masacre. En la llamada «reconquista de la frontera», fueron asesinados a machetazos varios miles de indefensos trabajadores negros del país vecino.

En cambio, para fortalecer el hispanismo y blanquear al país, Trujillo acogió republicanos españoles, que permanecieron poco tiempo en la isla. Dos de esos exiliados se destacaron como asesores personales del dictador: el vasco Jesús de Galíndez y el gallego José Almoina. Una vez fuera del país, ambos se volvieron acerbos críticos del régimen trujillista, denuncias que les costaría la vida en 1956 y 1960 respectivamente.

A esta altura, Santo Domingo, la ciudad primada de América, había sido redenominada desde 1936 como Ciudad Trujillo –al pico más alto del país también se le puso el apellido del dictador–, mientras pueblos, calles, ciudades y provincias recibían el nombre del sátrapa o sus familiares. El tirano era adulado como el primer médico, trabajador, abogado, intelectual, periodista y otros epítetos, como también benefactor, generalísimo, libertador, san Rafael, restaurador de la independencia financiera y padre de la patria nueva. A partir de 1940, en todos los documentos oficiales, después de día, mes y año, debía aparecer la frase: *Era de Trujillo*.

La coyuntura creada a escala internacional por la Segunda Guerra Mundial, contra los regímenes autoritarios y fascistas, obligó

a Trujillo, como a los demás dictadores de la región, a hacer ciertos cambios cosméticos. Por ello abandonó formalmente el poder en 1940 y lo entregó a uno de sus testaferros, Francisco J. Peynado, artífice del repetido lema «Dios y Trujillo», y del ascenso del hijo preferido del dictador (Ramfis), de nueve años de edad, del rango de coronel –conferido a los 4 años– a general de brigada.

Tras la inesperada muerte del presidente títere Peynado, y el consiguiente interinato de Manuel de Jesús Troncoso, Trujillo volvió a ocupar el Poder Ejecutivo hasta 1942, aunque esta maniobra de distracción la repitió en 1952 con la entrega formal de la presidencia a su hermano Héctor Bienvenido (*Negro*) y a su amanuense Joaquín Balaguer. Además de *Negro*, todos los hermanos de Trujillo, así como tíos y su propio padre, ostentaron importantes cargos públicos.

Para completar la remodelación de su imagen, ofreció en mayo de 1945 garantías a los exiliados y opositores, favoreciendo la creación de nuevos partidos. Uno de ellos fue el Partido Trujillista, desprendimiento del Partido Dominicano –fundado en 1931–, el único existente hasta entonces. Incluso estimuló la fundación de un partido marxista a mediados de 1946, denominado como en Cuba, del que recibió asesoramiento, Partido Socialista Popular (PSP).

La distensión, que incluyó el establecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, duró muy poco tiempo. Al compás de la Guerra Fría, Trujillo abolió desde noviembre de 1946 estas mínimas concesiones y retornó a su acostumbrada postura represiva e intolerante, la que se incrementó con los intentos de sus opositores desde el exterior de derrocar al régimen por la vía armada.

Las diversas expediciones organizadas en esos años contra la dictadura trujillista contaron con el respaldo de los gobiernos de Ramón Grau San Martín en Cuba, Juan José Arévalo en Guatemala y Rómulo Betancourt en Venezuela. Las más importantes fueron la de Cayo Confites, frustrada en septiembre de 1947, junto a la que logró llegar a las costas dominicanas por Luperón en 1949, que fue aniquilada por el ejército. El notable crecimiento del descontento y de las actividades revolucionarias en su contra, obligaron a la dictadura a desatar una brutal represión, lo que unido al apoyo

de Estados Unidos le permitieron a Trujillo consolidar su dictadura durante toda la década del cincuenta.

Deterioro de la economía latinoamericana

Hacia los años de 1952 y 1953 se inició una nueva y profunda crisis de la economía latinoamericana. La estabilización de los mercados internacionales hizo caer los precios de las materias primas, junto a un sensible deterioro en los términos de intercambio.

Este proceso vino aparejado con la ruina de muchas empresas nacionales, desgastadas por la desigual competencia de los grandes consorcios foráneos y el cada vez mayor desangramiento de recursos hacia los países industrializados. El ligero crecimiento económico registrado en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial se había realizado, en lo fundamental, sobre la base de una agricultura extensiva tradicional, por lo que no logró un salto cualitativo en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Esta adversa coyuntura afectó sensiblemente los salarios y, en general, las condiciones de vida de los trabajadores –no solo en forma relativa sino absoluta–, situación agravada por las superganancias de los monopolios trasnacionales y la transferencia de los efectos del agudo deterioro económico a los sectores populares. De esta manera, la desocupación, el hambre y la miseria se hicieron aún más visibles en la inmensa mayoría de los países latinoamericanos.

Además, desde mediados de los años cincuenta se agravaron repentinamente las condiciones del comercio exterior de las repúblicas de América Latina. La crisis de las exportaciones latinoamericanas fue provocada por la reducción de la demanda de materias primas naturales en los países capitalistas desarrollados debido a la creciente utilización de materiales sintéticos.

Para completar este panorama desolador, habría que añadir que la crisis estructural en la agricultura, dominada por formas atrasadas de tenencia de la tierra y explotación de la fuerza de trabajo, generaba una superpoblación crónica en los campos. Ese era la génesis de

las migraciones masivas hacia las ciudades, la sobreproducción de las ramas de exportación y el déficit crónico de alimentos.

En consecuencia, los precios de los productos alimenticios subieron en los mercados internacionales afectando las balanzas de pago de los países latinoamericanos, obligados a importar muchos de ellos. Paralelamente, se intensificó la fuga de capitales de América Latina: solo entre 1946 y 1963 los monopolios norteamericanos extrajeron de la región 11 mil millones de dólares.

En estas circunstancias, también entró en crisis el proyecto de industrialización que se llevaba adelante en varias naciones de América Latina, al agotarse las posibilidades del proceso de «sustitución de importaciones» debido a las limitaciones del mercado interno y la falta de capitales para continuar adelante con las gigantescas inversiones que requería la industria pesada. El desarrollo de este sector era imprescindible para disminuir la dependencia externa y reducir las importaciones de medios de producción.

A la significativa disminución del ingreso en divisas, consecuencia de la caída de los precios de las exportaciones latinoamericanas que permitían la adquisición de las maquinarias e insumos que requería la emergente industria nacional, habría que añadir la continuada descapitalización. Esta tenía sus causas en la constante remesa de utilidades de las empresas extranjeras a sus casas matrices.

La única alternativa para mantener la expansión industrial, en un momento de acelerada concentración monopolista de la economía, dependía de la capacidad de la burguesía de América Latina para asociarse al capital foráneo. Para lograrlo, era necesario abandonar la política nacionalista que auspiciaban los llamados regímenes populistas o nacionalistas burgueses. Esta solución condujo a un mayor desarrollo de una nueva modalidad: la penetración del capital foráneo (las «inversiones mixtas»), que permitió dominar «por dentro» la economía latinoamericana e impulsar el proceso de monopolización.

A partir de entonces, los recursos financieros que necesitaba la industria de América Latina procedieron de indiscriminadas emisiones monetarias estatales y de descomunales préstamos extranjeros. Pero ello condujo a una espiral inflacionaria de proporciones

incalculables y a la acumulación de una voluminosa e insoportable deuda externa, que unida a la prolongada caída del valor de las exportaciones, provocaron crónicos déficits en la balanza de pagos.

Esta fase crítica que se iniciaba para la economía latinoamericana, coincidió con la llegada al gobierno de Estados Unidos, en enero 1953, de los republicanos, con Dwight D. Eisenhower y Richard M. Nixon al frente, que rompieron veinte años consecutivos de presidencias demócratas. El gobierno de Eisenhower fue el patrocinador de una agresiva e intolerante política internacional, ideada por el secretario de Estado John Foster Dulles.

En ese enrarecido clima se estableció en América Latina un verdadero rosario de modernos sátrapas como Fulgencio Batista en Cuba (marzo de 1952), Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (enero de 1953), Gustavo Rojas Pinillas en Colombia (junio de 1953) y Alfredo Stroessner en Paraguay (mayo de 1954). A estas dictaduras se sumaron las de Manuel A. Odría en Perú (1948-1956), Paul Magloire (1950-1956) en Haití y, sobre todo, las ya añejas de Trujillo en República Dominicana y Somoza en Nicaragua, purgadas desde 1947 de cualquier apariencia democrática.

Todas ellas tenían en común, más allá de alguna que otra diferencia formal, el apoyo irrestricto a Estados Unidos en correspondencia con su absoluta sumisión a los intereses norteamericanos. Además, todas estas florecientes dictaduras se caracterizaron por el empleo permanente de la represión física y la casi total ausencia de derechos democráticos.

Al mismo tiempo, Estados Unidos organizaba la intervención mercenaria contra la revolución guatemalteca. Como ya se mencionó, la injerencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala determinó la caída del gobierno popular y democrático de Jacobo Arbenz y su sustitución por la dictadura títere de Carlos Castillo Armas, encaramada en el poder en julio de 1954.

Ese fue el mismo clima de histeria anticomunista que llevó a la intervención militar británica en Guyana, en octubre de 1953, para deponer al gobierno local de Cheddi Jagan, líder del Partido Popular Progresista (PPP), el cual defendía un programa avanzado

que rechazaba el colonialismo y abogaba por la inmediata independencia. Fueron además los años en que el gobierno de Eisenhower hostilizó descarnadamente a los regímenes nacionalistas de Getulio Vargas en Brasil y Juan Domingo Perón en Argentina hasta llevarlos a abandonar el poder, proceso acelerado en cada caso por sus propias debilidades e inconsecuencias.

Trágico fin del nacionalismo en Brasil

El nuevo gobierno de Getulio Vargas en Brasil, iniciado en enero de 1951, tuvo características muy distintas al de su mandato anterior, tanto por su redoblado nacionalismo, que adquirió tintes antimperialistas, como por su inesperada vocación democrática. Tras su obligada salida de la presidencia en 1945, Vargas permaneció apartado de la política, recluido en su estancia de Sao Borja, en Rio Grande do Sul.

Su voluntario aislamiento solo fue interrumpido en contadas ocasiones para participar en las campañas del Partido *Trabalhista* (PTB) o en determinadas sesiones del Congreso del cual era senador. Durante ese período, Getulio Vargas pronunció fogosos discursos en los cuales reafirmó su convicción sobre la necesidad de realizar profundas transformaciones en Brasil.

Al aproximarse las elecciones presidenciales de 1950, Vargas, con 67 años de edad, se presentó como candidato por el PTB, con un programa bastante avanzado, dirigido a continuar el desarrollo industrial, que recogía una serie de demandas populares, entre ellas la reforma agraria. En los comicios, Vargas se impuso con el 48,7% de la votación.

Gracias al respaldo de masas –obtenido de sectores que añoraban la época de esplendor del sector estatal de la economía y las medidas sociales del varguismo– y a la división de sus contrincantes, Vargas pudo regresar al gobierno. Desde el principio de su segundo mandato, la política de Getulio se orientó a proseguir el desarrollo industrial brasileño, junto al propósito de preservar los sectores claves de la economía en manos del capital nacional, privado o estatal.

De ahí que su gobierno diera prioridad a la inversión en áreas básicas: ampliación de la siderurgia de Volta Redonda, construida en su anterior presidencia, creación de una gran usina hidroeléctrica y expansión de la red de infraestructura. Para regular la economía y financiar a las empresas nacionales fundó en 1952 el Banco Nacional de Desarrollo Económico. Estas medidas gubernamentales –además de la política inflacionaria– y la coyuntura favorable a las exportaciones brasileñas creada por la Guerra de Corea dieron por resultado que ya a comienzos de la década del cincuenta la industria representara en Brasil el 22% de toda la producción nacional.

A esta etapa del gobierno de Vargas también correspondió la propuesta de organizar una empresa estatal monopolística en el sector de hidrocarburos (Petrobras), creada finalmente, tras interminables debates parlamentarios, en octubre de 1953. En enero de 1952, también entraron en vigor las primeras disposiciones gubernamentales para contener la hemorragia de capitales –solo en 1951 se perdieron para el país 137 millones de dólares– por concepto de ganancias de las empresas extranjeras y, en noviembre de ese mismo año, se elevó el salario mínimo de los trabajadores.

Pero hacia los años de 1952 y 1953 la situación se complicó al surgir una inesperada y profunda crisis económica y política. Donde primero se manifestó fue en la producción fabril, al agotarse las posibilidades del proceso de «sustitución de importaciones» ante las limitaciones del mercado interno y la falta de capitales. Paralelamente se producía la caída de los precios de los tradicionales artículos de exportación –terminaba el *boom* creado por la guerra de Corea–, lo que repercutía en una significativa disminución del ingreso en divisas.

Por añadidura, continuaba la descapitalización del país por las empresas extranjeras con las constantes remesas de sus utilidades a las casas matrices, lo que provocaba endémicos déficits –468 millones de dólares en 1951 y 707 millones en 1952– en la balanza de pagos. La disyuntiva de conciliar con el capital foráneo o detener el ritmo de crecimiento fabril separó virtualmente los caminos del presidente Vargas y de la burguesía brasileña, lo que explica la manifiesta inclinación del mandatario a defender los intereses de las masas trabajadoras y a enfrentar al imperialismo norteamericano.

De ahí en adelante, Vargas endureció su política nacionalista, que ya no se limitó a la lucha contra la descapitalización, sino que también se encaminó a un acercamiento con el presidente argentino Juan Domingo Perón –proyecto de integración económica del ABC (Argentina, Brasil y Chile)–, la elaboración de un plan de reforma agraria (octubre de 1953) y de una empresa estatal (abril de 1954), semejante a la del petróleo, para el control de la electricidad (Electrobras).

Como en una relación causa-efecto, la crisis se trasladó de la economía al plano político. La oposición a Vargas se incrementó en el parlamento, la prensa y las asociaciones profesionales. En un lapso de pocos meses, varios ministros abandonaron el gobierno, mientras en el ejército caían en desgracia los sectores nacionalistas liderados por el propio ministro de la Guerra, que se había opuesto a los planes norteamericanos de enviar soldados brasileños a Corea.

La desestabilización económica propiciada por Estados Unidos tuvo por efecto una apreciable disminución del ritmo de crecimiento industrial, acompañado de un extraordinario agravamiento de la inflación dada las constantes emisiones monetarias. La incontenible alza de los precios continuó, mientras el costo de la vida se elevaba en un 40%, el doble de dos años antes. Para paliar la situación, que afectaba en primer lugar a los trabajadores, el ministro de Trabajo, el joven Joao Goulart, no solo no ponía coto a las huelgas obreras, sino que imponía en febrero de 1954 un aumento del 100% en el salario mínimo.

Desde ese instante, la casi totalidad de la burguesía se volvió en bloque contra el gobierno de Vargas. La prensa conservadora reaccionó acusando al presidente de querer implantar en Brasil una república sindicalista de estilo peronista, con Goulart al frente, y sacaron a la luz pública negocios sucios en que estaban implicadas personas cercanas al mandatario. Además, la agitación antigubernamental también llegó hasta las fuerzas armadas.

Presionado por los militares derechistas para que abandonara el poder, en la madrugada del 25 de agosto de 1954 el anciano caudillo se suicidó en su dormitorio del vetusto Palacio del Catete en Rio de Janeiro. En su patético testamento declaraba que había luchado

contra la explotación de Brasil, responsabilizaba de su muerte a la reacción interna y denunciaba a los «grupos económicos y financieros internacionales»,[4] vaticinando que su sacrificio contribuiría a la liberación del pueblo brasileño.

Apogeo y caída del peronismo

Casi un año después de la muerte de Vargas, en septiembre de 1955, el gobierno nacionalista de Juan Domingo Perón era derrocado por los militares derechistas argentinos, auspiciados por Estados Unidos. Para comprender las causas de este golpe de Estado hay que remontarse un poco atrás, a fines de la década del treinta, llamada en la historia de Argentina la «década infame».

En los años de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Ramón S. Castillo, un abierto simpatizante del fascismo europeo, había permitido el establecimiento en Argentina de un verdadero centro de propaganda y espionaje alemán. Mientras los círculos dirigentes oligárquicos defendían un interesado neutralismo, a fin de evitar complicaciones a la economía agroexportadora, las fuerzas populares, con el semi clandestino Partido Comunista a la cabeza, exigían que la nación se sumara, sobre todo después de la agresión nazi contra la Unión Soviética, a la coalición antihitleriana.

En un país dominado por el decadente imperialismo inglés y sometido a las crecientes presiones del norteamericano, las tendencias nacionalistas dentro del ejército se orientaban, aunque en forma contradictoria, cada vez más a impulsar una política de defensa de los intereses nacionales. El 4 de junio de 1943, una logia militar organizó el derrocamiento de Castillo y puso al frente del gobierno al general Pedro Pablo Ramírez.

En un breve lapso, el flamante dictador militar cerró el Congreso, clausuró diarios, intervino las universidades, disolvió los partidos políticos, implantó la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y detuvo o persiguió a militantes del Partido Comunista

[4] «Testamento político de Getulio Vargas», en *Historia de América Latina (1917-1939)*, tercera parte, La Habana, Ministerio de Educación Superior, [s.f.], p. 732.

y dirigentes sindicales. Sin embargo, algunas medidas de fines de 1943 y primeros meses de 1944 evidenciaban la existencia de otra logia militar, en la que se destacaba el coronel Juan Domingo Perón, orientada a propiciar el desarrollo industrial e instrumentar un tipo de política diferente frente al movimiento obrero y los grandes problemas sociales, como la congelación de los alquileres urbanos y los arrendamientos rurales, la creación de un banco de crédito industrial y algunas tarifas arancelarias proteccionistas.

Designado jefe de la secretaría del Ministerio de Guerra, el coronel Perón escogió el menospreciado Departamento Nacional de Trabajo como centro para sus actividades políticas y sindicales. Tras ocupar su jefatura, consiguió que el 27 de noviembre de 1943 se convirtiera en Secretaría de Trabajo y Previsión con rango de ministerio.

A pesar de su relevante papel en la logia militar, Perón era en aquel instante casi un desconocido para la opinión pública. Con 48 años de edad, su biografía solo incluía algunas modernas ideas sobre la «defensa nacional» contenidas en sus escritos militares como profesor de la Escuela Superior de Guerra y una estancia de estudio en Europa.

Instalado en la Secretaría de Trabajo y Previsión, la carrera de Perón abandonó rápidamente el relativo anonimato y su imagen pasó a ocupar los primeros planos de la política nacional. En sus frecuentes recorridos por el interior del país y en su hábil participación como mediador entre patronos y obreros, Perón repetía incansablemente los dos principios que se convertirían en lema de su estrategia política: *independencia económica* y *justicia social*. Ya en diciembre de 1943 el gobierno militar, por gestiones de Perón, votó un crédito de 500 millones de pesos para la construcción de viviendas baratas.

Durante el mandato del general Edelmiro J. Farrel, que había sustituido al general Ramírez tras la crisis provocada por Estados Unidos (enero de 1944), en contra de la proclamada neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial, Perón pasó a ocupar la vicepresidencia del país. Fue durante el gobierno de Farrel, para aplacar la presión norteamericana, que se declaró la guerra a las potencias del eje, el 27 de marzo de 1945, y se incautaron las propiedades alemanas y japonesas.

También en los años 1944 y 1945, Perón consiguió implantar un amplio sistema de seguridad social –que benefició a todos los trabajadores del país–, fueron aprobados numerosos aumentos salariales y solucionados muchos conflictos laborales al obligar a los empresarios a aceptar las demandas obreras. Esta política alcanzó su clímax con la proclamación del *Estatuto del peón*, el 18 de noviembre de 1944, que establecía jornales mínimos y otros beneficios sociales para los trabajadores agrícolas.

A la par, se alentaba la constitución de nuevos gremios leales al gobierno y se desplazaban a los dirigentes comunistas y socialistas en los sindicatos más combativos y organizados. La prosperidad argentina en los años de la Segunda Guerra Mundial, basada en sus grandes exportaciones de cereales y carnes hacia los países beligerantes, hizo posible la aplicación de los apreciables incrementos salariales y otras medidas en favor de los trabajadores que tanto contribuyeron a afianzar la popularidad de Perón y el papel de los sindicatos peronistas.

En estas circunstancias, Estados Unidos trazó un sinuoso plan de acción para derrocar al régimen militar argentino, que pese a sus obligadas concesiones seguía a regañadientes los dictados de la política norteamericana. El encargado de ejecutar esos proyectos era el embajador norteamericano Spruille Braden, quien desembarcó en Buenos Aires en mayo de 1945. Para complicar más las cosas, Perón fue forzado a renunciar a todos sus puestos en el gobierno por el general Eduardo Avalos y un grupo de oficiales descontentos con sus actividades (5 de octubre de 1945).

La noticia del arresto de Perón desorientó a sus partidarios, pero ya el 16 de octubre la Confederación General del Trabajo (CGT) exigía su libertad. Los colaboradores más fieles de Perón, encabezados por Eva Duarte, con quien poco tiempo después se casaría, movilizaron en pocas horas a decenas de miles de obreros del gran Buenos Aires y prácticamente se adueñaron de la capital, amenazando con incendiarla si el vicepresidente no era liberado.

La enorme multitud de los llamados *descamisados* o *cabecitas negras*, en alusión a su origen humilde y procedencia del interior mestizo, inundó la plaza frente a la Casa Rosada, sede del gobierno. Para

controlar al pueblo, el gobierno militar puso en libertad a Perón y le pidió que hablara a los manifestantes allí congregados y los aplacara.

La liberación de Perón fortaleció su candidatura a la presidencia, enarbolada por el recién creado Partido Laborista. Por su parte, los heterogéneos sectores de oposición, que aglutinaba organizaciones de izquierda y derecha, organizaron un frente político, la Unión Democrática, que postuló al médico José P. Tamborini, líder de una facción del debilitado partido Unión Cívica Radical.

El abierto respaldo de Spruille Braden a la propaganda de esta coalición, que enarboló la consigna antiperonista de *Tamborini o Hitler*, lanzada por el ahora secretario auxiliar de Estado norteamericano, hizo que pronto se popularizara la aguda respuesta del aspirante laborista: *Braden o Perón*. Unos comicios irreprochables, realizados en febrero de 1946, dieron la victoria al coronel Juan Domingo Perón con el 55% de los votos, virtual triunfador desde que fuera liberado de la prisión, haciendo abortar los planes de la alta oficialidad reaccionaria –en contubernio con Spruille Braden– dirigidos a sacarlo del escenario político.

Ya en el poder, el 9 de julio de 1946, en Tucumán, Perón emitió su célebre declaración de independencia económica, en la cual reclamaba el derecho del país a eliminar la tutela extranjera. En consonancia con ello, la deuda externa fue repatriada y, dos meses más tarde, se firmaba con la Gran Bretaña un acuerdo que establecía la continuación del abastecimiento de alimentos argentinos a Inglaterra, a cambio de que esta aceptara la prerrogativa del gobierno de Buenos Aires a adquirir las inversiones inglesas.

Luego, en octubre, se inició la ejecución del ambicioso primer plan quinquenal de desarrollo económico, y en diciembre el Estado se hizo cargo de ferrocarriles, hasta entonces propiedad del capital francés. En 1947 continuó la política peronista de reforzar la intervención estatal en las ramas básicas de la economía, y el 13 de febrero de ese año se firmó el contrato para nacionalizar, con las divisas bloqueadas en la Gran Bretaña por la crisis financiera de la posguerra, la gran red ferrocarrilera en poder de empresas británicas. A los norteamericanos, por su parte, se les compró la Unión Telefónica, mientras comenzaba el desarrollo de la flota mercante

nacional, que a fines del primer quinquenio ya poseía un millón 200 mil toneladas.

Mediante un fuerte apoyo crediticio estatal, el primer gobierno peronista estimuló en el ámbito interno la expansión industrial: uno de los objetivos principales de su política del capitalismo de estado. No obstante, este énfasis industrialista, realizado bajo fuerte protección impositiva y subsidios gubernamentales a la importación de insumos, tenía como contrapartida una modificación de los términos de intercambio interno en detrimento de los productos agropecuarios y una tendencia a la expansión meramente horizontal del sector industrial.

Lo primero significaba un descenso en la producción de alimentos, agravado por la rigidez de las estructuras agrarias; y lo segundo, la casi total dependencia del extranjero en la esfera del equipamiento fabril. A eso hay que sumar el estancamiento de la insuficiente producción petrolera, otro factor de presión sobre la capacidad de importar. Además, como el país obtenía casi todos sus ingresos de la comercialización de los cereales y las carnes, ambas circunstancias se reunieron para desestabilizar poco a poco su economía.

En 1949 se aprobó la carta magna que recogía los principios fundamentales del nuevo orden denominado justicialista: derecho al trabajo, a la salud, el bienestar, la protección de la familia y seguridad social, el mejoramiento económico y la defensa de los intereses profesionales. A la vez, el texto de la nueva constitución hablaba de la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica. Sus postulados de más largo alcance eran los que reservaban al Estado la explotación de las fuentes de energía, los minerales y los servicios públicos, y prohibía su enajenación o concesión a particulares, fueran nacionales o extranjeros.

Ante la inflación y el deterioro del nivel de vida que se registraba a principios de los cincuenta, el régimen peronista apeló a controles de los salarios y los precios, que solo en forma limitada protegían la economía de los sectores populares. En consecuencia, se activó la lucha de clases y el papel de la ideología en la conducción de las masas pasó a ocupar los primeros planos de la actualidad nacional.

Convocados los nuevos comicios presidenciales, Perón anunció en una gran concentración popular, el 1 de mayo de 1951, la

nacionalización del periódico oligárquico *La Prensa*, uno de los últimos órganos oposicionistas que aún se publicaban. Desde entonces, los sectores más reaccionarios del país arreciaron su actividad conspirativa, propiciando una sublevación militar rápidamente aplastada el 28 de septiembre de ese año.

El 11 de noviembre, todavía bajo el impacto del intento golpista de la reacción, se celebraron las elecciones presidenciales. Autorizado según la nueva constitución a reelegirse, Perón se presentó a los comicios junto al anciano Hortensio Quijano –fallecido en abril del siguiente año– como compañero de fórmula, defraudando las expectativas de los sectores más progresistas que esperaban la postulación de Eva Perón para la vicepresidencia. La candidatura opositora quedó integrada por Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, dirigentes ambos del llamado sector «intransigente» del radicalismo, facción que se había negado a incorporarse a la llamada Unión Democrática en 1945.

Consolidado el movimiento durante el sexenio anterior, la victoria justicialista fue ahora abrumadora. El peronismo acaparaba así todas las bancas en el Senado y 145 en la Cámara. El 4 de junio de 1952 Perón inició su segundo mandato y solo pocas semanas después, el 26 de julio, murió su popular esposa Evita.

Una serie de acontecimientos entre 1952 y 1955 demostrarían que el régimen argentino no había perdido aún sus ímpetus nacionalistas, a pesar de que las crecientes dificultades internas y la adversa situación internacional le hacían seguir una política cada día más errática y contradictoria. Fue una época de constantes virajes tácticos y búsqueda incesante de soluciones a la crisis económica.

Las posiciones progresistas del gobierno argentino en la arena internacional también se pusieron de manifiesto al resistir, en plena Guerra Fría, las exigencias norteamericanas de que el país enviara soldados a Corea y al negarse a sancionar los acuerdos contra Guatemala adoptados por la Conferencia Interamericana de Caracas (1954). Además, Perón firmó en 1955 un protocolo comercial complementario con la Unión Soviética (1955), que entre otras cosas permitió la celebración ese año en Buenos Aires de la primera exposición industrial de la URSS en el continente americano.

Estados Unidos, por su lado, utilizaba hábilmente la difícil situación –en 1952 el déficit comercial argentino se elevó a 3 mil 969 millones de pesos– para inclinar la balanza a su favor. En julio de 1953, Milton Eisenhower, hermano del presidente de Estados Unidos, visitó Buenos Aires y en agosto ya comenzaban las negociaciones con las compañías petroleras norteamericanas. Simultáneamente, el Congreso aprobaba una ley que favorecía el ingreso y la radicación de capitales extranjeros en la industria y la minería del país.

En este caso se le permitía a las empresas foráneas transferir hasta el 8% de las utilidades, libres de impuestos, y repatriar el capital en cuotas anuales a partir del décimo año de realizada la inversión. A fin de aliviar la dependencia casi total en materia energética –Argentina compraba anualmente más de 300 millones de dólares en petróleo a compañías inglesas–, se iniciaron conversaciones con la California Oil Company, para que se hiciera cargo de las labores de prospección.

En medio del aumento de la oposición interna y externa, se produjo el enfrentamiento entre Perón y la Iglesia, que actuó como verdadero detonante del conflicto ya visible entre las clases dominantes y el justicialismo. El clero se había ido distanciando de las autoridades al mismo ritmo en que la gran burguesía asumía una actitud beligerante frente al peronismo.

Traicionado por sus tácticas y evasivas, Perón le hizo el juego a las maniobras provocadoras, acusando a la Iglesia de inmiscuirse en los asuntos políticos y sindicales. Así, la ofensiva anticlerical que lanzó a fines de 1954, culminó al año siguiente con la abolición de las exenciones impositivas a las propiedades eclesiásticas, la institución del divorcio y la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Los oficiales derechistas de las fuerzas armadas, y en especial de la marina –tradicionalmente ligada a los círculos oligárquicos–, arreciaron de ahí en adelante su actividad conspirativa. Aprovechando el impacto de la excomunión de Perón, los militares complotados pasaron de las confabulaciones a los hechos: el 16 de junio de 1955 varios aviones bombardearon indiscriminadamente la zona donde se levanta la Casa Rosada, sede del gobierno.

Al mediodía, cuando miles de bonaerenses colmaban el centro de la ciudad, las aeronaves dejaron caer su carga homicida sobre la Plaza de Mayo y sus alrededores. El saldo definitivo no se conoce, pero se sabe que en las calles quedaron cientos de muertos y heridos.

En lugar de una acción enérgica contra los golpistas, Perón se limitó a suspender el abastecimiento de municiones a la marina de guerra, mientras algunos grupos progubernamentales se dedicaban a la quema de iglesias. La medida fue burlada por sus enemigos reabasteciéndose en las islas Malvinas, archipiélago ocupado ilegalmente por la Gran Bretaña desde hacía más de un siglo.

En definitiva, el 16 de septiembre de 1955, los militares opositores pusieron en marcha la sublevación que derrocó al régimen justicialista. Incapaz de actuar por encima de los intereses de la burguesía, el líder justicialista abandonó precipitadamente toda resistencia –las fuerzas leales obtenían ya los primeros éxitos contra los sublevados– y se marchó, tres días más tarde, a un largo exilio de 18 años. De forma sorpresiva y casi sin resistencia triunfaba la proclamada «revolución libertadora».

Tras el golpe de Estado fueron intervenidas todas las provincias, disuelto el parlamento y asaltados numerosos sindicatos por «comandos civiles revolucionarios», grupos de pistoleros armados por las autoridades y reclutados por elementos socialistas de derecha y viejos dirigentes amarillos, autotitulados «sindicalistas libres». La presencia de los tanques y la infantería en las calles dieron a las ciudades el aspecto de estar ocupadas por algún ejército invasor. El 24 de noviembre, un decreto proscribía al Partido Justicialista (peronista) y poco después comenzaba una verdadera depuración del aparato del Estado y el ejército.

La revolución boliviana de 1952

A contrapelo de la tendencia prevaleciente a principios de los cincuenta, en pleno apogeo de la Guerra Fría, cuando eran sofocados los gobiernos nacionalistas populistas de Perón en Argentina y

Vargas en Brasil y Estados Unidos derrocaba al gobierno revolucionario de Arbenz en Guatemala, se produjo el inesperado triunfo de una revolución popular en Bolivia el 9 de abril de 1952. En un proscenio adverso, caracterizado por el repliegue de las fuerzas progresistas y el dominio de la reacción, la revolución boliviana era un acontecimiento a contracorriente, resultado de una insólita insurrección de masas con amplia base obrera y campesino-indígena, capitalizada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).

Tras la caída del gobierno de Villarroel, en junio de 1946, se desató una fuerte represión contra los miembros del MNR, liderado por Víctor Paz Estenssoro, y los militares comprometidos con el mandatario ejecutado. Gran parte de estos hombres, buscaron asilo en embajadas extranjeras, igual que el propio Paz Estenssoro, que terminó exiliado en la Argentina. La mitad de las escuelas rurales creadas durante el mandato de Villarroel fueron clausuradas y asaltados los sindicatos obreros vinculados al MNR.

El 5 de enero de 1947 se celebraron elecciones presidenciales en las que la vieja oligarquía minera, la *rosca* o los *barones del estaño* como se les conocía indistintamente, impuso a sus candidatos Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagoitia, aunque el primero no tardó en renunciar a la primera magistratura ante el reinicio de las masacres obreras y para no aceptar la conversión de las minas en verdaderos campamentos militares (7 de mayo). Su sustituto, el vicepresidente Urriolagoitia, en cambio, se encargó de llenar de soldados los distritos mineros y de dar rienda suelta a la represión más brutal.

La violencia desatada contra los trabajadores contribuyó enseguida a elevar el prestigio del perseguido MNR. Coordinando sus acciones desde la Argentina, esta organización –junto con el Partido Obrero Revolucionario (POR)– se sublevó el 27 de agosto de 1949 y logró dominar las ciudades de Cochabamba, Potosí, Sucre, Vallegrande, Camiri y Santa Cruz. En esta última población, los insurrectos establecieron una junta de gobierno que se sostuvo durante veinte días. Al conservar en sus manos los centros neurálgicos del país –la capital y las minas–, el gobierno pudo aplastar a sus enemigos.

El 7 de octubre de 1950 elementos del MNR, del POR y del Partido de Izquierda Revolucionario (PIR), crearon en Santiago de

Chile una efímera Coalición de Organismos Sindicales y Partidos de Izquierda (COSPI). Su programa contemplaba la nacionalización de las minas, reforma agraria, el control estatal del comercio exterior y el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética (URSS) y otros países socialistas.

Pero la dirección anticomunista del MNR, capitaneada por Víctor Paz Estenssoro, rechazó el pacto. Algo más tarde, el PIR entró definitivamente en crisis. Un grupo de jóvenes descontentos con la trayectoria reformista de la organización, que se definía marxista, se separó de ella y fundó el Partido Comunista de Bolivia (PCB). Algunos de los más destacados representantes del PCB eran entonces Sergio Almaraz e Inti Peredo.

A las elecciones de 1951 se permitió asistir a todos los partidos, excepto al POR y al PCB. La derecha se presentó muy dividida, lo que aseguró el triunfo del candidato presidencial del MNR: Víctor Paz Estenssoro. Ante la derrota, Urriolagoitia se negó a reconocer los resultados, impidió el regreso del máximo líder del MNR al país, y entregó el poder a una junta militar derechista. Era el llamado *mamertazo*.

La junta militar nacida del *mamertazo* tropezó no solo con una firme oposición popular, sino con inesperadas dificultades a la hora de negociar la producción del estaño. Impotente para convencer a la Reconstruction Finance Corporation norteamericana, el gobierno se dividió, y uno de sus integrantes, el ministro de Gobierno, llegó a la conclusión de que la única salida era formar una junta cívico-militar con la participación del MNR.

Con esa finalidad se puso en contacto con el general Humberto Torres Ortiz, jefe del estado mayor, y con Hernán Siles Suazo, una de las principales figuras del MNR. Cuando parecía que aquel plan iba a naufragar, se inició la rebelión de los mineros encabezada por Juan Lechín. La iniciativa había pasado a manos del pueblo y eso cambió el curso de la lucha y en general de todos los acontecimientos.

Era el 9 de abril de 1952. Los carabineros se unieron a los obreros organizados en milicias armadas y entablaron combate con el ejército profesional. Los efectivos gubernamentales fueron barridos en Papel Pampa y San José de Oruco, mientras que en los

regimientos que avanzaban desde el sur eran paralizados y obligados a dispersarse. Después de tres días de encarnizadas batallas en la capital, el 11 de abril, el general Torres Ortiz tuvo que capitular en Laja, cerca de la Paz. Comenzaba la revolución boliviana.

El día 14 Víctor Paz Estenssoro arribó a Bolivia desde Argentina –en un avión piloteado por un joven oficial llamado René Barrientos–, y rodeado de obreros armados recibió de Hernán Siles, presidente provincial, los atributos del poder. Sin duda, esta victoria del MNR era fruto de su programa nacionalista, que le había conquistado una amplia base social, así como el respaldo del POR y el PCB.

La primera medida del nuevo gobierno fue la disolución del desprestigiado ejército. En su lugar se creó el Ejército de la Revolución Nacional, integrado en sus inicios con las milicias obreras y campesinas y los militares que habían prestado su apoyo al movimiento revolucionario. A continuación, se dictaron varias leyes de beneficio social, inspiradas en el justicialismo argentino, como un aumento salarial del 40% –con efecto retroactivo al primero de abril–, precios máximos para los productos de primera necesidad y la congelación de alquileres.

El triunfo popular prometió alcanzar la ansiada unidad sindical: se creó un solo sindicato por fábrica o mina, una sola federación por industria y una sola central obrera. Surgió así la Confederación Obrera de Bolivia (COB).

Con el ascenso del MNR, llegaba al poder un sector de la pequeña burguesía boliviana decidida a convertirse –aunque fuera a través del peculado y los negociados– en burguesía propiamente dicha. En realidad, los obreros y campesinos le habían entregado la dirección del Estado y ella respondería introduciendo una cuña entre los trabajadores de la industria y la agricultura. La presencia de tres ministros de extracción obrera en el gabinete –Minas, Obreras Públicas y Trabajo– y la ficción del «cogobierno», creaban la ilusión al proletariado que habían alcanzado el poder.

Siguiendo todavía la línea ascendente, en los primeros meses de la revolución, el MNR estableció relaciones diplomáticas con Checoslovaquia y Hungría, aun cuando no se atrevió a formalizarlas

con la URSS. Presionado por los dirigentes y ministros obreros, el 13 de mayo de 1952 el MNR tuvo que poner en marcha sus anunciados proyectos antiimperialistas.

En esa fecha, Paz Estenssoro aprobó un decreto creando una comisión que debía estudiar la futura nacionalización de las minas. El 21 de julio derogó el sistema oligárquico de «voto calificado», estableció el sufragio universal y otras transformaciones jurídicas, incluida más tarde una completa reforma educativa (1955) que extendió la escolarización en castellano a todo el mundo rural y que tendría entre sus objetivos la exaltación de una identidad nacional mestiza.

La tremenda fuerza del movimiento obrero hizo que el proceso de nacionalización de la gran minería se acelerara. El 2 de junio de 1952 fue decretado el monopolio estatal sobre la exportación de minerales y el 2 de octubre se fundó la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL). Encargado de administrar la minería fiscal, el directorio de la COMIBOL quedó constituido por siete miembros seleccionados por el presidente de la República; aunque dos de ellos debían ser escogidos de una lista preparada por los sindicatos mineros.

El 31 de octubre, tras unos días de intervención, las principales empresas mineras fueron expropiadas. Así pasaron al ente estatal COMIBOL 16 grandes firmas, pertenecientes en su mayoría a los *barones del estaño*. En ellas el capital norteamericano tenía una participación de un 30%. Las restantes explotaciones mineras quedaron en manos privadas: eran unas 36 calificadas de medianas, y 500 de chicas, que producían el 20% del estaño boliviano.

Pese a que Paz Estenssoro firmó pomposamente la llamada *Acta de la Independencia Económica*, el país siguió dependiendo de las fundiciones de estaño que Patiño poseía en Inglaterra –la William Harvey–, o de la Wah Chang de Texas, Estados Unidos. La única excepción era una pequeña planta instalada en Oruro desde fines de los años treinta. En esas condiciones, los consorcios imperialistas lograron imponerle a la COMIBOL las cuotas y precios de exportación vigentes en los mercados internacionales.

En un momento cuando bajaban las cotizaciones del estaño, debido al fin de la guerra de Corea y a los rejuegos de Estados Unidos

con sus reservas estratégicas, el agotamiento de los viejos filones, la paralización de los trabajos de prospección, el debilitamiento de la disciplina laboral y la no renovación de la maquinaria, hicieron el resto. En 1958, el valor de las exportaciones de estaño boliviano había descendido a la mitad de lo que era en 1952,

Si la verdadera paternidad de la nacionalización minera no puede atribuirse al MNR, mucho menos lo fue en el caso de la reforma agraria. En cuanto cayó la junta militar, en abril de 1952, comenzaron a organizarse –fundamentalmente en las zonas rurales del altiplano– los primeros sindicatos y milicias campesinas, bajo la dirección de activistas obreros.

Los dirigentes sindicales mineros y urbanos salieron a los campos lanzando la consigna de la tierra a quien la trabaja, e incitando a los campesinos a ocupar las grandes propiedades territoriales. En los valles y zonas altas de Cochabamba, regiones densamente pobladas, el proceso alcanzó su mayor velocidad.

El sindicato indígena de Ucureña exigió ya el 9 de noviembre de 1952 la devolución de las parcelas que la organización adquiriera años atrás y que los terratenientes le habían usurpado. La negativa de los grandes propietarios acrecentó la agitación de los campesinos y estos se lanzaron a la ocupación armada de las haciendas, amenazando además con entrar a las ciudades y arrasar con los bienes de los privilegiados. Por sus proporciones, este movimiento se hizo incontrolable en las provincias de Cliza, Puñata y Tarata.

Desbordado por los acontecimientos, el MNR tuvo que el 20 de enero de 1953 una comisión para estudiar un proyecto de distribución de tierras. Unos meses más tarde, el 2 de agosto, fue firmada la ley de reforma agraria, en un acto celebrado en la propia población de Ucureña. Con su presencia, Paz Estenssoro se las arregló para aparecer ante las masas desposeídas como su auténtico redentor.

La ley agraria boliviana procuró crear una masa de pequeños propietarios, afectando solo una parte de las grandes haciendas, en lo fundamental aquellas donde sus dueños no hubieran invertido capital. Las entregas de tierras se realizaron en los primeros años, pero el proceso de titulación se eternizó, al ser diferido por los mecanismos burocráticos del Estado. Los datos oficiales de 1962 indican que

hasta esa fecha, aproximadamente 85 mil familias habían recibido dos millones novecientos noventa mil hectáreas, esto es, unos 500 mil campesinos, o sea, la quinta parte de la población rural boliviana.

Estas cifras no bastan para imaginar lo que sucedió con la reforma agraria. El campesino, antes explotado en un verdadero régimen de servidumbre, se vio convertido de pronto en propietario de una pequeña parcela –2.5 hectáreas en las regiones más pobladas–, sin semillas ni créditos, produciendo apenas lo imprescindible para su sustento. Por añadidura, hasta 1962 los campesinos beneficiados por la reforma agraria debían pagar el 2% anual del valor de su minúsculo patrimonio como indemnización al antiguo propietario.

Excluidos prácticamente del mercado, muchos de los antiguos *pejugaleros*, *agregados*, *arrimantes*, y otros peones rurales, tuvieron que contentarse con una economía de subsistencia, lo que agravó el problema de los suministros de alimentos a las ciudades. Por ello, aunque la ley otorgó al indio su condición de ciudadano, no contribuyó a elevar en forma real su nivel de vida.

Sin duda, la ley de reforma agraria ayudó a aliviar las tensiones sociales en el campo y permitió la aparición en 1954 de la Confederación Nacional de los Trabajadores Campesinos de Bolivia (CNTCB), pero no pudo transformar las arcaicas estructuras del agro boliviano. A una parte de los campesinos que no habían obtenido tierras, el MNR le ofreció parcelas o trabajo en el despoblado oriente.

Para comprender la actitud de Estados Unidos hacia la revolución boliviana debe recordarse que en aquellos momentos el gobierno norteamericano confrontaba agudos problemas con la Guatemala de Arbenz. En la tierra del quetzal la reforma agraria, pese a que solo confiscaba las tierras incultas, hería directamente los intereses de un influyente monopolio norteamericano: la United Fruit Company.

En Bolivia, en cambio, los consorcios estadounidenses apenas habían sido afectados, debido a su participación minoritaria en la explotación del estaño y a las abundantes reservas estratégicas del gobierno federal. Además, el MNR se había comprometido a indemnizar «adecuadamente» a los antiguos accionistas de la gran minería y en el sector agrícola no existían propiedades de capitalistas norteamericanos.

Para justificar sus concesiones a los monopolios extranjeros, los dirigentes bolivianos adoptaron el lema: «Nos mantenemos firmes aquí para ceder allá, esto es más importante que aquello.»[5] Y poco a poco fueron cediendo en todo. La visita de Milton Eisenhower permitió a la COMIBOL iniciar la venta de sus producciones a los Estados Unidos.

El 6 de noviembre de 1953 se firmó en Washington un Convenio de Asistencia Económica que hizo llegar al país, desde fines de ese propio año, las primeras remesas de la «ayuda» norteamericana. En reciprocidad, el MNR abandonó por completo la política petrolera nacionalista nacida al calor de la desastrosa Guerra del Chaco. En 1953 se entregó la primera concesión a la Glenn Mc Carthy, rompiendo tácitamente el monopolio estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Las puertas se abrieron aún más el 26 de octubre de 1955, cuando fue aprobado el Código Davenport, que derogó la ley del 20 de junio de 1921 y dividió el país en tres zonas receptivas al capital extranjero, reservando solo un área para YPFB. El 23 de mayo de 1956, se otorgaron las concesiones a la Gulf Oil Corporation bajo el amparo del nuevo código. Luego siguieron las de la White Eagle, Royal Dutch e Internacional Oil Corporation.

A corto plazo, esta política económica, que entregaba el petróleo a firmas extranjeras, no promovía el desarrollo de un mercado interno y debilitaba a los pequeños productores mineros, daría por resultado el surgimiento de una élite corrupta, adherida a los nuevos organismos estatales e instituciones burocráticas: COMIBOL, YPFB, Corporación de Fomento, ministerios, Empresa Nacional de Ferrocarriles, etc. Actuando como grupo social privilegiado, estos nuevos burgueses se enriquecieron en forma rápida a la sombra de los recursos del país y los créditos norteamericanos. El control de este sector parasitario sobre el MNR fue una de las causas de la liquidación del «cogobierno» y del paso de la central obrera a la oposición.

En las elecciones del 17 de junio de 1956 ya se manifestó el predominio de la *nueva rosca* sobre los mecanismos partidarios del

[5] Sergio Almaraz, *Bolivia, réquiem para una República*, Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1960, p. 41.

MNR. En ella, la dirigencia derechista del movimiento logró imponer a su candidato: Hernán Siles Suazo, quien triunfó sin dificultades contra su oponente Oscar Unzaga de la Falange Socialista Bolivariana (FSB), agrupación defensora del antiguo régimen. Para seguir recibiendo los beneficios de la «ayuda americana», Estados Unidos impuso una nueva condición a los continuadores de la revolución de 1952: el plan de estabilización monetaria elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En virtud de este proyecto, en vigor desde el 15 de diciembre de 1956, Bolivia implantó una especie de neoliberalismo económico que facilitaba la penetración del capital extranjero y aumentaba sus posibilidades de lucro. Devaluada la moneda nacional, fue establecido un tipo único de cambio, se cancelaron los controles estatales del comercio exterior, se suspendieron los subsidios gubernamentales a las empresas privadas, se restringió el crédito y los sueldos de los trabajadores quedaron congelados. El salario real de los obreros descendió vertiginosamente, al mismo ritmo que crecía su penuria.

Además, durante el período del gobierno de Siles Suazo, de 1956 a1960, se llegó al extremo de que el presupuesto estatal dependiera hasta en un 40% de los subsidios del Punto IV del gobierno de Estados Unidos. Hasta 1962, la república del altiplano recibió subsidios por 200 millones de dólares –aplicados en su mayor parte al pago de las llamadas «misiones técnicas»– y ciertas cantidades de los excedentes agrícolas norteamericanos. Esto último, paralizó la industria harinera boliviana, capaz de abastecer el mercado nacional en un 80% en 1953, y que vio reducida su participación a un 8% en 1962.

Al mismo tiempo, el país fue invadido por un enjambre de «asesores» norteamericanos que se introdujo en todos los organismos y empresas del Estado. A la vez, se estructuraba y fortalecía el nuevo ejército profesional. En tales circunstancias, el MNR trató de desviar los nuevos conflictos sociales incitando choques entre las milicias obreras y los campesinos.

En el mes de marzo de 1959 ocurrieron los primeros movimientos huelguísticos de envergadura. Grandes manifestaciones obreras –en La Paz, Cochabamba y Oruro– conmovieron al país, mientras el MNR sufría su primera división orgánica. El ala derecha del partido,

representante de la burguesía importadora y burocrática, contraria a una nueva postulación de Paz Estenssoro, había organizado el llamado Movimiento Nacionalista Revolucionario Auténtico (MNRA). Pero su líder. Walter Guevara, no pudo impedir la victoria de la candidatura combinada Estenssoro-Lechín en las elecciones de 1960, pese al respaldo de los sectores reaccionarios y de Estados Unidos.

El triunfo de la candidatura MNR-COB, apoyada por el Partido Comunista, no varió el curso entreguista seguido por la dirigencia del MNR desde 1953. Ello hizo que el movimiento perdiera el apoyo de los mineros y determinó la creación en 1963 del Partido Revolucionario de Izquierda Nacional (PRIN) por Juan Lechín.

Fue en su segundo período, cuando Estenssoro rechazó la oferta soviética para que el país se liberara de su dependencia del *trust* internacional del estaño; y cuando el gobierno boliviano rompió abiertamente con la revolución cubana. En pago, Bolivia fue incluida en los planes de la *Alianza para el Progreso*.

Sus continuos fracasos, y el deseo de conservar a toda costa el respaldo norteamericano, llevaron a Paz Estenssoro a desatar la represión contra las masas trabajadoras. Así llegó su gobierno a 1964, fecha de elecciones, atacado por la derecha y sin el apoyo de la izquierda. En medio de las huelgas de los maestros, los mineros, y las protestas estudiantiles, el presidente boliviano se dispuso a luchar por su reelección, pues la nueva constitución de 1961 se lo permitía.

La beligerante actitud de Lechín –influida por la desesperada situación de los mineros y la frustración de sus aspiraciones presidenciales–, más los signos de descontento que se detectaban en el ejército, hizo que Paz Estenssoro escogiera como compañero de fórmula a su antiguo piloto, el ahora general René Barrientos. A pesar de la fuerte oposición, Estenssoro fue reelecto el 31 de mayo de 1964 por los votos mayoritarios de los medios rurales todavía bajo su influencia.

De junio a noviembre, fecha esta última en que se produjo la caída de Paz Estenssoro, la situación del gobierno se tornó insostenible. La doble ofensiva dirigida por la derecha –agrupada en la Falange Socialista Boliviana (FSB)–, muy poderosa en Cochabamba y Santa Cruz, y por la izquierda, con centro en el distrito minero de

Oruro, más las acciones de las organizaciones estudiantiles, presagiaban un rápido fin para lo que quedaba del MNR.

En un último intento por controlar la oposición, Paz Estenssoro decretó el estado de sitio (octubre) y movilizó a las milicias campesinas adictas, contra los mineros y los estudiantes; acusó a los comunistas de ser responsables de los disturbios y rompió relaciones diplomáticas con Checoslovaquia. En ese momento, el vicepresidente Barrientos se retiró a la ciudad de Cochabamba e inició desde allí una hábil maniobra contra el jefe de Estado: anunció la formación de un llamado Comité Revolucionario, se solidarizó demagógicamente con los insurgentes y declaró que continuaría la lucha con los alzados.

Pronto se le sumaron la mayoría de las guarniciones del ejército y el general Alfredo Ovando Candia, quien al principio había asumido la posición de árbitro, terminó poniéndose a su lado y obligando a Víctor Paz Estenssoro a dimitir. El 6 de noviembre de 1964, una junta militar presidida por Barrientos se instaló en el gobierno, inaugurando una nueva etapa de opresión y terror en la historia de Bolivia y poniendo punto final a una revolución que hacía mucho rato había muerto.

El colapso final de la ya inexistente revolución boliviana tenía lugar cuando casi simultáneamente se estaba produciendo el nacimiento de la revolución cubana. El triunfo rebelde en la Mayor de las Antillas creó una situación revolucionaria sin precedentes en América Latina, poniendo en crisis la dominación casi absoluta que Estados Unidos había impuesto en el continente americano.

Capítulo 12
LA REVOLUCIÓN CUBANA Y SU IMPACTO CONTINENTAL

La hegemonía imperialista norteamericana, consolidada en América Latina a principios de los años cincuenta mediante dictaduras militares y gobiernos entreguistas, fue alterada en forma radical desde el primero de enero de 1959 con la inesperada victoria de la revolución cubana. Los cambios generados desde entonces dieron lugar a una nueva etapa en la historia del continente, caracterizada por el avance del movimiento de liberación nacional y los desafíos a la dominación de Estados Unidos.

Sin duda el fin de la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba fue el punto culminante de una fase de triunfos democráticos y revolucionarios que de alguna manera se venían atisbando en los países latinoamericanos desde fines de esa misma década. Como resultado de estallidos populares y democráticos, poco antes del triunfo de la revolución cubana habían sido derrocados los regímenes tiránicos enquistados en el poder en Perú, Haití, Colombia y Venezuela.

Momentos señalados de ese proceso de apertura democrática se registraron con el derrocamiento de las aborrecidas dictaduras de Manuel Odría en Perú (junio de 1956), Paul Magloire en Haití (diciembre de 1956), Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (mayo de 1957) y Marcos Pérez Jiménez en Venezuela (enero de 1958) –en esta relación puede incluirse el asesinato de Anastasio Somoza García en 1957, aunque no logró sacar del poder a sus herederos–, como resultado de motines, protestas populares, conspiraciones militares

y huelgas dirigidas, por regla general, por partidos tradicionales o movimientos reformistas. También debe agregarse el golpe militar que en octubre de 1956 derrocó en Honduras al odiado régimen de Julio Lozano Díaz, virtual dictador del país.

En otras partes hubo otros cambios que pueden inscribirse en esta misma dirección, pues llevaron consigo el ascenso de gobiernos de orientación liberal que restablecieron ciertas garantías ciudadanas, tal como ocurrió en Chile cuando el presidente Carlos Ibáñez, que gobernó de 1952 a 1958, en más de un sentido influido por el peronismo en este su segundo gobierno, derogó la «ley de defensa permanente de la democracia», legalizó al Partido Comunista, permitió la reconstitución de sindicatos e instauró reformas democráticas en el sistema electoral. En Argentina ocurrió el triunfo, en los comicios presidenciales de febrero de 1958, de Arturo Frondizi, gracias a la masiva votación en su favor del proscrito movimiento peronista.

La revolución de Fidel Castro

Los orígenes de la revolución cubana tienen que ver con el regreso al poder mediante un golpe militar de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952. El jefe castrense que dominaba la política de la isla desde mediados de los años treinta, después de las elecciones de 1944, había sido obligado a permanecer fuera del país, en el cómodo retiro de su amplia mansión de Daytona Beach en La Florida, durante los cuatro años del gobierno de Ramón Grau San Martín.

Pero su sucesor en la presidencia desde octubre de 1948, Carlos Prío Socarrás, autorizó lo que no había permitido su antecesor, el regreso a Cuba del recién electo senador Batista. Una vez instalado en su lujosa finca Kukine, en las afueras de La Habana, Batista se las arregló para reorganizar a sus partidarios con el propósito de recuperar el poder.

La imposibilidad de conseguirlo por la vía electoral en los comicios de 1952 –las encuestas lo ubicaban en tercer lugar–, hizo que aprovechara el malestar existente por el débil y corrupto gobierno

de Prío para dar un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, valiéndose de la inmensa influencia que conservaba en el ejército.

La asonada militar interrumpió el proceso electoral cuando apenas faltaban tres meses para los comicios presidenciales. Además de suspender la carta magna de 1940, que sustituyó por unos estatutos constitucionales elaborados a su conveniencia, disolvió el parlamento, destituyó las autoridades electivas provinciales y municipales que no se sometieron al mando castrense, pospuso las elecciones señaladas para el 1 de junio de 1952 y aumentó en más de una cuarta parte el sueldo de todas las fuerzas armadas, incluidos los soldados.

La llegada al poder de Batista significó un control estatal aún más férreo y antipopular, abriendo una etapa de terror, autoritarismo y entrega sin límites a los intereses norteamericanos. El establecimiento de un régimen de esta naturaleza en Cuba estaba no solo relacionado con las ambiciones de una inescrupulosa camarilla militar vinculada a Estados Unidos, sino también al clima *macarthista* y de Guerra Fría que entonces imperaba a escala internacional.

En esas condiciones solo quedaba la alternativa de la lucha armada para derrocar la aborrecida dictadura e impulsar una solución radical a los grandes problemas de la sociedad cubana. Un abogado de 26 años, Fidel Castro, fue el encargado de organizar la insurrección popular. Con un nutrido grupo de jóvenes, casi todos de origen humilde, entrenados clandestinamente, atacó el 26 de julio de 1953 los cuarteles militares de Bayamo y Santiago de Cuba, esta última considerada la segunda fortaleza militar de la isla.

Sorprendidos al intentar penetrar en el Cuartel Moncada, el centenar de hombres guiado personalmente por Fidel Castro debió replegarse, con solo una pequeña parte de esta fuerza, hacia las estribaciones de la Sierra Maestra. Cincuenta asaltantes que fueron capturados, o que se entregaron después del ataque, resultaron salvajemente asesinados por el ejército. La presión de la opinión pública y la oportuna movilización de la prensa y las autoridades eclesiásticas salvó la vida del resto de los revolucionarios, entre los cuales se encontraba el propio Fidel y su hermano Raúl Castro.

Condenado a quince años de cárcel, Fidel Castro dio a conocer desde la prisión su famoso alegato de defensa titulado *La historia me*

absolverá, convertido desde ese momento en el programa de la revolución en ciernes. Dos años después, debido a una amnistía general dictada por el gobierno de Batista para tratar de enmascarar una farsa electoral que convalidó su mandato, Fidel Castro salió de la cárcel y se vio obligado a marchar al exilio en México. Allí organizó a los sobrevivientes del Moncada y a nuevos partidarios en el Movimiento 26 de Julio (M-26-7).

A los pocos meses, el 25 de noviembre de 1956, el yate *Granma* salió de Tuxpan con 82 hombres decididos a reanudar la lucha contra la dictadura batistiana y cuyo arribo a la isla debía coincidir con la sublevación de la ciudad de Santiago de Cuba organizada por Frank País. Esta rebelión se produjo el 30 de noviembre, lamentablemente dos días antes del desembarco del *Granma*.

La falta de sincronía y la persecución gubernamental facilitó la dispersión de los expedicionarios en Alegría de Pío, por lo que solo un puñado de ellos, encabezados por Fidel Castro, pudo alcanzar la Sierra Maestra. A pesar de los duros reveses y la exigua tropa, con la ayuda campesina y la incorporación de nuevos combatientes, la guerrilla poco a poco se consolidó. Como prueba de ello, el 28 de mayo de 1957, el Ejército Rebelde se anotó un triunfo significativo en el combate del Uvero, mientras en las áreas liberadas de la Sierra Maestra se organizaba una sólida base logística que incluiría en poco tiempo hasta una emisora de radio.

En forma casi paralela, otro movimiento armado opositor, el Directorio Revolucionario, integrado fundamentalmente por jóvenes estudiantes, fracasó al intentar ejecutar a Batista y ocupar el Palacio Presidencial en La Habana el 13 de marzo de 1957, acción en la que murió su jefe, José Antonio Echeverría, también presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU). Más adelante, el Directorio Revolucionario 13 de Marzo (DR 13 M), dirigido ahora por Faure Chomón, fundó su propio frente guerrillero en el centro de la isla (Sierra del Escambray), mientras otras organizaciones como el Partido Socialista Popular (comunista), también se incorporaban a la lucha frontal contra la dictadura batistiana.

En la Sierra Maestra, después de la derrota de la ofensiva militar de la tiranía en la primavera de 1958 –desencadenada tras el fracaso

de la huelga del 9 de abril de ese año–, el Ejército Rebelde decidió invadir el resto de la isla. En cierta forma, ese proceso descentralizador de las fuerzas guerrilleras se había iniciado desde meses atrás cuando la columna guiada por Raúl Castro se estableció en las zonas montañosas del norte de la provincia de oriente.

La columna comandada por Camilo Cienfuegos abandonó la Sierra Maestra con la intención de llegar al extremo occidental del país, mientras otro destacamento similar, a las órdenes del argentino Ernesto, *Che*, Guevara, se dirigía a las elevaciones del Escambray. Estas dos vanguardias del Ejército Rebelde, tras recorrer pantanos y llanuras sorteando el hostigamiento enemigo, alcanzaron el centro de la isla a fines de 1958.

El punto culminante de la ofensiva revolucionaria se consiguió con la liberación de la ciudad de Santa Clara, capital de la provincia central, por la columna del Che Guevara, así como por el sitio de Santiago de Cuba y Guantánamo establecido por las fuerzas de Fidel y Raúl Castro, respectivamente. Estos acontecimientos precipitaron la huida de Batista el primero de enero de 1959. En esas circunstancias, los planes fraguados por el alto mando militar, en contubernio con la embajada norteamericana en La Habana, para impedir el triunfo absoluto de las fuerzas revolucionarias, se esfumaron ante la paralización total del país por una huelga general convocada por Fidel Castro.

En los primeros días de enero de 1959, tras el triunfo de la revolución, se constituyó un *Gobierno Revolucionario* presidido en un inicio por el magistrado Manuel Urrutia y en el cual Fidel Castro ocupó desde el 13 de febrero el cargo de primer ministro. En la alborada de la revolución en el poder, en medio de un extraordinario entusiasmo popular, fueron disueltos los órganos estatales y militares de la dictadura, juzgados los criminales de guerra y adoptadas un conjunto de medidas de amplio beneficio social.

Entre estas disposiciones pueden mencionarse la rebaja de un 50% de las rentas de viviendas, la apertura al pueblo de las playas exclusivas, expropiación de los bienes malversados por los funcionarios corruptos de anteriores gobiernos –que incluían fábricas de azúcar, hoteles, empresas de transportes, diarios, fincas y otros bienes de

Batista y su camarilla, rebajas de las tarifas telefónicas –intervenida incluso la llamada Cuban Telephone Company–, junto a la disminución en un 30% de los precios en los libros de textos escolares. Además, se impulsó el consumo de productos nacionales, la construcción de viviendas populares, la creación de nuevos empleos, y se mejoró sensiblemente la salud pública y la educación, mientras muchos cuarteles del ejército batistiano fueron convertidos en escuelas públicas, incluidos los dos más grandes: Columbia en La Habana y el cuartel Moncada en Santiago de Cuba.

Sin duda, la medida más trascendente de esos primeros meses de la revolución en el poder fue la reforma agraria, dictada el 17 de mayo 1959, que benefició a cientos de miles de familias campesinas y fijó un máximo de 402 hectáreas en la posesión de la tierra. La promulgación de esta ley desencadenó las contradicciones clasistas en la sociedad cubana y aumentó el entonces naciente enfrentamiento con el gobierno de los Estados Unidos, deslindando en el plano interno los campos entre partidarios y enemigos de la radicalización de la revolución.

En consecuencia, durante los meses de junio y julio de ese mismo año se produjo la renuncia del presidente Urrutia –sustituido por Osvaldo Dorticós– y varios de sus ministros, casi al mismo tiempo que se producían otras defecciones en distintas esferas gubernamentales, proceso que se completó en marzo de 1960 con la salida del gabinete de las últimas figuras opuestas al derrotero radical que tomaba la revolución.

Como parte de ese mismo proceso de definiciones, la política de Estados Unidos hacia Cuba pasó con celeridad de sus intentos de desviar el curso de las transformaciones a una agresión frontal y despiadada. A partir de ese momento se desataron, con la abierta complicidad de la burguesía, los terratenientes y otros sectores nacionales adinerados, toda una serie de actividades subversivas promovidas por la descarnada ayuda norteamericana.

En marzo de 1960 explotó en el puerto de La Habana el vapor *La Coubre*, con un saldo de setenta muertos y más de un centenar de heridos, mientras la Casa Blanca daba la orden de entrenar en la América Central un ejército de exiliados cubanos para invadir la isla. Los sabotajes a la industria azucarera y otros sectores claves de la

economía, el alzamiento de bandas armadas contrarrevolucionarias y los atentados terroristas se volvieron fenómenos cotidianos, a la vez que Estados Unidos se encaminaba a desestabilizar el *Gobierno Revolucionario* por diferentes vías, entre ellas la amenaza de cortar el suministro de combustible con el fin de paralizar el país.

La negativa de las refinerías extranjeras establecidas en la isla (Esso, Texaco y Shell) a procesar petróleo soviético, adquirido por Cuba para evitar esa posibilidad, tras la firma del primer convenio comercial con la Unión Soviética el 13 de febrero de 1960, condujo al *Gobierno Revolucionario* a expropiar esos consorcios. En represalia, Estados Unidos suprimió el 2 de julio la totalidad de la cuota azucarera cubana, con el propósito de arruinar al país al dejarlo sin su principal mercado.

La respuesta cubana fue entonces la nacionalización, entre agosto y octubre de 1960, de los principales intereses norteamericanos: bancos, grandes fábricas, minas, empresas de teléfonos, electricidad, ferrocarriles y otras muchas compañías. Estas medidas se complementaron, el 13 de octubre de ese mismo año, con la expropiación de otros grandes consorcios extranjeros y de los principales bienes de la burguesía cubana, situada ya abiertamente al lado de la contrarrevolución y de los Estados Unidos. Estas disposiciones pusieron en manos del Estado cubano a todas las empresas nacionales y foráneas con más de veinte y cinco trabajadores.

El acoso norteamericano a la revolución se complementó entonces con el bloqueo a Cuba, establecido el 19 de octubre de 1960, lo que fue respondido por el *Gobierno Revolucionario*, una semana después, con la nacionalización de otras ciento sesenta y seis compañías norteamericanas, lo que liquidó virtualmente todos los intereses de Estados Unidos en la isla. El 3 de enero del año siguiente, Estados Unidos rompió sus relaciones diplomáticas con Cuba y tres meses después despachó desde Nicaragua una expedición militar, integrada en su totalidad por contrarrevolucionarios cubanos exiliados, organizada por su propia Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Guatemala.

La invasión militar que desembarcó por Playa Girón, en la bahía de Cochinos, al centro sur de la isla, el 17 de abril de 1961, fue

derrotada en menos de setenta y dos horas por las milicias obreras y campesinas que habían comenzado a organizarse desde fines de octubre de 1959. Esta primera fase del proceso revolucionario cubano, concluyó con la proclamación por Fidel Castro, en vísperas del ataque enemigo en Playa Girón el 16 de abril de 1961, del carácter socialista de la revolución.

Durante los años siguientes, el *Gobierno Revolucionario* se dio a la compleja tarea de organizar un estado socialista y defenderlo, pues continuaron las agresiones externas y los alzamientos armados promovidos por Estados Unidos. En medio de esas tensiones, tuvo lugar en octubre de 1962 la crisis internacional nuclear más grande en la historia mundial, resuelta con la retirada unilateral de los misiles soviéticos desplegados en Cuba y la promesa verbal norteamericana de no intervenir en la isla.

Durante los años sesenta, la construcción de una nueva sociedad continuó adelante con la expropiación de la totalidad de la industria, de la propiedad inmobiliaria y de la enseñanza y mediante una segunda ley de reforma agraria (3 de octubre de 1963) que redujo a 67 hectáreas las extensiones máximas de tierras en manos privadas. De este modo, fueron echadas las bases para el desarrollo de la economía socialista, al ponerse en manos del estado los recursos necesarios para una elevación sustancial del nivel de vida de la población.

Gracias a ello, fue posible eliminar en muy poco tiempo el desempleo, los barrios marginales, la mendicidad, la discriminación racial, la prostitución, el vicio, liquidar el analfabetismo y establecer la educación y la asistencia médica gratuitas, la universalización del deporte y la cultura, así como una dieta balanceada y equitativa para todos los cubanos. Hitos en el proceso de institucionalización de la revolución fue la creación del Comité Central del Partido Comunista en 1965 –donde se completó la integración de las organizaciones que habían luchado contra la dictadura de Batista–, la celebración de su primer congreso diez años después y la aprobación en referéndum de una constitución socialista (1976), con la posterior elección de representantes a los gobiernos municipal, provincial y nacional.

Repercusión de la revolución cubana

El triunfo de la revolución en Cuba, constituyó un viraje decisivo en la historia de América Latina. El profundo alcance social de la revolución cubana le permitió sobrepasar de manera vertiginosa –en medio del permanente acoso norteamericano– las metas antidictatoriales, democráticas y antimperialistas –junto a la plena recuperación de la soberanía nacional– para erradicar de raíz la explotación del hombre por el hombre y construir una sociedad más justa.

De esta manera, la revolución cubana transitó en forma muy breve del período democrático-popular, agrario y antimperialista al socialista, en pleno corazón del continente y a solo noventa millas de la potencia más poderosa del planeta. En buena medida, la consolidación de la revolución de Fidel Castro fue posible no solo por la valentía del pueblo cubano, sino también por el cambio ocurrido en la correlación internacional de fuerzas que, desde la segunda mitad de los años cincuenta, tuvo lugar con el fortalecimiento de la URSS y el campo socialista, el incremento de las luchas anticolonialistas en Asia y África, así como por el aumento de las contradicciones entre los países capitalistas desarrollados.

Esta nueva fase de la historia latinoamericana iniciada en 1959 se manifestó mediante una sucesión de explosiones de masas que abatieron dictaduras y gobiernos reaccionarios, propiciando en muchos lugares un retorno a la «democracia representativa». En varios países los trabajadores urbanos aprovecharon la liberación del régimen político para reconstruir sus sindicatos, en una situación análoga a la de 1944. Todos estos fenómenos coincidieron con el fracaso de la Guerra Fría y de la estrategia dirigida al aislamiento de la URSS y los demás países socialistas, así como la quiebra de la política de chantaje atómico practicada por Estados Unidos.

El derrocamiento de Batista por un movimiento revolucionario armado fue imitado de inmediato con el propósito de abatir odiadas dictaduras, como las de Somoza en Nicaragua, Trujillo en República Dominicana o Stroessner en Paraguay.

Los integrantes de un grupo opositor conservador que habían formado un Directorio Revolucionario, encabezado por Pedro

Joaquín Chamorro y Adán Selva Ramírez, entraron a fines de mayo de 1959 en Nicaragua desde Costa Rica.

La inefectiva operación armada de Olama y Mojellones fue aplastada por los efectivos gubernamentales somocistas. Otro grupo más radical –integrado por socialistas y liberales independientes–, encabezado por Rafael Somarriba, que había formado en La Habana un Comité para la Liberación de Nicaragua, también penetró en el país desde Honduras el 24 de junio de ese mismo año.

Estos combatientes, agrupados en la «Brigada 21 de septiembre Rigoberto López Pérez» fueron aplastados en El Chaparral y entre los caídos estaba el comandante cubano Onelio Hernández. Entre los pocos sobrevivientes figuraba el joven estudiante Carlos Fonseca Amador, futuro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Casi a la par de los acontecimientos nicaragüenses, se produjo el desembarco en Constanza (República Dominicana), el 14 de junio de 1959, de una expedición antitrujillista, y el día 20 otras por las playas de Maimón y Estero Hondo, dirigidas por el Movimiento de Liberación Dominicana (MLD). El grupo revolucionario, integrado por exiliados dominicanos y combatientes de otros países, había salido de Cuba bajo el comando de Enrique Jiménez Moya. Pero los 180 combatientes fueron masacrados por los efectivos del dictador Trujillo y solo unos pocos lograron sobrevivir a la brutal represión, entre ellos el comandante cubano Delio Gómez Ochoa.

Aunque todas estas tentativas de derrocar a la dictadura trujillista fueron derrotadas, provocaron una conmoción nacional e impulsaron la organización de grupos clandestinos, como el vertebrado por Manuel A. Tavárez Justo y su esposa, Minerva Mirabal, en 1960 (Movimiento Revolucionario 14 de Junio). El notable crecimiento del descontento y de las actividades revolucionarias en su contra, obligaron a Trujillo a desatar una brutal represión –como el asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, el 25 de noviembre de 1960–, que fue alejando del gobierno a la propia Iglesia católica, así como a numerosos sectores de la burguesía y las capas medias.

Los propios Estados Unidos, que temían la repetición de la revolución cubana, pasaron de presionar a Trujillo para que hiciera

concesiones democráticas a tomar medidas drásticas contra su régimen. El gobierno norteamericano suspendió la venta de armas y consiguió que la propia OEA, el 21 de agosto de 1960, adoptara sanciones colectivas contra la República Dominicana, incluyendo el rompimiento de las relaciones diplomáticas después del fracaso en Caracas de un atentado trujillista contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, el 24 de junio de ese año.

Ante la resistencia de Trujillo a dejar el poder, el gobierno norteamericano vertebró a través de la CIA el asesinato del dictador. El magnicidio fue ejecutado con éxito por un grupo de militares y políticos de los propios círculos trujillistas y fue tejido en torno a los generales Juan Tomás Díaz y José René, *Pupo*, Román Hernández.

En la noche del 30 de mayo de 1961, mientras viajaba en su automóvil fuera de la ciudad, hacia una de sus fincas, el dictador Trujillo cayó en una emboscada preparada por los conspiradores y ultimado a balazos. A continuación, la resistencia civil contra la prolongación del trujillismo sin Trujillo forzó un proceso paulatino de transición democrática que culminó, tras elecciones generales en 1962, con la entrega del poder al líder popular Juan Bosch, el 27 de febrero de 1963, y la promulgación de una nueva constitución.

Por su parte, en Paraguay surgieron en esa coyuntura el Movimiento 14 de Mayo, de inspiración liberal febrerista, y el Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA), comunista, que bajo el impacto de la revolución cubana intentaron sembrar guerrillas en la cordillera Ybytyruzú. Pero entre 1959 y 1960 fracasaron los brotes guerrilleros del Movimiento 14 de Mayo, constituido por exiliados paraguayos procedentes de la provincia argentina de Posadas, así como la invasión de la columna guerrillera Ytororó, del FULNA, auspiciada también por el Partido Comunista. Entre los caídos figuraba el legendario comandante Agapito Valiente, jefe de la columna Mariscal López.

El proceso de cambios fue acelerado en El Salvador por el golpe de Estado en noviembre de 1960 que echó por tierra al odiado régimen de José M. Lemus, instaurado en 1956. Detrás de este movimiento militar actuaba el Frente Nacional de Orientación Cívica, que reunió a varios partidos progresistas y fuerzas de izquierda,

asociaciones estudiantiles y sindicatos. Una junta democrática, en la que tenían sitio desde elementos burgueses hasta representantes populares, se encargó del poder imponiendo cambios de signo positivo, aunque de muy corta duración.

En México, se registraron en 1959 las más vigorosas movilizaciones obreras desde la época de Cárdenas. Además, durante el mandato de Adolfo López Mateos, entre 1958 y 1964, el gobierno asumió una política soberana. Una postura similar adoptó Brasil tras la llegada a la presidencia en enero de 1961 de Janio Quadros, quien impulsó una política exterior dinámica e independiente. En septiembre de ese mismo año, Cheddi Jagan volvió a ganar los comicios en Guyana y otra vez ocupó el gobierno local en la todavía colonia inglesa.

Ascenso del movimiento revolucionario continental

El incontenible ascenso de las luchas populares inaugurado por la revolución cubana condujo en corto plazo a un auge sin precedentes del movimiento de liberación en América Latina. La influencia emanada del ejemplo de Cuba desencadenó una oleada de luchas revolucionarias que estremeció al continente desde el río Bravo a la Patagonia, radicalizando a muchas organizaciones populares y antimperialistas y cuestionando a las corrientes reformistas burguesas.

Fue ese el contexto en que se produjeron, desde principios de los años sesenta, desprendimientos en varios partidos de corte reformista e incluso en el seno de ciertas organizaciones de izquierda, como los partidos comunistas, remisos a adoptar la lucha armada. Así surgieron por todas partes nuevos movimientos revolucionarios que protagonizaron muchos de los acontecimientos que sacudieron al hemisferio.

En Venezuela Acción Democrática (AD), el partido del presidente Rómulo Betancourt, que gobernaba desde 1959, se dividió en mayo de 1960 por la creación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y de la Acción Revolucionaria Social (ARS),

descontentos con la postura anti cubana asumida por el mandatario adeco. Por la misma razón, la Unión Republicana Democrática (URD) salió de la coalición de gobierno en noviembre de 1960, después de la dimisión del canciller Ignacio Luis Arcaya, opuesto al voto de Venezuela contra Cuba en la reciente reunión de la OEA en San José de Costa Rica.

Fabricio Ojeda, el parlamentario más popular de la URD y destacado luchador contra la derrocada dictadura de Pérez Jiménez, no solo renunció a su puesto en el parlamento, sino que se incorporó a la lucha armada. El clímax de la crisis venezolana se alcanzó en 1962 con los alzamientos militares de Carúpano (mayo) y Puerto Cabello (junio), junto con los brotes guerrilleros aparecidos en Falcón, Sierra de San Luis y Portuguesa.

En febrero de 1963 varios frentes guerrilleros venezolanos se unieron en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y su brazo político el Frente de Liberación Nacional (FLN). Este último fue encabezado por Fabricio Ojeda hasta su encarcelamiento y posterior asesinato (22 de junio de 1966). La muerte de Ojeda facilitó, junto al paulatino abandono de las guerrillas por muchos de sus promotores, incluido el Partido Comunista, que la lucha armada comenzara a revertirse en las postrimerías del mandato del también adeco Raúl Leoni, extendido de 1964 a 1969.

Uno de los impactos causados en Perú por la revolución cubana fue poner en crisis la política reformista del APRA y su líder histórico Haya de la Torre. El ala izquierda de esta organización, encabezada por Luis de la Puente Uceda, se enfrentó a la desacreditada dirección del partido para finalmente separarse y crear el APRA Rebelde, devenido después en Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1965, en medio de una creciente agitación campesina –ya se habían producido los levantamientos dirigidos por Hugo Blanco entre 1960 y 1963–, aparecieron las primeras guerrillas organizadas por el propio MIR y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), este último encabezado por Héctor Béjar.

En Colombia, la resonancia de la revolución cubana condujo en corto plazo a un auge sin precedentes de las luchas populares que radicalizó a muchas organizaciones políticas y sociales, poniendo en

crisis a los propios partidos tradicionales. Esto último fue lo que ocurrió en el seno del Partido Liberal, donde un sector manifestó abiertamente sus simpatías por la Cuba de Fidel Castro y terminó creando, en el propio año 1959, bajo la dirección de Alfonso López Michelsen –hijo del ex presidente López Pumarejo–, el Movimiento de Recuperación Liberal (MRL). El MRL, luego redenominado Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), arrastraría consigo el 35% de la votación liberal a mediados de los sesenta.

Del MRL se desprendieron también sectores juveniles más radicales, enemigos del diálogo con la vieja dirigencia liberal, a la vez que aparecían otras agrupaciones de izquierda como el Movimiento Obrero, Estudiantil y Campesino y el Frente Unido de Acción Revolucionaria. Este último fue fundado en 1962 por Gloria Gaitán, hija del líder liberal cuya violenta muerte desencadenara en 1948 el *bogotazo*.

En ese contexto, las antiguas bandas armadas liberales, algunas de ellas degeneradas en simples grupos de asaltantes, lograron estabilizarse en el control de algunas áreas rurales, consolidando las llamadas zonas de «auto-defensas» campesinas –como en Tolima desde 1960–, administradas según las exigencias de un estado de guerra, llegando a proclamar leyes de tipo socialista, como ocurrió en Marquetalia y El Pato. Muchos de estos grupos armados se fueron institucionalizando como verdaderos ejércitos, convirtiendo a las antiguas guerrillas liberales de autodefensa campesina en auténticos movimientos armados de liberación nacional.

Ese fue el caso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –fundadas en 1966 luego de una conferencia de guerrilleros de los departamentos de Huila, Cauca y sur de Tolima–, ligadas en un inicio al Partido Comunista, encabezadas por Manuel Marulanda Vélez. En enero de 1965, teniendo por base jóvenes estudiantes y profesionales radicalizados, surgió el Ejército de Liberación Nacional (ELN), fundado por Fabio Vázquez Castaño y con su zona principal de operaciones en el valle medio del Magdalena.

Al ELN se integraría después el sacerdote Camilo Torres –tras fracasar en su intento de unificar distintas organizaciones de izquierda en el Frente Unido–, caído en combate en 1965. En 1967, surgió

también el Ejército Popular de Liberación (EPL), de inspiración maoísta (Partido Comunista Marxista Leninista), que tenía por sede principal Antioquia y Córdoba.

Por su parte, en Guatemala, la lucha armada comenzó después del levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960 contra el gobierno autoritario del general Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963), heredero del movimiento contrarrevolucionario que derrocara a Arbenz. Los sublevados, encabezados por los oficiales Luis Augusto Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, terminaron creando el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y abriendo frentes guerrilleros en las montañas a principios de 1962.

A ellos se sumó el destacamento *20 de Octubre* organizado por los comunistas y el ala izquierda del Partido Revolucionario –una organización reformista fundada en 1957–, puesto a las órdenes del antiguo coronel arbencista Carlos Paz Tejada. A pesar de los reveses sufridos por las primeras guerrillas guatemaltecas, con su accionar se iniciaba la prolongada lucha armada en la tierra del quetzal.

En general, la década del sesenta inauguró una época de gran efervescencia social y política en América Latina, caracterizada por significativos combates revolucionarios y antimperialistas, poderosas luchas obreras, el despertar de importantes sectores campesinos, la elevación del espíritu combativo de las masas marginales y las amplias movilizaciones estudiantiles. A la par comenzaron a escucharse desesperados llamamientos de círculos burgueses en reclamo de un nuevo trato por parte de Estados Unidos. La Iglesia tampoco estuvo ajena a estas convulsiones sociales y en su seno no tardarían en florecer genuinas corrientes renovadoras pronunciadas por la lucha revolucionaria y la alternativa socialista (Teología de la Liberación).

El eco de la revolución cubana también se hizo sentir en una extraordinaria renovación de la cultura y las ciencias sociales latinoamericanas. Ejemplos de ello fueron el *boom* registrado por la novela del realismo mágico, en la cual se inscriben autores como Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, Augusto Roa Bastos y Julio Cortázar; la popularidad alcanzada por las nuevas canciones, con letras y ritmos que expresaban la más auténtica identidad de todo un continente estremecido por las luchas revolucionarias,

como las de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Víctor Jara, Chico Buarque y la llamada nueva trova cubana.

También se produjo una completa renovación de la cinematografía plasmada en películas de impronta social como las de Miguel Litín, Arturo Ripstein, Tomás Gutiérrez Alea, Jorge Sanjinés y otros muchos talentosos directores. Al mismo tiempo, surgía la teoría de la dependencia a partir de los trabajos de Theotonio dos Santos, Helio Jaguaribe y Fernando Henrique Cardoso, que abrió una rica discusión sobre los orígenes del subdesarrollo y contradijo ciertas conclusiones sociológicas –dualismo estructural, todas las variantes del funcionalismo y el desarrollismo– sobre el proceso histórico latinoamericano, así como las que procedían del marxismo stalinista.

Como telón de fondo de este pujante despertar de la conciencia revolucionaria y antimperialista de los pueblos latinoamericanos, se hallaba el continuo agravamiento de la crisis económica, que fue llevando la situación del continente a un verdadero atolladero.

Así, al incesante deterioro de los términos de intercambio y al drenaje de recursos provocado por las constantes remesas de utilidades del capital extranjero, se sumaron los intereses y amortizaciones de una deuda externa siempre creciente –en 1968 su servicio ya consumía el 37% de las exportaciones latinoamericanas–, que explican los graves problemas que aquejaron a los países de América Latina desde los años sesenta. Prueba de ello fue que de 1956 a 1963 se registró una brusca caída del producto nacional bruto per cápita y en el período de 1961 a 1965 ese índice se reduciría a la mitad en comparación con el de 1956 a 1960.

Represión y contrainsurgencia: el Che Guevara y el auge guerrillero

Ante la consolidación del socialismo en Cuba y su creciente impacto continental, Estados Unidos no solo redobló su hostilidad hacia la isla, sino también desencadenó una feroz ofensiva contrarrevolucionaria por todas partes dirigida a aplastar el menor indicio de intranquilidad popular. En el terreno diplomático trató de aislar

a Cuba de los países del hemisferio mediante su expulsión de la OEA en la Conferencia Interamericana de Punta del Este (1962), decisión que, salvo México, acataron al pie de la letra la totalidad de los gobiernos del área desde ese año y hasta 1964.

Las respuestas cubanas a todas estas acciones ofensivas y agresiones norteamericanas se expresaron en la I y II Declaración de La Habana, adoptadas el 2 de septiembre de 1960 y el 4 de febrero de 1962, respectivamente, y la de Santiago de Cuba (26 de julio de 1964), las cuales condenaban la política injerencista de Estados Unidos, la complicidad de los gobiernos latinoamericanos de entonces y proclamaban, en esta última, el derecho de los cubanos «a ayudar con todos los recursos a su alcance a los movimientos revolucionarios de todos los países que practiquen semejante intromisión en los asuntos internos de nuestra Patria».[1]

El diseño de esta agresiva política contra Cuba comenzó en las postrimerías de la administración Eisenhower y se completó durante la de su sucesor, John F. Kennedy, quien en los comicios de noviembre de 1960 había derrotado por estrecho margen a su rival republicano, el vicepresidente Richard M. Nixon. Con el propósito de contrarrestar el ejemplo de la revolución cubana y ampliar las bases de su sistema de dominación, Kennedy y sus asesores diseñaron un programa para el desarrollo económico de América Latina que preveía la ampliación de los préstamos y la «ayuda» norteamericana.

Denominado *Alianza para el Progreso* contenía un conjunto de recetas «desarrollistas». Incluía la ampliación del crecimiento del producto nacional bruto, creación de una economía multirramal, reformas agrarias, liquidación del analfabetismo para 1970, universalización de la enseñanza primaria hasta sexto grado, construcción de viviendas, estabilización de los precios de las exportaciones latinoamericanas y apoyo a los proyectos de integración.

El programa norteamericano fue proclamado con derroche de propaganda en marzo de 1961 y presentado, en agosto de ese año, en una sesión extraordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social de la OEA celebrado en Punta del Este (Uruguay). En ese

1 «Declaración de Santiago», *Cinco Documentos*, La Habana, Instituto del Libro, 1971, pp. 171-180.

mismo cónclave fue pronosticado su fracaso por el comandante Ernesto, *Che*, Guevara, al frente de la delegación cubana, ya que este no incluía transformaciones estructurales.

En virtud de este plan reformista, el gobierno de Estados Unidos dio su respaldo oficial a varios experimentos con objetivos claramente contrainsurgentes, como el que se llevó a cabo en Chile durante la presidencia del demócrata cristiano Eduardo Frei de 1964 a 1970. Hacia 1964 en este y en otros quince países latinoamericanos se aprobaron «leyes de reforma agraria» que en el mejor de los casos se limitaban a promover la colonización de tierras estatales baldías y la compra de algunas áreas no cultivadas de los grandes latifundios.

Hay que advertir, no obstante, que después del asesinato del presidente Kennedy, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas), el apoyo norteamericano a los planes «desarrollistas» perdió fuerza, pues la estrategia de Estados Unidos, ahora gobernados por Lyndon B. Johnson, se inclinó cada vez más a favorecer los métodos abiertamente represivos por encima de los reformistas. Prueba fehaciente de este giro en la política norteamericana fueron las declaraciones que en marzo de 1964 formulara el secretario adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Thomas C. Mann, quien anunció sin ambages que lo importante era contar con aliados seguros en la lucha contra el comunismo, por lo cual Washington abandonó todo intento de distinguir entre regímenes dictatoriales y democráticos. Para cimentar esa postura, el presidente norteamericano se reunió con sus homólogos latinoamericanos en abril de 1967 en Punta del Este, Uruguay.

La política hacia América Latina de la administración Johnson se caracterizó por su postura pragmática, que estimuló –también convalidó– una nueva oleada reaccionaria en el continente que arrancó muchas de las conquistas alcanzadas por los pueblos latinoamericanos en sus luchas precedentes. Los gobiernos que lograron escapar a los golpes de estado debieron someterse a la tutela militar y a una sumisión descarnada a Estados Unidos. La hegemonía norteamericana y las dictaduras militares entreguistas volvieron a ganar espacio en América Latina.

Lo más característico de la contraofensiva derechista de los años sesenta fueron las asonadas militares «preventivas», que transformaron sustancialmente el panorama hemisférico, en consonancia con las medidas adoptadas por los círculos gubernamentales de Washington para defender sus intereses en la región. Ahora las fuerzas armadas latinoamericanas se convirtieron en los más eficaces instrumentos de la dominación norteamericana y en verdaderas tropas de ocupación de sus respectivos países. Para lograrlo, desde 1961, Estados Unidos comenzó a preparar en gran escala especialistas en «operaciones guerrilleras», y desde 1963, unidades especiales de «boinas verdes» se involucraron en forma directa en labores de contrainsurgencia en Guatemala, Colombia y Bolivia.

Eslabones de aquella cadena de golpes militares fueron los que tuvieron lugar en El Salvador, enero de 1961, y en Ecuador, en 1961 y 1963 –caída primero de Velasco Ibarra y después de su sucesor Carlos Julio Arosemena–, el derrocamiento de Frondizi en la Argentina, marzo de 1962, así como los cuartelazos de Guatemala, también en ese mismo mes, y Perú, julio de 1962, dirigidos no tanto contra los gobiernos establecidos de Miguel Ydígoras Fuentes y Manuel Prado Ugarteche, sino más bien para impedir el acceso al poder, en las cercanas elecciones presidenciales, de viejos caudillos reformistas que aún disfrutaban de cierta aureola popular: Arévalo y Haya de la Torre.

En esta misma secuencia de pronunciamientos militares pueden ubicarse el que derribó, el 25 de septiembre de 1963, al gobierno democrático de Juan Bosch en República Dominicana y el que tuvo lugar en Honduras en octubre de ese mismo año. La renuncia del presidente Janio Quadros de Brasil, en agosto de 1961, y la consiguiente crisis política que se desató para tratar de bloquear la sustitución constitucional –que correspondía al vice Joao Goulart– estuvo también motivada por la desembozada presión de las fuerzas armadas. Ya para entonces, el gobierno brasileño había trasladado su sede de Rio de Janeiro a Brasilia, ciudad recién construida siguiendo el diseño futurista del arquitecto Oscar Niemeyer.

El mantenimiento del bloqueo y la intensificación de las incursiones armadas contra Cuba, los golpes militares reaccionarios de Brasil (caída

de Goulart en abril de 1964), Bolivia (deposición de Paz Estenssoro en noviembre de 1964), Argentina (derrocamiento de Arturo Illia en junio de 1966), junto a la salida de Cheddi Jagan del gobierno de Guyana (diciembre de 1964) y la anulación de las leyes democráticas en Uruguay por el régimen de Jorge Pacheco Areco en diciembre de 1967, fueron otros momentos de este mismo proceso de derechización, en el que también debe incluirse la matanza de estudiantes mexicanos –más de 300 muertos y 2 mil heridos– por el ejército en la Plaza de las Tres Culturas (Tlatelolco) el 2 de octubre de 1968.

La contraofensiva encaminada a frenar el impetuoso avance de las fuerzas populares y de las luchas revolucionarias se aceleró desde 1964 en la medida en que se esparcía la rebeldía de los pueblos latinoamericanos. Los brotes guerrilleros más importantes de los años sesenta se produjeron en Venezuela, Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia, aunque prácticamente ningún país latinoamericano quedó al margen de ellos.

De un extremo al otro del continente se activó la lucha armada encabezada por organizaciones al estilo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua, del Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4) en República Dominicana, el de las Forces Armées Revolutionaires de Haití, el Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) y Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) en Guatemala y el Frente de Liberación Nacional (FLN) en Venezuela. A esta lista parcial debe agregarse el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Perú, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, la Acción Libertadora Nacional (ALN) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en Brasil, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolivia, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile y el Ejército Guerrillero del Pueblo (EGP) en Argentina, entre otras organizaciones revolucionarias surgidas en este contexto.

Al frente de estas organizaciones, que apostaron por la lucha armada por la liberación nacional, cayó una generación de jóvenes revolucionarios. Entre ellos pueden mencionarse a Fabricio Ojeda (Venezuela), Jacques Stéphen Alexis (Haití), Carlos Fonseca Amador (Nicaragua),

Jorge Ricardo Massetti (Argentina), Luis de la Puente Uceda (Perú), Luis Augusto Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa (Guatemala), Camilo Torres (Colombia), Carlos Marighela (Brasil), Miguel Enríquez (Chile), Inti Peredo (Bolivia), Manolo Tavárez y Francisco Caamaño (República Dominicana), así como muchos otros combatientes revolucionarios caídos, luchas simbolizadas en la epopeya del *Guerrillero Heroico*, comandante Ernesto, *Che*, Guevara, asesinado en Bolivia el 9 de octubre de 1967. En ese contexto, se celebró en La Habana, en agosto de 1967, la primera conferencia de solidaridad con los pueblos de América Latina, que había sido propuesta en enero de 1966 en la propia capital cubana por el entonces senador chileno Salvador Allende en el marco de la Conferencia Tricontinental. Ellas dieron origen a la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL) y la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS). Esta última, de efímera existencia, trató de articular e impulsar las luchas revolucionarias en el continente, en particular de aquellas que utilizaban la vía armada.

El fracaso de la *Alianza para el Progreso* y la plena ebullición del movimiento revolucionario a escala hemisférica, llevaron a Washington a formular lo que se llamó la doctrina Johnson, complemento de la Mann, que proclamó el supuesto derecho de Estados Unidos a intervenir en cualquier país en donde se consideraran amenazados sus intereses. Ella fue adoptada por una resolución del propio Congreso estadounidense en septiembre de 1965.

Esta política anacrónica, extrapolada de los tiempos del *big stick*, se habían hecho sentir cuando los *marines* yanquis masacraron al pueblo panameño, que reclamaba su soberanía en la zona del canal en enero de 1964. Pero, al año siguiente, fue llevada aún más lejos con la ocupación militar de Santo Domingo.

Revolución de Abril en Santo Domingo y muerte de Caamaño

El 24 de abril de 1965 estalló en República Dominicana un levantamiento cívico militar, liderado por un grupo de jóvenes oficiales, que

exigía el retorno de Juan Bosch al poder, derrocado por los oficiales trujillistas, con la complicidad de la Iglesia y los partidos tradicionales, el 25 de septiembre de 1963. El líder del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) había ganado las elecciones de diciembre del año anterior con más del doble de votos que todos sus contrincantes.

Durante los siete meses de su breve mandato, iniciado el 27 de febrero de 1963, Bosch revirtió al estado las extensas propiedades del régimen trujillista, inició repartos agrarios y, estableció una administración honesta y democrática, que incluía la libre actividad de las organizaciones de izquierda y la eliminación de gastos superfluos del gobierno. Además, puso en vigor la nueva constitución de 1963, que prohibía el latifundio, las propiedades de tierras en manos extranjeras y amparaba la reforma agraria.

Un Triunvirato, encabezado por Donald Reid Cabral, se encargó del Poder Ejecutivo, tras destituir al Congreso y derogar la nueva carta magna. Este gobierno fue reconocido por Estados Unidos unas pocas semanas después del asesinato de Kennedy. Además del respaldo del presidente Johnson, el otro apoyo al Triunvirato procedía del general Elías Wessin y Wessin, al frente de las tropas élites del Centro de Entrenamiento de las Fuerzas Armadas (CEFA), verdadero poder tras el trono. El ex presidente Bosch, por su parte, debió exiliarse en Puerto Rico, mientras también eran obligados a abandonar el país otros líderes del PRD.

Tras el golpe militar reaccionario contra el presidente Bosch, la reacción más importante provino del principal partido de izquierda, el Movimiento Revolucionario 14 de Junio (1J4), que aspiraba a profundos cambios sociales y económicos, pues las otras dos pequeñas organizaciones de izquierda, el Partido Socialista Popular (Comunista) y el Movimiento Popular Dominicano (MPD) –este último cada vez más inclinado el maoísmo–, estaban enredadas en querellas bizantinas. A fines de noviembre de 1963, el 1J4 organizó seis focos guerrilleros con cientos de hombres armados, los que fueron aplastados en poco tiempo por las fuerzas represivas del régimen, que incluso ejecutó sin juicio alguno a varios combatientes que se habían rendido, incluido su comandante Manolo Tavárez (21 de diciembre).

Liquidada la opción armada, el restablecimiento de la democracia y el regreso de Bosch al poder, convertido en todo un símbolo nacional, quedó en manos de los jóvenes oficiales constitucionalistas. Muchos de ellos estaban influidos por la prédica del prestigioso teniente coronel Rafael Fernández Domínguez, quien había sido director de la Academia Militar en la estratégica base aérea de San Isidro hasta que fue sacado del país.

En la mañana del 25 de abril de 1965 los militares rebeldes, encabezados por los coroneles Miguel Ángel Hernando Ramírez y Francisco Caamaño Deñó ocuparon el Palacio Presidencial y depusieron al gobierno de Reid Cabral. Enterado de estos acontecimientos, el líder del PRD, José Francisco Peña Gómez, llamó por la radio a la población capitalina a respaldar el movimiento revolucionario. Miles de personas se volcaron enseguida a las calles al grito de «¡Viva la revolución!».[2]

De inmediato se estableció un gobierno provisional dirigido por Rafael Molina Ureña, quien había sido presidente de la Cámara de Diputados hasta el golpe de Estado de 1963, en espera del regreso de Bosch. Pero el ex presidente no pudo retornar al país, pues fue retenido por las autoridades norteamericanas en Puerto Rico.

Por su parte, un sector derechista del ejército, atrincherado en la base aérea de San Isidro, bajo las órdenes del general Wessin y Wessin, se opuso al movimiento revolucionario y reclamó la intervención de Estados Unidos. El 26 abril la fuerza aérea bombardeó el Palacio Presidencial, con apoyo de la marina, lo que marcó el comienzo de los enfrentamientos armados entre los dos bandos militares en pugna.

Al día siguiente, el avance de las fuerzas blindadas de Wessin y Wessin hacia el Puente Duarte, que comunica con la ciudad de Santo Domingo, unido a la postura injerencista de la embajada norteamericana, que se negaba a aceptar el gobierno constitucionalista, sembró el desaliento entre los partidarios de Bosch. El propio presidente Molina Ureña renunció y pidió asilo en la embajada de Colombia, mientras la mayor parte de sus seguidores se refugiaban en sus casas o en las misiones diplomáticas extranjeras.

[2] Piero Gleijeses, *La esperanza desgarrada. La rebelión dominicana de 1965 y la invasión norteamericana*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2011 p. 273.

Sin embargo, en la tarde de ese mismo día, la ofensiva de las tropas de Wessin y Wessin, que incluía equipos blindados, fue detenida por la resistencia espontánea de civiles armados, bajo la dirección del coronel Caamaño, nombrado ministro del Interior por el gobierno de Molina Ureña, y el capitán de navío Manuel Ramón Montes Arache. Esta victoria defensiva, que obligó a las fuerzas enemigas a replegarse, dio un nuevo impulso al movimiento constitucionalista.

En los días siguientes, los seguidores de Caamaño, devenido un verdadero héroe nacional, consolidaron su control sobre diversos puntos de la capital dominicana, incluyendo cuarteles de la policía y el fuerte Ozama, enclavado en la propia ciudad de Santo Domingo. Wessin, arrinconado con sus efectivos en la base de San Isidro, organizó apresuradamente una junta militar que pidió ayuda a Estados Unidos (28 de abril).

Ese mismo día, la Casa Blanca, temerosa de un triunfo revolucionario que creara una segunda Cuba en el Caribe, comenzó el desembarco por mar y aire de sus *marines*, que en dos semanas superaron los 20 mil efectivos. Al referirse a los objetivos de esta descarnada invasión militar a un país independiente, el presidente Johnson declaró sin tapujos que se trataba de impedir el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental. Para intentar legitimar estas descarnadas acciones contra la soberanía de la República Dominicana, Estados Unidos consiguió la creación, a toda velocidad, de una simbólica fuerza intervencionista de la OEA, a la vez que bloqueaba la mediación de las Naciones Unidas (ONU).

Dispuestos a resistir a los invasores norteamericanos, el Congreso dominicano, formado con los restos del que había sido disuelto en 1963, eligió el 4 de mayo de 1965 al coronel Caamaño como presidente constitucional. El nuevo mandatario conformó su gabinete con representantes del PRD, el 1J4, el PSP, el MPD y el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC).

Bajo la dirección de Caamaño, durante quince días se produjeron violentos enfrentamientos contra las tropas de Wessin y el propio ejército interventor estadounidense, hasta que los *marines* lograron dividir la capital en dos sectores. En uno de esos violentos choques, el 19 de mayo, cayó en combate el coronel Fernández Domínguez,

verdadero inspirador del movimiento constitucionalista dentro del ejército, que apenas una semana antes había regresado al país con un mensaje de Bosch para Caamaño.

Pero la abrumadora superioridad norteamericana, que les permitió desalojar a los constitucionalistas de una tercera parte del territorio que ocupaban los días 15 y 16 de junio, impuso finalmente una solución negociada en la llamada *Acta de Reconciliación* (31 de agosto). Mediante este acuerdo, ambas partes aceptaron como presidente provisional a un político protegido de Estados Unidos: Héctor García Godoy. Como parte del acuerdo, entre junio y septiembre regresaron del exilio Juan Bosch y Joaquín Balaguer, quienes debían disputarse la presidencia en los siguientes comicios.

Bajo el gobierno de García Godoy, iniciado el 3 de septiembre de 1965, comenzó el desarme de los constitucionalistas, que incluía la salida al exterior de los oficiales de los dos bandos. Ese proceso no estuvo exento de obstáculos y traiciones, como la emboscada sufrida por Caamaño y sus hombres en el Hotel Matum, el 19 de diciembre de ese año, que devino en un verdadero enfrentamiento armado. En definitiva, solo viajaron al exterior, en enero de 1966, los militares y civiles más comprometidos con la abortada revolución popular, incluido el propio Caamaño, enviado a Londres como agregado militar.

El 1 de junio de ese mismo año, bajo la supervisión y control de los ocupantes norteamericanos se celebraron los esperados comicios presidenciales. Las elecciones, celebradas en un clima de persecución e intimidación sobre los constitucionalistas, fueron un gigantesco fraude. Sin ningún recato se dio la victoria, con el 57% de la votación, al antiguo trujillista Joaquín Balaguer, mientras Juan Bosch, que no pudo salir de su casa por el acoso a que estaba sometido, solo se le reconoció el 39% de los sufragios. A partir de entonces, y hasta 1978, Balaguer se mantuvo ininterrumpidamente en el poder, con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos y los militares derechistas.

Fue precisamente para enfrentar el espurio régimen de Balaguer e impulsar cambios sociales y económicos de envergadura, que poco después el coronel Caamaño abandonó en forma secreta su puesto diplomático en Londres para entregarse a la organización de la lucha armada. Luego de una prolongada estancia en Cuba, el líder de la

revolución de abril y un puñado de sus fieles seguidores desembarcaron en tierra dominicana por playa Caracoles, el 2 de febrero de 1973. Tras los primeros choques con el ejército, la mayor parte de los expedicionarios, incluido el propio Caamaño, fueron capturados y asesinados.

Nuevos gobiernos militares nacionalistas

Las violentas conmociones sociales y políticas despertadas con el triunfo de la revolución cubana y avivadas por la crisis de las estructuras del capitalismo dependiente y la dominación imperialista de América Latina, llegaron a afectar también a una de las más viejas y sólidas instituciones tradicionales de poder en toda la región: el ejército. Lo ocurrido en República Dominicana, donde una parte de las fuerzas armadas tomó partido por la causa popular, fue una muestra de ello y no quedaría como un hecho insólito en la historia de América Latina.

Aunque después de la crisis económica de 1929 ya habían florecido en el seno de los ejércitos de América Latina corrientes nacionalistas, la tendencia se había invertido después de la Guerra Fría. Desde entonces, las fuerzas armadas del hemisferio fueron convertidos en instrumentos de la reacción y el imperialismo norteamericano contra los países socialistas y los movimientos revolucionarios, como ocurrió en Argentina y Brasil, por solo citar dos ejemplos.

Sin embargo, la crisis generalizada del sistema no tardó en reflejarse en el comportamiento patriótico de sectores de la oficialidad que se levantaron para luchar contra los gobiernos oligárquicos y reformistas, como se puso de manifiesto en Venezuela, República Dominicana y Guatemala. Además, dio lugar a movimientos más amplios dentro de las fuerzas armadas de algunas repúblicas con el propósito de recuperar las riquezas nacionales e intentar realizar las transformaciones sociales postergadas por los tradicionales partidos políticos.

Así, altos oficiales de ideas progresistas, como los generales Juan Velasco Alvarado en Perú y Omar Torrijos Herrera en Panamá ocuparon el gobierno en sus respectivos países, casi en forma simultánea, en octubre de 1968, y aplicaron entonces una política soberana basada en

audaces reivindicaciones sociales y antimperialistas, entre ellas rescate de los recursos naturales (petróleo), 200 millas de mar territorial, reclamación panameña del canal y una reforma agraria sin precedentes en Perú. Bajo la influencia de estas transformaciones, los generales Guillermo Rodríguez Lara en Ecuador de 1972 a 1976, Juan José Torres en Bolivia, entre 1970 y 1971 y Osvaldo López Arellano en Honduras de 1972 a 1975, llevaron adelante en sus respectivos países morigeradas copias de las audaces medidas progresistas adoptadas por los gobiernos militares de Perú y Panamá.

Hay que subrayar que la novedosa e inesperada actitud asumida por estos militares nacionalistas crearon una situación extremadamente delicada a Estados Unidos, al cuestionar la ya tradicional fidelidad de los cuerpos armados de América Latina a los dictados de Washington. Sin duda los casos más significativos, por su postura soberana e independiente y sus propósitos de quebrar la dominación imperialista en sus respectivos países, fueron los mencionados de Perú y Panamá.

El Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en Perú

El progresivo deterioro de la situación política y la demostrada incapacidad del gobierno de Fernando Belaunde Terry, iniciado en 1963, para defender los intereses nacionales, decidió a actuar a la única fuerza capaz de conquistar el poder y asumir la dirección del Estado fuera del aprismo: el ejército. La acción militar del 3 de octubre de 1968 sorprendió a casi todos los observadores.

Las primeras declaraciones de sus líderes y sus primeras acciones de gobierno demostraban que no se trataba de un golpe militar de tipo tradicional. Además de que no invocaba, como era ya habitual, el «peligro comunista», sus llamados a rescatar la dignidad nacional apuntaban claramente a las groseras violaciones de la soberanía del país perpetradas por Estados Unidos. A continuación, 19 de noviembre de 1968, tropas del ejército ocupaban los yacimientos de hidrocarburos de la Brea y Pariñas y las instalaciones de Talara.

La cuestión del petróleo se había convertido en una verdadera reivindicación histórica, en un asunto que afectaba el honor y la integridad nacionales. Aunque el ejército peruano era considerado una de las instituciones castrenses de más acentuado espíritu de casta, oficiales de extracción humilde habían ido ocupando jefaturas importantes en el aparato militar. En ellos era visible la influencia de un grupo de teóricos, formados en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), fundado en 1952, partidarios de concepciones progresistas sobre el desarrollo económico y la seguridad nacional.

Desde octubre de 1968 se hizo evidente que estos oficiales estaban dispuestos a patrocinar un programa patriótico de renovación social y rescate de los recursos naturales, punto de partida de un vasto esfuerzo contra el atraso y el subdesarrollo. Estas ideas formaban parte del llamado *Plan Inca*, de orientación desarrollista y dirigido a redistribuir la propiedad, reformar la agricultura, implementar una comunidad industrial y nacionalizar las industrias básicas (petróleo, pesca, minería), y fundamentaron la presidencia del general Juan Velasco Alvarado.

En cumplimiento del *Plan Inca*, el gobierno militar peruano no se detuvo en lo que podían considerarse actos elementales de soberanía. El 24 de junio de 1969 vino la promulgación de la reforma agraria, que no excluyó los grandes complejos agroindustriales de la costa, comenzando por la poderosa Cerro de Pasco Corporation y las extensas haciendas señoriales de los Andes, lo que fue complementado con una ley de aguas. Se calcula que el 47% del área agrícola fue afectada y beneficiados directamente la cuarta parte de la población rural.

Otras medidas adoptadas por el gobierno del general Velasco Alvarado fueron la nacionalización de la mayor parte de la banca, la comercialización estatal de los recursos naturales, la reversión de los yacimientos mineros, mantenidos como reservas estratégicas por las empresas trasnacionales y el comienzo de la explotación por parte del Estado de grandes minas y pozos petrolíferos, junto a la creación de la empresa estatal Petroperú. Además, se nacionalizaron servicios públicos esenciales, como la electricidad, ferrocarriles, telecomunicaciones, televisión, radio, teléfonos y prensa escrita (julio de 1974),

así como se formaron comunidades laborales y se dio prioridad al área de propiedad social dentro del conjunto de la economía.

A ello debe añadirse la firme defensa de la soberanía del país sobre las 200 millas de mar territorial y la creación de una serie de organismos e instituciones estatales de nuevo tipo, junto a leyes sociales que regularon la actividad laboral, los salarios y las jubilaciones. Por último, la política exterior peruana se proyectó soberana e independiente, hizo causa común con la del Tercer Mundo y restableció relaciones con Cuba.

Pero los militares nacionalistas peruanos, como otros regímenes semejantes surgidos en otras partes del continente, no pudieron sostener esta política durante mucho tiempo. En el caso específico de Perú, ello sobrevino después de la grave enfermedad que aquejó a Velasco Alvarado, quien finalmente falleció el 24 de diciembre de 1977, lo que facilitó con anterioridad su sustitución por el general Francisco Morales Bermúdez (29 de agosto de 1975), representante de la derecha del movimiento militar.

Desde ese momento se hizo evidente el retroceso político. El flamante mandatario militar firmó diversos acuerdos de estabilización económica de corte neoliberal con el FMI –que conllevaron alzas de precios de la gasolina y artículos de primera necesidad–, permitió la reaparición de la prensa tradicional y pasó a retiro a los oficiales de izquierda, entre ellos los generales Leónidas Rodríguez y Jorge Fernández Maldonado.

Este corrimiento a la derecha no solo estaba asociado a la hostilidad oligárquico-imperialista, sino también a la propia factura socio-clasista del movimiento militar peruano. Nos referimos a los límites impuestos a las reformas sociales y medidas nacionalistas por sus propios promotores y a las debilidades en la movilización popular –la creación en 1971 del Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) no dio los resultados esperados–, insuficiencias que no podían ser compensadas, ni con el sincero patriotismo de la oficialidad comprometida, ni tampoco con estériles alianzas con las fracciones más dinámicas de la burguesía.

Aislado de sus potenciales bases de apoyo popular por sus inconsecuencias y prejuicios de casta y clase, el régimen militar

nacionalista peruano, como otros movimientos castrenses similares, fue creando condiciones para su derrocamiento por la reacción, cediendo paulatinamente en sus programas originales de radicales transformaciones socioeconómicas. Este ciclo en Perú se completó en 1980 con la devolución del poder a Belaunde Terry, el mismo presidente derrocado por los militares peruanos doce años atrás.

Torrijos y la reivindicación panameña del canal

Una evolución no muy diferente siguió el proceso militar nacionalista en Panamá. En la tierra istmeña el movimiento fue desencadenado por la política entreguista seguida por el presidente Arnulfo Arias, que ya había abandonado las veleidades reformistas de sus mandatos anteriores, sobre todo entre 1940 y 1941, y se mostraba cada vez más comprometido con la oligarquía y Estados Unidos.

Su proyecto de restringir el creciente poderío de la Guardia Nacional precipitó el golpe de Estado que puso fin a su efímero último gobierno, que solo duró los diez primeros días de octubre de 1968. Poco después, el 16 de diciembre de 1969, fracasó el contragolpe urdido por sus partidarios contra el triunvirato militar que lo sustituyó en el poder y emergió como figura indiscutida del escenario político panameño el carismático general Omar Torrijos Herrera, quien tomó en sus manos la vieja aspiración panameña sobre la soberanía del canal.

Estos acontecimientos expresaban, como muy pronto se comprobaría, que la Guardia Nacional comenzaba a abandonar su función tradicional de brazo armado de la oligarquía y Estados Unidos, aleccionada por los dramáticos acontecimientos de la violenta represión contra las manifestaciones populares antinorteamericanas de 1964. Prueba de ello fue la suspensión de los viejos partidos, la creación de nuevas instituciones, la promoción de un fuerte sector estatal productivo, el rescate de recursos naturales y la adopción de ciertas leyes sociales, algunas de las cuales fueron recogidas en la novedosa constitución torrijista de 1972.

Sin duda lo más trascendente fue la tesonera campaña diplomática dirigida a la recuperación de la soberanía panameña sobre

la zona del canal, que fue llevada por el gobierno de Torrijos a los principales foros internacionales, consiguiendo respaldo de los países latinoamericanos, el Movimiento de los No Alineados –Panamá envió una representación al foro de Argel en septiembre de 1973–, e incluso de las Naciones Unidas, que llegó a celebrar en la capital istmeña una reunión de su Consejo de Seguridad. En particular ante este cónclave, en marzo de 1973, el propio Torrijos fijó claramente la posición de su país cuando declaró «que nunca hemos sido, que no somos, ni nunca seremos, estado asociado, colonia o protectorado, ni agregaremos una estrella más a la bandera de los Estados Unidos».[3]

El éxito de esta persistente lucha nacional se consiguió con la firma en septiembre de 1977 del Tratado Torrijos-Carter, que anuló el anterior e incluyó todo un plan para la entrega a la soberanía panameña, por etapas hasta el año 2000, de la zona del canal y de las bases militares norteamericanas. No obstante, el Senado de Estados Unidos, incumpliendo lo pactado en las negociaciones, introdujo enmiendas al acuerdo que le otorgaban el derecho de intervención, «en defensa del canal», más allá de esa fecha.

Este proceso cohesionó a los panameños y se conjugó con un programa de Torrijos para conseguir un orden social más equitativo, que incluía reforma agraria, mejoras en la educación, la explotación del cobre con criterio nacionalista y la búsqueda de mejores precios para el banano controlado por la United Fruit Company, ahora redenominada United Brands. Con esa finalidad, Panamá impulsó la creación de la Unión de Países Exportadores de Banano (UPEB). Para completar este sintético balance del torrijismo, debe mencionarse el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, en agosto de 1974, y su apoyo al Frente Sandinista en su lucha contra la dictadura de Somoza.

Pero el 31 de julio de 1981 el general Torrijos falleció en un sospechoso accidente de aviación. A partir de entonces, una política poco coherente y con frecuencia errática, seguida por los militares que le siguieron al frente del proceso, en particular por el general Manuel Antonio Noriega, acusado por Estados Unidos de

[3] *Bohemia*, La Habana, 23 de noviembre de 1973, p. 69.

narcotraficante, crearon las condiciones para la trágica intervención norteamericana de 1989 que liquidó los últimos vestigios del nacionalismo militar torrijista.

El paréntesis nacionalista de Juan José Torres en Bolivia

Uno de los resultados de la presencia de la guerrilla del Che en Bolivia fue que sirvió de catalizador del desarrollo ideológico de algunos militares honestos de las Fuerzas Armadas. La principal figura de este reducido grupo de oficiales concientizados fue el general Juan José Torres, quien se convirtió en el eje fundamental a favor de la elaboración de un movimiento nacionalista, iniciando algunas transformaciones de la estructura socio-económica del país.

Después de la muerte del dictador, general René Barrientos en un accidente aéreo, el día 27 de abril de 1969, quedó al frente del país el anodino vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, jefe del minúsculo Partido Social Demócrata, compuesto por unos cuantos abogados de las compañías extranjeras. No obstante, las contradicciones entre el jefe civil del gobierno y el jefe militar, Alfredo Ovando, abrieron un período de relativa distensión represiva, que permitió a las organizaciones obreras, estudiantiles y campesinas, irse recuperando lentamente.

Pero ello no significó el fin de la persecución contra los grupos revolucionarios. El 9 de septiembre fue sorprendido, por ejemplo, en su refugio de la clandestinidad, Inti Peredo, jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde la caída del Che. Su heroica muerte constituyó una pérdida irreparable para el movimiento revolucionario en Bolivia.

El 26 de septiembre de 1969, un golpe de los mandos militares llevó al Palacio Quemado al verdadero hombre fuerte desde la muerte de Barrientos: el general Alfredo Ovando. Lo más significativo en estos momentos era la aparición de una nueva tendencia nacionalista en el seno de las fuerzas armadas, opuesta al dominio de los militares reaccionarios que se habían destacado como incondicionales

instrumentos del imperialismo en la persecución de la guerrilla y el asesinato del Che.

Encabezado por el jefe de estado mayor, general Juan José Torres, el grupo de oficiales nacionalistas –influido sin duda por los acontecimientos que protagonizaban el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada de Perú encabezado por el general Juan Velasco Alvarado–, logró que Ovando firmara el titulado *Mandato Revolucionario de las Fuerzas Armadas de la Nación*, donde se confundían los postulados nacionalistas con viejos clichés anticomunistas. A la hora de formar su gabinete, Ovando llamó a Marcelo Quiroga Santa Cruz y a Alberto Bailey, destacados políticos nacionalistas.

El ambicioso sucesor de Barrientos dio un paso más para convencer a la opinión pública de la honestidad de sus «patrióticas» intenciones dirigidas a defender los recursos naturales del país. El 16 de octubre de 1969 derogó el *Código Davenport*, nacionalizó la Gulf Oil Corporation, que desde hacía tres años se había atribuido también la propiedad de los yacimientos de gas del oriente boliviano, más importantes que los de petróleo.

El general Juan José Torres fue encargado de ocupar militarmente las instalaciones de la empresa imperialista, y se organizó una concentración en la Plaza Murillo a fin de celebrar la medida. Ante la multitud allí congregada hablaron, por primera vez después de muchos años, los dirigentes obreros y universitarios –el régimen había abolido tiempo antes la odiosa «ley de seguridad del estado». Días más tarde, Ovando dictó un tímido control sobre las divisas.

La oposición de Estados Unidos no se hizo esperar. Enterados de la verdadera situación dentro del gobierno, los norteamericanos presionaron para que se expurgara el gabinete de elementos nacionalistas. En lo económico, el Banco Minero, controlado ahora por la Casa Morgan, se negó a colaborar con los planes gubernamentales, al tiempo que los norteamericanos estorbaban la colocación en el exterior del petróleo crudo nacionalizado. No hizo falta mucho más: Ovando se decidió enseguida a rectificar, en un nuevo giro oportunista, sus velocidades nacionalistas.

A partir de marzo de 1970, luego de la visita a La Paz de Charles A. Meyer, secretario auxiliar del Departamento de Estado

norteamericano se puso en evidencia el nuevo viraje político de Ovando: el general Torres fue apartado de la jefatura del ejército; Quiroga y Bailey, ministros de Minas y Petrolero, y de Información, respectivamente, tuvieron que renunciar, y la Gulf Oil recibió una invitación para entablar negociaciones. Los grupos clandestinos de derecha desataron, por su parte, una ola de atentados contra los sectores de izquierda.

En el campo revolucionario estos acontecimientos aceleraron la reaparición de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, comandadas ahora por Osvaldo, *Chato*, Peredo. Pero la inexperta guerrilla de Teoponte no había recogido las enseñanzas fundamentales de este tipo de lucha y fue destruida por las fuerzas gubernamentales en el breve plazo de dos meses. Los sobrevivientes, entre los que se encontraba el propio Chato Peredo, pudieron regresar a las ciudades gracias a la ayuda de los mineros.

El 4 de octubre de 1970, el general Rogelio Miranda, respaldado por el régimen derechista argentino, intentó deponer al contradictorio gobierno de Ovando. Este golpe militar fue apoyado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Falange Socialista Boliviana (FSB), partidos que nada tenían que ver ya ni con la revolución y mucho menos con el socialismo. Ambas agrupaciones habían llegado a coincidir en el forzado exilio político a que los había condenado el nuevo militarismo boliviano y eran rechazados por todos los sectores y grupos progresistas del país. La COB convocó de inmediato a una huelga general y se constituyeron algunos comités revolucionarios.

Al día siguiente, Ovando y Miranda se pusieron al habla para buscar una salida a la crisis, dejando finalmente el problema en manos de los oficiales de La Paz. Los militares capitalinos constituyeron un Triunvirato, integrado por los generales Efraín Guachalla, Fernando Satori y el contralmirante Alberto Albarracín. Pero la solución final correspondió a lo imprevisto.

Desde la base aérea de El Alto, el general Juan José Torres anunció su disposición de impedir la consumación de la intentona fascista, lanzando los aviones contra los refugios de los conspiradores. A continuación, solicitó el apoyo de los sindicatos obreros y de

las organizaciones progresistas. A su llamado respondió también el regimiento colorado de Bolivia, al mando del mayor Rubén Sánchez.

En tanto, la COB realizaba una huelga general indefinida bajo la orientación de Juan Lechín; estudiantes, campesinos y obreros, ocupaban las principales instituciones del país. Cuando los mineros amenazaron con marchar sobre La Paz, Oruro y Potosí, los asustados militares entregaron todo el poder a Torres. Era el 7 de octubre de 1970.

La audacia demostrada por el nuevo presidente nacionalista de Bolivia no le llevó tan lejos como para aprobar el programa de 21 puntos que le presentaron los trabajadores. Tampoco incluyó en su gabinete a representantes del Comando Político de la Clase Trabajadora, que todavía soñaba con un restablecimiento del extinto sistema de «cogobierno», vigente entre 1952 y 1956.

Por su lado, Torres dictó una serie de medidas progresistas y reformas económicas y sociales. A fines de 1970 restableció los salarios obreros según los niveles de mayo de 1965; revirtió al Estado las concesiones petrolíferas de la Bolivia Atlantic Corporation norteamericana, única empresa extranjera que continuaba operando en el sector de los hidrocarburos, y arrebató a la firma Grace el control de la comercialización del azúcar, entregado a una empresa estatal.

Además, en diciembre de ese año pudieron salir del país el periodista francés Regis Debray y cinco guerrilleros, presos desde 1967. Después, Torres nacionalizó las escandalosas concesiones de la International Mining Procesing y, el 30 de abril de 1971, recuperó los yacimientos de la Phillips Brothers. Por último, expuso a los llamados «Cuerpos de Paz», que encubría a agentes de espionaje norteamericanos, y dispuso la participación obrera en la dirección de YPFB.

En agosto de 1971, como resultado de su sexto congreso, emergió a la cabeza de la confederación campesina una nueva generación de líderes sindicales que serían conocidos como kataristas –pues esgrimían como símbolo la figura del legendario Túpac Katari–, guiados por el aymara Genaro Flores. Los kataristas rechazarían la vieja alianza con los militares forjada por Barrientos y elaborarían un discurso de revaloración de los valores de los pueblos originarios.

En general, el gobierno de Torres pretendía dirigir, mediante la aplicación de la denominada Estrategia Nacional para el Desarrollo, la inversión de los capitales privados nacionales y vigorizar la participación de Bolivia en el Pacto Andino. Lo que más alarmaba a las clases privilegiadas, dentro del despliegue nacionalista del régimen, eran las sesiones del congreso obrero, al cual Torres no impedía sesionar públicamente en el antiguo parlamento de La Paz. Esta asamblea antimperialista, inaugurada el 22 de junio de 1971, creaba la impresión de que en el país funcionaba un doble poder.

La conspiración que liquidó el gobierno nacionalista de Torres, el 21 de agosto de 1971, fue preparada con la ayuda del embajador norteamericano en La Paz, y conocido agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), Ernest Siracusa. En ella desempeñaron un destacado papel los círculos oligárquicos de Santa Cruz, políticamente representados por la Falange Socialista Boliviana, y algunos viejos jerarcas del MNR, incluido Paz Estenssoro. Los principales dirigentes del movimiento sedicioso eran, al principio, Hugo Banzer –quien ya había intentado infructuosamente derrocar a Torres una vez–, Andrés Selich y Mario Gutiérrez –eliminados más tarde–, todos vinculados a la reacción cruceña.

Si en lo inmediato, los complotados buscaban impedir la apertura del segundo período de sesiones de la Asamblea Popular –convocada para el 7 de septiembre de 1971–, a largo plazo se proponían vincular más estrechamente los intereses de la burguesía boliviana al capital extranjero, cancelando de paso cualquier posibilidad de un triunfo revolucionario. Esta evolución de los acontecimientos acercó a Bolivia a los promotores del eje fascista que, partiendo de Brasilia, pretendió reunir en un solo haz reaccionario a los dos países más débiles de la región –Uruguay y Paraguay– con el Chile de Augusto Pinochet, surgido tras el golpe de Estado que había derrocado al gobierno popular en Chile.

Salvador Allende y la Unidad Popular en Chile

Sin duda lo más sobresaliente del ascenso revolucionario y nacionalista que se abrió en América Latina a finales de la década del

sesenta, con la llegada al poder de los gobiernos militares nacionalistas como los de Perú y Panamá, fue el triunfo de la Unidad Popular en Chile. Esta poderosa coalición de izquierda había sido organizada en 1969 por los partidos Comunista y Socialista con el concurso del Partido Radical y otros sectores menores como la Izquierda Cristiana (IC) y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), estos dos últimos, desprendimientos de la Democracia Cristiana (DC).

A diferencia del Frente Popular de la época de Aguirre Cerda, ahora se trataba de una amplia coalición política dirigida por la clase obrera a través de los comunistas y socialistas. Ella condujo en 1970 a Salvador Allende a la presidencia de Chile con un programa muy avanzado, que incluía una política exterior independiente y profundas transformaciones económicas y sociales de inspiración socialista.

A pesar de los intentos del llamado *Comité de los 40* –máximo órgano de seguridad nacional de Estados Unidos– y de la CIA por impedirlo, la popular figura de la izquierda unida, Salvador Allende, venció a los candidatos del Partido Nacional –surgido tras la fusión del Liberal y el Conservador– y a la Democracia Cristiana en las elecciones de octubre de 1970. El cómputo final de la votación arrojó los siguientes resultados: Salvador Allende 36.3%, Jorge Alessandri 35% y Radomiro Tomic 27.8%.

El segundo obstáculo a vencer por la Unidad Popular (UP) fue el complot de la derecha y el gobierno norteamericano –la International Telegraph and Telephone (ITT) y la CIA estaban directamente involucradas– para impedir la toma de posesión de Allende. Mientras el derechista Partido Nacional se inclinaba a las soluciones violentas, la reformista Democracia Cristiana se veía empujada a negociar por la similitud de su programa con el de Allende, su popularidad y el peligro de nuevas divisiones en su seno. La amplia movilización de masas a través de los sindicatos y los comités de Unidad Popular aseguraron la victoria, aun cuando la desesperación de la derecha provocó la muerte del general René Schneider, jefe del ejército, quien se había negado a sancionar las maniobras golpistas.

Por fin, el 4 de noviembre de 1970, el nuevo presidente de la República se instaló en La Moneda y comenzó a dar cumplimiento al programa revolucionario de las fuerzas populares. De inmediato,

Allende restableció las relaciones entre los gobiernos de Chile y Cuba. De un país sometido a la influencia imperialista, con una economía controlada por los grandes consorcios norteamericanos, la nación chilena iniciaba el rescate de su soberanía plena, de sus recursos naturales y de su futuro económico y político.

El gobierno de la Unidad Popular recorrió una primera etapa, de noviembre de 1970 a abril de 1971, caracterizada por el desconcierto de la oposición burguesa y el vigoroso avance de las primeras reformas decretadas por el gobierno. Las medidas económicas preliminares estuvieron dirigidas a disminuir el desempleo, redistribuir el ingreso y reanimar la actividad industrial.

A la par se iniciaban las transformaciones de mayor alcance: expropiación de 350 latifundios, compra de bancos, adquisición por parte del Estado de empresas monopólicas industriales (textiles, acero, cemento) y minerales (carbón, salitre). En lo político, estas conquistas se tradujeron en el espectacular éxito de la Unidad Popular en los comicios de abril de 1971, en las que obtuvo el 51% de los votos.

Sin recuperarse plenamente todavía de la derrota electoral sufrida, la derecha arreció su campaña contra el gobierno, acusándolo de sobrepasar la legalidad. Utilizando todos los medios de comunicación a su disposición –70% de la prensa escrita y 105 de las 115 emisoras de radio–, la gran burguesía intentó desorientar a los sectores medios y enfrentarlos al proceso.

Con el asesinato de un ex ministro de Frei el 8 de junio de 1971, la derecha logró el pretexto que buscaba para pasar a la ofensiva. Entretanto, continuaban las expropiaciones de latifundios, las requisas de las industrias que incumplían o saboteaban las disposiciones oficiales, y se lograba, con la irrecusable anuencia del Congreso, la más importante reivindicación patriótica: la nacionalización del cobre.

Entre agosto de 1971 y enero de 1972, la burguesía usó las más variadas tácticas, dentro de una creciente unidad de propósitos para debilitar, y si era posible derrocar, al gobierno de Salvador Allende. Fueron los meses de las campañas contra el «desabastecimiento» y la llamada «degradación de la democracia»; de las manifestaciones aristocráticas, cacerolas en mano, y las primeras tropelías de

las bandas fascistas denominadas Patria y Libertad, organización terrorista al servicio de la contrarrevolución y el imperialismo. Fue también el momento de la visita del comandante Fidel Castro, quien al recorrer el país pudo palpar la adhesión del pueblo chileno a la causa de la Unidad Popular.

De febrero a octubre de 1972 se produjo un paréntesis de crítica y autocrítica en las filas de la Unidad Popular, mientras los planes sediciosos se aceleraron tras las masivas concentraciones del 4 de septiembre, en las que el pueblo manifestó su respaldo al gobierno revolucionario. En este período, Allende formó un gabinete con representación sindical y militar, del que formó parte el general Carlos Prats. En los meses siguientes, de noviembre de 1972 a marzo de 1973, el acontecimiento más significativo fue el viaje del presidente Allende al exterior (México, URSS y Cuba) y su memorable discurso en la ONU donde denunció las agresiones del imperialismo a Chile y se pronunció en favor del derecho de los pueblos a recuperar y explotar sus recursos naturales.

Con la extraordinaria victoria electoral de marzo de 1973, la Unidad Popular salió fortalecida, con el 44% de la votación. Ello precipitó los planes golpistas de la burguesía. Desde el llamado tancazo del 29 de junio de ese año hasta las sucias maniobras que obligaron a la salida del general Carlos Prats del gobierno –sustituido en la jefatura del ejército por el traidor Augusto Pinochet–, todo hacía presagiar el amargo desenlace.

Este se produjo con los allanamientos, los ultrajes y asesinatos previos al golpe del 11 de septiembre de 1973, y las masacres, la xenofobia, el terrible espectáculo del Estadio Nacional, las agresiones a las misiones diplomáticas –especialmente a la cubana– que le sucedieron ese trágico día. Al suicidio del presidente Allende, tras resistir en La Moneda junto a un grupo de sus más leales compañeros, siguieron los crímenes de todos los que directa o indirectamente aparecían asociados a la Unidad Popular. Era el inicio del régimen fascista de Pinochet, que se extendería sin solución de continuidad hasta 1990.

Otros cambios positivos de principios de los setenta

El decisivo peso que tuvo en estos acontecimientos la clase obrera chilena y sus organizaciones –entre ellas el Partido Comunista– fue casi coincidente con el proceso mediante el cual el proletariado argentino –después de estremecedoras jornadas de lucha como las del cordobazo (mayo-junio de 1969)– asediaba al régimen militar e imponía una apertura democrática. Lo mismo puede decirse de las luchas que se desarrollaron en Bolivia y Uruguay, pues los aguerridos mineros impusieron una especie de gobierno propio en La Paz, mientras el pueblo oriental vertebraba una impresionante alianza poli clasista en la cual los trabajadores de Montevideo jugaban un papel central.

Especial significación cobró la estructuración en Uruguay, en febrero de 1971, del Frente Amplio, encabezado por el general Líber Seregni, que se vislumbró como alternativa potencial de poder aglutinando a comunistas, socialistas, democristianos y otras fuerzas. Así también las esperanzas de cambios que rodearon el regreso del peronismo al gobierno de Argentina, desde mayo de 1973, primero con Héctor J. Cámpora en la presidencia y desde octubre de ese año con el propio general Perón –obtuvo más del 60% de la votación–, frustradas con su muerte el 1 de julio de 1974.

Casi paralelamente se registraban apreciables avances de las fuerzas progresistas del Caribe, no solo al lograr su independencia Jamaica (1962), Trinidad Tobago (1962), Guyana (1966), Barbados (1966), Bahamas (1973), Granada (1974) y Surinam (1975), sino también debido al establecimiento por Forbes Burham, de la República Cooperativa de Guyana (marzo de 1970), el acceso al poder en Jamaica del líder socialdemócrata Michael Manley en 1971 –quienes intentaron rescatar sectores claves de la economía, buscando nuevos mercados y fuentes de financiamiento– y los notables adelantos de la integración económica en el área: surgimiento en 1968 de la Asociación Caribeña de Libre Comercio (CARIFTA), devenida después (1973) en Comunidad Económica del Caribe (CARICOM).

Ya para esa fecha, el gobierno de Allende, como se ha dicho, había restablecido los vínculos diplomáticos con La Habana (12 de

noviembre de 1970), ejemplo que seguirían Perú (julio de 1972), Argentina (mayo de 1973), Panamá (agosto de 1974), Venezuela (diciembre de 1974) y otros países del continente. En gran medida, gracias a los esfuerzos de estos gobiernos, la III Reunión de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Washington (abril de 1973), aprobó el pluralismo ideológico como uno de los principios de las relaciones interamericanas, lo cual significaba el reconocimiento del derecho de cada nación a guiarse por sus propias concepciones. Poco después, en julio de 1975, en la XVI Reunión de Consulta de la OEA en San José de Costa Rica, 16 países del hemisferio consiguieron una resolución referente a la normalización de las relaciones con Cuba.

Por su parte, los gobiernos de México –en lo fundamental durante el mandato de Luis Echeverría de 1970 a 1976– y Venezuela –a partir de la llegada a la presidencia en 1974 de Carlos Andrés Pérez–, asumieron posturas nacionalistas de cierta relevancia, destinadas a fortalecer la independencia económica y a limitar la actividad de las corporaciones transnacionales. Una manifestación de esta política fueron las leyes firmadas por el presidente Carlos Andrés Pérez, en agosto de 1975 y enero de 1976, que establecieron el control estatal sobre el petróleo y el hierro.

También en Colombia el gobierno de Alfonso López Michelsen (1974-1978) puso fin al Frente Nacional, que legalizaba el reparto del poder entre los partidos Liberal y Conservador en base a los acuerdos de Benidorm (España) en 1956. El gobierno de López Michelsen se caracterizó también por su política independiente y la creación de un clima democrático interno de lo que fue expresión el nombramiento de un rector marxista en la Universidad Nacional y el reconocimiento oficial de la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), surgida en 1964.

A estas manifestaciones positivas del nacionalismo latinoamericano hay que añadir la aparición de organismos subregionales que excluían o limitaban la penetración de los capitales norteamericanos o la presencia de Estados Unidos. Ejemplos de ello fueron el Pacto Andino (1969), que aglutinó a Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile y Venezuela, y el Sistema Económico Latinoamericano

(SELA) (1975). Otra expresión de este fenómeno fue una mayor presencia de América Latina en los No Alineados y en las organizaciones internacionales que surgieron en este período para defender los precios de las materias primas: banano, cobre, estaño, azúcar, café y bauxita.

No obstante, el proceso integracionista centroamericano fracasó definitivamente en estos años, acelerado por la llamada Guerra del Fútbol o de las Cien Horas, entre El Salvador y Honduras, que se prolongó del 14 al 18 de julio de 1969. Este conflicto fratricida, en el que murieron cerca de dos mil personas, estaba motivado por la expulsión de Honduras de decenas de miles de trabajadores salvadoreños que ya no eran necesarios en las plantaciones bananeras de las empresas norteamericanas United Fruit y Standard Fuit Company.

Entre los factores que precipitaron el colapso de esta fase de notable avance de los cambios nacionalistas, democráticos y revolucionarios, se debe mencionar la campaña desestabilizadora e injerencista promovida por Estados Unidos contra diferentes gobiernos populares, la que reveló toda su crudeza en los trágicos sucesos de Chile. Ello vino aparejado con nuevas ampliaciones del dominio del capital norteamericano en América Latina y el notable crecimiento de la deuda externa, que pasó de menos de 3 mil millones de dólares en 1945 a casi 17 mil millones en 1968.

Además, la participación de los países latinoamericanos en el mercado mundial descendió del 8.5% que representaba en 1955 a solo el 5.3% en 1970. Ya en este último año, la brecha entre el nivel de vida de los norteamericanos y el de los habitantes del resto del planeta se había convertido en un gigantesco abismo: con solo el 6% de la población mundial, Estados Unidos ya producía y gastaba más del 70% de los bienes de consumo del mundo.

La oleada fascista contra el movimiento popular y democrático

Tras el descalabro de Vietnam, Estados Unidos, enfrentado a un adverso panorama mundial y a una desfavorable correlación de

fuerzas que se inclinaba cada vez más al socialismo y los movimientos de liberación, emprendió una brutal contraofensiva que tuvo en América Latina uno de sus principales teatros. La política reaccionaria desatada desde principios de la década del setenta, bajo la administración de Richard M. Nixon, se dirigía a liquidar los focos que en el continente disentían de las posiciones norteamericanas y a intentar frenar el incesante avance de las luchas populares que trataban de impulsar proyectos de desarrollo nacionalista y en algunos casos alternativas socialistas.

Regímenes de corte fascista, o que aplicaban ciertos métodos fascistas, surgidos en su mayoría de sangrientos golpes militares, se instalaron uno tras otro en diferentes países latinoamericanos, con su secuela de presos, torturados, asesinados o desaparecidos, haciendo gala de un absoluto desprecio por los derechos humanos y las libertades democráticas. Como parte de esta nueva ola autoritaria otra vez se derogaron las constituciones democráticas, cerrados parlamentos e ilegalizados partidos, organizaciones sindicales y estudiantiles.

En algunos lugares, la disolución de las clásicas instituciones de la «democracia representativa», no solo tenían un prioritario sentido antinsurgente, sino también estaba destinada a legitimar el nuevo bloque de poder constituido por la alta oficialidad derechista, la oligarquía tradicional y los emergentes círculos burgueses asociados al capital transnacional. En estos casos se trataba, en rigor, de la implantación de la dictadura terrorista de los grandes monopolios para doblegar a los pueblos e imponer un rígido programa económico en provecho de sus intereses.

En gran medida este proceso estuvo asociado a los desastrosos efectos de la endémica depresión económica de América Latina, que llevó a muchos gobiernos a la adopción de una ortodoxa política de estabilización monetaria en consonancia con los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI). Para contener la inflación galopante, detener el crecimiento de la deuda externa y propiciar la expansión económica, se restringieron los salarios de los trabajadores, se liquidó el reformismo agrario auspiciado por los viejos planes de la *Alianza para el Progreso*, se recortaron en forma sustancial los créditos a las pequeñas empresas y los subsidios estatales a los productos

esenciales, aumentándose las tarifas en los servicios públicos y en otras ramas de la infraestructura.

Con la finalidad de equilibrar la balanza de pagos, se redujeron las importaciones y se adoptó una completa liberalización cambiaria y de devaluación de la moneda, otorgándose mayores preferencias al capital foráneo. Como resultado de estas medidas entreguistas, en muchos países latinoamericanos se aceleró el proceso de concentración de capital y monopolización de los principales sectores económicos –junto a la internacionalización creciente de la industria–, pues las pequeñas empresas no estaban capacitadas para resistir los efectos combinados de la política neoliberal y los embates de los consorcios extranjeros.

De esta forma, en varias naciones de América Latina, sin romper el compromiso de clase con la oligarquía agroexportadora, se gestaron las condiciones para continuar la expansión de la gran burguesía monopólica criolla y transnacional. De esta manera, se inició el proceso de estructuración de una modalidad dependiente del capitalismo monopolista de estado.

La oscura época caracterizada por el predominio de regímenes fascistas y dictatoriales se abrió con el traicionero golpe contrarrevolucionario que el 11 de septiembre de 1973 derrocó al gobierno popular de Salvador Allende. Ante la creciente concientización del pueblo chileno, y en especial del proletariado, la burguesía monopólica y los Estados Unidos reaccionaron con todo su furor y barbarie, imponiendo en Chile un régimen fascista. En este sentido, la dictadura de Augusto Pinochet estaba emparentada con la asonada castrense de Brasil, que casi diez años antes depusiera al presidente Joao Goulart.

El gobierno militar brasileño, inaugurado en abril de 1964, liquidó el reformismo *trabalhista* y fue el comienzo de una férrea y criminal dictadura de corte fascista que aplastó cualquier conato oposicionista. Desde esa perspectiva, el gobierno brasileño fue la primera experiencia latinoamericana de esta clase de régimen, aunque naciera con bastante anterioridad al ascenso del fascismo en América Latina de los años setenta, pues sus rasgos característicos se habían ido perfilando con la promulgación de las actas institucionales, que eliminaron los últimos vestigios democráticos. Así, el fascismo brasileño sirvió de vehículo para estrangular las protestas obreras y las

manifestaciones estudiantiles, y para combatir la creciente actividad de las guerrillas urbanas.

La dictadura militar brasileña

Tras el golpe de Estado contra el presidente Joao Goulart, el poder quedó en manos de los jefes de las fuerzas armadas, que promulgaron, el de 9 de abril de 1964, la primera de una serie de leyes represivas: el *Ato Institucional* No. 1. Fueron suspendidas las garantías constitucionales y otorgadas amplias atribuciones al gobierno, entre ellas la facultad de anular los mandatos en puestos electivos y la suspensión de derechos políticos. Un congreso purgado legalizó la entrega de la primera magistratura al general Humberto Castelo Branco, quien representaba a una de las dos corrientes en que se dividían los actores de la asonada militar.

Los «castelistas», entre cuyos integrantes se ubicaban altos oficiales como Golbery de Couto e Silva –teórico de la geopolítica brasileña– y los hermanos Ernesto y Orlando Geisel, procuraban una conciliación con los viejos políticos y cultivar íntimas relaciones con los Estados Unidos. La otra tendencia militar, partidaria de medidas punitivas más fuertes contra la oposición, era la llamada línea dura o «costista», dominada por el ministro general Arthur da Costa e Silva. En materia económica, ambos sectores defendían un capitalismo neoliberal, apoyado por las inversiones extranjeras, aunque reservaban cierto papel a las empresas estatales y consideraban que «desarrollo económico» era sinónimo de «seguridad nacional.»

Entre las primeras disposiciones de Castelo Branco se inscribe la ilegalización de las huelgas y el control directo del gobierno militar sobre los sindicatos y sus actividades. Además, fue ratificado el acuerdo militar con los Estados Unidos, se rompieron relaciones con Cuba y se enviaron tropas a la República Dominicana, donde los marines norteamericanos habían desembarcado para impedir el triunfo del movimiento constitucionalista (abril de 1965).

A pesar de todas las medidas restrictivas contra la actividad de los partidos, en las elecciones directas para gobernadores, efectuadas

el 3 de octubre de 1965, los candidatos gubernamentales fueron derrotados en ocho estados. El revés electoral destruyó los planes destinados a modelar una apariencia democrática y provocó un endurecimiento del régimen.

El ala de «línea dura» implantó sus criterios a través del *Ato Institucional* No. 2, del 27 de octubre de 1965, que amplió la represión. De nuevo fueron suspendidas las garantías constitucionales, se volvieron a anular mandatos, a intervenir estados y municipios y canceladas las elecciones presidenciales. La prensa fue censurada y se le otorgó al Ejecutivo la facultad de disolver la legislatura nacional y de gobernar por decretos. Por un acta complementaria se disolvieron todos los partidos y se creó un sistema bipartidista integrado por la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) y el partido de oposición tolerada, Movimiento Democrático Brasileño (MDB).

La ARENA, dirigida por Adante Cardoso, reunió en sus filas a la mayoría de los parlamentarios de los antiguos partidos de derecha. Por su parte, el MDB, que apenas obtuvo un mínimo de bancas, aglutinó a los políticos moderados de los partidos políticos disueltos, como el Trabalhista, y quedó encabezado por los ex ministros André Franco Montero –del Partido Demócrata Cristiano (PDC)– y Ulysses Guimaraes. Pese a que este partido se había creado para hacerle el juego al gobierno, desde su segundo congreso en 1967 se atrevió a manifestar ciertas críticas al régimen militar.

Las medidas dictatoriales de Castelo Branco cerraron el camino a los principales políticos tradicionales que habían propiciado el golpe de 1964, quienes comenzaron entonces a hablar de «la revolución desvirtuada». La respuesta del gobierno no se hizo esperar: en vísperas de los comicios parlamentarios de fines de 1966 el Congreso Nacional fue clausurado y las estaciones de radio y televisión ocupadas por el ejército, mientras las medidas punitivas se hacían extensivas a los antiguos opositores al gobierno de Goulart. A principios de 1967, una vez que el Legislativo fue depurado de los elementos considerados indeseables, el Congreso fue reabierto y se aprobó una nueva constitución destinada a perpetuar la dictadura militar.

La carta fundamental de 1967, confeccionada por un grupo de juristas entre los cuales se encontraba Francisco Campos –el mismo autor

de la constitución del *Estado Novo*–, otorgaba amplias atribuciones al Ejecutivo y limitaba las facultades del parlamento y la autonomía de los estados. A pesar de que predominaban los artículos antidemocráticos –restringía el derecho de huelga, la libertad de los partidos, etc.– y de corte fascista, la carta magna de Castelo Branco aún conservaba el principio de la inmunidad parlamentaria, la autonomía del poder judicial, el derecho de *hábeas corpus* y otras garantías constitucionales.

Para detener la inflación –cuyo índice en 1964 fue de 91%–, contener el crecimiento de la deuda externa –unos 3,500 millones de dólares– y propiciar un nuevo ciclo de expansión industrial, se restringieron los salarios a los trabajadores, se liquidó el reformismo agrario, se recortaron sustancialmente los créditos a las pequeñas empresas y los subsidios estatales a los productos esenciales y se aumentaron las tarifas en los servicios públicos. Con la finalidad de equilibrar la balanza de pagos, se redujeron las importaciones y se adoptó una completa liberalización cambiaría y de devaluación periódica del *cruzeiro* (1968).

Además, se otorgó un tratamiento preferencial al capital extranjero. En agosto de 1964 se derogó la ley del 10% de repatriación de capital y se firmó después un acuerdo con los Estados Unidos para garantizar sus inversiones. Solo entre 1964 y 1966, la dictadura recibió más de 1,500 millones de dólares provenientes de la *Alianza para el Progreso*.

En la sustitución del mariscal Castelo Branco triunfó la «línea dura», que impuso a su candidato el general Costa e Silva. En líneas generales, la gestión económica de su gobierno, iniciado el 15 de marzo de 1967, estuvo basada en el aumento de las exportaciones industriales, mediante la expansión del área de producción estatal y la creciente participación del capital extranjero. En el plano interno, se afianzaron los dispositivos represivos. El endurecimiento de la dictadura tenía que ver con el auge de la lucha popular.

La eclosión del movimiento de masas había comenzado el 28 de marzo de 1968 cuando la policía asesinó a un estudiante de Rio de Janeiro, al reprimir las protestas contra la política educacional y las medidas autoritarias del gobierno. El 26 de junio la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) organizó una gigantesca manifestación,

encabezada por Vladimir Palmeira, que arrastró a las calles de la capital del estado de Guanabara a cientos de miles de personas.

En julio de ese mismo año, la situación se complicó al sumarse a las protestas estudiantiles los paros obreros. Las huelgas proletarias se intensificaron en los estados de Rio de Janeiro, Sao Paulo y Minas Geraes, particularmente en los cordones industriales paulistas donde dirigía la lucha el líder sindical José Ibraim.

En los meses siguientes, las protestas también se sintieron en el Legislativo, donde el diputado Marcio Moreira Alves condenó los desmanes gubernamentales. La dictadura lo acusó de injuriar a las fuerzas armadas y solicitó al Congreso la anulación de su inmunidad parlamentaria. Para sorpresa del gobierno, la cámara rechazó por mayoría la petición y se negó a permitir un proceso judicial contra Moreira Alves.

Con el objetivo de aplastar el auge del movimiento de masas e impedir nuevos desacatos, el presidente Costa e Silva dictó, el 13 de diciembre de 1968, el *Ato Institucional* No. 5. Mediante este decreto fascista se suspendió la constitución autoritaria que el mismo régimen se había dado y el Ejecutivo asumió poderes excepcionales, incluida la facultad de confiscar bienes y suspender el *hábeas corpus*. El Congreso fue cerrado y decenas de figuras de la oposición fueron privadas de sus derechos políticos y tuvieron que abandonar el país.

En medio de ese clima de terror, se hizo sentir la reacción de las organizaciones revolucionarias armadas que se venían vertebrando desde 1967. Nos referimos fundamentalmente a la Alianza de Liberación Nacional (ALN) y a Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR).

La ALN, encabezada por Carlos Marighela y Joaquin Cámara Ferreira, tenía su origen en células paulistas separadas del Partido Comunista Brasileño (PCB) por discrepancias por su colaboración con el Frente Amplio Opositor, creado en 1966 por políticos tradicionales como el expresidente Juscelino Kubitschek y Carlos Lacerda. La ALN coordinaría su actividad con el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre (MR-8), surgido a partir de disidencias juveniles del propio PCB en Sao Paulo y Guanabara, encabezadas por José Dirceu y Vladimir Palmeira.

También de las bases del PCB brotó el Partido Comunista Brasileño Revolucionario (PCBR), liderado por Mario Alves y Jacob

Gorender. Por su parte, la Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR) –a la que se incorporó espectacularmente el capitán Carlos Lamarca– era el producto de la integración de grupos disidentes de Política Obrera (POLOP) con antiguos miembros del Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) fundado por ex gobernador Leonel Brizola en 1966 y que un año después fracasara en sus planes para establecer una guerrilla rural. El MNR se disolvió debido a la inconformidad de su militancia con la línea de Brizola, exiliado en el Uruguay junto a su cuñado Joao Goulart, mientras algunos de sus miembros generaban el Movimiento Armado Revolucionario (MAR) y el Movimiento Revolucionario 26 de Julio (MR-26-7).

El ritmo de las acciones armadas, fundamentalmente realizadas por la ALN y la VPR, se intensificó en 1969. En esas circunstancias murió de una trombosis cerebral el presidente Costa e Silva y el alto mando militar asumió el poder, desconoció los derechos de sucesión del vicepresidente y adoptó nuevas medidas represivas, entre ellas la legalización de la pena de muerte.

La búsqueda de su sucesor se convirtió en un problema de «seguridad nacional», que causó choques, debates y enfrentamientos entre los militares. En definitiva, el vencedor en esta puja subterránea por el poder fue el general Emilio Garrastazu Médici, gracias a una componenda entre «castelistas» y «costistas», lo que le permitió ocupar la primera magistratura el 30 de octubre de 1969. Su elección fue confirmada por un congreso dócil –al frente figuraba el ex jefe de policía del *Estado Novo* Filinto Muller–, que con ese fin fue reabierto después de ser expulsados 6 senadores y 88 diputados.

En ese ínterin, se produjo la acción guerrillera más resonante de la época: el secuestro por comandos del MR-8 y la ALN, el 4 de septiembre de 1969, del embajador norteamericano Charles Burque Elbrick. La captura del representante de los Estados Unidos puso en crisis la dictadura y la obligó a acceder a todas las exigencias de los revolucionarios, entre ellas la liberación de varios importantes presos políticos y la lectura por los medios de comunicación de un manifiesto.

Pero el éxito de la acción se vio empañado con la muerte, el 4 de noviembre, en un enfrentamiento armado callejero, del veterano

dirigente de la ALN, Carlos Marighela. A pesar del duro revés, durante 1970 los guerrilleros urbanos llevaron a cabo otras importantes acciones armadas, como fueron los secuestros del cónsul japonés y de los embajadores de Alemania y Suiza.

Para combatir a las guerrillas urbanas, la dictadura militar formó una comisión nacional de seguridad, a la cual se le adscribió un poderoso aparato punitivo compuesto por todos los órganos represivos y los sanguinarios grupos paramilitares como el Escuadrón de la Muerte de Sergio Fleury. La campaña de aniquilamiento contra las organizaciones revolucionarias, unido a las dificultades para vertebrar un amplio apoyo de masas, terminó por hacerlas caer en manos de los cuerpos represivos.

El sucesor de Marighela al frente de la ALN, Cámara Ferreira, fue capturado y asesinado el 24 de octubre de 1970. Igual suerte corrieron a fines de ese año el comandante de las VPR, Eduardo Leite (Bucurí), y el líder del Movimiento Revolucionario Tiradentes, Devanir José de Carvalho. El 18 de septiembre de 1971, cayó en combate el ex capitán Carlos Lamarca.

La represión fascista, cuyo clímax se alcanzó entre 1969 y 1973, se combinó con una reaccionaria política exterior. Las posiciones internacionales de la dictadura militar se orientaron a fortalecer y propagar la contrarrevolución, especialmente en África y América Latina, como se puso al descubierto con el respaldo brindado por Garrastazu Médici al gobierno racista de Pretoria y los regímenes reaccionarios de Paraguay, Uruguay y Bolivia. Por otro lado, la ambición de convertir a Brasil en una gran potencia atómica, condujo a la dictadura a elaborar un ambicioso plan para negociar sus abundantes reservas de uranio con Israel y la República Federal Alemana.

En las condiciones creadas por la represión fascista se produjo un acentuado crecimiento económico, denominado por sus apologistas el «milagro brasileño». La economía volvió a reanimarse y se registraron altas tasas de crecimiento industrial y agrícola. El punto de partida de esa expansión fue la política del ministro Delfín Netto.

Así, se establecieron créditos flexibles y fue adoptado un sistema de regulación que permitía que los salarios se incrementaran en

menor proporción que los precios, lo que se tradujo en estímulos al mercado interno sin causar gran inflación (16% en 1973). Además, se elevaron los impuestos indirectos, junto a una redistribución de rentas en provecho de los empresarios privados y estatales. Las crecientes utilidades de las inversiones, unido a los abundantes créditos gubernamentales, atrajeron al capital extranjero, y aumentaron la producción.

La gran afluencia de empresarios e inversiones foráneas –se elevaron de 2 mil millones de dólares (1963-1966) a 17 mil millones de dólares (1967-1973)– tuvo lugar en una coyuntura internacional favorable a las exportaciones. El vertiginoso ascenso de la producción fabril tuvo por eje a la industria de artículos de lujo y de bienes de consumo duradero. Entre 1968 y 1973 la industria duplicó su producción, especialmente en la electro-energética, metalúrgica, construcciones mecánicas, química y cemento. Ya en 1971 a la industria de Brasil correspondía el 28% de toda la producción fabril de América Latina.

En ese período, los índices del Producto Interno Bruto (PIB) llegaron al 10% anual. En el mismo lapso, la agricultura creció a un ritmo del 5.4% y la industria al 15%. El volumen del comercio exterior se triplicó, mientras las reservas monetarias alcanzaron los 6,400 millones de dólares.

Particular incremento registró la exportación de manufacturas, pues en 1964 apenas proporcionaba a la economía nacional unos 100 millones de dólares (7% del total) y ya en 1972 suministraba mil millones de dólares (25%). No obstante, el sector agropecuario siguió siendo determinante en la obtención de divisas, aun cuando el aporte del café cayó de un 50% en 1960 a un 12% en 1973.

También se incrementó la participación estatal en la economía, así como su asociación con compañías foráneas. Petrobras, Electrobras, Siderbras, Telebras y otras pasaron a actuar como empresas típicamente capitalistas: obtuvieron grandes ganancias y contribuyeron a dinamizar la industria pesada y otras ramas básicas. El gobierno pasó a controlar el 38% de la banca, el 84% de los medios de transporte y las comunicaciones, el 65% de la siderurgia y el 54% petróleo y la minería. De las 582 empresas estatales que operaban a

principios de la década del setenta, casi la mitad se habían fundado después de 1964. Muy vinculado a la ampliación del área estatal de la economía estuvo el aumento de las inversiones gubernamentales en grandes obras de infraestructura.

Una faceta novedosa de la economía brasileña a partir de la década del setenta fue su tendencia a volcarse al exterior en busca de mercados, fuentes de materias primas y combustible. La presencia del capital y las mercancías de Brasil aumentó notablemente en algunos países limítrofes y en varias zonas de África. Además, el gobierno de Brasil firmó acuerdos económicos con diferentes naciones, entre ellas con Paraguay (1974), que permitieron la construcción de la gigantesca represa de Itaipú.

Sin embargo, estos cambios se hicieron a costa de excluir a las grandes masas de los beneficios de la acumulación y del progreso técnico, lo que se reflejó en el crecimiento de la población hambreada en el empobrecido *sertao* o en las sórdidas *favelas*. En un país que a principios de los setenta sobrepasaba los 110 millones de habitantes, más del 40% de su población vivía en condiciones de miseria y subalimentación.

En las ciudades, donde residían la mitad de los habitantes, ya había en esta época más de 10 millones de niños desamparados, mientras solo en Rio de Janeiro se estimaba un millón de personas marginadas en las villas miserias. El 20% de la población activa –unos 34 millones– estaba subempleada o sencillamente sin trabajo. Las condiciones de salubridad y educación eran de las peores del continente, pues Brasil pasó a ocupar, por el alto índice de mortalidad infantil, el nada honroso tercer puesto en América Latina, solo detrás de Haití y Bolivia.

La modernización de la agricultura –iniciada con el Estatuto de la Tierra de Castelo Branco– no acabó con los latifundios improductivos, aunque propició la aparición de grandes empresas agrícolas capitalistas. Los más perjudicados fueron los colonos, agregados, aparceros y arrendatarios, desalojados indiscriminadamente de sus valorizadas tierras y obligados a emigrar a las ciudades. Peor fue para los pueblos originarios, víctimas de sistemáticas campañas de exterminio promovidas por la voracidad de los latifundistas.

Con esos métodos, la agricultura de autoconsumo, e incluso ciertas áreas cafetaleras fueron desapareciendo, sustituidas por la ganadería, la soya o el trigo. Por su parte, la situación de los obreros agrícolas se volvió catastrófica: según el censo de 1970 el porcentaje de trabajadores rurales que recibió un salario inferior al mínimo legal oscilaba entre el 70% y el 95%. De esta manera, el «milagro brasileño» exhibido por la dictadura militar como un logro, no solo arrojó como balance un descomunal aumento de la deuda externa –13 mil millones de dólares en 1973– y el inicio de la desnacionalización de la industria, sino también un mayor abismo entre ricos y pobres.

Otros regímenes militares de derecha: la *Operación Condor*

El régimen militar fascista de Brasil fue el modelo que inspiró el sangriento golpe militar de Hugo Banzer en Bolivia, el 21 de agosto de 1971, que puso fin al gobierno nacionalista de Juan José Torres y cercenó las acaloradas sesiones del parlamento obrero que funcionaba en La Paz –verdadero «poder dual»–; así como la asonada contrarrevolucionaria de junio de 1973 en Uruguay, desatada cuando el presidente Juan María Bordaberry, en contubernio con los militares fascistas, dio un autogolpe de Estado, disolvió el Congreso y suspendió toda actividad política.

En sentido estricto, el golpe uruguayo no solo perseguía exterminar la lucha armada en las ciudades donde operaban los intrépidos tupamaros, organizados por Raúl Sendic. También pretendía anticiparse a un posible triunfo electoral del izquierdista Frente Amplio y su programa de cambios, que incluía una reforma agraria, la nacionalización de la banca y los principales sectores del comercio exterior.

El derrocamiento en marzo de 1976 del desprestigiado gobierno peronista de María Estela Martínez, y de su virtual «primer ministro», José López Rega, por los militares derechistas argentinos, aceleró el retroceso democrático que se vivía en este país sudamericano desde la muerte de su esposo el general Perón. El golpe en la Argentina marcó el principio de una tenebrosa dictadura terrorista, cuyo diagnóstico

resultó equivocado para algunas fuerzas de izquierda, internas, en particular el Partido Comunista, y externas, la Unión Soviética.

La dictadura militar argentina, encabezada hasta 1981 por el siniestro general Jorge Rafael Videla, se propuso ajustar cuentas al movimiento obrero y popular y al ala radical del peronismo, con la excusa de extirpar la subversión. Esto completó el dramático proceso de fascistización que tenía su centro neurálgico en el cono sur del continente. Con ello se creaban las condiciones indispensables a los monopolios transnacionales para un reordenamiento despiadado de las economías latinoamericanas en función de los requerimientos del sistema capitalista.

En forma paralela se vertebró una vasta operación represiva de carácter continental, articulada por los regímenes fascistas de la América del Sur y la CIA norteamericana, la llamada *Operación Cóndor*, dirigida al asesinato de más de 120 prominentes dirigentes populares y nacionalistas latinoamericanos. Entre las víctimas de esta tenebrosa conspiración internacional estuvieron Orlando Letelier, ex canciller chileno de la Unidad Popular, el ex presidente boliviano Juan José Torres, el político uruguayo Zelmar Michelini y el general chileno Carlos Prats, fiel aliado del derrocado gobierno de Allende en Chile.

A esta lista habría que agregar el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, el 24 de marzo de 1980, por un individuo estrechamente vinculado a la *Operación Cóndor*, el mayor Roberto D´Aubisson. En medio de este clima terrorista sin precedentes se produjo también la voladura, el 6 de octubre de 1976, de un avión civil de la Compañía Cubana de Aviación, con decenas de personas a bordo, por un grupo contrarrevolucionario de Miami, vinculado a esta tenebrosa red terrorista continental.

Como ya había ocurrido en Brasil, el camino recorrido por las dictaduras fascistas latinoamericanas para la reorganización estructural de la economía pasaba por imponer un vertiginoso descenso del nivel de vida de los trabajadores y una mayor entrega del país al capital foráneo. No obstante la similitud de sus objetivos, la política económica específica de cada uno de estos regímenes tuvo sus propias peculiaridades.

La dictadura militar brasileña, como se ha visto, reservó un papel importante al Estado en la esfera productiva y se proyectó un colosal crecimiento industrial, mientras en Chile y Uruguay tenían por fundamento las concepciones monetarias de la llamada escuela de Chicago. Por su parte, en Argentina se desarrolló una errática amalgama mediante la combinación de métodos de conducción económica monetarista, liberales y estatistas.

A diferencia de Brasil, donde se logró un crecimiento económico tan significativo como desigual y se preservó el área estatal, en los otros países se pretendió convertir al sector privado en el pivote del desarrollo económico. Para conseguirlo, aspiraban a que el mercado ejerciera automáticamente una función reguladora y estimulante sobre la economía, anticipando las disposiciones neoliberales que se pondrían de moda después.

Los gobiernos militares de derecha instalados en el poder en América Latina en los años setenta, estuvieron acompañados de la «modernización» al estilo fascista de antiguas tiranías como la de Stroessner en Paraguay, los Duvalier en Haití, los Somoza en Nicaragua y la de los altos oficiales genocidas guatemaltecos –Carlos Arana Osorio, Kjell Laujerud, Lucas Romero y Efraín Ríos Montt– y salvadoreños. Con la abierta complicidad de Estados Unidos, estos regímenes desataron una desembozada represión antipopular, fundamentada en el absoluto respaldo de sus fuerzas armadas y grupos paramilitares anticomunistas.

De esta forma, el panorama continental se ensombreció con la multiplicación de dictaduras fascistas y gobiernos reaccionarios –como los de Erik Gairy en Granada y Edward Seaga en Jamaica, quien en 1978 rompió incluso sus relaciones con Cuba–, prueba de como el *diktat* norteamericano se había vuelto a imponer plenamente. El triunfo momentáneo de la contrarrevolución fue un hecho consumado en casi todo el hemisferio, pero no duraría mucho tiempo.

Capítulo 13
LA REVOLUCIÓN SANDINISTA
Y EL OCASO DE LAS DICTADURAS

La dramática situación económica y social de América Latina, junto con el recrudecimiento de la represión y el ascenso de gobiernos fascistas y dictaduras militares, impulsó a fines de los setenta y principios de los ochenta nuevos brotes de lucha armada promovidos por organizaciones político-militares que se proponían alterar el injusto orden existente. En estas condiciones, y después de las derrotas sufridas en la primera mitad de los setenta por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en Uruguay, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile, la Acción Liberadora Nacional en Brasil y los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en Argentina, por solo citar las más conocidas, aparecieron nuevas organizaciones político-militares.

Entres estas pueden mencionarse el Movimiento 19 de Abril (M-19) en Colombia (1973), el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) (1983) y Sendero Luminoso en Perú (1980), el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) en Bolivia, Alfaro Vive Carajo (AVC) en Ecuador y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile (1984). Otras agrupaciones revolucionarias ya existentes se remodelaron o reorganizaron, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), surgiendo incluso agrupaciones unitarias de fuerzas guerrilleras como la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. De todas ellas, la única que logró alcanzar el poder por la vía armada fue el Frente Sandinista.

La revolución nicaragüense

Después de la muerte de Anastasio Somoza García, la familia del dictador fundador siguió ampliando su dominio del país. Los hijos de Somoza extendieron los tentáculos del clan a las extracciones mineras –en sociedad con empresas de Estados Unidos– y a las exportaciones de carne. A principios de los años setenta, los Somoza eran uno de los tres grupos financieros más poderosos de Nicaragua, controlando ramas como cemento, textiles, láctea, líneas marítimas y aéreas, puertos, tabaco, mataderos, pesquerías, seguros, construcciones, y otras industrias y construcciones

Para combatir la dinastía somocista se había constituido en julio de 1961, bajo el influjo de la revolución cubana, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), por los jóvenes Carlos Fonseca Amador, Silvio Mayorga, Tomás Borge y el veterano coronel del ejército de Sandino, Santos López. Los primeros grupos guerrilleros sandinistas se organizaron en Río Coco y Boca, aunque tras sus primeros reveses las siguientes acciones armadas tuvieron lugar en Pancasán, en mayo de 1967.

Pero el 27 de agosto de ese año, el ejército liquidó la columna completa del FSLN comandada por Silvio Mayorga, y desde entonces la organización perdió fuerza, hasta que la coyuntura nacional cambió tras el devastador terremoto que sacudió Managua en 1972. La catástrofe natural fue utilizada por el dictador Anastasio Somoza Debayle para apoderarse de la ayuda que se recibía del extranjero y monopolizar importantes áreas de la economía, lo que trajo aparejado que desde entonces su régimen fuera perdiendo apoyo de la burguesía nicaragüense y de la Iglesia, así como de algunos sectores y grupos de poder en Estados Unidos.

Al agravamiento de las condiciones de vida de una parte apreciable de la población nicaragüense, que se profundizó en la segunda mitad de la década del setenta, se sumó el creciente descontento de sectores de la propia burguesía ante la insaciable voracidad económica de la familia Somoza. El ascenso de la oposición burguesa a la dictadura, combinado con el deterioro del nivel de vida de amplios sectores populares, creó las condiciones para el avance de la lucha

armada contra el régimen somocista. La propia brutalidad de la represión gubernamental, que afectó incluso a la propia clase dominante, terminaría por conducir a una situación revolucionaria y a la crisis definitiva del somocismo.

En este nuevo contexto, los primeros enfrentamientos de la burguesía nicaragüense con el régimen somocista se dieron en marzo de 1974, cuando tuvo lugar la Primera Gran Convención de la Empresa Privada de Nicaragua. En el foro, aparecieron síntomas del resquebrajamiento de la relación entre los empresarios y el somocismo, pues se hicieron reclamos sobre el uso ilegal de los recursos públicos por parte del gobierno. Además, para aumentar el descontento, Anastasio Somoza Debayle había sido elegido como presidente de la república para un período sin precedentes de siete años.

Ya en diciembre de 1974 se creó la Unión Democrática para la Liberación (UDEL), encabezada por el empresario y periodista opositor, Pedro Joaquín Chamorro, donde se agruparon partidos y asociaciones nacionales de cierta envergadura. Dos semanas después de la creación de la UDEL, el Frente Sandinista resurgió con gran vitalidad mediante dos resonantes acciones armadas.

La primera fue la ocupación de la residencia del jerarca somocista José María, *Chema*, Castillo, el 27 diciembre de 1974, donde se celebraba una fiesta en la que participaban relevantes figuras y familiares de régimen de Somoza. El exitoso secuestro permitió la liberación de más de una docena de dirigentes del FSLN que estaban encarcelados. A continuación, en enero del año siguiente, los sandinistas realizaron la más exitosa operación militar realizada hasta entonces cuando la guerrilla encabezada por Carlos Agüero atacó el cuartel de Waslala, lo que marcó el reinició de la lucha armada en las zonas rurales del país.

A estas atrevidas acciones revolucionarias, la dictadura respondió implantando el estado de sitio, la ley marcial y la censura de prensa, medidas represivas que estuvieron vigentes hasta septiembre de 1977. De esta forma, se abrió un período coloreado por una sangrienta represión, que dejó un saldo de varios miles de muertos entre obreros, estudiantes y particularmente en la indefensa población campesina. Otro efecto de la represión fue la paralización por el momento de la actividad opositora de la burguesía no somocista.

El propio FSLN recibió fuertes golpes de la brutal reacción gubernamental. Como resultado de acciones militares o asesinatos cometidos por los órganos represivos de la dictadura, los sandinistas perdieron entonces a la mayoría de sus fundadores, entre ellos el propio Fonseca, su comandante en jefe, muerto en combate en las montañas de Zínica el 7 de noviembre de 1976. A esa altura, el FSLN ya se había divido en tres tendencias.

Una era conocida como la Guerra Popular Prolongada (GPP), que sostenía a toda costa la lucha armada y mantenía a sus principales dirigentes dentro del país: Ricardo Morales Avilés y Oscar Turcios, asesinados en 1973, y luego Henry Ruiz y Tomás Borge. La llamada Tendencia Insurreccional (TI), o tercerista, encabezada por los hermanos Humberto y Daniel Ortega, así como por Víctor Tirado, sería la más activa desde el punto de vista militar en los momentos finales de la dictadura y era, según su programa, la más moderada en términos político-sociales. Por último, estaba la llamada Tendencia Proletaria, liderada por Jaime Wheelock, Luis Carrión y Carlos Núñez.

La represión somocista y el creciente descontento de la población allanaron el camino para la frágil alianza del sector privado y la oposición tradicional con el Frente Sandinista, tal como se puso de relieve con la creación, en octubre de 1977, del llamado Grupo de los Doce, integrado por destacadas personalidades intelectuales, profesionales y empresariales de Nicaragua. Desde ese instante, la revolución nicaragüense en ciernes adquirió un carácter pluralista y obtuvo un amplio respaldo popular, que incluía prácticamente todo el espectro político y social del país.

Este reagrupamiento de fuerzas opositoras coincidió con el asesinato, por orden del dictador, el 10 de enero de 1978, del conocido periodista opositor y dirigente de la UDEL Pedro Joaquín Chamorro, quien se había convertido en una amenaza para el régimen –eran frecuentes sus denuncias en su diario *La Prensa*– y en verdadera alternativa de poder. El cobarde asesinato fue la chispa que incendió la pradera, pues abrió la crisis final del régimen somocista que acabaría con un reinado dictatorial de casi medio siglo.

En repulsa por el asesinato de Chamorro, se produjeron espontáneas manifestaciones de protestas por todo el país, transformadas

el día 23 de enero de ese año en una huelga general nacional convocada por los empresarios opositores hasta lograr la renuncia de Somoza. El primer golpe de respuesta por el alevoso crimen provino del FSLN cuando sus fuerzas guerrilleras, comandadas por Germán Pomares, Víctor Tirado y Daniel Ortega, atacaron el campamento militar contrainsurgente en Santa Clara, mientras los seguidores de Camilo Ortega ocupaban la ciudad de Granada y los combatientes guiados por el cura guerrillero Gaspar García Laviana y Edén Pastora se apoderaban de Rivas.

Casi al mismo tiempo, en febrero de 1978, estalló en el barrio obrero de Monimbó, en la ciudad de Masaya, una impresionante insurrección indígena que duró toda una semana y en la que cayó combatiendo el comandante Camilo Ortega. El genocidio desatado por Somoza y la Guardia Nacional para ahogar la insurrección popular dejó, en esos primeros meses de 1978, un impresionante saldo de más de 5 mil muertos y 12 mil heridos.

Después de tres semanas de paro patronal, la huelga se mostró incapaz de provocar la caída del régimen, por lo que fue dejada sin efecto. Tras el fracaso de esta forma de protesta pacífica, surgió el Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), encabezado por Alfonso Robelo, un rico empresario vinculado al capital norteamericano. El propio MDN fue el núcleo gestor, en mayo de 1978, del Frente Amplio Opositor (FAO), que sustituyó a la UDEL.

Pero el desconocimiento por parte de la FAO al FSLN, llevó en muy poco tiempo a que el Grupo de Los Doce se retirara de esta moderada alianza opositora, mientras el FSLN creaba, en julio de 1978, el Movimiento Pueblo Unido (MPU). El MPU era una alternativa popular a la FAO, con un carácter más popular y radical, que atrajo a organizaciones políticas, sindicales y estudiantiles, con un programa mucho más avanzado, pues incluía la desaparición de la Guardia Nacional y la nacionalización de las propiedades de los somocistas.

En ese ambiente, el 22 de agosto de 1978 se produjo el espectacular operativo sandinista en el Palacio Nacional, donde un comando guerrillero, dirigido por el comandante Cero (Edén Pastora) y la Comandante Dos (Dora María Téllez), se apoderó de

este emblemático edificio gubernamental. En la sede del Legislativo nicaragüense, el grupo armado retuvo a más de tres mil personas, muchos de ellos jerarcas del régimen, lo que obligó al gobierno de Somoza a negociar la liberación de medio centenar de prisioneros sandinistas y a permitir la lectura de comunicados del FSLN por la radio nacional.

Esta impresionante acción, fue seguida de alzamientos espontáneos de la población en Matagalpa. Ya a principios de septiembre de 1978, el propio FSLN lanzó la insurrección –denominada ofensiva final– en varias ciudades del país: Masaya, Chinandega, Diriamba, León, Jinotepe y Estelí.

En forma paralela, la FAO convocaba a una segunda huelga nacional, enseguida frustrada, y se registraba, a fines de ese mismo mes, el intento golpista del coronel Bernardino Larios para derribar la dictadura. La represión gubernamental fue tan brutal, que cerca de cincuenta mil personas huyeron del país a Costa Rica, Honduras y El Salvador, mientras la situación económica y social se deterioraba en rápida.

En esta crítica coyuntura se incrementó, como nunca antes, el apoyo internacional a la lucha contra la dictadura de Somoza. Ello explica que la insurrección sandinista, en la misma medida que crecía el repudio mundial a los crímenes del somocismo, recibiera un creciente respaldo no solo del gobierno revolucionario de Cuba, sino también el concurso de la socialdemocracia europea y de los presidentes Omar Torrijos de Panamá, Carlos Andrés Pérez de Venezuela, José López Portillo de México e incluso, el más vacilante de Rodrigo Carazo de Costa Rica.

Este inusual respaldo internacional conseguido por los revolucionarios nicaragüenses se fundamentaba en el enorme desprestigio de la despiadada dictadura somocista y la habilidad del FSLN para impulsar una sabia y flexible política de alianzas, aprovechando la postura de defensa de los derechos humanos adoptada por la administración de James Carter (1977-1981), quien desde octubre de 1978 pasó a apoyar abiertamente la demanda empresarial de una salida negociada de Somoza. Otro factor que contribuyó a la victoria sandinista fue, sin duda, la reunificación de las tres tendencias en

que estaba dividido el FSLN desde mediados de los setenta y que se concretó el 7 marzo de 1979.

Este día, las tres corrientes en que se había fraccionado el FSLN anunciaron su unidad y el establecimiento de una Dirección Nacional conjunta, formada por tres miembros de cada grupo, con el rango de comandante de la revolución. Tras la reunificación de la dirección del FSLN, esta organización propició, en febrero de 1979, la fundación del Frente Patriótico Nacional (FPN) en el que ocuparon lugar el MPU, el Grupo de los Doce, así como varios partidos, sindicatos y otras organizaciones.

A renglón seguido, en los primeros meses de 1979, se desató la gran ofensiva militar final. Aunque se había previsto iniciarla en mayo por el sur –donde el comandante Humberto Ortega tenía ubicado el más grande contingente armado del FSLN, con su retaguardia en Costa Rica–, en la práctica las acciones bélicas sandinistas comenzaron en el mes de marzo por el norte, de forma conjunta al llamado a huelga general. A principios de abril, guerrilleros del FSLN iniciaron la insurrección de Estelí, que permitió ocupar la ciudad durante diez días, mientras estallaban levantamientos populares por todas partes, incluida la capital.

Ante la exitosa ofensiva y el amplio repudio internacional al régimen somocista –en junio la propia OEA aprobó una resolución que pedía la salida del dictador de Nicaragua–, Estados Unidos se vio obligado a exigir a Somoza su renuncia con el propósito de preservar la Guardia Nacional e impedir un triunfo aplastante del FSLN. A esa altura, ya las guerrilleras sandinistas habían liberado León y Matagalpa, la segunda y tercera ciudades más importantes del país, así como una docena de pueblos más pequeños.

El 16 de julio de 1979, el FSLN anunció en San José de Costa Rica la formación de un gobierno provisional y, al día siguiente, el dictador Somoza tuvo que renunciar en forma precipitada y huir a Miami. Después se refugiaría en Paraguay, donde fue ajusticiado, en septiembre de 1980, por un comando revolucionario argentino.

Su sucesor, Francisco Urcuyo, un congresista liberal, solo duró unas pocas horas en el poder y también tuvo que abandonar a toda carrera el país, mientras la desmoralizada Guardia Nacional rendía

sus armas. Ante ese resultado, nadie pudo impedir el exitoso asalto a la capital por las fuerzas sandinistas que completaron su victoria el 19 de julio de 1979.

El gobierno provisional, denominado Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, estaba formado inicialmente por Violeta Barrios, viuda de Pedro Joaquín Chamorro, Daniel Ortega, Sergio Ramírez, Alfonso Robelo y Moisés Hassan. Entre las primeras disposiciones del gobierno revolucionario estuvo la abolición de la constitución somocista; la desaparición de la Guardia Nacional, la disolución de los desprestigiados partidos tradicionales vinculados a la dictadura; la confiscación de las propiedades de Somoza y sus allegados; la nacionalización del comercio exterior, las minas y demás recursos no renovables del país y otras medidas dirigidas a favorecer el desarrollo económico y social de Nicaragua.

En el período de julio a diciembre de 1979, la revolución sandinista contó con la participación de diferentes sectores de la burguesía que se habían opuesto a la dictadura de Somoza, como era el caso de Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robelo, miembros de la propia Junta de Gobierno, así como de varios ministros como el coronel Bernardino Larios. Pero en diciembre de ese año, una drástica reorganización gubernamental acentuó la presencia sandinista en el gabinete ministerial, pues Humberto Ortega sustituyó a Larios en el Ministerio de Defensa, Henry Ruiz se hizo cargo del de Planificación y Jaime Wheelock fue designado al frente del recién creado Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria.

La creciente presencia de los sandinistas en los órganos de poder desde fines de 1979, que indicaba una radicalización de la revolución, llevó a la salida del gobierno de figuras de la burguesía antisomocista como Robelo y Chamorro, que en abril de 1980 renunciaron a sus cargos en la junta y pasaron a la oposición. Para sustituirlos, fueron incorporados al gobierno Rafael Córdoba Rivas y Arturo Cruz, ambos del Partido Conservador Demócrata (PSD), los que tampoco estarían mucho tiempo apoyando el proceso sandinista.

A mediados de noviembre de 1980, envalentonados por el triunfo de Ronald Reagan en Estados Unidos, quien como era de esperar endurecería la política norteamericana hacia la revolución

sandinista, la mayor parte de los representantes de la burguesía se retiraron del Consejo de Estado, como preludio de la agresión externa que estaba a punto de iniciarse contra Nicaragua por parte del imperialismo norteamericano. Las conspiraciones de los integrantes de algunas de las agrupaciones empresariales y de otras fuerzas, incluido el propio Partido Comunista de Nicaragua, obligó al gobierno sandinista en octubre de 1981 a encarcelar a algunos de sus dirigentes, aunque en poco tiempo fueron liberados.

En forma vertiginosa, Estados Unidos pasó de las campañas mediáticas contra la nueva Nicaragua, la suspensión de programas alimentarios y el bloqueo de créditos de organismos financieros internacionales, al abierto financiamiento de la contrarrevolución. Además de asesoramiento técnico, los norteamericanos entregaron armas a las bandas contrarrevolucionarias de los ex guardias somocistas que operaban desde sus bases en Honduras, bajo el amparo del ejército de este país.

En febrero de 1981, como resultado de las defecciones que sufría la revolución sandinista y del creciente acoso norteamericano, la Junta de Gobierno quedó integrada por solo tres miembros, con Daniel Ortega como coordinador. Más adelante, en 1985, el proceso se institucionalizó mediante la creación de una asamblea nacional y la elección –con el 63% de la votación– a los máximos cargos ejecutivos de Daniel Ortega y Sergio Ramírez como presidente y vicepresidente respectivamente, responsabilidades que desempeñaron en muy difíciles circunstancias hasta 1990.

En ese lapso, se recrudeció la guerra de «baja intensidad» a que estuvo sometido el país por las bandas armadas contrarrevolucionarias sostenidas por Estados Unidos. No obstante todas las dificultades y agresiones, los sandinistas lograron impulsar la reforma agraria, se nacionalizó el sistema financiero, se creó una importante área de propiedad del pueblo con las empresas expropiadas a los somocistas y opositores al proceso revolucionario, se adoptó una nueva política tributaria, se impulsó la educación –incluida la alfabetización–, la salud pública y otras esferas de amplio beneficio popular.

Como parte de su estrategia de desarrollo nacional, el FSLN se propuso conjugar una economía mixta que combinara un Área de

Propiedad del Pueblo (APP) con una privada –Área Privada (AP)–, orientadas a superar el atraso económico, romper la dependencia y favorecer una redistribución del ingreso, en beneficio de las grandes mayorías. Pero este proceso de profundas transformaciones sociales y económicas se frustró por el agresivo cerco exterior y una guerra de desgaste que desangraba a la nación y que obligó incluso al FSLN a expropiar bienes a los que abiertamente se declaraban enemigos del proceso revolucionario, abandonaban el país y se alineaban con la contrarrevolución y los Estados Unidos.

Presionado por los procesos negociadores (Esquipulas, Contadora, etc.), y en el adverso clima internacional creado para los movimientos revolucionarios con la abrupta crisis de los países socialistas europeos, los sandinistas debieron concurrir a las elecciones presidenciales de febrero de 1990 en condiciones muy desventajosas. Una parte de la población de Nicaragua asociaba la reelección de Daniel Ortega y Sergio Ramírez con la prolongación de la guerra sucia impuesta por Estados Unidos, donde ahora gobernaba George Busch padre.

A debilitar la popularidad de los sandinistas también contribuyó la incapacidad del gobierno del FSLN para evitar que el mayor peso de la crisis económica y los terribles efectos de la guerra a que el país estaba sometido por los Estados Unidos recayera en los sectores populares. Muchas familias humiles eran diezmadas por los efectos del servicio militar obligatorio, implantado para luchar contra las bandas contrarrevolucionarias. En parte, eso explica la victoria obtenida en los comicios por la aspirante opositora Violeta Barrios de Chamarro, al frente de una heterogénea coalición de fuerzas políticas denominada Unión Nacional Opositora (UNO), quien gobernó hasta 1997, cerrando el ciclo revolucionario nicaragüense.

Reverdecer de las luchas revolucionarias

A pesar del desenlace negativo de la revolución sandinista a principios de los noventa, su triunfo veinte años atrás sobre la dictadura criminal de Somoza abrió, como antes hiciera la revolución cubana, una nueva fase de positivas transformaciones en la faz del

continente. En este sentido, la revolución nicaragüense asestó un duro golpe a la dominación norteamericana como parte de las luchas hemisféricas por su definitiva liberación y contribuyó a crear un clima de cambios positivos que hizo caer regímenes fascistas y añejas dictaduras a todo lo largo del continente, estimulando con su ejemplo el brote de nuevas fuerzas revolucionarias.

Importantes cambios tuvieron lugar en el escenario latinoamericano, al reaparecer un nutrido grupo de gobiernos civiles fruto de elecciones, de mayor o menor solidez, y de distinta proyección política. En la década de los ochenta la hegemonía de Estados Unidos entró en franco retroceso, no solo evidenciado por la aplastante victoria sandinista, sino también por la triunfante revolución que encabezara Maurice Bishop en la diminuta isla de Granada, el 13 de marzo de ese mismo año, y por las transformaciones democráticas ocurridas en la América del Sur.

En el área centroamericana, como en algunos otros escenarios del continente, el triunfo de la revolución sandinista dio nuevo impulso a la lucha armada. En Guatemala, el movimiento revolucionario se venía reorganizando desde principios de los años setenta, a pesar de los duros golpes recibidos en los años anteriores. El 19 de enero de 1972 apareció en las intrincadas selvas de El Quiché un puñado de combatientes, algunos de los cuales habían sido jefes guerrilleros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) que, encabezados por el comandante Rolando Morán (Ricardo Ramírez), crearon el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

Casi al mismo tiempo, entre los años de 1972 y 1974, el Partido Guatemalteco de Trabajo (PGT), comunista, y las FAR, estas últimas guiadas ahora por Pablo Monsanto (Jorge Soto), daban pasos hacia la unidad y relanzamiento de la lucha armada. De gran resonancia en el desarrollo de la guerra revolucionaria en Guatemala fue la aparición pública, el 18 de septiembre de 1978, de una nueva organización político-militar que llevaba varios años de tenaz preparación y entrenamientos secretos: la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA).

ORPA era dirigida por el comandante Gaspar Illom (Rodrigo Asturias), cuyo nombre de guerra lo tomó de un personaje de las

exitosas novelas de su padre, el afamado Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias. De las agrupaciones guerrilleras existentes, ORPA fue la única que no se definió como marxista y su acción estaba dirigida a la liberación de los pueblos originarios, en contra de la discriminación racial, por la justicia social y la reconstrucción nacional.

En estas circunstancias, comenzó un incipiente proceso unitario, estimulado por el triunfo sandinista en Nicaragua, que propició en enero de 1982 la formación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que aglutinó al EGP, ORPA, FAR y al Núcleo de Dirección del PGT. A la par, quedó estructurado un Comité de Unidad Patriótica (CGUP) con destacadas personalidades políticas, estudiantiles, intelectuales y religiosas, que se pronunciaron en favor del proceso revolucionario, respaldando el programa de la URNG.

Hay que añadir que poco después, el 1 de mayo de 1981, el PGT también se manifestó a favor de la guerra revolucionaria, con lo cual se amplió el espectro de organizaciones que impulsaban la lucha armada. Además, el 14 de febrero de 1981, el Comité de Unidad Campesina convocó a los principales líderes indígenas a las ruinas de Itsimté donde hicieron un llamado a la rebelión en el documento *Los Pueblos Indígenas ante el Mundo*.

En esas condiciones, los militares guatemaltecos extremaron la represión, como ocurrió a principios de 1979 cuando fueron ametrallados, en una verdadera cacería por las calles de la capital, los dos dirigentes más importantes de la oposición socialdemócrata: Alberto Fuentes Mohr y Manuel Colom Argueta. Mediante estos crímenes, perpetrados impunemente a lo largo y ancho de Guatemala, desaparecieron, o tuvieron que marchar al exilio, los principales políticos oposicionistas y quedaron al frente de los partidos legalizados figuras dispuestas a hacerle el juego al gobierno.

Sin duda el crimen de mayor repercusión tuvo lugar el 31 de enero de 1980, cuando las huestes policiales asaltaron e incendiaron la embajada de España, ocupada por un numeroso grupo de campesinos e indígenas de El Quiche que protestaban por la sangrienta represión contra las áreas rurales. Muchos de los refugiados en la sede diplomática ibérica murieron quemados vivos, entre ellos el ex vicepresidente Eduardo Cáceres Lennof, el ex canciller Adolfo

Molina, el padre de Rigoberta Menchú y el propio cónsul español. Con la dictadura del general Efraín Ríos Montt, iniciada en marzo de 1982, la represión alcanzó nuevas cotas, sobre todo contra la indefensa población campesina e indígena.

En el caso de El Salvador el proceso de unidad de las organizaciones armadas que combatían los regímenes militares adueñados del país comenzó el 10 de octubre de 1980. En esa fecha cuatro agrupaciones nacidas en la primera mitad de la década de los setenta y proclamadas marxistas-leninistas, las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí (FPL), el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional (FARN) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC) fundaron el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL).

A esa altura, la lucha revolucionaria salvadoreña había cobrado una fuerza inusitada, como se comprobó con la gran ofensiva militar del FMLN en enero de 1981, estimulada por la victoria sandinista en la vecina Nicaragua, a lo que los militares respondieron con una mayor represión y el aumento de las desapariciones y asesinatos, obra de los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad. Ese accionar criminal, que se cobró miles de víctimas civiles inocentes, había comenzado con el alevoso asesinato de monseñor Oscar Arnulfo Romero, en marzo de 1980, seguido del de tres religiosas norteamericanas.

Oleada civilista: el retorno de los militares a los cuarteles

En otros países, desde los años ochenta las masas trabajadoras volvieron a ganar las calles y el movimiento obrero se revitalizó, como parte de un proceso de apertura democrática, que en muchos lugares se conjugó con un rebrote del nacional reformismo, como ocurrió en Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Ecuador. En las tres primeras naciones, las exigencias obreras y populares, las insoportables proporciones de la crisis económica, unidas a un inusual despunte de

la oposición liberal burguesa, obligaron a los regímenes militares a prever un cronograma de regreso a los sistemas electorales.

En el caso argentino la decisión fue precipitada por la aplastante derrota sufrida frente a Inglaterra en la fulminante Guerra de las Malvinas –de abril a junio de 1982–, que estremeció todas las estructuras de poder en este país sudamericano ya agobiado por la debacle económica. La aventura colonialista del envejecido imperio británico levantó una ola de solidaridad latinoamericana con la justa causa del pueblo argentino y de repudio al incondicional apoyo prestado por Estados Unidos al gobierno de Londres.

El descalabro de los militares, encabezados por el general Leopoldo Galtieri, llevó a la Casa Rosada, en enero de 1984, al dirigente radical Raúl Alfonsín, quien obtuvo casi el 52 % de la votación. Durante su mandato aprobó las llamadas leyes de impunidad, Obediencia Debida (1986) y Punto Final (1987), que beneficiaron a más de mil represores de los terribles años de la dictadura militar (1976-1983).

Durante el mandato de Alfonsín también se produjo el desafortunado ataque armado al cuartel de la Tablada, por un comando del Movimiento Todo por la Patria, mientras el gobierno fracasaba en todos sus esfuerzos por sacar la economía de la persistente crisis (*Plan Austral*), de lo que fueron muestra los desesperados asaltos a supermercados de los sectores más humildes y marginados de la población argentina. En medio de la profunda crisis económica, Alfonsín fue sustituido en 1989 por el peronista Carlos Saúl Menen, que obtuvo el 47% de la votación, quien logró reelegirse en 1995 con un 2% más de los sufragios que en la ocasión anterior.

Con el propósito de alcanzar la presidencia, Menen prometió la reactivación económica y el retorno a la tradicional política laboral justicialista, pero una vez en el poder aplicó sin contemplaciones, durante los diez años de su mandato (1989-1999), las recetas neoliberales, a la vez que validaba el manto protector echado por su predecesor sobre los crímenes de los gobiernos militares. Para exigir el necesario ajuste de cuentas con la guerra sucia y en reclamo de justicia para los miles de desaparecidos, surgió el movimiento de las madres –y luego abuelas– de la Plaza de Mayo, convertidas en verdadero símbolo de los nuevos tiempos que reclamaba Argentina.

En circunstancias menos traumáticas se desenvolvió el traspaso del poder a los civiles en Uruguay y Brasil. En la Banda Oriental, el general Gregorio Álvarez debió entregar el gobierno, en sus manos desde 1981, a los representantes de los dos partidos tradicionales, primero a Julio María Sanguinetti en 1985, a cuyas manos volvió en 1995 tras el interregno del gobierno de Luis Alberto Lacalle.

En Brasil, la apertura democrática dirigida por los militares fue desbordada en 1984 por manifestaciones populares sin precedentes que estremecieron el país en apoyo de la enmienda constitucional *Dante*, presentada por la oposición con el propósito de restablecer el sufragio universal directo. Aunque el proyecto fue rechazado por el Congreso, los adversarios del gobierno lograron el 15 de enero de 1985 que el colegio electoral pusiera fin a más de veinte años de dictadura militar al escoger a Tancredo Neves, prestigioso político opositor como sucesor del general Joao Baptista Figueiredo en la presidencia de la República Federativa del Brasil desde 1979.

Sin embargo, una repentina enfermedad impidió a Neves tomar posesión de su cargo. Su muerte, tras penosa agonía, llevó al Ejecutivo, el 15 de marzo de 1985, al vicepresidente electo por la Alianza Democrática, José Sarney, quien a pesar de su larga hoja de servicios en los gobiernos militares impulsó la democratización y una política exterior independiente. Prueba de ello fue el restablecimiento de las relaciones con Cuba, sus visitas a la URSS y Angola, la posición pragmática adoptada en Contadora, el Grupo de los Ocho y otros foros internacionales, así como el proyecto de integración económica con Argentina y Uruguay.

Otro elemento significativo del gobierno Sarney fue la convocatoria de una asamblea constituyente, inaugurada en 1987. En la convención, la lucha de la izquierda contra la alianza de los diputados del centro y la derecha se encaminó a reducir el mandato de Sarney, cambiar el sistema de gobierno y conseguir reivindicaciones populares, entre ellas una redistribución agraria.

A mediados de 1988, la constituyente se pronunció en definitiva por la extensión a cinco años del gobierno, por el régimen presidencialista y el mantenimiento del *status quo* agrario. Pese a estos resultados y a su condición de minoría –solo reunían el 30% de los

escaños–, los delegados progresistas y de izquierda obtuvieron, entre otras conquistas, el derecho de huelga y la reducción de la jornada laboral semanal.

Precario restablecimiento democrático en Bolivia

Mucho más endeble fue el retorno a la democracia en Bolivia. Ante la aguda crisis económica y las crecientes presiones internacionales por las violaciones de los derechos humanos, el dictador Hugo Banzer se vio obligado a convocar a elecciones en noviembre de 1977 y dejar el poder ocho meses después. Su régimen fue seguido de inestables gobiernos civiles –los de Walter Guevara y Lidia Gueiler– que no pudieron evitar que en poco tiempo se abriera un breve paréntesis de sangriento autoritarismo militar entre 1980 y 1982.

Tras la obligada salida de la criminal dictadura militar del general Luis García Meza en 1981, vinculado al narcotráfico, una nueva etapa civilista comenzó en octubre de 1982 con el regreso al poder de los líderes históricos de la fracasada revolución boliviana de 1952: Hernán Siles Suazo –que gobernó hasta 1985–, respaldado por la Unidad Democrática Popular (UDP), integrada por la izquierda del MNR, el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR); y Víctor Paz Estenssoro del viejo MNR, quien lo hizo hasta 1989. El gobierno de Siles fue incapaz de hacer frente a la asfixiante crisis económica, agravada por las demandas sindicales y los sabotajes empresariales, por lo que se vio obligado a adelantar las elecciones presidenciales, que darían paso a la eliminación de las últimas conquistas populares que aún sobrevivían de la revolución boliviana de 1952.

Ello fue una tarea del gobierno de Estenssoro, quien daría rienda suelta a las fórmulas neoliberales después de lanzar en 1985 un patético mensaje al país donde sentenciaba teatralmente: «Bolivia se nos muere».[1] Para acabar con una economía fundamentada en el predomi-

[1] Maristella Svampa y Pablo Stefanoni (compiladores), *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, Buenos Aires, CLACSO Libros/Editorial El Colectivo, 2007, p. 6.

nio de las empresas públicas, que paradójicamente el mismo Víctor Paz había propiciado durante la revolución de 1952, puso en vigor el decreto 21060. Con el pretexto de combatir la hiperinflación, su gobierno adoptó sin tapujos un programa de corte neoliberal, con ajustes fiscales, privatizaciones masivas y desregulación de los mercados.

Una de las más significativas consecuencias de esta política fue el desmantelamiento de los centros mineros estatales, acompañados de despidos masivos, que obligaron a los obreros a emigrar a otros sitios en busca de empleo. Una parte de los antiguos trabajadores de las minas estatales se refugió en El Alto, ciudad periférica a La Paz, engrosando las filas del sector informal, mientras otros se trasladaban a las zonas del Chapare para dedicarse al cultivo de la coca. El fracaso de la llamada Marcha por la Vida de los mineros, en agosto de 1986, liquidó la última resistencia de los obreros y puso fin también a la hegemonía de la COB, hasta entonces la gran central sindical nacional.

En esas condiciones, el movimiento katarista se fortaleció con concepciones más radicales. Así sucedió con la aparición del Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA), dirigido por Luciano Tapia, que en contra de los partidarios de Genaro Flores esgrimió un programa de defensa de los pueblos originarios y de exaltación del nacionalismo aymara. Sin duda, un factor que contribuyó a movilizar al campesinado indígena y orientarlo a la lucha por el poder político fue la promulgación en 1988 por el presidente Paz Estenssoro de la ley 1008, que dio el marco legal para las políticas de erradicación indiscriminada del cultivo de la coca, principal sustento de la mayoría de la población rural.

Esta crítica coyuntura, la división del movimiento katarista entre los seguidores de Flores y los de Tapia, unido a los fracasos electorales del MITKA, llevó a fines de la década de los ochenta a que una de sus facciones adoptara como estrategia la lucha armada. Ese fue el caso de la aparición en 1989 del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), brazo militar de la organización Ofensiva Roja de los Ayllus Tupackataristas, que realizó varias acciones armadas hasta que muchos de sus dirigentes fueron arrestados, entre ellos Felipe Quispe y Álvaro García Linera.

Por su parte, el MRTK, convertido desde 1985 en MRTK de Liberación, quedó bajo la dirección del intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas, mientras su antiguo líder Genaro Flores pasaba a encabezar otra organización: el Frente de Unidad de Liberación Katarista (FULKA). Más adelante estas organizaciones se irían apagando en forma paulatina ante sucesivos reveses electorales.

A Paz Estenssoro le sucedió en la presidencia, en 1989, Jaime Paz Zamora, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), agrupación surgida en los años setenta a partir de militantes revolucionarios exiliados en Chile. Lo más significativo de este gobierno fueron sus esfuerzos diplomáticos por sacar la coca de la lista de sustancias controlados por las Naciones Unidas (ONU), lo que avivó las contradicciones de Bolivia con el gobierno norteamericano.

La compleja evolución civilista en Perú y Ecuador

En Perú y Ecuador el restablecimiento de gobiernos civiles se efectuó de manera muy diferente, ya que aquí no se trataba de sustituir dictaduras fascistas carcomidas, sino de remplazar gobiernos militares progresistas –el ecuatoriano bastante atemperado– cuyas expectativas se habían malogrado. El fracaso del reformismo militar en estos dos países andinos dio paso a regímenes civiles de diferente color político, proceso iniciado en Ecuador el 10 de agosto de 1979 con el ascenso a la presidencia de Jaime Roldós Aguilera y seguido, tras su muerte en un raro accidente de aviación, por el democristiano Osvaldo Hurtado Larrea (1981-1984), quien desarrolló una línea reformista que alarmó a la gran burguesía ecuatoriana.

El conservador León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, ocupó la primera magistratura hasta 1988 con un amplio apoyo del empresariado nacional y una política de extrema derecha, lo que motivó que dos años después se produjera un conato de sublevación de la aviación encabezado por el general Frank Vargas Pazzos y se registraran las acciones del movimiento político militar Alfaro Vive Carajo (AVC). A Febres Cordero le sucedió Rodrigo

Borja Cevallos (1988-1992) de la Izquierda Democrática, y a este Sixto Durán Ballén (1992-1996), viejo líder socialcristiano respaldado por la efímera Unión Republicana, expresión en lo esencial de los intereses de la zona serrana de Ecuador.

En Perú, por su parte, el retorno al poder de los civiles comenzó con la promulgación de una nueva constitución en 1979 y las elecciones presidenciales de mayo del siguiente año, que devolvieron el poder a Fernando Belaunde Terry –el mismo mandatario derrocado precisamente por los propios militares doce años atrás–, aunque la alcaldía de Lima fue ganada en 1983 por la opositora Izquierda Unida (IU) en la persona de Alfonso Barrantes. En julio de 1985 ocupó la primera magistratura el nuevo líder del APRA Alan García, pues su mentor y fundador de esta organización había muerto en 1979 tras presidir la convención constituyente.

A pesar de que el joven mandatario aprista llegó al poder prometiendo superar la crisis económica y mejorar el nivel de vida de los peruanos –la reducción del servicio de la deuda a solo el 10% de los ingresos fue solo un paliativo–, su mandato terminó instrumentando tres ajustes estructurales en un vano intento por controlar la hiperinflación. Las medidas neoliberales de Alan García no lograron resolver la profunda crisis económica y, en cambio, generaron una vasta protesta social, de lo que fue expresión la creciente actividad terrorista y militar de Sendero Luminoso. Ese contexto facilitó el ascenso al poder en 1990 de Alberto Fujimori, tras derrotar en los comicios electorales al conocido autor de *La ciudad y los perro*s (1963): Mario Vargas Llosa.

Como en Perú y Ecuador, esta etapa de la historia de los países latinoamericanos, iniciada en la década de los ochenta, caracterizada por el predominio de regímenes civilistas, vino acompañada de una primera oleada de ajustes económicos de tipo neoliberal, lo que empañó el clima de optimismo y las expectativas de prosperidad creadas en amplios sectores de la población con el traspaso del poder de las dictaduras militares a gobiernos electos.

El predominio de los gobiernos civilistas en América Latina en los años ochenta se vio fortalecido con la independencia obtenida por un grupo de pequeñas naciones del Caribe: Dominica (1978),

Santa Lucía (1979), San Vicente y Granadinas (1979), Antigua (1981), Barbuda (1981) y Belice (1981). Además, en varios países de la región ascendieron al gobierno fuerzas progresistas, como fue el caso de Desi Bouterse en Surinam (1980), Errol Barrow en Barbados (1986) y Michael Manley en Jamaica (1988).

No obstante, la intervención militar norteamericana contra la diminuta Granada, el 23 de octubre de 1983, aprovechando el suicidio de la revolución que significó el incalificable asesinato de Maurice Bishop ocurrido una semana antes, como parte del golpe de Estado orquestado por Bernard Coard, constituyó sin duda un sensible golpe para el movimiento revolucionario de la región. A pesar de la magnitud de este revés, el mismo tuvo lugar en un contexto regional caracterizado por los avances democráticos y progresistas.

A la par, los proyectos integracionistas o de concertación política de los países latinoamericanos fueron debilitándose o desaparecieron, con la excepción del SELA, el CARICOM y el grupo de Contadora, este último encaminado a buscar una solución política negociada al conflicto centroamericano. Para apoyar este esfuerzo, apareció también el denominado Grupo de Apoyo a Contadora y, desde 1986, el Grupo de Concertación y Cooperación de Rio de Janeiro (Grupo de Río), que terminaría por aglutinar a la casi totalidad de los países latinoamericanos y lograr después la firma de los acuerdos de paz para la convulsa área de América Central (Esquipulas I y II).

Fin de la tiranía duvalierista en Haití

El ocaso de las más viejas dictaduras del continente comenzó por el derrocamiento del régimen patrimonial establecido por François Duvalier, apodado *Papa Doc*, a fines de los años cincuenta y continuado desde 1971 por su hijo Jean Claude (*Baby Doc*). Los orígenes de esta satrapía tropical se remontaban a la endémica crisis económica y la inestabilidad política que laceraban Haití, agudizada en 1957, que hicieron posible el establecimiento de esta sangrienta dictadura duvalierista.

Antes de llegar al poder, Duvalier era un prestigioso médico negro que había sido ministro a fines de los años cuarenta del gobierno democrático de Dumarsais Estimé, del que se decía heredero político, y contaba con el respaldo de distintos sectores sociales negros, incluida la oficialidad del ejército y los siempre activos comerciantes extranjeros. Había sobresalido por su defensa de las creencias y valores del campesinado humilde.

Pero Papa Doc ascendió al gobierno aupado por el sector negro de la oligarquía, las capas medias y el propio ejército, encabezado por el general Antoine Kebreau, con el objetivo de impedir que, aprovechando la crisis existente, la élite mulata retornara al poder. Además, Duvalier contaba con el beneplácito de Estados Unidos, que en el apogeo de la Guerra Fría prefería contar en América Latina con gobiernos fuertes que impidieran levantar cabeza a las fuerzas de izquierda, especialmente a los socialistas y comunistas.

Por último, el ascenso a la primera magistratura de Papa Doc era también factible porque el ejército –debilitado por la represión desatada en apoyo a Magloire y sus propias divisiones intestinas– lo impuso en elecciones fraudulentas, organizadas por las propias fuerzas armadas, el 22 de septiembre de 1957. Gracias a estos respaldos, François Duvalier pudo hacerse cargo de la primera magistratura un mes después de los manipulados comicios.

El programa político de Duvalier proponía entonces realizar una revolución social en Haití, que eliminara el desempleo, la miseria y el hambre por medio de un aumento nacional de la producción y acabara con todas las formas de opresión y de sumisión del pensamiento y de las libertades civiles. El divorcio entre el discurso y la práctica fue rápido.

La dictadura de Papa Doc se caracterizó desde su arrancada por instaurar un régimen represivo. Los políticos, periódicos y partidos de oposición fueron perseguidos, incluyendo a sectores del clero católico. El ultraconservador arzobispo de la capital haitiana, el francés François Poirier, tuvo que irse del país, similar destino de los dos únicos obispos existentes y de numerosos sacerdotes.

Lo mismo sucedió con una buena parte de los sectores medios y la intelectualidad. Según algunos cálculos, hacia 1960, apenas tres

años después de iniciada la dictadura duvalierista, el 80% de los profesionales se había marchado al extranjero, el mismo año en que las protestas estudiantiles fueron acalladas con violencia extrema. Por su parte, la principal central obrera, la Unión Intersindical, fue disuelta luego de una huelga general en diciembre de 1963.

El 22 de septiembre de 1959, durante la conmemoración de su segundo año de gobierno, Duvalier marchó al lado de milicias civiles armadas, a las que otorgó el poder de mantener el orden. Se inició el reinado de los Tontons Macoutes, la policía secreta y personal de Papa Doc.

La tranquilidad social impuesta por la fuerza hizo que la burguesía negra, y también la mulata, aprovecharan las condiciones favorables de impunidad creadas por el régimen para hacer sus negocios sin ningún tipo de restricción. Este factor, unido a las amplias posibilidades de acumulación de capital abiertas por la corrupción y el contrabando, explican el respaldo de las élites a la dictadura.

La salvaje represión gubernamental, combinada con la declinante situación económica, estimuló la aparición de movimientos subversivos, muchos de ellos al calor del triunfo de la revolución cubana en 1959. Entre estos puede mencionarse la fundación ese mismo año del Partido de Alianza Popular, liderado por el doctor Jacques Stéphen Alexis, y el Partido Popular de Liberación Nacional.

Ambas organizaciones revolucionarias se fusionaron en el Partido Unificado de los Comunistas Haitianos (1968), que defendió la línea de lucha armada popular. Una verdadera cacería montada contra los militantes comunistas, en los primeros meses de 1969, tuvo como resultado la muerte o el encarcelamiento de la mayoría de sus militantes.

El temor de los Estados Unidos a que se repitiera otra revolución cubana en el Caribe favoreció la consolidación de Duvalier en el poder. En los primeros seis años de su dictadura, Haití recibió del gobierno estadounidense más de cien millones de dólares y una generosa ayuda militar, que incluyó la instalación de una base en la bahía de San Nicolás.

Ya en 1964, Estados Unidos no puso objeción a que Papa Doc se convirtiera en presidente vitalicio de Haití, tras un manipulado

plebiscito acompañado de una reforma constitucional. La propia CIA facilitó información sobre las actividades revolucionarias de la opositora Joven Haití, cuyos integrantes fueron exterminados al desembarcar en territorio haitiano en agosto de ese año.

Para mantenerse en el poder, al margen de la política represiva, Duvalier construyó una imagen de líder predestinado, que hábilmente combinaba con una política demagógica y paternalista, así como con la exaltación de la negritud. La propaganda oficial lo presentaba como el mayor patriota de todos los tiempos, Emancipador de las Masas, Renovador de la Patria Haitiana, Campeón de la Dignidad Nacional y otros rimbombantes calificativos. Además, se promovía entre la población, en su inmensa mayoría analfabeta, supersticiosa y devota de los cultos de origen africano, la creencia de que Papa Doc poseía poderes espirituales excepcionales.

La década de los sesenta fue de descenso absoluto y relativo en todos los renglones de la actividad económica. Esta situación se refleja en los datos siguientes: el valor de las exportaciones pasó de 40 millones de dólares en 1955 a 33 millones en 1969; el PIB evolucionó en el mismo período de 316 en 1960 a 333 en 1964 y 350 en 1969, mientras que el ingreso per cápita pasaba de 76.3 en 1960 a 73.8 en 1969 y el ingreso gubernamental de 27.7 caía a 25.4 en 1969.

A principios de 1971, François Duvalier sufrió un inesperado infarto y poco después murió (22 de abril), dejando en el poder a su hijo Jean Claude Duvalier, *Baby Doc*, quien entonces solo tenía 19 años de edad. A pesar de que la constitución haitiana vigente establecía un mínimo de cuarenta años para ocupar la primera magistratura, Jean Claude asumió la presidencia tras ser modificado este punto con el aval de un amañando plebiscito, respaldado por el gobierno norteamericano.

Duvalier –que era un verdadero *play boy*, amante de los placeres mundanos– abrió su reinado con una política de relativa liberalización y de mayor acercamiento a Estados Unidos, sobre todo durante el mandato del presidente James Carter. Aunque en lo fundamental, el gobierno del segundo Duvalier no difería de la criminal tiranía de su padre, durante un cierto tiempo el heredero se las arregló para

maquillar su rostro, bajándole el tono a las prácticas autoritarias y corruptas del régimen de su padre.

Con esa finalidad, Duvalier hijo instituyó algunas reformas presupuestarias y judiciales, sustituyó algunos miembros ya mayores del gabinete de Papa Doc con hombres más jóvenes, liberó a algunos presos políticos y alivió la censura de prensa, prometiendo la democratización gradual de las instituciones. También debió enfrentar las ambiciones de su hermana Marie Denise y su esposo, el coronel Max Dominique, que ya habían tenido conflictos con su padre y que fueron alejados del país con puestos diplomáticos.

De todos modos, el proceso sucesorio no estuvo exento de obstáculos, a pesar de que la mayor parte de los sectores oposicionistas estaban en el exilio y divididos. La acción más significativa contra la dictadura del segundo Duvalier ocurrió el 25 de enero de 1973 con el secuestro del embajador norteamericano Clinton Everett Knox –cuyo papel había sido decisivo en el traspaso del poder a Baby Doc y en el reconocimiento estadounidense– por un grupo armado que exigió la libertad de los presos políticos. También durante el mandato de Jean Claude Duvalier, el dictador sufrió diversos atentados: en 1981 resultó herido y en 1982 fracasó un intento de derrocarlo, por un grupo de exiliados al mando de Bernard Sansarico.

Para tratar de conseguir un mejoramiento de la estancada situación del país, abrió una estrategia desarrollista basada en la entrega total de los recursos nacionales al capital extranjero, que a cambio facilitó la concesión de préstamos, donaciones y créditos de Estados Unidos. A ello debe sumarse que los primeros años del gobierno de Duvalier II se desenvolvieron en una coyuntura internacional más favorable –el café y el azúcar registraban altos precios– y existía un mayor interés de los capitalistas norteamericanos por invertir en Haití, un país con una mano de obra muy barata, donde no había sindicatos, ni legislación laboral, ni huelgas, ni prensa de oposición.

Lo más novedoso de la penetración del capital norteamericano durante el gobierno de Baby Doc, que mantenía su viejo interés en los enclaves mineros y agrícolas, así como en el turismo, fue el fomento de la manufactura ligera. De esta forma, surgieron pequeñas

fábricas o maquiladoras, dirigidas a surtir el mercado norteamericano en bienes semi elaborados o elaborados, sobre todo textiles, juguetes y piezas electrónicas. Se calcula que fueron instaladas, desde principios de los setenta, unas 300 maquiladoras, lo que permitió que el volumen del capital foráneo invertido en Haití pasara de 80 millones en 1968 a 125 millones en 1975. Ya en 1973 el 40% de las exportaciones haitianas eran de esas producciones emergentes.

También favoreció una cierta mejoría, el incremento de las remesas por las decenas de miles de inmigrantes haitianos radicados en Estados Unidos, escapados del clima de terror duvalierista y de la pavorosa miseria del país. El reinicio de la entrada de inversiones en forma relativamente significativa en Haití, unido a las remesas, produjo un cierto respiro al agobiado país, aunque de muy poca duración.

De todos modos, poco alivió al empobrecido pueblo haitiano, puesto que la enorme corrupción y la impericia gubernamentales frustraron toda posibilidad de despegue económico y social. En 1977 la economía se estancó y se agravó la endémica crisis. Una de sus expresiones fue la salida de miles de haitianos hacia Estados Unidos en endebles embarcaciones, mientras los que no lograban escapar o cruzar a la República Dominicana debían emplearse en condiciones de semiesclavitud con tal de sobrevivir.

A principios de los años ochenta, ante la fuerte presión internacional en su contra, Baby Doc ensayó algunos cambios formales, que incluyó la adopción de una nueva constitución, el reconocimiento de diferentes partidos de oposición y la convocatoria de elecciones legislativas (1984), proceso en el cual sus partidarios se agruparon en el Comité de Acción Jeanclaudista (CONAJEC). En esos comicios, el CONAJEC ganó sin dificultad, pues la mayor parte de los oponentes estaban en las cárceles o habían sido sacados de la palestra pública mediante bárbaras torturas o asesinatos.

A la intolerancia y la brutal represión gubernamental, se sumó el desprestigio de Duvalier II, que era un descarnado depredador de la hacienda pública con la ayuda de su joven esposa, Michèle Bennett, quien procedía de la élite mulata. La creciente importancia de la familia de su mujer atemorizó al sector negro de la propia

burguesía, preocupado por una posible recuperación del poder por parte del ala rival de la oligarquía haitiana.

Para complicar más el panorama nacional, se realizó un referéndum que reafirmó la presidencia vitalicia, pues según los resultados oficiales arrojó una votación favorable del 99.98%. En mayo de 1984, unas cuarenta personas murieron en grandes motines y protestas contra el gobierno, que se repitieron en noviembre del siguiente año. A continuación, en febrero de 1985, decenas de miles de jóvenes se manifestaron en las calles de la capital.

Ya en 1986 las airadas protestas contra la dictadura, nutridas de campesinos pobres, se habían extendido a cinco de los nueve departamentos del país, con epicentro en las ciudades de Gonaives y Petit-Goave. Las manifestaciones populares contra Duvalier hijo tenían cierto respaldo de la Iglesia católica, que se venía transformando desde hacía algunos años, pues habían surgido centenares de «comunidades de base», que luchaban contra la miseria y apoyaban a los empobrecidos campesinos.

Otra causa del descontento era la difusión de más de un centenar de sectas protestantes, provenientes de Estados Unidos, desplegadas por todo el país, desplazando a la Iglesia católica en muchas zonas de su tradicional influencia. También esas iglesias emergentes competían por los feligreses con los arraigados cultos religiosos de origen africano.

Las violentas manifestaciones en contra del régimen alcanzaron tal magnitud, que el 7 de febrero de 1986 Baby Doc tuvo que huir a Francia, después de haber conocido de la retirada del apoyo de Estados Unidos y del golpe militar que orquestaba el jefe del ejército Henri Namphy. En su apresurada partida, Jean Claude Duvalier fue acompañado de sus familiares y dos decenas de personas, todos enriquecidos a costa de la miseria del pueblo haitiano.

Tras su estampida, el dictador fue acusado de robarse 120 millones de dólares de los fondos públicos, que luego dilapidaría en la costa azul francesa en gastos suntuarios, juergas y caprichos. El país se adentró en un período más convulso todavía, dominado por grupos neoduvalieristas, que terminó con la intervención norteamericana de 1994 a 1996 y que conduciría al desarme de los grupos paramilitares y la disolución del ejército y la policía.

Pero la ya endémica crisis haitiana no logró ser superada por los sucesivos gobiernos que vinieron después amparados por el movimiento popular denominado Familia Lavalás, del carismático ex sacerdote católico Jean Bertrand Aristide –quien tuvo el poder unos meses en 1991 y de 1994 a 1996 con el respaldo de los sectores más pobres– y el de René Préval entre 1996 y 2001.

El regreso al poder de Aristide en el 2001, en medio de acusaciones de fraudes electorales por parte de la oposición, cuando su popularidad y los cambios democráticos prometidos se habían esfumado, restableció la ingobernabilidad de esta atribulada pequeña nación caribeña. A ello también contribuyó la labor en contra del mandatario de la llamada Plataforma Democrática y el Grupo de los 184.

Las manifestaciones populares antigubernamentales y la reaparición de grupos armados opositores dieron lugar, un tiempo después, cuando se conmemoraba el bicentenario de la independencia, al derrocamiento del presidente Aristide, sustituido por Boniface Alexandre, y a una nueva intervención extranjera en Haití. En esta ocasión tenía el aval de la ONU, la que finalmente llevó en 2006 al regreso de Préval a la primera magistratura. Fue durante este segundo mandato, extendido hasta 2011, que la capital haitiana fue devastada en enero de 2010 por un violento terremoto que dejó miles de víctimas y daños incalculables.

Caídas de las dictaduras de Stroessner y Pinochet

En la última década del siglo XX continuó también consolidándose en América Latina la tendencia al establecimiento de gobiernos electivos y de retorno de los militares a los cuarteles, proceso acompañado de la caída de aborrecidas dictaduras como la de Duvalier, a la que siguieron la Stroessner en Paraguay y Pinochet en Chile. El derrocamiento de la tiranía paraguaya fue el resultado de un cruento –dejó varias decenas de muertos según los cálculos más conservadores– movimiento militar encabezado por el propio consuegro de Stroessner, el general Andrés Rodríguez, segundo hombre fuerte del

país, que el 3 de febrero de 1989 puso fin a una de las dictaduras más longevas de América Latina.

La caída de Stroessner fue festejada con espontáneas manifestaciones de júbilo popular y el principal líder de la oposición, Domingo Laino, fue aclamado por las calles de la capital. A renglón seguido, comenzó una liberalización política y un cronograma de transición democrática que incluyó el reconocimiento legal a los principales partidos.

Entre los cambios ocurridos entonces estuvo la reincorporación al oficialista Partido Colorado del Movimiento Popular Colorado (MOPOCO), que lo había abandonado en 1959. Esta organización era una de los integrantes, junto al Partido Demócrata Cristiano, el Partido Liberal Radical Auténtico y el Partido Revolucionario Febrerista, del acuerdo nacional de 1979, la alianza opositora a la dictadura de Stroeesner de mayor reconocimiento nacional e internacional.

En los comicios celebrados el primero de mayo de 1989 fue elegido el propio general Rodríguez, con el 73.3% de los sufragios, mientras su oponente Domingo Laino, del Partido Liberal Radical Auténtico, obtenía el 21.6%. Durante el mandato de Rodríguez se promulgó una nueva constitución, el 20 de junio de 1992, sobre la que fue elegido su sucesor, el civil Juan Carlos Wasmosy, quien ocupó la primera magistratura un año después para el período 1993-1998.

Pero el gobierno de Wasmosy fue víctima de los apetitos de poder de su vicepresidente Luis María Argaña, apoyado en el Partido Colorado y el ambicioso general Lino Oviedo, comandante militar del ejército. Muestra de ello fue la sublevación militar de abril de 1996 encabezada por el propio Oviedo a raíz de su pase a retiro por Wasmosy. Las protestas populares, unida al apoyo internacional que recibió el gobierno paraguayo, frenaron el golpe y Oviedo debió cumplir la orden presidencial, lo que fue interpretado como el puntillazo final a la larga hegemonía militar en el país que databa de 1936.

Además, Oviedo fue condenado a diez años de cárcel e impedido de presentarse a los siguientes comicios presidenciales que dieron la victoria al colorado Raúl Cubas Grau sobre Domingo Laino, respaldado por los liberales radicales y el Partido Encuentro Nacional.

El gobierno de Cubas Grau, iniciado el 15 de agosto de 1998, era rehén del general Oviedo, quien pretendía ser el verdadero poder del país, excarcelado dos días después por un cuestionado decreto presidencial.

Ante la inminente posibilidad de un juicio político en contra de Cubas Grau por sus inescrupulosos vínculos con el general Oviedo, orquestado por su vice Luis María Argaña, quien fue asesinado el 22 de marzo de 1999. El crimen generó manifestaciones y protestas populares, violentamente reprimidas por la policía, que obligaron al general Oviedo a exiliarse en Argentina y a Cubas Grau en Brasil, tras renunciar el 28 de marzo. Su lugar fue ocupado por Luis Ángel González Macchi, quien era el titular del Senado, en un gobierno de unidad nacional para salir de la inestabilidad política que sacudía al país.

También en Chile la participación popular sacó de sus carriles la transición democrática diseñada por las clases dominantes y el propio dictador Augusto Pinochet para perpetuar su régimen autoritario, quien con ese fin había puesto en vigor una constitución en 1980. La carta magna pinochetista preveía el abandono del poder por parte del dictador el 11 de marzo de 1990, mediante unas elecciones controladas que le garantizarían continuar como una especie de poder tras el trono.

Con ese propósito, y para aplacar el creciente rechazo nacional e internacional a la dictadura, Pinochet convocó a un plebiscito para el 5 de octubre de 1988, contemplado en la propia constitución de 1980. Pero la campaña desarrollada por la recién creada Concertación de Partidos por la Democracia, alianza de organizaciones que se pronunciaban por el voto negativo a la propuesta gubernamental, encabezada por demócratas cristianos y socialistas, resultó una derrota para Pinochet y forzó su repliegue, tras casi 17 años de poder absoluto. Así se abrió paso a la llamada transición a la democracia, en realidad a una democracia restringida neoliberal.

La apertura permitió el ingreso en La Moneda en 1990 del demócrata cristiano Patricio Aylwin, tras su victoria electoral con el 55% de la votación. Este triunfo fue también posible gracias al

concurso de la propia Concertación de Partidos por la Democracia, a la que se integraron otras fuerzas democráticas como el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical Social Demócrata (PRSD), este último heredero del viejo radicalismo de la segunda mitad del siglo XIX.

A pesar del importante cambio político, todavía durante un tiempo Pinochet siguió al frente del ejército y gozando de una serie de privilegios, entre ellos el puesto de senador vitalicio. Esa condición también se la habían reservado a otros jefes castrenses en retiro, que además habían establecido la impunidad legal por los crímenes cometidos durante la dictadura, junto a un conjunto de restricciones constitucionales a la democracia.

No obstante, la imagen e influencia de Pinochet se fue erosionando rápidamente, como el propio sistema político restrictivo diseñado por los militares. Ya en octubre de 1998, el anciano ex dictador fue detenido en Londres, por más de un año, en cumplimiento de una orden de un juez español que le había abierto causa criminal. En su propio país también fue acusado de varios cargos, entre ellos el de enriquecimiento ilícito, los que logró evadir alegando problemas de salud. En 2006 falleció de muerte natural, sin haber sido procesado por sus múltiples crímenes.

Fuera de la Concertación quedaron algunas pequeñas organizaciones de izquierda, sobrevivientes de la brutal represión pinochetista, como el Partido Comunista, la Izquierda Cristiana y un sector del antiguo Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). En particular, el MIR y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un desprendimiento del Partido Comunista, se habían destacado, en los años más duros de la dictadura, por el enfrentamiento armado contra el gobierno y su aparato represivo. Incluso, entre las acciones del Frente Manuel Rodríguez estuvo el frustrado intento de ejecutar al dictador en septiembre de 1986.

Pese a todas sus promesas electorales, la Concertación continuó la política neoliberal de la dictadura e incluso realizó nuevas privatizaciones. Esta alianza logró repetir su triunfo con la elección a la primera magistratura del demócrata cristiano Eduardo Frei hijo, para el período de 1994 a 2000, y luego, en este último año, con

Ricardo Lagos. Este último procedía del mismo Partido Socialista de Salvador Allende, aunque purgado de su radicalismo de antaño y nutrido con cuadros procedentes de los restos del MIR y del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU).

A Lagos le sucedió en la presidencia en el 2006 la también miembro del Partido Socialista y ex ministra de Defensa en su gabinete, Michelle Bachelet, hija de un general asesinado por la dictadura pinochetista. En 2010, sin embargo, la Concertación fue derrotada en los comicios presidenciales, a lo que contribuyó en forma decisiva la importante escisión en la alianza gubernamental encabezada por Marco Enríquez Ominami, hijo del fundador y mártir del MIR en la lucha armada contra Pinochet, Miguel Enríquez, que consiguió el 20% de la votación.

La división de la alianza de centro-izquierda facilitó el triunfo al aspirante de la derechista Alianza por Chile, Sebastián Piñera, que ha conseguido durante su mandato provocar un fuerte rechazo de la ciudadanía, que según las encuestas supera el 65% de la población. Expresión de la oposición frontal a su gobierno han sido las protestas protagonizadas por los mapuches y la multitudinarias manifestaciones estudiantiles, en defensa de la educación pública, encabezadas por una nueva generación de dirigentes juveniles como la carismática Camila Vallejo, militante del Partido Comunista.

Una «década perdida» para el desarrollo económico

La mayoría de los nuevos gobiernos civilistas establecidos en los años ochenta en América Latina terminaron abandonando la retórica populista electorera que los había conducido al poder y aceptando la profundización del programa de libre mercado que, de una u otra manera, habían enarbolado los regímenes militares y las dictaduras defenestradas. De esta manera, comenzaron a aplicar las medidas y reformas impuestas por el FMI y el Banco Mundial.

Casi en todas partes al sur del río Bravo se comenzaron a desmantelar los programas de ayuda social, a limitar los derechos

sindicales y reducir el área estatal de la economía y los servicios, en detrimento del nivel de vida de la población y los planes de desarrollo económico y social. Las empresas públicas se abrieron a la privatización y se aseguró el pago de la onerosa deuda externa. Entre 1982 y 1990 se enajenaron por este concepto 773 mil millones de dólares y el monto de la deuda en ese lapso pasó de 220 mil millones a 441 mil millones de dólares.

Ahora, por primera vez en la historia latinoamericana, no solo la liberalización política se convirtió en una tendencia predominante en todo el hemisferio, con el consecuente fortalecimiento de la hegemonía de los sectores vinculados al mercado y al gran capital, sino que también las relaciones gubernamentales de América Latina con Estados Unidos alcanzaron un nivel de identificación y sintonía sin precedentes.

Como resultado de estas políticas neoliberales, antes de concluir sus mandatos la mayoría de estos gobiernos surgidos de procesos electorales debió enfrentar profundas crisis económicas. Ello se expresó en un creciente desempleo, alza de los precios de los productos básicos, caída de los salarios reales, aumento de las enfermedades, desnutrición de sectores importantes de la población, entre otros efectos negativos. En ciertos casos, este tétrico panorama se vio agravado por escándalos de corrupción que socavaron la credibilidad del restablecido sistema «democrático representativo».

En estos años ochenta, que los economistas denominaron la década pérdida, América Latina comenzó a padecer la crisis más profunda y prolongada desde el *crack* de 1929. Como prueba de ello, solo entre 1981 y 1991 el PIB per cápita de la región descendió 8.1%. En algunos países latinoamericanos el declive fue mucho más acentuado que el indicado por esta cifra promedio: 28% en Perú, 20% en Argentina y 17% en Venezuela.

Si en 1950 América Latina contribuía al 14% del PIB mundial, en 1998, incluido Brasil, representaba solo el 8.8% y en el mismo lapso su participación en el comercio mundial pasó del 12% al 3.5%. Las implicaciones sociales de este proceso de deterioro constante de la economía fueron verdaderamente alarmantes: en 1980 el 41%, esto es, 136 millones de latinoamericanos vivía en la pobreza, cifra elevada a 170 millones (43%) en 1986.

De la apertura controlada a la negociación en Centroamérica

Otra característica de los años ochenta fue que Estados Unidos pretendió utilizar en provecho de sus planes contrainsurgentes la atmósfera civilista existente entonces en América Latina, fraguando para ello inconsistentes aperturas políticas, tal como indicaron las elecciones presidenciales diseñadas entonces para la convulsionada zona de Centroamérica y que llevaron a la presidencia a Roberto Suazo Córdoba en Honduras (1982-1986), a José Napoleón Duarte en El Salvador (1984-1989) y a Vinicio Cerezo en Guatemala (1986-1991).

En El Salvador el creciente desprestigio de las fuerzas armadas salvadoreñas por la flagrantes violaciones de los derechos humanos –el ejército bombardeó áreas densamente pobladas en 1989 y uno de sus batallones especiales cometió el brutal asesinato de seis académicos jesuitas de la Universidad Centroamericana–, obligó al Congreso de Estados Unidos a recortar en junio de 1990 la ayuda a este país. En estas condiciones, el gobierno salvadoreño, ahora en manos del sector más moderado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), encabezado por el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994), se vio compulsado a abrir negociaciones con el FMLN, en medio del empantanamiento del conflicto militar.

Dentro del FMLN, que había iniciado lo que sería su última gran ofensiva militar el 11 de noviembre de 1989, ya había desaparecido de su dirección, en los trágicos sucesos del 6 y 12 de abril de 1983, el sector más intransigente y dogmático en la aplicación de las tesis de la lucha armada. Ello fue resultado del asesinato de Mélida Anaya Montes, segunda jefa de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y el suicido de su jefe Salvador Cayetano Carpio, *Marcial*, quien era su principal sostén.

La expresión programática de la evolución política del FMLN hacia una negociación fue la adopción de la *Plataforma de Gobierno de Amplia Participación* (GAP), hecha pública el 31 de enero de 1984, que sustituyó a la más radical de cuatro años atrás denominada *Plataforma Programática del Gobierno Democrático Revolucionario*. En

el nuevo programa se eliminaba la exigencia de la disolución de las fuerzas armadas y se abría la posibilidad de una negociación política para buscar una solución pacífica al conflicto.

Los antecedentes del proceso de paz en El Salvador estaban en las reuniones que en 1986 y 1987 celebraron los presidentes centroamericanos en Esquipulas I y II, aunque las negociaciones entre las partes solo comenzaron en México, en septiembre de 1989, con el patrocinio de la ONU. Ello permitió alcanzar el acuerdo de Ginebra en abril de 1990 y de México un año después.

Los pactos se concretaron finalmente mediante el Acuerdo de Paz de Chapultepec (México), el 16 de enero de 1992, que permitió abrir el proceso de desmovilización de las guerrillas, su reinserción en la sociedad y en la política salvadoreña. Los acuerdos incluían la depuración del ejército y la formación de una nueva policía y se reconocía al FMLN como partido político.

Para el caso de Guatemala, la apertura controlada partió de una asamblea constituyente (1984), que elaboró otra carta magna –reconoció ciertos derechos de los trabajadores– y propicio el regreso de algunos exiliados, en particular de filiación socialdemócrata. También fueron aprobadas nuevas leyes electorales e instituciones (Corte Constitucional, Tribunal Supremo Electoral Independiente, Procuraduría de los Derechos Humanos, etc.). En ese ambiente, se realizaron los comicios presidenciales de noviembre y diciembre de 1985 que dieron el triunfo, en la segunda ronda, a Vinicio Cerezo Arévalo.

El gobierno de Cerezo, el primer presidente civil en veinte años, se inició el 14 de enero de 1986, aunque su política se vio afectada por la falta de recursos económicos, de créditos internacionales y por la enorme influencia del ejército. Esto último estaba en consonancia con los acuerdos que le permitieron a Cerezo llegar al poder, que concedían inmunidad a los militares comprometidos con los crímenes de guerra y creaban una democracia electoral formal, en la que las fuerzas armadas seguirían ejerciendo un verdadero control del país.

A pesar de su estrecho margen de maniobra, Cerezo pudo iniciar negociaciones con las organizaciones revolucionarias mediante

una Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), encabezada por monseñor Rodolfo Quezada Toruriño, surgida como parte del plan de paz para la región de Esquipulas II. Estos primeros contactos entre el gobierno y la guerrilla en más de un cuarto de siglo, aceptados por el ejército, permitieron la firma en Oslo, el 29 de marzo de 1990, de un acuerdo básico para la búsqueda de la paz en Guatemala suscrito por el CNR, los partidos políticos y la URNG.

Pero el avance de una verdadera democratización y del proceso de paz se vio limitado por la incontrolada represión del ejército en las zonas rurales y la incesante violación de los derechos humanos por la policía, las bandas paramilitares y escuadrones de la muerte

Su sucesor, el conservador Jorge Serrano Elías, cediendo a la intensa presión internacional, presentó una propuesta de *Plan Total de Paz*, el 3 de abril de 1991, que por primera vez reconocía a la guerrilla como contraparte y permitía el regreso de los refugiados.

Además, Serrano Elías reunió la primera comisión negociadora que incluyó a oficiales del ejército. Pero las conversaciones con los representantes de las guerrillas, a pesar de un acuerdo de reconciliación firmado en Querétaro el 25 de julio de ese año, se desarrollaron con altibajos y terminaron otra vez en un callejón sin salida, debido a los incumplimientos del gobierno y las fuerzas armadas, así como por sus constantes violaciones de los derechos humanos.

Además, el frágil gobierno de Jorge Serrano no lograba consolidarse, acorralado por la oposición parlamentaria y la agudización de la crisis económica. Para resolver la situación política, y creyendo contar con el respaldo incondicional de los altos mandos militares, el presidente dio un autogolpe de Estado el 25 de mayo de 1993, imitando el de Alberto Fujimori en Perú. Tras disolver el Congreso y derogar la constitución de 1985, la Corte Suprema y otras instituciones, estableció un precario régimen dictatorial que terminó por hacerle perder el respaldo militar, en medio de la oposición generalizada –incluida la de Estados Unidos y la Unión Europea–, obligándolo finalmente a buscar refugio en Panamá.

Para salir de la crisis institucional, el restablecido Congreso Nacional escogió como nuevo mandatario, el 5 de junio de 1993, a Ramiro de León Carpio, procurador de los derechos humanos, a

pesar de que no pertenecía a ningún partido ni contaba con una base política propia. El presidente Carpio, llegado al poder con cierta popularidad, emprendió, bajo la presión de los empresarios, una fuerte cruzada para limpiar el Legislativo y el Tribunal Supremo, órganos desprestigiados por la abierta corrupción.

Gracias a la mediación de la Iglesia, el nuevo mandatario pudo convocar a elecciones legislativas que permitieron el retorno de la legalidad y la renovación del parlamento el 14 agosto de 1994. A pesar de la extrema debilidad del gobierno de León Carpio, el principal logro de su mandato fue el avance conseguido en el proceso de paz, favorecido por la coyuntura internacional creada tras la caída del socialismo en Europa Oriental y por el consenso nacional existente a favor de una solución negociada con la URNG que permitiera estabilizar al país. En 1994 ello se concretó con la firma en México y Oslo de los acuerdos de derechos humanos (29 de marzo), de restablecimiento de personas desplazadas (17 junio), de esclarecimiento histórico (23 de junio) y sobre identidad y derechos indígenas (31 de marzo).

En definitiva, correspondió al gobierno de Álvaro Arzú, miembro de una familia de la vieja oligarquía guatemalteca, culminar con éxito en 1996 el proceso negociador, que había sido el eje de su campaña electoral. Este resultado fue posible debido a que el presidente Arzú contaba con un cierto consenso entre la burguesía y tenía mayor autoridad frente a las pretensiones de los militares que sus predecesores, como se comprobó en los primeros meses de su gobierno con la destitución de ocho generales y otros altos oficiales acusados públicamente de corrupción.

Otra prueba de su mayor fortaleza política fue el viaje secreto del mandatario guatemalteco a México, para reunirse con representantes de la guerrilla (25 de febrero de 1996) y que permitió que al mes siguiente la URNG determinara unilateralmente el cese al fuego. En definitiva, el 29 de diciembre de ese mismo año, se firmó de manera solemne el *Acuerdo de Paz Firme y Duradero*, que puso fin a más de tres décadas de enfrentamiento armado en Guatemala.

Los mismos acuerdos permitían la desmovilización guerrillera, el regreso de los refugiados, la reducción del ejército en un

tercio de sus efectivos, la eliminación del poderoso Estado Mayor Presidencial y la creación de una policía civil. El fin de la guerra dejó como terrible balance una sociedad desgarrada, con más de 150 mil muertos y 50 mil desaparecidos, además de cientos de miles de refugiados en el exterior –fundamentalmente en México y Estados Unidos–, lo que ubicó a Guatemala en el primer lugar de los países afectados por la violencia.

La terminación de la sangrienta guerra civil en El Salvador y Guatemala tenía que ver de manera directa con el brusco giro que había tenido lugar a principios de la década del noventa en la correlación de fuerzas internacionales. Nos referimos a la crisis del socialismo europeo y la desintegración de la URSS, que en el plano regional estuvo acompañado de la derrota electoral del Frente Sandinista en Nicaragua y el recrudecimiento del bloqueo y el aislamiento de la revolución cubana.

Capítulo 14
DE LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL A LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

A partir de los radicales cambios ocurridos con el desplome del socialismo en Europa oriental y la desaparición de la Unión Soviética, acontecimientos de profundas repercusiones a escala internacional, se abrió a principios de los noventa, otro período en la historia de América Latina. La nueva etapa histórica nació marcada por la conversión de Estados Unidos en única superpotencia, que vino acompañado de la imposición de un orden mundial, de signo unipolar, basado en la omnipresencia de mercado, el capitalismo salvaje, la desideologización y el pensamiento único neoliberal.

La época de auge revolucionario abierta con el triunfo de Cuba en 1959, marcada por los avances del movimiento de liberación nacional y de las luchas por un orden social y económico más justo, sufrió un duro revés en la última década del siglo XX, dando lugar a un significativo retroceso de las fuerzas progresistas. Sin embargo, con el inicio del nuevo milenio, la situación latinoamericana dio un giro inesperado, a partir de la revolución bolivariana en Venezuela, que despejó el camino a una serie de transformaciones democráticas, populares y sociales a nivel continental que han puesto en crisis la hegemonía liberal, cuestionando la dependencia de Estados Unidos.

Auge del neoliberalismo y de la hegemonía unipolar de Estados Unidos

En medio de un intolerante ambiente ideológico neoliberal y cuando comenzaba la crisis del socialismo europeo, este período histórico se inauguró en América Latina con la inescrupulosa agresión norteamericana a Panamá en diciembre de 1989. La violenta invasión de los *marines* norteamericanos puso fin a los últimos vestigios del nacionalismo torrijista con el pretexto de la democratización y la lucha contra el «narcotráfico».

Sin embargo, la intervención de Estados Unidos en este estratégico territorio de nuestra América no pudo impedir que la importante vía interoceánica pasara finalmente a la soberanía panameña el 31 de diciembre de 1999, en cumplimiento del Tratado Torrijos–Carter. Esta fue la primera intervención norteamericana en América Latina, después de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo desprovista de la cobertura de la Guerra Fría y también la primera en que se usó el pretexto del narcotráfico para justificar la presencia militar de Estados Unidos en la región.

En cierto modo, la sorpresiva situación internacional creada por el cambio de la correlación de fuerzas, a raíz de la desaparición del campo socialista y la Unión Soviética, también repercutió en la derrota electoral del Frente Sandinista (FSLN) en Nicaragua el 25 de febrero de 1990. En los comicios presidenciales, la candidata de la Unión Nacional Opositora (UNO), Violeta Barrios de Chamorro ganó con el 51.5% de la votación al comandante sandinista Daniel Ortega, que solo consiguió el 38.4% de los sufragios, cuya popularidad se había debilitado, como se ha dicho, por los efectos de una guerra sucia de casi diez años promovida por Estados Unidos contra la revolución nicaragüense.

La desfavorable coyuntura histórica creada al movimiento revolucionario y de liberación nacional, junto a la imposición de un pensamiento único neoliberal, favorecieron también los planes norteamericanos para aislar e intentar destruir a la revolución cubana –enmienda Torricelli (1992), primero, y después, mediante la Ley Helms-Burton (1996)–, constituyendo la más grave amenaza a

su existencia desde 1959. A pesar de ello, el proceso cubano se logró mantener enhiesto y continuó los esfuerzos por seguir adelante con su singular proyecto revolucionario, en medio de dificultades económicas sin precedentes, provocadas también por la repentina pérdida de mercados y créditos al desaparecer el de los países socialistas, denominado Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), al que Cuba estaba asociado desde 1972, y la propia URSS.

En ese contexto, muchos de los gobernantes latinoamericanos coincidían entonces en promover el mismo tipo de economía «desregularizada» de mercado libre: privatización del patrimonio estatal, drásticos recortes del gasto social, franquicias sin límites a la extracción de utilidades por el capital extranjero, etc. Ello hizo de América Latina fácil presa de un mundo industrial fortalecido por la creciente globalización de la economía y la tendencia a la formación de macro bloques capitalistas.

El desmontaje del sector estatal de la economía por gobiernos de origen electivo que desarrollaron políticas en beneficio exclusivo de los sectores empresariales nacionales y extranjeros y en perjuicio de las amplias mayorías, crearon un espectacular deterioro de las condiciones de vida de la población. El resultado fue el mismo en todo el continente: reconcentración de la riqueza, ampliación del número de marginados y acentuación de las deformaciones estructurales.

El incumplimiento de las expectativas de mejoramiento social y económico generadas en muchos países de América Latina con el ascenso al poder desde los años ochenta de gobiernos civilistas y constitucionales, junto al crecimiento de la corrupción administrativa y al desenfrenado robo de los fondos públicos, llevaron al descrédito de los gobiernos «democrático-representativos» y a la ingobernabilidad. Otra consecuencia de este proceso fue una marcada reprimarización y terciarización de la estructura productiva de América Latina, con la parcial excepción de Brasil.

El terrible cuadro de América Latina a comienzos del siglo XXI se desprende de los siguientes datos proporcionados por instituciones internacionales como la CEPAL y el FMI: en el 2002 el crecimiento del PIB por habitante fue negativo (–1.9%), por lo que la región acumuló media década de baja expansión (–0.3% del PIB). Además,

entre 1999 y el 2003, todos los países latinoamericanos registraron un decrecimiento del PIB –con las excepciones de México y Chile que registraron el 1% positivo en el mismo lapso–, siendo los casos más extremos los de Uruguay y Argentina (–2.6%) y Venezuela (–5%), aunque estos dos últimos países registraron significativos repuntes en este indicador al cierre del 2004, tras abandonar la catastrófica política neoliberal.

Como resultado de la desenfrenada política neoliberal, a comienzos del siglo XXI el producto por habitante en América Latina era prácticamente el mismo que en 1980, por lo que puede hablarse de más de dos décadas perdidas para el desarrollo debido al ajuste y la política neoliberal. Además, según los datos de la propia CEPAL, 220 millones de latinoamericanos eran considerados como pobres –la mitad de ellos en condiciones de extrema pobreza– de una población total calculada, a comienzos del siglo XXI, en 500 millones, o sea casi la mitad del total.

A ello debe agregarse que el 9% de la fuerza de trabajo estaba desempleada, alcanzando en algunos países entre el 15% y el 18% (Argentina y Brasil). Para completar este cuadro desolador, la deuda externa de la región ya bordeaba en el 2002 los 725 mil millones de dólares.

En consecuencia, América Latina se convirtió en la región del planeta con la más marcada diferenciación entre ricos y pobres, estos últimos hacinados en tugurios o barrios precarios que solo les brindaban las condiciones mínimas para sobrevivir. Según las estadísticas, 227 millones, o sea el 44% de los latinoamericanos eran pobres al finalizar el siglo XX y de ese total 20% en condiciones de extrema pobreza, 14 millones más que los existentes a comienzos de los noventa. Además, si en 1950 América Latina contribuía con el 14% del PBI mundial, para 1998 la región solo representaba el 8%, mientras que su participación en el comercio mundial descendió en el mismo lapso del 12% al 3.5%.

De esta manera, el panorama latinoamericano se hizo más complejo y difícil como consecuencia del evidente fracaso del modelo económico neoliberal y de la redoblada agresividad del imperialismo norteamericano. En esa coyuntura, Estados Unidos se vio libre de

ataduras, compromisos y limitaciones legales para imponer su *diktat*, con el pretexto de la lucha contra el terrorismo, aprovechando los trágicos sucesos del World Trade Center de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001.

Otra característica de la década del noventa, determinada en gran medida también por el contexto internacional de descalabro del socialismo europeo y de la nueva correlación internacional de fuerzas, fue la generalización de un clima de negociación entre fuerzas antagónicas de derecha e izquierda. Como resultado de estos procesos, en varios países latinoamericanos se puso fin a una persistente lucha guerrillera y a largos enfrentamientos civiles que parecían insolubles, como ocurrió en El Salvador (1992) y Guatemala (1996), y que fueron analizados en el capítulo anterior, aunque en el caso de Colombia no pudieron conseguirse entonces resultados equivalentes a los de América Central.

La persistente violencia en Colombia

En esta agobiada nación norandina el proceso negociador registró también inicialmente ciertos progresos, del que fue principal protagonista el Movimiento 19 de Abril (M-19), organización político-militar de corte nacionalista. Esta agrupación había surgido como brazo armado de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), partido creado en 1965 por el ex dictador general Rojas Pinilla y conducido tras su muerte por su hija María Eugenia Rojas.

El M-19 aceptó abandonar la lucha guerrillera en marzo de 1990 después de perder a sus principales fundadores, Jaime Bateman e Iván Marino Ospina en 1983, convirtiéndose en un partido político más bajo la conducción de Antonio Navarro Wolf.

A esta desmovilización también se acogió el Movimiento Guerrillero Quintín Lame, del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), pero no abarcó a todos los movimientos armados.

La desmovilización de estas fuerzas, determinó la desaparición de la Coordinadora Guerrillera «Simón Bolívar», surgida en 1987

en el momento de mayor auge de la lucha armada en Colombia. Una parte minoritaria del propio EPL, así como las poderosas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguieron adelante con su estrategia militar para alcanzar el poder. Fruto de estas negociaciones fue también la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó en 1991 y que dio al país una nueva carta magna.

Pero ni el abandono de la lucha armada por un grupo de organizaciones político-militares ni tampoco la nueva carta magna pusieron fin a la violencia en Colombia. En gran parte era ocasionada por las actividades de los narcotraficantes, que siguió cobrando miles de víctimas, sobre todo entre dirigentes de la izquierda, como Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica, asesinado en 1990, y Carlos Pizarro del M-19, en 1991.

Entretanto, el gobierno de César Gaviria, extendido de 1990 a 1994, lograba anotarse ciertos triunfos espectaculares al desarticular en 1993 al más grande imperio de la droga con la muerte, a manos de la policía, de Pablo Escobar Gaviria, quien como jefe del cartel de Medellín había desatado una verdadera guerra contra el Estado colombiano. No obstante, los enfrentamientos gubernamentales con las guerrillas encabezadas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC), dirigidas hasta su muerte en 2008 por el veterano comandante Manuel Marulanda Vélez, *Tirofijo*, y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) –que hoy encabeza el comandante Nicolás Rodríguez Bautista–, no se han detenido.

Pese a todas las negociaciones de paz y ofensivas militares desarrolladas por los siguientes mandatarios, Ernesto Samper (1994-1998), Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2006) –quien sancionó la polémica Ley de Conmoción Interior y otorgó facultades extraordinarias al ejército–, así como las amenazas norteamericanas de intervención directa (Plan Colombia) con el nuevo argumento de combatir el narcotráfico, las guerrillas colombianas –alzadas desde los años cuarenta– siguen activas hasta el presente.

La política de confrontación del presidente Uribe, reelegido en 2006 con el 62.5% de los votos tras aprobarse una reforma constitucional, convirtió a Colombia en el tercer receptor mundial de

ayuda militar de Estados Unidos. Ello le permitió al mandatario colombiano profundizar este viejo conflicto interno, agravado aún más cuando el propio Uribe calificó a sus antiguos interlocutores de terroristas, para que fueran incluidas en la cruzada mundial de la administración de George W. Bush (2001-2009).

En su incesante persecución a las guerrillas, el presidente colombiano ordenó atacarlas dentro del territorio de Ecuador el 1 de marzo de 2008, lo que ocasionó el bombardeo y la muerte de un pequeño grupo guerrillero de 17 combatientes encabezado por el comandante Raúl Reyes, uno de los jefes más conocidos de las FARC-ELP. La agresión al vecino país desató una crisis internacional de grandes proporciones, que solo logró ser sofocada por la reacción concertada de los países latinoamericanos en una reunión del Grupo de Río celebrada en Santo Domingo una semana después. Con posterioridad, otros jefes guerrilleros cayeron víctimas de la incesante persecución gubernamental, como fueron los casos de Víctor Julio Suárez, *Mono Jojoy*, y Alfonso Cano, en 2010 y 2011 respectivamente.

Fue durante el largo régimen de Uribe que se constituyó en 2005 el Polo Democrático Alternativo (PDA), que tuvo como antecedente la candidatura presidencial de Luis Eduardo Garzón en 2002 y su posterior elección, dos años después, como alcalde de Bogotá. El PDA agrupó a diversas organizaciones de izquierda, entre ellas el Polo Democrático Independiente (PDI) –donde ocupaban sitio algunos sectores del M-19 y otros grupos guerrilleros desmovilizados y miembros de la Alianza Nacional Popular (ANAPO)– y Alternativa Democrática, este último integrado por comunistas, socialistas y agrupacioness defensoras de los derechos humanos. EL PDA logró en las elecciones presidenciales de 2006 el 22% de la votación con su candidato Carlos Gaviria.

Con la llegada al poder de Juan Manuel Santos en 2010, y pese a sus antecedentes como ministro de Defensa de Uribe, la situación colombiana dio un giro inesperado. Gracias a los buenos oficios de Noruega, Cuba, Venezuela y otros países, se iniciaron conversaciones en La Habana entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-Ejército del Pueblo (EP),

ahora dirigidas por el comandante Rodrigo Londoño, *Timochenko*, que han abierto la esperanza –junto a la anunciada apertura de un proceso similar con el ELN– de conseguir a corto plazo, mediante una solución negociada, la paz en este agobiado país de nuestra América.

Neoliberalismo en Perú y derrota de Sendero Luminoso

A la extinción en los noventa de los principales focos guerrilleros existentes en América Latina, como resultado de procesos negociadores, debió sumarse la casi completa derrota sufrida por Sendero Luminoso en Perú durante 1992 bajo los golpes del gobierno de Alberto Fujimori. El 5 de abril de ese año, con apoyo de los altos mandos del ejército, Fujimori suspendió todas las garantías constitucionales, disolvió el parlamento y el Poder Judicial, y puso en vigor una nueva carta magna que le permitió reprimir sin obstáculos legales a los senderistas –incluso capturar a su jefe Abimael Guzmán el 15 de septiembre de 1992– y legitimar su poder, a pesar del repudio internacional al autogolpe de Estado.

Gracias a una flamante constitución, y a los relativos éxitos de su política económica, iniciada con un sorpresivo «paquetazo» neoliberal en agosto de 1990, combinado después con algunos proyectos sociales y obras de infraestructura, Fujimori pudo conseguir que Perú alcanzara durante un tiempo un envidiable récord antinflacionario y un cierto crecimiento. Con ese aval se reeligió en abril de 1995.

Sin embargo, cinco años después su régimen cayó envuelto, tras una cuestionada tercera reelección presidencial, en medio del desprestigio provocado por las revelaciones, en septiembre de 2000, de las manipulaciones ilegales de su principal asesor para la seguridad y verdadero cerebro gris del presidente, Vladimiro Montesinos. Este individuo sobornaba a los opositores con fondos gubernamentales y fue el responsable, junto con el propio Fujimori, de una década de gobierno de mano dura con el irrestricto apoyo de los militares.

Una trágica muestra fue el asesinato, en abril de 1997, del comando de catorce militantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que había capturado un nutrido grupo de rehenes en la embajada de Japón en Lima. A estos elementos, habría que sumar los efectos que a largo plazo trajo la «modernización» fundamentada en la apertura al libre mercado, que convirtió a Perú en uno de los países más pobres y desiguales de América Latina.

Tras el breve interinato de Valentín Paniagua, llegó al poder el 28 de julio de 2001 el líder opositor Alejandro Toledo –gracias a su origen humilde social y a un discurso cargado de promesas demagógicas–, quien en poco menos de un año debió enfrentar una grave crisis gubernamental por incumplir sus propuestas electorales con la privatización de empresas eléctricas del Estado. Ello despertó airadas manifestaciones populares en el sur peruano, a mediados del 2002, que echaron por tierra este controvertido acápite del proyecto neoliberal de Toledo y que se convirtieron en un punto de quiebre en su administración.

De ahí en lo adelante, la popularidad de este mandatario cayó en picada –bajó al 7%–, mientras se sucedían las protestas populares, las denuncias de corrupción y fraude electoral, que condujeron a prisión a la propia hermana de Toledo. A complicar el panorama peruano contribuyó el inesperado resurgimiento de los antiguos seguidores de Fujimori y, sobre todo, el nuevo despertar del indigenismo. En ese contexto, surgió la declarada aspiración de reconstruir la extinta nación aymará, en cuyo primer congreso participaron el antiguo líder campesino Hugo Blanco y el dirigente nacionalista Antauro Humala, quien había encabezado en 2005 una rebelión militar en Andahuaylas.

En 2006 regresó al poder Alan García, del Partido Aprista Peruano (APRA), tras derrotar a Ollanta Humala, hermano de Antauro, quien enarboló un programa nacionalista de corte social que le dio la victoria en la primera vuelta electoral 25.6% frente a 20.4%. Sin embargo, en la segunda ronda de los comicios, Ollanta Humala fue derrotado por el candidato aprista –52.6% frente a 47.3%–, apoyado por todas las fuerzas conservadoras y tradicionales del país.

El gobierno de Alan García desarrolló una política neoliberal sin cortapisas –firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos– que agravó la situación social del país, en particular tras la depresión que afectó la economía norteamericana desde 2008. Ello trajo aparejado huelgas y grandes manifestaciones en su contra, como las provocadas por los escándalos por los sobornos de la Discover Petroleum, que obligaron a la renuncia del primer ministro Jorge del Castillo.

En 2010 el recién creado Partido Nacionalista de Ollanta Humala, de composición y programa heterogéneo, formó con pequeñas organizaciones y movimientos de izquierda la Alianza Gana Perú, con el respaldo de Ciudadanos por el Cambio y Unidad de Izquierda, esta última integrada por el Partido Comunista, el Partido Socialista de Javier Diez Canseco y el Partido Socialista Revolucionario. Esta coalición electoral permitió el triunfo en las elecciones del 2011 del ex comandante Ollanta Humala.

Pero una vez en el poder, el flamante gobernante fue acosado por las élites y una feroz campaña mediática en su contra, tal como había ocurrido durante sus contiendas electorales. Como resultado de ello, y de los compromisos adquiridos para llegar al poder, el presidente Humala fue abandonando sus promesas, así como a sus aliados de izquierda, y aceptando un programa neoliberal, que le ha ido restando apoyo entre los sectores más humildes de la sociedad.

El neoliberalismo en Brasil: de Collor de Mello a Cardoso

Uno de los países donde con mayor intensidad se hizo sentir la política neoliberal fue en Brasil. Según cifras oficiales, en 1987 los brasileños ubicados por debajo de los niveles de pobreza llegaban ya a 33 millones, o sea, el 25% de la población. En estas condiciones, contando con el respaldo de los sectores acaudalados y de los principales medios de difusión, y valiéndose de un programa social demagógico, Fernando Collor de Mello pudo vencer en 1990 al candidato opositor Luiz Inácio, *Lula*, da Silva del Partido de los Trabajadores

(PT), una organización popular surgida en 1980 para enfrentar la dictadura militar y que esgrimía una propuesta de cambios radicales para la sociedad brasileña.

Establecido en el poder, Collor de Mello olvidó su retórica electoral populista y lanzó un aparatoso programa económico neoliberal basado en la desregulación, en privatizaciones masivas y en la determinación de precios y salarios por parte del mercado. Como resultado de su política económica, en junio de 1992 el presidente brasileño no solo debió enfrentar el creciente descontento popular ante la persistente caída de la producción industrial y el continuado deterioro del nivel de vida, sino también una investigación parlamentaria por cargos de corrupción. En medio de su absoluto desprestigio, el presidente Collor de Mello debió entregar el poder a Itamar Franco, el 29 de diciembre de 1992, tras un juicio político en el congreso federal.

El nuevo ministro de Hacienda, Fernando Henrique Cardoso, para paliar la grave situación de la economía y conseguir la estabilidad monetaria, implementó entonces el *Plan Real*, cuyo relativo éxito le abrió las puertas a la primera magistratura dos años después. Sin duda, la clave de la precaria estabilidad conseguida por el presidente Cardoso, del Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), residió, pese a visibles incongruencias, en el mantenimiento del apoyo gubernamental a las industrias competitivas, la protección de las exportaciones y una cierta resistencia a la completa liberalización comercial.

Ubicado en la presidencia desde 1996, Cardoso, pretextando medidas provisionales, enfrentó la huelga de los obreros del petróleo con fuerzas del ejército, suspendió el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la represión militar, liquidó la exoneración tributaria a una serie de asociaciones sociales y dejó desamparados a los jubilados. Además, llevó adelante un proceso de privatizaciones del sector estatal de la economía –entre ellas las telecomunicaciones y la venta de la mayor productora y reserva de minerales de América Latina, la Vale do Río Doce (VALE)–, en beneficio de los bancos y de las grandes empresas nacionales y extranjeras, cancelando los proyectos de apoyo a los campesinos para liquidar los 1500 asentamientos del vigoroso Movimiento de los Sin Tierra (MST).

No obstante, Cardoso logró reelegirse en los comicios de 1998 frente a Lula, de nuevo principal candidato opositor. Durante su segundo mandato, se deterioró la situación económica, pues la indiscriminada apertura comercial y financiera, unida a las privatizaciones, no dieron resultado. Para contener la acelerada fuga de capitales, Cardoso dictó una fuerte desvalorización del real y solicitó un nuevo préstamo al FMI, mientras la deuda pasaba de más de 148 mil millones de dólares (1994) a 241 mil millones (1999).

Como lamentable saldo de su administración, en Brasil –la décima economía del mundo– se acentuó la concentración de los ingresos –el 1% de la población poseía recursos equivalentes al 50% de los más pobres–, cuando contaba ya con unos 53 millones de habitantes por debajo de la línea de pobreza, 30 de ellos en condiciones paupérrimas. El descontento popular por la terrible situación se expresó en el 2002 mediante grandes movilizaciones para llevar a plebiscito el tema de la deuda y en contra de la firma del Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA), promovido por Estados Unidos.

El ALCA: una propuesta neopanamericana de Estados Unidos

El ambiente neoliberal dominante llevó a la mayor parte de los gobiernos de América Latina a ir aceptando un tratamiento bilateral al problema de la deuda externa; cediendo ante las presiones de Washington en cuestiones vitales de soberanía –léase narcotráfico– y encaminando sus economías a la virtual absorción por la norteamericana –el caso de México y el Tratado de Libre comercio (TLC) firmado en 1993 con Estados Unidos y Canadá fue paradigmático–, en perjuicio de los viejos sueños bolivarianos de unidad latinoamericana. Con su renovada política panamericana, Estados Unidos buscaba articular a las débiles naciones de América Latina a su poderosa economía mediante acuerdos bilaterales y asimétricos, aunque limitando la «integración» al libre movimiento del capital, las mercancías y los servicios.

Para su incorporación a la propuesta Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que pretendía abarcar desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, los países de América Latina debían cumplir una serie de exigencias formales, entre ellas el establecimiento pleno de la «democracia representativa» y las elecciones periódicas. Además, debían sacrificar sus producciones menos competitivas, abandonar los programas sociales y la defensa de sus valores culturales más autóctonos, así como ceder incluso en vitales cuestiones de soberanía.

A favor del ALCA actuaba la endémica dependencia financiera de América Latina respecto de Estados Unidos y el capital transnacional. También las expectativas económicas y comerciales despertadas por determinados proyectos de factura norteamericana, como el propio ALCA, y los tratados bilaterales de libre comercio.

El desarrollo del ALCA, verdadero proyecto neopanamericano, tuvo lugar a contrapelo de las tendencias integracionistas de América Latina que aún subsistían y que, a duras penas, persistían en alcanzar el ideal de una región unida e independiente, expresada sobre la base de una posible convergencia de diversos intentos de regionalización y de subregionalización. Este proceso, que había comenzado tímidamente en los sesenta con los llamados tratados de «primera generación» –Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), Mercado Común Centroamericano (MCCA), Pacto Andino y Comunidad del Caribe– pasó en los ochenta y noventa a una nueva fase o «segunda generación», de lo que fueron exponentes el Mercado Unificado del Sur (MERCOSUR), la Asociación de Estados del Caribe, la Comunidad Andina, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el Mercado Común Caribeño (CARICOM) y el G-3 (México, Venezuela y Colombia).

Pero este débil avance de los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe –contrapuesto a la tendencia de muchos gobiernos latinoamericanos a negociar su inmediato ingreso individual al ALCA–, puso el acento, con muy pocas excepciones, en el mercado y la libertad de comercio, menospreciando los aspectos políticos, sociales y culturales. Por estos motivos, el latinoamericanismo dominante se había expresado a fines del siglo XX y principios del XXI, como tendencia más generalizada, en proyectos de integración

basados en las reglas del mercado, la desregulación, la privatización y la liberalización comercial, que implícitamente proponían una modalidad subordinada a escala continental.

Desde el punto de vista político, los intentos de concertación regional, como las cumbres iberoamericanas, iniciadas en Guadalajara (México) en septiembre de 1991, ofrecieron solo algunos pocos resultados tangibles, pues carecieron del vigor y la voluntad para frenar el redespliegue agresivo de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno norteamericano impulsaba la celebración sucesiva de las llamadas cumbres de las Américas, celebradas en Miami (1994), Santiago de Chile (1998), Quebec (2001), Monterrey (2004), Trinidad (2008) y Cartagena (2012). De todas ellas, Cuba fue excluida, aunque en las dos últimas cumbres, en el nuevo contexto creado en América Latina a partir del triunfo de la revolución bolivariana en Venezuela, se ha ido fortaleciendo el rechazo a las posturas hegemónicas de Estados Unidos junto a la exigencia de la participación cubana.

México y los nefastos efectos del TLC con Estados Unidos

Uno de los países donde más daño ha causado la desaforada política neoliberal es México, hundido cada vez más en una profunda crisis social, económica y política, tras el completo abandono de los viejos postulados nacionalistas y sociales del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De alguna manera, ese proceso comenzó a advertirse con la salida del ala izquierda del PRI, encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, en las postrimerías del mandato de Miguel de la Madrid (1982-1988) y que llevó a la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), esto último a raíz de la cuestionada elección presidencial de 1988.

Desde esa fecha y hasta finalizar el siglo XX, la adopción de desembozadas prácticas neoliberales por los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000), agravó los agudos problemas sociales de México y desestabilizó los mecanismos tradicionales de poder, reflejado en varios asesinatos políticos. Entre

ellos el del candidato presidencial del propio PRI a las elecciones de 1994, Luis Donaldo Colosio, lo que vino casi aparejado con la drástica devaluación de la moneda nacional en diciembre de ese mismo año.

La respuesta más inesperada provino del levantamiento guerrillero del hasta entonces desconocido Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) –que tiene de vocero al subcomandante Marcos– en la selva Lacandona en Chiapas, el 1 de enero de 1994. Tras la toma por los rebeldes indígenas chiapanecos de las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Oxchuc, Huixtan y Chanal, se emitió la *Declaración de la Selva Lacandona*, un sentido llamado a la lucha por la democracia, la libertad y la justicia para todos los mexicanos.

En estos hechos, como también se revelaría después en otros países latinoamericanos, con especial fuerza en Ecuador y Bolivia, se puso de relieve el papel protagónico adquirido por sujetos sociales aparentemente adormecidos, como el movimiento indígena. Los pueblos originarios reclamaron su lugar protagónico, con sus cuestionamientos implícitos o explícitos a la tradicional soberanía territorial de los estados y sus aspiraciones de autodeterminación para las etnias autóctonas, tras más de cinco siglos de dominación ininterrumpida.

Todos estos acontecimientos allanaron el camino para que en el 2000 se produjera, por primera vez desde la revolución mexicana de principios de siglo, la derrota del partido de gobierno (PRI) con el ascenso a la presidencia de Vicente Fox, del derechista Partido Acción Nacional (PAN). Aunque Fox, como el mandatario brasileño Fernando Henrique Cardoso, fue calificado eufemísticamente por algunos politólogos como «neoliberales de segunda generación», por su declarada intención de combinar las recetas del FMI con ciertas preocupaciones sociales, en realidad este gobernante mexicano se inclinó cada vez más a la subordinación de su política a los intereses norteamericanos y a la aplicación de prácticas neoliberales.

Durante el gobierno de Fox se asentó en el poder una camarilla de ultraderecha, conocida como «el yunque», lo que facilitó se aprobaran leyes contra los derechos indígenas, se privatizaran más empresas estatales, se entregara la minería a grupos extranjeros y se

vendieran los dos mayores bancos del país a instituciones foráneas: el Citibank y el grupo español Bilbao Vizcaya (BBVA). Otro de sus proyectos a gran escala fue el Plan Puebla-Panamá (PPP), dado a conocer en el 2001, que contaba con el aval de poderosos organismos financieros internacionales y apuntaba a favorecer las operaciones e inversiones de las grandes corporaciones trasnacionales y los grupos empresariales locales en toda Mesoamérica.

El principal contrapeso opositor a la política neoliberal de Fox, pues el PRD había ido moderando su tono y acomodándose como una fuerza parlamentaria más, provino del nuevo gobernador del super poblado DF, Andrés Manuel López Obrador. Distanciado de una parte de la dirigencia de su propio partido, el PRD –así como de sus sectores corruptos–, el gobernador de la capital atrajo a los opositores descontentos, benefició la acumulación de empresarios locales, atendió mediante el diálogo los complejos problemas de la ciudad y se convirtió en una verdadera fuerza social alternativa. Además, desarrolló un amplio programa de beneficio popular con el lema «Por el bien de todos, primero los pobres»,[1] que contribuyó también a convertirlo en el candidato natural del PRD a los comicios presidenciales del 2006.

La clase dominante, atemorizada por el esperado triunfo de un candidato popular que presumiblemente pondría límites a la política neoliberal e impediría la enajenación del patrimonio nacional, en particular en el ramo energético, convirtió a López Obrador en el enemigo a derrotar. Para conseguirlo, con el descarnado respaldo del presidente Fox, se abrió una sucia campaña en su contra por todos los medios masivos de comunicación, encaminada a desacreditarlo y erosionar su imagen, a la que incluso se prestó el propio subcomandante Marcos.

La apocalipsis anunciada por los medios si ganaba López Obrador, permitió al gobierno imponer al candidato oficial, Felipe Calderón, por una mínima diferencia de votos (35.89%), frente al 35.33% de su principal contrincante. Tras conocerse el apretado

[1] Raquel Sosa Elízaga, «La construcción del miedo. Episodios de la guerra contra el gobierno de la ciudad de México», en *Revista del Observatorio Social de América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, año V, 14, mayo-agosto de 2004, p. 310.

resultado electoral, y a pesar de las impresionantes multitudes que en protesta se volcaron a las calles de la ciudad de México, López Obrador no fue capaz de articular una respuesta contundente que paralizara a Fox y su camarilla.

La continuación por el gobierno de Calderón de las desembozadas prácticas neoliberales sin duda agravaron los agudos problemas sociales de México: reconcentración de la riqueza, ampliación del número de marginados y acentuación de las deformaciones estructurales. El balance, después de más de treinta años (1982-2012) de aplicación de la orientación neoliberal –reforzada con la puesta en funcionamiento del TLCAN–, es que no se ha generado crecimiento económico significativo en el país.

El ingreso per cápita aumentó solo el 0.3% y ello gracias a que en ese lapso emigraron más de diez millones de personas, mientras que se ha empeorado la distribución del ingreso, ahondando la prevaleciente injusticia social. Por otro lado, la aplicación indiscriminada del libre comercio de manufacturas y capital con Estados Unidos produjo una crisis estructural en el campo mexicano y su creciente empobrecimiento, lo que unido a las extraordinarias alzas de los precios mundiales de los productos agropecuarios y la caída del dólar, han puesto a la economía de México en una situación muy adversa.

A ello debe sumarse el fracaso de la estrategia de guerra a los carteles del narcotráfico desarrollada por Calderón, que hundieron al país en una espiral de violencia que despejó el camino en las elecciones de 2012 al regreso del PRI al poder por intermedio de su candidato Enrique Peña Nieto, que quedó en primer lugar en los comicios con el 38.1% de la votación. La victoria del candidato priista sobre su principal adversario, Andrés Manuel López Obrador, más rezagado que en la anterior elección presidencial –esta vez solo obtuvo el 31.59% de los sufragios–, han llevado al líder opositor a cuestionar otra vez los resultados electorales y a organizar, como un nuevo partido de izquierda al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).

La crisis económica y la revuelta antineoliberal en Ecuador

De agosto de 1996 a febrero de 1997 duró el brevísimo gobierno de Abdalá Bucaram, apodado el «loco» por sus excentricidades. Derrocado en medio de airadas manifestaciones populares con creciente participación de los indígenas, su caída era una manifestación más de la ya endémica crisis económica ecuatoriana y la ingobernabilidad de este país. Ecuador, había tenido cinco presidentes entre 1997 y el 2000, período en que además fue asesinado en febrero de 1999 el diputado Jaime Hurtado, líder del Movimiento Popular Democrático, y adoptada la efímera constitución de 1998.

Las protestas populares no pudieron ser detenidas, pues las nuevas medidas neoliberales impuestas por el gobierno de Yamil Mahuad, iniciado el 10 de agosto de 1998, agravaron la situación. Nos referimos a la congelación de los depósitos en los bancos y la dolarización de la economía, pues el devaluado sucre, moneda nacional ecuatoriana creada en 1884, fue retirado de la circulación.

El continuado deterioro de la economía del país, precipitó la caída del gobierno de Mahuad, el 21 de enero del 2000, por un vasto movimiento que agrupó desde los indígenas –unidos en el Consejo de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CONAIE)– hasta un grupo de coroneles y oficiales del ejército y la policía. Menos de 24 horas gobernó un Triunvirato en el que ocuparon sitio el líder indígena Antonio Vargas, el coronel Lucio Gutiérrez y el político Carlos Solórzano, que abrió el denominado «proceso de restructuración jurídica del Estado».[2]

Al día siguiente se produjo el contragolpe de los altos mandos del ejército, que llevó al gobierno al vicepresidente Gustavo Novoa, con el beneplácito de Estados Unidos, preocupado por la permanencia de su base militar de la ciudad de Manta, en la costa ecuatoriana, recién instalada para el combate contra el narcotráfico y las guerrillas colombianas. El restablecimiento de la «democracia representativa»

[2] Juan Paz y Miño, *Golpe y contragolpe. La «Rebelión de Quito» del 21 de enero del 2000*, Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002, p. 11.

con el ascenso al poder del derechista Novoa, sin embargo, tampoco puso fin a la intranquilidad social, como se demostró después con nuevas manifestaciones indígenas y violentas protestas populares contra su política neoliberal.

El triunfo en el 2002 obtenido en las elecciones ecuatorianas del coronel Lucio Gutiérrez fue posible por el respaldo de fuerzas de izquierda, entre ellas el Partido Comunista y el Movimiento Popular Democrático (MPD), así como el movimiento indígena, fundamentalmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONNAIE) y su expresión política de el Movimiento Plurinacional Pachakutik, creado en 1995. La derrota de los partidos tradicionales pareció, en principio, un cambio positivo en la política ecuatoriano.

El nuevo régimen, iniciado en enero de 2003, mostró muy pronto no solo claras tendencias autoritarias, sino que se inclinó sumisamente ante los dictados del FMI y a forjar una estrecha alianza con Estados Unidos. Prueba de ello fueron sus planes para el ingreso del país en el Plan Colombia y en el ALCA, que le hicieron perder el apoyo del partido Pachakutik y de otras fuerzas. El resultado fue el estrepitoso derrocamiento de Gutiérrez en abril de 2005 –salió huyendo en un helicóptero del Palacio de Carondolet rumbo al aeropuerto–, como resultado de un levantamiento popular de grandes proporciones, en el cual jugaron un activo papel los llamados *forajidos*, que dominaron las calles de la capital.

El corralito y las protestas populares argentinas

La aplicación de una política neoliberal extrema en la Argentina, iniciada por el gobierno de Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1999, también condujo aquí, como en los otros países latinoamericanos, a la más profunda crisis económica de su historia. La magnitud del descalabro obligó al insolvente gobierno de Fernando de la Rúa, iniciado en 1999 –tras obtener la presidencia con el apoyo del 48% del electorado gracias al respaldo de la Unión Cívica Radical y el Frente del País Solidario (FREPASO)–, a dictar drásticas medidas

restrictivas. Ellas incluyeron la suspensión del pago a los ahorristas, llamado el «corralito» bancario, ideado como solución a la crisis por su ministro de Economía Domingo Cavallo.

En medio de un verdadero naufragio económico nacional estalló una espontánea revuelta popular nutrida no solo por la población más humilde –se calcula que más de la mitad de los 36 millones de argentinos estaba entonces por debajo de la línea de pobreza–, sino también de la deteriorada clase media urbana, que era probablemente la más numerosa de América Latina. Las protestas callejeras fueron respondidas por el presidente De la Rúa imponiendo el estado de sitio y una brutal represión –dejó un saldo de 33 muertos y miles de heridos–, hasta que debió renunciar y huir en un helicóptero desde la Casa Rosada el 21 de diciembre de 2001.

En unos pocos días se sucedieron en el gobierno, en medio de ruidosos «cacerolazos» de la ciudadanía y los nuevos brotes de ira popular, de lo que fue expresión el espontáneo movimiento de los llamados *piqueteros*, los presidentes Ramón Puertas, Adolfo Rodríguez Sa y Eduardo Camaño. Este último entregó la presidencia, a principios del 2002, al peronista Eduardo Duhalde.

El flamante mandatario argentino debió enfrentar todavía un agravamiento de la desastrosa situación, pues en el 2002 la devaluación del peso fue del 70%, el desempleo alcanzó al 25% de la población económicamente activa y la deuda externa se acercó a los 140 mil millones de dólares. Duhalde además debió soportar las reiteradas negativas del FMI a conceder nuevos préstamos financieros «de salvamento» si Argentina no cumplía con todas sus exigencias, aun cuando le habían sido concedidos entonces a los demás integrantes del MERCOSUR: 30 mil millones de dólares a Brasil, 1500 millones a Uruguay y 200 millones a Paraguay.

El resultado fue no solo la profundización de la crisis argentina –en el propio 2002 la caída del PIB resultó la más pronunciada de toda América Latina: 13%–, sino que ella comenzó a arrastrar a todos sus socios del MERCOSUR. En Brasil, Uruguay y Paraguay también se hicieron sentir los mismos calamitosos efectos argentinos y se repitieron algunas de las protestas y los asaltos a supermercados por sus habitantes más desesperados.

Bancarrota neoliberal en Bolivia y ascenso del movimiento indígena

En Bolivia las reformas neoliberales, iniciadas a mediados de la década anterior, fueron completadas por el empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), llegado a la presidencia en 1993. A este mandatario, que había sido educado en Estados Unidos y hablaba el español con acento norteamericano, le sucedió en 1997 Hugo Banzer.

Durante el segundo gobierno del viejo dictador –que no pudo concluir por una grave enfermedad que lo llevó a la muerte– se desarrolló, con apoyo de Estados Unidos, una política de represión a los cultivadores de la coca, a la vez que siguió adelante con las prácticas neoliberales de sus antecesores, sin lograr resolver ni paliar los cada vez más graves problemas económicos y sociales del país. A la par, los movimientos campesinos e indígenas siguieron fortaleciéndose.

Muestra de ello fue la llamada «guerra del agua» (2000) –también con los bloqueos y movilizaciones de septiembre-octubre de 2000 y junio-julio de 2001–, llevada a cabo en Cochabamba, contra la empresa privatizada Aguas del Tunari, una subsidiaria de la Bechtel Enterprises de Estados Unidos. Las protestas populares estuvieron acompañadas del cerco indígena de La Paz, encabezados por los comuneros aymaraes guiados por Felipe Quispe, líder del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) –organización surgida en 2000–, recién salido de la cárcel.

Otra muestra del sostenido desarrollo del movimiento indígena fue el vertiginoso ascenso político del dirigente cocalero Evo Morales, opuesto a la persistente campaña promovida por Estados Unidos para erradicar por la fuerza los tradicionales cultivos de coca. En 1994 tuvieron lugar las primeras marchas cocaleras, en defensa del cultivo de esta hoja, procedentes del Chapare profundo, las que irían creciendo con posterioridad, como expresión de la intensificación de las luchas reivindicativas del campesinado indígena. En 1995, los cocaleros bajo su dirección, y los campesinos del valle de Cochabamba, articulados en torno a Alejo Véliz, dieron vida a la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP).

Dos años después, en 1997, Evo Morales fue elegido diputado junto con otros tres dirigentes campesinos en el marco de la coalición Izquierda Unida, integrada principalmente por el Movimiento Bolivia Libre y el Partido Comunista. Separado más tarde de esta alianza electoral, Morales creó en 1998, con el respaldo de la mayoría de los integrantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP).

De alguna manera, esta agrupación fundada por Evo Morales era fruto de las contradicciones surgidas en el seno de la ASP con los seguidores de Véliz. Poco después, con el propósito de participar en los comicios, el IPSP se apoyó en un pequeño partido de izquierda llamado Movimiento al Socialismo (MAS)–, desprendido de la derechista FSB a fines de los ochenta.

Desde estas organizaciones, coligadas en enero de 1999, Morales fue tejiendo una red de alianzas con sindicatos, juntas vecinales y una diversidad de trabajadores y sectores populares que fueron la clave de sus seguidas victorias electorales. El éxito también se explica por la adopción de un programa indigenista más flexible y plural que el de los seguidores de Quispe, quienes reivindican la completa hegemonía indígena del país, a partir de la tesis de las dos Bolivia, que menosprecia a los sectores mestizos y blancos. En cambio, los partidos de Evo hicieron énfasis en el antimperialismo y el rescate de las riquezas nacionales, sin exclusión de las minorías étnicas.

En las elecciones presidenciales de 2002, para impedir el acceso al poder de líder indígena cocalero Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNR, debió pactar con el MIR, liderado por el ex presidente Jaime Paz Zamora, un cogobierno. Este se inició tras culminar el interinato de Jorge, *Tuto*, Quiroga (2001-2002), heredero político del fallecido Banzer.

Pero el segundo gobierno de Sánchez de Lozada continuó adelante con la desmedida política de liberalización económica, que terminó por provocar una verdadera insurrección nacional. Ya en febrero de 2003 se produjo el amotinamiento de la policía en protesta por nuevos impuestos que afectaban a los miembros de este cuerpo armado, huelga reprimida por el ejército con el saldo de 32 muertos.

La indiscriminada represión llegó aún más lejos en octubre de 2003 –cuando en solo nueve días fallecieron más de 70 personas y hubo unos 400 heridos–, lo que provocó la salida del gobierno de los ministros de Nueva Fuerza Republicana (NFR) y del MIR, así como el rechazo del vicepresidente Carlos Mesa. El día 17 de ese mismo mes, el presidente Sánchez de Lozada, acosado por la repulsa popular y la falta de apoyo de los propios partidos políticos que hasta entonces lo habían respaldado, se vio obligado a huir precipitadamente del Palacio Quemado y abandonar el país.

El descalabro del gobierno de Sánchez de Lozada no era solo resultado de la profunda recesión económica creada con la ortodoxa política neoliberal, sino también de las masacres cometidas contra la población civil –como la de Warisata (20 de septiembre de 2003)– y de los oscuros acuerdos para exportar el gas natural de los mega campos recién descubiertos en la región del Chaco –controlados por empresas trasnacionales–, a través de puertos chilenos, lo que reabrió las heridas no cicatrizadas de la Guerra del Pacifico.

La caída de Sánchez de Lozada, que huyó a toda prisa fuera del país, puso también en solfa el sistema político y a los propios partidos tradicionales, pues con la excepción del MAS-IPSP y de Pachakuti (MIP), todos las demás agrupaciones, incluido el MIR, se habían asociado en el parlamento en defensa del programa neoliberal. Además, formaban hasta entonces una especie de gran coalición que, bajo el pretexto de defender la llamada responsabilidad nacional, permitió que se sostuvieran en el poder todos los gobiernos neoliberales desde 1985. Por esa razón, los viejos políticos y sus respectivos partidos estaban comprometidos con la crítica situación y eran considerados por la gran mayoría de la población como una revivida *rosca* neoliberal, que había puesto a la nación al borde del precipicio.

Sustituido Sánchez de Lozada por el vicepresidente Carlos Mesa, quien carecía de fuerza parlamentaria alguna y apoyo partidario. El nuevo mandatario boliviano validó su política sobre los hidrocarburos con la victoria obtenida en el referéndum celebrado en julio de 2004. Pero las dificultades de Mesa para dar respuesta a las exigencias populares para implantar una política antineoliberal,

y de no solo impedir la exportación de gas a Chile sino también de nacionalizarlo –en marzo de 2005 el MAS le retiró su respaldo al gobierno–, junto a un nuevo ciclo de movilizaciones y protestas callejeras, obligaron finalmente al impotente mandatario a entregar, en junio de 2005, el poder a Eduardo Rodríguez Veltzé, presidente de la Corte Suprema de Justicia, encargado de convocar a nuevas elecciones.

Otra de las razones que precipitaron la salida de Mesa fueron los conatos secesionistas de matriz conservadora de la llamada Nación Camba, o de la media luna, porque incluye a todos los departamentos y provincias no andinas (Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y Pando), o sea todo el oriente y el Chaco boliviano. En esta atribulada nación andina, a la habitual inestabilidad política y los problemas dejados por las prácticas neoliberales –entre ellos, que más del 90% de su población rural viviera en condiciones de extrema pobreza–, se sumaron entonces las aspiraciones autonómicas de la ciudad y el departamento de Santa Cruz.

Esta región, centro del poder hegemónico sustentado básicamente en torno a la expansión de los cultivos de soja y el crecimiento de la ganadería, así como de la extracción de gas y petróleo, se había convertido en la provincia más rica del país, gracias a que aportaba la mitad de las exportaciones y cerca del 30% del PIB. El surgimiento de fuerzas separatistas en Santa Cruz, era algo también inspirado por espurios intereses foráneos, motivado por las maniobras de los monopolios petroleros para obstaculizar el control nacional sobre los hidrocarburos bolivianos e impedir otros cambios económico-sociales.

Para la organización Nación Camba de Liberación, la región de Santa Cruz es una nacionalidad diferente a la del resto del país y por eso ha aspirado a la independencia, mediante la fórmula de una especie de estado libre asociado. Pero la élite cruceña no pretende separarse de Bolivia –el mercado andino le es indispensable–, sino marcar distancia de las decisiones procedentes del altiplano que podrían afectar sus intereses.

El caracazo: principio del fin de la cuarta república venezolana

En Venezuela, la aplicación irreflexiva de las fórmulas neoliberales, recomendadas por el FMI y el Banco Mundial, condujeron a la creación de una clásica situación revolucionaria, agravada por más de una década de estancamiento económico provocado por los bajos precios del petróleo y el pago de la onerosa deuda externa. A la crisis económica y financiera, se sumó el fracaso de los nuevos partidos reformistas para encontrar una salida a la crisis económica y política.

Ese era el caso del Movimiento al Socialismo (MAS) –encabezado por los antiguos jefes guerrilleros Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, que en 1970 abandonaron el Partido Comunista– y La Causa Radical (LCR), esta última procedente a su vez de una escisión del MAS –denominada Venezuela 83–, encabezada por Alfredo Maneiro. A ello debe agregarse la falta de credibilidad de los tradicionales partidos Acción Democrática (AC) y el social cristiano Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), envueltos en una desembozada corrupción.

Durante la década de los ochenta, el PIB de Venezuela había descendido un 3.8% y en 1989 cayó en más del 8%, mientras la inflación superaba el 81% y el desempleo y el subempleo se estimaban en 50%. Los cerros de Caracas, poblados de verdaderas villas miserias, siguieron creciendo en forma impresionante, como demostración palpable del creciente abismo que separaba a ricos y pobres, pues estos últimos pasaron de menos del 20% en 1980 al 40% en 1988. La visible erosión del nivel de vida de las clases trabajadoras y las capas medias, situaría en pocos años más al 60% de la población venezolana por debajo de la línea de pobreza.

En 1988 el líder de Acción Democrática –partido que desde hacia treinta años se alternaba en el poder con COPEI gracias al pacto de *Punto Fijo*–, Carlos Andrés Pérez, fue elegido otra vez a la presidencia con un 48% de la votación gracias a un programa que incluía el rechazo al pago de la gravosa deuda externa para evitar los costos sociales y económicos. Sin embargo, en febrero de 1989, implantó de manera sorpresiva un plan neoliberal salvaje, que

impuso aumentos masivos en el costo de la gasolina, en el transporte y los productos básicos. El paquete de medidas neoliberales incluía la reprivatización encubierta de la industria petrolera, nacionalizada por el propio presidente adeco quince años atrás

La airada e incontrolada respuesta popular a estas duras medidas gubernamentales fue un espontáneo levantamiento de la población humilde capitalina, denominado el caracazo, que estalló entre el 28 y el 29 de febrero 1989. La gigantesca protesta comenzó con el secuestro de autobuses y el despliegue de barricadas por parte del estudiantado y pronto devino en una verdadera sublevación masiva de la población humilde, que incluía asaltos a los comercios y destrucción de bienes. El caracazo fue reprimido de manera brutal por el ejército y la policía con un saldo de varios centenares de muertos y miles de heridos.

A la conmoción nacional dejada por estos trágicos sucesos ocurridos en la capital venezolana, se unieron después las denuncias sobre la corrupción gubernamental, que generaron nuevas manifestaciones populares y huelgas. La culminación de ese proceso, estimulado por el creciente desprestigio del gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue la inesperada insurrección militar que sacudió a Caracas y otras poblaciones venezolanas el 4 de febrero de 1992, bajo la dirección del comandante Hugo Chávez Frías al frente del hasta entonces desconocido Movimiento Bolivariano Revolucionario.

Aunque el comandante rebelde Francisco Arias Cárdenas logró el control en Maracaibo y otros oficiales comprometidos tomaron Valencia y Maracay, la rebelión militar fracasó en la capital, lo que obligó al propio Chávez a rendirse para evitar un mayor derramamiento de sangre –el enfrentamiento dejó 14 muertos y decenas de heridos. En una dramática declaración pública, trasmitida a todo el país por la televisión, Chávez concluyó su llamado a deponer las armas con su famosa frase sugiriendo que continuarían con la lucha revolucionaria. Un segundo levantamiento militar, el 27 de noviembre de ese año, más cruento que el anterior, pues dejó más de 170 víctimas mortales, también fracasó, aunque sus objetivos eran más confusos que los de la revuelta anterior.

La crisis política generada por todos estos sucesos desembocó en la impugnación del impopular presidente Pérez, en mayo de 1993,

acusado de corrupción, proceso que culminó con su enjuiciamiento y destitución. El desprestigiado mandatario adeco fue sustituido por el breve interinato del historiador Ramón J. Velázquez, en espera de nuevos comicios.

Celebradas las elecciones en diciembre de ese año, en ellas se impuso el anciano político Rafael Caldera, uno de los artífices del sistema bipartidista vigente –nacido en su propia residencia de *Punto Fijo*–, pero que habilidosamente había abandonado el cada vez más desacreditado partido social cristiano COPEI para situarse al frente de una heterogénea coalición, que incluía al MAS, conocida como Convergencia. Con un programa antineoliberal, Caldera obtuvo el 30% de la votación, seguido de Claudio Fermín, de Acción Democrática (AD) con el 23.6%, Osvaldo Álvarez Paz, de COPEI con el 22.7% y Andrés Velázquez, de La Causa R, con 22%, aunque el verdadero triunfador era la abstención: 40% del electorado.

Para paliar la crisis financiera, Caldera nacionalizó la banca en 1994. Pero el viejo caudillo democristiano, quien gobernó con grandes dificultades hasta 1999, no pudo revertir la desesperada situación económica y social venezolana y terminó aplicando las mismas medidas de ajuste estructural que había criticado en su programa electoral de 1993. De ello fue expresión el crédito de emergencia que en 1996 se negoció con el FMI y las disposiciones de corte neoliberal implementadas por su ministro de Economía y dirigente del MAS, Teodoro Petkoff, quien había dejado atrás los devaneos izquierdistas de su juventud.

El desastroso panorama nacional y la incesante presión popular determinó también la liberación de Chávez y sus compañeros en marzo de 1994, quien se dedicó a vertebrar una nueva organización de masas denominada Movimiento Quinta República (MVR), que el 19 de abril de 1997 realizó en forma exitosa su primer congreso. De ahí surgió la candidatura de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela con el respaldo de su propia organización, el debilitado Partido Comunista, Patria para Todos –una facción liderada por Pablo Medida salida de La Caura R–, así como otros grupos de izquierda desprendidos del MAS, junto a otras organizaciones democráticas y populares.

En los comicios del 6 de diciembre de 1998 Chávez venció, con un programa para poner fin a las desastrosas políticas neoliberales y liquidar el corrompido sistema del *punto fijismo*, que le permitió obtener el 56% de los sufragios. El principal candidato derrotado fue Henrique Salas Römer, apoyado por los partidos tradicionales y otras fuerzas de centro derecha, defensoras del *status quo*, que obtuvo solo el 39.9 % de los sufragios. Junto con el milenio, toda una vieja época tocaba su fin, pues se iniciaba en Venezuela, y con ella en toda la América Latina, una nueva época de su historia.

La revolución chavista

El inicio del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, el 2 de febrero de 1999, fue el comienzo de la revolución bolivariana, que marcó una nueva época histórica en la tierra del *Libertador*, de profundas consecuencias para el futuro del país. El ascenso del chavismo puso fin a política neoliberal de los gobiernos precedentes, que tanto perjuicio había causado a la población venezolana, y comenzó el ascenso del papel regulador del Estado y del desarrollo de una política de justicia social, junto a la recuperación de la independencia y soberanía de la nación.

La llegada al poder de Chávez inauguró también, desde el punto de vista internacional, una serie de cambios muy positivos en América Latina que terminarían creando las condiciones, desde los primeros años del siglo XXI, para un verdadero cambio de época a nivel continental. Sin duda alguna, de entre todas las esperanzadoras alternativas latinoamericanas que se abrieron a partir de entonces, la más significativa fue la venezolana, implementada por el comandante Hugo Chávez Frías, al frente de un movimiento revolucionario de inspiración bolivariana que abrió un singular proceso de profundas transformaciones sociales y políticas en la patria de Bolívar.

Desde el principio de su mandato, Chávez debió enfrentar las malintencionadas campañas de los medios de difusión, así como de la mayoría opositora del Congreso, elegida con anterioridad a los comicios presidenciales. A pesar de la enconada resistencia opositora,

entre los primeros aciertos de su gestión estuvo una activa negociación internacional, apoyada por su ministro de Energía y Minas, el ex guerrillero Alí Rodríguez Araque, para reactivar la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y conseguir mejores precios para los hidrocarburos. A fines de 1999 estos esfuerzos dieron sus primeros frutos.

A la par, Chávez dio pasos firmes para sacar de Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA), el consorcio estatal petrolero creado en 1976 tras la nacionalización de los hidrocarburos, a la banda de tecnócratas corruptos que la habían puesto al servicio de la vieja élite política venezolana y los intereses de Estados Unidos. Otra de las prioridades de Chávez, en los primeros momentos de su gobierno, fue formar la prometida asamblea constituyente, encargada de modificar el anquilosado sistema político de la llamada cuarta república. Para lograr la autorización legal para convocar la convención, se celebró un referéndum el 25 de abril de 1999 que obtuvo la aprobación del 82% de los votantes.

A continuación, el 25 de julio de ese mismo año, se efectuaron las elecciones de diputados a la convención en la que los candidatos chavistas del Polo Patriótico obtuvieron 119 de los 131 curules, con el 67% de los sufragios. Como colofón de este proceso encaminado a dotar al país de una nueva carta magna que permitiera modificaciones más profundas del orden existente, en diciembre de 1999 los seguidores de Chávez volvieron a repetir sus triunfos, con el 71% de los votos, en otro referéndum, esta vez para ratificar la nueva constitución que fundaba la República Bolivariana de Venezuela.

En base a las estipulaciones de la flamante carta magna bolivariana, se convocaron nuevos comicios presidenciales –ahora el mandato ejecutivo se extendía a seis y se dejaba al congreso con una cámara única–, que Chávez volvió a ganar el 30 de julio del 2000 con el 59.7% de los sufragios. En esta ocasión, su contrincante era su ex compañero de armas, Arias Cárdenas, que debió conformarse con el 37.5 % de los votos.

En esos mismos comicios, el Polo Patriótico obtuvo una sustanciosa mayoría parlamentaria, así como buena parte de las gobernaciones y los poderes locales. A pesar de estas contundentes victorias,

la resistencia opositora impidió mediante diferentes artimañas que se llevaran adelante las promesas electorales y el avanzado articulado de la constitución. Eso explica que el presidente Chávez asumiera poderes especiales en noviembre de 2001, que le permitió promulgar 49 leyes habilitantes para impulsar buena parte de las transformaciones sociales y económicas que esperaba el país, incluyendo una ley de tierras, base de una futura redistribución agraria.

Las leyes habilitantes destaparon la violenta reacción de la burguesía venezolana. Para evitar la legislación revolucionaria chavista, la oposición hizo un primer intento de huelga general el 6 de diciembre de 2001, mientras aumentaban las confrontaciones callejeras y las sucias campañas mediáticas. En ese contexto, salió del gobierno el sector moderado del chavismo, representado por el viejo político y empresario Luis Miquelena, destituido por Chávez, el 24 de enero de 2002, a la vez que cesanteaba a la corrupta cúpula directiva de PDVSA.

La respuesta de la oposición derechista fue organizar en los primeros días de abril de 2002 un paro general, una marcha pública y una sangrienta provocación en las calles de Caracas. Era el preámbulo del golpe de Estado que depuso a Chávez el 11 de abril de ese año y situó en la primera magistratura al acaudalado Pedro Carmona Estanga, hasta entonces presidente de la gremial empresarial conocida por sus siglas como FEDECAMARAS.

Chávez, que se negó a renunciar, fue encarcelado por los golpistas –primero en el fuerte Tiuna, luego en Turiamo y finalmente en la isla de Orchila–, mientras el efímero dictador revelaba su verdadero rostro fascista con la disolución de los órganos de elección popular, la derogación de la nueva constitución y la represión contra las figuras más connotadas del chavismo, incluyendo el sitio a la embajada cubana. Apenas dos días después, las manifestaciones populares encolerizadas, encabezadas por dirigentes del Polo Patriótico como José Vicente Rangel y Aristóbulo Istúriz, junto a la enérgica reacción de los militares leales guiados por el general Jorge Luis García Carneiro, en ese momento comandante de la región militar de Caracas, revirtieron la intentona fascista y el líder de la revolución bolivariana tuvo que ser liberado.

Una nueva maniobra opositora comenzó el 2 diciembre de 2002 mediante un prolongado paro empresarial que tenía su centro en las instalaciones petroleras. Dos meses después, tras despedir a los gerentes, técnicos y trabajadores de PDVSA comprometidos con la reacción derechista y los intereses foráneos, la huelga fue revertida, gracias al indiscutible respaldo popular y la lealtad de las fuerzas armadas.

Pero el cambio decisivo en el pulse de fuerzas con la oposición se produjo el 15 de agosto de 2004, cuando el gobierno de Chávez obtuvo una contundente victoria en el referéndum revocatorio, donde alcanzó el 60% de la votación. A este impresionante triunfo siguió, el 31 de octubre de ese mismo año, el de los comicios parciales que le dieron a sus seguidores el poder en la gran mayoría de las alcaldías –270 de 337– y en todos los gobiernos de los estados, con la excepción de Zulia y Nueva Esparta.

Para redondear esta serie de resonantes victorias, en las elecciones presidenciales de 2006, Chávez volvió a imponerse a un candidato opositor, esta vez Manuel Rosales, con el 62.84%, mientras el aspirante derechista solo conseguía el 36.9%. Este significativo triunfo estuvo precedido por el total control chavista de la asamblea nacional, después que en los comicios legislativos de diciembre de 2005 la oposición cometiera el error de abstenerse.

En gran medida, la cadena de triunfos en las contiendas democráticas –donde la única excepción fue el revés chavista en el referéndum constitucional del 2 de diciembre de 2007, perdido por muy estrecho margen–, estaban basados en los exitosos resultados de la revolución bolivariana. En particular, los generosos programas sociales emprendidos por el presidente Chávez, entre ellos las diversas Misiones –Ribas, Sucre, Mercal, Barrio Adentro, Zamora, Vuelvan Caras, Robinson, Vivienda, Identidad, etc.–, la fundación de la Universidad Bolivariana, con recintos universitarios en todo el país, y los ambiciosos proyectos de largo aliento en el campo educativo, alimentario, productivo, de salud, vivienda y otros.

Todos ellos están dirigidos a beneficiar a amplios sectores populares, como los indígenas, campesinos, mineros y otros sectores marginados de la sociedad, con el objetivo de lograr, en el menor

plazo posible, la equidad y la superación de las desigualdades y las exclusiones culturales, sociales y políticas, como parte del proyecto bolivariano del socialismo del siglo XXI. Como resultado de esta política social, que también permitió la creación de cuatro millones de nuevos puestos de trabajo, la revolución bolivariana consiguió disminuir la pobreza del 50% al 27.8% –la extrema pobreza descendió del 30% al 6%–, mientras el desempleo se redujo de un 15.2% a un 6.4% en 2012.

Según la CEPAL, Venezuela es el país de América Latina que más logros ha tenido en la erradicación del hambre y la tasa de desnutrición, que bajó del 21% en 1998 a menos del 3% en 2012, mientras la capacidad de producir alimentos para consumo interno, acorde a los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), subió del 51% en 1999 al 71% en 2012, Además, Venezuela es el primer país del mundo al que la UNESCO le otorgo en 2010 la calificación de 96 puntos sobre 100 en mejora educativa, por las metas alcanzadas en materia de alfabetización, educación inicial, primaria, secundaria y universitaria. Como consecuencia de todo ello, entre los años 2000 y 2012 la revolución bolivariana mejoró en forma sustantiva el Índice de Desarrollo Humano del país, que en este período fue cuatro veces superior al de las dos décadas anteriores, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Entre los éxitos alcanzados debe subrayarse que más de un millón de personas fueron alfabetizados (Misión Robinson) en poco tiempo y se distribuyeron miles de toneladas de alimentos diarios a bajo precio. En gran medida esos resultados fueron posible por la solidaria colaboración cubana, en primer lugar por la presencia permanente de más de 20 mil médicos y personal de la salud que brindan atención gratuita en las zonas populares más pobres y aisladas del país.

También el gobierno bolivariano ha impulsado vigorosamente proyectos integracionistas con los demás países de la región, de lo que son muestra la Comunidad Sudamericana de Naciones –integrada por 12 países– y los acuerdos con Cuba, todos firmados en diciembre de 2004. Estos últimos fueron la base de la posterior creación de la

Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), verdadera respuesta al ALCA siguiendo el legado de los grandes pensadores latinoamericanos y las mejores tradiciones de nuestros pueblos. También debe mencionarse, dentro de los esfuerzos integracionistas impulsados por la revolución bolivariana, la fundación de Petrocaribe, que ha beneficiado a muchas naciones centroamericanas y caribeñas, así como la erección de un Banco del Sur en diciembre de 2007.

La última victoria electoral del comandante Hugo Chávez, al frente del recién creado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la obtuvo cuando ya estaba gravemente enfermo de cáncer –y después de haber sufrido varias operaciones sucesivas en los últimos meses–, en los comicios presidenciales de octubre de 2012. En esta ocasión, el líder de la revolución bolivariana obtuvo el 55.5% de la votación, derrotando a su rival derechista Henrique Capriles, que debió conformarse con el 44.3% de los sufragios.

A esta contundente victoria, siguió la obtenida por los chavistas en diciembre de ese mismo año, cuando ya el mandatario venezolano estaba hospitalizado en La Habana, al ganar una cómoda mayoría en la cámara y obtener la gobernación de todos los estados excepto tres. Este resultado fue más significativo, pues por primera vez en el período de la revolución bolivariana Chávez no pudo participar personalmente en una elección, pues ya se encontraba al borde de la muerte, lo que fatalmente ocurrió, tras larga agonía, el 4 de marzo de 2013.

Tras su apoteósico sepelio, que fue una extraordinaria manifestación de duelo popular que conmovió al mundo, se realizaron nuevos comicios. Ahora se enfrentaron el presidente designado por Chávez para que lo sustituyera y ex canciller Nicolás Maduro, postulado por el Gran Polo Patriótico –formado por el Partido Unido Socialista y otras agrupaciones aliadas– y el aspirante de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD), que respondía a los intereses de la oposición derechista y los Estados Unidos, Henrique Capriles, a la sazón gobernador del estado de Miranda.

La apretada victoria electoral chavista del 14 de abril de 2013, esta vez 50.6% frente al 48.7% de su contrincante, junto a la desaparición física de Chávez, hicieron creer a la oposición que esta era la

oportunidad de derrocar por la fuerza al gobierno bolivariano. Para conseguirlo, desencadenaron una violenta ola de protestas y atentados callejeros que ocasionaron la muerte de varias personas, pero que no pudieron impedir la exitosa toma de posesión de Maduro cinco días después, encargado de dirigir, según lo establece la constitución vigente, los destinos de Venezuela hasta el 2019.

La continuación del legado de Hugo Chávez, ahora bajo la responsabilidad de Nicolás Maduro, abre un nuevo período en la historia de la revolución bolivariana. De seguro esta nueva etapa no estará exenta de dificultades y amenazas de toda índole, generados por la oposición burguesa y los Estados Unidos, que harán todo lo posible por revertir el proceso revolucionario en la patria del *Libertador*.

El cambio de época

La revolución bolivariana fue el inicio de una nueva época en la historia de América Latina y el Caribe. El inicio de las radicales transformaciones en la redenominada República Bolivariana de Venezuela, fue seguido en otros países latinoamericanos de la llegada al gobierno, por la vía de elecciones democráticas, de destacados representantes de las fuerzas populares y progresistas, aupados al poder por las dramáticas consecuencias económicas y sociales del desenfreno neoliberal y la crisis de credibilidad de la mayoría de los partidos tradicionales.

La primera victoria electoral de Hugo Chávez en Venezuela (1998, luego reelecto en 2002, 2006 y 2012), fue continuada después con los triunfos democráticos de Luiz Inácio, *Lula*, da Silva (2003, reelecto en 2006) y Dilma Rouseff (2010), ambos líderes del Partido de los Trabajadores de Brasil; Néstor Kirchner en Argentina (2003) y luego de su esposa Cristina Fernández (2007, reelegida en 2011); Tavaré Vázquez (2005) y José Mujica (2009), ambos del Frente Amplio en Uruguay; Evo Morales en Bolivia (2006 y reelecto en 2009), así como Rafael Correa en Ecuador (2007, reelecto en 2009 y 2013). A estos indiscutible triunfos populares, que cambiaron como nunca antes el mapa político de América Latina, deben

sumarse los obtenidos por Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua (2007 y reelegido en 2012), así como los más precarios de Manuel Zelaya en Honduras (2006) –interrumpido con su derrocamiento en 2009 por los militares y la élite empresarial, encabezada por Roberto Micheletti– y de Fernando Lugo en Paraguay (2008), depuesto en forma arbitraria e ilegal por el legislativo paraguayo en 2012 dirigido por el ambicioso vicepresidente Federico Franco.

A este verdadero cambio de época también ha contribuido los diferentes gobiernos independientes del Caribe –algunos de ellos integrados al ALBA y/o Petrocaribe– y la resonante victoria electoral obtenida en El Salvador por Mauricio Funes (2009), candidato del Frente Farabundo Martí (FMLN), así como de otras fuerzas democráticas y progresistas en la región, que han marcado distancia de las viejas prácticas políticas y enarbolado una plataforma soberana e independiente. Pueden mencionarse los sucesivos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fundado por Juan Bosch en la República Dominicana, en manos de los presidentes Leonel Fernández (1996-2000 y 2004-2012) y Danilo Medina (2012-2016); los socialistas Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet en Chile (2006-2010 y reelegida para el período 2014-2018, con un 62.2% de los sufragios); Álvaro Colom en Guatemala (2008-2012) y Michel Joseph Martelly en Haití, este último en la primera magistratura en este devastado país caribeño desde el 2011.

Sin duda, la profunda crisis económica, social y política a que fue llevada la América Latina con la implementación de un capitalismo salvaje han abierto en el continente inesperadas opciones y espacios, con nuevas alternativas, que antes apenas se esbozaban, que indican la apertura de una época diferente en la historia latinoamericana, signada por cambios muy positivos. En varios países de la región se ha vertebrado una nueva izquierda, purgada de errores, traumas y desencuentros del pasado, opciones inimaginables solo unos años atrás, después del dramático descalabro del socialismo europeo y del acorralamiento del marxismo por el pensamiento único. En última instancia, estos cambios tienen que ver con casi tres décadas de desenfrenado neoliberalismo que crearon las condiciones, necesidades y los

nuevos actores sociales para impulsar transformaciones radicales en una dirección diferente.

Síntoma de los nuevos tiempos es la inusitada fuerza del cuestionamiento a la validez ideológica y política del neoliberalismo y su modelo de estado mínimo, que fue deslegitimada en casi todas partes como paradigma de las estrategias gubernamentales latinoamericanas, al no poder reducir la pobreza y en su lugar aumentar la desigualdad. El creciente emplazamiento del neoliberalismo ya venía produciendo con anterioridad en América Latina un reverdecer de la retórica y la práctica antineoliberal.

Sus primeros síntomas afloraron en los discursos de varios mandatarios latinoamericanos en la Cumbre de Monterrey (México), realizada en enero de 2004, en abierta discrepancia con las propuestas del entonces presidente George W. Bush, centradas en el libre comercio, la seguridad, la lucha contra el terrorismo y la implementación del ALCA. Desde entonces, cobraron un nuevo aire los proyectos integracionistas regionales y los acuerdos entre ellos.

Otra consecuencia, fue la modificación en las posiciones oficiales de algunos países latinoamericanos –sobre todo de la América del Sur– respecto al ALCA, cuestionándose algunos de sus principios generales, lo que en definitiva condujo a que no se concretara en la fecha y términos que proponía Estados Unidos. De ahí que desde mediados de 2003, Washington tuviera que buscar nuevas alternativas para imponerlos, en lo fundamental mediante la firma de tratados bilaterales, como los concretados con Chile, Perú, Colombia, Centroamérica y algunos otros países del hemisferio.

Pero el fracaso norteamericano en la implementación del ALCA no impide que la red de tratados de libre comercio que ha ido tejiendo Estados Unidos pueda debilitar la posibilidad de una acción conjunta de los países latinoamericanos para negociar en bloque con el poderoso vecino del Norte. En contra de una acción concertada de América Latina también surgió, en el primer semestre de 2012, un convenio integracionista de claro cuño neoliberal y conservador, titulado la Alianza del Pacífico, que ha agrupado a México, Chile, Perú y Colombia.

Los gobiernos del PT en Brasil: de Lula a Dilma

En Brasil el cambio de época comenzó con la llegada al poder Lula da Silva, el antiguo líder de los obreros metalúrgicos convertido en máxima figura del Partido de los Trabajadores (PT). Cuando el fracaso del segundo gobierno de Fernando Henrique Cardoso era ostensible, se produjeron los comicios presidenciales de 2002, a los que Lula se presentó como candidato por cuarta ocasión. Pero esta vez el líder del PT tenía mayor libertad para tejer alianzas y hacer compromisos, lo que explica que pudiera llevar como compañero de boleta al empresario Jose Alencar Gomes da Silva (fallecido en 2012).

A pesar de sus concesiones, debió enfrentar la propaganda atemorizadora de la reacción y los grandes medios de difusión, a las que respondió con la consigna de que «la esperanza se impondría al miedo» y con promesas de dar prioridad a los preteridos problemas sociales, oponiéndose al neoliberalismo. En la segunda ronda electoral, Lula contó, además del respaldo del Partido Comunista de Brasil (PCB), el Partido Comunista Brasileño (PCdoB) y el Partido Democrático Laborista (PDT, por sus siglas en portugués) que había tenido en la primera vuelta, con el del Partido Socialista Brasileño (PSB).

Con este amplio apoyo de las fuerzas de izquierda, Lula derrotó con el 61.35% de los sufragios a su principal adversario, José Serra, del partido de gobierno, que se quedó solo con el 23.2% de la votación. La elección del líder del PT fue vista por todos los movimientos populares y progresistas como una victoria propia y considerada como un punto de inflexión en la historia de Brasil, que daría paso a una política favorable a los legítimos intereses nacionales y de solución a los graves problemas sociales.

Pero las necesarias transformaciones radicales que se esperaban del gobierno de Lula, iniciado el 1 de enero de 2003 con el lema de *um outro Brasil é possível*,[3] estuvieron constreñidas desde el principio

[3] Gaudencio Frigotto: «Brasil e a politica economico-social: entre o medo e a esperença», *Revista del Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, CLASO, p. 98.

de su mandato por los límites impuestos por las estructuras tradicionales de poder aposentadas en el aparato judicial, el legislativo, los gobiernos estatales y altos mandos militares. Eso explica que la política económica del PT fuera de avances lentos y graduales, manteniendo como inercia prácticas del gobierno anterior, como por ejemplo, seguir destinando casi el 60% de la recaudación fiscal al pago de la deuda externa, lo que fue alejando a algunas organizaciones y movimientos sociales que lo habían respaldado.

No obstante, Lula intentó desmontar la política neoliberal, lograr beneficios sociales y reducir la vulnerabilidad externa, a la vez que inducía el crecimiento económico. Por eso desde el principio de su mandato, el presidente brasileño puso el acento en políticas sociales focalizadas, de tipo asistencial o de beneficencia pública, que le permitió disminuir ciertas tensiones sociales y mantener su popularidad –primero con su programa de *Hambre 0*, sustituido después por la más amplia *Bolsa Familiar*– postergando las esperadas transformaciones sustanciales que reclamaban sus partidarios más radicales. Gracias a esos amplios programas sociales, el número de personas ubicadas en el nivel de miseria se redujo en 2006 a seis millones de personas, lo que equivalió a una baja del 15.2% de la población total de Brasil (189 millones de habitantes).

En el campo de la política exterior, el gobierno de Lula marcó más distancia todavía del de su predecesor, en particular por su intensa campaña internacional a favor de un orden mundial más justo y en defensa de una nueva geografía comercial que pusiera fin a los subsidios agrícolas que hacen una competencia desleal a las producciones de los países más atrasados o subdesarrollados. También el mandatario brasileño puso énfasis en la integración regional, como se ejemplifica con los acuerdos firmados con los gobiernos revolucionarios de Cuba y Venezuela.

Al pasar la mitad de su mandato, la extraordinaria popularidad del carismático presidente Lula se fue erosionando, mientras se producían escisiones y expulsiones de sectores de izquierda del propio PT, pasados a la oposición. Diferentes grupos, incluido algunos parlamentarios radicales purgados del partido oficial, junto al Partido Comunista y Consulta Popular, vertebraron un Frente de

Izquierda con vistas a las elecciones de 2006, que llevó de candidata a Heloísa Helena, una ex diputada del partido de Lula. Al mismo tiempo, fueron reapareciendo algunas protestas populares, como las provocadas por la reforma del sistema de pensiones y prestaciones a los trabajadores (2004).

La denuncia de sobornos a varios diputados, conocida como la crisis del *mensalao* (mensualidades) en 2005, y otros escándalos similares, contribuyeron también a menguar la popularidad del mandatario y llevaron a la sustitución de influyentes figuras del PT en el gobierno, entre ellos José Dirceu –que en 2012 fue condenado a diez años de cárcel por su responsabilidad en la corrupción gubernamental– y el ministro de Hacienda Antonio Palocci. Dirceu, un antiguo combatiente contra la dictadura militar hasta entonces jefe del gabinete presidencial, fue sustituido en ese puesto clave por Dilma Rouseff, una ex guerrillera de VAR Palmares que había sufrido prisión y torturas, incorporada al PT solo cuatro años antes.

Las revelaciones fueron aprovechadas por la oposición y la mayoría de los medios masivos de difusión para intentar desprestigiar al presidente Lula e impedir a toda costa su reelección. A pesar de la caída de la popularidad de Lula y la deserción de algunos de sus partidarios –como los que fundaron el Partido Socialismo y Libertad (PSOL)–, muchos movimientos sociales consideraron que la situación del país sería peor sin él y decidieron apoyarlo en la nueva contienda presidencial. Los resultados de la primera ronda electoral, celebrada en octubre de 2006, alarmaron a Lula y al PT –solo obtuvo 48.64 % de los votos frente al 41.61% de su contrincante el socialdemócrata Geraldo Alckmin del PSDB–, ante la posibilidad de perder la segunda vuelta.

Pero el mandatario reaccionó vigorosamente y logró reelegirse –con el 60.8% de los votos válidos, equivalente a 58.3 millones de votantes– para otros cuatro años. Su victoria sobre el candidato opositor, que se tuvo que conformar con el 39% de los sufragios, fue festejada por todo el país.

Al final, las pérdidas del partido gubernamental en estas elecciones no fueron de la magnitud que se vaticinaba, pues el PT quedó como la segunda agrupación más numerosa de la cámara. No

obstante, los 83 representantes obtenidos por el PT en esta rama parlamentaria era inferior a los 91 diputados conseguidos en el 2002 y, entre los dos comicios presidenciales, los seguidores de Lula disminuyeron en dos millones de votos, mientras la abstención fue la más alta de los últimos años (23%).

A fin de cuentas, la clave de la nueva victoria electoral de Lula era su política social, que le permitió sortear con éxito ciertas tensiones y mantener su popularidad entre los sectores menos politizados, en gran medida gracias a la *Bolsa Familiar* que ya beneficiaba con una pequeña mensualidad a más de 11 millones de familias pobres. Aunque el gobierno del PT había relegado las prometidas transformaciones sustanciales de la sociedad, al final de su primer mandato la mejoría de los sectores más humildes era ostensible.

Durante su segundo gobierno, extendido de 2007 a 2011, Lula estuvo más a la izquierda que en el primer período presidencial. En esta etapa puso énfasis en la integración de América Latina. Los éxitos obtenidos y el crecimiento económico conseguido por Brasil, cada vez más una potencia emergente a nivel mundial, le permitieron a Lula abandonar el poder con un histórico 97% de aprobación a su gestión.

Con ese aval llegó su sucesora y correligionaria Dilma Rouseff al Palacio del Planalto en Brasilia, la primera mujer que alcanzaba tal responsabilidad en toda la historia de Brasil. En la campaña electoral, Dilma tuvo como principales rivales a José Serra y Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente que había abandonado el gabinete de Lula precisamente por un enfrentamiento con la ahora aspirante del PT. En estos comicios, Dilma obtuvo el 46.8% de los sufragios, seguidos por el 32.6% de Serra y el 19.3% de Silva. La presidente brasileña se ha propuesto eliminar la pobreza extrema y dedicar casi la mitad del PIB de Brasil a esa finalidad.

Una vez en el gobierno, la flamante mandataria dio continuidad a la política de su predecesor, aunque puso más énfasis en la defensa de los derechos humanos, para lo cual comenzó aprobando una ley de libre acceso a la información pública y creando una Comisión Nacional de la Verdad (CNV), para investigar las violaciones cometidas por los órganos represivos del Estado brasileño desde 1946.

También se distinguió por su política de *faxina*, esto es, limpieza de la administración pública, que ha llevado a la salida del gobierno y organismos del Estado a varios ministros y funcionarios, lo que se ha combinado con una política exterior de gran potencia emergente que exige un puesto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) y en otros foros internacionales.

A mediados de 2013, varias ciudades de Brasil fueron sacudidas por espontáneas manifestaciones populares provocadas por el aumento de los precios del transporte en Sao Paulo y exigiendo una profunda revisión de los gastos públicos. En particular, cuestionaban los millonarios fondos empleados en costosos eventos deportivos, como los empleados en la construcción de instalaciones para la Copa Mundial de Fútbol, Brasil 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016. La inesperada crisis creada por las multitudinarias protestas callejeras condujo a la brusca caída de la popularidad de la mandataria, obligándola a reevaluar en forma crítica toda su política, para dar respuesta a las exigencias de la gran mayoría de la población brasileña.

Peronismo kirchnerista en Argentina

En Argentina, los procesos de cambios fueron la reacción natural a una profunda crisis económica, creada por la aplicación del neoliberalismo, acompañada de una larga inestabilidad política y social. Según las cifras, la crítica situación argentina había llegado al extremo de que el 54% de la población se encontrara por debajo del límite de pobreza y la mitad de ella (27% del total), en condiciones de indigencia.

En esas difíciles condiciones, se efectuaron los comicios presidenciales del 27 de abril de 2003 que despejaron el camino a la Casa Rosada del abogado y ex gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. El aspirante peronista del llamado Frente de la Victoria –apoyado por el mandatario interino Ernesto Duhalde– quedó en segundo lugar en esas elecciones, con solo el 22.24 % del electorado, detrás de su principal oponente, el ex presidente y también peronista Carlos Menem, que había conseguido el 24.3% de los sufragios.

Pero la segunda ronda electoral no llegó a efectuarse, pues Menem, convencido de la victoria kirchnerista, pues las encuestas le daban más del 60% de las intenciones de votos, decidió retirarse de la contienda, evitando además una división peronista. De esa manera Kirchner, que en 1991 había sobresalido dentro del denominado peronismo renovador por su oposición a varios proyectos neoliberales del propio Menen, entre ellos la privatización de Aerolíneas Argentinas y la ley de hidrocarburos, llegó a la primera magistratura con la más baja votación registrada en la historia nacional.

El 25 de mayo de 2003 comenzó el gobierno de Néstor Kirchner. Desde los primeros momentos se distanció de las administraciones precedentes y comenzó a desarrollar una política posneoliberal, dirigida a cambiar en poco tiempo el desastroso panorama económico y cerrar el ciclo de ingobernabilidad abierto en 2001. Para lograr disminuir la pobreza y el desempleo, promovió nuevas fuentes de trabajo, la elevación del salario real y una mejor distribución de la riqueza, a lo que contribuyó el crecimiento de las construcciones, en particular de viviendas, y de la industria por sustitución de importaciones, que permitió hasta 2007 un crecimiento anual del 9%.

A ello debe añadirse una política a favor de la integración latinoamericana –en particular con Venezuela y Brasil–, y de rechazo al ALCA promovido por Estados Unidos. Incluso, Kirchner encabezó la oposición latinoamericana a los planes neopanamericanos del gobierno de Busch en la Cumbre de las Américas celebrada en Mar del Plata (2005).

También el gobierno kirchnerista se distanció de los anteriores por su firme condena a las violaciones de los derechos humanos durante los regímenes castrenses de fines de los setenta y principios de los ochenta. Para acabar con la impunidad, anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y los indultos de los noventa, que habían impedido juzgar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, además de renovar la anquilosada Corte Suprema de Justicia.

También el presidente impulsó la renegociación de la onerosa deuda externa, sacando a la Argentina de la más larga suspensión de

pagos de su historia, procurando que no pasara por encima de los intereses y demandas nacionales. En gran medida, ello fue factible con la ayuda solidaria del gobierno de Chávez, que le permitió pagar el total de la deuda externa al FMI, casi 10 mil millones de dólares.

Esta política soberana e independiente fue continuada por su esposa, la abogada Cristina Fernández –bajo cuyo gobierno Néstor Kirchner fue parlamentario y presidente del Partido Justicialista (peronista)–, que ganó las elecciones para el período 2007-2011 con el 45.28% de los sufragios. Durante los últimos dos años del mandato de su esposo, Cristina Fernández se había desempeñado como senadora en el Congreso Nacional.

Durante su primer gobierno, la mandataria debió enfrentar a la élite agrícola, cuya resistencia a las medidas gubernamentales alcanzó su punto culminante en 2008, cuando realizaron un paro que estuvo acompañado de bloqueo de carreteras, extendido durante 129 días. También afrontó la oposición de la derecha argentina, como la proveniente del poderoso grupo mediático *Clarín* –negado a cumplir la ley antimonopólica y promotor de una rabiosa campaña de prensa contra el gobierno kirchnerista–, que influyó en la derrota electoral de la mandataria en los comicios intermedios de 2009.

No obstante, entre los logros del primer gobierno de Cristina Fernández deben mencionarse la nacionalización del sistema de pensiones y jubilaciones, la recuperación de antiguas empresas estatales, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas, la Fábrica Argentina de Aviones y Yacimientos Petrolíferos (YPF) –incluso fueron nacionalizadas el 51% de las acciones de la empresa española Repsol–, además de la ayuda económica masiva brindada para hijos de desempleados, que ya en 2012 beneficiaba a cuatro millones de personas. A todo ello debe sumarse la continuación de la lucha por los derechos humanos y de la política exterior soberana e integracionista iniciada durante el gobierno de su esposo, incluyendo la intensificación de la campaña diplomática para la recuperación de Las Malvinas.

En vísperas de nuevas elecciones, en la que todo parecía indicar que Néstor Kirchner se presentaría de nuevo como candidato del Frente para la Victoria, el líder justicialista falleció en forma repentina el 27 de octubre de 2010. La ola de duelo popular que estremeció

la Argentina impulsó la reelección de su viuda para un segundo mandato (2011-2015). En estas dramáticas condiciones, teniendo como base fundamental al peronismo y su alianza con partidos de centroizquierda, unidos en el Frente para la Victoria, Cristina Fernández viuda Kirchner obtuvo el 54.11 % de la votación, el más alto porcentaje obtenido por un aspirante presidencial desde 1983.

Entre las realizaciones del segundo mandato de la presidenta argentina se encuentran el plan Conectar Igualdad, basado en la entrega y puesta en funcionamiento de tres millones de mini lap tops con acceso a Internet a todas y todos los alumnos de escuelas públicas primarias y secundarias del país. Ello ha sido posible porque el presupuesto nacional de educación creció desde el 3.64% en 2003 al 6.81% en 2012, al mismo tiempo que las construcciones de centros educacionales ha registrado la cifra más alta desde el primer gobierno de Perón.

Como resultado de los tres sucesivos gobiernos kirchneristas, la deuda en dólares de la Argentina descendió del 92% del PIB, que representaba en el 2003 a solo el 8.4% en 2012. Además la pobreza, según un informe de la CEPAL, se redujo en 2011 en relación al 2003, de 33.8% al 5.7%, ubicándose como la más baja en América Latina, por delante de Uruguay (6.7%). Por su parte, la indigencia disminuyó del 7.2 al 1.9%, siendo la segunda más baja de la región, mientras, según informes del Banco Mundial, entre 2003 y 2009 Argentina duplicó su clase media, pasando de 9.3 millones a 18.6 millones de personas, casi la mitad de toda su población, a lo que ha contribuido el sustancial incremento de las pensiones y jubilaciones. Pese a todos estos avances, la oposición y la prensa de la derecha hacen todo lo posible por entorpecer la labor gubernamental kirchnerista, con el propósito de revertir los logros alcanzados para la gran mayoría de la población argentina.

El Estado Plurinacional de Bolivia

La entrada al Palacio Quemado en La Paz de Evo Morales Ayma, el 22 de enero de 2006, formó también parte del cambio de

época registrado en América Latina a comienzos del siglo XXI. El popular líder indígena de origen aymara se alzó con una indiscutida victoria electoral en los comicios del 18 de diciembre de 2005, teniendo de compañero de fórmula electoral por el Movimiento al Socialismo (MAS)-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) a un destacado intelectual y ex guerrillero, Álvaro García Linera.

El programa de Evo Morales, que le atrajo el apoyo de los sectores más humildes del país, incluía demandas como la revalorización de la identidad indígena, la recuperación de los recursos naturales y la defensa de la cultura de la hoja de coca. Ello explica que obtuviera el 53.7% de la votación frente al candidato del Partido Poder Democrático Social (PODEMOS), del ex presidente Jorge *Tuto* Quiroga, quien solo consiguió el 28.59% de los sufragios.

Por primera vez en toda la historia de Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina, los indígenas y campesinos llegaron al poder, controlando el Ejecutivo y buena parte del Legislativo (Cámara Baja). Por eso el primer gabinete del presidente Morales incluyó varios ministros indígenas, entre ellos David Choquehuanca en Relaciones Exteriores.

Entre las transformaciones llevadas adelante desde entonces por el gobierno de Evo Morales se encuentran el ingreso de Bolivia como miembro pleno del ALBA, que ha permitido el desarrollo de amplios programas de beneficio nacional, entre ellos el plan masivo de alfabetización *Yo si Puedo* y operaciones médicas gratuitas, con el apoyo solidario de Venezuela y Cuba. Además, se han dado créditos a la microempresa y los campesinos por el Banco de Desarrollo Productivo, con vistas a lograr la modernidad rural, junto con la construcción de hospitales, carreteras y otras obras de infraestructura.

Al mismo tiempo, se han entregado fondos para los sectores humildes, como los bonos contra la deserción escolar –denominados *Juancito Pinto*– y para los ancianos, así como la reducción de las tarifas de electricidad y teléfono. Muchas de estas conquistas han sido posibles, en tan corto tiempo, porque el primer mandatario indígena en la historia de Bolivia, cumplió su promesa de campaña

de nacionalizar los hidrocarburos (1 de mayo de 2006), que de un plumazo permitió al Estado, a través del ente estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), controlar el 82% de los ingresos por este concepto. Con posterioridad, el Estado boliviano ha extendido su dominio a otros sectores estratégicos, entre ellos la minería, la electricidad, la fabricación de cemento y las telecomunicaciones.

Como parte de un amplio plan de cambios de beneficio popular deben incluirse las transformaciones agrarias. La reforma, puesta en marcha el 2 de agosto de 2006, se encaminó a entregar títulos de propiedad de tierras estatales a campesinos pobres, en particular indígenas, como parte de un plan más ambicioso que contempla en el futuro la expropiación de latifundios.

Gracias a muchas de estas disposiciones sin precedentes, el PIB boliviano creció un promedio anual del 5.2%. En 2008, Bolivia alcanzó su mayor crecimiento registrado con un 6.2% según datos del FMI. En 2009 el país siguió creciendo en forma inusitada, al extremo que al año siguiente el Banco Mundial sacó a Bolivia de la lista de países de bajos ingresos y lo ubicó en el grupo de ingresos medios.

El 10 de diciembre de 2007 fue aprobada en Oruro, luego de un dilatado proceso de discusión por las maniobras opositoras de la reacción, la nueva constitución de Bolivia, definido desde entonces como un Estado Plurinacional, abriendo causas a una mayor participación popular y multiétnica en la sociedad boliviana. A continuación, el 25 de enero de 2009, se celebró el referendo para ratificar la nueva carta magna, que fue aprobada por el 61.43% de los votantes, ocasión en que se registró la mayor participación de todas las consultas realizadas en la historia de Bolivia: 90.26% de los ciudadanos inscritos.

El avance del proceso revolucionario en Bolivia, sin embargo, no ha estado exento de escollos, internos y externos, como los planes desestabilizadores de 2008, el llamado «gasolinazo» de diciembre de 2010, provocado por el aumento de los precios de los combustibles, y las manipuladas protestas indígenas de fines de 2011 por la construcción, por empresas brasileñas, de una

autopista cuyo trazado implica atravesar el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboró-Sécure (TIPNIS), entre Cochabamba y Beni. En estas condiciones, sometido a referéndum revocatorio el 10 de agosto de 2008, el popular mandatario indígena obtuvo un resultado favorable del 67.43%.

A pesar de todas las dificultades y obstáculos, el gobierno de Evo Morales, reelegido en su cargo en los comicios presidenciales del 6 de diciembre de 2009 –obtuvo el 64.22% de la votación–, que ha dado en 2013 nuevo impulso a la campaña diplomática para la recuperación de una salida al mar, persiste en su objetivo de abrir paso a profundas transformaciones sociales y económicas que consoliden la participación de las grandes mayorías indígenas como principales protagonistas del proceso de refundación de la gran nación del altiplano, que se encamina a pasos firmes hacia su liberación definitiva como verdadero Prometeo de los Andes.

La *revolución ciudadana* de Rafael Correa en Ecuador

Otro país que experimentó un giro radical en su historia ha sido Ecuador, que le permitió superar la inestable situación de fines del siglo XX y principios del XXI, provocada por la irresponsable aplicación de las medidas neoliberales de ajuste y reestructuración de la economía, junto a una creciente militarización del país, tras el fin del conflicto armado con Perú (1998). En un ambiente enrarecido por estas políticas nefastas, una profunda crisis económica y la falta de credibilidad ciudadana en el sistema político existente, fue que comenzó a sobresalir Rafael Correa Delgado.

Este joven economista, había realizado estudios universitarios en Estados Unidos y Bélgica, donde estuvo en la Universidad de Lovaina y conoció de cerca la Teología de la Liberación. Una de las primeras cosas que llamaron la atención de Correa fue su renuncia a su puesto de ministro de Economía y Finanzas en el gabinete del gobierno provisional de Alfredo Palacio (2005-2007), quien había sido el vicepresidente del defenestrado Lucio Gutiérrez, en franco

desacuerdo con la postura neoliberal del gobierno, que aceptaba las exigencias del FMI, y la firma del TLC con Estados Unidos.

Situado en la oposición, Rafael Correa comenzó a vertebrar una propuesta de cambios radicales para la sociedad ecuatoriana, que denominó *revolución ciudadana*, con un acabado plan antineoliberal y nacionalista, que puso énfasis en la educación y la salud popular y el rescate de la soberanía nacional. Al frente del un movimiento recién fundado, Alianza País Altiva y Soberana, y con el concurso de Pachakutik, el Movimiento Popular Democrático, el Partido Roldosista Ecuatoriano, el Partido Comunista, el Partido Socialista e Izquierda Democrática, Correa logró vencer a sus adversarios en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2006.

El principal adversario en la segunda vuelta electoral era el banquero Álvaro Novoa, del Partido Renovador Institucional, defensor de la privatización de todas las empresas públicas y el desmontaje de las leyes laborales. Pero en la ronda final, Novoa solo sacó el 43% de los sufragios frente al 56.67% obtenido por el líder de la propuesta de *revolución ciudadana*.

Desde el inicio del gobierno de Rafael Correa, 15 de enero de 2007, se puso de relieve que en Ecuador no se había producido un cambio de gobierno más, sino un verdadero cambio de época, como proclamó el propio mandatario. El principal escollo que el nuevo presidente debió enfrentar fue la tenaz oposición parlamentaria al proceso de transformaciones, pues Alianza País no tenía representación en el Legislativo y Correa exigía una sustancial reforma constitucional.

Eso explica que la estrategia transformadora de Correa comenzara por someter a referéndum la necesidad de una convención constituyente. Efectuado el 15 de abril de ese mismo año, la propuesta gubernamental obtuvo el aval del 81.7% del electorado. A continuación, en las elecciones a ese cónclave, los partidarios de Correa, obtuvieron 78 escaños de los 130 escaños, lo que permitió elaborar una nueva carta magna que permitiera modificar en forma sustantiva el orden neoliberal heredado y el desprestigiado y corrupto sistema político, al que Correa denominó la *partidocracia*.

Debido a la puesta en vigor de la nueva constitución –aprobada el 28 de septiembre de 2008 por el 63.93% de los votantes–, que

establecía nuevas elecciones generales, Correa debió someterse a nuevos comicios, en los que la amplia ventaja –consiguió el 51.99% de los votos– hizo innecesaria la segunda ronda. Por este motivo, volvió a tomar posesión de su alto cargo el 10 de agosto de 2009, en medio del entusiasmo popular y la conmemoración del bicentenario de la independencia.

Entre los primeros éxitos de la *revolución ciudadana* deben anotarse la disminución de los salarios de los altos cargos gubernamentales, el desalojo de la base militar norteamericana en Manta, la renegociación de los contratos petroleros, el cese de las relaciones con el FMI y la promoción de la integración latinoamericana, incluido el ingreso de Ecuador al ALBA en junio de 2009. También debe mencionarse el desarrollo de importantes obras públicas, los subsidios otorgados a las poblaciones más vulnerables –como los de desarrollo humano y los de viviendas–, la significativa disminución del desempleo y la elevación de salarios. A ese listado de realizaciones debe sumarse la liquidación, en una hábil maniobra financiera, aplaudida hasta por la oposición, del 91% de la deuda externa –a un costo mínimo de 35 centavos por dólar– previamente declarada ilegítima.

Pero el gobierno de Correa ha debido desarrollarse enfrentando constantes intentos de la reacción y Estados Unidos por derrocarlo. Uno de ellos fue el intento de golpe de Estado, el 30 de septiembre de 2010, que tuvo por basamento un manipulado motín policiaco que dejó un saldo de ocho muertos y dos centenares de lesionados.

En la misma dirección se inscriben las marchas opositoras en marzo de 2012 de una de las organizaciones indígenas del país, la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador (CONNAIE). Esta agrupación, que se ha ido convirtiendo, tras su apoyo a Lucio Gutiérrez en una fuerza conservadora, y su expresión política Pachakutik en un partido tradicional más, también apostó infructuosamente por la desestabilización del país.

El creciente prestigio y la popularidad nacional e internacional del presidente Correa, cimentados en una palpable elevación del nivel de vida de la población y de la dignidad nacional, ha propiciado el retorno de miles de emigrados ante el sustancial mejoramiento de la situación económica de Ecuador. Esos avales le permitieron al líder

de la *revolución ciudadana* reelegirse, con holgado margen (57.17%), el más alto porcentaje obtenido por un candidato en la historia reciente de Ecuador, en la primera vuelta en las elecciones efectuadas el 17 de febrero de 2013, lo que augura un futuro venturoso para el pueblo ecuatoriano.

Derrocamiento de los gobiernos populares de Honduras y Paraguay

No obstante las buenas perspectivas que se abrieron en el siglo XX a la izquierda latinoamericana para acceder al poder por la vía electoral, estos procesos de cambios no han estado libres de obstáculos de todo tipo. Incluso en dos países las fuerzas de la reacción y el imperialismo lograron revertirlos, como ocurrió con los dramáticos acontecimientos ocurridos en Honduras y Paraguay, donde en forma abrupta las fuerzas reaccionarias azuzadas por Estados Unidos lograron derrocar al gobierno del ex obispo católico Fernando Lugo y al del hacendado Manuel Zelaya.

En Honduras la sucesión del mandatario conservador Ricardo Maduro, en lo que parecía una sucesión tradicional de poder en la élite hondureña, devino de manera inesperada en una radicalización de la política nacional. El autor de ese giro fue el rico hacendado del Partido Liberal, José Manuel, *Mel*, Zelaya Rosales, elegido en la presidencia de Honduras tras ganar los comicios del 2005 a su contrincante del oficialista Partido Nacional, el conservador Porfirio Lobo con el 50.79% de los sufragios.

El gobierno de Mel Zelaya, iniciado el 27 de enero de 2006, desarrolló una política que hizo énfasis en el desarrollo social, así como en la integración con los países latinoamericanos, alejándose de la postura pronorteamericana de los gobiernos precedentes. Prueba de ello fue su ingreso a Petrocaribe en 2008 y, posteriormente, al ALBA, así como el auspicio a la reunión de la OEA celebrada en San Pedro Sula, los días 2 y 3 de junio de 2009, que revocó las sanciones contra Cuba y abrió el camino para su reingreso en la organización panamericana en caso que deseara hacerlo.

La política soberana e independiente del gobierno de Zelaya, la aprobación del salario mínimo y en particular su propuesta de convocar un plebiscito para reformar la constitución, desataron la cólera de reacción interna, apoyada bajo cuerda por los Estados Unidos. El 28 de junio de 2009, el presidente Zelaya fue derrocado por un golpe militar, legitimado por el parlamento, y expulsado del país.

En su lugar ocupó el poder Roberto Micheletti, hasta entonces presidente del Congreso Nacional, quien ante las airadas protestas populares contra la ruptura del orden democrático –secundadas por gran parte de la comunidad internacional–, respondió con una mayor represión. Las medidas gubernamentales no pudieron impedir el crecimiento de la oposición democrática ni tampoco el regreso del mandatario derrocado, que se alojó en la embajada de Brasil en Tegucigalpa el 22 de septiembre de 2009, de donde salió de nuevo al exterior el 27 de enero de 2010 con un salvoconducto del nuevo mandatario hondureño Porfirio Lobo Sosa.

El posterior retorno de Zelaya a Honduras fue favorecido por el *Acuerdo para la reconciliación nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras*, suscrito con el propio presidente Lobo, gracias a la mediación de los gobiernos de Hugo Chávez de Venezuela y José Manuel Santos de Colombia. Tras el regreso definitivo de Zelaya a Honduras, el 28 de mayo de 2011, se ha ido vertebrando un gran movimiento opositor, denominado Frente Nacional de Resistencia Popular, que cuenta con un extraordinario respaldo ciudadano, encabezado por la esposa de Zelaya, Xiomara Castro, que se vislumbra con grandes posibilidades de romper el tradicional sistema bipartidista que ha dominado al país a todo lo largo de su historia.

En Paraguay, por su parte, el derrotero no fue muy diferente al hondureño. Fernando Lugo llegó al poder luego del fracaso del gobierno del colorado Nicanor Duarte, iniciado el 15 de agosto de 2003, durante cuyo mandato se incrementaron las sangrientas confrontaciones sociales protagonizadas por los movimientos campesinos, en particular los despertados contra el «modelo sojero», la utilización de los agrotóxicos y los «tarifazos» contra los pagos de la deuda externa.

Como obispo de la diócesis de San Pedro del Paraná en Itapúa, entre 1994 y 2005, una de las zonas más pobres del Paraguay, Fernando Lugo había sobresalido por su apoyo a los campesinos sin tierra y el impulso dado a la organización de Resistencia Ciudadana. Esta era una agrupación de los principales partidos políticos de la oposición, las cinco centrales sindicales y más de un centenar de asociaciones civiles surgidas contra el intento de violación de la constitución nacional por parte del entonces presidente Nicanor Duarte.

Para buscar un cambio en la situación del país, el Obispo de los Pobres, como se le llamaba a Lugo, anunció su candidatura presidencial con una propuesta que incluía una reforma agraria –el 3% de la población paraguaya ocupa el 85% de las mejores tierras del país–, el mejoramiento de la justicia, lograr la salud universal gratuita y la recuperación de la soberanía energética. Su victoria electoral en las elecciones del 20 de abril de 2008, fue posible en gran medida por la conformación de la Alianza Patriótica por el Cambio, cuya principal fuerza era el Partido Liberal Radical Auténtico. En esos comicios, Lugo derrotó por más de un 10% de los votos a Blanca Ovelar, la candidata del oficialista Partido Colorado, que llevaba más de seis décadas en el poder y había sido el sostén de la larga dictadura de Stroessner.

El gobierno de Lugo, iniciado el 15 de agosto de 2008, desde su inicio se mostró muy limitado en la satisfacción de los reclamos populares, entre ellos la reforma agraria, la liquidación del corrupto sistema político, el combate al contrabando, la eliminación de la pobreza extrema y otros problemas sociales. Dada su endeble base política, pues carecía de un partido propio, el mandatario paraguayo debió resistir casi en solitario los golpes de la reacción, los recortes presupuestarios y obstáculos de toda especie levantados por los poderes constituidos, dominados por las fuerzas políticas tradicionales, el Partido Colorado y su propio aliado el Liberal Radical Auténtico, junto al capital extranjero.

Pese a estas grandes limitaciones, el antiguo obispo consiguió de Brasil el reconocimiento de la soberanía energética paraguaya, el 6 de abril de 2011, que significó un ingreso adicional de 360 millones de dólares anuales para el país, así como ciertas mejorías en

el campo de la salud pública y la educación. De este modo, durante 2010 y 2011 el país registró tasas récord de crecimiento económico, generadas en gran medida por el aumento de las exportaciones y la expansión del sector comercial, industrial y de la construcción, alcanzando picos históricos de crecimiento de 14.5%, una de las mayores tasas de América Latina.

A estos significativos logros de su política, debe sumarse la organización en marzo de 2010 del Frente Guasú, que quiere decir Grande –agrupó a una veintena de pequeños partidos y movimientos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista–, con el propósito de participar en las elecciones presidenciales de 2013. Pero las campañas difamatorias de la oposición y la aparición del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que comenzó acciones armadas en las zonas rurales, fueron debilitando al gobierno, lo que facilitó su fácil derrocamiento mediante un burdo golpe parlamentario el 12 de junio de 2012. El pretexto utilizado por los legisladores, encabezados por el propio vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal Radical Auténtico, para deponer al mandatario fue la masacre de campesinos y la muerte de varios policías ocurrida en Curuguaty.

El gobierno de Franco concluyó el mandato de Lugo. En las elecciones del 21 de abril de 2013 se impuso el candidato del Partido Colorado, el millonario Horacio Cartes, quien obtuvo el 45.9% de la votación sobre el aspirante liberal Efraín Alegre, que solo alcanzó el 36.93%, iniciando su gobierno a mediados de agosto del propio año. En esos mismos comicios el ex presidente Lugo fue elegido senador por el Partido Frente Guasú, cuando según cifras oficiales la pobreza alcanza al 40% de la población paraguaya y el 19% de ella se encuentra en total indigencia.

En ambos casos las transformaciones democráticas y populares iniciadas por los mandatarios Zelaya y Lugo en Honduras y Paraguay, respectivamente, dos de los países más pobres del hemisferio, fueron cercenadas en forma abrupta por sendos golpes de Estado realizados en 2009 y 2012. La asonada militar hondureña y el golpe parlamentario de Paraguay permitieron interrumpir las expectativas de cambios a que estaban abocados ambos países y, mediante fórmulas muy semejantes, tras el breve interinato de los gobiernos golpistas

de Micheletti y Franco, se realizaron comicios presidenciales que sirvieron para devolver el poder a los sectores tradicionales y con ello poner fin al rechazo internacional y recuperar la plena participación de estos gobiernos en los foros y organizaciones mundiales de los que habían sido excluidos.

Ascenso de otros gobiernos posneoliberales

La oleada antineoliberal que se expandió por América Latina tras el triunfo de la revolución bolivariana en Venezuela, a comienzos del siglo XXI, incluyó también al fortalecimiento de dos agrupaciones de origen guerrillero: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacinoal (FMLN) en El Salvador, llegados al poder por sendas victorias electorales de sus candidatos Daniel Ortega en 2007 y Mauricio Funes en 2009.

En el caso de Nicaragua, el resurgimiento del sandinismo se produjo a contrapelo del desgaste a que fue sometido el FSLN y de las campañas de desprestigio lanzadas en su contra por la propaganda derechista, como las orquestadas en torno a «La Piñata». Con este término festivo se alude al proceso ocurrido tras la pérdida electoral en 1990, cuando los sandinistas, antes de entregar el poder a la oposición, legalizó los bienes expropiados a la oligarquía –tierras, casas, etc.– y que habían sido repartidos entre la población humilde, incluyendo las propiedades que pasaron a la propia organización revolucionaria y a sus dirigentes a título personal.

También como consecuencia de la salida del poder, la unidad del FSLN se fue resquebrajando hasta que en el Congreso Nacional, celebrado en 1994, un prestigioso sector del sandinismo, encabezado por destacadas figuras históricas como Sergio Ramírez, Víctor Tirado y Luis Carrión, abandonó la organización y crearon el Movimiento Renovador Sandinista (MRS). La división sandinista facilitó que en las siguientes elecciones parlamentarias, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el principal partido de la derecha, obtuviera el 51% de la votación,

mientras el FSLN debía conformarse con el 38% y el MRS con apenas el 2%.

Otra decisión controvertida del FSLN fue los acuerdos electorales y parlamentarios a que se llegó más adelante con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), para lograr cierta gobernabilidad en el país, lo que fue muy criticado por el otro sector sandinista. Pero el entendimiento con los liberales constitucionalistas permitió cierta estabilidad política y creó las condiciones para el retorno al poder del FSLN; aunque en lo inmediato facilitó al candidato del PLC, Arnoldo Alemán, ganar los siguientes comicios presidenciales con el 52.5% frente al 37.8 % obtenido por Daniel Ortega.

El período de Alemán, extendido de 1997 a 2002, se caracterizó por la continuación de la política neoliberal implantada por su antecesora, Violeta Barrios de Chamorro, a lo que añadió la descarnada corrupción administrativa y el nepotismo, lo que más tarde determinó que fuera acusado ante los tribunales y la opinión pública. En los siguientes comicios presidenciales, el candidato del FSLN volvió a ser derrotado por un exitoso empresario vinculado al FMI y al Banco Mundial, Enrique Bolaños, quien obtuvo el 56.3% de la votación frente al 42.3% de Ortega.

El continuo deterioro de la situación económica, social y política del país durante el mandato de Bolaños, extendido hasta 2007, derivados de un desenfrenado neoliberalismo, permitió al FSLN ganar la alcaldía de Managua y conseguir la mayoría parlamentaria en el Congreso. Además, mediante una hábil política de alianzas, el FSLN vertebró un gran frente nacional electoral denominado «Gran Unidad Nicaragua Triunfa».

La histórica victoria sandinista en las elecciones del 3 de noviembre de 2006, con un 38.59 % de la votación, fue también posible por los acuerdos previos con el PLC, que establecieron que se reconocía vencedor al aspirante presidencial que obtuviera la mayoría, sin necesidad de segunda vuelta, lo cual había ocurrido ahora al quedar en el segundo puesto el liberal Eduardo Montealegre con el 30.9%. Con esta victoria electoral, el FSLN, encabezado por su líder histórico, Daniel Ortega, regresó al poder a partir del 10 de enero de 2007.

El retorno de los sandinistas abrió una nueva época en el país al poner fin a la desenfrenada política neoliberal aplicada por los gobiernos precedentes y dar inicio a la recuperación económica del país, rescatando el papel del Estado en la economía y los programas sociales de amplio beneficio social implantados por la revolución tras su triunfo en 1979. Muchos de estos programas educativos, de salud y otros se han visto favorecidos con la ayuda solidaria del ALBA, a la que Nicaragua se incorporó de inmediato.

Los éxitos de los sandinistas y el ostensible mejoramiento de las condiciones de vida de las grandes mayorías, explican la nueva victoria en los comicios de 2011, cuando Daniel Ortega se reeligió con 62.46% de los sufragios, mientras que su principal contrincante, Francisco Gadea, solo obtenía el 31%. Esta resonante segunda victoria electoral ha permitido a un fortalecido FSLN mantenerse en el poder y rescatar las conquistas de la revolución sandinista, beneficiado por las nuevas circunstancias históricas que vive hoy América Latina a principios del siglo XXI.

Por su parte, la victoria de los antiguos guerrilleros del FMLN en los comicios de 2009 en El Salvador, estuvo precedida de divisiones internas y frustrantes reveses electorales tras su desmovilización militar. En 1994 abandonaron el FMLN las cúpulas de dos de sus organizaciones fundadoras, la Resistencia Nacional (RN) –encabezada por Fermán Cienfuegos– y el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), este último dirigido por Joaquín Villalobos, responsable confeso del asesinato del poeta guerrillero Roque Dalton en 1975.

Las expectativas de cambio esgrimidas por el candidato del FMLN, el prestigioso líder comunista comandante Shafik Handal –fallecido el 24 de enero de 2006–, se vieron insatisfechas con la elección, por el 57% de la votación, de Antonio Elías Saca de la oficialista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). De esta forma, Saca sucedió en la presidencia, en 2004, al también neoliberal Francisco Flores, quien gobernaba desde 1999.

Pero en los siguientes comicios, celebrados el 15 de marzo de 2009, triunfó el periodista Mauricio Funes, candidato del FMLN, sobre el aspirante de la Alianza Republicana Nacional (ARENA), Rodrigo Ávila, antiguo director de policía. Esta victoria electoral

permitió a la antigua organización guerrillera ocupar la primera magistratura tres meses después e iniciar transformaciones sociales y democráticas en la vida del país.

Mención aparte merecen los sostenidos y significativos avances electorales en Uruguay del Frente Amplio-Encuentro Progresista, este último surgido en 2004. Su representante, el médico Tavaré Vázquez, que ya había estado a punto de vencer en la segunda vuelta electoral en 1999 a Jorge Batlle, candidato de la derecha Blanco-Colorado forzada por primera vez a coligarse para mantener el poder, ganó en forma espectacular, con el 50.45% de los sufragios, en los comicios de 2004.

El 1 de marzo de 2005 con la toma de posesión de Tavaré Vázquez se inició una nueva etapa histórica en la patria de Artigas que se continuó después con el ascenso al poder del ex guerrillero tupamaro José Mujica, aunque a diferencia de su antecesor solo obtuvo el 47.9% de los sufragios y debió concurrir a una segunda vuelta. Entre los logros de estos dos gobiernos seguidos del Frente Amplio en Uruguay pueden anotarse los beneficios salariales a los trabajadores y sustanciales mejoras en las condiciones laborales y de nivel de vida de su población.

Últimos avances de la integración latinoamericana

Aunque algunos analistas clasifican a estos nuevo gobiernos, que han transformado radicalmente el panorama político de América Latina, en populistas de centroizquierda (Argentina, Brasil y Uruguay, incluyendo El Salvador, Honduras y Paraguay, estos últimos antes de ser revertidos por la fuerza), o nacionalistas revolucionarios (Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua), todos tienen más coincidencias que divergencias. En primer lugar, sus aspiraciones por un orden social más justo y en el desarrollo de una política internacional verdaderamente soberna e independiente.

Varios de estos gobiernos son muy críticos del capitalismo y aspiran a cambios radicales. Incluso se han propuesto la construcción

de una nueva sociedad, en un proyecto que se ha denominado socialismo del siglo XX, y todos coinciden en impulsar, como nunca antes, la integración de América Latina y el Caribe desde una perspectiva solidaria e inclusiva.

El cambio de época que indudablemente vive hoy el continente ha venido acompañado de lo que pudiera considerarse un segundo impulso de la integración latinoamericana, nacida al calor de la lucha por la independencia continental a fines del siglo XIX y principios del XX. Muestra de este reverdecer es la aparición en 2004 de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Libre Comercio de los Pueblos, (ALBA-TCP), la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) en 2008 y la fundación, en diciembre de 2011, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

En particular, esta última es una agrupación política de 33 países de nuestra América que representa a 540 millones de personas y 20 millones de kilómetros cuadrados. La CELAC tiene sus antecedentes en el Grupo Contadora, formado en 1983 por Colombia, México, Venezuela y Panamá, para buscar una solución pacífica al conflicto armado que entonces asolaba la región centroamericana, y el llamado Grupo de Rio, creado en 1990 como mecanismo de consulta y concertación política de los gobiernos de América Latina y el Caribe sin la presencia de Estados Unidos.

La CELAC agrupa a países con orientaciones políticas muy diversas, algunos de ellos todavía atados a pactos, compromisos y tratados de libre comercio con los Estados Unidos –como son los casos de México, Panamá, Colombia, Costa Rica, Chile y desde 2012 Guatemala– hasta los países que componen el ALBA y otros con gobiernos progresistas que son resultado de una crítica radical al neoliberalismo y el orden social injusto, cuya participación ha sido fundamental para avanzar hacia una posición común basada en el respeto a la soberanía de nuestros pueblos frente al coloso del norte.

Las perspectivas que se abrieron con el siglo XXI a nuevas modalidades de unidad latinoamericana y caribeña han puesto a la orden del día propuestas integracionistas de matriz bolivariano que aspiran a crear las condiciones para conformar una confederación política moderna, que preserve y consolide la independencia de América

Latina y resista la embestida de la integración neopanamericana. Prueba de ello ha sido el creciente emplazamiento al neoliberalismo y los proyectos de libre comercio promovidos desde Estados Unidos, que ha permitido relanzar los proyectos integracionistas regionales y llegar a acuerdos entre estos, como los firmados entre el MERCOSUR y la Comunidad Andina, así como la fundación en 2008 de la Comunidad Sudamericana de Naciones –formada en sus inicios por 12 países–, también conocida como Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).

En particular, MERCOSUR ha logrado consolidarse como el primer bloque comercial de América Latina y el Caribe. Su radio de acción y esferas de actividad se han ido ampliando y hoy abarcan también acciones en salud, defensa, energía, economía y finanzas, desarrollo social, infraestructura y planeamiento, educación, cultura, ciencia e innovación. Expresión de ello fue la reciente creación del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa (CEED), con sede en Buenos Aires, cuyo objetivo es crear una doctrina sudamericana en materia de defensa y el Instituto Suramericano de Gobierno en Salud (ISAGS), así como el impulso dado al Banco del Sur, que aspira a romper la tradicional dependencia financiera del Banco Mundial y el FMI.

Un papel muy destacado en la promoción de la unidad latinoamericana y caribeña le ha correspondido a la República Bolivariana de Venezuela bajo la dirección del desaparecido presidente Hugo Chávez, en gran medida responsable del vigoroso impulso dado a los proyectos integracionistas de nuevo tipo con los demás países de la región, de lo que son muestras el ingreso de Venezuela en diciembre de 2005 al MERCOSUR –proceso dilatado por la resistencia de congresistas conservadores de Paraguay–, la creación de Petrocaribe y, muy en particular, con la fundación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), hoy denominada Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos).

El ALBA, verdadera respuesta revolucionaria al ALCA y los tratados de libre comercio con Estados Unidos, acogida con todo calor por la revolución cubana –que se ha propuesto la actualización

de su sistema socialista–, se inscribe también en este empeño de retomar el sueño del *Libertador* y darle cima a comienzos del siglo XXI. Al ALBA, surgido el 14 de diciembre de 2004 por acuerdos entre los gobiernos de Venezuela y Cuba, han ido sumándose posteriormente otras naciones del continente: Nicaragua (2007), Honduras (2008), Bolivia (2006), Ecuador (2009), Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y Las Granadinas, estos tres pequeños estados caribeños entre 2008 y 2009.

El ALBA se fundamenta en un ideal integracionista que hace énfasis en el desarrollo social y humano de los pueblos latinoamericanos y caribeños, siguiendo el legado de los grandes pensadores de este continente y las mejores tradiciones de Nuestra América. Por ello, entre sus objetivos figuran unir en colaboración, complementación política, social y económica a sus integrantes, para lograr sociedades más justas, cultas, participativas y solidarias.

Puntos importantes en su desempeño, encaminado a consolidar una zona de seguridad económica para sus miembros, han sido la fundación del Banco del ALBA y el Sistema Único de Compensación Regional (SUCRE), que aspira a crear en un futuro una moneda común, así como las diferentes misiones sociales, educativas y de salud. Tras la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, el ALBA se ha convertido en el segundo bloque integracionista de la América Latina y el Caribe.

A pesar de los peligros de desestabilización, mayor dependencia y creciente ingobernabilidad que siguen acechando a los países de América Latina a comienzos del siglo XXI, el ideal de la segunda independencia reclamada por José Martí desde fines del siglo XIX va ganando la conciencia de las amplias mayorías de este continente como demuestran la apertura de muchos de estos procesos, y muy en especial el venezolano, que auguran cambios inevitables en el futuro, los cuales más temprano que tarde darán al traste con la *pax* norteamericana que las administraciones de Estados Unidos persisten en imponer en el nuevo milenio a todo el planeta.

BIBLIOGRAFÍA

ACOSTA, Joseph de. *Historia Natural y Moral de las Indias, en que se tratan de las cosas notables del cielo, elementos, metales, plantas y animales dellas, y los ritos, y ceremonias, leyes y gobierno de los indios*. México, Fondo de Cultura Económica, 1962.

AGUILAR MONTEVERDE, Alonso. *El Panamericanismo. De la doctrina Monroe a la doctrina Johnson*, México, Cuadernos Americanos, 1965.

ALENCAR, Francisco, Lucia Carpi y Marcus Vinicio Ribeiro. *Historia da sociedade brasileira*. Rio de Janeiro, Ao Livro Tecnico, 1979.

ALMARAZ, Sergio. *Bolivia, réquiem para una República*. Montevideo, Biblioteca de Marcha, 1960.

ANDERLE, Adam. *Los movimientos políticos en el Perú*. La Habana, Casa de las Américas, 1985.

Antología de la independencia del Perú. Lima, Sesquicentenario de la Independencia del Perú, 1972.

ARANGO JARAMILLO, Mario. *El proceso del capitalismo en Colombia*. Medellín, Ediciones Hombre Nuevo, 1977.

AYALA, Enrique (editor). *Nueva historia de Ecuador*. Varios tomos, Quito, Corporación Editora Nacional-Grijalbo, 1989.

__________. *Resumen de Historia del Ecuador*. Quito, Corporación Editora Nacional, 2003.

AYERBE, Luis Fernando. *Los Estados Unidos y la América Latina. La construcción de la hegemonía*. Santa Fe de Bogotá, Premio Casa de las Américas, 2002.

BARCIA, María del Carmen. *Primeras sociedades de clase y modo de producción asiático*. La Habana, Edición Revolucionaria, 1971.

BELENKI, A. *La intervención extranjera en México, 1861-1867*. México, Ediciones de Cultura Popular, 1976.

BETHELL, Leslie (editor). *Historia de América Latina*. Varios tomos, Barcelona, Cambridge University Press/Editorial Crítica, 1991.

BENITES, Leopoldo. *Ecuador: drama y paradoja*. México, Fondo de Cultura Económica, 1950.

Benito Juárez: pensamiento y acción. La Habana, Casa de las Américas, 1975

BERMÚDEZ, José Alejandro. *Compendio de Historia de Colombia*, Bogotá, Editorial Cromos, 1934.

BEYHAUT, Gustavo y Helene Beyhaut. *América Latina. De la independencia a la Segunda Guerra Mundial*. Madrid, Siglo XXI, 1985.

BOHÓRQUEZ MORÁN, Carmen L. *Francisco de Miranda. Precursor de las independencias de la América Latina*. Caracas, Universidad Católica Andrés Bello/Universidad del Zulia, 2002.

BOLÍVAR, Simón. *Obras Completas*. Dos tomos, Caracas, Editorial Piñango, [s.f.].

BOSCH, Juan. *De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial*. La Habana, Casa de las Américas, 1981.

BRADING, David A. *Orbe Indiano. De la monarquía católica a la República criolla 1492-1867*. México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

BRITO FIGUEROA, Federico. *Historia económica y social de Venezuela*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1973.

BUSHNELL, David y Neile Macaulay. *El nacimiento de los países latinoamericanos*. Madrid, Editorial Nevea, 1989.

CABALLERO, Manuel. *La Internacional Comunista y la revolución latinoamericana*. Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1987.

CACCIATORE, Giuseppe y Antonio Scocozza (compiladores). *El Gran Majadero de América, Simón Bolívar: pensamiento político y constitucional*. Nápoles, La Cittá del Sole, 2008.

CAETANO, Gerardo (compilador). *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires, CLACSO, 2006.

CAICEDO ZURRIAGO, Jaime. *Plan Colombia y ALCA un mismo modelo*. Bogotá, Ediciones Izquierda Viva, [s.f.].

CARDOZA Y ARAGÓN, Luis. *Guatemala: las líneas de su mano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1955.

__________. *La revolución guatemalteca*, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1956.

CASSÁ, Roberto. *Historia social y económica de la República Dominicana. Introducción a su estudio*. Dos tomos, Santo Domingo, Editora Alfa y Omega, 1979.

CASTAÑEDA, Jorge G. *La utopía desarmada*. México, Joaquín Mortiz-Planeta, 1993.

CASTOR, Susy. *La ocupación norteamericana de Haití y sus consecuencias*. México, Siglo XXI, 1971.

CHIAVENATO, Julio José. *Genocidio Americano. La Guerra del Paraguay*. Asunción, Carlos Schauman Editor, 2008.

CÉSPEDES, Guillermo. *América Latina colonial hasta 1650*. México, Sep Setentas, 1976.

Cinco Documentos. La Habana, Instituto del Libro, 1971.

CORONEL, Bernardo. *Breve interpretación marxista de la historia paraguaya (1537-2011)*. Asunción-Paraguay, ARANDURA Editorial, 2011.

CUÉ CÁNOVAS, Agustín. *Historia social y económica de México (1521-1854)*. La Habana, Edición Revolucionaria, 1971.

CUEVA, Agustín. *El desarrollo del capitalismo en América Latina*. México, Siglo XXI, 1977.

CUEVAS MOLINA, Rafael. *De Banana Republic a Repúblicas Maquileras. La cultura en Centroamérica en tiempos de globalización neoliberal*. San José, C. R. EUNED, 2012.

CHANG-RODRÍGUEZ, Eugenio. *Opciones políticas peruanas*. Trujillo-Perú, Editorial Normas Legales S.A., 1987.

CHÁVES, Julio César. *Compendio de Historia Paraguaya*. Buenos Aires, Talleres Gráficos Lumen, 1958.

DÍAZ-CALLEJAS, Apolinar. *Colombia Estados Unidos. Entre la autonomía y la subordinación de la independencia a Panamá*. Santa Fe de Bogotá, Planeta, 1997.

DÍAZ DE ARCE, Omar. *Ensayos latinoamericanos*. La Habana, Instituto del Libro, 1971.

__________. *El proceso de formación de los estados nacionales en América Latina*. La Habana, Universidad de La Habana, 1980.

DÍAZ DE ARCE, Omar y Armando Pérez Pino. *México: revolución y reforma*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1982.

DÍAZ LACAYO, Aldo. *La Segunda Independencia 1810-2010. Bicentenario*. Managua, Aldilá y Cia. Ltda., 2010.

ELÍAS, Antonio (compilador). *Los gobiernos progresistas en debate, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay*. Buenos Aires, CLACSO, 2006.

ELLIOT, John H. *El Viejo y el Nuevo Mundo (1492-1650)*. Madrid, Alianza Editorial, 1972.

__________. *Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América (1492-1830)*. Madrid, Taurus, 2006.

Enciclopedia del Paraguay. Tomo I, Barcelona, Grupo Editorial Océano, [s.f.].

ESCALANTE, Pablo, *et al. Nueva historia mínima de México*. México, El Colegio de México, 2004.

FAULKNER, Harold U. *Historia económica de los Estados Unidos*. Dos tomos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972.

FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto. *Pensamiento de nuestra América. Autorreflexiones y propuestas*. Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2006.

FLECHA, Víctor-Jacinto. *Breve historia del Paraguay*. Asunción, FONDEC, 2012.

FLORESCANO, Enrique. *Memoria mexicana*. México, Editorial Joaquín Mortiz, 1987.

FRANCO, José Luciano. *Historia de la revolución de Haití. La batalla por el dominio del Caribe y el Golfo de México*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2010.

FRANCO PICHARDO, Franklin. *Historia del pueblo dominicano*. Santo Domingo, Editorial Mediabyte, S. A., 2009.

GALÁN, José María. *Guerras de independencia en Hispanoamérica (1810-1825)*. La Habana, Pueblo y Educación, 1971.

GALAZO, Norberto. *Seamos libres y lo demás no importa nada. Vida de San Martín*. Buenos Aires, Editorial Colihue, 2000.

GALEANA, Patricia (coordinadora). *Historia comparada de las Américas. Sus procesos independentistas*. México, Siglo XXI, 2010.

GALICH, Manuel. *Nuestros primeros padres*. La Habana, Casa de las Américas, 1981.

GONZÁLEZ, Eurídice. *Chile, de la independencia a la dominación imperialista*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2011.

GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo (compilador). *América Latina: historia de medio siglo*. Dos tomos, México, Siglo XXI, 1977.

GLEIJESES, Piero. *La Esperanza Destrozada. La Revolución Guatemalteca y los Estados Unidos, 1944-1954*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2004.

__________. *La esperanza desgarrada. La rebelión dominicana de 1965 y la invasión norteamericana*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2011.

GREZ TOSO, Sergio. *De la "Regeneración del pueblo" a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)*. Santiago de Chile, Ediciones de la Biblioteca Nacional de Chile, 1998.

__________. *Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924)*. Santiago, LOM Ediciones, 2011.

GILLY, Adolfo. *El cardenismo, una utopía necesaria*, México, Cal y Arena, 1994.

__________. *La revolución interrumpida*. México, Ediciones Era, 2002.

GUERRA Y SÁNCHEZ, Ramiro. *La expansión territorial de los Estados Unidos. A expensas de España y de los países hispanoamericanos*. La Habana, Editora del Consejo Nacional de Universidades, 1964.

GUERRA VILABOY, Sergio. *Luchas sociales y partidos políticos en Guatemala*. La Habana, Universidad de La Habana, 1985.

__________. *Historia y revolución en América Latina*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989.

__________. *Paraguay: de la independencia a la dominación imperialista (1811-1870)*. Asunción, Carlos Schauman Editor, 1991.

__________. *El dilema de la independencia, Las luchas sociales en la emancipación latinoamericana (1790-1826)*. Santa Fe de Bogotá, Universidad Central, 2000.

__________. *Los artesanos y la revolución latinoamericana. Colombia 1849-1854*. Santa Fe de Bogotá, Universidad Central, 2000.

__________. *Historia mínima de América*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2001.

__________. *Jugar con fuego. Guerra social y utopía en la independencia de América Latina*. La Habana, Premio Casa de las Américas, 2010.

__________. *Cronología del Bicentenario*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2010.

GUERRA VILABOY, Sergio, Alberto Prieto y Omar Díaz de Arce. *Crónicas latinoamericanas. La región surandina. Chile, Perú y Bolivia*. La Habana, Casa de las Américas, 1977.

GUERRA VILABOY, Sergio y Omar Díaz de Arce. *La colonización española I y II*. Serie encuentro de dos mundos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1991.

GUERRA VILABOY, Sergio y Alejo Maldonado Gallardo. *Laberintos de la integración latinoamericana. Historia, mito y realidad de una utopía*. Caracas, cómala.com, 2006.

__________. *Historia de la Revolución Cubana*. Navarra, Txalaparta, 2009.

GUERRA VILABOY, Sergio y Germán Rodas Chávez (coordinadores). *Forjadores del pensamiento crítico latinoamericano. Biografías de luchadores y pensadores revolucionarios de América Latina y el Caribe siglos XIX y XX y cronología histórica (1850-1939)*. Quito, Ediciones La Tierra, 2011.

HALPERIN DONGHI, Tulio. *Historia contemporánea de América Latina*. Madrid, Alianza Editorial, 1972.

HERRERA PEÑA, José. *Hidalgo a la luz de sus escritos. Estudio preliminar, cuerpo documental y bibliografía*. Morelia, Michoacán. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2003.

Historia de América Andina. Cinco tomos, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2001-2003.

Historia de Cuba. La Colonia. Evolución socio-económica y formación nacional. De los orígenes hasta 1867. La Habana, Editora Política, 1994.

Historia de Cuba. Las luchas por la independencia nacional y las transformaciones estructurales 1868-1898. La Habana, Instituto de Historia de Cuba, 1996.

Historia de Cuba. La neocolonia. Organización y crisis. Desde 1899 hasta 1940. La Habana, Instituto de Historia de Cuba, 1998.

Historia general de México. México, El Colegio de México, 2009.

Historia y perspectiva de la integración latinoamericana. México, Asociación por la Unidad de Nuestra América-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2000.

IBARRA CUESTA, Jorge. *Cuba 1898-1921: partidos políticos y clases sociales*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1992.

__________. *De súbditos a ciudadanos (siglos XVII-XIX) el proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo)*. Tomo I, Santo Domingo, Archivo General de la Nación, 2012.

JOBET, Julio César. *Ensayo crítico del desarrollo económico-social de Chile*. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1955.

KATZ, Claudio. *Las disyuntivas de la izquierda en América Latina*. Buenos Aires, Ediciones Luxemburg, 2008.

KLEIN, Herbert S. *Historia de Bolivia*. La Paz, Editorial "Juventud", 1996.

KONETZKE, Richard. *América Latina II. La época colonial*. México, Siglo XXI, 1971.

KOSSOK, Manfred. *El virreinato del Río de la Plata. Su estructura económico-social*. Buenos Aires, Editorial Futuro, 1959.

__________. *La revolución en la historia de América Latina*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1989.

La Independencia de México. Tres tomos, México, Secretaría de Educación Pública, 1985.

LAINO, Domingo. *Paraguay: de la independencia a la dependencia. (Historia del saqueo inglés en el Paraguay de la posguerra)*. Asunción, Ediciones Cerro Cora, 1976.

LEÓN PORTILLA, Miguel. *Visión de los vencidos*. La Habana, Casa de las Américas, 1972.

LE RIVEREND, Julio. *La República. Dependencia y Revolución*. La Habana, Editora Universitaria, 1966.

LEWIN, Boleslao. *La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la emancipación americana*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972.

LIÉVANO AGUIRRE, Indalecio. *Los grandes conflictos económico-sociales de nuestra historia*. Varios tomos, Bogotá, Ediciones Tercer Mundo, 1973.

__________. *Bolívar*, Bogotá, Editorial La Oveja Negra, 1979.

LIPSCHUTZ, Alejandro. *El problema racial en la conquista de América y el mestizaje*. Santiago de Chile, Editora Austral, 1963.

LÓPEZ CIVEIRA, Francisca, Oscar Loyola y Arnaldo Silva. *Cuba y su historia*. La Habana, Editorial Gente Nueva, 1998

LORENZO, José L. «*Poblamiento del Continente americano*», *Historia de México*. Tomo I, México, Ed. Salvat, 1974.

LYNCH, John. *Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826*. Barcelona, Ariel, 1985.

LUMBRERAS, Luis Guillermo. *Los orígenes de la civilización del Perú*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1987.

MAGUIDOVICH, Iosif P. *Historia del descubrimiento y exploración de Latinoamérica*. Moscú, Editorial Progreso, [s.f.].

MALDONADO GALLARDO, Alejo, Sergio Guerra Vilaboy y Roberto González Arana. *Revoluciones latinoamericanas del siglo XX. Síntesis histórica y análisis historiográfico*. México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006.

MALDONADO GALLARDO, Alejo y Sergio Guerra Vilaboy. *La Revolución Mexicana: una lucha que cambió la historia de un pueblo, 1910/1940*. México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Universidad de La Habana, 2010.

Manual de Historia de Colombia. Varios tomos, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1982.

MARTÍ, José. *Obras completas*. Dos tomos, La Habana, Editorial Lex, 1953.

MARTÍNEZ PELÁEZ, Severo. *La patria del criollo. Ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca*, Guatemala, Editorial Universitaria, 1970.

MEDINA CASTRO, Manuel. *Estados Unidos y América Latina siglo XIX*. La Habana, Casa de las Américas, 1968.

MEDINA, Medófilo. *Historia del Partido Comunista*. Tomo I, Bogotá, Centro de Estudios de Investigaciones Sociales, 1980.

MELÉNDEZ, Carlos. *Historia de Costa Rica*, San José, Editorial Universidad Estatal a Distancia, 1985.

MÉNDEZ R., Salvador. *Las élites criollas de México y Chile ante la Independencia*. México, Centro de Estudios sobre la Independencia de México, 2004.

MIDENCE, Carlos. *Cambios y aportes históricos del Sandinismo al devenir nacional. De las visiones indígenas a la Revolución Sandinista en sus dos etapas*. Managua, Editorial Universitaria UNAN-León, 2011.

MITRE, Bartolomé. *Historia de San Martín y de la emancipación sudamericana*. Dos tomos, Buenos Aires, Talleres Gráficos Argentinos Rosso, 1950.

MONASTERIOS, Karin, Pablo Stefanoni y Hervé do Alto (editores). *Reinventando la nación en Bolivia. Movimientos sociales, Estado y poscolonialidad*. La Paz, CLACSO Libros/Plural Editores, 2007.

MONTENEGRO, Carlos. *Nacionalismo y coloniaje*. Buenos Aires, Pleamar, 1967.

MORA, Carlos Alberto y Margarita Peña. *Historia socioeconómica de Colombia*. Bogotá, Editorial Norma, 1985.

MORALES BENÍTEZ, Otto. *Revolución y caudillos*. Bogotá, Ed. Printer Colombiana, 1983.

MOREIRA DE LIMA, Lillian J. *La evolución del hombre y la sociedad comunitaria en la Antigüedad*. La Habana, Editorial Félix Varela, 2000.

MOYA PONS, Frank. *Manual de Historia Dominicana*. Barcelona, Industrias Gráficas M. Pareja, 1978.

__________. *Historia del Caribe, azúcar y plantaciones en el mundo atlántico*. Santo Domingo, Ediciones Ferilibro, 2008.

__________ (coordinador). *Historia de la República Dominicana*. Consejo Superior de Investigaciones Científicas/Academia Dominicana de la historia/Ediciones Doce Calles, 2010.

NAVARRO GARCÍA, Luis (coordinador). *Historia de las Américas*. Cuatro tomos, Madrid, Universidad de Sevilla, 1991.

NOVAES, Adauto (compilador). *A crise do estado-naçao*. Rio de Janeiro, Civilizaçao Brasileira, 2003.

Nueva historia general del Perú, Lima, Mosca Azul, 1980.

NÚÑEZ SÁNCHEZ, Jorge. *Historia del país de Quito*. Quito, Eskeletra Editorial, 1999.

__________. *El Ecuador en el siglo XIX. Ensayos históricos*. Quito, ADHILAC-Gobierno de la Provincia de Pichincha, 2002.

OCAMPO ALCÁNTAR, Rigoberto y Juan Cristóbal Cruz Revueltas (coordinadores). *México, una centuria. Estudios sobre el siglo XX mexicano*. México, Publicaciones Cruz O., 2012.

OLIVA DE COLL, Josefina. *La resistencia indígena ante la conquista*. México, Siglo XXI, 1974.

OPORTO, Mario. *De Moreno a Perón. Pensamiento argentino de la unidad latinoamericana*. Buenos Aires, Planeta, 2011.

OSTRIA GUTIÉRREZ, Alberto. *Un pueblo en la cruz. El drama de Bolivia*. Santiago de Chile, Editorial del Pacífico, 1956.

OTS CAPDEQUÍ, José María. *El estado español en las Indias*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975.

OVANDO SANZ, Jorge Alejandro. *La invasión brasileña a Bolivia en 1825*. La Paz, Librería Editorial Juventud, 1986.

PARRY, J. H. *El Imperio Español de Ultramar*. Madrid, Aguilar, 1970.

PAZ Y MIÑO, Juan. *Golpe y contragolpe. La «Rebelión de Quito» del 21 de enero del 2000*. Quito, Ediciones Abya-Yala, 2002.

__________. *Eloy Alfaro. Políticas económicas*. Quito, Ministerio de la Coordinación de la Política Económica, 2012.

__________. *La Revolución Juliana en Ecuador (1925-1931), Políticas Económicas*. Quito, Ministerio Coordinador de Política Económica, 2013.

Pensamiento político venezolano del Siglo XIX. Textos para su estudio. Tomo 6, Caracas, Congreso de la República, 1983.

PÉREZ BRIGNOLI, Héctor. *Breve historia de Centroamérica*. Madrid, Alianza Editorial, 1985.

PETRAS, James. *América Latina. De la globalización a la revolución latinoamericana*. Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 1999.

PICÓN SALAS, Mariano. *De la conquista a la independencia*. México, Fondo de Cultura Económica, 1958.

__________. *Miranda*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1972.

PIVIDAL, Francisco. *Bolívar, pensamiento precursor del antimperialismo*. La Habana, Casa de las Américas, 1977.

PRADO JUNIOR, Caio. *Historia económica del Brasil*. Buenos Aires, Editorial Futuro, 1960.

PRIETO ROZOS, Alberto, Omar Díaz de Arce y Sergio Guerra Vilaboy. «Argentina contemporánea», *Historia de América Latina IV*, La Habana, Ministerio de Educación Superior, 1982.

PRIETO ROZOS, Alberto y Sergio Guerra Vilaboy. *Breve historia de Brasil*. La Habana, Editora Política, 1991.

QUESADA MONGE, Rodrigo. *Recuerdos del Imperio. Los ingleses en América central (1821-1915)*. Heredia, C.R, EUNA, 2002.

__________. *Ideas económicas en Costa Rica (1850-2005)*. San José, C.R., EUNED, 2008.

RABY, Diana. *Democracia y revolución: América Latina y el socialismo hoy*. Caracas, Monte Ávila Editores Latinoamericana, 2008.

RAFUL, Tony. *De Trujillo a Fernández Domínguez y Caamaño*, *El azar como categoría histórica (1930-1965)*. Santo Domingo, Editora Búho, 2013.

RAMA, Carlos M. *Historia social del pueblo uruguayo*. Montevideo, Editorial Comunidad del Sur, 1972.

RAMÍREZ NECOCHEA, Hernán. *Historia del Imperialismo en Chile*. La Habana, Edición Revolucionaria, 1966.

RAMOS, Jorge Abelardo. *Historia de la Nación Latinoamericana*. Dos tomos, Buenos Aires, A. Peña Lillo Editor, 1968.

REGALADO, Roberto. *América Latina entre siglos: dominación, crisis, lucha social y alternativas políticas de la izquierda*, México, Ocean Sur, 2006.

__________. *Los gobiernos de izquierda en América Latina*, México, Ocean Sur, 2008.

__________ (coordinador). *La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética*. México, Ocean Sur, 2012.

Revista del Observatorio Social de América Latina. Buenos Aires, CLACSO, año V, No. 13, 14 y 15 de 2004.

REY TRISTÁN, Eduardo y Pilar Cagiao Vila (coordinadores). *Conflicto, memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo*. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 2011.

ROCA, José Luis. *1809. La Revolución de la Audiencia de Charcas en Chuquisaca y en La Paz*. La Paz, Plural Editores, 1998.

RODRÍGUEZ GELFFENSTEIN, Sergio. *Se ha prendido la hierba en todo el continente. Relatos de nuestra América*. Mérida, Venezuela, Talleres Gráficos Universitarios ULA, 2012.

RODAS, Germán. *La izquierda ecuatoriana en el siglo XX. Aproximación histórica*. Quito, Abya Yala, 2000.

ROEDER, Ralph. *Juárez y su México*. México, Fondo de Cultura Económica, 1972.

ROJAS MIX, Miguel. *Los cien nombres de América. Eso que descubrió Colón*. Barcelona, Editorial Lumen, 1991.

ROMERO, Roberto A. *La revolución comunera. Su doctrina política*. Asunción, Imprenta Leguizamon, 1995.

RUZ LHUILLIER, Alberto. *La civilización de los antiguos mayas*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974.

SADER, Emir e Ivana Jinkings (coordinadores). *Enciclopedia Contemporánea da América Latina e do Caribe*. Rio de Janeiro, Laboratorio de Políticas Públicas/Boitempo Editorial, 2006.

SÁNCHEZ OTERO, Germán. *Cuba desde Venezuela*. Caracas, Consejo Nacional de la Cultura, 2004.

SANTANA, Adalberto. *El pensamiento de Francisco Morazán*. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1992.

SAXE FERNÁNDEZ, Eduardo E. *La nueva oligarquía latinoamericana*. Heredia, Costa Rica, EUNA, 1999.

SEJOURNÉ, Laurette. *América Latina I. Antiguas culturas precolombinas*, México, Siglo XXI, 1971.

SELSER, Gregorio. *Sandino, general de hombre libres*. Dos tomos, La Habana, Imprenta Nacional de Cuba, 1960.

SEMO, Enrique (coordinador). *Historia económica de México*. Varios tomos, México, UNAM/Océano, 2003-2006.

SILVA HERZOG, Jesús. *Breve historia de la revolución mexicana*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1969.

SIXIREI PAREDES, Carlos. *La violencia en Colombia (1990-2002), Antecedentes y desarrollo histórico*. Vigo, Universidad de Vigo, 2011.

SOLER, Ricaurte. *Idea y cuestión nacional latinoamericanas, de la independencia a la emergencia del imperialismo*. México, siglo XXI, 1980.

SOTO, Lionel. *La revolución del 33*. Tres tomos, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1977.

SUÁREZ SALAZAR, Luis. *América Latina y el Caribe: medio siglo de crimen e impunidad (1948-1998)*. Nafarroa-Navarra, Zambon Iberoamericana/Editorial José Martí, 2000.

__________. *El siglo XXI. Posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2000.

SVAMPA, Maristella y Pablo Stefanoni (compiladores). *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*. Buenos Aires, Libros CLACSO/Editorial El Colectivo, 2007.

TABANERA, Nuria, Joao del Alcazar y Gonzalo Cáceres. *Las primeras democratizaciones en América Latina: Argentina y Chile, 1880-1930*. Valencia, Universitat de Valencia, 1997.

TABARES DEL REAL, José A. *La revolución del 30: sus dos últimos años*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975.

TINDALL, George B. y David E. Shi. *Historia de los Estados Unidos*. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1993.

TORRES-CUEVAS, Eduardo y Oscar Loyola. *Historia de Cuba 1492-1898. Formación y liberación de la Nación*. La Habana, Editorial Pueblo y Educación, 2001.

TORRES GALARZA, Ramón (compilador). *Eloy Alfaro. Memoria Insurgente*. Caracas, Fondo Editorial Ipasme, 2011.

TRÍAS, Vivian. *Los caudillos, las clases sociales y el Imperio*. Montevideo, Cámara de Representantes, 1988.

VILAS, Carlos. *La revolución sandinista*. Buenos Aires, Legasa, 1987.

VITALE, Luis. *Interpretación marxista de la historia de Chile*. Varios tomos, Santiago de Chile, Prensa Latinoamericana, 1969-1972.

__________. *De Martí a Chiapas. Balance de un siglo*. Santiago de Chile, Editorial Síntesis y CELA, 1995.

WARREN, Harris Gaylord. *Paraguay y la Triple Alianza. La década de posguerra: 1868-1878*. Asunción, Intercontinental Editora, S. A., 2009.

WHITE, Richard Alan. *La primera revolución popular en América (1810-1840)*. Asunción, Carlos Schauman Editor, 1989.

ZANETTI, Oscar. *Esplendor y decadencia del azúcar en las Antillas hispanas*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales/Ruth Casa Editorial, 2012.

__________. *Historia mínima de Cuba*. México, El Colegio de México, 2013.

ZEUSKE, Michael. *Francisco de Miranda y la modernidad en América*. Madrid, Fundación Mapfre Tavera y Ediciones Doce Calles, S. L., 2004.

ZIMMERMANN, Matilde. *Carlos Fonseca Amador. Bajo las banderas de Che y de Sandino*. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 2004.

ÍNDICE ONOMÁSTICO

C

D

E

G

H

N

O

P

S

T

U

V

Publicaciones del Archivo General de la Nación

Vol. I *Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1844-1846*. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1944.

Vol. II *Documentos para la historia de la República Dominicana.* Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. I, C. T., 1944.

Vol. III *Samaná, pasado y porvenir.* E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1945.

Vol. IV *Relaciones históricas de Santo Domingo.* Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, C. T., 1945.

Vol. V *Documentos para la historia de la República Dominicana.* Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1947.

Vol. VI *San Cristóbal de antaño.* E. Rodríguez Demorizi, Vol. II, Santiago, 1946.

Vol. VII *Manuel Rodríguez Objío (poeta, restaurador, historiador, mártir).* R. Lugo Lovatón, C. T., 1951.

Vol. VIII *Relaciones.* Manuel Rodríguez Objío. Introducción, títulos y notas por R. Lugo Lovatón, C. T., 1951.

Vol. IX *Correspondencia del Cónsul de Francia en Santo Domingo, 1846-1850.* Vol. II. Edición y notas de E. Rodríguez Demorizi, C. T., 1947.

Vol. X *Índice general del «Boletín» del 1938 al 1944,* C. T., 1949.

Vol. XI *Historia de los aventureros, filibusteros y bucaneros de América.* Escrita en holandés por Alexander O. Exquemelin, traducida de una famosa edición francesa de La Sirene-París, 1920, por C. A. Rodríguez; introducción y bosquejo biográfico del traductor R. Lugo Lovatón, C. T., 1953.

Vol. XII *Obras de Trujillo.* Introducción de R. Lugo Lovatón, C. T., 1956.

Vol. XIII *Relaciones históricas de Santo Domingo.* Colección y notas de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1957.

Vol. XIV *Cesión de Santo Domingo a Francia. Correspondencia de Godoy, García Roume, Hedouville, Louverture, Rigaud y otros. 1795-1802.* Edición de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959.

Vol. XV *Documentos para la historia de la República Dominicana.* Colección de E. Rodríguez Demorizi, Vol. III, C. T., 1959.
Vol. XVI *Escritos dispersos. (Tomo I: 1896-1908).* José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
Vol. XVII *Escritos dispersos. (Tomo II: 1909-1916).* José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
Vol. XVIII *Escritos dispersos. (Tomo III: 1917-1922).* José Ramón López. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2005.
Vol. XIX *Máximo Gómez a cien años de su fallecimiento, 1905-2005.* Edición de E. Cordero Michel, Santo Domingo, D. N., 2005.
Vol. XX *Lilí, el sanguinario machetero dominicano.* Juan Vicente Flores, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXI *Escritos selectos.* Manuel de Jesús de Peña y Reynoso. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXII *Obras escogidas 1. Artículos.* Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXIII *Obras escogidas 2. Ensayos.* Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXIV *Obras escogidas 3. Epistolario.* Alejandro Angulo Guridi. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXV *La colonización de la frontera dominicana 1680-1796.* Manuel Vicente Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXVI *Fabio Fiallo en La Bandera Libre.* Compilación de Rafael Darío Herrera, Santo Domingo, D. N., 2006.
Vol. XXVII *Expansión fundacional y crecimiento en el norte dominicano (1680-1795). El Cibao y la bahía de Samaná.* Manuel Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXVIII *Documentos inéditos de Fernando A. de Meriño.* Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXIX *Pedro Francisco Bonó. Textos selectos.* Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXX *Iglesia, espacio y poder: Santo Domingo (1498-1521), experiencia fundacional del Nuevo Mundo.* Miguel D. Mena, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXI *Cedulario de la isla de Santo Domingo, Vol. I: 1492-1501.* Fray Vicente Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXII *La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo I: Hechos sobresalientes en la provincia).* Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007.
Vol. XXXIII *La Vega, 25 años de historia 1861-1886. (Tomo II: Reorganización de la provincia post Restauración).* Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXIV *Cartas del Cabildo de Santo Domingo en el siglo XVII*. Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXV *Memorias del Primer Encuentro Nacional de Archivos*. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXVI *Actas de los primeros congresos obreros dominicanos, 1920 y 1922*. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXVII *Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894)*. Tomo I. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXVIII *Documentos para la historia de la educación moderna en la República Dominicana (1879-1894)*. Tomo II. Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XXXIX *Una carta a Maritain*. Andrés Avelino, traducción al castellano e introducción del P. Jesús Hernández, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XL *Manual de indización para archivos,* en coedición con el Archivo Nacional de la República de Cuba. Marisol Mesa, Elvira Corbelle Sanjurjo, Alba Gilda Dreke de Alfonso, Miriam Ruiz Meriño, Jorge Macle Cruz, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XLI *Apuntes históricos sobre Santo Domingo*. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XLII *Ensayos y apuntes diversos*. Dr. Alejandro Llenas. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XLIII *La educación científica de la mujer.* Eugenio María de Hostos, Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. XLIV *Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1530-1546)*. Compilación de Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. XLV *Américo Lugo en Patria. Selección*. Compilación de Rafael Darío Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. XLVI *Años imborrables*. Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. XLVII *Censos municipales del siglo XIX y otras estadísticas de población*. Alejandro Paulino Ramos, Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. XLVIII *Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel.* Tomo I. Compilación de José Luis Saez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. XLIX *Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel.* Tomo II, Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. L *Documentos inéditos del arzobispo Adolfo Alejandro Nouel.* Tomo III. Compilación de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LI	*Prosas polémicas 1. Primeros escritos, textos marginales, Yanquilinarias.* Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LII	*Prosas polémicas 2. Textos educativos y Discursos.* Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LIII	*Prosas polémicas 3. Ensayos.* Félix Evaristo Mejía. Edición de A. Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LIV	*Autoridad para educar. La historia de la escuela católica dominicana.* José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LV	*Relatos de Rodrigo de Bastidas.* Antonio Sánchez Hernández, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LVI	*Textos reunidos 1. Escritos políticos iniciales.* Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LVII	*Textos reunidos 2. Ensayos.* Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LVIII	*Textos reunidos 3. Artículos y Controversia histórica.* Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LIX	*Textos reunidos 4. Cartas, Ministerios y misiones diplomáticas.* Manuel de J. Galván. Edición de Andrés Blanco Díaz. Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LX	*La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961).* Tomo I. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LXI	*La sumisión bien pagada. La iglesia dominicana bajo la Era de Trujillo (1930-1961).* Tomo II. José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LXII	*Legislación archivística dominicana, 1847-2007.* Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LXIII	*Libro de bautismos de esclavos (1636-1670).* Transcripción de José Luis Sáez, S. J., Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LXIV	*Los gavilleros (1904-1916).* María Filomena González Canalda, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LXV	*El sur dominicano (1680-1795). Cambios sociales y transformaciones económicas.* Manuel Vicente Hernández González, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LXVI	*Cuadros históricos dominicanos.* César A. Herrera, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LXVII	*Escritos 1. Cosas, cartas y... otras cosas.* Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.
Vol. LXVIII	*Escritos 2. Ensayos.* Hipólito Billini. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. LXXXIX *Una pluma en el exilio. Los artículos publicados por Constancio Bernaldo de Quirós en República Dominicana.* Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XC *Ideas y doctrinas políticas contemporáneas.* Juan Isidro Jimenes Grullón, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCI *Metodología de la investigación histórica.* Hernán Venegas Delgado, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCIII *Filosofía dominicana: pasado y presente.* Tomo I. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCIV *Filosofía dominicana: pasado y presente.* Tomo II. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCV *Filosofía dominicana: pasado y presente.* Tomo III. Compilación de Lusitania F. Martínez, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCVI *Los Panfleteros de Santiago: torturas y desaparición.* Ramón Antonio, (Negro) Veras, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCVII *Escritos reunidos. 1. Ensayos, 1887-1907.* Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCVIII *Escritos reunidos. 2. Ensayos, 1908-1932.* Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. XCIX *Escritos reunidos. 3. Artículos, 1888-1931.* Rafael Justino Castillo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. C *Escritos históricos.* Américo Lugo, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. CI *Vindicaciones y apologías.* Bernardo Correa y Cidrón. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. CII *Historia, diplomática y archivística. Contribuciones dominicanas.* María Ugarte, Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. CIII *Escritos diversos.* Emiliano Tejera, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CIV *Tierra adentro.* José María Pichardo, segunda edición, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CV *Cuatro aspectos sobre la literatura de Juan Bosch.* Diógenes Valdez, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CVI *Javier Malagón Barceló, el Derecho Indiano y su exilio en la República Dominicana.* Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CVII *Cristóbal Colón y la construcción de un mundo nuevo. Estudios, 1983-2008.* Consuelo Varela, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CVIII *República Dominicana. Identidad y herencias etnoculturales indígenas.* J. Jesús María Serna Moreno, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CIX *Escritos pedagógicos.* Malaquías Gil Arantegui. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CX *Cuentos y escritos de Vicenç Riera Llorca en* La Nación. Compilación de Natalia González, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXI *Jesús de Galíndez. Escritos desde Santo Domingo y artículos contra el régimen de Trujillo en el exterior.* Compilación de Constancio Cassá Bernaldo de Quirós, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXII *Ensayos y apuntes pedagógicos.* Gregorio B. Palacín Iglesias. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXIII *El exilio republicano español en la sociedad dominicana* (Ponencias del Seminario Internacional, 4 y 5 de marzo de 2010). Reina C. Rosario Fernández (Coord.), edición conjunta de la Academia Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXIV *Pedro Henríquez Ureña. Historia cultural, historiografía y crítica literaria.* Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXV *Antología.* José Gabriel García. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXVI *Paisaje y acento. Impresiones de un español en la República Dominicana.* José Forné Farreres. Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXVII *Historia e ideología. Mujeres dominicanas, 1880-1950.* Carmen Durán. Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXVIII *Historia dominicana: desde los aborígenes hasta la Guerra de Abril.* Augusto Sención (Coord.), Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXIX *Historia pendiente: Moca 2 de mayo de 1861.* Juan José Ayuso, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXX *Raíces de una hermandad.* Rafael Báez Pérez e Ysabel A. Paulino, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXI *Miches: historia y tradición.* Ceferino Moní Reyes, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXII *Problemas y tópicos técnicos y científicos.* Tomo I. Octavio A. Acevedo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXIII *Problemas y tópicos técnicos y científicos.* Tomo II. Octavio A. Acevedo. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXIV *Apuntes de un normalista.* Eugenio María de Hostos. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXV *Recuerdos de la Revolución Moyista (Memoria, apuntes y documentos).* Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXVI *Años imborrables* (2da ed.) Rafael Alburquerque Zayas-Bazán, edición conjunta de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXVII *El Paladión: de la Ocupación Militar Norteamericana a la dictadura de Trujillo.* Tomo I. Compilación de Alejandro Paulino Ramos, edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXVIII *El Paladión: de la Ocupación Militar Norteamericana a la dictadura de Trujillo.* Tomo II. Compilación de Alejandro Paulino Ramos, edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXIX *Memorias del Segundo Encuentro Nacional de Archivos.* Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXX *Relaciones cubano-dominicanas, su escenario hemisférico (1944-1948).* Jorge Renato Ibarra Guitart, Santo Domingo, D. N., 2010.

Vol. CXXXI *Obras selectas.* Tomo I, Antonio Zaglul, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXXXII *Obras selectas.* Tomo II. Antonio Zaglul, edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Banco de Reservas. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXXXIII *África y el Caribe: Destinos cruzados. Siglos XV-XIX,* Zakari Dramani-Issifou, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXXXIV *Modernidad e ilustración en Santo Domingo.* Rafael Morla, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXXXV *La guerra silenciosa: Las luchas sociales en la ruralía dominicana.* Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXXXVI *AGN: bibliohemerografía archivística. Un aporte (1867-2011).* Luis Alfonso Escolano Giménez, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXXXVII *La caña da para todo. Un estudio histórico-cuantitativo del desarrollo azucarero dominicano. (1500-1930).* Arturo Martínez Moya, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXXXVIII *El Ecuador en la Historia.* Jorge Núñez Sánchez, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXXXIX *La mediación extranjera en las guerras dominicanas de independencia, 1849-1856.* Wenceslao Vega B., Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXL *Max Henríquez Ureña. Las rutas de una vida intelectual.* Odalís G. Pérez, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXLI *Yo también acuso.* Carmita Landestoy, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXLIII *Más escritos dispersos.* Tomo I. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXLIV *Más escritos dispersos.* Tomo II. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXLV *Más escritos dispersos.* Tomo III. José Ramón López. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXLVI *Manuel de Jesús de Peña y Reinoso: Dos patrias y un ideal.* Jorge Berenguer Cala, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXLVII *Rebelión de los capitanes: Viva el rey y muera el mal gobierno.* Roberto Cassá, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXLVIII *De esclavos a campesinos. Vida rural en Santo Domingo colonial.* Raymundo González, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CXLIX *Cartas de la Real Audiencia de Santo Domingo (1547-1575).* Genaro Rodríguez Morel, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CL *Ramón –Van Elder– Espinal. Una vida intelectual comprometida.* Compilación de Alfredo Rafael Hernández Figueroa, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CLI *El alzamiento de Neiba: Los acontecimientos y los documentos (febrero de 1863).* José Abreu Cardet y Elia Sintes Gómez, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CLII *Meditaciones de cultura. Laberintos de la dominicanidad.* Carlos Andújar Persinal, Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. CLIII *El Ecuador en la Historia* (2da ed.) Jorge Núñez Sánchez, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLIV *Revoluciones y conflictos internacionales en el Caribe (1789-1854).* José Luciano Franco, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLV *El Salvador: historia mínima.* Varios autores, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLVI *Didáctica de la geografía para profesores de Sociales.* Amparo Chantada, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLVII *La telaraña cubana de Trujillo.* Tomo I. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLVIII *Cedulario de la isla de Santo Domingo, 1501-1509.* Vol. II, Fray Vicente Rubio, O. P., edición conjunta del Archivo General de la Nación y el Centro de Altos Estudios Humanísticos y del Idioma Español, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLIX *Tesoros ocultos del periódico* El Cable. Compilación de Edgar Valenzuela, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLX *Cuestiones políticas y sociales.* Dr. Santiago Ponce de León, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXI *La telaraña cubana de Trujillo*. Tomo II. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXII *El incidente del trasatlántico Cuba. Una historia del exilio republicano español en la sociedad dominicana, 1938-1944*. Juan B. Alfonseca Giner de los Ríos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXIII *Historia de la caricatura dominicana*. Tomo I. José Mercader, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXIV *Valle Nuevo: El Parque Juan B. Pérez Rancier y su altiplano*. Constancio Cassá, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXV *Economía, agricultura y producción*. José Ramón Abad. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXVI *Antología*. Eugenio Deschamps. Edición de Roberto Cassá, Betty Almonte y Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXVII *Diccionario geográfico-histórico dominicano*. Temístocles A. Ravelo. Revisión, anotación y ensayo introductorio Marcos A. Morales, edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXVIII *Drama de Trujillo. Cronología comentada*. Alonso Rodríguez Demorizi. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXIX *La dictadura de Trujillo: documentos (1930-1939)*. Tomo I, volumen 1. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXX *Drama de Trujillo. Nueva Canosa*. Alonso Rodríguez Demorizi. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012

Vol. CLXXI *El Tratado de Ryswick y otros temas*. Julio Andrés Montolío. Edición de Andrés Blanco Díaz, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXII *La dictadura de Trujillo: documentos (1930-1939)*. Tomo I, volumen 2. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXIII *La dictadura de Trujillo: documentos (1950-1961)*. Tomo III, volumen 5. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXIV *La dictadura de Trujillo: documentos (1950-1961)*. Tomo III, volumen 6. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXV *Cinco ensayos sobre el Caribe hispano en el siglo XIX: República Dominicana, Cuba y Puerto Rico 1861-1898*. Luis Álvarez-López, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXVI *Correspondencia consular inglesa sobre la Anexión de Santo Domingo a España*. Roberto Marte, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXVII *¿Por qué lucha el pueblo dominicano? Imperialismo y dictadura en América Latina*. Dato Pagán Perdomo, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXVIII *Visión de Hostos sobre Duarte*. Compilación y Edición de Miguel Collado, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CLXXIX *Los campesinos del Cibao: Economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960.* Pedro L. San Miguel, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXX *La dictadura de Trujillo: documentos (1940-1949).* Tomo II, volumen 3. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXXI *La dictadura de Trujillo: documentos (1940-1949).* Tomo II, volumen 4. Eliades Acosta Matos, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXXII *De súbditos a ciudadanos (siglos XVII-XIX): el proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo).* Jorge Ibarra Cuesta, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXXIII *La dictadura de Trujillo (1930-1961).* Augusto Sención Villalona, San Salvador-Santo Domingo, 2012.

Vol. CLXXXIV *Anexión-Restauración.* Parte 1. César A. Herrera, edición conjunta entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXXV *Anexión-Restauración.* Parte 2. César A. Herrera, edición conjunta entre el Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXXVI *Historia de Cuba.* José Abreu Cardet, *et. al.*, Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. CLXXXVII *Libertad Igualdad: Protocolos notariales de José Troncoso y Antonio Abad Solano, 1822-1840.* María Filomena González Canalda, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CLXXXVIII *Biografías sumarias de los diputados de Santo Domingo en las cortes españolas.* Roberto Cassá, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CLXXXIX *Financial Reform, Monetary Policy and Banking Crisis in Dominican Republic.* Ruddy Santana, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CXC *Legislación archivística dominicana (1847-2012).* Departamento de Sistema Nacional de Archivos e Inspectoría, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CXCI *La rivalidad internacional por la República Dominicana y el complejo proceso de su anexión a España (1858-1865).* Luis Escolano Giménez, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CXCII *Escritos históricos de Carlos Larrazábal Blanco.* Tomo I. Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CXCIII *Guerra de liberación en el Caribe hispano (1863-1878).* José Abreu Cardet y Luis Álvarez-López, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CXCIV *Historia del municipio de Cevicos.* Miguel Ángel Díaz Herrera, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CXCV *La noción de período en la historia dominicana.* Volumen I, Pedro Mir, Santo Domingo, D. N., 2013.

Vol. CCXIII *El mito de los Padres de la Patria y Debate histórico.* Juan Isidro Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2014.

Vol. CCXIV *La República Dominicana [1888]. Territorio. Clima. Agricultura. Industria. Comercio. Inmigración y anuario estadístico*. Francisco Álvarez Leal. Edición conjunta del Archivo General de la Nación y la Academia Dominicana de la Historia, Santo Domingo, D. N., 2014.

Vol. CCXV *Los alzamientos de Guayubín, Sabaneta y Montecristi: Documentos.* José Abreu Cardet y Elia Sintes Gómez, Santo Domingo, D. N., 2014.

Vol. CCXVI *Propuesta de una Corporación Azucarera Dominicana. Informe de Coverdale & Colpitts.* Estudio de Frank Báez Evertsz, Santo Domingo, D. N., 2014.

Vol. CCXVII *La familia de Máximo Gómez.* Fray Cipriano de Utrera, Santo Domingo, D. N., 2014.

Vol. CCXVIII *Historia de Santo Domingo. La dominación haitiana (1822-1844).* Vol. IX. Gustavo Adolfo Mejía-Ricart, Santo Domingo, D. N., 2014.

Vol. CCXIX *La expedición de Cayo Confites.* Humberto Vázquez García. Edición conjunta del Archivo General de la Nación, de República Dominicana y la Editorial Oriente, de Santiago de Cuba, Santo Domingo, D. N., 2014.

Vol. CCXX *De súbditos a ciudadanos (siglos XVII-XIX): El proceso de formación de las comunidades criollas del Caribe hispánico (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo).* Tomo II, Jorge Ibarra Cuesta, Santo Domingo, D. N., 2014.

Colección Juvenil

Vol. I *Pedro Francisco Bonó. Textos selectos.* Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. II *Heroínas nacionales.* Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. III *Vida y obra de Ercilia Pepín.* Alejandro Paulino Ramos. Santo Domingo, D. N., 2007.

Vol. IV *Dictadores dominicanos del siglo XIX.* Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. V *Padres de la Patria.* Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. VI *Pensadores criollos.* Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2008.

Vol. VII *Héroes restauradores*. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. VIII *Dominicanos de pensamiento liberal: Espaillat, Bonó, Deschamps (siglo XIX)*. Roberto Cassá. Santo Domingo, D. N., 2010.

Colección Cuadernos Populares

Vol. 1 *La Ideología revolucionaria de Juan Pablo Duarte*. Juan Isidro Jimenes Grullón. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. 2 *Mujeres de la Independencia*. Vetilio Alfau Durán. Santo Domingo, D. N., 2009.

Vol. 3 *Voces de bohío. Vocabulario de la cultura taína*. Rafael García Bidó. Santo Domingo, D. N., 2010.

Colección Referencias

Vol. 1 *Archivo General de la Nación. Guía breve*. Ana Féliz Lafontaine y Raymundo González. Santo Domingo, D. N., 2011.

Vol. 2 *Guía de los fondos del Archivo General de la Nación*. Departamentos de Descripción y Referencias. Santo Domingo, D. N., 2012.

Vol. 3 *Directorio básico de archivos dominicanos*. Departamento de Sistema Nacional de Archivos. Santo Domingo, D. N., 2012.

Nueva historia mínima de América Latina. Biografía de un continente, de Sergio Guerra Vilaboy, se terminó de imprimir en los talleres gráficos de Editora ZZZZZZZZZZZ, S.R.L., en marzo de 2015, con una tirada de 1,000 ejemplares.